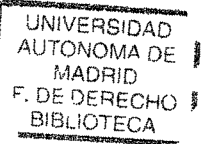


72
450

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

**FACULTAD DE DERECHO, DEPARTAMENTO
DE DERECHO PÚBLICO Y FILOSOFÍA
JURÍDICA, ÁREA DE DERECHO
ECLESIAÍSTICO DEL ESTADO**

RD. 107.271
31 cm.



**“CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL
Y LEGISLACIÓN SOBRE EL FACTOR
RELIGIOSO DURANTE LA PRIMERA
MITAD DEL SIGLO XIX. (1808-1845)”**

1906

TESIS DOCTORAL presentada por:

D. RICARDO GARCÍA GARCÍA

Director:

PROF. DR. D. ISIDORO MARTÍN SÁNCHEZ

Madrid, Septiembre de 1998

INTRODUCCIÓN

Mediante la presente investigación se pretende efectuar un estudio de la normativa legal reguladora del hecho religioso durante la primera mitad del siglo XIX español, puesto que, como es conocido, en este período se produce el nacimiento del constitucionalismo en nuestro país.

Dentro de este marco concreto, "el estudio de la regulación constitucional del hecho religioso", hay que precisar que nos hemos detenido sólo en las principales materias donde estaba presente. Concretamente éstas han sido: las diferentes declaraciones de confesionalidad, la desamortización de los bienes del clero, la financiación, la libertad de imprenta, la figura del Rey, la educación, la libertad electoral, la incidencia de la primera codificación penal en la tipificación del factor religioso, los juramentos, y el estatuto del clero. Dentro de éste último apartado se han incluido aspectos como el arreglo del clero, su residencia, el problema de los secularizados, tipificación de comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico, etc

Una vez concretado el marco donde se centra la presente investigación, hay que decir que para su desarrollo se ha procedido al diseño de diferentes capítulos, atendiendo a la norma marco que estaba en vigor, y a partir de ahí, se han ido engarzando las distintas disposiciones, de interés de cara a la presente, aprobadas durante el período de su vigencia.

Concretamente los capítulos estudiados han sido:

I. LA SITUACIÓN DEL HECHO RELIGIOSO A FINALES DEL SIGLO XVIII

II. EL ESTATUTO DE BAYONA DE 1.808

III. LA CONSTITUCIÓN DE 1.812

IV. LA VUELTA DE FERNANDO VII, (1.814-1.820)

V. EL TRIENIO LIBERAL: (1.820-1.823)

VI. LA SEGUNDA RESTAURACIÓN DE FERNANDO VII, (1.823-1.833)

VII. EL ESTATUTO REAL DE 1.834

VIII. LA CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1.837

Señalados los diferentes períodos, hay que especificar que se ha seguido una metodología uniforme en el estudio de todos y cada uno de ellos. En este sentido, se ha comenzado por una breve introducción histórica, a los sólo efectos de delimitar el marco dónde se circunscribía el Derecho que se pretende estudiar. Para la realización de esta labor se han tenido en cuenta los principales historiadores, tomando de ellos una simple visión general que fuera capaz de centrar el momento histórico donde se desenvolvía el Derecho que se iba a estudiar.

Después de haber delimitado ese marco, se ha procedido de diferente forma, teniendo en cuenta si se trataba de períodos constitucionales (Constitución de 1.812, Trienio Liberal o Constitución de 1.837), o si existía una norma marco propia (Estatuto de Bayona, o el Estatuto Real), o si bien se trataba de una reacción absolutista protagonizada por Fernando VII. En los dos primeros casos, se ha continuado señalando de forma somera su significado y contenido, y sólo en el segundo de los supuestos nos hemos detenido a enjuiciar su naturaleza jurídica. Una vez efectuado lo anterior, se ha procedido al estudio minucioso del articulado de los textos constitucionales y estatutarios, pasando a detallar cada una de las disposiciones que se pronunciaba sobre el fenómeno religioso. A estos efectos, se ha partido de la doctrina constitucionalista de cara a fijar el significado y contenido específico de cada “norma marco”, así como a la discusión de su naturaleza jurídica. Tras ello, se ha continuado con el estudio pormenorizado del

articulado, reseñando los artículos que incidían sobre el fenómeno religioso. A tal efecto, se ha partido de la declaración de confesionalidad para continuar con los reflejos o consecuencias de ésta en el resto de los artículos de dichos cuerpos legales. Para esta última labor, se ha tomado en cuenta principalmente la opinión de eclesiásticos, constitucionalistas, e historiadores del Derecho. Una vez determinadas dichas normas, hemos comprobado su efectiva vigencia mediante el estudio de su desarrollo legislativo. A estos efectos, se ha profundizado en el estudio de la legislación emanada por las Cortes y los distintos Gabinetes desde 1.808 a 1.845. Este estudio resulta imprescindible para verificar la realidad jurídica de cada época, toda vez que mediante el mismo es como realmente puede comprobarse la vigencia de las normas constitucionales y, concretamente, de las referentes a la confesionalidad del Estado. Por lo que respecta a las diferentes normas promulgadas en los distintos períodos, hay que señalar expresamente que se ha seguido una labor minuciosa de búsqueda y rastreo, de peinado de toda la normativa existente, si bien para el texto de la presente investigación se han seleccionado las más relevantes, evitando, así que el elevado volumen de disposiciones halladas, hiciera imposible la realización de la misma.

Por lo que respecta a la doctrina citada, representada por constitucionalistas, eclesiásticos, historiadores, e historiadores del Derecho, hay que decir que, en muchos casos era escasa y en otros inexistente-, pero que, independientemente de su cuantificación, ha sido, en todo momento, completada con nuestras opiniones personales, sin duda atrevidas, pero que intentan reflejar una aportación para ser enjuiciada, y que permite que esta investigación sea algo más que una mera recopilación de los datos que contenían las diferentes normas y la opinión de los distintos autores.

En relación con la Jurisprudencia, hay que decir que se ha excluido su estudio de la presente investigación, puesto que el fin principal de ésta era

verificar el desarrollo normativo de las diferentes disposiciones promulgadas para la regulación del fenómeno religioso.

Este trabajo persigue un modesto fin, puesto que pretende, desde el punto de vista del Derecho, adentrarse en los precedentes de una disciplina joven en los Planes de Estudio de las Universidades Españolas que se ha denominado Derecho Eclesiástico del Estado. Con nuestra aportación intentamos mostrar la regulación constitucional sobre el hecho religioso, -evidentemente, sólo el católico-, así como su desarrollo legislativo y poner de relieve como, en numerosas ocasiones una y otro discurrieron por caminos distintos. Por otra parte, somos conscientes de las limitaciones de nuestro trabajo y, en este sentido, aspiramos a que él mismo sea la base para seguir estudiando este tema y de ayuda y estímulo para otros investigadores.

En todo caso, hay que señalar que mediante esta metodología señalada, se ha pretendido ofrecer una visión conjunta que nos permitiera abordar de forma general esta interesante dialéctica existente entre confesionalidad y laicidad en estos casi cuarenta y cinco años. En cualquier caso, los resultados de esta investigación, nos permiten afirmar la gran importancia que tuvo el hecho religioso en el nacimiento y desarrollo del constitucionalismo en nuestro país.

CAPÍTULO I

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA IGLESIA ESPAÑOLA A FINALES DEL SIGLO XVIII

En este Capítulo nos vamos a limitar a exponer a grandes rasgos cual era la situación del hecho religioso a finales del siglo XVIII, de forma que esta visión general nos sirva para fijar los antecedentes de la regulación jurídica que se efectuó durante el nacimiento del constitucionalismo español, es decir, en la primera mitad del siglo XIX.

Antes de proceder al somero desarrollo de los concordatos de 1.737 y 1.753, hay que mencionar que el denominador común en nuestro Derecho para con la regulación del hecho religioso católico venía configurada por el conocido regalismo¹.

¹. De la Hera, A., Regalismo, en *Diccionario de Historia eclesiástica de España*, dirigido por Aldea Vaquero, Q.; Martín Martínez, T.,; Vives Gatell, J., Vol. III, Madrid, 1.973, pp. 2.066-2.068. Señala que "Menéndez Pelayo ha definido el regalismo como la intromisión ilegítima del poder civil en asuntos eclesiásticos. Se hace con esta definición referencia, tanto a un problema práctico como a las formulaciones doctrinales de las tesis que motivan o justifican tales intromisiones. En este sentido, la voz regalismo tiene un significado muy amplio, y es aplicable a múltiples fenómenos que, con diferentes variantes en la fundamentación o en el modo de ejercicio, se han dado a lo largo de la historia en todos los países. Así, puede hablarse de cesaropapismo medieval, del galicanismo, del josefinismo austriaco, etc., y también del regalismo español". Como ha puntualizado Goti Ordeñana, J., *Sistema de Derecho Eclesiástico del Estado*. Zarautz, 1.984. p. 157. "Desde el punto de vista jurídico, fue un típico problema de delimitación (continúa...)"

En la España de los Borbones, y siguiendo a De la Hera, se puede afirmar que "los intelectuales al servicio de la nueva dinastía se esfuerzan durante todo este siglo XVIII por prescindir de la concesión papal como base para apoyar los derechos o regalías de la Corona, argumentando en cambio que éstos son atributos inherentes a la soberanía, propios de lo que se ha llamado la monarquía absoluta. Y esa situación perdura en España más allá de los límites de la Revolución francesa, alentada por la reacción de los tiempos de Fernando VII y por la predisposición de nuestros liberales, tanto en la minoría de edad de Isabel II, como a raíz del Concordato de 1.851, a aceptar la herencia del Antiguo Régimen en cuanto que supusiera el control de las materias eclesiásticas".

Como han señalado Lombardía y Fornés² "la intervención de los reyes en los asuntos eclesiásticos se concretaba en numerosas instituciones que constituían las *iura maiestatica circa sacra*". Limitándonos a la práctica del Derecho español, se puede afirmar, siguiendo a Goti³, que las principales instituciones de este siglo XVIII estaban constituidas por las regalías promovidas y justificadas para asegurar los Derechos Reales, que se iban concretando cada vez con un mayor intervencionismo en la vida de la Iglesia. Y que los métodos más peculiares eran los siguientes:

¹(...continuación)

de competencias, donde el temor de la posible invasión de éstas, por parte de la Iglesia, se salvó con la creación de una serie de mecanismos desde el fuero estatal."

² Lombardía, P., y Fornés, J., *Derecho Eclesiástico del Estado Español*. Coordinado por Navarro Valls, R., Pamplona, 1.983, p. 56.

³ Goti Ordeñana, J., *Sistema de ...*, cit. pp. 159-161. Se sigue lo escrito por él para esta exposición.

1).- *El placet regio*⁴, por el que el rey hacía que se sometieran al reconocimiento y autorización de su potestad real la ejecución canónica de los actos administrativos de la Iglesia en sus dominios, así como las normas canónicas antes de que fueran publicadas, pudiendo el rey impedir esta comunicación con las limitaciones de la potestad legislativa de la Iglesia. Toda persona, especialmente si ocupaba algún cargo público, tenía que denunciar al Consejo de Castilla todo acto o toda norma, ya fuera del Papa, de los Obispos o de los concilios, para que pasaran el examen previo, a fin de ver si contenían doctrinas o prácticas que pudieran suponer algún detrimento de las regalías de la Corona.

2).- *El ius patronatum*. Sobre este extremo, se reitera lo señalado en el desarrollo de Concordato de 1.753.

3).- *La appellatio ab abusu o recurso de fuerza*⁵. Se trataba de otra forma de intervención real y tenía por objeto definir el límite de competencias entre el

⁴. Olachea Albistur, R., Iglesia y Estado Siglo XVIII en *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, dirigido por Aldea Vaquero, Q.; Martín Martínez, T.; Vives Gatell, J., Vol. II, Madrid, 1.972. p. 1158. Ha señalado que "... La no admisión en España del breve pontificio condenatorio del catecismo. de Mésenguy, puso en evidencia la voluntad regalista de Carlos III, que expulsó de Madrid al inquisidor general Quintano Bonifaz y, el 18-I-1762, promulgó la pragmática llamada Exequatur, por la que se ponía aduana a todo documento pontificio no dogmático-doctrinal o de la Penitenciaría".

⁵. Aldea Vaquero, Q., *Patronato Real* ..., cit. pp. 2.056-2.057. Ha escrito que "el Recurso de la Fuerza, según José de Covarrubias, es una queja que da el vasallo al soberano o a sus tribunales contra el juez eclesiástico que le violenta o comete injusticia notoria. Era, por tanto, un recurso civil contra la fuerza que hacían o se presumía que hacían los jueces o tribunales eclesiásticos. Había tres clases de recursos: 1) en conocer; 2) en el modo de proceder; 3) en no otorgar. (...) Con el siglo XVIII la institución cambia de signo. Los teóricos de los siglos XVI y XVII, i. e. Diego Covarrubias, A. de Acevedo, Bobadilla, Gabriel Vázquez, Salcedo, Salgado, la Junta de 1.632, etc., defienden los recursos de fuerza con limitaciones y respetando siempre los derechos de la Iglesia. En cambio, los teóricos del siglo XVIII, José de Covarrubias, el conde de la Cañada, etc., atribuyen al poder temporal prerrogativas que repugnan el derecho divino de la Iglesia".

fue civil y el eclesiástico, así como asegurar la intervención del poder civil en la organización y funcionamiento de los tribunales eclesiásticos.

4).- *El dominium eminens*. Se trataba de un dominio especial que alegaba el monarca sobre los bienes de la Iglesia, por medio del cual le correspondía una inspección sobre todos ellos. Este era, a su vez, una forma de poder participar en los diezmos, que tradicionalmente cobraba la Iglesia y constituían un medio muy saneado de ingresos para el príncipe, con las diferentes figuras que se creaban de las tercias reales, el excusado, las novenales y el noveno⁵

Tras haber puesto de relieve estas instituciones, la principal manifestación jurídica, que trató de solucionar estos extremos que encontramos en este siglo XVIII, fueron los Concordatos de 1.737⁶ y el de 1.753⁸

El Concordato de 1.737, como ha señalado Olacoechea⁷, "... comprendía 26 artículos, de los cuales nueve eran puramente expositivos o de concesiones, 13 promisorios, y los cuatro restantes eran también promisorios, pero *con una*

⁵. Goti Ordeñana, J., *Sistema de ...*, cit. p. 161, nota núm. 191. Literalmente señala que: "Las tercias reales consistían en la participación del rey en una tercera parte del tercio, que correspondía al clero, en la división de las rentas que en España se hacían desde la primitiva Iglesia. Esto es, se hacía separando tres partes: una para el Obispo, otra para el mantenimiento de los templos, y una tercera para el clero. El diezmo excusado era el diezmo de la casa más rica de cada parroquia que en lugar de a la Iglesia se pagaba al Rey. Los diezmos novales eran los procedentes de las tierras recientemente reducidas a cultivo y luego se extendió a los frutos de aquellas tierras que fueran mejoradas por las nuevas acequias construidas por cuenta del Rey. El noveno era una concesión papal por la que se facultaba al Rey a exigir la novena parte del valor de todos los diezmos de España e Indias para destinarlas a la extinción de la deuda de la Corona"

⁷. Este Concordato se firmó el 26 de septiembre de 1.737.

⁸. Este Concordato, tras arduas negociaciones, se firmó el 11 de febrero de 1.753.

⁹. Olacoechea Albistur, R., Concordato de 1.737 en *Diccionario de Historia eclesiástica de España*, dirigido por Aldea Vaquero, O., ; Martín Martínez, T., ; Vices Gatell, J., Vol. I, Madrid, 1.972, p. 579.

promisorios, y los cuatro restantes eran también promisorios, pero *con una condición no dependiente de la sola voluntad del papa*. Se daban muchas satisfacciones; volvía el nuncio Valenti a Madrid, y se abría el Tribunal de la Nunciatura; se concedían capelos a los monseñores Valenti y Molina; se restringía la inmunidad local; se trataba de poner remedio a los fraudes y ficciones de ventas y contratos, hechos a nombre de eclesiásticos para lograr exenciones de impuestos; se exhortaba a los prelados moderación y cautela en la imposición de penas canónicas; se concedía al Rey un subsidio de 150.000 ducados por cinco años, y se dejaban en suspenso las cuestiones de tipo beneficial (artículo 24); pero las bulas y decisiones pontificias sobre cuestiones matrimoniales y gracias de particulares, debían ser ejecutadas como antes del convenio (artículo 1)". El artículo 23 dejaba sin solucionar el principal problema, constituido por el Derecho de patronato. Por otra parte, como ha señalado este último autor, "En realidad, el Concordato sólo entró en vigor en 1.740, y no del todo, ya que en 1.742 aún había ciertos artículos -los del tercer grupo- que no se cumplían ni se cumplirían".

Este Concordato fue completado por cinco Breves que aclaraban algunos de sus artículos. En opinión de Olaechea, "estos breves evidenciaban de sobra lo insatisfechas que habían quedado ambas partes con este acuerdo¹⁰".

Tras esa rápida exposición del de 1.737, el siguiente Concordato fue el de 1.753. Éste fue básico en nuestro Derecho concordatario, puesto que quedó vigente de forma subsidiaria en el de 1.851 en todo lo referente al patronato. Como afirma Lamadrid¹¹, hay que ir más allá, toda vez que "dicho Concordato señala en la historia de la Iglesia un momento decisivo en la provisión de los

¹⁰. Ibidem, p. 579.

¹¹. Sánchez de Lamadrid, R., *El Derecho Público de la Iglesia Católica*, Granada, 1.951. pp. 153-154.

era, con notable diferencia, la nación que poseía el mayor número de beneficios y en la que, por otra parte, las reservas estaban en todo su vigor; por eso la abolición de éstas en España equivalía a su desaparición en toda la Iglesia. Este es el verdadero sentido y significación del Concordato: el patronato universal no fue sino la fórmula escogida; querer ver otra cosa es quedarse a la mitad del camino en el significado del Concordato de 1.753"

En relación con este Concordato¹², es preciso poner de relieve, como señala Lamadrid¹³, que su texto presentaba dos partes perfectamente definidas¹⁴: La primera delimitaba el estado de la cuestión fijando los términos de la concordia (artículos 1 a 7), y la segunda contenía los artículos concordados (artículos 7 a 23).

¹² Hemos podido consultar su texto tras una laboriosa búsqueda en la Biblioteca Nacional, en la obra *Concordato celebrado en el año de 1.753 entre las Cortes de Roma y Madrid. Constitución Apostólica, y Breve expedidos en su corroboración y declaración. Reimpreso por orden de S.M. conforme a sus originales*. En Madrid, en la imprenta de Antonio Pérez de Soto, MDCCCLXIII. Su contenido aparece en dos columnas gemelas, escritas la primera en italiano y la segunda en español. Este dato resulta realmente curioso, toda vez que todos los documentos provenientes de la Santa Sede que se incorporaban al Derecho español, que se han examinado a lo largo de estos casi cincuenta años de investigación sobre el Siglo XIX, cuando se asumían por el Derecho español se publicaban en la Gaceta de Madrid, pero siempre mediante la consignación de dos columnas, una en latín y la otra en español. Por este motivo, la consignación del texto en italiano resulta difícil de explicar.

¹³ Sánchez de Lamadrid, R., *El Derecho Público...*, cit. p.156-158. Se sigue de forma puntual su exposición. Para un mayor detalle de su contenido, entre otros, vease Sánchez de Lamadrid, R., *El Concordato de 1.753*. Jerez de la Frontera, 1.937. O también en Olacoea Albistur, R., *Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo XVIII*, Zaragoza, 1.965, 2 Vols.

¹⁴ Olacoea Albistur, R., Concordato de 1.753 en *Diccionario de Historia eclesiástica de España*, dirigido por Aldea Vaquero, Q.; Martín Martínez, L.; Vives Gatell, J., Vol. I, Madrid, 1.972, pp. 579-581, -concretamente p. 580-. También se ha señalado que "... documento del Concordato presenta dos partes claramente diferenciadas: la primera, fundamental y genérica, se refiere a los principios y da base a la segunda, que constituye propiamente el Concordato."

En la primera parte, dos cuestiones principales quedaban excluidas del Concordato, aunque estaban íntimamente relacionadas con él: el Patronato Universal y la reforma disciplinar; aquél porque se negaba, y ésta porque se aplazaba.

Por lo que al Patronato Universal se refiere (artículos 5 y 6) ninguna novedad se añadía a lo expuesto ya por Benedicto XIV en la Rimostranza: esto es, se admitía el patronato real o derecho de los reyes de España a presentar para los obispados, y beneficios consistoriales, así como los patronatos de Granada e Indias; pero se desconocía la existencia del Patronato Universal. Sobre éste, siguiendo a Aldea¹⁵, podemos afirmar que con la venida de los Borbones comenzaba la batalla por la conquista del Patronato Real Universal, y que en el Concordato de 1.737, según su artículo 23, se suspendía el uso del Patronato

¹⁵. Aldea Vaquero, Q., Patronato Real de España, en *Diccionario de Historia eclesiástica de España*, dirigido por Aldea Vaquero, Q.,; Martín Martínez, T.,; Vives Gatell, J., Vol. III, Madrid, 1.973. pp. 1944-1948. Sobre el significado de esta expresión, ha señalado que "... el derecho de presentación se ha ejercido de modo muy distinto en las distintas épocas. Y por eso el término tiene hoy una significación equívoca al amparar conceptos y realidades dispares. El auténtico derecho de presentación, tanto en España como en otras partes, consistía en la propuesta al Papa, por parte del Rey, de un candidato idóneo para una sede o beneficio determinado, candidato que el Papa instituía canónicamente, si no se demostraba que fuera indigno. Este sistema estuvo en vigor hasta la Segunda República. En cambio, el derecho de presentación que se incorporaba al artículo VII del Concordato de 1.953, que a su vez recogía el acuerdo de 7-VI-1.941, se reduce prácticamente a lo siguiente: el nuncio Apostólico toma contacto con el Gobierno español (Ministerio de Asuntos Exteriores) y se pone, en principio, de acuerdo con él para escoger una lista de, al menos, seis nombres, de otra lista más amplia, previamente hecha por la Santa Sede, de aptos para el episcopado. Enviados esos nombres a la Santa Sede, el papa escoge tres y, de esos tres, el jefe del estado presenta uno. ...".

Para remontar a nuestros días esta exposición, efectuada en 1.973, hay que añadir el Acuerdo de 28 de abril de 1.976, relativo a la renuncia al privilegio de fuero y al nombramiento de Obispos. Instrumento de Ratificación de España de 19 de agosto de 1.979 al Acuerdo de 28 de julio de 1.976, entre la Santa Sede y el Estado Español (BOE núm. 230, de 24 de septiembre de 1.976, y corrección de errores en BOE núm. 259, de 28 de octubre de 1.976). Puesto que, en base a su Art. I, el nombramiento de Arzobispos y Obispos es de exclusiva competencia de la Santa Sede.

Universal hasta que se llegara a un nuevo acuerdo. Éste no se produjo hasta la firma del Concordato de 1.753.

El Concordato propiamente dicho (artículos 7 a 23), que constituía, como se ha señalado, la segunda parte, comenzaba en el artículo 6 con estas palabras: "Después de un largo contraste, se ha finalmente abrazado de común consentimiento el siguiente temperamento. ...". Todo el contenido del Concordato se puede resumir en la siguiente fórmula: *Abolición de las reservas apostólicas*, así en la provisión de beneficios (artículos 13 y 14), como en la percepción de frutos beneficios (artículos 15 y del 17 al 21).

Por lo que tocaba a la provisión de beneficios, todo lo concedido al rey lo expresaban los artículos 13 y 14, que en realidad eran los fundamentales de este Concordato. En el artículo 13, apartado quinto, se establecía, tras la expresa reserva de los cincuenta y dos beneficios que se retenían por parte de la Santa Sede, que el rey español y sus sucesores tendrían el derecho a nombrar, y presentar indistintamente en todas las iglesias metropolitanas, catedrales, colegiatas y diócesis de los reinos de las Españas a las dignidades¹⁶. Por su parte, el artículo 14 venía a perdurar esta situación en el tiempo, de suerte que quedaban habilitados los monarcas españoles para conferir los beneficios en España.

¹⁶. La expresión literal de este artículo afirmaba que: "... a las dignidades mayores *post pontificalem* y a las demás dignidades en las catedrales, y a las dignidades principales y demás en las colegiales, a los canonicatos, porciones, prebendas, abadías, prioratos, encomiendas, parroquias, personatos, patrimoniales, oficios y beneficios, eclesiásticos seculares y regulares con *cura*, *et sine cura* de cualquier naturaleza, que sean existentes al presente, y que en adelante se fundaren (sin que los fundadores se reserven para sí, y sus sucesores el derecho de presentar) en los dominios, y reinos de las Españas, que actualmente posee el Rey Católico, ...".

Por lo que respecta al plano económico, es decir, a los frutos beneficios y al contenido de los artículos 15 y 17 al 21, se extinguía para siempre el uso de las pensiones y cédulas bancarias y se renunciaba por parte de la Santa Sede a los expolios y frutos de las iglesias vacantes, y a la expedición de las bulas beneficios. A cambio de todas las concesiones, el rey se comprometía a consignar, por una sola vez, en manos del Papa un capital de 310.000 escudos romanos como compensación de los beneficios, otro de 600.000 escudos en sustitución de las pensiones bancarias y otro, finalmente, de 233.337 por razón de los expolios y vacantes. Además, y para la manutención del Nuncio, se acordó señalar en Madrid del fondo de la Cruzada 5.000 escudos anuales.

Desde el plano económico, las disposiciones contenidas en este Concordato, hay que ampliarlas con lo contenido en el Art. 8 del Concordato de 1.737, puesto que de alguna forma iba a resultar controvertido e inaplicable en el Siglo XIX, toda vez que establecía que los bienes de la Iglesia no estaban sujetos al pago de los Tributos estatales.

En todo caso, este Concordato fue completado por tres Breves¹⁷, y también hay que decir que fue seguido por numerosas disposiciones aprobadas para su desarrollo. Éstas las podemos encontrar recogidas entre los diversos títulos dentro de los libros que conforman la Novísima Recopilación de las Leyes de España. Sin embargo dentro del Libro Iº se dedicaba el Título XVIII para la regulación de la Real Presentación de Prelacias de las Iglesias; y provisión de piezas

¹⁷. Como ha señalado Sánchez de Lamadrid, R., *El Derecho Público ...*, cit., pp. 159-160, se trataba de los siguientes: El Breve "Romanum decet Pontificem", de 18 de diciembre de 1.766 de Clemente XIII dirigido a Carlos III, en el que se determinaban las facultades del Nuncio en España. El Breve "Administrandae iustitiae zelus", de 26 de marzo de 1.771, por el que se creaba en Madrid la Rota de la Nunciatura. Y el Breve "Fa semper", de 12 de septiembre de 1.772, en virtud del cual se limitaba el derecho de asilo en España.

eclesiásticas, conforme al Concordato con la Santa Sede¹⁸

En relación con el Concordato de 1753, Martín Martínez¹⁹ se ha preguntado "¿por qué se discutía entre la Monarquía española, que aspiraba a designar los candidatos que hubieran de ocupar los beneficios eclesiásticos, y la Santa Sede, que defendía la perfecta libertad en la colación de tales beneficios, eligiendo las personas que estimase oportuno, sin tener que aceptar las que le propusieran los reyes españoles?. La controversia obedecía a un doble motivo: en primer término porque los monarcas españoles suponían que con la práctica de las reservas pontificias se ocasionaban ciertos perjuicios, sobre todo de carácter económico, al Estado, y, en segundo lugar, porque en la mente de los gobernantes hispanos se iba acentuando un sentido de prepotencia política, de una supremacía del Estado sobre la Iglesia. La realidad de aquellos perjuicios despertaba un justo deseo de que se recortasen los excesos que pudiera haber en la Curia Romana; pero, al mismo tiempo, al regalismo creciente se le ofrecía un bello pretexto para lograr la sumisión de la Iglesia a la Monarquía española". Sobre esta opinión, se puede decir en su apoyo que en los diferentes períodos contenidos en esta investigación durante el siglo XIX, los distintos Gobiernos procuraron situar al frente de las diócesis a Prelados afines al régimen, proyectándose esta política, incluso, al resto de beneficios de cualquier clase.

Tras ese breve análisis del texto del Concordato de 1753, hay que detenerse en su significado jurídico. En este sentido, ha señalado Pérez Mier²⁰,

¹⁸. *La Novísima Recopilación de las Leyes de España*, Ley XXII, Tit. V, libro 1.^o Edición facsímil, elaborada por la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, Madrid 1975, pp. 134-150.

¹⁹ Martín Martínez, I., *Sobre la Iglesia y el Estado*, Madrid, 1989, pp. 260-261.

²⁰ Pérez Mier, I., *Iglesia y Estado nuevo, los Concordatos ante el moderno Derecho Público*, Madrid, 1940, p. 102-103.

siguiendo a Lamadrid, que "sobre el significado jurídico del Concordato de 1.753 se puede decir que el patronato era más que un objetivo, era una fórmula cuyo contenido era la presentación de los beneficios eclesiásticos a favor del Rey. Las provisiones eclesiásticas eran el verdadero problema, y el Concordato de 1.753 era una manifestación más de las resistencias que las reservas hallaron en los reinos de la cristiandad, y su abolición en España, donde estaban en todo su vigor, equivalía prácticamente a la desaparición de las reservas en la Iglesia. (...) Este era, pues, el Concordato: ante todo y sobre todo, un Concordato benefical, en el que se derogaban las reservas en España y con el que, a causa de la verdadera revolución económica que llevaba al sistema financiero de la Curia Romana, habían de sufrir un golpe de muerte las reservas apostólicas de la Iglesia".

Sin embargo, quizá se debe destacar, como ha señalado De la Hera²¹, que "el Concordato de 1.753 posee un contenido monocolor: trata exclusivamente de cuestiones de patronato. No encontramos en él ninguna atención a otros campos de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y sufriría sin embargo una equivocación quien creyese que esos campos no existían en el siglo XVIII por estar perfectamente diferenciadas las funciones mutuas de ambas sociedades; lejos de ello, esas funciones estaban tan confundidas, que no surgió todavía en la mentalidad de la época la idea de distinguir competencias en un tratado de tipo internacional".

Pero, en realidad, con lo que se contenía en el Concordato de 1.753, como ha señalado Lamadrid, se llegaba en España a lo que en Alemania se había obtenido en 1.448²².

²¹. De la Hera, A., *Pluralismo y Libertad Religiosa*, Sevilla, 1.971. p. 10.

²². Sánchez de Lamadrid, R., *El Concordato ...*, cit. p. 131. se refería a lo contenido en (continúa...)

En todo caso, y con independencia de las señaladas instituciones regalistas y la existencia de ambos concordatos, a lo largo de todo este Siglo XVIII, y concretamente durante algo más de su último cuarto, nos vamos a encontrar con el nacimiento de disposiciones que iban siempre en perjuicio del clero, y cuyo contenido, durante el siglo XIX, será más desarrollado, mediante la promulgación de otras nuevas que, en todo caso, irrogaban más efectos negativos para con los intereses de la Iglesia. Algunas de estas normas aprobadas a finales de este siglo, fueron, entre otras:

Sobre desamortización: Las primeras medidas desamortizadoras se aprobaban mediante el Real Decreto de 19 de septiembre de 1.798 inserto en Cédula Real del Consejo el 25 del mismo mes²³. De igual forma, nos encontramos también las primeras disposiciones contrarias a los Jesuitas, concretamente la Real Cédula de 25 de septiembre de 1.798, estableciendo la incorporación a la Hacienda Real de las temporalidades pertenecientes a los Jesuitas²⁴. Esta última medida suponía la primera incautación violenta en la desamortización.

De igual forma, también se establecieron algunas *cautelos para evitar que las denominadas "manos muertas" poseyeran más bienes*. Nos referimos a la Real Resolución de 10 de marzo de 1.763 para que no se admitieran instancias

²²(...continuación)

el Concordato de Viena y Francisco I en 1.516 por el Concordato de León X, y este mismo retraso hacía que las pretensiones fueran aquí mucho mayores. Tal vez si se hubiese intentado un acuerdo de este género en los siglos XVI y XVII, se hubiese evitado el que en el siglo XVIII se llegase al Concordato más radical que se ha conocido en materia benefical.

²³. *La Novísima Recopilación de las Leyes de España*, Edición facsimil, elaborada por la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, Madrid 1.975. Ley XXII, Tit. V, libro Iº pp. 51-52.

²⁴ *Ibidem*, Ley XXIV, Tit. V, Libro Iº pp. 53-54.

de Manos-muertas para la adquisición de bienes²⁵. E incluso se llegó a dictar el Decreto de 21 de agosto de 1.795, inserto en Cédula de igual fecha, para que se practicara una exacción del 15 por 100 de todos los bienes que adquirieran las Manos-muertas²⁶.

El control del contenido de las opiniones de los eclesiásticos vertidas desde los púlpitos también encontró la oportuna regulación por la Real Orden de 16 de marzo de 1.801, inserta en la Circular del mismo mes²⁷. En este sentido, se obligaba a los Prelados a que vigilaran al resto de los eclesiásticos dependientes de sus respectivas diócesis para que no hablaran mal de las personas reales, del Estado o Gobierno, es decir, para que procuraran abstenerse de emitir opiniones sobre el "gobierno temporal"²⁸.

Desde el propio Estado se regulaba *el traje que debían vestir los eclesiásticos*. Así se determinaba mediante la Real Orden de 11 de junio de 1.781, inserta en la Circular de la Cámara de 11 de diciembre de 1.781, por la que se establecía el Traje y ascenso de los clérigos de menores a mayores órdenes; y remedio a su relajación²⁹.

Por lo que respecta a la *residencia de los eclesiásticos*, se aprobaron diversas disposiciones a finales de este Siglo XVIII. Entre otras, se pueden destacar la Real Orden de 11 de junio, y Circular de la Cámara de 11 de

²⁵. *Ibidem*, Ley XVII, Tit. V, Libro Iº. p. 45.

²⁶. *Ibidem*, Ley XVIII, Tit. V, Libro Iº. pp. 45-46.

²⁷. *Ibidem*, Ley XXIII, Tit. I, Libro Iº. p. 14.

²⁸. Nos estamos refiriendo al Real Decreto de 14 de septiembre de 1.766, inserto en cédula del Consejo de 18 del mismo. *Ibidem*, Ley VII, Tit. VIII, Libro Iº. pp. 70-71.

²⁹. *Ibidem*, Ley XII, Tit. X, Libro Iº. pp. 87-88.

diciembre de 1.781, determinando que se precisaba residencia de los provistos en beneficios eclesiásticos³⁰. En base a esa obligación de residencia, se determinaba que la Cámara no debía presentar a beneficios a quienes no estuvieran residiendo en el lugar donde se tenían sus obligaciones³¹. En todo caso, sí que se puede verificar del estudio del Derecho la existencia de numerosos eclesiásticos desocupados en la Corte, es decir, en Madrid, puesto que mediante la Real Orden de 23 de Diciembre de 1.759, renovada por otra de 26 de abril de 1.766, se prescribió que los eclesiásticos sin destino ni ocupación precisa en la Corte se retirasen a sus Iglesias y domicilios³². Por lo que respecta a los Regulares, se determinaba que no podían residir fuera de clausura, no sirviendo al efecto pretexto alguno, ni tan siquiera para administrar sus haciendas y labores³³.

Sobre las actividades que podían realizar los eclesiásticos se determinó que no se podían mezclarse en pleitos y negocios ajenos temporales³⁴. Y con respecto a la jurisdicción eclesiástica, se limitaba en la práctica mediante la restricción del

³⁰ *Ibidem*, Ley III, Tit. XV, Libro I^o, pp. 111-112.

³¹ Nos referimos al Real Decreto de 24 de septiembre de 1.784, que determinaba que la Cámara no consulte para piezas eclesiásticas persona que no se halle residiendo en su Beneficio o ministerio. *Ibidem*, Ley IV, Tit. XV, Libro I^o, p. 112.

³² *Ibidem*, Ley VI, Tit. XV, Libro I^o, p. 113. Esa prohibición, alcanzaba incluso a los Prelados. Así se colige de la Real Orden de 22 de marzo de 1.778 inserta en circulares de la Cámara de 31 del mismo, y 23 de diciembre de 1.794, por la que se ordenaba que no se permitiera la venida de Prebendados a la Corte, con título de diputados de sus Cabildos, sin Real licencia. *Ibidem*, Ley VII, Tit. XV, Libro I^o, p. 114.

³³ Concretamente, nos estamos refiriendo a lo contenido en varias disposiciones: por un lado la Real Orden de 31 de mayo, y Circular del Consejo de 14 de diciembre de 1.762 que determinaba que se prohibía a los regulares vivir fuera de clausura con pretexto alguno; y a la Resolución de 22 de junio, y cédula del Consejo de 11 de septiembre de 1.764, por la cual se prescribía la prohibición de residir en los pueblos los Regulares con casa poblada, para administrar sus haciendas y labores. *Ibidem*, Leyes IV y V -respectivamente-, Tit. XXVII, Libro I^o.

³⁴ Así se establecía mediante la Cédula de 25 de noviembre de 1.764, por la que se preceptuaba que no se permitiera a los eclesiásticos seculares y regulares mezclarse en pleitos y negocios ajenos temporales. *Ibidem*, Ley II, Tit. XXVII, Libro I^o, p. 185.

poder de los jueces eclesiásticos. Concretamente, se llevó a cabo, mediante la prescripción de que los Jueces eclesiásticos no procesaran a personas civiles, ni secuestraran sus bienes sin contar con el brazo secular³⁵.

En cuanto a la *sujeción de los bienes del clero para con el pago de los tributos del Erario Público*, si bien ya se había determinado lo conveniente en el Art. 8 del Concordato de 1.737, y en numerosas disposiciones posteriores³⁶, a finales de este Siglo se aprobaba la Resolución del Consejo de Hacienda, inserta en Cédula de 10 de agosto de 1.793³⁷, por la cual se establecían algunos supuestos donde los bienes de la Iglesia se sujetaban al pago de tributos estatales. En esta misma línea de atribuir cargas del Estado a la Iglesia para que contribuyera a su sostenimiento, podemos encontrar la Real Orden de 15 de marzo de 1.765, determinando que las contribución de milicias se pague por los Clérigos, Comunidades eclesiásticas y Manos-muertas con proporción a sus bienes³⁸.

El pase regio estaba específicamente regulado, puesto que se prescribía que toda comunicación proveniente de Roma, consistente en bulas, breves, rescriptos y despachos que contuvieran ley, regla u observancia general, debía presentarse previamente ante el Consejo para su reconocimiento, y recibir el oportuno pase antes de su circulación en nuestro país³⁹.

³⁵. Nos referimos a la Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1.764, determinando que los Jueces eclesiásticos en causas contra seglares procedan con arreglo a lo que se les previene. *Ibidem*, Ley XXIV, Tít. II, Libro IIº. pp. 219-220.

³⁶. *Ibidem*, Ley XIV, y XV, del Tít. I, Libro Iº. pp. 37-43.

³⁷. *Ibidem*, Ley XVI, Tít. V, Libro Iº. pp. 44-45.

³⁸. *Ibidem*, Ley XV, Tít. IX, Libro Iº. pp. 78-79.

³⁹. Nos estamos refiriendo a la Pragmática Sanción de 16 de junio de 1.768 publicada en Madrid en 17 del mismo, que señalaba que era preceptiva la previa presentación en el Consejo de las bulas, breves y despachos de Roma. *Ibidem*, Ley IX, Tít. III, Libro IIº.

(continúa...)

Sobre los diezmos, si bien su regulación databa de fechas muy remotas, a finales de este Siglo se pretendía que fueran abonados por todos sin ningún tipo de excusa. Por ello se aprobaba la Cédula Real de 8 de junio de 1.796, con la inserción del Breve de S.S. de 8 de enero anterior, por el cual se revocaban y se declaraban nulas todas las exenciones de pagar diezmos concedidas en los reinos de España e Indias⁴⁰.

Como ha señalado Olacoechea⁴¹, "... no parece que todas estas Órdenes y Decretos se encaminaran a perseguir a la Iglesia, sino a un lento dominio sobre el estamento clerical".

Como resumen a la regulación del hecho religioso, por lo que respecta a este Siglo XVIII, siguiendo a De la Hera⁴² hay que afirmar que "la teoría de la potestad que respectivamente compete a la Iglesia y al Estado experimenta una notable serie de cambios que, situándola sobre nuevas bases, conducen a conclusiones muy diferentes de las que entonces predominaron. La doctrina de la absoluta separación entre la Iglesia y el Estado se inicia como fenómeno universal a partir de los últimos años de aquella centuria".

⁴⁰ Ibidem, Ley XIV, Tit. VI, Libro I^o, pp. 61-62.

⁴¹ Olacoechea Albistur, R., *La Iglesia y Estado*..., cit. p. 1.158.

⁴² De la Hera, A., *El regalismo borbónico en su proyección indiana*, Madrid, 1.963, p. 60.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

EL ESTATUTO DE BAYONA DE 1.808¹.

I. EL ESTATUTO DE BAYONA

1. INTRODUCCIÓN

El inicio de la "época contemporánea" en España, tal y como ha reflejado Palacio Atard², estuvo marcada por dos coordenadas principales:

a) Un acontecimiento imprevisible, de tipo catastrófico: la invasión militar napoleónica de 1.808 y la guerra subsiguiente. Con éste comenzó el largo período bélico de treinta años que dejaría una huella indeleble en la configuración de la España del siglo XIX.

b) La modificación lenta, pero profunda, del substrato social, que ocurrió en un plazo más impreciso cronológicamente, pero que en todo caso abarca los últimos decenios del siglo XVIII y los primeros del XIX.

El andamiaje institucional del Antiguo Régimen y el Poder que en él residía se fueron abajo de pronto, por el súbito acontecimiento de 1.808.

¹. Otorgada en Bayona por el Rey José I, hermano de Napoleón Bonaparte, el 7 de julio de 1.808. *Gaceta de Madrid* de 27, 28, 29 y 30 del mismo mes y año. Llamada indistintamente Constitución o Estatuto de Bayona.

². Palacio Atard, V., *La España del Siglo XIX, 1.808-1.898*. Madrid, 1.981. p. 21.

El suceso que ocasionó nuestra Guerra de la Independencia fue la invasión de España por parte de Napoleón, motivada por la inequívoca voluntad firme de los españoles de resistirla.

La entrada de las tropas francesas en España no pudo ser más sencilla. Cruzaron nuestra frontera de forma amigable, bajo la cortina de humo de la invasión y reparto con España de Portugal. Así, tuvo lugar el Tratado de Fontaineblau firmado el 27 de octubre de 1807³

La invasión francesa supuso la pérdida de poder de las instituciones y órganos encargados del gobierno en España, puesto que no supieron dar la solución que pedía el pueblo español⁴. Junto a esa pérdida de poder de las autoridades legítimas, había que sumar el levantamiento en armas y, como consecuencia directa, la aparición de distintas Juntas en las ciudades españolas que se hicieron con el poder.

³ Señala Palacio Atard., V. *La España del Siglo ...*, cit. p. 22, que no se puede saber con certeza la fecha en que Napoleón adopta su decisión trascendental, y que sí parecen mas claras las razones que le impulsan a tomar España, que son dos de naturaleza diferente: a) Una razón estratégica, objetiva: afianzar el bloqueo continental. Y b) Una razón política, subjetiva: eliminar a los Borbones supervivientes en el trono de España para que su sombra no se proyectara sobre la legitimidad de la -cuarta dinastía- napoleónica en Francia.

⁴ "El Consejo de Castilla, se había convertido a lo largo del Siglo XVIII en la pieza clave del sistema institucional español. ... Su actuación en los meses de mayo-junio se limitó al ejercicio de sus funciones gubernativas, al mantenimiento del orden, y se plegó en el ejercicio de sus funciones legislativas, a dar forma legal a la voluntad de los invasores y de la Junta de Gobierno. En ambos casos el Consejo busca desesperadamente, frente a las medidas que se le imponen, librar su responsabilidad mediante protestas formales, recurriendo en otros casos a negar existiesen en él facultades para tomar decisiones. La colaboración que el invasor le impuso determinó una pérdida de prestigio e influencia ante la opinión dispuesta a combatir a los franceses" Artola, M., *La Burguesía revolucionaria (1.808-1.874)*, en *la Historia de España* dirigida por Miguel Artola, Madrid, 1.990, pp. 20-21.

Debido a la importancia de algunas de las ciudades, esas Juntas se convirtieron en verdaderos poderes territoriales sin limitaciones de soberanía, como las de Oviedo, Valladolid, Badajoz, Sevilla, Valencia, Lérica y Zaragoza, puesto que fueron los lugares donde el levantamiento en armas desembocó en la constitución de Juntas Supremas provinciales que sustituyeron a las antiguas autoridades, promoviendo la extensión del movimiento a las ciudades y provincias limítrofes.

La necesidad de coordinar el esfuerzo bélico y la conciencia de unidad nacional permitieron llegar a la creación de un Gobierno central en un plazo excepcionalmente breve, dados los medios de comunicación y el número de autoridades que se habían creado⁵.

Los monarcas españoles, tanto Carlos IV como Fernando VII, habían renunciado al trono tras el triunfo de la estratagema diseñada por Napoleón. La voluntad de éste consistía en disponer del trono de España para su hermano José, de suerte que se trataba simplemente de la continuación de la Dinastía Bonaparte para regir la Corona de España. Sin embargo, ese cambio no se limitaba a una simple modificación de la Dinastía reinante, sino que traía consigo una serie de

⁵. Ha escrito Artola, M., *La Burguesía revolucionaria ...* cit. pp. 22-23: "Las Juntas promovieron mediante iniciativas desordenadas pero convergentes la formación de un gobierno nacional, cuya constitución se produjo en poco más de tres meses. La unanimidad en cuanto a la necesidad de un gobierno central se convierte en pluralidad de opiniones, difíciles de armonizar, a la hora de determinar su composición y atribuciones. Había quien quería una regencia, en tanto otros proponían reunir en un sólo cuerpo viejas y nuevas autoridades, mientras los más radicales se resistían a entregar el poder en manos de quienes habían mostrado en el momento de la invasión, una debilidad que estimaban culpable. Finalmente triunfó el criterio de la Junta de Sevilla favorable a la delegación de poder en manos de representantes elegidos por las Juntas. Granada propuso que fuesen dos, y conforme a este criterio acudieron a la Corte los representantes designados por éstas". En Igual sentido, puede verse, entre otros, a Palacio Atard, V., *La España del Siglo ...* cit. pp. 27-29.

reformas, bajo la bandera de lo ocurrido en el reino de Nápoles⁶

Algunos españoles -una minoría-, a la vista del nuevo orden que proclamaba Napoleón para España, decidieron apoyar al invasor, y fueron denominados "afrancesados"⁷. Sin embargo, al proyecto regenerador de Napoleón se oponían dos grandes frentes, la lealtad dinástica y el sentimiento patriótico nacional, puesto que incluso gran parte de ilustrados dieron la espalda al invasor, como fue el caso de Jovellanos⁸.

⁶. En la *Gaceta de Madrid* de 20 de febrero de 1.809 se publicó el informe sobre el estado del Reino de Nápoles donde se recogían las ideas liberales del gobierno invasor mediante la descripción de los logros realizados en Nápoles, (pp. 294 a 296), los cuales parece que eran los que deseaba instaurar en España: *"La feudalidad ha sido abolida. El Poder Judicial queda fuera del Poder Real, las leyes municipales sustituyen los caprichos de terratenientes, ... Los bienes territoriales de manos muertas han cesado de ser patrimonio de la pereza y se han convertido en minas inagotables de verdaderas riquezas y prosperidad en manos de gran número de padres de familia, que uniéndose a su patria por el vínculo que hace más apreciable la vida, que es tener hijos, se felicitan de unas disposiciones, que les franquean los medios de proporcionarse una existencia feliz y honrosa. La congrua fija de los curas párrocos ha sido doblada, con la cual se han librado de toda angustia acerca de su existencia..."*

Entre los religiosos que aún permanecen en sus claustros, unos se ocupan de conservar los depósitos de conocimientos humanos, otros del cuidado y consuelo de enfermos, otros del culto y servicio en los santuarios que los pueblos veneran. Pero los hay también que retirados de sus cargos viven donde nacieron, mediante una asignación puntualmente pagada, y que el soberano ha mirado siempre como la deuda más sagrada"

⁷. Sobre los afrancesados, a mayor abundamiento, vease Artola, M., *Los afrancesados*, Madrid, 1.976, y más concretamente sus páginas 45 a 73.

⁸. "El caso de Jovellanos es tal vez el más elocuente y arquetipo de una actitud política y moral en aquel trance de crisis y confusión que se cernía sobre el destino de España. Fue nombrado ministro de lo Interior por José I al formar su primer Gobierno, pero rechazó el nombramiento. Fueron inútiles los esfuerzos de Mazarredo, Cabarrús y otros amigos suyos para convencerle. En las cartas cruzadas con ellos durante las primeras semanas de la Guerra de la Independencia está el núcleo de la polémica sobre los afrancesados. La respuesta de Jovellanos a Cabarrús es la clave de la postura ilustrada que rechaza las reformas a través de un poder intruso: *España lidia por su Constitución, por sus leyes, por sus costumbres, por sus usos, en una palabra por su libertad...* Pues qué *¿España no sabrá mejorar su Constitución sin auxilio extranjero?* Pues qué, ¿no (continúa...)

De cualquier forma, el reinado de José I y su Gobierno se extinguió con su salida de España en junio de 1.813.

2. SIGNIFICADO Y CONTENIDO DEL ESTATUTO.

Para facilitar la aceptación del cambio de dinastía, Napoleón convocó una Asamblea de notables para dotar a España de una Constitución donde tuvieran cabida algunos de los deseos de la reforma liberal.

La carta otorgada del Estatuto de Bayona nace dentro del contexto histórico de la ocupación francesa de España. Napoleón intentó ganarse el apoyo del pueblo español mediante su manifestación jurídica principal que fue el Estatuto de Bayona de 1.808, pero este gesto fue insuficiente, puesto que faltaba el reconocimiento y sostenimiento del pueblo, quien en vez de aceptar el nuevo orden propuesto, se alzó en armas contra el invasor francés⁹.

⁸(...continuación)

hay en España cabezas prudentes, espíritus ilustrados capaces de restablecer su excelente y propia Constitución, de mejorar y acomodar sus leyes al estado presente de la nación ...? ". Palacio Atard, V., *La España del Siglo ...* cit. p. 54.

La actividad de este personaje liberal ha polarizado el interés de la doctrina, a modo de ejemplo, pueden citarse, entre otros, Coronas Gonzalez, S.M., Jovellanos, jurista ilustrado, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, Tomo LXVI (1.996), Madrid, 1.997. pp. 561-613. O también Fernandez Alvarez, M., *Jovellanos, un hombre de nuestro tiempo*, Madrid, 1.988.

⁹. Posada A., *La nouvelle Constitution espagnole*, París, 1.953, p. 76. señala que "que la iniciación del régimen constitucional español, coincide con los momentos críticos de la guerra de la independencia y se manifiesta en la acción convergente de dos importantes fuerzas: la que se afirma con el despertar eficaz del sentimiento nacional contra Napoleón y la que desarrollan los elementos patriotas liberales sostenedores de un ideal político de inspiración inglesa y francesa, pero entusiasta a la vez de las tradiciones españolas que estiman más puras".

La elaboración del texto del Estatuto responde a su naturaleza jurídica. Puesto que tal y como ha señalado Sanz Cid, se partía de un primer proyecto redactado "por orden y bajo el dictado de Napoleón", -como explicaba el ministro imperial Maret, que intervino activamente en el asunto-. Ese proyecto fue examinado de forma autónoma tanto en Madrid por la Junta de Gobierno, que formuló observaciones, como en Bayona por Azanza, Urquijo y una Comisión de diputados. Todas esas observaciones fueron consideradas por Napoleón, por lo que al abrirse la Asamblea, ese proyecto ya había sido objeto de reelaboración¹⁰.

Presentado a la Asamblea ese proyecto, se concedieron tan sólo tres días para presentar enmiendas por escrito, puesto que Napoleón no quiso que se discutiera sobre el texto. Las enmiendas se presentaban ante la Asamblea, y las que fueron aprobadas por ésta, se elevaron finalmente ante Napoleón, quien según los casos indicó al margen, por escrito, a mano de Maret "approuvé" o "refusé". Así quedó redactado el texto definitivo de la Constitución de Bayona¹¹.

Siguiendo a Artola¹², podemos afirmar que el Estatuto de Bayona presenta dos partes:

La primera es la descripción de un sistema político, que de acuerdo con el modelo francés, hace de los diversos cuerpos colegiados -Senado, Cortes, Consejo de Estado- simples cámaras de registro de los proyectos que la Corona les presenta. No existía por consiguiente ninguna coordinación entre ellos, quedando a cargo del Senado la protección de la libertad personal y de imprenta.

¹⁰. Esas reelaboraciones han sido detalladamente estudiadas por Sanz Cid, C., en *La constitución de Bayona*. Madrid, 1.922. pp. 204-307.

¹¹. Palacio Atard, V., *Historia de España* ... cit. pp. 54.

¹². Artola, M., *La burguesía* ... cit. pp. 25 y 26.

así como la facultad de suspender la Constitución a petición del Rey. El proceso legislativo se iniciaba en el Gabinete, pasaba por el Consejo de Estado y se sometía a la aprobación de las Cortes a las que no se reconocía iniciativa legal, del mismo modo que no se preveía la posibilidad de que se presentaran enmiendas. Si se añadía que los miembros del Senado y el Consejo de Estado eran designados directamente por la Corona y que los diputados de las provincias eran elegidos por un cuerpo electoral que formaban los decanos de los regidores y de los curas de los pueblos más importantes, se descubría así el carácter aparentemente liberal de un sistema inspirado en la fórmula constitucional que existía en Francia de signo autoritario.

La segunda parte, contenía reformas institucionales que hubieran supuesto una profunda transformación social, puesto que entre sus artículos se descubría una cierta declaración de derechos: supresión de privilegios (art. CXVIII), inviolabilidad del domicilio (art. CXXVI), libertad de movimientos (art. CXXVII), abolición del tormento (art. CXXXIII), admisibilidad a los empleos (art. CXL), unidad de códigos (arts. XCVI y CXIII) y un programa de reformas de consolidación de deuda pública (art. CXV), supresión de aduanas interiores (art. CXVII), separación del tesoro público del de la Corona (art. CXIX), reducción de los mayorazgos a ciertos límites (arts. CXXXV a CXXXVII), reducción de los fueros de Vascongadas (art. CXLIV).

Casi al final del texto, en el artículo CXLIII, se señalaba que todas esas reformas se efectuarían en un plazo muy corto, mediante desarrollo legislativo y antes del 1 de enero de 1.813. Y el fin de las reformas señaladas por el Estatuto estaba configurado por la libertad de imprenta, puesto que el art. CXLV fijaba la aprobación de esa ley de libertad de imprenta para un plazo de dos años, tras haberse elaborado todas las medidas detalladas.

La Constitución de 1.808 fue otorgada en Bayona por el Rey José I hermano de Napoleón Bonaparte- el 7 de Julio de 1.808.

En cuanto a la técnica jurídica empleada en este Estatuto, hay que señalar lo manifestado por González Deleito, quien ha hecho notar que la composición de este Estatuto presenta una redacción más perfeccionada que la de Cádiz, y además que los principios proclamados eran representativos de un notorio avance con relación a la época¹³.

En realidad, de la mano del liberalismo francés y dentro del marco jurídico del Estatuto de Bayona de 1.808 aparecen algunas de las claves del liberalismo español del Siglo XIX¹⁴. Y siguiendo a Solé Tura y Aja, hay que afirmar que el Estatuto tuvo un papel histórico muy destacado en el nacimiento de nuestro constitucionalismo: su carácter escrito y relativamente liberal consiguió la reacción activa de los que se oponían al invasor creando "un texto alternativo", nuestra Constitución de Cádiz¹⁵.

3. NATURALEZA JURÍDICA

Sobre la naturaleza jurídica de este texto, la doctrina duda en su calificación. Se puede considerar como Constitución o como Carta Otorgada.

¹³. González Deleito, N., en *Aspectos procesales de la Constitución de Bayona*, en la Revista de Derecho Procesal Iberoamericano, N° 4, oct-dic. 1.976, pp. 871-879.

¹⁴. Valga como ejemplo el informe citado sobre el Estado del Reino de Nápoles publicado en la *Gaceta de Madrid de 20 de febrero de 1.809*, (pp. 294 a 296). (Véase nota N° 6).

¹⁵. Solé Tura, J., y Aja, E., *Constituciones y períodos constituyentes en España (1.808-1.936)*, Madrid, 1.980, p. 12.

Una parte de la doctrina constitucionalista no considera al Estatuto de Bayona como una Constitución, y lo ven solamente como un Decreto, como Carta Otorgada, en el sentido que era un texto constitucional otorgado por el emperador Napoleón y no fue debatido en una auténtica asamblea española que representara al pueblo español, sino que, se trataba de una concesión graciosa de un monarca circunstancial, sin ni siquiera ser sentido así por éste¹⁶.

Sin embargo, gran parte de la doctrina considera dicho texto como Constitución, si bien, con ciertos matices¹⁷.

Otra duda que alcanza a la doctrina a la hora de abordar el constitucionalismo español es determinar si encuadran o no este texto dentro de

¹⁶. En esta línea se encuentra Solé Tura, J., y Aja, E., *Constituciones ...* cit. p.12. "En resumen podemos decir que el texto aprobado en Bayona no es una constitución, puesto que no fue aprobado por los representantes de la nación española, y más bien debe considerarse una carta otorgada, dada por un rey extranjero que no consolidó su corona". Hace a su vez referencia mediante nota a pie de página cuando usa las palabras *Carta Otorgada*, señalando que la primera doctrina constitucional distingue entre Constitución, Constitución pactada y Carta otorgada, según el texto constitucional hubiera sido elaborado por una asamblea soberana, hubiera sido resultado de un acuerdo entre la asamblea y el monarca o hubiera sido concedida graciosamente por éste. En realidad dichas categorías precisan bastantes matizaciones, pero tienen un valor indicativo útil.

¹⁷. Así, Sevilla de Andrés, D., *Constituciones y otras leyes y Proyectos Políticos*, Tomo I, Madrid, 1.969, p. 9, señala: "En la cronología de nuestras leyes modernas, es decir, después de la Revolución Francesa, puede uno preguntarse si debe figurar el Estatuto de Bayona. Yo creo que sí. En primer término porque no fue sólo proyecto, sino que tuvo cierta fuerza obligatoria, en la zona dominada por los franceses. Más valor tiene, a mi juicio, que se hizo con la colaboración de algunos españoles, y aunque convocado con arreglo al derecho francés de la época, la intervención de aquellos en aspectos muy importantes el -título de las Colonias, por ejemplo- pueden servir para adivinar un pensamiento político con cierto eco posterior". Por su parte, Jiménez Asensio, R., *Apuntes para una historia del constitucionalismo español*, Zarautz, 1.992, p. 39. Señala que: "... se puede decir que el Estatuto de Bayona sí que tiene -aunque sea en pequeña medida- una importancia que no se puede obviar. En efecto -tal como reconocieron Aja y Solé Tura-, su influencia como motor desencadenante del constitucionalismo posterior es una de sus características más relevantes".

sus obras. Algunos autores deciden no incluirlo por varios motivos, entre otros, por su origen afrancesado, o por no reflejar la realidad del pueblo español¹⁸

Si tuviéramos que formular un juicio acerca del Estatuto, diríamos que técnicamente, deja mucho que desear en la ordenación de los poderes, explicable por el deseo napoleónico de no encontrar en la legislación una traba que limitase el ejercicio de su poder. Incluso se podría afirmar que no hubiera podido introducir el constitucionalismo en España al faltarle la mejor de las calidades: el afecto del pueblo, quien no estaba con los afrancesados, puesto que sólo los veía como invasores.

Además, hay que incidir en su cortísima vigencia, puesto que tan sólo duró varios días -trece-, toda vez que la fecha de su aprobación en Bayona data de 8 de Julio de 1.808 y fue suspendido, tras la batalla de Bailén, el 21 de Julio de 1.808.

Pero hay que destacar que estas medidas no pueden ser consideradas propias del liberalismo español, sino que su autor es el liberalismo francés. Su estudio se debe enfocar no tanto desde el punto de vista de su origen, sino desde el hecho objetivo del lugar de aplicación de tales normas.

¹⁸. En este sentido se ha pronunciado, entre otros, Sánchez Agesta, L., *Historia del* , cit. . La simple lectura del índice basta para corroborar la afirmación anterior, puesto que, si bien en el propio título se menciona la fecha de 1.808, no presenta en su obra una atención precisa de dicho texto en comparación con el resto de las Constituciones estudiadas en el presente libro. O también, Villarroya, T. J., *Breve historia del Constitucionalismo Español*, Madrid, 1.988, p. 10. "En el presente estudio prescindiremos del examen de la Constitución de Bayona de 1.808, por su origen afrancesado, por la huella prácticamente nula que ha dejado en nuestro Constitucionalismo y porque su vigencia resultó dudosísima y, en todo caso, muy limitada en el tiempo y espacio"

II. LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN EL ESTATUTO¹⁹

1. INTRODUCCIÓN: VALORACIÓN DEL HECHO RELIGIOSO POR NAPOLEÓN.

El Clero, en la época de los Borbones, veía cómo se perdía gran parte de sus prerrogativas y exenciones estableciéndose un Concordato, pero, a pesar de todo, aún conservaba enormes riquezas, quizá el cuarto del suelo cultivable y una gran influencia sobre la masa general del pueblo, por los sentimientos religiosos de éste y por el temor al Santo Oficio. Carlos IV obtuvo del Papa el derecho a vender un séptimo de bienes eclesiásticos, sin disminuir los impuestos, que ya les gravaban (medias annatas, diezmos, excusado)²⁰.

En la sociedad española el fenómeno religioso a finales del Siglo XVIII y comienzos del XIX tenía un gran protagonismo. No hay más que recordar la importancia del clero en la vida española²¹. Esta influencia social se plasma

¹⁹. El texto del Estatuto está tomado de Hervada, J., y Zumaquero, J.M., *Textos Constitucionales Españoles*, Pamplona, 1980, (Si no se dice nada, los textos constitucionales serán tomados de esta fuente), aunque existen otras obras de recopilaciones de textos constitucionales como, entre otros: Sevilla de Andrés, D., *Constituciones y otras ...*, cit.; Tierno Galván, E., *Leyes políticas españolas fundamentales (1.808 - 1.936)*, Madrid 1.984; Garrido Falla, F., con la colaboración de Gil Robles, J.M., y otros, *Leyes políticas de España*, Madrid, 1.969.

²⁰. En este sentido, y para un mayor detalle puede verse Sanz Cid, C., *Constitución ...* cit. p. 22.

²¹. Herr, R., *España y la revolución del siglo XVIII*, Madrid 1.971. Y Vélez, R. de., *Preservativo contra la irreligión o los planes de la filosofía contra la Religión y el Estado, realizaados por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napoleón en la conquista de España, y dados a luz por algunos de nuestros sabios en perjuicio de nuestra patria*, Madrid, 1.825. pp. 102-103. "El que sabe a fondo el carácter del pueblo español... , conocerá que para él ha tenido más influjo el sermón o el consejo de (continúa...)"

necesariamente en el Derecho mediante los documentos de la época, siendo a este respecto el mejor exponente el texto de Bayona -sin tener en cuenta la Novísima Recopilación de las Leyes de España-.

A este respecto, resulta interesante lo escrito por Sanz Cid, quien encauza el confesionalismo de dicho texto por la vía del deseo de Napoleón de ganarse las simpatías de la Iglesia, y de la nobleza española. Pero además es necesario traer a colación lo manifestado antes, es decir, que no hubiera sido posible, o cuando menos nada conveniente políticamente, en base a las circunstancias de la época, una constitución no confesional.

Afirma Laboa²² que Napoleón ya aprendió en Francia que la religión podía resultar útil y que era más conveniente protegerla que perseguirla. En su concepción de una nueva sociedad, los sacerdotes continúan siendo un grupo de presión paralelo a la política y a los maestros, enseñando al pueblo a mantenerse dóciles y respetuosos con el poder constituido, incluso en situaciones sociales y económicas difíciles. Con el fin de evitar veleidades de autonomía, Napoleón prohibió a la Iglesia la posesión de bienes y asalarió a sus ministros, equiparándolos, de hecho, a los funcionarios de la administración central.

Sin embargo, y pese a ese deseo de Napoleón, la Iglesia en este período, representó un papel muy importante no sólo por su intervención activa en la Guerra de la Independencia²³, sino también por su frontal oposición al régimen

²¹(...continuación)

un fraile o clérigo que todas las amenazas del Gobierno, sus proclamas y sus órdenes"

²². Laboa, J.M., *Iglesia y Religión en las Constituciones Españolas*, Madrid, 1981, p. 9.

²³. Revuelta González, M., *La Iglesia española ante la crisis del Antiguo régimen -1808-* (continúa...)

invasor, y ello a pesar de los esfuerzos de los franceses y afrancesados de utilizar la religión católica como un pilar necesario para asentar el nuevo orden político e instaurarse en el poder en España.

2. LA CONFESIONALIDAD: EL ARTÍCULO I

Consecuentemente con el valor que tenía para el pueblo español "lo religioso", y de forma especial la Iglesia Católica, Napoleón hizo del Estatuto un texto confesional.

La confesionalidad de este texto aparece contenida en su artículo I. Sin embargo, ya el propio Preámbulo contenía de forma muy significativa la confesionalidad de esta época, donde el Derecho como reflejo de la sociedad por un lado, y la Religión por otro, aparecían íntimamente relacionados. Por ello, no resultaba una simple casualidad que el Título Preliminar del Estatuto comenzara con la siguiente invocación:

"En el nombre de Dios todopoderoso:"

Se trataba de un esfuerzo de los autores para significar que este nuevo orden a imponerse a los españoles, contra su voluntad general, provenía de Dios a efectos de obtener el apoyo de los que se oponían usando la religión católica como nexo de unión.

²³(...continuación)

1.833-, en *Historia de la Iglesia en España*, dirigida por García-Villoslada, R., Madrid, 1.979, pp. 8-14.

De cualquier forma, no se debe olvidar que, como es conocido, Carlos IV puso como condición indispensable para abdicar que la nación española continuara siendo católica, pero bajo nuestro punto de vista, aunque no hubiese determinado este requisito, el Estatuto lo habría señalado, por lo que quizá se puede afirmar que se trató de una exigencia formal, dado que materialmente se ha determinado como Napoleón no hubiera dudado en establecer estos términos, puesto que bajo la unidad religiosa resultaba más fácil la unidad política²⁴.

Como prolongación de las ideas contenidas en el Preámbulo, el texto dispositivo comenzaba reiterando la confesionalidad del nuevo orden. Y tal era la importancia de la religión en el nuevo orden que el primer artículo del Estatuto era el que aparecía dedicado a la religión, abriendo el Título I, bajo el nombre "De la religión":

Artículo I: *"La religión católica, apostólica y romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la nación: no se permitirá ninguna otra"*

Analizando este artículo, se verifica cómo, por una parte, se delimitaba que tipo de religión era la oficial del Reino para diferenciarla de cualquiera otra, mediante el uso de los adjetivos, apostólica y romana. Y el contenido territorial

²⁴. Resulta oportuno traer a colación lo manifestado por Pérez Serrano, N., *Tratado de derecho político*, Madrid, 1.976, p. 112. , sobre las teorías respecto al factor característico de la Nación con respecto al factor religioso, literalmente señala: "Un tratadista católico, el padre Izaga, ha reconocido que la unidad religiosa no tiene hoy influencia decisiva, porque el espíritu positivista y descreído prescinde de la idea religiosa como factor principal de asociación política. ... Como afirma Hauriou, la convivencia es más fácil entre hombres que profesan creencias religiosas de carácter análogo, siquiera no respondan a una misma ortodoxia escrita, y por el contrario la conciliación entre confesiones muy dispares resulta difícil, y puede ser obstáculo serio para la formación de una conciencia nacional común. ..."

aparecía también perfectamente delimitado, no se circunscribía únicamente a España, sino que hacía referencia a todas las posesiones españolas de forma genérica, no dando así una lista o catálogo cerrado de ellas. Esto hay que relacionarlo no sólo con los dominios que tenía España, sino que es necesario señalar que el Rey de España era hermano de Napoleón, quien estaba en contienda con prácticamente toda Europa y tenía bajo su dominio gran cantidad de territorios. Y por otra parte, concluía con una afirmación categórica "no se permitirá ninguna otra", con lo cual excluía la práctica de cualesquiera otras religiones, y lo hacía utilizando expresiones determinantes, de forma que el Estado no sólo se declaraba confesional, prohibiendo la exteriorización de otros cultos, sino que también, incluso calificaba de forma indirecta a la religión católica como la única verdadera, según los autores del Estatuto.

Esta férrea regulación, representada por la negación tajante de todo atisbo de libertad religiosa manifestada sobre todo, por la coletilla final del artículo I: "*... no se permitirá ninguna otra*", no era acorde al espíritu liberal de las demás disposiciones contenidas en el Estatuto relativas a otros derechos fundamentales, y es desde esa comparación donde se puede afirmar que ese artículo se contenía no por convicción de sus autores, sino para lograr el apoyo de la Iglesia, y junto a ella, el de los católicos²⁵.

El Estado voluntariamente estaba prestando un acto de fe para el cual era materialmente incompetente, de suerte que se convertía en paladín de la religión católica, como en los siglos anteriores, y quizá por intereses que no aparecían escritos en el artículo I del texto, tal y como se ha señalado.

²⁵. En este mismo sentido, y a mayor abundamiento veasé Sanz Cid, C., *La Constitución* ..., cit. p. 38.

3. CONSECUENCIAS DE LA CONFESIONALIDAD

Producto de esa férrea declaración confesional, el Estatuto recogía diferentes disposiciones coherentes con esa idea en otros artículos, como:

A) SUCESIÓN DE LA CORONA

En la sucesión de la Corona no podía faltar la justificación divina. Su regulación se efectuaba en el Título II, bajo la denominación "De la sucesión a la Corona". De entre sus artículos, presenta especial interés el artículo IV.

"En todos los edictos, leyes y reglamentos, los títulos del Rey de las Españas serán, D. N. por la gracia de Dios y por la constitución del estado, Rey de las Españas y de las indias"

La ideología que inspiraba dicha disposición no era nueva, su fuente se situaba en el Antiguo Régimen. Se trataba de la ideología absolutista, donde los reyes eran tal, por deseo divino, por gracia de Dios, y el único que tenía poder para deponer reyes era el propio Dios²⁶

²⁶ García Gárate, A., *Del hieocratismo medieval al liberalismo*, Cuenca, 1985, pp. 66-68. Afirma que: "El regalismo encontrará su mayor apoyo doctrinal en el llamado *Derecho Divino de los Reyes*. Consistía en una modificación del viejo principio cristiano del origen divino de toda potestad. Para defender su poder frente a las teorías que intentaban limitarlo, los reyes defienden que su autoridad la reciben directamente de Dios, sin intermediarios. Esta teoría popular, que encuentra su paralelismo en Bodin, venía a reforzar y justificar el poder absoluto del monarca. A los ciudadanos les correspondía en contrapartida, una obediencia ciega. La rebelión contra el rey, por lo tanto, un acto (continúa...)

B) EL JURAMENTO

Siguiendo con este orden de ideas del Antiguo Régimen, otra evidente manifestación la constituía el juramento que se imponía al rey, bien para acceder al trono, o bien al cumplir la mayor edad.

El artículo V señalaba: *"El Rey, al subir al trono o llegar a la mayor edad, prestará juramento sobre los Evangelios, y en presencia del Senado, del Consejo de Estado, de las Cortes y del Consejo Real, llamado de Castilla".*

Este juramento debía prestarse conforme a un determinado cauce, o formalismo, que estaban claramente determinado en el texto, en su Artículo VI:

*"La fórmula del juramento del Rey será la siguiente:
Juro sobre los santos evangelios respetar y hacer respetar nuestra santa religión, observar y hacer observar la constitución, conservar la integridad y la independencia de España y sus posesiones, respetar y hacer respetar la libertad individual y la propiedad y gobernar solamente con la mira del interés de la felicidad y de la gloria de la Nación española"*

El juramento, como es sabido, consiste en poner a Dios por testigo, pero aquí se resaltaba aún más su contenido, puesto que se juraba ante los Santos Evangelios y ante nuestra Santa Religión, además del resto de las expresiones tan significativas señaladas. Debe observarse que el pronunciamiento sobre los Santos Evangelios y sobre la Santa Religión se anteponían incluso al propio

²⁶(...continuación)

sacrilego, contrario al respeto y fidelidad que se le debe y que no puede ser alterado bajo ninguna causa ...".

juramento de la Constitución, o de la independencia de España, o de sus posesiones o de la libertad individual²⁷.

En cuanto a la formulación del juramento, lo encontramos publicado en la Gaceta de Madrid²⁸, y se señala que *"... prestó S.M. el juramento prescrito por la constitución en manos del Ilmo. Sr. Arzobispo de Burgos sobre los santos evangelios, y todos los individuos de la junta prestaron en seguida el de fidelidad a su nuevo Soberano. ..."*

C) SERVICIOS DE LA CASA REAL

Dentro de los servicios de la Casa Real, la asistencia religiosa estaba configurada como un servicio más. De hecho, el Estatuto, en su artículo XXV, dentro del Título V "De los oficios de la Casa Real" recogía, y en el primer lugar de la lista, la figura el Capellán mayor²⁹

²⁷ Un reciente trabajo ha puesto de relieve la importancia que tenía el Juramento en nuestros textos constitucionales. Aunque, sin embargo, obvia el juramento del Estatuto de Bayona, debido a su efímera vigencia. Lorente Sariñena, M., El Juramento Constitucional, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, Madrid, 1995, pp. 585-632.

²⁸ Gaceta de Madrid de 13 de julio de 1808, pp. 795-797.

²⁹ Dicho art. XXV señalaba: "Los jefes de la casa real serán 6, a saber:

- Un Capellán mayor;
- Un mayordomo mayor;
- Un camarero mayor;
- Un caballerizo mayor;
- Un montero mayor;
- Un gran maestre de ceremonias"

El análisis de este artículo nos demuestra como el legislador configuraba este servicio para la Casa Real con la misma importancia que tenía en el Antiguo Régimen, y en consecuencia lo anteponía a cualquier otro del catálogo que presentaba en dicho artículo.

D) EL MINISTERIO DE SERVICIOS ECLESIAÍSTICOS

Un reflejo más de la confesionalidad fue la creación de un Ministerio de Servicios Eclesiásticos, en conformidad con el título VI del Estatuto, en su Artículo XXVII, donde se disponían nueve ministerios³⁰.

El Rey ostentaba la potestad de reunir a los ministros cuando así lo tuviera por conveniente, si bien se entendía que esta disposición se refería a los ministerios más importantes. A juicio de los autores del Estatuto, y conforme se determinaba en el artículo XXIX³¹, de entre todos ellos, uno era el Ministro de Negocios Eclesiásticos.

Una vez expresada su creación, hay que detenerse en la búsqueda de los motivos que la impulsaron. Aparentemente surgía para encauzar los asuntos del

³⁰. Artículo XXVII: "Habrá 9 ministerios. a saber:

- Un ministerio de justicia;
- Otro de negocios eclesiásticos;
- Otro de negocios extranjeros;
- Otro de lo interior;
- Otro de hacienda;
- Otro de guerra;
- Otro de marina;
- Otro de Indias;
- Otro de policía general".

³¹. Artículo XXIX: "El Rey podrá reunir, cuando lo tenga por conveniente, al ministerio de negocios eclesiásticos al de justicia, y al de policía general al de lo interior."

clero en España dentro de un ministerio autónomo, muy cualificado y especialista en dichas cuestiones. Sin embargo, tal y como se pudo verificar, realmente no obedecía su creación a motivos técnicos o de mejor funcionamiento de lo que podíamos llamar servicios religiosos. Por el contrario, su razón de ser era la de construir una pieza clave para las reformas que en la Iglesia quería introducir el nuevo orden político francés. Muestra clara de esta afirmación eran los conocidos Decretos de Chamartín -que se estudian en el presente Capítulo-, puesto que a pesar de la confesionalidad formal, se pretendía una gran reforma de la Iglesia en España. Sin embargo, su aplicación práctica fue nula, puesto que, debido al escaso tiempo de vigencia de este texto, muy pocas funciones pudo atesorar y poco o nada llegó a tratar y decidir.

A pesar de todo, sí constituía una novedad importante en nuestro ordenamiento jurídico introducida por el liberalismo francés.

Las funciones correspondientes a este ministerio junto con otras nuevas en función de las exigencias sociales- fueron desarrolladas posteriormente en el Derecho español durante todo el Siglo XIX, pero nunca desde un ministerio autónomo, quizá por no aceptar lo preceptuado en el texto del invasor. Nuestro ordenamiento jurídico situó estas funciones dentro del Ministerio de Gracia y Justicia, en algunas ocasiones de forma directa, y en otras mediante la creación de dependencias, comisiones y otros órganos encargados del conocimiento del fenómeno religioso católico³².

³² Este Ministerio de Negocios Eclesiásticos, nunca llegó a funcionar, pero la idea de establecer un Ministerio para encauzar todos asuntos de la Iglesia en España, (en sentido amplio abarcando desde sus bienes, las piezas vacantes, sus dotaciones, y muchos más extremos), aparecía ya en nuestro Derecho y se encontrará quizá con más fuerza e importancia tras la desamortización. Esa labor se encauzaba directamente dentro del Ministerio de Gracia y Justicia, tal y como se detallará en la presente investigación. Muestra de ello, se puede señalar que, incluso en nuestros días donde el Estado no es (continúa...)

E) COMPOSICIÓN DE LAS CORTES. EL ESTAMENTO DEL CLERO

En la composición de las Cortes se volvía a aludir a la confesionalidad del Estatuto, mediante el artículo LXI que abría el Título IX, "De las Cortes". Mencionaba expresamente que las Cortes se dividían en tres estamentos, uno de ellos estaba formado por el clero, y éste se colocaba a la derecha del trono³³.

El artículo siguiente configuraba el número de RR. Obispos y M. RR. Arzobispos que formaban este estamento, siendo este de veinticinco. Coincidió exactamente con el número de integrantes del estamento de la nobleza³⁴.

³²(...continuación)

confesional, el Ministerio de Justicia continúa desempeñando un importante labor en las relaciones con las confesiones religiosas, y así se señala como la Comisión Asesora de Libertad Religiosa se encuentra encuadrada en él.

³³. Artículo LXI: Habrá cortes o juntas de la nación compuestas de 172 individuos, divididos en 3 estamentos, a saber:

El estamento del clero;

El de la nobleza;

El del pueblo,

El estamento del clero se colocará a la derecha del trono, el de la nobleza a la izquierda, y enfrente el estamento del pueblo".

³⁴. Así se disponía en los artículos LXII: "El estamento del clero se compondrá de 25 arzobispos y obispos", y por su parte el artículo LXIII: "El estamento de la nobleza se compondrá de 25 nobles, que se titularán grandes de cortes". Por su parte el estamento del pueblo se componía de 122 individuos, tal y como señalaba el artículo LXIV: "El estamento del pueblo se compondrá:

1º De 62 diputados de las provincias de España e Indias;

2º De 30 diputados de las ciudades principales de España e islas adyacentes;

3º De 15 negociantes o comerciantes;

4º De 15 diputados de las universidades, personas sabias, o distinguidas por su mérito personal en las ciencias o en las artes".

En el artículo LXV se reflejaba como obtenían la condición de "individuos de las Cortes", y asimismo la pérdida de tal condición³⁵

La creación de un estamento del clero no suponía novedad alguna, puesto que esa idea venía directamente desde el Antiguo Régimen.

F) OTRAS REFERENCIAS AL ESTATUTO DEL CLERO

Dentro del texto, existían otros artículos que hacían mención también al fenómeno religioso, que si bien, presentaban un interés menor que los anteriores, sí contenían detalles que deben ser señalados en el presente:

El artículo CXI establecía: "Los diferentes grados y clases de la nobleza actualmente existentes serán conservados con sus respectivas distinciones: aunque sin exención alguna de las cargas y obligaciones públicas, y sin que jamás pueda exigirse la calidad de nobleza para los empleos civiles ni eclesiásticos. ..."

Se trata de una regulación que podría calificarse como "populista", puesto que obedecía al principio de igualdad, en relación con el acceso a los cargos civiles y eclesiásticos.

Este principio de igualdad se recogía, tal y como determinaba el artículo CXLI, tan sólo para los españoles, de suerte que para acceder a cargos civiles o eclesiásticos era necesario haber nacido en España o haberse nacionalizado

³⁵ El Artículo LXV señalaba que: "Los arzobispos y obispos que componen el estamento del clero serán elevados a la clase de individuos de cortes por una cédula sellada con el gran sello del estado; y no podrán ser privados del ejercicio de sus funciones sino en virtud de una sentencia dada por los tribunales y en forma legal"

español³⁶.

Este artículo era muestra de la soberanía del Estado y se extendía dentro de las fronteras del reino quedando reservados los empleos eclesiásticos para los nacionales.

Como precedente de los futuros textos constitucionales españoles, ya en este momento, se verificó la intervención de clérigos en la redacción del texto³⁷, como el Arzobispo de Burgos; Fr. Miguel de Acevedo, Vicario general de San Francisco; Fr. Jorge Rey, Vicario General de S. Agustín; Fr. Agustín Pérez de Valladolid, general de San Juan de Dios.

III. DESARROLLO LEGISLATIVO DEL ESTATUTO.

El Estatuto de Bayona buscaba el apoyo de la Iglesia mediante las disposiciones señaladas. Sin embargo, y por contra, nos encontramos realmente los deseos de los invasores sistematizados mediante los Decretos de Chamartín, donde aparecían, entre otras, las siguientes medidas: la reforma de la Iglesia y la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Y todo ello a pesar de la declaración confesional y sus reflejos en el texto señalados.

³⁶. El artículo CXLI señalaba: "Ninguno podrá obtener empleos públicos, civiles y eclesiásticos si no ha nacido en España, o ha sido naturalizado".

³⁷. Solé Tura, J., y Aja, E., *Constituciones ...*, cit. p. 10. afirman: "La asamblea de Bayona, debería estar formada por cincuenta nobles, cincuenta eclesiásticos y cincuenta representantes del pueblo, pero sólo acudieron 65 personas, en su mayoría nobles, a las que se añadieron algunos españoles residentes en Francia. La asamblea, presidida por Azanza, discutió varios problemas y aprobó el proyecto de Constitución presentado por Napoleón el 7 de julio de 1.807. Había sido redactado por M. Esmerard, un francés residente en España, y fue revisado por Murat y el mismo emperador"

Quizá, antes de comenzar con el estudio de las disposiciones emanadas en desarrollo de este Estatuto, conviene previamente exponer cuales eran las ideas al respecto de Napoleón, puesto que, como se ha señalado, al llegar a España deseó ganarse las simpatías de la Iglesia y de la nobleza española. Dichas ideas aparecían contenidas en una carta dirigida al pueblo de Madrid por el propio Napoleón, en la cual se contestaba a otra anterior firmada por el Ayuntamiento, el clero, nobleza y Diputación³⁸. En la carta firmada por Napoleón se decía literalmente: *"He conservado las órdenes religiosas cercenando el número de los frailes. No hay hombre sensato que no conozca que era demasiado crecido su número. Los que han sido llamados por vocación permanecerán en sus conventos. Por lo que respecta a los demás cuya vocación era poco sólida, y determinada por consideraciones mundanas, ya les he asegurado su existencia en el estado eclesiástico secular. De lo sobrante de los bienes de los conventos he proveído ya para acudir a las necesidades de los curas de esta clase que es la más interesante y la más útil del clero. He abolido ese tribunal contra el cual estaban reclamando el siglo y la Europa. Los sacerdotes deben guiar las conciencias; pero no deben ejercer jurisdicción alguna exterior y corporal sobre los ciudadanos"*

Una vez expuesto lo anterior, resulta oportuno, detallar el contenido de las más importantes disposiciones aprobadas en su desarrollo, pero no por su orden cronológico, sino por las disposiciones que contenían en relación a las diferentes materias. De cualquier forma, para verificar consecuentemente estas normas jurídicas, y sobre todo su eficacia, no hay que olvidar la corta vigencia del régimen afrancesado junto con la existencia de una guerra dentro de las fronteras españolas, así como el rechazo social del pueblo español a toda disposición jurídica emanada del Gobierno invasor. Esta oposición no impidió que su concreta política desamortizadora fuera continuada por el liberalismo español, de

³⁸ *Gaceta de Madrid de 16 de diciembre de 1808*, pp. 1.612 a 1.616.

suerte que la abolición del Tribunal de la Inquisición con la consiguiente venta de sus propiedades, la reducción del número de conventos y de los ministros de la Iglesia, la potenciación de la secularización, la abolición de las órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales, la incautación de tierras y heredades, serán medidas que encontraremos más tarde en los gobiernos liberales españoles, pero que en todo caso, se intentaron llevar a cabo por el gobierno afrancesado.

1. DESAMORTIZACIÓN

En esa carta referenciada antes, ya se observaban alusiones a la línea desamortizadora que estaba siguiendo José Bonaparte. Ésta hacía referencia inequívoca al primer Decreto desamortizador de fecha de 4 de diciembre de 1.808³⁹. Las medidas que contenía básicamente consistían en:

a) La disminución del número de conventos existentes en España a una tercera parte, reuniendo a los religiosos de una misma orden en una sola casa.

b) La reducción del número de religiosos existentes en España a una tercera parte, no admitiéndose novicios hasta que se lograra dicha reducción.

c) Se recogían facilidades para la secularización de religiosos, llegando a establecerse incluso pensiones vitalicias para los que abandonaron las Órdenes religiosas con la cuantía de 3.000 reales, (esta pensión superaba incluso a las percepciones económicas de los que continuaban con su ministerio). Y como no,

³⁹. *Gaceta extraordinaria de Madrid de 11 de diciembre de 1.808*, p. 1.563.

d) La venta de los conventos suprimidos.

Se señalaba dentro del Decreto hasta el destino de las cantidades que se recaudarían por estas ventas, donde se disponía que una parte de estos ingresos se cedería al clero para que estableciera la congrua de los curas párrocos en 2.500 reales⁴⁰, y para sufragar a los religiosos secularizados. La otra parte, bastante cuantiosa, se emplearía en su mitad para extinguir deuda pública, y la otra mitad para sufragar gastos de guerra.

Este Decreto será completado por otros, que en todo caso, respetaron las anteriores disposiciones e incluso aumentaron las medidas en contra de los intereses de la Iglesia Católica.

De entre ellos, quizá el más importante y expeditivo fue el Decreto de 18 de agosto de 1.809⁴¹, puesto que establecía taxativamente que:

a) Todas las órdenes regulares, monacales y clericales, existentes en los dominios de España quedaban suprimidas.

b) Sus miembros debían abandonar sus residencias eclesiásticas en un plazo de 15 días e incluso vestir hábitos seculares.

c) Dichos miembros deberían volver a sus pueblos de origen, recogándose incluso el supuesto específico de la imposibilidad de regresar. En este caso, era

⁴⁰. Se puede constatar como las normas reguladoras de la financiación de la Iglesia a partir del texto constitucional de 1.837 señaladas en el presente, recogían la cuantía de 3.300 reales casi 30 años después. Lo que supone un aumento en las retribuciones del clero de menor jerarquía de 800 reales en casi 30 años.

⁴¹ *Gaceta de Madrid de 20 de agosto de 1.809*, pp. 1.043 y 1.044.

el propio Ministerio de asuntos eclesiásticos el que señalaba el lugar de residencia. Para éstos, se dotaba la pensión vitalicia descrita⁴².

d) Se fiscalizaban los bienes eclesiásticos, de suerte que, se decretaba incluso "responsabilidad mancomunada", desde los Prelados hasta los individuos de los conventos, para los casos de ocultaciones de bienes pertenecientes a sus respectiva casas.

e) Sobre las rentas que percibían los conventos por arriendos, censos u otros, se determinaba que no fueran abonadas por los deudores, y que fueran retenidas hasta determinar la parte que iría a parar al Tesoro y la que correspondería a las casas de religiosos.

f) Se decretaba que esos eclesiásticos serían empleados en conformidad con sus habilidades y méritos, pero siempre fuera de sus conventos.

Por citar algún otro Decreto, se debe traer a colación también el Decreto de 27 de septiembre de 1.809⁴³. Contenía que las congregaciones denominadas con el nombre de *Tercera Orden y sus institutos, y cualesquiera otros, quedaban suprimidos en el mismo sentido que el decreto anterior, y sus bienes al igual que los de los conventos suprimidos, se aplicaban a la nación.*

Sin embargo, es necesario señalar que estas medidas se aceleraron o mutaron por el hecho objetivo de la Guerra de la Independencia, de suerte que se ocuparon diversos edificios de la Iglesia para ser usados como acuartelamientos,

⁴². Las pensiones vitalicias se regularon con más detenimiento en el Decreto de 20 de julio del mismo año. Curiosamente, a pesar de tener fecha anterior, se publica también en la *Gaceta de Madrid de 20 de agosto de 1.809*, p. 1.044.

⁴³. *Gaceta de Madrid de 27 de septiembre de 1.809*, pp. 1.196.

hospitales, etc ... y además se produjeron los primeros saqueos e incluso quemas de conventos⁴⁴.

Otro extremo importante en este capítulo era la Deuda Pública, puesto que incluso en plena Guerra de la Independencia preocupaba al Gobierno. Muestra de ello lo constituía la exposición hecha a S.M. sobre la Deuda Pública de la nación, con los estados de ella, por su ministro de Hacienda, y leída en la primera sesión del Consejo de Estado⁴⁵, o bien el Real decreto de 9 de junio de 1.809⁴⁶ donde se disponía que todos los acreedores del Estado presentaran cuanto antes sus títulos de deuda. Tal y como ha señalado Artola, la pretensión de extinguir la deuda pública no constituía ninguna novedad en España y al igual que en épocas precedentes no se consideraba posible si no se recurría a la venta de bienes declarados, al efecto, nacionales⁴⁷. Resulta interesante la lectura de la Gaceta de Madrid, donde se pueden encontrar detallados los bienes desamortizados que se enajenaban y donde se señalaba no sólo su situación sino también el producto que generaban al año y su valor de adquisición⁴⁸.

⁴⁴ . Revuelta González, M., *La Iglesia Española* ..., cit. p. 17.

⁴⁵ Dicha exposición aparecía contenida en varios números de la *Gaceta de Madrid*, 2, 5, 6, 7 y 8 de octubre de 1.809, pp. 1.214, 1.226-1.227, etc ...

⁴⁶ *Gaceta de Madrid de 9 de junio de 1.809*, pp. 749.

⁴⁷ . Artola, M., en *La burguesía* ..., cit. p. 27.

⁴⁸ . Como ejemplo, valga citar el *Suplemento a la Gaceta de Madrid del 23 de octubre de 1.809*, pp. 1.301-1.304.

2. FINANCIACIÓN

Este epígrafe se limita a la perspectiva concreta de las dotaciones que el Estado de forma directa entregaba a algunos miembros de la Iglesia.

El Estado, si bien por una parte, había determinado en el Decreto de 20 de julio de 1.809 la supresión señalada de las comunidades religiosas y la restitución junto a sus familias de los eclesiásticos, por otra les dispensaba sustento económico mediante el Real decreto de 20 de agosto de 1.809⁴⁹. Éste disponía por parte de la Hacienda Pública el pago puntual de las pensiones. Éste, se abonaba en dos plazos iguales, y en el lugar donde se encontraba el domicilio de los beneficiarios. Para ello simplemente debían los eclesiásticos presentar "fe de vida dada por un escribano", y asimismo, debía aprobarse por el cura párroco del lugar de residencia y por el respectivo Alcalde.

El pago corría a cargo de los municipios, y después se descontaba de las contribuciones de la provincia. Sin embargo, en las capitales donde existían tesorerías del ejército y rentas, los religiosos cobraban directamente de éstas.

Merece especial atención la coletilla final que recogía a modo de cierre esta disposición, puesto que con la concesión económica pretendía continuar con el pedimento de apoyo a favor del Gobierno afrancesado. Literalmente recogía que: "El asunto es que desengañados por fin muchos de aquellos individuos de sus preocupaciones, conozcan todos por los efectos la Justicia del Gobierno".

⁴⁹. *Gaceta extraordinaria de Madrid de 20 de agosto de 1.809*, p. 1.044.

3. ENSEÑANZA

El influjo invasor quedaba patente en la enseñanza, puesto que una de las primeras medidas diseñadas en nuestro país, a este respecto, fue la importación del sistema educativo francés a España mediante la creación de colegios denominados "*liceos*", en virtud del Decreto de 30 de octubre de 1.809⁵⁰

Recogía la creación de los liceos en cada ciudad destinada a ser capital de intendencia. Y los edificios elegidos a este efecto eran "*los conventos que parezcan más a propósito*", siempre y cuando no existieran más edificios acondicionados para ello. Las enseñanzas a impartirse estaban también señaladas de forma expresa. La religión aparecía concebida formalmente en un segundo plano, puesto que por un lado, tanto el estudio del catecismo y los principios de historia de nuestra religión, como por otro lado, el capellán, no tenían el mismo trato que el resto de asignaturas y profesores.

Curiosamente, en esos liceos la inspección sobre las buenas costumbres y, sobre todo la religión, no recaía expresamente en ningún eclesiástico, sino que era atribución propia del Director, que podía ser seglar.

De forma anual, se preveía la celebración de una especie de fiesta donde las autoridades de la provincia, entre las que se encontraba el Obispo o el Arzobispo, examinaban a un grupo de alumnos del liceo seleccionado al efecto.

⁵⁰. Esta disposición, como era común en algunos Decretos de la época, se encuentra en varios números consecutivos de la Gaceta de Madrid, para ello, el legislador señalaba al final de las disposiciones contenidas en un número la expresión (Se continuará). *Gaceta de Madrid de 31 de octubre de 1.809*, pp. 1.335-1.336. *Gaceta de Madrid de 1 de noviembre de 1.809*, pp. 1.339-1.340. *Gaceta de Madrid de 2 de noviembre de 1.809*, pp. 1.343-1.344.

Muestra de la gran preocupación por el desarrollo de la enseñanza en España, incluso en estos momentos en que España estaba inmersa en la Guerra de la Independencia, fue la creación, mediante el Decreto de 1 de febrero de 1.811⁵¹, de una Junta consultiva de instrucción pública. Su función era reorganizar la enseñanza en España. Para ello se le encomendó la formación de un nuevo plan de "*educación pública*", junto a planes particulares para la reforma de las escuelas, colegios y cualesquiera otras clases de centros docentes.

Por lo que respecta al número de sus miembros, hay que señalar que eran diez personas, y todas eran de nacionalidad española.

Los eclesiásticos dentro del nuevo sistema de enseñanza perdían gran parte de su poder, puesto que la mayoría de los maestros designados para los liceos eran seculares, como se verificaba de los decretos aprobados para designar los nombres de los profesores⁵².

4. LIBERTAD DE IMPRENTA

Este derecho aparecía diseñado en el Estatuto como la cúspide de todo el entramado de derechos que contenía, puesto que se señalaba que pasados dos años después de haberse ejecutado lo contenido en el Estatuto se elaboraría una ley "... *hecha en Cortes.*", para dar contenido a ese derecho.

⁵¹. *Gaceta de Madrid* de 2 de febrero de 1.811, p. 131.

⁵². Entre otros, se pueden señalar, los decretos de 17 de octubre de 1.809, *Gaceta de Madrid* de 20 de octubre de 1.809, pp. 1.286-1.287.

Por ello, nunca llegamos a ver reflejado cual era la idea de este gobierno liberal con respecto a este derecho de imprenta. Sin embargo, a la vista de la regulación del resto de materias, cabe afirmar que en situación normal, es decir, sin acontecimiento bélico, quizá hubiéramos encontrado la primera regulación liberal en España de la libertad de imprenta.

Sí que se pudo observar una cierta regularización de algunas manifestaciones concretas de este derecho reflejadas en otros campos conexos, como fue en el control de las obras de teatro.

4.1 CONTROL DE OBRAS DE TEATRO

Como venía sucediendo, y sucederá posteriormente, las representaciones teatrales estaban sujetas a censura previa. En este momento histórico nos encontramos esa censura también, aunque surge la duda de si su razón de ser era para proteger al invasor de ataques mediante las representaciones teatrales, o para proteger otros bienes jurídicos, como el Gobierno, la Religión, el Monarca, etc... como se puede verificar del estudio de las diferentes disposiciones nacidas a tal efecto durante este Siglo XIX.

Nos referimos al Decreto de 31 de diciembre de 1.811⁵³, donde se contenía la obligatoriedad de la censura previa mediante la creación de *"una comisión encargada de examinar las obras dramáticas originales o traducidas"*.

⁵³. *Gaceta de Madrid de 1 de enero de 1.811*, p. 3.

5. EL ESTATUTO DEL CLERO

5.1 ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE NEGOCIOS ECLESIASTICOS

Ya se ha señalado que dicho Ministerio tanto por el corto lapso temporal que estuvo vigente, como por el acontecimiento bélico, estuvo muy limitado en sus funciones, y que por ello, poco o nada pudo disponer. Sin embargo, no fue obstáculo para que su labor se viera reflejada en algunos Decretos.

Las más importantes de sus funciones consistieron en potestades desisorias y consultivas. Un ejemplo de dicha tarea decisoria se verifica mediante el Decreto de 23 de enero de 1.811⁵⁴, en el que se establecía la necesaria aprobación de este Ministerio para conferir licencias para predicar y confesar.

Otro punto destacable en la labor de este Ministerio fue la aprobación y desarrollo de la abolición del derecho de asilo en las Iglesias. La disposición se acordó mediante el Decreto de 19 de octubre de 1.809⁵⁵. Se disponía que el derecho a la inmunidad dentro de los templos quedaba suprimido. Se trata de una disposición que, más que con motivaciones religiosas, tenía mayor relación con el desarrollo de la Guerra de la Independencia. Sin embargo, se debe resaltar la explicación que el legislador relata en el Decreto: *"... en un Estado bien constituido, y en una legislación ilustrada, ningún ciudadano debe ser autorizado ni tener arbitrio para substraerse del imperio de las leyes, y eludir su disposición*

⁵⁴. Gaceta de Madrid de 27 de enero de 1.811, p. 107.

⁵⁵. Gaceta de Madrid de 21 de octubre de 1.809, pp. 1.290-1.292.

en perjuicio de otros, y de la recta administración de la Justicia, prescrita y recomendada por todos los derechos; ..."

En lo relacionado con la desamortización, también tuvo un protagonismo importante, puesto que quedó habilitado, junto con el de Hacienda y el de Interior para determinar los bienes que pertenecerían a la nación. Dicha autorización aparecía contenida en el artículo IV del Decreto de 18 de agosto de 1.809⁵⁶

5.2 EL ARREGLO DEL CLERO: SU SITUACIÓN.

Se habían suspendido las provisiones a cualesquiera beneficios eclesiásticos, pero el problema principal venía de la mano de las disposiciones desamortizadoras citadas, y hacía referencia expresa a la colocación de los individuos del clero (ex-regulares), puesto que muchos de ellos no habían encontrado ubicación, toda vez que mediante el Decreto de 21 de agosto de 1.809⁵⁷ se les había prohibido la licencia de confesar y predicar.

En 1.811, se decidió dar alguna salida a la práctica real que había surgido, toda vez que aquellos continuaban en el ejercicio de tales licencias mediante autorización de los Ordinarios.

Mediante el Decreto de 23 de enero de 1.811 se determinaba que para el ejercicio de esas licencias se debería de contar con la autorización del Ministerio de Negocios Eclesiásticos. Y que dicha autorización se conferiría no a solicitud

⁵⁶ *Gaceta de Madrid de 20 de agosto de 1.809*, pp. 1.043 y 1.044.

⁵⁷ *Gaceta de Madrid de 23 de agosto de 1.809*, p. 1.061.

de los interesados, sino a petición del Ordinario donde tuvieran fijada su residencia.

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

LA CONSTITUCIÓN DE 1.812¹.

I. LA CONSTITUCIÓN DE 1.812

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de este texto constitucional aprobado en 1.812 se debe remontar algunos años atrás hasta la ocupación francesa de España, donde la convocatoria de Cortes surgía como idea para hacer frente a los problemas políticos planteados por la ausencia de los reyes.

Por lo que respecta al carácter de esta institución que había de representar a los españoles, los primeros escritos incorporaban, de forma explícita, dos principios revolucionarios de especial trascendencia política:

1º. El carácter nacional que debían de tener las Cortes, puesto que no planteaban la eventualidad de una participación en ellas de los antiguos reinos y provincias,

2º. Que la representación fuera proporcional a la población, fórmula que cerraba el camino a cualquier forma de representación estamental o territorial².

¹. Promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1.812.

². Artola, M. *La burguesía ...*, cit. pp. 34-35.

En un primer momento, la orden de su convocatoria surgía del propio Fernando VII mediante el Decreto de 5 de mayo de 1.808³. Sin embargo, tal y como ha señalado Artola⁴, la decisión de reunir Cortes se hizo pública en Sevilla por el Decreto del 22 de mayo de 1.810 que no contenía mayores precisiones en cuanto a su composición y poderes, puesto que dichas cuestiones fueron encomendadas a la Comisión de Cortes, formada por cinco miembros de la Junta Central y de la que Jovellanos se hizo elegir presidente.

Para un mejor funcionamiento de esa Comisión de Cortes se crearon, a propuesta de Jovellanos, varias Juntas que canalizaron los trabajos pertinentes. Cada una tenía independencia con respecto a las demás, con la sola obligación de elevar a la Comisión los proyectos relativos a las materias que tenía encomendadas. En total se crearon siete Juntas:

De ordenación y redacción.

De medios y de recursos extraordinarios.

De legislación.

De hacienda real.

De instrucción pública.

³ Suárez, F. *El proceso de convocatoria a Cortes, 1.808-1.810*, Navarra, 1.982, p. 31. Ha señalado como ese día 5 de mayo de 1.808, Fernando VII, y tras conocer los sucesos del 2 de mayo de Madrid, dispuso dos Decretos, uno dirigido a la Junta de Madrid ordenando el comienzo de las hostilidades, y otro al Consejo Real, y en su defecto a cualquier Chancillería o Audiencia no mediatizada por los franceses, y en él se decía que: "en la situación en que se hallaba, privado de libertad para obrar por sí, era su Real voluntad que se convocasen Cortes en el paraje que pareciese más expedito; que, por de pronto se ocupasen únicamente en proporcionar los arbitrios y subsidios necesarios para atender a la defensa del Reino, y quedasen permanentes para lo demás que pudiese ocurrir"

⁴ Entre otros, este extremo ha sido señalado por Artola, M. *La burguesía*..., cit. p. 35. Y Suárez, F. *El proceso de*..., cit. p. 25.

De materias eclesiásticas.

Y de ceremonial de Cortes.

A los efectos de la presente investigación, resulta necesario resaltar las labores de la Junta de materias eclesiásticas, donde todos los que la componían eran miembros del clero⁵. Sobre sus tareas, muy poco se conoce. Sin embargo, y como inicio, siguiendo a Suárez⁶, se puede afirmar que respecto a las demás fue un poco extraña, puesto que no respondía a ninguno de los apartados que en el artículo 3 del citado Decreto de 22 de mayo se habían indicado como objeto de mejoras, y en realidad, hoy se sigue sin conocer a qué se debió la iniciativa, ni tan siquiera quién la propuso. En todo caso, la reforma de la Iglesia no suponía en ese momento ninguna tarea perentoria, si se compara con otros trabajos del resto de comisiones, como los extremos relacionados con la guerra, la legislación y gobierno o la Hacienda.

Los asuntos que debía conocer dicha Junta de materias eclesiásticas han sido señalados por De Vélez⁷, y eran un total de veintiuno: 1. Del Romano Pontífice. 2. De los Obispos. 3. De los Concilios. 4. De los Cabildos de las

⁵. Tal y como ha señalado Suárez, F. *El proceso de ...*, cit. pp. 224. Los miembros de la Junta fueron: el canónigo de Jaén D. Francisco Castanedo como presidente; el deán de la Catedral de Sevilla D. Fabián Miranda como vicepresidente; D. Manuel Prieto, canónigo magistral de la misma iglesia; D. Vicente Blasco, canónigo de Valencia y rector de su Universidad; D. Joaquín Lorenzo Villanueva, Capellán de honor y predicador de S.M. y canónigo de Cuenca; D. Tomás Arias, canónigo de la Seo de Zaragoza; D. Segundo Calletano García, gobernador del Obispado de Jaén; D. Pedro Alvarez, maestreescuela de la Santa Iglesia Baza; el R. P. Maestro Fr. José de Jesús Muñoz, agustino, vocal de la Junta Superior de Córdoba; por último D. Gregorio Gispert, cura de la parroquia de San Lorenzo, de Murcia, como Secretario.

⁶. Ibidem, pp. 223-229.

⁷. Vélez, R. de., *Apología del Altar y del Trono, o historia de las reformas hechas en España en tiempos de las llamadas Cortes, e impugnación de algunas doctrinas publicadas en la Constitución, diarios y otros escritos contra la Religión y el Estado*. Tomo I. Madrid, 1.818, pp. 406-408.

Catedrales. 5. De las Iglesias Colegiatas. 6. Curas párrocos. 7. Clero secular. 8. Educación y Seminarios. 9. Culto divino. 10. De las Órdenes militares. 11. Órdenes religiosas. 12. Monacales y misiones. 13. Inquisición. 14. Establecimientos piadosos. 15. Juntas de caridad. 16. Cofradías y ermitas. 17. Rentas decimales. 18. Cámara eclesiástica, competencias y juicios eclesiásticos, y recursos de fuerza. 19. Espolios y cruzadas. 20. Inmunidad y subsidio. 21. Festividades.

Las consideraciones o conclusiones que adoptó quedaron sometidas a los Obispos para que fueran estudiadas por el Estamento del Clero. Puesto que, siguiendo a De Velez⁸, se puede afirmar que estos eclesiásticos convinieron:

1. que siendo los comisionados unos meros particulares, las materias discutidas se elevasen a los señores Obispos, para su aprobación de si convendría o no que se tratasen en el Concilio.

2. que, puesto que las Cortes debían convocarse en tres Estamentos, se pasasen al eclesiástico los trabajos, para que por ellos se propusiesen a los señores obispos.

3. que nada se variase de la disciplina general de la Iglesia en nuestro Concilio, sin consulta ni aprobación del Papa.

Tal era el modo de pensar de aquellos eclesiásticos. Que alguno de sus miembros disintiese no daba que temer, pero si podía hacer mucho daño después que las Cortes abrieron el camino de la reforma general⁹

⁸ Ibidem, pp. 405.

⁹ Esta consideración con el tiempo tendrá importancia, puesto que la modificación de la
(continúa...)

Volviendo a la Junta Central, una serie de acontecimientos marcaron su final, como los enfrentamientos con las de las provincias, y sobre todo la entrada en Andalucía de los franceses, el motín de Sevilla de 24 de enero de 1.810, o las persecuciones de algunos de sus miembros. Si bien, antes de su disolución, dicha Junta Central aprobaba dos disposiciones, una *Instrucción de fecha de 1 de enero de 1.810, por la que se dictaban los parámetros a observarse para la elección de los diputados a Cortes*¹⁰, y su última disposición el *Decreto de 29 de enero de 1.810, sobre la celebración de Cortes*¹¹. En dicha convocatoria se trataba de acomodar las exigencias del Antiguo Régimen, junto con algunas innovaciones también importantes; era el proyecto de Jovellanos¹².

⁹(...continuación)

Iglesia, o mejor dicho, el arreglo del clero, encontró voces desde dentro de la propia Iglesia en sus sectores más renovadores. Con el tiempo, ese comportamiento renovador fue cortado de raíz por el propio Monarca Fernando VII en su retorno absolutista. En este sentido, hay que destacar el *Real Decreto de 24 de mayo de 1.814 donde se mandaba a los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos que celaran en el cumplimiento de su alto ministerio, para que sus súbditos guardaran y observaran en sus acciones, opiniones y escritos la verdadera y sana doctrina, no permitiéndose que se hicieran asociaciones y ligas en perjuicio de la tranquilidad pública*. Este Decreto requería el apoyo de las altas jerarquías eclesiásticas para extirpar cualquier apoyo del clero al Nuevo Régimen, señalándose expresamente que los que se "apartaran de la verdadera y sana doctrina de la Iglesia" no fueran presentados en las ternas para curatos y beneficios eclesiásticos. Pero ese especial cuidado ideológico se manifestaba con igual fuerza también en la enseñanza. Como resumen, hay que significar que resultó una petición de apoyo para borrar las doctrinas que un segmento del clero había autorizado mediante su cooperación con el constituyente gaditano. Realmente era un sector muy determinado del clero, donde no estaban incluidas las altas dignidades, y que por otra parte nos hace ver dentro de la Iglesia personas comprometidas con el movimiento liberal. (*Decretos del Rey Don Fernando VII, Colección de Reales Resoluciones expedidas por los diferentes Ministerios y Consejos desde 4 de mayo hasta fin de diciembre de 1.814*. Tomo primero, Madrid, en la Imprenta Real, 1.816. pp. 26-28).

¹⁰. Puede consultarse dicha instrucción en Sevilla de Andrés, D. *Constituciones y otras Leyes y proyectos políticos de España*, Tomo I, Madrid, 1.969, pp. 69-80.

¹¹. *Ibidem*, pp. 81-85.

¹². Tal y como ha reflejado Palacio Atard, V. *La España del ...*, cit. p. 69. "... según el plan de Jovellanos, debieran componerse de una Cámara de diputados correspondientes (continúa...)

A esta Junta Central le sustituyó una Regencia compuesta por cinco miembros, y su presidencia cayó en manos de un eclesiástico, el Obispo de Orense. Esta Regencia, el 18 de junio de 1.810 rectificando los términos de la Junta para la convocatoria de Cortes, decidía que debían reunirse el 24 de septiembre de 1.810¹². Entre otros puntos de interés, dicho Decreto señalaba la convocatoria de las Cortes y su soberanía, incidía en la figura del Rey Fernando VII, y la anulación de su renuncia a la corona, etc ...

Dicha Regencia se inhibió de sus funciones, sobre todo en cuestiones decisivas. Por ese motivo, los liberales pudieron recuperar el poder aprovechando la primera Sesión de las Cortes, consiguiendo que el constituyente se asentara en una sola Cámara, enterrando así la pretensión de la Regencia de Cortes bicamerales.

Convocadas las Cortes, hay que detenerse en la personalidad, o en la identificación de los que habían sido llamados a dar forma al constituyente. Aunque, tras estudiar lo manifestado por varios autores, conviene manifestar que los números de los intervinientes no coinciden en opinión de unos autores y otros. A fin de reseñar su constitución, nos apoyamos en los datos señalados por Fernández Almagro¹³, quién afirma que participaron un total de 308 diputados.

¹²(...continuación)

al antiguo -estado general-, aunque con representación actualizada y ampliada a todo el cuerpo social de la nación, y una Cámara alta en la que hallarían asiento los brazos o estamentos privilegiados. ...". O también Comellas, J.L., Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1.812, en *la Revista de Estudios Políticos*, nº 126, Nov-Dic., año 1.962, Madrid, 1.963, p. 75.

¹³ Puede consultarse este Decreto en Sevilla de Andrés, D., *Constituciones y otras Leyes* ... cit, pp. 91-92.

¹⁴ Fernández Almagro, M., en *Los orígenes del régimen constitucional en España*, Barcelona, 1.976, p. 78. Otra clasificación que señala números diferentes de participación (continúa...)

con la siguiente clasificación social:

Noventa y siete eclesiásticos, de ellos tan sólo 5 Obispos¹⁵.

Unas ciento treinta y siete personas pertenecientes a profesiones liberales y funcionarios, conforme al siguiente detalle:

Setenta abogados.

Cincuenta y cinco funcionarios públicos.

Dieciséis catedráticos universitarios.

Cuatro escritores.

Dos médicos.

Cincuenta y seis nobles, -algunos de ellos militares-.

Quince propietarios.

Cinco comerciantes.

¹⁴(...continuación)

de diputados gaditanos la encontramos realizada por Solís, R. *El Cádiz de las Cortes*. La vida en la ciudad en los años 1.810 a 1.813, Madrid, 1.978, pp. 249-251. Ambas relaciones aparecen comparadas mediante la exposición de dos columnas paralelas por Fernández Segado, F. *Las Constituciones históricas españolas*, Madrid, 1.986. p. 65. A mayor abundamiento, vease Comellas, J.L., *Las Cortes de Cádiz ...*, cit. pp. 78-81.

¹⁵. A pesar de dicha nutrida participación activa de miembros de la Iglesia, ésta no se vió representada como Institución en las Cortes. Puesto que pese a ello, dará la espalda al sistema liberal y prestará su apoyo para el mantenimiento del Antiguo Régimen. A este respecto se puede traer a colación lo manifestado por Tello Lázaro, J.A. en *Las Constituciones Progresistas, en la Revista de Estudios Políticos*, nº 37, ene-feb, 1.984. Madrid, 1.985. p. 181. : "...El principio de soberanía nacional, como principio capital que había guiado la elección de los diputados y había de informar la posterior marcha de los debates, constituye la piedra de toque para explicar la postura de la Iglesia católica, representada como tal por su jerarquía, en la defensa del Antiguo Régimen ...".

Resulta muy llamativo el alto número de eclesiásticos -prácticamente un tercio- que se dieron cita en la composición de las Cortes¹⁶, junto con el elevado número de profesionales liberales, y por contra, en sentido negativo, se puede verificar como habría sido positivo que el sector correspondiente a la burguesía comercial hubiera sido más numeroso.

Tras estos guarismos, se puede afirmar que nos encontramos ante un constituyente representado no por el pueblo, ni las clases medias, sino por *las clases instruidas*, tal y como afirma Palacio Atard¹⁷: "... no opera según un consenso popular, sino según unos estímulos constituyentes compartidos por casi toda la clase política: la necesidad de una reforma institucional, aunque sobre las directrices concretas y su alcance, manifiesten pareceres discrepantes. El pueblo en general de toda España, no politizado, no instruido, no presta su consenso a la obra de Cádiz. La clase media silenciosa, tampoco participa en la acción política de Cádiz, ni la respalda". Sin embargo, en términos más generales, el origen popular de la Constitución aparece señalado por gran parte de la doctrina constitucionalista, en tanto y cuanto, que se elabora sin la participación del Rey ni la Regencia¹⁸.

¹⁶. En este sentido, ha afirmado Revuelta González, M. *La Iglesia española ...*, cit. p. 36.: "... Las Cortes de Cádiz no tuvieron nada de impías. ¿Cómo puede tildárselas de irreligiosas, cuando una tercera parte de sus componentes pertenecían al estado eclesiástico y comenzaban sus sesiones con la Misa de Espíritu Santo?. Salvo algún que otro diputado contagiado de volterianismo, el conjunto de los padres de la patria son buenos católicos, que se aferran a la religión de sus padres y desean una Iglesia liberada de sus defectos seculares. ..."

¹⁷. Palacio Atard, V. *La España del ...*, cit. p. 62.

¹⁸. En este sentido, y para un mayor detalle, entre otros, véase Villarroya, F. J. *Breve historia ...*, cit. pp. 12 y 13. O también, Sevilla de Andrés, D. La Constitución de 1.812, obra de transición, en *Revista de Estudios Políticos*, n° 126, Nov-Dic. año 1.962, p. 115, afirma: "... que La masa española se sentía ejemplo del mundo, como puede leerse en
(continúa...)

Los liberales tomaron el testigo de modernizar España bajo la propuesta de romper con el Antiguo Régimen, y así en la primera sesión de las Cortes de Cádiz, por medio de Conde Torreno se afirmaba la *Soberanía Nacional*.

A pesar de todo, en el constituyente de Cádiz confluían diversas tendencias representadas por diferentes apoyos o grupos políticos. En este sentido, ha señalado Artola como "... Los debates de las Cortes de Cádiz reflejaron la existencia de un antagonismo fundamental, que dio origen a la constitución de dos grandes bloques, que forman el núcleo originario del sistema de partidos. La naturaleza del conflicto que los separa -poder absoluto frente a división de poderes, sociedad estamental frente a sociedad clasista- es tan radical que no será posible encontrar ninguna solución política¹⁹.

Sobre el carácter de esta revolución, que al filo de la Guerra de la Independencia se produjo en nuestro país y cuya plasmación se encuentra en las medidas legales adoptadas por los constituyentes de Cádiz durante los años 1.810 a 1.813, ha señalado Pérez Ledesma que "no hay unanimidad entre los historiadores a la hora de analizarlo, pero que la interpretación más difundida procede de los trabajos de Miguel Artola Allí se definía a la revolución con los dos calificativos de liberal y burguesa, que reflejaban la conjunción de un cambio radical en el sistema político y el establecimiento de un *nuevo diseño de la sociedad*. Diseño éste, que se concretó en la creación de una *sociedad civil*, es decir, de un sistema social en el que *individuos iguales en derechos establecen relaciones libres* entre ellos, gracias a la desaparición del sistema de privilegios

¹⁸(...continuación)

papeles y periódicos de la época...".

¹⁹ Artola, M. *Partidos y programas políticos 1.808-1.936*, Tomo I, Madrid, 1977. p. 205. O también, y entre otros, Morodo, R. y Díaz, E., Tendencias y grupos políticos en las Cortes de Cádiz y en las de 1.820 en *Cuadernos Hispanoamericanos* nº 201, Septiembre de 1.966.

propio de la sociedad estamental y la correlativa uniformización de las condiciones jurídicas de los españoles. Que este cambio se definiera como burgués, y no sólo como liberal, se debía a que fue precisamente la burguesía la que protagonizó la transformación y, sobre todo, la que se benefició del nuevo marco legal para sustituir a la nobleza de la cúspide de la pirámide social. Todo eso se truncó con la vuelta de Fernando VII al poder, y su continuidad habrá que buscarla en el trienio liberal²⁰

El lugar elegido para fijar la residencia de las Cortes fue la ciudad de Cádiz²¹. Allí se elaboró este texto constitucional, que supuso el primer gran intento de origen español para introducir el constitucionalismo en España²²

Para terminar con este contexto, hay que señalar que la Iglesia contribuyó no sólo a la elaboración de este texto, sino que participó decididamente en la lucha contra los franceses desde la oposición armada y también mediante la dotación de fondos para el sostenimiento de la guerra. En este sentido ha manifestado Tierno Galván²³ que *"Los apuros económicos que pasaba el país obligaron a formar una comisión eclesiástica que dictaminara acerca de las alhajas que se podrían sacar de los templos para fundirlas o venderlas y*

²⁰. Pérez Ledesma, M. *Las Cortes de Cádiz y la sociedad española en las Cortes de Cádiz*, Madrid, 1.991, p. 167.

²¹. Solís, R. *El Cádiz de ...* cit. En esta obra se refleja el ambiente liberal que existía en la ciudad de Cádiz en aquella época.

²². Resulta interesante la lectura de lo escrito por Tomas y Valiente, F. *Genesis de la Constitución de 1.812. I. De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución*, en *Anuario de Historia del derecho Español*, tomo I XV, Madrid, 1.995, pp. 13-127. Y más concretamente el Capítulo II, *Leyes fundamentales, Constitución y nación en vísperas revolucionarias*, (pp. 18-56).

²³. Tierno Galván, E. *Contribución de la Iglesia a los gastos de guerra. Inmunidad eclesiástica*, en *Actas de las Cortes de Cádiz*, dirigido por Tierno Galván, E. I, Madrid, 1.964, pp. 461-472.

socorrer a las necesidades de la guerra, sin atentar a la inmunidad eclesiástica. La comisión dictaminó con cordura y patriotismo, proponiendo que, según las necesidades del culto, cada obispado cediese la cantidad disponible²⁴".

2. SIGNIFICADO Y CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN

Las reformas políticas y eclesiásticas de los afrancesados representaron un estadio preliberal que fue desarrollado en las Cortes de Cádiz.

Fruto de esas ideas liberales nacía en España nuestro primer ensayo constitucional mediante el aprobado texto de 1.812.

Sobre su origen existen varias posiciones en la doctrina. Un sector afirma que se trataba en gran medida de un texto copiado de la constitución francesa²⁵. No obstante, la mayor parte se pronuncia en sentido contrario, afirmando la

²⁴. Sobre la contribución del clero a los gastos de guerra se puede consultar La Parra López, E. *El primer liberalismo y la Iglesia*, Alicante 1.985. pp. 227-239.

²⁵. En este sentido se pronunció De Vélez, R. *Apología del altar y del trono o historia de las reformas hechas en España en tiempos de las llamadas Cortes, e impugnación de algunas doctrinas publicadas en la Constitución, diarios y otros escritos contra la Religión y el Estado*, Tomo II Madrid, 1.818. pp. 173-196, afirmando que la Constitución de Cádiz está copiada en su mayor parte de los assembleistas de París, puesto que: "... he hecho ver que de los trescientos ochenta y cuatro artículos de que se compone, ciento dos artículos son tomados al pie de la letra del texto francés de 1.791" (Dicho estudio se elaboró mediante la presentación de dos columnas separadas donde se reflejaban la similitudes). También, Fernández Almagro, M. *Orígenes ...* cit. p. 85. al señalar que ambos textos se podrían haber publicado en dos columnas paralelas. O incluso, Suárez, F. Sobre las raíces de las reformas de las Cortes de Cádiz, en *Revista de Estudios Políticos*, nº 126, Nov-Dic. Madrid, 1.962. p. 47-49. indicaba que existían ciertas afinidades, no tanto para sostener la identidad entre ambos textos, pero sí para establecer muchas similitudes.

personalidad propia del texto de Cádiz²⁶

Esta discusión, a nuestro juicio, resulta bizantina, puesto que la creación propia española recogía influencias extranjeras. Y en todo caso, no resulta difícil reconocer una dualidad de raíces propias y foráneas en las fuentes de inspiración de los legisladores de Cádiz, e incluso sería posible discernir sobre la recepción de las ideas elaboradas por los iusnaturalistas españoles del Siglo XVII que influyeron en los posteriores tratadistas ingleses y franceses, que por esta vía indirecta llegaron a Cádiz²⁷

Sobre las características del texto, de forma muy somera se puede afirmar que se trataba de un texto minucioso y muy extenso²⁸, que recogía las ideas liberales de la época²⁹. Por otra parte, no presentaba un catálogo de derechos y

²⁶ Sevilla de Andrés, D. *Historia Política de España (1.800-1.967)*, Vol. I, Madrid 1.974, pp. 80-81; también comparte esa opinión Artola, M., *La burguesía* ... cit. pp. 45-46.: "... existen demasiadas diferencias para negar la originalidad de la Constitución de Cádiz". Por señalar algún otro trabajo que avale la originalidad del texto gaditano, se puede citar a Diem, W. M. Las Fuentes de la Constitución de Cádiz, en *Estudios sobre las Cortes de Cádiz*, Universidad de Navarra, 1.967, pp. 355-383.

²⁷ En este sentido, veascé Palacio Atard, V. *La España del* ... cit. p. 57-60.

²⁸ Sevilla de Andrés, D. *Historia Política* ... cit. p. 32. Ha señalado como la desmesurada extensión que suponían los 384 artículos del texto, correspondían a las preocupaciones de la época y de sus autores. Puesto que era realmente necesario justificar exhaustivamente los cambios introducidos y establecer con rigidez ciertos principios de ordenación inferior a la constitucional. A este respecto, y entre otros, se puede citar a Torres del Moral, A. *Constitucionalismo Histórico Español*, Madrid, 1.968, p. 36. , puesto que señala que el texto resultante era muy extenso, como correspondía a un talante racionalista y a un propósito decidido de cerrar toda posibilidad de vuelta al absolutismo.

²⁹ Ha señalado Sánchez Agesta, L. *Historia del* ... cit. p. 90. como esta Constitución por una parte era minuciosa, ordenada, y como se proyectó para servir de soporte a una revolución política y social, y al mismo tiempo torpe, por la inexperiencia de su constituyente. Pero resulta más interesante el análisis que presenta de los principios del texto al dividirlo en dos grandes bloques: *El primero*, en lo que denominaba ideas del
(continúa...)

libertades encuadrados en algún determinado capítulo, sino que los que contenía se iban concretando en artículos de forma asistemática durante todo el texto. Además era una Constitución rígida, puesto que para su reforma se hacía necesaria no sólo una mayoría cualificada, sino también un lapso temporal de ocho años³⁰. Por otra parte y para concluir, hay que señalar que otro rasgo importante, que a pesar de no estar contenido en el texto nos aportará la historia, fue la atribución de símbolo en el constitucionalismo decimonónico³¹.

Otro extremo que debe exponerse en el estudio de este texto está

²⁹(...continuación)

Siglo XVIII: la igualdad, la centralización, el fomento de la agricultura y el comercio, la propiedad individual, la reorganización de la administración local, un plan de educación nacional. ... Y *el segundo*, a aquellos principios que apenas eran puro conocimiento de los hombres del Siglo XVIII, pero que la situación histórica les ofreció la posibilidad de recoger, alcanzando este rango de proyecto de organización constitucional: la soberanía nacional, la división de poderes, la reorganización de la hacienda pública y del ejército".

Siguiendo con lo manifestado, hay que señalar, bajo nuestra opinión, que dentro del catálogo de derechos, quizá el más representativo, era el de igualdad, en tanto y cuanto que sólo mediante la igualdad de todos los ciudadanos se procedería a la creación de ese Nuevo Régimen, y por ello, las Cortes, una vez ya aprobada la Constitución, elaboraron normas tendentes a la efectividad de ese derecho. En este sentido, debe citarse el Decreto de 9 de marzo de 1.813, por el que se ordenaba que para la admisión en colegios del ejército o de la armada no se admitieran informaciones de nobleza, ni hubiera distinciones perjudiciales entre sus individuos. (*Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de septiembre de 1.813, en que terminaron sus sesiones. Comprende además el decreto expedido por las Cortes extraordinarias en 20 de dicho mes, mandada publicar por orden de las mismas*, Tomo IV, Madrid en la imprenta nacional, 1.814. pp. 6-7).

³⁰. A este respecto ha manifestado Villarroja, J.T. *Breve historia ...*, cit. p. 13, "... como la de 1.812 que era especialmente rígida: unas Cortes proponían la reforma; las Cortes siguientes examinaban tal propuesta; unas terceras Cortes, dotadas de poderes especiales, la aprobaban definitivamente; siendo necesarios para todos estos trámites, determinados plazos y mayorías de dos tercios..."

³¹. Entre otros autores, Jiménez Asensio, R. *Apuntes para una historia del constitucionalismo español*, Zarautz 1.992, p. 47, ha advertido como la Constitución de 1.812 jugó un papel de primera importancia en cuanto símbolo del constitucionalismo español decimonónico. Y como su valor ha sido destacado por la totalidad de la doctrina.

configurado por algunos de los principios que más definen su contenido, por lo que se pueden citar, entre otros:

Soberanía nacional. Se trató de un viraje casi impensable en la historia de España. Siguiendo a Sánchez Agesta, se puede afirmar que la razón que lo explicaba tenía su justificación en la Guerra de la Independencia. Así se verificaba de las manifestaciones del Diputado Sr. Torrero, puesto que como expuso, Napoleón se había apoyado en el principio de soberanía monárquica para obligar a la familia real a transferirle sus derechos, y con esa renuncia legitimaba su autoridad para dar un Gobierno a España y establecer una Constitución. Así, la afirmación de la soberanía nacional, destruía por su base a dicho planteamiento privando de toda legitimidad al régimen invasor. Sin embargo, dicho principio llegó mucho más lejos.³² Este principio se consignaba en la Constitución en su artículo 3: "La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales" Este artículo consiguió abrir una brecha insalvable entre realistas y constitucionalistas, de suerte que se posicionaban los primeros en las antiguas legitimidades y los últimos en las nuevas ideas³³.

Esa soberanía nacional fue reprochada por los diputados disidentes en el llamado "Manifiesto de los Persas" al considerarla como la primera y capital equivocación, y más tarde se vería también reflejada su crítica en el Manifiesto

³² Sánchez Agesta, L., *Historia del ...*, cit. pp. 59-64

³³ Villarroya, T.J. *Breve historia ...*, cit. p. 14 ha señalado como esta división, con el paso del tiempo, contribuyó decisivamente a la división de los constitucionales entre moderados y progresistas; aquéllos lo reputarán peligroso y abstracto; mientras estos, lo elevarán a la categoría de dogma político que pasará a las Constituciones de signo avanzado que fueron apareciendo con posterioridad

de Fernando VII³⁴. Sin embargo, el deseo de reformas ha sido puesto de relieve por Sánchez Agesta, al escribir que esos mismos diputados disidentes solicitaban, en dicho Manifiesto, un programa de reformas en Cortes, independencia judicial, limitaciones en el poder real, libertad y seguridad en las personas³⁵.

A nuestro juicio, uno de los actos más importantes para verificar cual era la amplitud real que se le pretendía dar a esta soberanía nacional se concretaba en el Decreto de 26 de mayo de 1.813, por el que se mandaban quitar todos los signos de vasallaje que hubiera en los pueblos³⁶. El contenido no dejaba lugar a la duda de lo que latía entre líneas, puesto para justificar dicha medida, literalmente señalaba que: "... , puesto que los pueblos de la Nación española no reconocen ni reconocerán jamás otro señorío que el de la Nación misma, y que su noble orgullo no sufriría tener a la vista un recuerdo continuo de su humillación".

División de poderes. Estaba diseñada mediante los artículos 15, 16 y 17 de la Constitución³⁷. Pero dicho principio se establecía de forma especialmente

³⁴. Manifiesto del Rey de 4 de mayo de 1.814, declarando por nula y de ningún valor ni efecto la Constitución de las llamadas Cortes Generales y Extraordinarias de la nación, disponiendo al mismo tiempo lo que ha de observarse, a fin de que no se interrumpa la administración de justicia, y el orden político y gubernativo de los pueblos (*Decretos del Rey Don Fernando VII, año primero de su restitución al Trono de las Españas. Se refieren todas las reales resoluciones generales que se han expedido por los diferentes Ministerios y Consejos desde 4 de mayo de 1.814 hasta fin de diciembre de igual año.* Tomo Primero, Madrid, en la Imprenta Real, 1.816. pp. 1-9).

³⁵. Sánchez Agesta, L. *Historia del ...* cit. p. 69.

³⁶. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de septiembre de 1.813*, cit. p. 82.

³⁷. Art. 15: "La potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el Rey".

Art. 16: "La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey"

(continúa...)

rigurosa tal y como ha señalado la doctrina³⁸

Sobre el Poder Judicial, resulta interesante los requisitos que se exigían a los Jueces y Magistrados para pertenecer a la carrera judicial, puesto que debían concurrir en ellos una serie de cualidades que se circunscribían fundamentalmente a "... ser adictos a la Constitución ..."³⁹

Nueva representación. En este texto se rompía con el sistema de representación del Antiguo Régimen. La tradición estamental se sustituía por una sola Cámara que unificaba la representación de la nación, de suerte que los diputados ya no recibían el mandato imperativo, puesto que se sustituía por el

³⁷(...continuación)

Art. 17: "La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley"

³⁸ Entre otros Fernández Segado, F., *Las constituciones* ... cit. pp. 84 señala que la Constitución proponía una interpretación bastante rigurosa del principio, de tal manera que esa división se convertía en una separación auténtica que dejaba a los poderes aislados de una forma total. O, Villarroja, T.J., *Breve historia* ... cit. p. 15

³⁹ Así se prescribía literalmente en el Decreto de 17 de abril de 1.812, donde se determinaban las calidades que debían concurrir en los que habían de ser nombrados ministros del Supremo Tribunal de Justicia. Para ser magistrado de tan alto Tribunal era necesario, no sólo los requisitos que se exigían por la propia Constitución en su artículo 251, sino que precisaban otros requisitos como: que fueran letrados, que gozaran de buen concepto público, y además de estar acreditada su valía, debían ser desinteresados y con moralidad intachable, e incluso de establecía una condición final importantísima. "... ser adictos a la Constitución de la Monarquía, y haber dado pruebas en las circunstancias actuales de estar por la independencia y libertad política de la Nación. ..." En el mismo sentido, y para solicitar iguales requisitos o cualidades para cualquier persona que formara parte de la carrera judicial, se promulgó el Decreto de 3 de junio de 1.812, sobre las calidades que deben tener los empleados en la judicatura. (*Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de septiembre de 1811 hasta 24 de mayo de 1812, mandada publicar por orden de las mismas*, Tomo II, Madrid en la imprenta nacional, 1.813 pp. 192-193. Y *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1813, mandada publicar por orden de las mismas*, Tomo III, Madrid en la imprenta nacional, 1.813 p. 11, -respectivamente-).

mandato representativo⁴⁰.

Confesionalidad y unidad religiosa. Se trataba de un rasgo que definía el primer intento constitucional en nuestro país. Sorprendentemente, el espíritu liberal del texto se rompía al llegar a la libertad religiosa mediante la constatación de una confesionalidad recalcitrante. Seguramente, nunca volveremos a tener en nuestros textos constitucionales una disposición tan marcadamente cerrada a la libertad religiosa.

Tal y como ha señalado Goti⁴¹, el planteamiento confesional que se hizo

⁴⁰. Tal y como se contenía en el Art. 100 de la Constitución: "Los poderes están concedidos en los siguientes términos: *En la ciudad o villa de a .. días del mes de del año de en las salas de hallándose congregados los señores (aquí se pondrán los nombres del presidente y de los electores de partido que forman la junta electoral de la provincia) dijeron ante mi el infrascrito escribano y testigos al efecto convocados, que habiéndose procedido, con arreglo a la Constitución política de la Monarquía española, al nombramiento de los electores parroquiales y de partido con todas las solemnidades prescritas por la misma Constitución, como constaba de las certificaciones que originales obraban en el expediente, reunidos los expresados electores de los partidos de la provincia de ... en el día de del mes de del presente año, habían hecho el nombramiento de los diputados que en el nombre y representación de esta provincia han de concurrir a las Cortes, y que fueron electos por diputados para ellas por esta provincia los señores N. N. N., como resulta del acta extendida y firmada por N.N. : que en su consecuencia les otorgan poderes amplios a todos juntos, y a cada uno de por sí, para cumplir y desempeñar las augustas funciones de su encargo y para que con los demás diputados de Cortes, como representantes de la Nación española, puedan acordar y resolver cuanto entendieren conducente al bien general de ella en uso de las facultades que la Constitución determina y dentro de los límites que la misma prescribe, sin poder derogar, alterar o variar en manera alguna ninguno de sus artículos bajo ningún pretexto; y que los otorgantes se obligan por sí mismos y a nombre de todos los vecinos de esta provincia en virtud de las facultades que les son concedidas como electores nombrados para este acto, a tener por válido, y obedecer y cumplir cuanto como tales diputados de Cortes hicieren y se resolviera por estas con arreglo a la Constitución política de la Monarquía española. Así lo expresaron y otorgaron, hallándose presentes como testigos N.N., que con los señores otorgantes lo firmaron: de que doy fe"*

⁴¹. Goti Ordeñana, J., *Sistema de Derecho Eclesiástico del Estado*, Zarautz, 1.994, p. (continúa...)

en ese momento dificultaba la marcha hacia una concepción liberal, pues marcaba el inicio de la polémica entre los propugnadores de las libertades del hombre y los defensores de la unidad católica.

Tras todo ello, finalizando este estudio somero de sus contenidos y principios, se puede señalar que realmente no sólo pretendía un nuevo orden jurídico en nuestro país, sino que buscaba, incluso, la instauración de un nuevo modelo social. Por ello se contenían disposiciones como la expresada en los artículos 6 o 13⁴².

La Constitución de Cádiz es un texto que estará vigente en varias ocasiones durante el Siglo XIX. Así sus periodos de vigencia serán: 1.812 a 1.814, 1.820 a 1.823, y 1.836 a 1.837.

II. LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ.

1. INTRODUCCIÓN: VALORACIÓN DEL HECHO RELIGIOSO.

En este momento concreto nos encontramos a una España inmersa en plena Guerra de la Independencia, pero por lo que respecta a la Iglesia, ocupaba

⁴¹(...continuación)
168.

⁴². En este sentido se han pronunciado Solé Tura, E. y Aja, E., *Constituciones*..., cit. p. 20, señalando el carácter ético de este primer constitucionalismo, que se encontraba perfectamente reflejado en la Constitución de Cádiz.

un lugar muy importante en la sociedad debido a la incidencia de muchos factores, entre otros: el número de sus ministros, su poder económico, sus privilegios, etc Pero quizá, el más importante era su gran arraigo social. Se puede afirmar que los individuos de cualquier condición social eran católicos, al menos formalmente, y por ello, en este momento histórico de intento de cambio, el constitucionalismo español no despreció este valor de gran fuerza de cohesión⁴³.

Este ambiente religioso estaba presente incluso en los sectores más progresistas o liberales, puesto que antes de la elaboración de la propia Constitución los constituyentes se encomendaron a Dios en repetidas ocasiones para lograr el acierto en sus trabajos⁴⁴.

De esas ceremonias religiosas previas, resulta sencillo sondear el sentir del constituyente con respecto al hecho religioso, al menos en su carácter formal. Sin embargo, efectuando un análisis de fondo, se puede afirmar que los liberales burgueses se vieron parados ante la fuerza de la Iglesia, dentro de un contexto histórico propicio -cuando estaba finalizando la Guerra de Independencia- donde

⁴³. En ese sentido se ha pronunciado Suárez Pertierra, G., *Libertad religiosa y confesionalidad en el ordenamiento jurídico español*, Vitoria, 1.978, p. 1.

⁴⁴. A modo de ejemplo, se puede citar el Decreto de 25 de septiembre de 1.810, por el que se mandaban publicar los decretos anteriores, cantar el Te Deum, y hacer salvas y rogativas: "... que se cante en todos los dominios de S. M. un solemne Te Deum en acción de gracias, se hagan salvas de artillería en celebridad de tan memorable acontecimiento, y prerrogativas públicas por tres días, implorando el auxilio divino para el acierto" (Colección de Decretos y Ordenes de las Cortes de Cádiz, Editado por las Cortes Generales, con motivo del 175 aniversario de las Constitución de 1.812, Madrid, 1.987, Tomo I, p. 6).

A mayor abundamiento, se puede observar como se trató del tercer Decreto aprobado por las Cortes generales y extraordinarias de Cádiz (*Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1.810 hasta igual fecha de 1.811, mandada publicar de orden de las mismas*, Tomo I, Madrid en la imprenta nacional, año 1.813, p. 6).

se hacía necesariamente oportuno el consenso de los constituyentes. Y así, por estricta concesión impuesta por las circunstancias sociales, encontramos un primer texto constitucional español que recoge la tradición confesional heredada del Antiguo Régimen, cuya manifestación más rigurosa se efectuaba en el artículo 12, pero con las oportunas consecuencias jurídicas desarrolladas en la Carta Magna.

De cualquier forma, los miembros de la jerarquía eclesiástica, cuyo estatus provenía del Régimen anterior, se sentían *menos cómodos* dentro del Nuevo Régimen que implantaba la Constitución. Aunque ello no fue óbice para que algunos miembros del clero se mostraran abiertamente a favor de la Constitución⁴⁵.

Esa jerarquía eclesiástica, en un primer momento, con este artículo 12 y sus consecuencias jurídicas, se puede afirmar que quedaba satisfecha. Puesto que uno de los pilares del Antiguo Régimen, expresado por la religión católica, se contenía dentro del Nuevo Orden con igual fuerza. Muestra de ello fueron los primeros actos de la propia Iglesia, la cual prestó sus púlpitos y sus templos para que esta Constitución fuese difundida, (jurándola, proclamándola, solicitando ayuda a Dios para el acierto del constituyente, loándola, etc ...). En esa línea se

⁴⁵. Esta afirmación ha sido desarrollada por Tomás y Valiente, F., *Constitución. Escritos de introducción histórica*, Madrid, 1996 pp. 67-80. Expone lo que el denominaba "... una de las más lúcidas alegaciones en favor del Antiguo Régimen escritas en aquellos tiempos de revolución en los principios, para unos, y de confusión, para otros, a propósito de esos mismos principios. ...", se trataba del pensamiento al respecto de la Constitución de Cádiz de una de las altas jerarquías de la Iglesia Católica (el Arzobispo de Santiago).

Pero ello no fue impedimento para encontrar a miembros del clero, no pertenecientes a ese elevado status, a favor de la Constitución, que pueden ser calificados como liberales. En este sentido, veasé Posse, J.A., *Memorias del cura liberal Don Juan Antonio Posse con su discurso sobre la Constitución de 1812*, Edición a cargo de Herr, R., Madrid, 1984.

debe traer a colación el Decreto de 1 de diciembre de 1.810, por el que se encargaba al clero que impugnara las máximas con que el último tirano quería seducir a los incautos, y animara a los españoles a la defensa de la patria y de la santa religión y se mandaba hacer rogativas, y cumplir las ordenanzas que prescribían los actos religiosos en los ejércitos⁴⁶. Se trataba de un ejemplo claro de apoyo de las incipientes Cortes en la Iglesia, puesto que señalaba expresamente: *"... Por tanto exciten el sabido celo de los M.RR. Arzobispos y RR. Obispos, Prelados, Párrocos y demás eclesiásticos a que impugnen con solidez y energía los perniciosos escritos de aquellos que por desgracia se han extraviado, sucumbiendo a la seducción y a la fuerza; anuncien a los pueblos que el amor de la patria, de su libertad e independencia es una obligación de rigurosa justicia; manifiesten que la defensa de las leyes, del decoro y honor del Estado es la acción más gloriosa que recomiendan las sagradas letras ... porque peligran la religión y la patria; que esta es la voluntad de Dios, autor y protector de las sociedades ..."*.

Continuando con el apoyo de la Iglesia al Nuevo Régimen, hay que resaltar que las Cortes disponían para ella grandes potestades. Prueba clara de ello resultaba lo señalado en torno a la participación de eclesiásticos en el constituyente, y también la presencia de altas dignidades eclesiásticas en la Regencia de España. Pero esa representación se situaba en el cargo más importante: en la figura del presidente. En este sentido, ya se ha indicado en el presente Capítulo, como la presidencia de la Regencia en su inicio (antes de procederse a la discusión y aprobación del texto constitucional -1.810-) recayó en el Obispo de Orense, y por otra parte, cuando se constituyó una nueva

⁴⁶. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1.811, mandada publicar de orden de las mismas, ... cit, pp. 29-30.*

Regencia en 1.813, se puso al frente al Arzobispo de Toledo⁴⁷. Este hecho debe ser destacado, puesto que, siguiendo a Ibán, se puede afirmar, que la presencia de eclesiásticos en órganos políticos constituye un modo más de materializar la confesionalidad de un sistema político, toda vez que encontramos a esas altas dignidades en órganos estructurales por razón de su status⁴⁸.

Esa confesionalidad del texto constitucional ya se vislumbraba en numerosas ocasiones en la labor del constituyente. A modo de ejemplo, puede citarse el Decreto de 22 de mayo de 1.811, señalando la celebración de una función religiosa en el día de San Fernando en memoria del levantamiento de la Nación a favor del Rey Fernando VII, y al día siguiente por los que habían perecido en esta guerra⁴⁹. Contenía, como anticipaba su título, el mandato expreso de que en el día de San Fernando se celebrase una ceremonia religiosa en todas las iglesias catedrales, colegiatas, parroquiales y demás religiosos de ambos sexos en todos los dominios de España, América y Asia, y al día siguiente se celebrase "... un aniversario solemne por las almas de los que fallecido ...". Además a estas

⁴⁷ Así resulta a la luz de los Decretos de 8 de marzo de 1.813, por el cual se ordenaba la creación de una Regencia provisional, compuesta de los tres Consejeros de Estado más antiguos, y por el de 8 de marzo de 1.813, por el cual se declara presidente de la misma Regencia al M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo, (*Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1812 hasta 14 de septiembre de 1.813, en que terminaron sus sesiones. Comprende además el decreto expedido por las Cortes extraordinarias en 20 de dicho mes, mandada publicar por orden de las mismas*, Tomo IV, Madrid en la imprenta nacional, 1.814, pp. 4-5 y 5, -respectivamente-).

⁴⁸ Ibán, I.C., El Derecho Eclesiástico de la "Zona Nacional" durante la guerra civil (18-VII-1.936 a 1-IV-1.939), en *Anuario de Historia del Derecho Español*, Tomo LVII, Madrid, 1987, p. 641. Literalmente afirma: "... Sin duda uno de los más llamativos y expresivos modos de materializar la confesionalidad de un sistema político es cuando en sus órganos estructurales aparecen miembros de la jerarquía eclesiástica en razón de su personal status. ..."

⁴⁹ *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1.811, ... cit.* pp. 153-155.

funciones debían asistir "*los Ayuntamientos o Juntas de partidos*", es decir, los jefes políticos locales.

Incluso esas ceremonias religiosas se ordenaban en situaciones de auténtica tensión entre las Cortes y la Iglesia. Nos referimos a momentos posteriores a la aprobación de las primeras normas desamortizadoras. En este sentido se pueden citar, entre otros, el Decreto de 1 de octubre de 1.813, por el que se mandaba cantar un Te deum por la instalación de las Cortes ordinarias, y que hubiera rogativas públicas por tres días, implorando el auxilio divino por el acierto del Congreso⁵⁰. O la Orden de 2 de marzo de 1.814, previniendo se cantara un Te Deum, y hubiera tres días de rogativas públicas por la instalación de las Cortes en su segunda legislatura⁵¹.

Con todo ello, podemos afirmar que ese primer movimiento liberal español que pretendía adentrar el Nuevo Régimen en España, no entendía ese nuevo orden jurídico, si no era de la mano de la religión católica, bien por tradición, o bien por convicción. Esa misma opinión ha sido expresada por Montesinos, quien ha escrito que "Nuestros legisladores, incluso los ilustrados, querían reformar legislando pero manteniendo en gran parte las estructuras existentes, de aquí se sigue que nos encontremos con planteamientos contradictorios⁵²". El ejemplo más

⁵⁰. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Ordinarias desde 25 de septiembre de 1.813, día de su instalación, hasta 11 de mayo de 1.814, en que fueron disueltas, mandada publicar de orden de las actuales*, Tomo V, Madrid en la imprenta nacional, 1.820. p.2.

⁵¹. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Ordinarias desde 25 de septiembre de 1.813, día de su instalación, hasta 11 de mayo de 1.814, en que fueron disueltas, ... cit.* pp. 103-104.

⁵². Montesinos Sánchez, N., La tutela penal de la Religión del Estado. Aproximación al estudio del vilipendio a la Religión, en *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, Vol. (continúa...)

evidente para sustentar dicha afirmación se encuentra en el análisis de las discusiones del artículo 12 de la Constitución, puesto que tal y como se contiene en el presente Capítulo, ningún diputado argumentó nada en contra, es decir, nada se dijo a favor de la neutralidad religiosa del Estado o la libertad religiosa individual. Ha escrito Tomás y Valiente, que "nadie objetó nada contra su terrible afirmación -se refiere a la intervención primera efectuada por Inganzo- que ningún español puede ser tenido por tal si no profesa la religión católica, lo que significa la primacía de la condición de católico frente a la de ciudadano nacional de España⁵³".

Pero esa opinión del constituyente señalada por Tomás y Valiente, no se debe limitar sólo a las discusiones del constituyente, sino que debe seguirse en la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, puesto que se verá refrendada después, mediante la labor de las Cortes en el desarrollo legislativo del texto constitucional. Nos referimos a lo que se estableció sobre la concesión y fórmulas de las cartas de naturaleza y ciudadano. La condición de católico se anteponía incluso a la condición de ciudadano. Así se verificaba del Decreto de 13 de abril de 1.813, sobre la concesión y fórmulas de las cartas de naturaleza y de ciudadano⁵⁴. En relación con las clases de cartas de naturaleza y fórmulas empleadas, desde este momento se suprimían todas las anteriores, y sólo serviría al efecto la siguiente fórmula para las cartas de naturaleza:

⁵²(...continuación)

X (1.994), Madrid, 1.995, p. 329.

⁵³ Tomás y Valiente, F., *Constitución ...*, cit. p. 118.

⁵⁴ *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de septiembre de 1813, ...*, cit pp. 54-57.

"Don Fernando VII, por la Gracia de Dios (Si hubiere Regencia se pondrá el encabezamiento correspondiente), a todos los que las presentes vieren y entendieren, SABED: Que habiendo acudido a nuestra Real Persona (o a la Regencia del Reino) D.N.N. natural de tal pueblo, provincia de tal, en el Reino de tal, en solicitud de carta de naturaleza; y habiendo hecho constar ser Católico, Apostólico, Romano, y concurrir en él las circunstancias y calidades que le pueden hacer merecedor de esta gracia; hemos venido (si habla el Rey), o ha tenido a bien la Regencia del Reino (si hablase ésta) en proponerlo a las Cortes, quienes han concedido por decreto de tanto de tal mes y año al referido Don N.N. carta de naturaleza para que sea habido y tenido por tal español en todo el Reino. ...".

Como se puede observar, el requisito de ser Católico, Apostólico y Romano, estaba presente antes de la concesión de la nacionalidad española y resultaba un requisito "sine qua non".

2. LA CONFESIONALIDAD: EL ARTÍCULO 12.

La confesionalidad del Estado estaba expresamente recogida en el artículo 12 de la Constitución. Sin embargo, resulta preciso comenzar por lo contenido en el Preámbulo del texto doceañista, puesto que anunciaba la opinión del constituyente que se desarrollaba en la Constitución:

"D. FERNANDO VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino nombrada por las Cortes Generales y extraordinarias. ... En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, autor, y supremo legislador de la sociedad. ... podrán llenar debidamente,

el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación ..."

El punto de partida se situaba en las discusiones parlamentarias, donde se exponía la opinión al respecto de los distintos diputados sobre este Preámbulo

Guereña: "... me parece escasa o demasiado concisa la expresión que sólo habla de Dios trino y uno, como autor y legislador supremo de la sociedad, pudiendo en pocas líneas extenderse una protestación de los principales ministerios. ..."

Riesco: "... Es verdad que todo se expresa con esas palabras: no obstante aun puede expresarse más la religión que profesa la nación. ..."

Simón López: "... no se hace mención de Jesueristo, como redentor y establecedor de la religión católica, apostólica, romana, y como tal se debía hacer mención de él y de la purísima Virgen Maria, conforme se hace en los concilios, y se previene en la ley de Partida"

En sentido contrario, se pronunciaba:

Espiga: "... Cuando V.M. encargó a la comision el proyecto de constitución, creyó que no se le encargaba un catecismo de la religión ... La constitución sólo debe contener las leyes fundamentales, y lo que se dice en la constitución no sólo expresa cuanto han dicho los concilios, sino cuanto han dicho los padres de la Iglesia. La constitución dice: la nación española profesa la religión católica, apostólica, romana única verdadera con exclusion de cualquiera

⁵⁵. Sesiones de los días 24, 25 y 27 de Agosto de 1.811 en el *Diario de las discusiones y actas de las Cortes*, Tomo Octavo, Cádiz, en la imprenta Real, 1.811, pp. 7-43

otra. ¿Que cosa habrá que no esté comprendida en este artículo? ...".

Tal y como se puede observar de estas intervenciones, la mayoría de los diputados manifestaba que este Preámbulo debía ser desarrollado aún más, de suerte que se indicaran con mayor precisión algunos conocidos dogmas de fe. Y frente a esas alegaciones, lo único que se opuso fue la existencia del artículo 12. Por este motivo se puede afirmar que, si bien, el Preámbulo nos parece muy expresivo con respecto a la religión católica, pudo ser aún más riguroso o extenso, si no hubiera existido un artículo 12 en los términos en que quedó establecido.

Ciertamente, en el Preámbulo, como pórtico de toda ley, ya quedaba perfectamente delimitado el alcance confesional de nuestro primer intento constitucional, y ello se efectuaba de forma muy precisa, en nombre de la Santísima Trinidad, y situando a Dios como el supremo legislador. Todo ello, reflejaba en el texto el sentir de la sociedad del momento, donde los liberales caminaban, al menos en este primer momento, de la mano de la Iglesia, al igual que los Monarcas en épocas anteriores.

Resulta oportuno destacar que la confesionalidad contenida en este texto no resultaba una innovación, o mejor dicho, simplemente representaba la continuidad a lo realizado por el constituyente al encomendarse a Dios para estar acertados en sus trabajos. En este sentido, ha manifestado Sánchez Agesta que esa invocación religiosa estaba en clara consonancia con la sesión de 28 de agosto de 1.811 en la que "Los constituyentes de Cádiz pusieron su obra bajo el nombre de Dios, como Supremo Legislador. Así al iniciar su tarea constituyente, ordenaron prerrogativas públicas a Dios como Padre de todas las luces y a la Virgen como Patrona de España, para que dieran al Congreso las necesarias para realizar su

Este Preámbulo contenía expresamente el sentimiento religioso tradicional español recogido con la invocación trinitaria. Pero siguiendo a Revuelta, hay que afirmar que resultó una paradoja. Puesto que este escueto y solemne encabezamiento, donde palpitaba una recia confesión de fe y una afirmación de la ética social cristiana, que ponía a Dios en el origen y fundamento de la sociedad y lo situaba como fuente última del poder y de la soberanía, no podía estar más lejos de la concepción roussoniana del Contrato social⁵⁷, y sin embargo, a pesar de esa oposición se constataba esa invocación trinitaria.

La Trinidad expresada en estos términos no era una fórmula ritual, sino que tenía un valor preciso y medido por los propios constituyentes: considerar a Dios como fundador de la sociedad y su supremo legislador. Por lo que se estaba definiendo el origen divino de la sociedad y su poder, origen que no sólo era compatible con la atribución de la soberanía a la comunidad, sino que respondía a ese encaje a la mejor tradición del pensamiento clásico español, en su polémica con la doctrina que tendía a exaltar el origen divino inmediato del poder monárquico⁵⁸.

Tal y como ha señalado Sevilla de Andrés, este Preámbulo permite su comparación con los contemporáneos contenidos en los textos de Norteamérica y el francés del 91, puesto que no tenía como el primero, el profundo sentido de la iniciación política, aunque sí coincidía en los objetivos localizados a un pueblo. Por otra parte se diferenciaba de la francesa en la concreción, frente al carácter

⁵⁶ Sánchez Agesta, L., *Historia del ...*, cit. p. 113. En el mismo sentido, véase nota 44.

⁵⁷ Revuelta González, M., *La Iglesia española ...*, cit. p. 42.

⁵⁸ Sánchez Agesta, L., *Historia del ...* cit. pp. 113-121.

pretendidamente universal basado en la Declaración de derechos y en la formación negativa de los objetivos constitucionales. El de Cádiz presentaba como importancia y originalidad su sentido religioso, que pasará al texto, y no sólo en el artículo 12⁵⁹.

El contenido de todo Preámbulo no pasa de ser algo programático. Sin embargo, en este texto constitucional se convertía en derecho positivo y todavía con mayor fuerza en el articulado de nuestra Constitución de 1.812, y más concretamente en el conocido artículo 12.

La declaración de confesionalidad, en el primer borrador del texto presentado por la Comisión para su debate, no estaba contenida en el artículo 12, sino en el número 13, con otra redacción distinta:

*"La nación española profesa la religión católica, apostólica y romana, única verdadera, con exclusión de cualquiera otra"*⁶⁰

Sobre esta redacción primaria, y siguiendo a Fernández Segado, se puede afirmar que se trataba de una propuesta de la Comisión que se alejaba del espíritu de libertad imperante y del influjo de la concepción individualista. Toda vez que no contenía una mera afirmación, sino que establecía la prohibición de cualquier otra religión, es decir, consignaba intolerancia absoluta⁶¹.

Esta redacción primaria suscitó las intervenciones de los diferentes

⁵⁹. Sevilla de Andrés, D., *Historia política ...*, cit. pp. 35-36.

⁶⁰. Esta redacción primitiva se puede encontrar en el *Diario de las discusiones y actas de las Cortes de Cádiz*, Tomo Octavo, en la sesión del día 2 de septiembre de 1.811, en la Real Imprenta de Cádiz, 1.811, p. 119.

⁶¹. Fernández Segado, F., *Las Constituciones ...*, cit. p. 93.

Diputados⁶², entre otros, los señores Inganzo y Rivero, Muñoz Torrero, y Villanueva, todos ellos miembros del Constituyente:

Inganzo⁶³ intervino en primer lugar: "Decir que la nación española profesa la religión católica, es decir un puro hecho. Un hecho no es una ley, no incluye obligación, y aquí se trata de leyes, de leyes fundamentales. Que la nación española profesa la religión católica: esta proposición no dice más que una enunciativa como esta: los musulmanes profesan la religión de Mahoma, los judíos la de Moisés. *La religión debe entrar en la Constitución como una ley que obligue a todos los españoles a profesarla, de modo que ninguno pueda ser tenido por tal sin estar en esta circunstancia. La religión es la primera de todas las leyes fundamentales, porque todas las demás estriban en ella; y sin ella, y sin los preceptos que por ella comunica su divino autor, no tienen fuerza ni obediencia las leyes humanas, y todo el edificio de la sociedad viene por tierra. Es también la más esencial, porque la nación será tan nación siendo monarquía como democrática, u otro gobierno cualquiera; pero no será tan religiosa no siendo católica, y debe serlo igual en toda forma de gobierno. Así me opongo a que este artículo corra como viene, y me parece que debe extenderse de modo que abrace los extremos indicados: esto es que se proponga como ley primera y antigua fundamental de estado, que deba subsistir perpetuamente, sin que alguno que no la profese pueda ser tenido por español, ni gozar de los derechos de tal*"

Después, Muñoz Torrero afirmó que: "La comisión tuvo presente varias fórmulas: se adoptó esta por parecer la más conveniente. Si se quiere se puede

⁶². *Diario de las Discusiones y Actas ...*, cit. pp. 119-120.

⁶³. A mayor abundamiento, sobre este Diputado, personaje histórico, Cuenca, J.M., *Don Pedro Inganzo y Rivero (1.764-1.836), último primado del Antiguo Régimen*, Pamplona, 1.965.

añadir: *y en consecuencia se prohíbe el ejercicio de las sectas*⁶⁴.

La última intervención la llevó a cabo Villanueva: "estoy conforme con lo que propone el señor Torrero. Desde luego entendí la palabra profesa; en el sentido de los indicativos que hay en los artículos siguientes es una monarquía, reside en las Cortes. No obstante quisiera yo que aquí se dijese algo de la protección que debe dispensar la nación a la religión que profesa. Tampoco estaría demás indicar la antigüedad de la fe católica en España. Porque si bien desde el Concilio III de Toledo, celebrado hacia fines del siglo VI, se proclamó y juró la religión católica como única en España, con exclusión de toda secta, es notorio que a esto dio ocasión la peste del arrianismo, que había cundido por nuestras provincias; y en ningún modo prueba que no fuese antes general en ellas la religión católica. ... Por eso no sería fuera de propósito que de esta gloria tan señalada de nuestra nación se hiciese mérito en la presente ley constitucional, que yo reduciría a estos términos: La nación española conservará y protegerá, con

⁶⁴. Se entendían por sectas todas aquellas confesiones distintas a la católica tal y como se verifica de diferentes disposiciones. Entre otras, y a modo de ejemplo se puede citar una, que aunque promulgada algunos años más tarde resulta totalmente ilustrativa y comprende las disposiciones de la época. Se trataba de la Real Cédula de 13 de febrero de 1.827, por la que se mandaba guardar y cumplir la Bula inserta de nuestro Santísimo Padre León XII, en que prohibía y condenaba, de nuevo, toda secta o sociedad clandestina, cualquiera que fuera su denominación.

Mediante ésta, el Rey incorporaba a nuestro Derecho una Bula emitida por el Pontífice, y tras el oportuno pase regio se reproducía totalmente su contenido y se exigía su cumplimiento en España. Concretamente se prescribía la obligación para con todos los españoles de no alistarse a "sectas o sociedades secretas", ni ayudarlas, ni fomentarlas. Sino que, por contra, debían delatarlas ante quien correspondiera, con señalamiento de sus miembros o cómplices.

El espíritu de esta Real Cédula hay que concebirlo dentro del marco social de la época que acontecía en nuestro país, donde, por una parte, se protegía a la Iglesia, y por otra parte, el orden público estatal, puesto que esas asociaciones implicaban, tal y como literalmente contenía esta disposición: "... convulsiones políticas ...". (*Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII, y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1 de enero hasta fin de diciembre de 1.827*. Tomo Duodécimo, Madrid en la imprenta real, 1.828. pp. 36-63).

exclusión de toda secta, la religión católica, apostólica, romana, única verdadera que profesa y ha profesado desde los tiempos más remotos"

De todo ello, se puede observar como ningún diputado expresó nada en contra, es decir, nadie dijo nada en favor de la neutralidad religiosa del Estado o la libertad religiosa individual. Y como se ha señalado antes en este Capítulo, ningún español podía ser tenido por tal, si no profesaba la religión católica, "lo que significaba la primacía de la condición de católico frente a la de ciudadano español".

El resultado de estas distintas intervenciones llevó a modificar esa redacción primaria, de suerte que su composición definitiva contendría una declaración confesional todavía más férrea que la presentada por la Comisión.

Se encuadraba en el Título II, del Capítulo II, bajo la denominación *De la Religión*, y se concretaba en el conocido artículo 12, con lo que cambiaba también su numeración:

"La Religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra"

Si toda la confesionalidad del presente texto hubiera de resumirse en un artículo sería este. No era sólo una mera declaración, sino que se convertía en una intención de futuro, puesto que usaba tanto el tiempo presente como el futuro para señalar la vigencia de la religión Católica en el Estado español. El compromiso era perpetuo y, como manifestación de esta confesionalidad, el titular de la religión no era el individuo, sino la Nación, por lo que era ella la

encargada de protegerla y de prohibir el ejercicio de cualquier otra, bien fuera de forma pública o privada.

Al respecto de este artículo, ha señalado Llamazares⁶⁵, que se trataba de una declaración de confesionalidad doctrinal, dogmática y excluyente. Lo cual, quiere decir tres cosas:

1º) El Estado hace un juicio de veracidad y de valor sobre unas determinadas creencias religiosas, considerándolas como verdaderas y valiosas; de ahí su compromiso de favorecerlas y protegerlas con leyes sabias y justas.

2º) ese juicio de valor y de veracidad se considera indiscutible, como un dogma que tampoco en el futuro podrá cambiar.

3º) implica que esa veracidad y ese valor, desde el punto de vista del Estado, sólo lo merecen unas determinadas creencias; de donde no sólo la consecuencia del trato a favor aludido, sino la exclusión del ejercicio tanto público como privado de cualesquiera otras creencias religiosas.

El art. 12 no sólo se pronuncia en el momento actual sobre la religión, va más allá, hipotecando el futuro de la libertad religiosa en España, afirmando y declarando la religión católica, no sólo como la única, sino como la única verdadera. Es cerradamente confesional, representando la negación de la libertad religiosa. Lo que en Derecho se puede denominar como ingenuidad legislativa.

Por su parte, Suárez Pertierra ha señalado que en este artículo se puede observar un típico ejemplo de confesionalidad doctrinal con la expresión "única

⁶⁵. Llamazares Fernández, D., *Derecho Eclesiástico español, Derecho Eclesiástico del Estado derecho de la libertad de conciencia*, Madrid. 1.995, p. 169.

verdadera" aplicada a la religión católica. Hasta aquí no se hace más referencia que a la religión del Estado; pero en el segundo inciso del artículo se puede observar la referida declaración de confesionalidad combinada con intolerancia. En su virtud, la única religión admitida, "la verdadera", era la religión católica, que además, era la del Estado español. Los demás cultos quedaban prohibidos⁶⁶.

Siguiendo a Goti, se debe señalar la fuerza con que se hace la valoración de la fe católica: el compromiso que se adopta para defenderla y protegerla; y la prohibición del ejercicio público y privado de cualquier otra. Ello respondía a la fuerte raigambre que aún se tenía del sentimiento religioso católico en la sociedad, y a la identificación histórica que se había hecho entre el sentimiento religioso católico y la nacionalidad, propio de la época anterior⁶⁷.

Es fácil verificar que el artículo 12, en comparación con el resto de las disposiciones recogidas en el texto constitucional, no estaba conforme con el espíritu liberal que poseía el Texto. Y ello respondía a que las Cortes, para el establecimiento del Nuevo Régimen, buscaban el apoyo de la Iglesia. En este sentido, La Parra López ha afirmado como del contexto de las intervenciones de los liberales españoles, resulta fácil verificar como el liberalismo español iba de la mano de la religión católica, de suerte que los liberales españoles reunidos en Cádiz no concebían un régimen basado en la separación de la Iglesia del Estado, puesto que no pensaban en una sociedad ajena a la religión⁶⁸.

⁶⁶ Suárez Pertierra, G., *Libertad religiosa* ... cit. p. 3.

⁶⁷ Goti Ordeñana, J., *Sistema* ..., cit. p. 168.

⁶⁸ La Parra López, E., *El primer liberalismo* ..., cit. pp. 35-36. Señalaba que "... En las Cortes de Cádiz el hecho es innegable: de la Constitución se derivaron una serie de medidas que implicaban cambios importantes en el clero y la Iglesia. Pero, insistimos, estas decisiones no estaban concebidas como pasos hacia la desecristianización ... ni como ataques a la religión, ..."

Pero todas esas muestras confesionales merecen un estudio de fondo, y por ello, se debe traer a colación la opinión del Diputado Argüelles, quién, respecto a la instauración de esa confesionalidad, afirmó que "*En franca contradicción con el espíritu liberal y racionalista de la Constitución, en obsequio doloroso, de paz, pues la doctrina contraria hubiera desencadenado -toda la violencia y furia teológica del clero-, la constitución establece la unidad religiosa y la confesionalidad del Estado, se prohíbe el ejercicio de cualquier otra*⁶⁹". Resulta oportuno reseñar que estas afirmaciones fueron efectuadas por este diputado posteriormente -en el año 1.837-, y que durante el debate constituyente de este texto no presentó ninguna objeción a esta confesionalidad. En este mismo extremo se ha pronunciado García Gárate, señalando que "*se trata de una Constitución confesional, pero sólo formalmente, ya que el pensamiento del pueblo y la realidad política de aquel tiempo no iban por el mismo camino*⁷⁰". Esta idea se vió claramente reflejada en la legislación aprobada en su desarrollo, donde las distintas disposiciones fueron claramente en contra de los intereses de la Iglesia Católica. En esta línea se han manifestado también Ibán, Prieto Sanchís y Motilla⁷¹, los cuales afirman que, a partir de 1.813, bajo la confesionalidad señalada se adoptaron "medidas de reforma de la Iglesia de signo diferente", donde latían los deseos de las Cortes de reformar la Iglesia y acomodarla a los nuevos planteamientos propugnados como paso previo a fin de avanzar en la sustitución del Antiguo Régimen.

⁶⁹. *Diario de Sesiones de las Cortes*, sesión del día 4 de abril de 1.837. pp. 2.481-2.484.

⁷⁰. García Gárate, A., *Desamortización y Concordato de 1.851* -en prensa, y que se dispone por gentileza de su autor-.

⁷¹. Ibán, I. C., , Prieto Sanchís, L., y Motilla de la Calle, A., *Derecho Eclesiástico*, Madrid, 1.997. p. 46.

3. CONSECUENCIAS DE LA CONFESIONALIDAD

La confesionalidad del presente texto no sólo se manifestaba en este artículo citado, sino que se expresaba en otros diversos órdenes, de suerte que eran numerosos los artículos que de forma directa o indirecta entraban a formar parte de esta regulación confesional. Así, se pueden destacar los siguientes extremos:

A) LEGISLACIÓN ELECTORAL: LA PARROQUIA

La Parroquia se articulaba como epicentro de la realidad política, desde un punto de vista territorial, competencial y funcional, convirtiéndose en circunscripción electoral⁷²

En los artículos dedicados a la elección de los representantes del pueblo, resultaba evidente el rasgo confesional. La mecánica era la siguiente:

1. Se congregaban en templos religiosos.
2. Antes de comenzar con sus votaciones, se celebraban ceremonias religiosas, Misas de Espíritu Santo.
3. Según las diversas ocasiones eran leídas o cantadas.

⁷². En este sentido escribe Jiménez Asensio, R., : *Apuntes para ...*, cit. pp. 50-51: "La proyección de la confesionalidad del Estado impregna, por lo demás, ciertos pasajes del texto constitucional: La parroquia, se constituye así en circunscripción electoral; determinadas celebraciones religiosas acompañaban al desarrollo de los procesos electorales; era obligatoria la enseñanza de la religión en las escuelas de primeras letras; etc ..."

4. El eclesiástico designado en la Constitución oficiaba un discurso "correspondiente a las circunstancias", incluso en el caso de las juntas de parroquia.

5. Después de ser elegidos los representantes del pueblo, se volvía a la Iglesia para cantar "un solemne Te Deum".

Se preveía incluso por el propio texto constitucional la presencia de clérigos de distinta jerarquía, dependiendo de los representantes de la nación a elegir. Los artículos más significativos son:

En el Art. 35 trataba de las juntas electorales de parroquia, e incluía dentro de ésta a los eclesiásticos seculares⁷³.

Según el Art. 46, en las juntas de parroquia, asistía el cura párroco para mayor solemnidad del acto⁷⁴.

El Art. 47 prescribía que en las reuniones de las juntas electorales de parroquia, pasaban a la parroquia con su presidente, y en ella se celebraba una misa solemne de Espíritu Santo por el cura párroco, quien dirigía un discurso correspondiente a las circunstancias⁷⁵.

⁷³. Art. 35: "Las juntas electorales de parroquia se compondrán dde todos los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la parroquia, entre los que se comprenden los eclesiásticos seculares".

⁷⁴. Art. 46: "Las Juntas de parroquia serán presididas por el jefe político o el alcalde de la ciudad, villa o aldea en que se congregaren, con asistencia del cura párroco para mayor solemnidad del acto; y si en un mismo pueblo por razón del número de sus parroquias se tuvieran dos o más juntas, presidirá una el jefe político o el alcalde, otra el otro alcalde, y los regidores por suerte presidirán las demás".

⁷⁵. Art. 47: "Llegada la hora de la reunión, que se hará en las casas consistoriales o en el
(continúa...)

En este sentido, el Art. 48 determinaba que concluida la misa, se daba principio a la junta⁷⁶

El Art. 58 señalaba que concluida ya la junta parroquial, en la parroquia se cantaba un solemne *Te Deum*⁷⁷.

En el Art. 71 se contenía que una vez finalizadas las elecciones de partido, los electores parroquiales pasaban con su presidente a la iglesia mayor, en donde se cantaba una misa solemne de Espíritu Santo por el eclesiástico de mayor dignidad, quien ofrecía un discurso conforme a las circunstancias⁷⁸.

De acuerdo con el Art. 86, una vez convocados los electores de los partidos de provincia, en seguida se dirigían los electores de partido, con su presidente a la catedral o iglesia mayor, en donde se cantaba una misa solemne de Espíritu Santo, y el Obispo y en su defecto el eclesiástico de mayor dignidad,

⁷⁵(...continuación)

lugar donde lo tienen de costumbre, hallándose juntos los ciudadanos que hayan concurrido, pasarán a la parroquia con su presidente, y en ella se celebrará una misa solemne de Espíritu Santo por el cura párroco, quien hará un discurso correspondiente a las circunstancias"

⁷⁶. Art. 48: "Concluida la misa, volverán al lugar de donde salieron, y en él se dará principio a la junta, nombrando dos escrutadores y un secretario de entre los ciudadanos presentes, todo a puerta abierta"

⁷⁷. Art. 58: "Los ciudadanos que han compuesto la junta se trasladarán a la parroquia, donde se cantará un solemne *Te Deum*, llevando al elector o electores entre el presidente, los escrutadores y el secretario"

⁷⁸. Art. 71: "Concluido este acto, pasarán los electores parroquiales con su presidente a la iglesia mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo por el eclesiástico de mayor dignidad, el que hará un discurso propio de las circunstancias"

presentaba un discurso propio de las circunstancias⁷⁹. Este artículo fue desarrollado mediante la Orden de 7 de septiembre de 1.813, por la que se señalaba qué eclesiástico debía ejercer los actos señalados en el artículo 86 de la Constitución en defecto del R. Obispo. En este decreto se determinaba que en caso de no poder asistir éste último, lo haría el de mayor dignidad presente⁸⁰.

B) CAPACIDAD ELECTORAL ACTIVA Y PASIVA DE LOS ECLESIAÍSTICOS

En principio un principio, en el texto constitucional se establecía el principio de igualdad entre seglares y eclesiásticos seculares para el desempeño de cargos políticos. Puesto que así se establecía tanto en el Art. 75⁸¹, (cualidades para ser elector de partido), como en el Art. 91⁸² (cualidades para ser diputado de Cortes).

Esta presunta igualdad entre los seglares y eclesiásticos que vivían fuera

⁷⁹. Art. 86: "En seguida se dirigirán los electores de partido con su presidente a la catedral o iglesia mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo, y el Obispo o en su defecto el eclesiástico de mayor dignidad, hará un discurso propio de las circunstancias".

⁸⁰. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de septiembre de 1.813, ... cit.* p. 233.

⁸¹. Art. 75: "Para ser elector de partido se requiere ser ciudadano que se halle en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, y vecino y residente en el partido, ya sea del estado seglar o del eclesiástico secular, pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen la junta".

⁸². Art. 91: "Para ser diputado de Cortes se requiere ser ciudadano que esté en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, y que haya nacido en la provincia, o este vecindado en ella con residencia a lo menos de siete años, bien sea del estado seglar. o del eclesiástico secular; pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen la junta, o en los de fuera de ella".

de sus conventos, pronto quedó vacía de contenido. En este sentido, se puede citar el desarrollo legislativo de esas disposiciones constitucionales, y concretamente algunas normas como el Decreto de 21 de septiembre de 1.812, por el que se determinaba que los eclesiásticos regulares tenían voto en las elecciones de los Ayuntamientos; pero no podían obtener en ellos ningún oficio⁸³. Las razones que servían de base para esta decisión estaban contenidas de forma precisa. Por una parte se señalaba como el Derecho canónico, de forma general, no permitía a los eclesiásticos el ejercicio de cargos en justicias o concejos, con objeto de un mejor desempeño de las funciones de su ministerio; Y, por otra parte, por las funciones propias de un cargo político, puesto que se recogía que no era bueno que religiosos se implicasen en responsabilidades ajenas a su vocación. Por ello, se les permitía ejercer su derecho al voto, pero no presentarse para ser votados.

En la práctica se planteaban problemas: era posible que en la persona de los religiosos acontecieran otras características que sí les permitirían acceder a cargos electos. Por ese motivo se aprobó el Decreto de 14 de junio de 1.813, por el que se señalaba que podían ser Diputados de Cortes los Catedráticos y Regulares secularizados, pero no los profesos de las Ordenes Militares⁸⁴.

Siguiendo a Clavero⁸⁵, se puede resumir lo anterior afirmando como en el

⁸³. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1.813 ... cit. pp. 87-88.*

⁸⁴. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de septiembre de 1.813 ... cit. pp. 109-110.*

⁸⁵. Clavero, B., *Manual de historia constitucional de España*, Madrid 1.984, pp. 35-37. De cualquier forma, resulta interesante la sistematización que efectúa, puesto que dentro de un epígrafe, que denomina Compromiso religioso, efectúa un análisis somero del art. (continúa...)

procedimiento electoral⁸⁶ se compromete por la misma Constitución a la Iglesia, no sólo porque la parroquia fuera la circunscripción electoral, sino por todo lo detallado. Aunque en realidad, se les dejaba prácticamente como testigos presenciales, con unas limitaciones muy importantes que en la práctica cercenaban su capacidad activa dentro del sistema electoral.

C) PROMULGACIÓN DE LAS LEYES POR EL REY

En la promulgación de las Leyes por el Rey se manifestaba la confesionalidad como reflejo del Antiguo Régimen.

El Art. 155, "El rey para promulgar las leyes usará de la fórmula siguiente: N.(el nombre del Rey) por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, ..., sabed: Que las Cortes han decretado, y Nos sancionamos lo siguiente ... : Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad ...".

⁸⁵(...continuación)

De cualquier forma, resulta interesante la sistematización que efectúa, puesto que dentro de un epígrafe, que denomina Compromiso religioso, efectúa un análisis somero del art. 12 para seguir analizando la ley electoral, la educación, la libertad de imprenta, y otros, pero en todo caso reconoce la influencia de la confesionalidad en la regulación de estas materias.

⁸⁶. Por citar algún dato curioso, se puede traer a colación lo escrito por Artola, M., *Partidos y programas ...*, cit. p. 41, quien ha significado que la relación entre el cuerpo de representantes de la nación y la población se trataba de un valor constante establecido siempre en función de una simple proporcionalidad aritmética, determinada por las dimensiones que se estiman óptimas para un cuerpo de representantes. Y además en la historia electoral española, oscilaba entre un diputado por 70.000 habitantes en 1.812 y uno por 35.000 en 1.854, siendo la proporción más frecuente uno por 50.000, con lo que el cuerpo de representantes se situaba en 1.812 entre 149 y 473 diputados.

El Rey continuaba sancionando por la Gracia de Dios, sólo que, ahora las Cortes jugaban un papel diferente. Puesto que encontraban su fundamentación en la señalada soberanía nacional.

D) PERSONALIDAD Y FUNCIONES DEL REY

La figura del Rey, tal y como ha escrito Fernández Segado, se vió sometida a modificaciones esenciales que la distanciaban muy sensiblemente del monarca absoluto del Antiguo Régimen, puesto que ya no lo era en virtud de un título recibido exclusivamente de Dios, sino que, con arreglo al Preámbulo de la Constitución, lo iba a ser "por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía"⁸⁷.

Aparecía también la confesionalidad en el texto, cuando hacía referencia a la personalidad y funciones del rey:

El Art. 168 señalaba que la persona del Rey era sagrada e inviolable, y que nunca estaba sujeta a ningún tipo de responsabilidad⁸⁸.

El Art. 169 "Tratamiento de Su Majestad Católica" fijaba ese tratamiento para con el Rey. Sin duda obedecía a la tradición histórica española, junto con el contenido confesional de la Constitución.

Sobre este extremo Sevilla de Andrés ha afirmado que la figura del Rey de la Constitución de 1.812 no sólo tenía el carácter de persona "sagrada e

⁸⁷ Fernández Segado, F., *Las Constituciones ...*, cit. p. 102.

⁸⁸. Art. 168: "La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad".

inviolable", "no sujeta a responsabilidad", sino que poseía realmente funciones ejecutivas de carácter independiente⁸⁹.

Siguiendo a Montesinos, se puede afirmar que la religión como institución del Estado suponía el fundamento de la sociedad, del orden constituido y también de la Monarquía. Por lo que tutelar a la Religión significaba proteger al Estado, e indirectamente al Rey, que seguía siéndolo por la Gracia de Dios⁹⁰.

Para finalizar con este apartado, se debe traer a colación la opinión al respecto, de uno de los más enfervorecidos defensores del Antiguo Régimen, como era Vélez⁹¹: "el príncipe era el ministro de Dios, y a su nombre regían los pueblos que le estaban sujetos: por su orden administraba la justicia: por su expresa voluntad establecía las leyes. El era el ungido del Señor. El que acometiera al soberano, el que maquinara contra su vida, el que se sublevara contra él resistiría la orden de Dios, destruía su misma obra: con un sólo delito se revelaba contra Dios y contra el príncipe, rompía los más sagrados vínculos de la sociedad y de la religión haciéndose reo de lesa majestad para con los hombres y con Dios".

El conocido regalismo del Siglo XVIII se concretaba también en el articulado de la Constitución, y concretamente en el Art. 171, apartado sexto, donde se contenían las funciones del Rey: Presentar para todos los obispados, y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos de real patronato, a propuesta

⁸⁹. Sevilla de Andrés, D., *Historia política ...* cit. p. 38-39.

⁹⁰. Montesinos Sánchez, N., *La Tuleta de la Religión ...* cit. p. 330.

⁹¹. Vélez, R. de., *Apología del Altar ...*, Tomo I, cit. p. 2 y *Apología del Altar ...*, Tomo II, cit. pp. 37-54.

del Consejo de Estado⁹²

E) DISTINTOS TIPOS DE JURAMENTOS

El juramento en la Constitución de Cádiz, como acto formal de acatamiento de su contenido, presentaba importantes notas confesionales que venían a desarrollar lo señalado en el Preámbulo y en el artículo 12.

Se contenían las diferentes fórmulas al efecto, aunque de forma asistemática, puesto que no presentaba un Capítulo o Título dedicado al juramento, y sí varios artículos dispersos a lo largo del texto. Sin embargo, resulta oportuno estudiarlos en su conjunto, no sólo para apreciar sus similitudes y diferencias, sino con la intención de explicar su existencia desde la visión confesional que manifestaba el texto gaditano.

Los distintos tipos de juramento eran:

La fórmula de juramento para el Rey, conforme al art. 173:

"N. por la gracia de Dios, ... juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana sin permitir otra alguna en el reino... así Dios me ayude y sea en mi defensa; y si no, me lo demande".

⁹². Art. 171: "Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como principales las facultades siguientes: ... Sexta: Presentar para todos los obispados, y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos de real patronato, a propuesta del Consejo de Estado"

En el mismo sentido, se prescribía el juramento para el Príncipe de Asturias en el Art. 212:

"N. Príncipe de Asturias, juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana sin permitir otra alguna en el reino... , así Dios me ayude".

El Art. 117 contenía la regla para los Diputados:

"... en la última junta preparatoria, se hará por todos los diputados, poniendo la mano sobre los Evangelios, el juramento siguiente: ¿Juráis defender y conservar la Religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en el Reino? -R. Si Juro.- ¿Juráis guardar y hacer guardar religiosamente la constitución política de la Monarquía española ...? ... - si así lo hicierais, Dios os lo premie, y si no, os lo demande".

Otro colectivo al que se le dedicaba especial atención estaba constituido por los miembros de los Ayuntamientos y de las Diputaciones de Provincia, estableciéndose al efecto el Art. 337, según el cual, antes de comenzar sus funciones debían prestar juramento obligándose simplemente a:

"...cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo"

En realidad, este juramento no representaba más contenido constitucional que el propio juramento en sí, puesto que el "cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo", no dejaba de ser una expresión figurada.

Sin embargo, al referirse al Poder Judicial, es decir, al juramento que

debían efectuar los Jueces⁹³, su contenido esencial no se expresaba en términos confesionales, y sí se ceñía a ser fieles a la Constitución:

El Art. 279, recogía que:

"...jurarán guardar la Constitución, ser fieles al Rey, observar las leyes y administrar imparcialmente la justicia"

Era evidente la diferencia que existía entre los diversos tipos de juramento, ya que si bien, y como característica común, jurar significa poner a Dios por testigo, los distintos tipos presentaban diferencias. En el juramento del Rey y el Príncipe, estaba la obligación de conservar y defender la religión católica, además de excluir cualquier otra. Esta obligación se extendía también a los Diputados, y a su vez se les hacía jurar la observancia religiosa de la Constitución. Para el juramento de los individuos de los Ayuntamientos y de las Diputaciones de Provincia, se establecía sólo la expresión figurada de cumplir religiosamente su cargo. Ahora bien, lo extraño, dada la similitud de los anteriores artículos, acontecía en el juramento de los Jueces: no aparecía la obligación de la religión, ni tan siquiera en expresiones figuradas como la anterior. No contenía más referencias sagradas que el juramento en sí.

F) COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO

La importancia del hecho religioso y la confesionalidad del texto, se manifestaba también en el propio Consejo de Estado⁹⁴

⁹³. Véase nota número 39.

⁹⁴. Sobre el Consejo de Estado, a mayor abundamiento, véase Tomás y Valiente, F., (continúa...)

Para su regulación se contenía el Capítulo VII *Del Consejo de Estado*, que comprendía los artículos 231 a 241.

El número de sus miembros se situaba en cuarenta, tal y como disponía el Art. 231, si bien se excluía de este órgano a los extranjeros, aunque tuvieran la carta de ciudadanos (carta de naturaleza)⁹⁵.

Tras haberse determinado su número, se concretaba su composición en el Art. 232. Respecto de la presencia de eclesiásticos, se prescribía que serían "... cuatro eclesiásticos, y no más, ..." ⁹⁶. Esta expresión última "... y no más ..." obedecía simplemente a la deficiente técnica legislativa, sin ningún tipo de connotación. Por lo que en resumen, se puede señalar que los eclesiásticos ostentaban una participación del diez por ciento en el Consejo de Estado.

En su desarrollo, la disposición más importante aprobada fue el Decreto de 8 de junio de 1.812, por el que se aprobaba el Reglamento del Consejo de

⁹⁴(...continuación)

Constitución ... cit. pp. 99-113. (El Consejo de Estado en la Constitución de 1.812).

⁹⁵. Art. 231: "Habrá un Consejo de Estado compuesto por cuarenta individuos, que sea ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos".

⁹⁶. El Art. 232: "Estos serán precisamente en la forma siguiente; a saber: cuatro eclesiásticos, y no más, de conocida y probada ilustración y merecimiento, de los cuales dos serán Obispos; cuatro grandes de España y no más, adornados de virtudes, talento y conocimientos necesarios; y los restantes serán elegidos de entre los sujetos, que más se hayan distinguido por su ilustración y conocimientos, o por sus señalados servicios en alguno de los principales ramos de la administración y gobierno del Estado. Las Cortes no podrán proponer para esas plazas a ningún individuo que sea diputado de Cortes al tiempo de hacerse la elección. De los individuos del Consejo de Estado, doce a lo menos serán nacidos en las provincias de ultramar".

Estado⁹⁷. Sobre este órgano tan importante en España, y de cara a la presente investigación, su relevancia se muestra limitada a los aspectos relacionados con el hecho religioso.

En este sentido, el Derecho de Presentación se situaba en manos del Consejo de Estado, tal y como establecía el propio reglamento en su artículo IV:

"Será por fin de cargo del Consejo, con arreglo a la Constitución, formar y presentar al Rey o a la Regencia las ternas para la presentación de todos los obispados y dignidades y beneficios eclesiásticos, y para la provisión de las plazas de judicatura".

A su vez el artículo X se remitía al IV señalando que:

"Las propuestas para las plazas y beneficios de que habla el artículo IV del capítulo II se harán por ternas, como previene la Constitución. No se incluirán en la propuesta otros sujetos sino los tres que sucesivamente hayan reunido mayoría absoluta de voto; y si hubiere empate, lo decidirá la suerte. A fin de que las propuestas se hagan con el debido conocimiento podrá el Consejo pedir informes sobre las circunstancias de los sujetos a cualquiera cuerpo o individuo; y unos y otros lo deberán dar"

⁹⁷. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1813, ...*, cit. pp. 12-21.

G) LA ENSEÑANZA

En la enseñanza estaba también presente la Confesionalidad.

El texto constitucional dedicaba su Título IX, De la Instrucción Pública, en su Capítulo Unico, que contenía los artículos 366 a 371. Sin embargo, se debe excluir el artículo 371, puesto que, aunque formalmente se encontraba dentro de este Título y Capítulo, su contenido se refería a la libertad de imprenta, y no a la educación.

Esa confesionalidad presentaba modificaciones, puesto que combinaba el estudio de la Religión junto a las obligaciones civiles nacidas del Nuevo Régimen. A tal efecto, se disponía la creación de escuelas de primeras letras donde se enseñaba a los alumnos además de a leer, escribir y contar lo que se denominaba "catecismo de la religión católica", que debía contener una breve exposición de las obligaciones civiles⁹⁸.

Tal y como ha señalado Puelles Benitez⁹⁹, "... los artículos 366 y 367 se limitaban a respetar la estructura educativa existente, ya que sólo recogían la enseñanza primaria y la de las universidades, sin que se efectuara referencia a la segunda enseñanza que, como sabemos, no existía de modo independiente...".

Otra de las prescripciones importantes venía significada en el Art. 368, en virtud del cual se establecía la uniformidad de la enseñanza en toda España,

⁹⁸. Nos referimos al Art. 366: "En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles"

⁹⁹. Puelles Benitez, M. de., *Educación e ideología en la España contemporánea (1.767-1.975)*. Barcelona 1.980. p. 56.

independientemente de la clasificación de los centros docentes¹⁰⁰.

En el comentario de este artículo, y siguiendo a Peset Reig, hay que señalar que se trataba de una disposición ambigua, puesto que ni tan siquiera en la discusión del constituyente se precisaba demasiado el alcance del precepto, con respecto a los llamados *establecimientos literarios donde se cursaban ciencias eclesiásticas y políticas*. Parece que se refería a los seminarios, aunque desde luego, no llegarían a entrar en ellos esa serie de estudios¹⁰¹.

Las prescripciones que disponía el texto gaditano, contenían el embrión de la preocupación preferente a la educación por parte de los gobiernos de cualquier ideología que acontecerían en España durante este siglo XIX.

En todo caso, desde la óptica del Derecho, la educación en la nueva España diseñada por la Constitución de Cádiz presentaba gran importancia. Por ello, se establecía una reserva de ley en favor de las Cortes para su regulación. Así se contenía en el Art. 370¹⁰².

Sobre el desarrollo de la educación, hay que afirmar que los liberales se propusieron la reforma de la enseñanza, puesto que entendían que debían crear una conciencia propicia desde abajo, es decir, desde las escuelas de primeras letras para la creación de una sociedad necesariamente distinta que acomodara y

¹⁰⁰. Art. 368: "El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas"

¹⁰¹. Peset Reig, M., La enseñanza de la Constitución de 1812 en *Estudios sobre la Constitución española de 1978*, Valencia 1980, p. 516-517.

¹⁰² Art. 370: "Las Cortes por medio de planes y estatutos especiales arreglarán cuanto pertenezca al importante objeto de la instrucción pública"

desarrollara el Nuevo Régimen¹⁰³.

En este corto período de tiempo no pudieron las Cortes aprobar ningún plan general, que modificara esencialmente la educación en España. Si bien, se debe citar el Proyecto de 7 de marzo de 1.814 por el que se situaba en el nivel de segunda enseñanza el estudio de la Constitución. (Esta, será desarrollada posteriormente en este capítulo).

Se puede afirmar que después de la Guerra de la Independencia, la educación en España presentará nuevos cauces influenciados directamente por las nuevas ideologías liberales¹⁰⁴.

H) LA LIBERTAD DE IMPRENTA

La Constitución de Cádiz consagraba la libertad de imprenta sin sujeción a censura previa, con la sola excepción de las materias que trataban sobre la religión. Sin embargo, en base a la importancia tan radical que este derecho tenía para los constituyentes, incluso antes de nacer la Constitución, se aprobaba la regulación del mismo. Aportando más datos que nos ayuden a verificar la

¹⁰³. Esta afirmación ha sido desarrollada por Peset, M., y Peset J.L., *La universidad española (siglos XVIII-XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal*. Madrid 1.974, p. 387.

¹⁰⁴. Ruiz Berrio, J., *Política escolar* ..., cit. pp. 21-22. Afirma que "La nueva educación" surgía después de la guerra contra Napoleón. Principalmente la recibían las clases superiores de la sociedad española entendiendo por tales la aristocracia y la cortesana. Ello se debía a que este tipo de educación nacía en unos establecimientos típicos, las casas o pensiones de educación, cuyos estipendios eran suficientemente altos para poder solamente ser pagados por la alta sociedad. De hecho, sus ideas se extenderían posteriormente a otros centros de enseñanza y, en general, a la mayor parte de las personas, pasando a dejar sentir su influencia en las costumbres, trabajos y aficiones de casi todas las ciudades españolas.

importancia de este derecho para los liberales de la época, hay que señalar que se trataba del Decreto número nueve de los aprobados por las Cortes de Cádiz. El Decreto de 10 de noviembre de 1.810, sobre Libertad política de imprenta¹⁰⁵

Antes de comenzar con el análisis de sus diferentes disposiciones, hay que señalar que se trataba de un Decreto voluntarioso, pero que poseía escasa técnica jurídica. Otra razón es que sus diferentes disposiciones se desarrollaban a lo largo de veinte artículos sin estar encuadrados en Títulos o Capítulos. Fue una regulación apresurada de unas Cortes que debían ocuparse de otros asuntos más importantes en ese momento, pero que en todo caso, mostraba la preocupación en la normalización de este derecho desde su incipiente nacimiento.

Siguiendo a Fiestas Loza¹⁰⁶, podemos afirmar que argumentos a favor de ambos extremos fueron calurosamente debatidos en las Cortes, desde la postura más liberal que pretendía una imprenta sin obstáculos para que en lo sucesivo se pudieran discutir todas las cuestiones referentes a la Iglesia¹⁰⁷. Hasta las posiciones más reaccionarias del clero absolutista, que pretendían una imprenta absolutamente censurada, para protegerse así de los peligros que traería consigo. A la postre, se aprobó la censura previa para escritos religiosos bajo el principio

¹⁰⁵. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1.811, ...* cit. pp. 13-17.

¹⁰⁶. Fiestas Loza, A., La libertad de imprenta en las dos primeras etapas del liberalismo español, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, Tomo LIX, (1.989), Madrid, 1.990, pp. 363-364.

¹⁰⁷ Argüelles, A. de., Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales y Extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León el día 24 de septiembre de 1.810, hasta que cerraron en Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1.813, Tomo I, Madrid, 1.865, pp. 197-236. (Concretamente p. 206). También puede verse en Argüelles, A., *La reforma constitucional de Cádiz*, estudio, notas y comentarios de texto por Longares, J., Madrid, 1970, pp. 160-161.

de la libertad de imprenta. Pero deben hacerse dos matizaciones:

Primera. La censura en materias religiosas, simplemente cambiaba de dueño, pasaba de manos de la Inquisición a manos de los Obispos.

Segunda. Una pregunta quedaba sin respuesta: ¿Quién señalaría los límites que separaban la potestad eclesiástica de la secular¹⁰⁸?

Ya en el análisis del texto, su Art. I señalaba la libertad más absoluta de imprenta, que rompía radicalmente con el sistema anterior, puesto que determinaba la no existencia de restricciones previas, y sólo la necesidad de controles posteriores. Literalmente, señalaba que: "Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresan en el presente decreto".

Los autores de este Decreto eran conscientes del alcance de su contenido, y sabían que ese principio de libertad dinamitaba la regulación jurídica de la imprenta del Antiguo Régimen. Por ello, su propio Art. II señalaba: "Quedan abolidos los antiguos jurados de imprentas, y la censura de las obras políticas precedente a su impresión".

Esa libertad se protegía mediante la exigencia de las oportunas responsabilidades a los autores¹⁰⁹ de cualquier abuso.

¹⁰⁸. Toreno, Conde de., Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Tomo. III, Madrid, 1.835. p. 461.

¹⁰⁹. El concepto de autor, aparecía delimitado, pero con escasa técnica jurídica. Puesto (continúa...)

Como se ha afirmado antes, este Decreto propugnaba la libertad de imprenta sin censura previa. Pero, esa idea rectora, se frenaba mediante una importante excepción, en realidad era la única que se planteaba, y se situaba en los impresos que versaban sobre temas de religión.

En nuestra opinión, el incipiente Nuevo régimen descaba una total libertad de imprenta, pero no podía ir en contra de la confesionalidad estatal, y por ello no podía contradecir al Derecho canónico, y por ello estableció ese límite para con las materias que trataban sobre la religión. Así se contenía expresamente en el Art. VI:

"Todos los escritos sobre materias de religión quedan sujetos a la previa censura de los Ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento".

Esa vigilancia específica sobre los escritos que versaban sobre la religión católica (en términos amplios), no sólo encontraba la especial protección de la censura previa, sino que llevaba aparejada, siempre a falta de un posterior desarrollo, una penalidad superior a cualesquiera otros delitos cometidos por

¹⁰⁹(...continuación)

que tras señalarse que los autores eran responsables de sus obras, se intercalaban algunos artículos, antes de especificarse que era lo que se debía entender por autor, o mejor dicho, qué sujetos se incluían dentro del término. En el artículo VIII "Los autores, bajo cuyo nombre quedan comprendidos el editor o el que haya facilitado el manuscrito original, ..." Ese mismo artículo VIII incluía una novedad muy importante constituida por la posibilidad de los escritores de no consignar sus nombres a sus escritos, "... no estarán obligados a poner sus nombres en los escritos que publiquen, aunque no por eso dejan de quedar sujetos a la misma responsabilidad..." Sin embargo, el nombre del autor le debía constar al editor o impresor, puesto que en caso contrario, eran estos últimos quienes sufrirían las consecuencias. Esa obligación de identificación de los autores, también se prescribía para los impresores. Puesto que se establecía la obligación de identificarse siempre en sus impresos que publicaran, independientemente de su clase y número.

medio de la imprenta¹¹⁰.

Las Cortes eran conscientes de la dificultad que entrañaba la nueva regulación de este derecho. Y por ello, para asegurar su "buen uso", diseñaron toda una serie de mecanismos para su control.

Se debe comenzar por el análisis del Art. XIII:

"Para asegurar la libertad de imprenta, y contener el mismo tiempo su abuso, las Cortes nombrarán una Junta suprema de Censura, que deberá residir cerca del Gobierno, compuesta de nueve individuos, y a propuesta de ellos otra semejante en cada capital de provincia compuesta de cinco".

En la composición de esas Juntas se incluía a un gran número de eclesiásticos, puesto que se determinaba que serían tres para la Junta suprema de censura (una tercera parte -tres de nueve-), y dos en las juntas de provincias (ese porcentaje, todavía se superaba puesto que eran dos de cinco, -un cuarenta por ciento-). Si bien, no hay que olvidar que el Tribunal de la Inquisición había sido abolido y por ello era necesario arbitrar otros mecanismos nuevos para el control de estos escritos.

La función de los censores se concretaba en la inspección de las obras, que habían sido previamente denunciadas ante las diferentes Juntas, y tras su comprobación se verificaba si debía ordenarse o no su secuestro. En caso afirmativo, se informaba al Juez, quien procedía a la retirada de la circulación del

¹¹⁰. El artículo XII así lo determinaba: "Los impresores de escritos sobre materias de religión sin la previa licencia de los Ordinarios, deberán sufrir la pena pecuniaria que se les imponga, sin perjuicio de las que, en razón del exceso en que incurran, tengan ya establecidas las leyes".

impreso censurado. Pero, en todo caso, el Decreto reconocía una especie de derecho de defensa para con el autor de la obra. Consistía básicamente en la posibilidad de solicitar copia de esa resolución para personarse y alegar cuanto estimara para su mejor derecho. La mecánica era simple, una vez que le llegaba la resolución de la junta, presentaba sus alegaciones, y en caso de no haber sido atendidas, podía recurrir ante la Junta Suprema¹¹¹

Bajo nuestro punto de vista, los dos artículos más interesantes, no quizá por su contenido para la regulación de este derecho, pero sí por las conclusiones que permite su estudio, eran el XIX y el XX. Y ello porque pese a haberse señalado la obligatoriedad de la censura previa para los escritos relacionados con temas religiosos, parecía que el legislador daba marcha atrás. Es como si se estuviera arrepintiéndose de permitir entender única y exclusivamente de la censura de los escritos que versen de religión a los Ordinarios. Puesto que se generaba una laguna¹¹² al permitir conocer a la Junta Suprema de Censura de los fallos del Ordinario, pero sin especificarse la calidad de esa segunda instancia. Dichos artículos especificaban:

¹¹¹. El decreto recogía medidas cautelares para supuestos muy concretos. En este sentido, se puede citar el caso donde el impreso hubiera sido detenido por injurias personales, la obra se paralizaba, de forma temporal, a espera de la sanción definitiva en el juicio correspondiente a las injurias.

¹¹². Fiestas Loza, A., La libertad de imprenta en ... cit. p. 368. Esta opinión coincide con lo manifestado por Fiestas Loza: "Aunque esos libros no habían de imprimirse sin licencia del Ordinario, -no podrá éste negarla sin censura y audiencia al interesado (art. XIX)-. Pero si el Ordinario insistía en negar su licencia, podría dicho interesado acudir con copia de la censura a la Junta Suprema, la cual -deberá examinar la obra, y si la hallase digna de aprobación, pasar su dictamen al Ordinario, para que más ilustrado sobre la materia, conceda la licencia, si le pareciere, a fin de excusar recursos ulteriores, (art. XX)- ¿Cuáles eran esos recursos ulteriores? Me imagino que esa laguna del Decreto de 1810 provocó más de un problema"

Art. XIX:

"Aunque los libros de religión no puedan imprimirse sin licencia del Ordinario, no podrá éste negarla sin previa censura y audiencia del interesado".

Se puede comprobar como se estaba reforzando la posición distinta, es decir, ese espíritu liberal, donde se pretendía no sólo señalar las acciones que asistían a los particulares, sino que, se incrementaba la protección de los derechos individuales frente a la Iglesia.

Pero, a la postre, el legislador presentaba importantes dudas sobre la concesión de derechos individuales en materias concurrentes con intereses de la Iglesia. Por ello se disponía en el

Art. XX:

"Pero si el Ordinario insistiese en negar la licencia, podrá el interesado acudir con copia de la censura a la Junta suprema, la cual deberá examinar la obra; y si la hallase digna de aprobación, pasar su dictamen al Ordinario, para que más ilustrado sobre la materia, conceda la licencia, si le pareciere, a fin de excusar recursos ulteriores".

Conforme a este artículo, el editor se podía dirigir a la Junta suprema para que dictaminara en contra de la opinión del Ordinario. Si así ocurría, -afirmaba sin aclarar nada esta disposición tan ambigua-, se volvía a remitir al Ordinario para que recapacitara, por la mayor ilustración, es decir, con la opinión de la Junta. Pero es a partir de ahí, donde surge la duda, por el uso de esos términos: "... si le pareciere, ...". Por lo que era el Ordinario quien disponía o no la publicación. Sin embargo, terminaba el artículo reconociendo la posibilidad de recursos: "... , a fin de excusar recursos ulteriores.". Por lo que hay que concluir

que realmente la última palabra sigue recayendo en manos de la Junta y no del Ordinario, puesto que en caso de establecerse los recursos el máximo órgano de censura era esa Junta suprema.

Tras el análisis del Decreto preconstitucional, se debe comentar lo que efectivamente se contenía en el texto constitucional.

La libertad de imprenta venía regulada en el art. 371:

"Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes".

Como se puede observar, en el texto constitucional no se contenía expresamente la excepción de los escritos que versaran sobre la religión, sin embargo, la coletilla "bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes", hacía referencia clara a ese extremo.

En cuanto a su sistemática, se encuadraba dentro del Título dedicado a la Instrucción Pública. El constituyente no creyó preciso dedicar un Título o Capítulo autónomo para él.

Su contenido no supuso una novedad, se limitaba a reproducir lo ya aprobado antes por las Cortes Generales Extraordinarias mediante el Decreto citado de 10 de noviembre de 1810 sobre libertad política de imprenta¹¹³

¹¹³. *Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su Instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta 24 de*
(continúa...)

La Constitución consagraba en este artículo el espíritu que inspirará a los textos constitucionales del Siglo XIX: "libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, remisión o aprobación alguna anterior a la publicación". Pero con la excepción de la censura previa que se ha significado: "los escritos sobre religión". Dicha censura se efectuará, tal y como ya se señalaba en ese Decreto y en el texto gaditano, por los Ordinarios eclesiásticos.

Acertadamente, Sánchez Agesta¹¹⁴ ha señalado como la libertad de imprenta no se perfilaba como un derecho individual, sino como una función pública al servicio de la opinión. Puesto que inicialmente, su sentido aparecía vinculado a la pasión crítica del siglo XVIII¹¹⁵. Pero esa función pública de la libertad de imprenta tenía un sentido más profundo, como órgano de la opinión pública era un elemento básico para un régimen fundado en la Soberanía Nacional.

¹¹³(...continuación)

septiembre de 1.811, ..., cit. pp. 13 a 16.

¹¹⁴. Sánchez Agesta, L. *Historia del ...*, cit. p. 110.

¹¹⁵. *Ibidem*, p. 111. "Este sentido lo entienden y apoyan todos los diputados. Inguanzo mismo, el implacable detractor de la Constitución, dirá ante las Cortes: Los gobiernos y los tribunales tienen sobre sí otro tribunal más alto, que es el de la opinión pública; y en efecto, es un contrapeso admirable de la potestad para contenerla en sus límites, porque todos aprecian su honor y reputación, y ningún hombre deja de tener bastante amor propio para que no tema la censura de los demás en el ejercicio de sus funciones y conducta pública".

III. DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA CONSTITUCIÓN.

Esta confesionalidad contenida en las diferentes materias analizadas no coincidía con la realidad social española. Quizá, la afirmación más expresiva que podía comprender lo anterior, fue efectuada el siglo pasado por uno de los grandes detractores de nuestro primer intento constitucional, como lo fue el padre De Vélez. Éste señalaba que *el artículo que parecía la vida para la Iglesia era como un Decreto de muerte*¹¹⁶. (se refería al Art. 12 de la Constitución).

Sin embargo, para llegar a esa misma conclusión, se debe partir del estudio de nuestro Derecho, de los Decretos emanados de las Cortes¹¹⁷. Puesto que, por una parte, y como comienzo, nos encontramos un reconocimiento excluyente de la religión católica, en tiempo presente e incluso futuro, junto con otras consecuencias -detalladas antes-, dentro del texto constitucional. Pero sin embargo, por otra parte, se aprobaron numerosas disposiciones (Decretos y Órdenes) contrarias a los intereses de la Iglesia católica, que en todo caso, tendían a debilitar su poder con el fin último pretendido por las propias Cortes de su reforma integral¹¹⁸.

¹¹⁶ Vélez, R. de., *Apología del ...*, Tomo I, cit. pp. 205

¹¹⁷ Existen algunas obras que contienen las disposiciones adoptadas por las Cortes de Cádiz, y otras que incluyen también las aprobadas también durante el Trienio Liberal. Estas obras resultan interesantes para una completa visión de la obra de las Cortes liberales en la España de 1.810-1.814, y de 1.820-1.823. Entre otras, veasé Muro López Salgado, M., *Decretos y órdenes de Cortes en las dos épocas de 1.820 a 1.814, y 1.820 a 1.823*, Valladolid, 1.875. Se trata de un simple compendio, cuya importancia se centra en su índice.

¹¹⁸ En la importancia de estos Decretos para conocer la dialéctica entre la confesionalidad cerrada del texto y las medidas que suponen cortapisas importantes en
(continúa...)

Por lo que respecta a los autores de estas reformas, se pueden citar, entre otros a Pérez de Castro, Canga Argüelles, Barbají, Martínez de la Rosa, etc ... ¹¹⁹.

1. DESAMORTIZACIÓN

Hay que comenzar señalando que la Iglesia poseía una gran cantidad de bienes, y por una parte, y en principio, tal y como figuraba en el Art. 8 del Concordato de 1.753 no eran gravados con tributos estatales, y por otra parte, tampoco generaban riqueza al pertenecer a esas denominadas "manos muertas" ¹²⁰.

¹¹⁸(...continuación)

el desarrollo e influencia de la Iglesia, coinciden numerosos autores. Entre otros, veasé, Revuelta González, M., *Las reformas religiosas ...*, cit. pp. 41-66. Y también Montesinos Sánchez, N., *La cuestión de la confesionalidad en la historia constitucional española. Un análisis de legislación (1.808-1.031)*, en *Revista Española de Derecho Canónico*, Núm. 136, Ene-Jun, Vol. 51 (1.994), p. 123.

¹¹⁹. Entre otros, puede verse desarrollado en Ubieto, A., ; Reglá, J., ; Jover, J.M., ; Seco, C., *Introducción a la Historia de España*, Barcelona, 1970. p. 548.

¹²⁰. Menéndez-Pidal, G., *La España del Siglo XIX vista por sus contemporáneos*, Tomo I, Madrid, 1.988. pp. 416-417. Ha precisado perfectamente cual era la situación previa en la que se partía, puesto que ha señalado que: "... En el siglo XVII dicen que se podía afirmar que cada tres leguas que el viajero recorría, atravesaba al menos una legua por tierras eclesiásticas o de señorío; sin olvidar que, naturalmente, esa legua era siempre de las tierras más fértiles y mejor situadas. Según Canga Argüelles, al finalizar el siglo XVIII por cada tres artesanos había un clérigo, y esos clérigos poseían doce millones de medidas de tierra y tres millones de cabezas de ganado, con lo que a cada clérigo correspondían 73 medidas de tierra y 18 cabezas de ganado; sin olvidar que a algunos correspondía mucho más, pues el problema del desequilibrio en la riqueza era grande: en términos generales, el clero regular privilegiaba sobre el secular; a finales del XVIII entre Madrid, Córdoba y Sevilla, que sumaban una población de 268.000 habitantes, contaban con 59 parroquias frente a 194 conventos. Al comenzar nuestro siglo XIX, en España había todavía un eclesiástico por cada 51 habitantes, y esto suponía haber entrado ya en pleno declive. Pero no podemos olvidar que en 1.826 considerábamos que el número de clérigos va acelerando su descenso, hay un clérigo por cada 91 habitantes y un médico por cada 2.300 habitantes. Con todo el problema más llamativo al comenzar el siglo XIX era el de las tierras cultivadas, de las cuales 17 millones pertenecían a manos muertas.

(continúa...)

1.1 INTRODUCCIÓN

La desamortización, en un principio, comenzó de acuerdo con la propia Iglesia. Carlos IV solicitó permiso a Roma para las primeras incautaciones de bienes propios de la Iglesia en España, obteniendo el beneplácito de ésta. Sin embargo, esa forma de actuar dió un importante giro con la entrada del siglo XIX, de forma que, las decisiones para llevar a cabo la desamortización se tomaron de forma unilateral y en consonancia con los criterios políticos del poder civil, sin pretenderse ni buscarse beneplácito alguno de la Santa Sede, de suerte que, la desamortización se convirtió en obra unilateral del poder político.

Por ello, se puede afirmar que desde este momento la desamortización comenzaría a ser entendida como instrumento de cambio en España: cambio social, económico y político¹²¹

¹²⁰(...continuación)

Todavía en ese año de 1.826, Miñano calculaba que dividiendo las rentas eclesiásticas entre sus miembros, correspondían a cada uno 7.000 reales, lo cual suponía una cifra sustanciosa; pero el propio Miñano advertía que esa distribución era totalmente irreal por cuanto sólo parte de los eclesiásticos poseían bienes raíces, con lo que para esos privilegiados las rentas serían de unos 30.000 reales, mientras para otros muchos eclesiásticos eran mínimas. También es notable el número de edificios conventuales que poseía la Iglesia al terciar el siglo. Y también esta riqueza se distribuía de forma muy variable: en Salamanca había un convento por cada 157 habitantes, en Segovia cada 400, mientras que en Madrid correspondía un convento a cada 2.300 habitantes, y en Murcia llega a uno por cada 3.157 habitantes. Esto no basta para hacerse somera idea del poder de la Iglesia española. Tal vez convenga comparar esas cifras españolas con las de otros países: así podremos establecer esta gradación en la proliferación de gentes de iglesia católica, protestante, etc., al terciar el siglo. Cuando hemos visto que en España había un clérigo por cada 91 habitantes tenemos en Italia uno sobre 200, en Francia uno sobre 280, en Inglaterra uno sobre 350, en Austria y Hungría, uno por sobre 610, y en los Países Bajos, uno sobre 650. En resumen España superaba siete veces a los Países Bajos en masa clerical. ..."

¹²¹ Técnicamente la Desamortización pretendió un triple objetivo: social, económico y
(continúa...)

Con ella, se perseguían numerosos fines. Entre ellos puede citarse: la solución para paliar la deuda pública que se había elevado a cotas muy importantes; o para soportar los gastos militares; o bien potenciar conforme a las ideas ilustradas la creación de pequeños propietarios que fueran capaces de crear la capa burguesa que tanto necesitaba España para su desarrollo económico, de forma que éstos fueran también el apoyo para el gobierno liberal; o incluso el cambio del sistema fiscal español; o las relaciones Iglesia y el Estado; o la modernización y cambio de la agricultura y el comercio. Estos fines hay que entenderlos no sólo como meros acontecimientos con trascendencia económica, política, religiosa o cultural, sino dentro de un "marco" más amplio.

Un marco¹²² donde se iba modificando la propia sociedad española durante un período temporal concreto. Estos cambios no se centraban sólo en la propiedad de la tierra, sino que se trataba de transformaciones mucho más profundas que

¹²¹(...continuación)

político. *Socialmente*, se privó a los antiguos estamentos -clero, nobleza y municipios- de su fuerza propia, de forma que se preparaba el paso de la vieja sociedad "estamental" a la nueva sociedad "clasista" y se dotaba de tierra, mediante la oportuna intervención estatal, a la masa de campesinos que carecían de ella. *Económicamente* supuso la posibilidad de cultivar unas tierras que sus antiguos propietarios tenían prácticamente abandonadas. Y *políticamente*, el Estado con visión futurista podría llevar a cabo sus ideas revolucionarias creando una nueva clase de propietarios interesados en mantener el régimen, porque su suerte iría unida a la de su fortuna personal. Véase Ubieto, A., Reglá, J., Jover, J.M., Seco, C., *Introducción a la Historia de España*, Barcelona 1.970, pp. 554-555. En el mismo sentido, entre otros, Torres del Moral, A., *Constitucionalismo* ..., cit. pp. 64 y 65. Colomer Viadel, A., *Los liberales y el origen de la Monarquía Parlamentaria en España*, Valencia, 1.993. p. 16.

¹²². Escribe Tomás y Valiente, F., *El marco político de la desamortización en España*, Barcelona, 1.977. p. 6.: "... lo primero que hay que señalar es su complejidad por los aspectos de la realidad en los cuales converge lo socio-económico, lo jurídico, lo político, lo concerniente a la relación Iglesia-Estado, etc....". En el mismo sentido se pronuncia Fontana y Lázaro, J., *La revolución liberal -Política y Hacienda Pública-*, Madrid, 1.977, pp. 136-146. Y también entre otros, García Gárate, A., *Desamortización y Concordato*, en prensa y que he podido consultar por gentileza de su autor.

constituyeron el paso al Nuevo Régimen.

Y todo ello sin olvidar el elemento ideológico propio de la desamortización, según el cual era ineludible esta incautación de las tierras propias del clero de cara al cambio social y para el paso de una sociedad estamental hacia una sociedad de clases¹²³.

Para conseguir este cambio social, se incidió sobre dos polos, la desamortización y la desvinculación de los patrimonios señoriales. En el presente trabajo, nos centraremos en la desamortización, dejando a un lado la desvinculación, no por su menor importancia, sino en favor de los intereses de esta investigación.

1.2 PRECEDENTES

Aunque se ha afirmado que la desamortización, entendida como instrumento de cambio, comenzaba en este momento en España, no significa que no hayan existido otras etapas desamortizadoras anteriores a la Constitución de Cádiz.

De forma muy breve, y únicamente a efectos de precedente ilustrativo, se pueden reseñar diferentes momentos:

¹²³. Tomás y Valiente, F., Recientes investigaciones sobre la desamortización: intento de síntesis, en *Moneda y Crédito*, nº 131, (1974), p. 146.

A) Desde los Concilios de Toledo hasta la Novísima Recopilación:

Los Concilios de Toledo eran los primeros que limitaban las adquisiciones de la Iglesia. Este criterio se seguía en los demás Concilios y después en el Fuero Juzgo. En los siglos XV y XVI los Reyes y especialmente Carlos V y Felipe II obtenían bienes y rentas eclesiásticas, junto a algunas gracias, como el sostenimiento de 60 galeras en el Mediterráneo y la del excusado concedida por el Sumo Pontífice Pío V. Se empeñaban los fondos de Cruzada, el Cardenal Borja dio a Felipe IV 50 mil escudos de sus beneficios, la Orden de San Benito entregó 12 mil doblas de oro y en alguna ocasión se llegaba a vender la plata de las Iglesias¹²⁴.

Todos estos datos demostraban que en este largo período histórico la Iglesia estaba siempre dispuesta a entrar en transacciones con el Estado, o quizá el Estado con la Iglesia, al menos hasta el Siglo XIX.

La siguiente etapa desamortizadora la situamos en

¹²⁴. Véase Brañas, A., *Curso de Hacienda Pública, -General y española-*, Santiago de Compostela, 1.896. p. 93.

B) La Novísima Recopilación de las Leyes de España, (Carlos IV), 1.798.

El precedente más cercano encontraba su antesala dentro del reinado de Carlos IV. Y más concretamente con el Real Decreto de 19 de septiembre de 1.798¹²⁵ inserto en Cédula Real del Consejo el 25 del mismo mes. A esta medida, hay que sumar la Real Cédula de 25 de septiembre de 1.978¹²⁶ estableciendo la incorporación a la Hacienda Real de las temporalidades pertenecientes a los Jesuitas¹²⁷. Esta última medida supuso la primera incautación violenta en la desamortización.

En este primer momento, el objetivo principal de la desamortización se fijaba en la ocupación de bienes civiles, situándose en un segundo plano los eclesiásticos, aunque también eran apetecidos por el Estado. Se disponía la venta de los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión, y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos legos.

En lo relativo a la desamortización eclesiástica, dicha norma señalaba que *"se invite a los M.RR. Arzobispos, RR. Obispos, y demás prelados eclesiásticos seculares y regulares a que, bajo igual libertad que en los Patronatos de Sangre y Obras pías laicales, promuevan espontáneamente, por un efecto de su celo por el bien del Estado la enajenación de bienes correspondientes a Capellanías colativas u otras fundaciones eclesiásticas, depositando su producto en la caja*

¹²⁵ *La Novísima Recopilación de las Leyes de España*, Ley XXII, Tit. V, libro Iº Edición facsímil, elaborada por la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, Madrid 1.975, pp. 51-52.

¹²⁶ *Ibidem*, Ley XXIV, Tit. V, Libro Iº pp. 53-54.

¹²⁷ Como es conocido, las disposiciones contrarias a los Jesuitas, se repetirán a lo largo del siglo XIX.

de amortización".

Por ello se puede afirmar que en este primer momento la desamortización nacía de acuerdo con Roma, de forma que era el propio Papa Pío VII el que autorizaba la venta de bienes eclesiásticos mediante un Breve Pontificio de fecha de 14 de junio de 1.805, tras previa petición del monarca español. Y aún así, como se ha señalado, las propias disposiciones de ésta Real Cédula tan solo invitaban a las jerarquías eclesiásticas a que promovieran la venta de bienes eclesiásticos a favor de las arcas del maltrecho Estado.

Esto era producto y ejemplo claro de la confesionalidad propia de la época y de la armonía existente entre Iglesia y Estado, que sufrirá numerosas vicisitudes a lo largo del siglo XIX.

En este momento, no se pensaba en los efectos que la desamortización traería consigo, se utilizaba únicamente como medio para desvincular algunas propiedades sobre todo civiles y algunas eclesiásticas, a favor de la Hacienda Pública y para mitigar la ingente deuda del Estado.

Esta Real Cédula sentaría un precedente que sería desarrollado por los gobiernos posteriores aunque en términos muy diferentes.

La siguiente etapa se encuadra en

C) Estatuto de Bayona. Los decretos de Chamartín

De la mano del liberalismo francés y dentro del marco jurídico del Estatuto de Bayona de 1.808 aparecieron, como se ha señalado en el Capítulo anterior, algunas de las claves del liberalismo español del Siglo XIX.

Tras estos precedentes, nos situamos en éste momento protagonizado por la labor legislativa de las Cortes gaditanas.

1.3 LA OBRA DESAMORTIZADORA DE LAS CORTES DE CÁDIZ

La primera norma desamortizadora fue el Decreto de 18 de febrero de 1.813, determinando providencias interinas sobre el restablecimiento de algunas casas religiosas permitido por el Gobierno¹²⁸. Mediante éste se determinaba el restablecimiento de algunas "de las casas religiosas", sin embargo, se delimitaba muy claramente su extensión, puesto que, antes de señalarse cuales eran las restablecidas, se contenía de forma literal el aviso genérico, que presagiaba más medidas de este tipo y sobre todo el arreglo del clero que ya había señalado el régimen afrancesado: "... y sin perjuicio de las medidas generales que se sirvan adoptar cuando llegue el caso de resolverse el expediente general sobre reforma de éstos, ..."

En el presente Decreto, en lo que podría llamarse exposición de motivos¹²⁹, hacía referencia a un expediente general sobre la reforma de las órdenes religiosas. -por lo que, ya estaba fehaciente el deseo del legislador de renovar el clero, de modificar su estatus-

¹²⁸ *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1813, ...*, cit. pp. 211-212.

¹²⁹ El Preámbulo no dejaba dudas, ésta medida sería acompañada de otras: "Las Cortes Generales y extraordinarias, con presencia de las órdenes expedidas por la Regencia del reino en 25 de diciembre, 4, 14, 26, y 29 de Enero últimos para el restablecimiento de varias comunidades religiosas: penetradas del celo piadoso y del mismo espíritu que impusó a S.A. a tomar resoluciones, para que su determinación sea tan útil como conviene a los Regulares y a toda la Nación, y sin perjuicio de las medidas generales que se sirvan adoptar *cuando llegue el caso de resolverse el expediente general sobre reforma de estos*, han tenido a bien decretar y decretan: ..."

Las medidas concretas que se presentaban eran:

I. Acordaba el restablecimiento de las órdenes religiosas que se mencionaban, si bien les imponía una condición en algunos casos nada fácil de salvar: *sin permitirse por ahora que se pida limosna para reedificar estos edificios o sus iglesias.*

II. Que no se restablecieran, ni subsistieran establecidos conventos que no tuvieran doce individuos profesos, con la excepción que fuere el único en el pueblo, y, en todo caso, debían completar un número superior con individuos de la misma orden.

III. En los pueblos donde existían muchos conventos de un instituto, se restablecía uno sólo.

Ahora bien, estas medidas se expresaban con efectos retroactivos a la fecha de aprobación del presente Decreto, tal y como se disponía en su Art. VII.

Todo ello, ya había sido ordenado anteriormente en el desarrollo del Estatuto de Bayona. Pero ahora, desde la creación propia española, se pretendía dar el primer paso para la reforma del clero.

Se trataba, de una serie de medidas que comportaban efectos negativos para la Iglesia. La razón es que limitaba, tanto el establecimiento de nuevos conventos, como el restablecimiento de los anteriores al cumplimiento de requisitos, que teniendo en cuenta el contexto social (la guerra de independencia, los inmuebles propiedad del clero dañados en la guerra, las bajas de eclesiásticos

en la guerra, etc...), podían considerarse trabas importantes, para la Iglesia¹³⁰.

Tras este Decreto, donde se desamortizaron muchos conventos, se aprobaron algunas disposiciones que suavizaban la situación de la Iglesia y sus ministros en España. Tal fue el caso del Decreto de 26 de agosto de 1813, sobre el restablecimiento de algunos conventos y dotación de sus individuos¹³¹.

Este Decreto, por un lado, incidía nuevamente en la necesaria y futura reforma de la Iglesia, -al igual que cualquier disposición que hiciera referencia a los bienes eclesiásticos en aquella época-. Literalmente señalaba: "*... Mientras llega el caso de que las Cortes acuerden lo conveniente sobre el plan general que se les ha presentado para el restablecimiento y reforma de los conventos y monasterios, disponga la regencia del reino ...*". Por lo que estas disposiciones, por concepto, eran temporales y pensadas para su aplicación en tan sólo un breve espacio de tiempo. Por otro lado, desarrollaba el primer Decreto señalado, disponiendo la entrega a los Prelados regulares de algunas casas de sus respectivos institutos, y de medios económicos para su subsistencia, pero siempre desde esa nota de provisionabilidad, y para que aquellos eclesiásticos que no hubieran tenido colocación ni por los Ordinarios ni por el Gobierno, pudieran ocupar conventos o monasterios nacionalizados, junto con otros individuos de la misma orden.

Se debe señalar que la entrega de esos inmuebles estaba supervisada por

¹³⁰. En este sentido, Revuelta González, M., *La Iglesia española* ..., cit. p. 67.

¹³¹. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de septiembre de 1813, ...*, cit. pp. 185-186.

los Intendentes de las Provincias¹³².

La abolición de la Inquisición en España, tiene cabida dentro de varios apartados de la presente investigación, y uno de ellos es éste, puesto que contenía disposiciones desamortizadoras. Nos referimos al Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se procedía a la abolición de la Inquisición, y al establecimiento de los tribunales protectores de la fe¹³³. Se partía de dos premisas claras, a la hora de adoptar esta decisión:

1. La Religión católica, apostólica y romana era la religión de España. Por ello su Art. I recogía: *"La Religión Católica, Apostólica y Romana será protegida por leyes conformes a la Constitución"*.

2. El Tribunal de la Inquisición era incompatible con el Nuevo Régimen.

¹³². Tal y como se disponía mediante la Orden de 26 de agosto de 1.813, por la que se exigía responsabilidad a los Intendentes que no cumpliesen lo mandado acerca de la entrega de conventos a los Prelados regulares. (*Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de septiembre de 1.813, ...*, cit. pp. 186-187).

¹³³. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1.813, ...*, cit. p. 215-218.

Este Decreto anterior trajo consigo una serie de efectos o consecuencias. Lo más necesario, en un primer momento era dotarle de mayor publicidad, para que fuera perfectamente conocida por todos su abolición. En este sentido nos encontramos el Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se manda leer en las parroquias el Decreto anterior, y el manifiesto en que se exponen sus fundamentos y motivos. Y por otra parte, se pretendía "pasar página" cuanto antes a los restos que pudieran recordar esa institución y por ello se aprobó el Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se mandan quitar de los parajes públicos y destruir las pinturas e inscripciones de los castigos impuestos por la Inquisición. (*Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1.813, ...* cit. p. 218 y 219 -respectivamente). Sin olvidar la nacionalización de todos sus bienes y derechos, tal y como se señala en el presente capítulo.

En el mismo sentido, el segundo de sus artículos recogía esa idea. Art. II: *"El Tribunal de la Inquisición es incompatible con la Constitución"*

Con acierto, ha señalado Tomás y Valiente¹³⁴ como la relación idílica de la Iglesia con las Cortes liberales se vió truncada con el Decreto de abolición de la Inquisición. Y a mayor abundamiento, hay que recordar la creación de la *Liga de varios Obispos y Cabildos eclesiásticos con pretexto de resistir la lectura en las parroquias del decreto y manifiesto de las Cortes aboliendo la Inquisición*¹³⁵.

Como corolario del anterior Decreto, se aprobaba el Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se declaraban nacionales los bienes que fueron de la Inquisición, y se disponían varias medidas sobre su ocupación, y sobre el sueldo y destino de los individuos de dicho tribunal¹³⁶.

Su título resultaba suficientemente elocuente para conocer su contenido, pero, de cualquier forma, para su estudio, hay que destacar lo que contenía en los tres primeros artículos:

Su Art. I simplemente recordaba la abolición de la Inquisición, con lo que, y como consecuencia lógica, sus bienes quedaban vacantes conforme, tanto al Derecho canónico como al Derecho común. Por lo que *"... así muebles como*

¹³⁴. Tomás y Valiente, F., *Constitución ...*, cit. p. 118.

¹³⁵ Argüelles, A. de., *Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales y Extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León el día 24 de septiembre de 1.810, hasta que cerraron en Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1.813*, Tomo II, Madrid, 1.865, pp. 211-249. Ha dedicado el Capítulo XI a este hecho: *"Liga de varios Obispos y Cabildos eclesiásticos con pretexto de resistir la lectura en las parroquias del decreto y manifiesto de las Cortes aboliendo la Inquisición"*

¹³⁶. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1.813*, ... cit. p. 220-224.

raíces o semovientes, los derecho y acciones, los patronatos, censos, y otras cualesquiera prestaciones pertenecientes a la Inquisición, ora estén poseídas, o solamente demandadas".

Por su parte, el Art. II se limitaba a atribuir a la Nación la titularidad de dichos bienes vacantes y siempre *"... en los mismos términos e igual derecho que la Inquisición los poseía, disfrutaba o demandaba"*.

El Art. III, recogía la obligación por parte de la Nación de hacer frente a las cargas que tuvieran dichos bienes.

A la vista de esos tres artículos, se puede decir que estaba cerrado el círculo, ya que dichos bienes pasaban a ser propiedad de la Nación.

En el resto de los artículos se contenían otras disposiciones tendentes a evitar fraudes, como el declarar la nulidad de las disposiciones de bienes o derechos desde la fecha de aprobación de este Decreto, o penas especiales para aquellos que defraudaren a la Nación mediante la apropiación de cualesquiera de esos bienes. Y también medidas para proceder a la recepción de dichos bienes por parte de los intendentes de provincia y formación de inventario, junto a otros datos de menor interés.

Por señalar alguna disposición sobre la deuda pública en este período, se puede traer a colación el Decreto de 15 de agosto de 1.813, por el que se aprobaba el Reglamento para la liquidación de la deuda nacional¹³⁷.

¹³⁷. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de septiembre de 1.813, ...*, cit. pp. 176-182.

Para concluir, se puede afirmar siguiendo a Cuenca que *las cortes de Cádiz sólo dispusieron la venta de los bienes de los regulares, sin llegar a tocar a los demás eclesiásticos; implantaron por tanto, más que una verdadera desamortización, una secularización*¹³⁸

2. FINANCIACIÓN

Aunque el estudio de este epígrafe se limita a la financiación directa del Estado a la Iglesia, entendemos ésta limitada simplemente a la entrega de cantidades a la Iglesia por parte del Estado, merece la pena detenerse en algunas disposiciones que se aprobaron en este período aunque de contenido distinto, puesto que responden a prácticas regalistas.

Por una parte, la Guerra de la Independencia implicaba esfuerzos económicos de la Iglesia para con las arcas de la Hacienda Pública. Por ello, podemos encontrar disposiciones como el Decreto de 20 de abril de 1.811, sobre aplicación al erario de los productos de los beneficios que estén en economato, los de espolios y vacantes y parte de las pensiones eclesiásticas¹³⁹

Por otra parte, encontramos otras disposiciones que eran precedente del incipiente sistema de financiación estatal, donde las Cortes regulaban para su operatividad el necesario apoyo de la Iglesia.

¹³⁸ Cuenca, J.M., *D. Pedro de Inguanzo y Rivero (1764-1836)*, Pamplona, 1.965, p. 130.

¹³⁹ *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1.811, ...*, cit. p. 122-123.

En este sentido, se debe señalar el Decreto de 3 de mayo de 1.811, que contenía el Reglamento sobre la imposición e inversión de una manda forzosa en los testamentos que se otorgaran en todos los dominios de la Monarquía durante la guerra y diez años después, destinada al socorro de nuestros prisioneros, sus familias, viudas, y otros¹⁴⁰.

Presentaba especial interés, puesto que, aunque la manda pía forzosa consistía en una determinada cantidad fija de dinero, -podía aumentarse por la sola voluntad del finado, herederos o legatarios-, que se detraía del caudal hereditario, los recaudadores eran los párrocos que oficiaban el funeral, quienes junto al cobro de sus derechos retenían la manda pía¹⁴¹ para entregarla posteriormente a las arcas del erario público¹⁴².

¹⁴⁰. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1.811, ...*, cit. pp. 132-138.

¹⁴¹. En este momento, se había instituido por tiempo de 10 años, pero se prorrogaron sus efectos y se delimitó más su contenido mediante la *Real orden de 8 de agosto de 1.825 restableciendo y rectificando la Manda pia forzosa que debía hacerse en los testamentos que se otorgaran en todos los dominios de la monarquía del modo que se expresaba*. En realidad se prorrogaban sus efectos y lo más importante, de cara a esta investigación, se determinaba que "Los párrocos cobrarán la Manda pia forzosa bajo su responsabilidad sin salario ni emolumento alguno al mismo tiempo que sus derechos y los demás del funeral, ...". La liquidación de esas retenciones se producía cada cuatro meses a manos de las Contadurías de provincia. Sin embargo, la obligación formal recaía antes del pago, y esta se cumplía frente a los intendentes facilitando los párrocos a éstos las listas de todos los finados durante ese tiempo. (*Decretos del Rey Don Fernando VII y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.825*. Tomo Décimo, Madrid en la imprenta real, 1.826. pp. 237-242).

¹⁴². Después los canalizaba para obras benéficas (pensiones de perjudicados por la guerra, los que habían perdido sus fortunas por la invasión francesa, los misioneros en Africa, Asia, etc...).

3. ENSEÑANZA

Durante este periodo no se aprobó ninguna disposición que regulara la enseñanza. Sin embargo, las Cortes entendían que debían modificar la enseñanza en su conjunto para favorecer la instauración del Nuevo Régimen.

En esta línea se han pronunciado Peset, L.J., Garma, S., y Pérez Garzón, J.S.,¹⁴³ afirmando que los liberales sabían necesaria la instrucción para asegurar el dominio de sus dirigentes sobre el pueblo. Éste apenas participó en las decisiones básicas, pues su ignorancia o el voto censitario le excluyeron del poder. Los liberales españoles se aprestaron a transferirles aquel mínimo de instrucción indispensable para lograr su apoyo, buscando enajenarlo de viejas ideas.

Siguiendo esa idea, se puede citar el Proyecto de 7 de marzo de 1.814¹⁴⁴. Nos referimos al conocido *informe Quintana*¹⁴⁵ que contenía las premisas que definirían la estructura educativa del régimen burgués¹⁴⁶.

¹⁴³. Peset, L.J., Garma, S., y Pérez Garzón, J.S., *Ciencias y enseñanzas...*, cit., p. 387.

¹⁴⁴. Se trata del Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública. Puede consultarse en Quintana, *Obras completas*, Vol. XIX, Madrid, 1.861, pp. 175-191.

¹⁴⁵. Para un exhaustivo estudio de este informe, vease Peset Reig, M., La enseñanza del Derecho y la legislación sobre Universidades, durante el reinado de Fernando VII, en *Anuario de Historia del Derecho*, XXXVIII (1968), Madrid, 1.969, pp. 261-273. Y para una mejor valoración de la importancia de esta persona -Manuel José Quintana- en el pensamiento liberal español, vease Martínez Torrón, D., *Manuel José Quintana y el espíritu de la España liberal*, Sevilla, 1.995.

¹⁴⁶. Según afirman Peset, L.J., Garma, S., y Pérez Garzón, J.S., *Ciencias y enseñanzas...*, cit., pp. 11-12. La estructura educativa del régimen burgués se circunscribía a los siguientes extremos:

1. Uniformidad en la enseñanza pública en métodos y libros de texto.

(continúa...)

Contenía una exposición de principios básicos, donde se concebía a la educación como instrumento de reforma social idóneo para el paso al Nuevo Régimen.

La doctrina ha indicado como presentaba grandes similitudes al elaborado por los liberales franceses, esto es al *Rapport*, que Condorcet presentó a la Asamblea en 1.792. En efecto, en ambos informes, la instrucción era considerada como un deber del poder político, recibía los adjetivos de pública, universal y gratuita, y también recibía una buena carga de autopía¹⁴⁷.

En lo que respecta a la enseñanza de la religión en las escuelas, se pueden citar los conocidos catecismos políticos. Uno de los que correspondían a la Constitución de 1.812 se denominaba: *Catecismo Político arreglado a la Constitución de la Monarquía española: Para la ilustración del pueblo, instrucción de la juventud, y uso de las escuelas de primeras letras*¹⁴⁸

En estos textos se recogían preguntas y respuestas para ser enseñadas y explicadas en las escuelas de primeras letras. A modo de ejemplo, hemos recogido las siguientes:

¹⁴⁶(...continuación)

2. Gratuidad de la enseñanza pública.
3. Libertad de enseñanza, ajustada a supervisión estatal.
4. División del aparato escolar en tres grados: primera, segunda y tercera enseñanza.

¹⁴⁷. Entre otros, veasé Puelles Benitez, M. de., *Educación e ideología ...*, cit. p. 61.

¹⁴⁸. Aparecen recogidos en *Catecismos Políticos Españoles arreglados a las Constituciones del S- XIX, Cádiz, 1.812*. Editado por la Comunidad de Madrid, Conserjería de Cultura, Secretaría General Técnica, Madrid, 1.989, p. 109. Así en esta obra, entre otros, se encuentra el Catecismo Político arreglado a la Constitución de la Monarquía española: *Para la ilustración del pueblo, instrucción de la juventud, y uso de las escuelas de primeras letras, por D.J.C.*

P. Usando de esta soberanía la nación española ¿qué religión es la que se obliga a seguir para conservar las buenas costumbres, y hacer virtuosos a todos los individuos de que se compone?

R. La Religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. (*Reproduce el Art. 12 de la Constitución*).

P. ¿Y por qué se prefiere la religión católica, excluyendo a todas las demás?

R. Por estar la Nación intimamente convencida de la verdad de sola la religión católica y apostólica romana, y por convenir al bien y concordia del Estado la unidad de sentimientos religiosos, así como conviene la unidad de sentimientos políticos.

La educación constituía una atención preferente en el pensamiento de los hombres de principios del siglo XIX, y más concretamente por su vertiente religiosa y moral de los individuos. Por lo que, cuando encontramos la expresión -religioso/moral- se trata de un término verdaderamente acertado. En este sentido, Ruiz Berrio ha escrito que consciente o inconscientemente, los pensadores de entonces consideraban que en esa parte de la educación había una necesidad que se debía asentar sobre principios sobrenaturales y otra que necesitaba tener como base la especulación filosófica. La Fe y la Razón tenían que estar en la base de esta educación¹⁴⁹

¹⁴⁹. Ruiz Berrio, J., *Política escolar de España en el Siglo XIX (1808-1833)*, Madrid, 1.970, p. 36.

4. LIBERTAD DE IMPRENTA

A pesar de existir una regulación específica, señalada anteriormente, que contenía la censura previa para las publicaciones relacionadas con la Iglesia Católica, los primeros encontronazos de los liberales españoles con la Iglesia se produjeron por este derecho. Puesto que, aunque se contenía expresamente la censura previa, este derecho fue interpretado en términos extremadamente amplios.¹⁵⁰

La regulación de este derecho, no finalizó con el Decreto citado de 10 de noviembre de 1.810, ni con el Art. 371 de la Constitución. A esas disposiciones primarias, siguieron básicamente tres Decretos que completaban el marco jurídico de la libertad de imprenta.

El primero de ellos, fue el Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se procedía a la abolición de la Inquisición, y al establecimiento de los tribunales protectores de la fe¹⁵¹.

Sánchez Agesta ha señalado como la caída de la Inquisición se produjo fundamentalmente por las limitaciones que suponía para el ejercicio de la libertad

¹⁵⁰. Sánchez Agesta, L., La revolución de las Instituciones, en *Historia General de España y América, Vol. XII*. Madrid, 1.981, pp. 330. A mayor abundamiento, y entre otros, veasé Gacto Fernández, E., Periodismo satírico e Inquisición en Cádiz: "La Abeja Española", en *Anuario de Historia del Derecho*, Tomo LXV, (1.994), Madrid, 1.995, pp. 633-701. Para observar como era el periodismo de la época, y algunos de los ataques a la Iglesia.

¹⁵¹. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1.813, ...*, cit. p. 215-218.

de pensamiento y de conciencia¹⁵². Sin embargo, la abolición de la Inquisición traía consigo importantes cambios, puesto que las funciones que hasta entonces eran desempeñadas por ella en esta materia debían ser asumidas por otros órganos.

Para ello el Decreto, en su Art. I, expresaba que el Rey tomaría todas las medidas convenientes para que no se introdujeran en el Reino por las aduanas marítimas o fronterizas libros ni escritos prohibidos, o que fueran contrarios a la Religión; sujetándose los que circularan a las disposiciones de las leyes de libertad de imprenta.

Es decir, se disponía una doble vía para la defensa de la Religión católica. Por una parte encontramos la ya señalada legislación de libertad de imprenta, y por otra parte, las Cortes habilitaban al Rey para que fuera él quien tomara las medidas oportunas para la defensa de la religión de los ataques de libros prohibidos provenientes de fuera de nuestro país.

Tras esa disposición, se comenzaba recogiendo disposiciones de la legislación anterior, como era el supuesto del Art. II, que expresaba en primer lugar que era el Obispo o su Vicario los encargados de conceder o denegar la licencia para imprimir los escritos de religión, cosa que ya se conocía, junto con el mandato expreso a los Jueces seculares de proceder a recoger los escritos que habían visto denegada su circulación. Tras esa reiteración, se desarrollaban algunas cuestiones mediante la aportación de soluciones a problemas concretos que habían surgido con el funcionamiento del Decreto. Tal era el caso de a quien era posible recurrir en el supuesto de haber obtenido la denegación por parte del Ordinario para la circulación de un impreso, cuando posteriormente se había

¹⁵² Sánchez Agesta, L., *Historia del*..., cit. p. 118.

obtenido el visto bueno de la Junta. Para ese supuesto, se establecía la posibilidad de recurrir ante el Juez eclesiástico correspondiente.

Esa potestad de Rey católico para la defensa de la Religión se manifestaba también con fuerza en el Art. V, puesto que contenía que: *"El Rey, después del dictamen del Consejo de Estado, extenderá la lista de los escritos denunciados que deban prohibirse, y con la aprobación de las Cortes la mandará publicar; y será guardada en toda la monarquía como ley, bajo las penas que se establezcan"*.

Pocos meses después, se aprobaba el Decreto de 10 de junio de 1.813, conteniendo adicciones a la ley de libertad de imprenta¹⁵³ -se refería al Decreto de 10 de noviembre de 1.810-. Su articulado recogía diversas disposiciones, entre las que cabe destacar, entre otras, las siguientes disposiciones:

1. *Juntas de censura.* En lo relativo a los individuos que formaban las Juntas de censura, se establecía que permanecerían en el cargo durante dos años, de forma que se renovaban la mayor parte de sus miembros en el primer año y el menor número en el segundo. Por otra parte, se recogía que no podían desempeñar esos cargos Magistrados ni Jueces, ni cualquier otra persona que ejerciera jurisdicción civil o eclesiástica. También estaba prohibida la presencia en las Juntas a aquellos que no podían ser Diputados de Cortes, ni aquellos que tenían su residencia en otro pueblo. Estos eran responsables de sus acciones como cualquier empleado público.

¹⁵³. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de septiembre de 1.813, ...*, cit. pp. 93-99.

2. *Procedimiento de impugnación a los actos de la Junta de censura.* Se contenían diferentes disposiciones, desde la imposibilidad de censurar de oficio, hasta los supuestos que podían acontecer tras la calificación de censura, acciones que asistían al autor, la figura procesal de la conformidad, etc...

3. *Algunas disposiciones dirigidas hacia los escritos de religiosos* Distinguiéndose dos supuestos, uno que fuera obra personal del religioso, y dos que se tratara de una pastoral, instrucción o edicto. Por lo que respecta al primer caso, mediante este Decreto se producía un cambio importante, puesto que los eclesiásticos recibían el mismo trato que el resto de los autores, incluso los Prelados, es decir, se les conceptuaba como escritores particulares¹⁵⁴. En relación con el segundo de los supuestos, si dichas publicaciones contuvieran ataques contra la Constitución, el Rey, o la Regencia, se seguía el paso establecido para los Decretos conciliares y las Bulas pontificias, es decir, se daba traslado al Consejo de Estado. Para el supuesto en que éste estimara la existencia de esos ataques, ordenaba la suspensión de su circulación, y mandaba su secuestro, tramitándose la oportuna pieza de responsabilidad directamente ante el Tribunal Supremo o la Audiencia Territorial, dependiendo de la personalidad del autor de dichas infracciones¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Así se disponía en el Art. XXXI: "Las obras que los prelados eclesiásticos, así seculares como regulares, publicaren bajo el concepto de escritores particulares, seguirán los trámites que las de los demás ciudadanos"

¹⁵⁵ Resulta oportuno reproducir este Art. XXXII: "Si alguna vez ocurriere que las pastorales, instrucciones o edictos que los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y demás Prelados y Jueces eclesiásticos impriman o dirijan a sus diocesanos en el ejercicio de su sagrado ministerio contengan cosas contrarias a la Constitución o a las leyes, el Rey, y en su caso la Regencia, oyendo al Consejo de Estado en el modo y forma que previene la Constitución respecto de los decretos conciliares y Bulas pontificias, suspendera su curso, y mandará recoger los impresos. Si además hallare meritos para formación de causa que induzca desafuero contra el autor y autores, pasará a este fin el impreso al Tribunal Supremo de Justicia, siempre que este sea de Arzobispo u Obispo, y a la Audiencia territorial si fuere de alguno de los demás Prelados y Jueces eclesiásticos"

4. *Sobre el fuero de los eclesiásticos en estas causas de libertad de imprenta.* En los casos donde el autor del exceso fuera un eclesiástico regular, y cuando el Juez estimara en los autos mérito para proceder contra él criminalmente, debía pasar los autos al Ordinario diocesano, el cual seguiría la causa considerándole como un eclesiástico secular, y si además el delito fuera de los que producen desafuero el juez secular procedería conforme a lo determinado en las normas señaladas.

Otro Decreto bastante significativo para la regulación de este derecho fue el Decreto de 10 de junio de 1.813, conteniendo el Reglamento de las Juntas de censura¹⁵⁶. Mediante éste se contenían cambios en la Junta de Censura, y se establecía su estatuto: funcionamiento interno, su personal, su financiación, sus sesiones, su forma de procederse a la votación, etc

La disposición más importante que contenía era la pérdida de poder de los eclesiásticos que formaban la Junta, puesto que la figura del presidente, que antes era ostentada por un eclesiástico, ahora se elegía mediante voto secreto entre todos sus miembros.

5. EL ESTATUTO DEL CLERO

La idea del arreglo del clero estaba presente en numerosas disposiciones, tal y como se ha señalado. Sin embargo, no se aprobó ninguna norma encaminada a ello, sin duda, se puede afirmar que no hubo tiempo material para ello.

¹⁵⁶. *Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de septiembre de 1.813, ...*, cit. pp. 100-105.

No obstante, la idea estaba claramente presente: era necesaria su reforma¹⁵⁷

6. EL JURAMENTO

Aunque la fecha de las normas que se van a indicar a continuación es anterior a la fecha de promulgación de la propia Constitución, se promulgaron después de esta para aclarar los contenidos señalados.

En opinión de Lorente Sariñena, a la promulgación de la Constitución le siguieron tres Decretos que organizaron su impresión, publicación y juramento¹⁵⁸. Pero, en realidad, se deben afirmar que se trató únicamente de dos Decretos, puesto que el último se aprobó para aclarar algunos aspectos oscuros¹⁵⁹.

Nos referimos a los siguientes:

El Decreto de 14 de marzo de 1.812, determinando las Solemnidades con que se mandaba firmar, jurar y publicar en Cádiz la Constitución política de la monarquía española¹⁶⁰. En sus disposiciones, tras aprobarse definitivamente el texto de Cádiz, se contenían en este Decreto una serie de fórmulas específicas:

¹⁵⁷ La Parra López, E., *El primer liberalismo* ..., cit. pp. 139-169 (Capítulo II). Y pp. 67-116 (Capítulo IV).

¹⁵⁸ Lorente Sariñena, M., *El juramento* ..., cit. pp. 603.

¹⁵⁹ Nos referimos al Decreto de 22 de mayo de 1.812, para que el clero y el pueblo prestaran el juramento a la Constitución a un mismo tiempo y sin preferencia. (*Colección de decretos y órdenes expedidos por las Cortes Generales y Extraordinarias, desde 24 de septiembre de 1.811 hasta 24 de mayo de 1.812* ..., cit. pp. 209-210).

¹⁶⁰ *Colección de decretos y órdenes expedidos por las Cortes Generales y Extraordinarias, desde 24 de septiembre de 1.811 hasta 24 de mayo de 1.812*, ..., cit. pp. 94-97.

1) En sesión pública se leía y firmaba por todos los Diputados presentes dos ejemplares originales y manuscritos de la Constitución.

2) Seguidamente 12 diputados se personaban en la Regencia con uno de los dos ejemplares para que quedara en su archivo y la orden donde se especifica como había de publicarse la Carta Magna¹⁶¹.

3) Al mes siguiente se presentaba en las Cortes la Regencia del Reino, quien juraba el Texto bajo esta fórmula:

"¿Juráis por Dios y por los santos evangelios, que defenderéis y conservaréis la religión católica, apostólica, romana sin permitir otra alguna en el Reino: que guardaréis y haréis guardar la Constitución política de la Monarquía española, que estas Cortes generales y extraordinarias han decretado y sancionado, y también las leyes del Reino, no mirando en cuanto hiciereis sino al bien y provecho de ello: que no enajenaréis, cederéis, ni desmembraréis parte alguna del Reino: que no exigiréis parte alguna de frutos, dinero, ni otra cosa, sino las que hubieren decretado las que hubieran decretado las Cortes: que no tomaréis jamás a nadie su propiedad; y que respetaréis sobre todo la libertad política de la Nación, y la personal de cada individuo: no debiendo ser obedecidos en lo que contrario hiciereis, antes bien, será nulo y de ningún valor aquello que contravinieréis?.

¿Igualmente Juráis ser fieles al Rey, observar las condiciones que las Cortes os han impuesto para el ejercicio de la autoridad Real y que

¹⁶¹. Detallando minuciosamente este protocolo se aprobó la Orden de 14 de marzo de 1.812 sobre la presentación de la Constitución política de la Monarquía española a la Regencia del Reino. (*Colección de decretos y órdenes expedidos por las Cortes Generales y Extraordinarias, desde 24 de septiembre de 1.811 hasta 24 de mayo de 1.812, ..., cit. p. 97*).

cuando cese la imposibilidad del Rey, le entregaréis el Gobierno del Reino?.

4) Concluido ese acto, se procedía al traslado bajo la guardia de las tropas del ejército a la Catedral para procederse a la celebración de una misa solemne de acción de gracias, y después se cantaba el Te Deum.

Concluida la ceremonia religiosa se trasladaban las Cortes y la Regencia a la Casa episcopal donde se procedía a "... disolver el Congreso."

5) Tras todo ello, por la tarde se leía públicamente la Constitución en "... la plaza ...", y se acompañaba la ceremonia con salvas de artillería e iluminación.

El segundo fue el Decreto de 18 de Marzo de 1.812, determinando las solemnidades con que debía publicarse y jurarse la Constitución política en todos los pueblos de la Monarquía, y en los ejércitos y armada, y también se mandaba hacer visita a las cárceles por este motivo¹⁶². Se contenían numerosos mandatos protocolarios:

1). Cuando se recibía en los pueblos la Constitución, alguna de las máximas autoridades debía marcar un día para la presentación pública del texto al pueblo. Para ello se leía públicamente toda la Constitución, y tras ella el mandato de la Regencia¹⁶³ que se acompañaba a toda publicación.

¹⁶². *Colección de decretos y órdenes expedidos por las Cortes Generales y Extraordinarias, desde 24 de septiembre de 1.811 hasta 24 de mayo de 1.812* ... cit. pp. 166-169.

¹⁶³ Las Cortes Extraordinarias y Generales exigieron a la Regencia una determinada fórmula que debían concretar cuando se fuera a imprimir la Constitución mediante el Decreto de 18 de marzo de 1.812 por el que se mandaba imprimir y publicar la
(continúa...)

2) Después, el primer día festivo siguiente, los vecinos se reunían en la parroquia, donde también asistía el Juez y el Ayuntamiento (alguien que lo representaba), celebrándose una misa solemne de acción de gracias. Tras ello, se volvía a leer la Constitución antes del ofertorio, y se efectuaba por el cura párroco o por quien él designe una breve exhortación correspondiente al objeto, y después de concluida la misa se prestaba juramento al texto constitucional por todos los vecinos y por el clero de guardar la Constitución bajo la fórmula siguiente:

¿Juráis por Dios y por los santos evangelios guardar la Constitución política de la Monarquía española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias de la Nación, y ser fieles al Rey?.

Ante esa fórmula general se respondía al unísono por parte de los asistentes¹⁶⁴: *Sí Juro*. Y a continuación se cantaba un Te Deum.

¹⁶³(...continuación)

Constitución política de la Monarquía española: fórmula con que la Regencia debía verificarlo. Por este decreto se requería a la Regencia para que "... dispusiera inmediatamente se imprima, publique y circule; y para que la impresión haya de usar la fórmula siguiente: *Don Fernando VII, por la Gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, SABED: Que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente Constitución política de la Monarquía española.* (después se contenía todo el texto de la Constitución). Y concluía la Regencia: *Por tanto mandamos a todos los españoles nuestros súbditos, de cualquiera clase y condición que sean, que hayan y guarden la Constitución inserta como Ley fundamental de la Monarquía; y mandamos asimismo a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la misma Constitución en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento y dispondréis que se imprima, publique y circule.*"(Colección de decretos y órdenes expedidos por las Cortes Generales y Extraordinarias, desde 24 de septiembre de 1.811 hasta 24 de mayo de 1.812 ... , cit. pp. 209-210. pp. 166-167).

¹⁶⁴. En su aclaración, y para que el juramento se prestara de forma simultánea por el pueblo y por el clero, se aprobó el Decreto de 22 de mayo de 1.812, para que el clero y
(continúa...)

De este acto se remitía justificación a la Regencia, por parte del Jefe político de la localidad.

Después se aseguraba el juramento de los habitantes de todos los pueblos de España, pero no siendo suficiente lo anterior, se procedía también a solicitar el juramento de "... *Los Tribunales de cualquiera clase, Justicias, Virreyes, Capitanes generales, Gobernadores, Juntas provinciales, Ayuntamientos, M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, Prelados, Cabildos eclesiásticos, Universidades, Comunidades religiosas, y todas las demás corporaciones y oficinas de todo el Reino prestarán el propio juramento bajo expresada fórmula: ...*". El contenido de la pregunta del juramento era idéntico al señalado antes. La diferencia estribaba en el momento posterior, puesto que tras jurarse la Constitución se determinaba que en todas las Catedrales, Colegiatas, Universidades y Comunidades religiosas se celebrará una misa de acción de gracias con *Te Deum*.

De igual forma, de la realización de estos actos, había de darse cuenta también a la Regencia del Reino.

3). Tras haberse señalado la forma de jurarse la Constitución al Pueblo y al "... *resto de justicias, tribunales, etc...*", faltaba una clase muy importante como era el ejército y la armada¹⁶⁵, por lo que se determinaba que para éste

¹⁶⁴(...continuación)

el pueblo prestaran el juramento a la Constitución a un mismo tiempo y sin preferencia. (*Colección de decretos y órdenes expedidos por las Cortes Generales y Extraordinarias, desde 24 de septiembre de 1811 hasta 24 de mayo de 1812* ..., cit. pp. 209-210).

¹⁶⁵. Como nos demostró la historia, el ejército en su conjunto era un elemento muy importante para que el germen del liberalismo creciera en España. Por ello no es de extrañar que incluso en plena Guerra de la Independencia se dotara una gratificación a las tropas con motivo de la Constitución. Así se puede verificar de la Orden de 18 de marzo de 1812, en la que se mandaba dar una gratificación a las tropas el día en que se publicaba la Constitución de la Monarquía. (*Colección de decretos y órdenes expedidos* (continúa...))

colectivo, los jefes elegirían el día más oportuno, para que: " ... *una vez recibida la Constitución, se formaran las tropas, y se publique ésta ...*", es decir, se leía en voz alta a la tropa, y seguidamente los Jefes, Oficiales y Tropa juraban frente a la bandera con la fórmula anterior.

4) El juramento de la Constitución llevaba aparejada también indultos para todos los reos que lo eran por delitos que no tuviera pena corporal.

Algunos Decretos, hacían referencia a varios epígrafes de este Capítulo. Tal era el caso del Decreto de 8 de junio de 1.812, por el que se aprobaba el Reglamento del Consejo de Estado¹⁶⁶, en el que recogía otra fórmula de juramento que debían prestar los miembros de este Consejo:

¿Juráis por Dios y por los santos evangelios guardar la Constitución política de la Monarquía española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias, ser fieles al Rey, aconsejándole (y en su caso a la Regencia del Reino), lo que entendierais ser conducente al bien de la nación, sin mira particular ni interés privado, y guardar secreto en los negocios sobre los que consultaréis?

Uno de los grandes apologistas del texto del doce, el eclesiástico De Velez¹⁶⁷, ha señalado que no existió libertad para resistirse a efectuar esos

¹⁶⁵(...continuación)

por las Cortes Generales y Extraordinarias, desde 24 de septiembre de 1.811 hasta 24 de mayo de 1.812, ... , cit. pp. 168-169).

¹⁶⁶. Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1.813. ... , cit. pp. 12-21.

¹⁶⁷. Velez, R. de., *Apología del Altar...*, Tomo II, cit. pp. 116-133. dedicaba el Capítulo (continúa...)

juramentos: "... Tres noches antes de la jura de la Constitución se propuso se declarase indigno español, privado de sus bienes, y a las veinticuatro horas arrojado de España al Diputado que no jurase. ..."

En todo caso, esa opinión debe evaluarse desde el punto de vista parcial del que procede, y tan sólo se puede afirmar un hecho claro, que en base a los anteriores Decretos señalados, el texto constitucional, redactado a espaldas del pueblo español, puesto que éste estaba ocupado en la Guerra de la Independencia, recibe su juramento generalizado, o mejor dicho colectivo¹⁶⁸, mediante el apoyo concreto de la Iglesia.

Por otra parte, y desde el punto de vista confesional, el juramento iba acompañado de ceremonias religiosas y de discursos de los eclesiásticos que explicaban el texto constitucional estando presente diversas autoridades.

¹⁶⁷(...continuación)

VII, a la Jura de la Constitución. Y el título ya resultaba elocuente: *Jura de la Constitución. No hubo libertad para resistirla. Se impugnan algunos escritos de aquellos días*. Sin embargo, la pregunta que planteaba, resulta muy interesante:

¿Qué cura se atrevería a hablar desde el púlpito contra la Constitución?

Y a esa pregunta seguía un breve comentario: Si uno se descuidaba en un término poco decoroso a la sagrada carta, al instante tenía contra sí una delación. Cuanto tuvo que sufrir el cura del sagrario de la catedral de Cádiz porque en el púlpito llamó a la Constitución libro pequeño, o libelo! (p. 127).

¹⁶⁸ Lorente Sariñena, M., *El juramento ...*, cit. p. 615. Afirma que: "El juramento colectivo de los pueblos fue un juramento prestado por los pueblos católicos que solían acudir los días festivos a las ceremonias eclesiásticas. Las categorías jurídicas excluyentes, tanto la del -español-, como la del -vecino-, no jugaron a la hora de negar la entrada a la ceremonia eclesiástica de quien solían compartirla. El cuidado que pusieron las Cortes en hacer relación de autoridades y corporaciones que debían jurar la Constitución no se correspondió con la de los pueblos, los cuales, también como corporación, votaron de forma unitaria"

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV

LA VUELTA DE FERNANDO VII, (1.814-1.820)¹

I. LA VUELTA DE FERNANDO VII, (1.814-1.820)

1. INTRODUCCIÓN

Cuando Fernando VII llegaba a España tras su cautiverio la tensión existente entre las Cortes por un lado, y el ejército y la Iglesia por otro, se trasladaba al choque entre el Rey y las Cortes, quienes pretendían hacerse acatar por el Rey. Un Decreto promulgado el 1 de enero de 1.811 había negado validez a cualquier acto del monarca prisionero de Napoleón. Cuando éste recuperó la libertad, las Cortes mediante otro Decreto de 2 de febrero de 1.814, por el que inhibían al Rey del ejercicio de sus facultades hasta que hubiera jurado la Constitución, le prohibían traer a España escolta armada y le señalaban un itinerario preciso de su viaje hasta Madrid. Fernando VII no tuvo en cuenta este Decreto y obro por su propia iniciativa. Así el conflicto estalla inevitablemente².

Esas Cortes no tenían fuerza para hacer acatar al monarca sus decisiones, quien contaba con el respaldo de los poderes enfrentados a las Cortes: Ejército

¹. De Castro, C., *El Rey felón o los seis años inicuos*, Madrid, 1.929. En esta obra, utiliza el adjetivo *inico* para referirse a los años que abarcaron este período (1.814-1.820).

². Palacio Atard, V. *La España del ...* pp. 99-100.

e Iglesia, sin olvidar el respaldo popular³

En ese contexto histórico, tal y como ha señalado Artola⁴, el regreso de Fernando VII planteaba el interrogante de su integración en el sistema político diseñado en Cádiz. El propio Rey ignoraba sus posibilidades de enfrentarse a un régimen que venía ejerciendo sin discusión el Gobierno desde su marcha, y por ello exploró el terreno antes de tomar una decisión que pudiera comprometer el trono.

Las vacilaciones del monarca culminaron con un golpe de Estado, anunciado al país en Valencia mediante el conocido manifiesto de 4 de mayo de 1.814.

³. Parece ser que el respaldo popular con el que contaba el Monarca a su llegada a España era tremendo. Era recibido por concentraciones multitudinarias en todas la localidades por donde pasaba. En este sentido, se pueden citar, entre otros: Sánchez Mantero, R., *Fernando VII un reinado polémico*, Madrid, 1.996, pp. 58-60. "... No resulta difícil encontrar explicación a una actitud tan entusiasta, si se tiene en cuenta lo que debió significar el regreso de Fernando VII en aquellos momentos, después de años de dominio de una Monarquía impuesta desde el extranjero La vuelta de Fernando VII no solamente era el restablecimiento del rey legítimo, sino que era también la vuelta a la normalidad. ...". Ó Queralt, M^a. P., *La vida y la época de Fernando VII*, Barcelona, 1.997, pp. 94-95. "... Después de ser recibido en ambas capitales en olor de multitud, el cortejo, con aires de paseo triunfal, continuó viaje hasta la ciudad del Turia, entre entusiasmo popular ... Le recibió, además, una auténtica avalancha de literatura elegíaca que, tanto desde la prensa como desde los bandos municipales, enfervoreció aún más a la multitud."

⁴. Artola, M., *La burguesía ...*, cit, pp. 46-47.

2. EL MANIFIESTO DE FERNANDO VII

La obra del liberalismo español, expresada por la Constitución de Cádiz y sus Cortes⁵, se vió frenada por el absolutismo de Fernando VII. El instrumento elegido al efecto fue el conocido manifiesto del Rey de 4 de mayo de 1.814⁶, por el que se declaraba nula y sin ningún valor ni efecto la Constitución. Se abortaba así, el proyecto de modernización política de España.

Mediante éste, el Monarca censuraba profundamente la Constitución aprobada en Cádiz en 1.812, y ello en base a los siguientes argumentos:

1º. *La convocatoria de Cortes*. Se reprochaba que esas Cortes no habían sido validamente constituidas, puesto que tan sólo había concurrido el Estamento del pueblo, sin contar con los de la Nobleza y Clero. Por ello, lo allí acordado a juicio del Rey, era totalmente nulo⁷.

⁵. Tal y como ha señalado Palacio Atard, V., *La España del ...* cit. p. 100. Mientras Fernando VII se preparaba para dictar el Decreto de Valencia, las Cortes nada hacen por impedirlo, como no sea enviar al cardenal de Borbón para que salude al monarca sin rendirle acatamiento. Pero el 18 de abril, ante el mandato imperioso del Rey, el cardenal hinca la rodilla y le besa la mano. Aquel gesto significaba la rendición del gobierno constitucional.

⁶. Manifiesto del Rey de 4 de mayo de 1.814, declarando por nula y de ningún valor ni efecto la Constitución de las llamadas Cortes Generales y extraordinarias de la nación, disponiendo al mismo tiempo lo que ha de observarse, a fin de que no se interrumpa la administración de justicia, y el orden político y gubernativo de los pueblos. (*Decretos del Rey Don Fernando VII, año primero de su restitución al Trono de las Españas. Se refieren todas las reales resoluciones generales que se han expedido por los diferentes ministerios y consejos desde 4 de mayo de 1.814 hasta fin de diciembre de igual año. Tomo Primero, Madrid, en la Imprenta Real, 1.816. pp. 1-9*). Para un mayor detalle sobre este manifiesto veasé, Diz-Lois, M^a. C., *El Manifiesto de 1.814*, Pamplona, 1.967.

⁷. Literalmente se contenía que: "... Pero a estas Cortes, convocadas de un modo jamás usado en España aun en los casos más arduos y en los tiempos más turbulentos de minoridades de Reyes, en que ha solido ser más numeroso el concurso de Procuradores (continúa...)

2º. *Atribución de la Soberanía.* La Constitución atribuía la soberanía directamente al pueblo, despojando al monarca de ella⁸

Sobre este extremo, tal y como se ha señalado en el Capítulo anterior, las concepciones doctrinales eran diversas. De suerte que autores muy distantes del pensamiento liberal entendían esa atribución de soberanía de forma distinta a la expresada en el Manifiesto, calificándola simplemente como maniobra política para desmontar las ideas de Napoleón. Un exponente de esa idea fue el conocido antiliberal Vélez, quien afirmó que *la usurpación de la soberanía realizada por las Cortes de Cádiz, pudo mirarse como un recurso extraordinario que las circunstancias imperiosamente exigían*⁹

3º. *Juramento coaccionado de la Constitución.* Mencionaba que por algunos sectores sociales se había jurado dicho texto debido a serias coacciones y amenazas inferidas por sus partidarios¹⁰

⁷(...continuación)

minoridades de Reyes, en que ha solido ser más numeroso el concurso de Procuradores que en las Cortes comunes y ordinarias, no fueron llamados los Estados de Nobleza y Clero, aunque la Junta Central lo había mandado, habiéndose ocultado al Consejo de la Regencia este decreto, y también a la Junta que le había asignado la presidencia de las Cortes: prerrogativa de la Soberanía, que no había dejado la Regencia al arbitrio del Congreso. ...".

⁸. Exactamente señalaba: "... Con todo eso, quedó todo a disposición de las Cortes; las cuales el mismo día de su instalación, y por principio de sus actas, me despojaron de la soberanía, poco antes reconocida por los mismos Diputados, atribuyéndola nominalmente a la nación para apropiársela a ellos mismos, y dar a esta después ... una nueva Constitución, que sin poder de Provincia, pueblo ni Junta, ... establecieron los Diputados, y ellos mismos sancionaron y publicaron en 1.812. ..."

⁹ Vélez, R. de.,: *Apología del altar* ... , Tomo I, cit. p. 73.

¹⁰ Se recogía en el decreto que: "... Con la misma falta de libertad se firmó y juró esta nueva Constitución; y es conocido de todos, no sólo lo que pasó con el respetable Obispo de Orense, pero también la pena con que a los que no la firmasen y jurasen se amenazó. ..."

4°. Hacía igualmente referencia a los ataques que había recibido su persona por medio de la libertad de imprenta instaurada por el nuevo orden. Este capítulo supuso un foco de abundantes problemas a los liberales, toda vez que, más que instrumento de crítica fue usado como arma arrojadiza.

5°. *La religión* no podía faltar dentro del Manifiesto. Así se contenía expresamente que "... Yo trataré de que ... en Cortes legítimamente congregadas ... se establecerá sólida y legítimamente cuanto convenga al bien de mis reinos, para que mis vasallos vivan prósperos y felices, en una religión y un imperio estrechamente unidos en indisoluble lazo: en lo cual, y en sólo esto, consiste la felicidad temporal de un Rey y un reino que tienen por excelencia el título de Católicos; ...".

6°. Se aseguraba *el mantenimiento del orden público*. En él la libertad de imprenta se constituía en un elemento indispensable, y por ello se anunciaba sometida a estrictas limitaciones. Estos severos márgenes venían impuestos por tres pilares:

1. La Religión.
2. El Gobierno.
3. Y el respeto de los hombres entre sí¹¹.

¹¹. Literalmente se determinaba que: "... De esa justa libertad gozarán también todos para comunicar por medio de la imprenta sus ideas y pensamientos, dentro, a saber, de aquellos límites que la sana razón soberana e independientemente prescribe a todos para que no degeneren en licencia; pues el respeto que se debe a la religión y al Gobierno, y el que los hombres mutuamente deben guardar entre sí, en ningún gobierno culto se puede razonablemente permitir que impunemente se atropelle y quebrante.".

En resumen, mediante este Manifiesto, no sólo se declaraba nula dicha Constitución de 1.812, sino que se señalaba como reo del delito de lesa majestad a quien exhortara al pueblo para que guardase y observase dicho texto constitucional.

Como corolario, quedaban archivadas todas las causas que estuvieran pendientes en Juzgados y Tribunales por incumplimiento de cualquiera de sus preceptos.

Haciendo referencia al Manifiesto en sí, se puede afirmar que no estaba exento de demagogia, puesto que, si bien sus contenidos se acercaban a la opinión que había sido expresada en el citado "Manifiesto de los persas"¹², los hechos de su reinado pronto se encargaron de demostrar que en realidad su intención era

¹² Como es sabido, ese Manifiesto, -citado en el capítulo anterior-, se denominó *de los Persas* por su encabezamiento: "Señor: Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del fallecimiento de su Rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias, les obligase a ser más fieles a su sucesor ..." Como curiosidad, puede señalarse que, una vez que restablecía en España el texto gaditano, en el trienio liberal, los autores de este famoso manifiesto encontraron sanción para su comportamiento mediante el Decreto de 26 de octubre de 1.820, relevando a los sesenta y nueve ex-Diputados que firmaron el manifiesto o representación al Rey en 12 de abril de 1.814 de la formación de causa, bajo las condiciones que se expresan. Mediante éste, se les exoneraba de juicio, pero a cambio de un precio realmente alto, toda vez que se les privaba de todos los empleos, honores, condecoraciones y cualesquiera otra gracia que tuviesen antes de esa fecha de 4 de mayo de 1.814, así como de las que hubieran obtenido desde aquella fecha. Dicha privación era extensiva desde luego a los cargos públicos. Para los eclesiásticos, no perdían su condición, pero sin embargo, se decretaba la ocupación de sus temporalidades. En todo caso dichas mediadas se tomaban porque "... dichos diputados, habían perdido la confianza de la Nación ...". Con esta disposición se les dispensaba de pasar por juicio alguno, sin embargo, no era de aplicación directa, en todo caso, se permitía la elección individual de cada uno de ellos, puesto que para aquellos que desearan pasar por un juicio, se les respetaban las debidas garantías constitucionales. (Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820. Mandada publicar de orden de las mismas, Tomo VI, Madrid, en la imprenta nacional, 1.821, pp. 255-256).

evitar cualquier reforma, y volver las cosas tal y como estaban antes de la Guerra de la Independencia, es decir, situar al país de nuevo en el año 1.808.

Por otra parte, y por lo que respecta al régimen político que traería su reinado, no deja de ser una paradoja la lectura de algunas de las afirmaciones contenidas en dicho Manifiesto, donde por reseñar alguna otra, encontramos la afirmación del propio Rey Fernando VII, donde literalmente señalaba: "... Aborrezco y detesto el despotismo ...".

3. EL RESTABLECIMIENTO DEL ANTIGUO RÉGIMEN.

El restablecimiento del Antiguo Régimen, en primer lugar, trajo consigo la extinción de los órganos representativos del Nuevo Régimen: las Cortes, el jefe político, las Diputaciones provinciales, etc... Al mismo tiempo, se hacían renacer las Instituciones más representativas de la monarquía del Antiguo Régimen tal y como estaban antes de la invasión francesa, es decir, sin introducir ningún cambio: Consejo Real¹³ y el Consejo de la Cámara¹⁴ y quizá, la más representativa, la Inquisición¹⁵.

¹³. Real Decreto de 27 de mayo de 1.814 restableciendo el Consejo Real en el pie por ahora que estaba en el año 1.808, nombrando Presidente y Ministros que le han de componer. Y a continuación unos días después el 3 de junio mediante Real Decreto se declaraban nulas todas las plazas del Consejo de Estado y los honores que se hayan concedido por la Junta Central y demás gobiernos hasta la vuelta de su majestad. *Decretos del Rey Don Fernando VII, ... expedidos por los diferentes ministerios y consejos desde 4 de mayo hasta fin de diciembre de 1.814.* ..., cit. pp. 45-47 y p. 55 respectivamente-).

¹⁴. Real Decreto de 5 de junio de 1.814, por el cual se restablece el Consejo de la Cámara bajo el pie que se encontraba en el año 1.808. Ibidem, pp. 55-57.

¹⁵. Real Decreto de 21 de julio de 1.814, por el cual se restablece el Consejo de Inquisición y los demás tribunales del Santo Oficio al ejercicio de su jurisdicción, guardando el uso y ordenanzas con que se gobernaban en el año de 1.808. Ibidem, pp. (continúa...)

Esta serie de acontecimientos, tal y como ha señalado Artola¹⁶, "... constituía el desarrollo de una idea política que no tenía mayor ambición que volver al país a la que pudiéramos llamar legitimidad prerrevolucionaria. No por esto, su aplicación dejaría de ser menos revolucionaria desde el momento en que el país había recibido en los años de la guerra una estructura totalmente nueva, que ahora era preciso desmontar por entero para levantar la primera ..."

Esa idea política señalada se vió refrendada en la práctica totalidad de las disposiciones que se promulgaron en este período, puesto que, exclusivamente desde la óptica del Derecho, nos encontramos una vuelta hacia la Novísima Recopilación, donde los Decretos y órdenes se limitaban, como regla general, a recordar disposiciones de nuestro antiguo Derecho. Esto hacía que la creación jurídica se limitara a lo imprescindible. Realmente nuestro Derecho constituye una muestra elocuente del deseo del monarca por mantener el Antiguo Régimen.

El entramado jurídico de este período, como se ha señalado, no reflejaba las intenciones que se contenían en el Decreto de 4 de mayo citado.

En este sentido, y siguiendo a Artola se puede afirmar que las reformas pedidas en el "Manifiesto de los persas", que se prometían en el Manifiesto de 4 de mayo, y que aún se hacía referencia en posteriores disposiciones, quedaron muy pronto arrinconadas y nadie volvió a acordarse de que el país se encontraba en crisis a consecuencia del enfrentamiento de las dos concepciones sociales diversas y de intereses totalmente antagónicos. Crisis que solamente podía

¹⁵(...continuación)

guardando el uso y ordenanzas con que se gobernaban en el año de 1.808. Ibidem, pp. 132-134.

¹⁶ Artola, M., La primera etapa absolutista (1.814-1.820), en *La historia de España* dirigida por Menéndez Pidal, R., Tomo XXXII La España de Fernando VII, la guerra de la independencia y los orígenes del constitucionalismo, Madrid 1.983, p. 546.

resolverse por el camino de las reformas o por el más violento e injusto de la revolución, ninguno de los cuales estaba en el ánimo de Fernando VII seguir¹⁷.

Y con el ánimo de olvidar hasta la existencia de ese anhelo de reformas, ordenó, mediante una Real Orden¹⁸, la supresión de todos los periódicos, con la sola excepción del Diario de Madrid y la Gaceta, con lo que impedía tajantemente la posibilidad de crítica.

Esa vuelta al Antiguo Régimen, requería también el restablecimiento de la situación social existente al comenzar la Guerra de la Independencia, es decir, la preeminencia socioeconómica de los estamentos privilegiados¹⁹.

II. APOYO DE LA IGLESIA AL ABSOLUTISMO

Dentro del Nuevo Régimen instaurado por los liberales, la Iglesia, al menos formalmente, se veía fuertemente sustentada por la propia Constitución, pero en la práctica, y como se ha señalado en el Capítulo anterior, había

¹⁷. Ibidem, p. 551.

¹⁸. La Real Orden de 25 de abril de 1.815. por la que prohibía S.M. todos los periódicos que se publicaban dentro y fuera de la Corte, y mandaba que sólo se publicaran la Gaceta y el Diario de Madrid. (*Decretos del Rey Don Fernando VII, año segundo de su restitución al Trono de las Españas. Se refieren todas las reales resoluciones generales que se han expedido por los diferentes ministerios y consejos en todo el año 1.815. Tomo Segundo, Madrid, en la imprenta real, 1.819. p. 264*).

¹⁹. Artola, M., *La primera etapa ...*, cit. p. 552. ha señalado como ejemplos de ese deseo, entre otros, las siguientes disposiciones: el Real Decreto de 17 de junio de 1.814 sobre el restablecimiento de las pruebas de nobleza para los cadetes de artillería, o el de 23 de julio que abolía la contribución directa, restableciéndose el régimen precedente de rentas provinciales y estancadas y, con ellos, los privilegios de que habían disfrutado los reinos de la corona de Aragón y las provincias exentas, o la vuelta a las ordenanzas gremiales en perjuicio de la libertad de industria el 23 de junio de 1.815.

soportado experiencias muy negativas que ya apuntaban el trato que iba a recibir del nuevo orden político. Por ello, se identificó rápidamente con la contrarreforma de Fernando VII bajo el absoluto convencimiento de que su situación era más ventajosa en el Antiguo Régimen, donde no hay que olvidar, formaba parte de los estamentos privilegiados con lo que encontró una defensa férrea de su status de la mano del Rey.

Ese deseo de la Iglesia coincidía plenamente con el del monarca, puesto que Fernando VII, para la restauración del Antiguo Régimen, necesitaba también el apoyo de la Iglesia para enfrentarse con más fuerza a los liberales. Por este motivo, una de sus primeras medidas consistió en la promulgación de disposiciones conteniendo la más rápida y puntual devolución de los bienes desamortizados a la Iglesia.

Esas disposiciones contradesamortizadoras, se pueden calificar como *medidas ejemplares*, puesto que no sólo se determinaba la devolución de todos los bienes desamortizados a la Iglesia, sino que resultaba elocuente la forma en que se efectuaba, toda vez que se dispuso que *recobraba su patrimonio a costa de los compradores, a quienes se les despojaba de los bienes adquiridos, perdiendo las cantidades satisfechas, junto con pago de indemnizaciones y costas de procesos de devolución*²⁰.

²⁰ Aunque estas medidas serán detalladas posteriormente, se puede traer a colación en este momento lo escrito por Ferrer, M., Tejera, D., y Acedo, J., en *Historia del Tradicionalismo español*, Vol. I, Madrid, 1.943, p. 246. Han señalado que en la Real Cédula de 30 de agosto se mandaba despojar a los compradores de bienes nacionales de las fincas y efectos que bajo aquel concepto habían adquirido. La disposición estaba redactada con palabras un poco duras y se calificaba de españoles desnaturalizados y de abominables especuladores a los tales ventajistas compradores. Se encargaba a las juntas nombradas al efecto en todas las capitales dependientes de la Suprema de la Corte, que procediesen ejecutivamente, para que se reintegrasen las propiedades enajenadas a sus primitivos dueños, y éstos debían percibir además los frutos que hubiesen producido o (continúa...)

Esta medida no debe verse tan sólo como una disposición jurídica con mayor o menor importancia, sino que debe entenderse como un símbolo²¹, toda vez que no sólo supuso la aplicación práctica señalada, sino que sus efectos fueron recordados en momentos posteriores²² por los detractores de la desamortización, constituyendo un importante freno a los compradores de bienes nacionales, quienes ya conocían que la adquisición de algún bien desamortizado a la Iglesia podría aparejar estas duras consecuencias.

Producto de esa vuelta al Antiguo Régimen y de medidas como la señalada fue esa estrecha unión con la Iglesia, y con ello, la confesionalidad a ultranza del reino determinada por Fernando VII.

Reflejos de esa confesionalidad los encontramos, en diversas disposiciones, entre otras, en la Circular de 15 de mayo de 1.814, mandando que se implorara por fervorosas rogativas a Dios el acierto que desea S.M. en el

²⁰(...continuación)

debido producir aquéllos. También se evaluaban los deterioros que hubieran sufrido las fincas o efectos que cuando estuvieron en poder de esos dueños debían indemnizarse. Las mejoras efectuadas habían de cederse en favor del titular de la finca, en los supuestos que fuesen de mero ornato o comodidad, pero cuando se acreditase que tuvieron un coste considerable el valor de éstas era apropiado por el fisco. Se contemplaba el supuesto concreto de la susceptibilidad de disfrute independiente de las mejoras, en cuyo caso, se vendían en pública subasta al mejor postor. Además, a los compradores se les hacía responsables del pago de las costas causadas en procedimientos de reintegro, y de las multas que las juntas consideraran oportuno imponerles.

²¹. Entendemos que el uso de este adjetivo para con una norma jurídica, requiere no sólo la aplicación práctica de los efectos que contiene, sino que debe crear una especie de "conciencia popular", de forma que sea recordada en momentos posteriores. Al igual que ha señalado Jiménez Asensio, R., (vid. nota nº 89), como la Constitución de Cádiz tuvo carácter simbólico para los liberales, ese mismo carácter tuvo este decreto para los detractores de la desamortización.

²². Concretamente, nos referimos, de forma principal al primer tercio del Siglo XIX y aunque con menor fuerza, también hasta algo más allá de mediados de siglo.

Gobierno de la Monarquía²³. La muestra más clara de esa confesionalidad no se encuentra en su contenido, es decir, en el mandato de pedir a Dios el acierto del monarca en el gobierno de España, sino en la asistencia que Dios prestaba al Rey en su Gobierno, tal y como se señalaba literalmente en la circular:

"Como acierto que desea el Rey conseguir en el gobierno de la monarquía, que Dios ha puesto a su cuidado por su restitución al trono, pende principalmente de la divina asistencia, ha resuelto que se implore ..."

Resulta interesante su comparación con los Decretos señalados en el capítulo anterior aprobados en el mismo sentido. De esa similitud, lo que se determina es, por una parte, el uso de disposiciones tradicionales por parte de los liberales para intentar obtener el apoyo de la Iglesia, y por otra parte, la petición del mismo apoyo a la Iglesia que ahora solicitaba el monarca.

Disposiciones como la citada, se repitieron con cierta frecuencia durante este siglo como instrumento para dar solemnidad a un acto o conmemorar un determinado hecho. A modo de ejemplo, y en este período, se pueden citar entre otras, la Real Orden de 2 de marzo de 1.815, donde se mandaba cantar un solemne Te Deum en todas las iglesias de la Monarquía por el aniversario de la entrada de S.M. en el territorio español²⁴. O también la Real orden de 1 de junio de 1.815, donde se mandaba cantar un solemne Te Deum en todas las iglesias de la Monarquía por la victoria que obtuvieron los ejércitos aliados sobre el enemigo común el 18 de junio²⁵.

²³ *Decretos del Rey Don Fernando VII, ... expedidos por los diferentes ministerios y consejos desde 4 de mayo hasta fin de diciembre de 1.814* ... cit. p. 14.

²⁴ *Decretos del Rey Don Fernando VII, ... -año 1.815-* , cit. pp. 151-152.

²⁵ *Decretos del Rey Don Fernando VII, ... -año 1.815-* cit. pp. 479-480.

III. DESARROLLO LEGISLATIVO EN ESTE PERÍODO

1. DESAMORTIZACIÓN

Tal y como se ha señalado, muchas de las primeras disposiciones acordadas a la vuelta de Fernando VII estuvieron dirigidas a ganarse la total confianza de la Iglesia. Concretamente, y por orden cronológico, responden al siguiente detalle:

La Real Orden de 20 de mayo de 1.814, relativa a que se hiciera entrega a los regulares de sus conventos y propiedades²⁶. Su contenido disponía una orden concreta del Ministerio de Gracia y Justicia para con el de Hacienda para que procediera a la devolución de los bienes propiedad de esta clase del clero. Esta entrega se producía con la intervención de los M.RR. Arzobispos y RR. Obispos respectivos, teniendo estos últimos la capacidad de supervisar las operaciones en comunicación directa con el monarca.

Igual determinación se adoptaba para las religiosas, pero mediante la Real Orden de 23 de mayo de 1.814, relativa a la entrega a las religiosas de sus conventos y propiedades²⁷.

Ambas disposiciones fueron mandadas ejecutar mediante otra Real Orden de 24 de junio de 1.814, comunicada por el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia al Ministro de Hacienda, en la cual mandaba S.M. que los intendentes,

²⁶. *Decretos del Rey Don Fernando VII, ... expedidos por los diferentes ministerios y consejos desde 4 de mayo hasta fin de diciembre de 1.814. ...*, cit. p. 19.

²⁷. *Decretos del Rey Don Fernando VII, ... expedidos por los diferentes ministerios y consejos desde 4 de mayo hasta fin de diciembre de 1.814. ...*, cit. pp. 25-26.

comisionados del Crédito público, y demás empleados de la Real Hacienda, devolvieran y entregaran inmediatamente los conventos, bienes y rentas a los frailes y religiosas de las Ordenes militares, según se mandó en 20 de Mayo último²⁸.

Para la devolución de los bienes a la Inquisición también se promulgaron algunas disposiciones acordando la entrega de sus bienes y derechos. Nos referimos a la Circular de 15 de agosto de 1.814, mandando a los Intendentes Directores del Crédito Público, o personas a quienes correspondía la recaudación de intereses reales, que pusieran sin el menor obstáculo ni detención a disposición de los Tesoreros del Santo Oficio todas las fincas de cualesquiera clase que fueran pertenecientes al mismo Tribunal²⁹.

Pese a todas las disposiciones señaladas, la más importante en todo este período, aunque promulgada posteriormente, fue la Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo, de 31 de agosto de 1.814, por la cual se servía aprobar el reglamento propuesto y formado para el reintegro de los bienes confiscados por el Gobierno intruso, con lo demás que se expresaba³⁰.

Mediante esta disposición se declaraba la nulidad de todas las adquisiciones, con la expresa devolución a sus antiguos dueños o poseedores. Con respecto a los compradores, se determinaba la pérdida de las mejoras que hubiesen efectuado, el abono de indemnizaciones, inhabilitación para cargos públicos, y pago de costas.

²⁸ *Decretos del Rey Don Fernando VII, ... expedidos por los diferentes ministerios y consejos desde 4 de mayo hasta fin de diciembre de 1.814* ... cit. pp. 92-93

²⁹ *Ibidem*, pp. 185-186.

³⁰ *Ibidem*, pp. 223-228.

Pero antes de examinar detalladamente su contenido, debemos mencionar que su Exposición de Motivos hacía referencia a los dictámenes que se requirieron al efecto, así como a las antiguas disposiciones anulando dichas adquisiciones que se hubieron aprobado en otros momentos anteriores³¹.

Para este objeto, el reglamento que adjuntaba esta Cédula contenía los siguientes extremos:

1º.- Se establecían Juntas³² en cada una de las capitales de provincia, y una Junta Suprema en la Corte³³, cuyo objeto único era el rápido reintegro a las personas cuyos bienes habían sido desamortizados. Entendiéndose el término bienes en sentido amplio: "muebles y semovientes, inmuebles, derechos o

³¹. Literalmente señalaba: "... Para ejecutarlo se oyó el dictamen de mis tres fiscales, y tuvo además presente los decretos expedidos para reprimir la codicia de tales compradores desde el 11 de agosto de 1.808, en que el mi Consejo declaró la nulidad de todos los tratados acordados sin libertad con la más infame coacción, y cuanto se hubiese ejecutado por el Gobierno intruso en estos reinos por falta de autoridad en los Jueces y Tribunales: el de la Regencia de 15 de julio de 1.810, repetido en las circulares de 9 de junio y 24 de noviembre de 1.812, en que manifestando la vileza y perversidad de la compra de las fincas confiscadas a los leales servidores de mi persona y de la Patria, y a los cuerpos eclesiásticos y municipales, se declaró la nulidad de su adquisición, y condenó a los compradores a la pérdida de su dominio y precio desembolsado por él, y a la satisfacción de los daños y perjuicios que hubiesen causado, y en la de los gastos, reparos o mejoras, y los posteriormente expedidos por las Cortes. Y aunque, conformándose el mi Consejo con el dictamen de mis fiscales, estimaba no ser necesaria nueva ley para la restitución a sus legítimos dueños de los bienes confiscados y perdidos en tiempo del Gobierno intruso, consideró no obstante ser conveniente se dijese a los Jueces y Tribunales del Reino el medio fácil y sencillo de ejecutarlo, uniformando sus providencias para evitar efugios, maliciosas dilaciones, costas, y acaso injusticias que frustrasen tan deseado objeto, sin lo que era temer o que no fuesen bien obedecidas las órdenes que se expidiesen, o que en la ejecución, no siendo uniforme, hubiesen reclamaciones o perjuicios. ...".

³². "... compuestas por el Regente, o en su defecto del Oidor decano, dos ministros, y el fiscal más antiguo. ...". (Art. 1).

³³. "... compuesta por cinco ministros que nombraré de los Tribunales supremos, el fiscal más antiguo del Consejo Real, y los subalternos y dependientes necesarios. ...". (Art. 1).

acciones de cualesquiera cualidad y denominación que hubieran sido enajenados, o en otra manera separados del libre uso y goce de sus legítimos poseedores en virtud de decretos u otras providencias, y cualesquiera otras gestiones del gobierno intruso, ...".

Su funcionamiento era autónomo, y conocían de los diferentes asuntos en virtud de criterios territoriales. Sin embargo, para aquellos supuestos concretos donde las provinciales tuvieran alguna duda debían consultar con la Suprema, y además les entregaba cuenta pormenorizada de los distintos procedimientos y de su estado todos los meses.

Estaban auxiliadas por los Tribunales ordinarios para cualquier diligencia que estimaran oportuna, y ellas mismas señalaban los días de despacho.

2º. Ante estas Juntas se seguían las causas para arbitrar las devoluciones, sin perjuicio del derecho de los Tribunales de conocer para otros supuestos.

Estos procedimientos eran sumarios y ejecutivos, y no se admitía en el enjuiciamiento de las diferentes causas ningún tipo de oposición o excepción. Literalmente: "... sin que se admita cuestión alguna acerca del dominio, y ni aun sobre la legitimidad de la posesión, aun cuando los que promuevan semejantes acciones sean terceros interesados diversos del comprador o detentador, pues deberán quedar reservadas para los Juicios y Tribunales competentes, sin que por ellas se impida ni demore en manera alguna el efectivo reintegro. ..."

3º. El reintegro de la posesión de cualesquiera bienes llevaba aparejada el abono de los frutos que hubiesen producido o debido producir³⁴

³⁴ Servía como base para este cálculo de los frutos que "hubiesen debido producir", la
(continúa...)

4º.- Además, se contenía la obligación de los compradores del pago de una indemnización a favor de los antiguos dueños o poseedores, que determinada por estos últimos, se circunscribía a los deterioros o menoscabos que hubiesen sufrido los bienes. Aunque, en caso de acontecer este supuesto, se estimaba la figura de la compensación, limitándola única y exclusivamente a las mejoras que hubiesen efectuado en la finca, siempre y cuando fueran de las que quedaban en poder del bien que se reintegraba.

5º. Sobre las mejoras, se contenía expresamente el derecho de accesión. Pero éste, se aplicaba de modo directo sólo para aquellas de escasa cuantía, puesto que, para las que aumentaban considerablemente el valor de dichos bienes se determinaba expresamente que quedaban en poder del Fisco³⁵.

Cuando éstas últimas no pudieran ser separadas de los fundos el antiguo dueño o poseedor debía pagar al Fisco su importe. Pero si eran susceptibles de separación del fundo sin menoscabo para éste último, es decir, de aprovechamiento independiente, se vendían en pública subasta.

6º.- Los antiguos compradores o detentadores habían de satisfacer, en todo caso, las costas que se generaban en estos procedimientos dirigidos al reintegro. Además del pago de costas, se establecía un castigo pecuniario, a favor del Fisco, que se determinaba según sus haberes, y el grado de malicia que se observara en

³⁴(...continuación)

suma de los productos de los últimos cinco años dividido entre cinco. Esta simple operación matemática será usada en momentos posteriores para hallar el producto anualizado de los bienes inmuebles, aunque con alguna variación para con los de naturaleza urbana.

³⁵. Se recogían como tales: "... aumentos dados con nuevos edificios, ampliación de los existentes, construcción de cercas, pozos, canales de regadíos, algún artefacto que no se pueda separar, u otras obras de igual naturaleza, que acrecienten de un modo considerable el valor real de la finca rústica o urbana, ...". (Art. 5).

cada caso, junto con la inhabilitación para empleos públicos por el tiempo que entendiesen las Juntas en cada caso concreto³⁶.

2. FINANCIACIÓN.

El estudio de la financiación de la Iglesia católica, en el presente trabajo, ha quedado restringido a los extremos señalados. Sin embargo, encontramos algunas disposiciones que resultan interesantes, y que por ello, se exponen a continuación, aunque si bien responden no a la financiación de la Iglesia, sino a la incipiente financiación estatal, pero en todo caso, la Iglesia tenía un papel muy especial como se demuestra en las disposiciones que se señalaran.

La incipiente financiación estatal se ayudaba de la Iglesia fundamentalmente en dos sentidos:

1º Por una parte, usando de sus medios de financiación, que sin embargo, eran modificados según las necesidades propias del poder civil. Y por otra, mediante la presencia de eclesiásticos en las juntas que se encargaban de la formación de censos, o bien en las de recaudación, puesto que conocían mejor que nadie a los propios contribuyentes.

Reflejos de esta idea los podemos encontrar en diferentes manifestaciones de nuestro Derecho, entre otras, se pueden señalar los siguientes:

A). Como es sabido, la contribución general que recaía sobre bienes y derechos era el más importante medio de recaudación del Fisco. Pero, como

³⁶ Estas disposiciones fueron cumplidas con exactitud, toda vez que, en el Trienio Liberal, serían recordadas por los detractores de la Desamortización.

quiera que, esa exacción generaba una doble imposición con algunos de los rendimientos que disfrutaba la Iglesia, fue necesario realizar algunas matizaciones para determinar expresamente cuando se aplicarían, bien a favor de las arcas del Estado, o bien a beneficio de la Iglesia, o bien para ambos. Un ejemplo de ello, se verificaba mediante la Real orden de 3 de enero de 1.818, por la que se declaraban exentos de la contribución general los derechos de estola o pie de altar como tales; pero no los bienes gravados con fundaciones piadosas³⁷.

La solución a estos supuestos de colisión de exacciones era determinada de forma amistosa entre ambas potestades, de suerte que, la propia Iglesia señalaba los casos en que el Fisco disfrutaba rendimientos que antes le eran propios. En este sentido se aprobaba la Real orden de igual fecha por la que se declaraba el sentido que tenía y había de darse a la Bula de Su Santidad de 15 de abril último sobre quienes de los perceptores de diezmos estaban sujetos al pago de la contribución general³⁸.

³⁷. *Decretos del Rey Don Fernando VII, año quinto de su restitución al Trono de las Españas. Se refieren todas las reales resoluciones generales que se han expedido por los diferentes ministerios y consejos en todo el año 1.818.* Tomo Quinto, Madrid, en la imprenta real, 1.819. pp. 7-8. En este mismo sentido, se debe señalar que en este momento se aprobaron numerosas disposiciones tendentes a regular las relaciones entre la financiación de la Iglesia y la incipiente del Estado. En este sentido, y sobre los diezmos poseídos por personas eclesiásticas no se exigía tampoco contribución *Real orden de 16 de marzo de 1.818, por la que se reiteraba cuanto estaba prevenido para que sobre los diezmos poseídos por personas eclesiásticas no se exigiera contribución.* O también las fundaciones piadosas mediante la *Circular de 28 de marzo de 1.818, por la que se expresaba que en la contribución general no debían disminuirse las fundaciones piadosas tanto como sea la parte de aquella repartida y satisfecha, pero si los productos de los bienes ajenos a ellas (Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.818. cit. p. 131 y p. 155 -respectivamente-).*

³⁸. *Decretos del Rey Don Fernando VII, año cuarto de su restitución al Trono de las Españas. Se refieren todas las reales resoluciones generales que se han expedido por los diferentes ministerios y consejos en todo el año 1.817.* Tomo Cuarto, Madrid, en la imprenta real, 1.818. pp. 529-530.

B). Continuando con lo señalado, esa modernización del Fisco requería expresamente de la ayuda de la Iglesia. Y como muestra inequívoca, de entre otras, se puede citar la Real Orden de 26 de abril de 1.818, por la que se mandaba a los curas párrocos respectivamente en sus pueblos y jurisdicciones fueran vocales de las juntas particulares de contribuciones y repartimiento, mientras el Diocesano no diputara eclesiástico de su satisfacción³⁹. En este mismo sentido, también puede citarse la Circular de 7 de septiembre de 1.818, por la que se exhortaba a los ordinarios diocesanos a que por sí, y por medio de los eclesiásticos de sus diócesis, cooperaran con sus luces y autoridad a la más pronta y exacta formación del catastro⁴⁰.

Una muestra más de la línea indicada fue la Real Orden de 28 de agosto de 1.819, por la que se determinaba que los eclesiásticos por lo honorífico, y como contribuyentes, podían ser nombrados por las Juntas locales como peritos repartidores de la contribución general; pero sin obligarlos a la aceptación si lo resistieran⁴¹.

2º. La otra forma tradicional de cooperación de la Iglesia con el Erario era la entrega de cantidades anuales, que previamente habían sido pactadas con Roma.

En este sentido, en primer lugar sobre el conocido subsidio del clero que la Iglesia entregaba al Estado, se pueden traer a colación algunas de las normas

³⁹ *Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.818* cit. pp. 205-206.

⁴⁰ *Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.818* cit. pp. 571-576.

⁴¹ *Decretos del Rey Don Fernando VII, año sexto de su restitución al Trono de las Españas. Se refieren todas las reales resoluciones generales que se han expedido por los diferentes ministerios y consejos en todo el año 1.819* Tomo Sexto, Madrid, en la imprenta real, 1.820, pp. 332-333.

más significativas como la Real Orden de 10 de octubre de 1.817 por la que se declaraban sujetas al pago del subsidio extraordinario de los treinta millones, y de la contribución general del reino según que fuere la naturaleza de los bienes, las anualidades de prebendas eclesiásticas destinadas para la extinción de la deuda del Estado⁴².

En todo caso, en esa contribución se observó una pequeña rebaja, puesto que, durante los años anteriores se había establecido la cantidad de 30.000.000. rs., pero en función de acuerdos particulares, podía rebajarse para algunos ejercicios. Tal fue el caso del año 1.818 donde se rebajaba a la cantidad de 25.000.000. rs.⁴³

Fuera ya de la entrega de ese subsidio extraordinario del clero, se puede citar alguna otra disposición de interés, nos debemos detener en la petición de limosnas. Se trataba de un derecho que el Estado había reconocido a la Iglesia Católica desde hacía siglos, y que se encontraba perfectamente delimitado dentro de la Novísima Recopilación de las leyes de España⁴⁴. Su extensión era clara, se limitaba única y exclusivamente a los nacionales. En este momento se recordaba para su cumplimiento dicha disposición mediante la Real Orden de 11 de octubre de 1.817, donde se reiteraba a todas las autoridades así civiles como militares la observancia de la Ley 11, Título XXVIII, del Libro I de la Novísima

⁴². *Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.817*. cit. pp. 528-529.

⁴³. Real orden de 5 de octubre de 1.818, comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Comisión Apostólica del subsidio extraordinario: acordaba S.M. que en el presente año se redujera a veinticinco millones el repartimiento del subsidio en lugar de los treinta a que estaban afectas satisfacer las rentas eclesiásticas. (*Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.818*. cit. pp. 584-585).

⁴⁴. *Novísima Recopilación ...*, Tomo I. cit. p. 194. Se trataba de la Ley XI. Tit. XXVIII, libro Iº. Dicha disposición fue aprobada por Carlos III, en el cap. I de la Cédula del Consejo de 24 de noviembre de 1.778, cuyo título era *No se permita qüestar en estos reynos á Eclesiásticos seculares o Regulares extranjeros*.

Recopilación, que mandaba que a ningún eclesiástico extranjero secular o regular se le autorizara por ningún pretexto entrar en estos reinos para cuestas o pedir limosna⁴⁵

3. ENSEÑANZA

La enseñanza primaria en este siglo XIX era promovida desde todos los grupos políticos existentes en el país, aunque cada uno bajo el prisma concreto de sus ideales.

La monarquía absolutista también era partidaria de su desarrollo, sobresaliendo en este empeño el propio Consejo de Estado. Pero lo más llamativo de todo ello era que, para este fin, utilizaba directamente a la Iglesia, y en mucha mayor medida a lo que sería usada por los grupos liberales posteriormente.

Fruto de este empeño, resultaba normal la aprobación de disposiciones como el Real Decreto de 9 de octubre de 1.814, mandando que se expidieran circulares a los M.RR. Arzobispos, R.R. Obispos y demás Prelados de España e Indias, con el objeto de que escribieran pastorales a sus respectivos diocesanos, a fin de corregir la corrupción casi general que había en las costumbres, previniendo a los párrocos para que persuadieran la obligación que tenían los padres de familia de enviar a sus hijos a la instrucción doctrinal⁴⁶.

En este último sentido se expresa Ruiz Berrio quien señala que de entre todas las notas que destacan en la enseñanza a principios del Siglo XIX, destaca

⁴⁵. Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.817, cit. pp. 532-534.

⁴⁶. *Decretos del Rey Don Fernando VII. ... expedidos por los diferentes ministerios y consejos desde 4 de mayo hasta fin de diciembre de 1.814* ..., cit. pp. 308-309.

la *universalidad*, donde cualquier español debía recibir la instrucción que le correspondía y debía tener el acceso necesario para que le fuera impartida. Es decir, tal y como señala de forma literal, "Se piensa que la obligación del padre es más que cuidar del cuerpo de su hijo, alimentar su alma, ya que Dios nos hizo seres racionales. Pero el sentido de esa obligatoriedad se hace difícil de inculcarlo en la voluntad de los padres españoles, aunque se está generalizando en aquellos momentos"⁴⁷.

Para la educación de las niñas, ya existían centros creados al efecto⁴⁸, sin embargo, a partir de este momento, las religiosas estaban llamadas a tener una participación activa. Por ello, se entendía que debían colaborar en su instrucción primaria aportando su trabajo. Ahora bien, esto planteaba problemas no en sí por la cumplimiento de tareas docentes, sino porque debido a la realización de esa función tenían que desatender obligaciones propias de su instituto. Toda vez que, para desempeñarla, podrían necesitar actuaciones concretas que si podían ir en contra de las reglas de sus respectivas órdenes. Por ello, antes de tomarse ningún tipo de medida legislativa en España, fue necesario solicitar autorización a Roma

⁴⁷. Ruiz Berrio, J., *Política escolar de España* ..., cit. p. 27.

⁴⁸. Ruiz Berrio, J., *Política escolar de España* ... cit. recoge expresamente un capítulo denominado Educación de la mujer pp. 30-36. Concretamente en la p. 31, señala literalmente el estado que presentaba en este momento: "... Las escuelas de niñas habían sido creadas por decreto de Carlos III. ... Después de la invasión francesa se multiplicaron esas escuelas ... escuela que estaba regida por una maestra con título competente exigido por el Consejo de Castilla. En estos establecimientos se les enseñaba el Catecismo y a coser. Era lo único que sabían las maestras; también era lo único que se les exigía en los exámenes que les hacían las Diputaciones de Caridad. En algunos casos se les enseñaba a las niñas a leer y escribir, pero esta instrucción corría a cargo del maestro de niños que hubiera en el barrio. ... Todo ello nos lleva a señalar que si bien existían algunos centros para niñas, los conocimientos que se les dispensaba eran escasísimos. Se pensaba que la mujer sólo tenía su puesto en el matrimonio. ... Esta deficiente situación, por desgracia, se hacía más exagerada en los pueblos, en la mayoría de los cuales donde las había no se mandaban las niñas a ellas porque tanto los padres como las madres no lo estimaban necesario, ni a veces moral".

a fin de que se dispusieran las oportunas licencias a los Arzobispos, Obispos y otras jerarquías eclesiásticas españolas para que las religiosas prestaran tareas de enseñanza de niñas. En este sentido se pronunciaba el Real Decreto de 8 de julio de 1.816, sobre el establecimiento de escuelas de educación para niñas en los conventos de religiosas⁴⁹.

Tras la existencia de esa disposición, bajo nuestra opinión, podemos decir que esta labor de las religiosas supondría no sólo un incremento cuantitativo para la existencia de centros de enseñanza para niñas, sino que supondría un salto cualitativo, toda vez que las religiosas atesoraban mayores conocimientos que convenientemente impartían en su docencia, consiguiendo a la postre, una mayor formación intelectual de las niñas.

Respecto a los planes de enseñanza, seguían vigentes los anteriores a la Guerra de la Independencia. Por lo que se refleja también en la educación ese deseo de regreso a las estructuras del Antiguo Régimen, donde con muy pequeñas modificaciones, nos situamos ante el esquema que existía antes de 1.808.

4. LIBERTAD DE IMPRENTA.

Tras la vuelta de Fernando VII, y su reprobación a la obra liberal, era necesario aprobar rápidamente algunas disposiciones para establecer una nueva regulación de algunos aspectos controvertidos.

⁴⁹ *Decretos del Rey Don Fernando VII, año tercero de su restitución al Trono de las Españas. Se refieren todas las reales resoluciones generales que se han expedido por los diferentes ministerios y consejos en todo el año 1.816. Tomo Tercero, Madrid, en la imprenta real, 1.819, pp. 257-261.*

La materia que más problemas había creado a los liberales era el derecho de libertad de imprenta, puesto que, tal y como se ha señalado, no supieron establecer sus límites de forma eficaz, y en la práctica se utilizó para atacar abiertamente a cualquier poder o institución en España.

Fernando VII era consciente de la urgente necesidad de solucionar esta materia, por lo que cuando se hizo con el poder no sólo señaló esta intención en el citado Manifiesto de 4 de mayo, sino que de forma inmediata, dispuso lo que podríamos denominar medidas cautelares mientras que se promulgara una nueva legislación sobre libertad de imprenta.

A tal efecto, se aprobó la Circular de 4 de mayo de 1.814, mandando observar lo que se prevenía sobre libertad de imprenta⁵⁰.

El contenido era lapidario. Se determinaba que mientras no se aprobara una nueva regulación, todo impreso, en términos generales, (carteles, anuncios, periódicos, etc ...) no se pondría en circulación sin el oportuno visto bueno del jefe político, quien, en todo caso, denegaba o autorizaba dicha publicación tras el asesoramiento oportuno de "personas doctas", como señalaba literalmente la Orden.

Quizá el punto más álgido en la limitación de la libertad de imprenta en este siglo se producía en este período, y su exponente máximo fue la Real Orden de 25 de abril de 1.815, por la que prohibía S.M. todos los periódicos que se publicaban dentro y fuera de la Corte, y mandaba que sólo se publicaran la

⁵⁰. *Decretos del Rey Don Fernando VII, ... expedidos por los diferentes ministerios y consejos desde 4 de mayo hasta fin de diciembre de 1.814. ...*, cit. pp. 11-12.

Gaceta y el Diario de Madrid⁵¹. Esa medida se justificaba por sus autores en dos razones:

1º Para impedir los excesos cometidos por ese medio.

2º Y para salvaguardar el orden público⁵².

La Inquisición se convertía en el brazo ejecutor de dicho endurecimiento. Puesto que, tras anularse el Decreto que sancionaba su abolición, los escritos que versaban sobre religión, volvían a ser examinados directamente por ella.

Por citar algún ejemplo de sus trabajos, se puede señalar el Edicto de la Suprema y General Inquisición, en el que se anotaban y señaladamente se condenaban como contrarios a la Religión y al Estado las obras o folletos que en estos últimos tiempos se habían impreso; cuya prohibición también era extensiva, y con acuerdo de S.M. se mandaba recoger hasta que fueran examinados y calificados los designados en lista adjunta, que con el nombre de periódicos habían circulado por toda la Nación⁵³.

En su virtud, se retiraban de la venta y se impedía la distribución de una larga lista de impresos, que abarcaba una gran variedad de publicaciones: periódicos, catecismos políticos, diccionarios, impresos de historia, etc ...

⁵¹ *Decretos del Rey Don Fernando VII.* — año 1.815 — cit. p. 264.

⁵² El mantenimiento del orden público, en este momento concreto, se vió especialmente protegido. Resultaba elocuente la Real Orden de 22 de febrero de 1.815, encargando al Tribunal del Consejo que cuidara de que se castigaran los escándalos y delitos públicos, palabras obscenas, y las irreverencias en los templos. (*Decretos del Rey Don Fernando VII.* ... , año 1.815, cit. pp. 133-134).

⁵³ *Decretos del Rey Don Fernando VII.* — año 1.815 — pp. 503-517.

A pesar de las disposiciones anteriores, la regulación básica del derecho de libertad de imprenta se situaba en la Novísima Recopilación de las leyes de España⁵⁴. Así se puede afirmar, a la vista, entre otras, de la Circular emitida por el Consejo Real de 30 de junio de 1.817, para que se renovasen para su cumplimiento las leyes y penas acordadas sobre los delitos de la prensa en cuanto a la propiedad de los autores acerca de sus obras⁵⁵.

Los motivos de esas severas restricciones resultaban evidentes. Por un lado, el señalado orden público, y por otro, un motivo no confesado por sus autores, pero de importancia mayor. Se trataba de salvaguardar el Antiguo Régimen, puesto que la libertad de imprenta era un derecho irrenunciable para el liberalismo que no sólo representaba la capacidad de crítica, de discusión, y, en definitiva, la capacidad de manifestarse en contra de los poderes establecidos enjuiciando no sólo sus actos, sino a ellos mismos. Y por lo tanto, un instrumento de cambio social, que el Antiguo Régimen no podía consentir y necesitaba amordazar.

Como resumen, se puede afirmar que los tres pilares básicos, entendidos como límites protegidos por el derecho de imprenta -tal y como se puede observar del conjunto de disposiciones citadas en la presente investigación-, estaban constituidos por los siguientes extremos:

⁵⁴. Éste resulta un ejemplo más de lo manifestado en el presente trabajo. Puesto que mediante el Derecho se retrocedía al orden establecido antes de la Guerra de la Independencia, es decir, al Antiguo Régimen, donde la Novísima Recopilación de las leyes de España era el exponente máximo de las leyes de la monarquía española.

⁵⁵. *Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.817*. cit. pp. 330-332.

1º.- Protección ante ataques dirigidos al Estado en general, miembros de la administración -desde Ministros hasta oficiales de dependencias-, la monarquía, la propia Constitución, etc ...

2º.- El Orden público, para evitar las perturbaciones que las diferentes publicaciones podrían desatar en los ciudadanos.

3º - La necesidad de proteger la religión y el clero de la libertad de imprenta.

4.1 CONTROL DE LAS OBRAS DE TEATRO

Esta Circular citada, de 4 de mayo sobre libertad de imprenta⁵⁶, hacía referencia expresa también a las obras teatrales, estableciendo su censura previa en términos igualmente severos. Es decir, se prohibía su representación sin haber superado el mismo examen que se establecía para los escritos: el oportuno visto bueno del oportuno jefe político.

Los motivos estaban claros, al menos formalmente, y aparecían contenidos en términos generales incluso en el propio texto: preservar a la religión católica de ataques, no permitir publicaciones partidistas en contra del Rey y el respeto entre los factores sociales.

⁵⁶. La Circular de 4 de mayo de 1.814, mandando observar lo que se prevenía sobre libertad de imprenta. (*Decretos del Rey Don Fernando VII, expedidos por los diferentes ministerios y consejos desde 1 de mayo hasta fin de diciembre de 1.814* ..., cit. pp. 11-12).

5. EL ESTATUTO DEL CLERO.

Junto a las normas que sancionaban la devolución de los bienes a la Iglesia, encontramos disposiciones que establecían, de nuevo, la normalidad en las relaciones entre España y la Santa Sede. La primera de ellas estuvo constituida por la referente a la vuelta del Nuncio a la Corte para continuar con sus funciones⁵⁷.

5.1 COMPORTAMIENTOS DEL CLERO

Dentro de la propia Iglesia Católica existían sectores liberales que no estaban de acuerdo con el retorno del Antiguo Régimen. Prueba cierta de ello fue el Real Decreto de 24 de mayo de 1.814, mandando a los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos celasen en el cumplimiento de su alto ministerio, y que sus respectivos súbditos guardasen y observasen en sus acciones, opiniones y escritos la verdadera y sana doctrina, no permitiéndose se hicieran asociaciones y ligas en perjuicio de la tranquilidad pública⁵⁸.

Disposiciones de este tipo, y en concreto, este Decreto no suponían novedad en nuestro Derecho, puesto que su contenido aparecía recogido en la Novísima Recopilación⁵⁹. Sin embargo, su contenido ahora se modificaba, toda

⁵⁷. La Real orden de 24 de mayo de 1.814, comunicada por el primer Secretario de Estado al Nuncio de S.S. para que vuelva a esta Corte a desempeñar su legacía (*Decretos del Rey Don Fernando VII, ... expedidas por los diferentes ministerios y consejos desde 4 de mayo hasta fin de diciembre de 1.814, ...*, cit. pp. 29-30).

⁵⁸. *Decretos del Rey Don Fernando VII, ... expedidas por los diferentes ministerios y consejos desde 4 de mayo hasta fin de diciembre de 1.814, ...*, cit. pp. 26-28.

⁵⁹. *Novísima Recopilación ...*, Tomo V, cit. p. 341-342. La Ley I, Tit. XII, libro XIIº
(continúa...)

vez que solicitaba del clero un apoyo cierto para con el monarca. Esa defensa o apoyo al Antiguo Régimen se requería a las altas dignidades del clero, sobre todo mediante dos tipos de actividades:

La primera, que podríamos denominar activa, toda vez que se ordenaba que vigilasen muy estrechamente la enseñanza que se impartía en los Seminarios, desde dos vértices muy concretos, el primero desde el control a los alumnos, apartando a los jóvenes que allí se educaban que presentaran opiniones "... *erróneas y peligrosas, tanto en lo político como en lo moral ...*". Y el segundo, desde el examen de los profesores, para "... *que los Catedráticos y maestros de tales casas les den saludable doctrina ...*".

La segunda, que podríamos denominar pasiva, puesto que disponía expresamente que no se promovieran a las ternas para curatos y beneficios eclesiásticos, a aquellos religiosos que se podían denominar liberales: "... *que no estén imbuidos en tales opiniones, y hayan dado prueba de adhesión a los sanos principios por donde han ido los hombres sabios de España ...*".

Este último extremo, que pretendía lograr sólo la promoción de los miembros del clero afines al régimen, requería también de vertiente positiva. Y por ello encontró la cobertura necesaria en nuestro Derecho. Baste citar, entre otros, el Real Decreto de 13 de noviembre de 1.819, por el que S.M. determinaba que los M.RR. Arzobispos y RR. Obispos remitieran listas e informes de todos

⁵⁹(...continuación)

Dicha disposición fue aprobada por Juan I, en Guadalajara el año 1.300, y constituía la ley 2ª de su ordenamiento de leyes, cuyo título era *Prohibición de ayuntamientos, ligas y confederaciones entre Concejos, Caballeros ú otras personas*. Esa disposición encontraba una especificación mayor para los ministros de la Iglesia que contravinieran la denominada "tranquilidad pública", mediante la Ley III, del mismo Título y Libro pp. 342-343. Cuyo título era *Pena de los Prelados y personas eclesiásticas que concurren a bandos, parcialidades, ligas y mompodios*.

los eclesiásticos seculares y regulares de sus respectivas diócesis, que por sus virtudes y méritos debían ser colocados en las prebendas y dignidades eclesiásticas⁶⁰.

Tras solicitarse, tal y como señalaba el título del Decreto, a las altas jerarquías eclesiásticas que remitieran "... por su puño ...", a la mayor brevedad posible listas e informes circunstanciados de todos los eclesiásticos seculares y regulares de las respectivas diócesis, se establecían los criterios de promoción aparecían concretados por esta disposición, toda vez que dichas dignidades debían conceder lugares preferentes a los párrocos que más hubiesen sobresalido en el cumplimiento de sus obligaciones, instruyendo, amparando y auxiliando a sus feligreses, interesándose en la educación de los niños de sus respectivas parroquias, a los catedráticos de universidades y seminarios que mejor hubiesen llenado sus destinos, y procurando inspirar en sus discípulos el amor a la paz, a las buenas costumbres, subordinación a los superiores, y la obediencia a las leyes, y por último a aquellos que por el conjunto de sus virtudes fueran dignos de ser colocados en destinos en donde se persiga mejor el interés general. Todas esas noticias se enviaban por *conducto reservado*, y a finales de cada año.

Con todo ello se pretendía que las jerarquías católicas afines al Antiguo Régimen emitieran informes de los miembros del clero, de suerte que no quedase ningún eclesiástico sin ser evaluado, conteniendo su edad, destinos en los que haya servido y el resto de las cualidades indicadas. Con esto se lograba que el poder civil conociera perfectamente el parecer de todos y cada uno de ellos hacia el orden político.

⁶⁰. *Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.819*. cit. pp. 454-456.

No se debe olvidar que los púlpitos de los templos continuaban teniendo un poder inmenso que, por otra parte, no era desconocido por el Rey y su gobierno. Por ese motivo, se ejercían los anteriores controles de promoción, que a su vez se intensificaban al intentar limitar las alocuciones efectuadas por los eclesiásticos en ese lugar únicamente a aspectos religiosos.

En este sentido, se aprobó la Real orden de 12 de abril de 1815, previniendo a los oradores que en los púlpitos no expusieran a los oyentes más que las doctrinas evangélicas, y cuanto sea conveniente a corregir los vicios, como por repetidas leyes y órdenes, y que a continuación se expresaban, esta mandado⁶¹. Se trataba de una manifestación del conocido regalismo, mediante el cual era necesario ajustar la doctrina de la Iglesia a la marcada por el poder civil.

Por lo que respecta a su contenido, hay que decir que, este difícil título tan sólo servía para indicar que se abstuvieran de valoraciones sociales o políticas, limitándose en los púlpitos única y exclusivamente a predicar lo relacionado con su ministerio. Para ello se recordaban algunas normas de la Novísima Recopilación, la Ley Iª del Título XII de su Libro XII⁶², o la ley XXII, Título I, Libro I⁶³.

⁶¹ *Decretos del Rey Don Fernando VII*, año 1815, cit. pp. 233-236.

⁶² Vid. nota 55.

⁶³ *Novísima Recopilación* ..., Tomo I, cit. La Ley XXII, Tit. I, libro Iº pp. 13-14. Dicha disposición fue aprobada por Carlos IV, en San Lorenzo por Real Orden de 10 de diciembre de 1800, inserta en Circular del Consejo de 9 de enero de 1801, cuyo título era *Prohibición de sostener las proposiciones condenadas del Sínodo de Pistora*.

5.2 ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS AL CLERO

En este período el grupo de los que habían accedido a colgar los hábitos, bajo ideologías más o menos progresistas o liberales, a cambio de una pensión vitalicia durante la ocupación francesa -secularizados- constituían un problema social. Toda vez que el fin del Gobierno afrancesado les había dejado sin residencia al haber abandonado sus ocupaciones y sin sustento económico, porque ni el Gobierno liberal, ni ahora el instaurado por Fernando VII, les atendía económicamente. Por ello, nos encontramos con un grupo de eclesiásticos, concentrados en su mayoría en la corte, que vagaban sin domicilio y que conseguían subsistir pidiendo limosna.

Se trataba, desde luego, de un grupo que podía considerarse marginal, pero que necesitaba de soluciones. A este fin, se aprobó la Real Orden de 24 de septiembre de 1.818, por la que se prevenía que los religiosos secularizados por Prelados diocesanos en tiempo de la ocupación francesa se trasladaran a sus respectivos conventos sin dilación alguna, saliendo también de la Corte para sus diócesis cuantos en ella se hallaran con bulas corrientes de secularización⁶⁴.

Esta Orden contenía una doble prescripción. Por un lado, se requería a los propios secularizados ordenándolos que volvieran a sus antiguas residencias y ocupaciones. Y, por otro lado, se obligaba a las autoridades eclesiásticas, quienes debían cumplir dicha disposición y volver a situar a cada uno en sus anteriores ocupaciones.

La solución arbitrada por Fernando VII no fue seguida por esta clase social, que no deseaba volverse a sus anteriores oficios y ocupaciones. Por ello,

⁶⁴. *Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.818*. cit. pp. 550-551.

se aprobaron numerosas disposiciones tendentes a solucionar esta cuestión. Entre otras, se puede señalar la Real Orden de 8 de abril de 1.819, por la que se encargaba a los Diocesanos y Prelados Regulares que hicieran que los religiosos secularizados y otros que presumían pasar por tales observaran, cuidadosamente y sin excusa, cuanto se prevenía y estaba acordado sobre la materia en repetidas Reales Ordenes⁶⁵

Otro punto de interés estaba configurado por la Orden de los jesuitas, que también contó con protagonismo específico en este momento histórico, puesto que, como es sabido, habían sido expulsados de España en el período liberal, y con la vuelta de Fernando VII regresaron a España.

Para su restablecimiento, se promulgaron diferentes disposiciones, de entre las que se puede señalar el Real Decreto de 4 de julio de 1.818, por el que S.M. se dignaba instituir nuevamente una Junta para que exclusivamente entendiera en el restablecimiento de los Jesuitas, acordado en 29 de mayo de 1.815 y 3 del mismo mes del año siguiente⁶⁶. Este Decreto venía a renovar la Junta creada anteriormente, dotándola de nuevos miembros para que "... componiéndola de personas que puedan dedicarse exclusivamente a su objeto, y trabajar en él todos los días, ... y para el mejor desempeño del encargo que les confió, ha de ser su única ocupación. ..."

⁶⁵ *Decretos del Rey Don Fernando VII - año 1.819* - cit. pp. 175-176.

⁶⁶ *Decretos del Rey Don Fernando VII - año 1.818* - cit. pp. 321-322.

6. EL CONSEJO DE LA CÁMARA

El llamado Consejo de la Cámara tenía atribuidas numerosas funciones, entre otras, algunas relacionadas con el derecho o privilegio de presentación, concretamente las de proveer plazas de Consejos, Tribunales, y demás Juzgados, junto con las de Prelados y distintos beneficios eclesiásticos.

En desarrollo de esa función de anunciar las piezas eclesiásticas que se promovían, le correspondía la obligación de emitir los oportunos informes.

Como prueba de esta función, se puede traer a colación el Real Decreto de 26 de junio de 1.816, sobre la provisión de los empleos así civiles como eclesiásticos, mediante los que son correspondientes a la Cámara consultar; y atribuciones de las Secretarías del Despacho de Gracia y Justicia sobre negocios contenciosos⁶⁷. Y, como literalmente se contenía, su razón de ser era: "... para proponer a los destinos a los sujetos más dignos ...".

Este Consejo de la Cámara parece ser que se encuadraba formalmente dentro del conocido Consejo Real⁶⁸, quién tenía encomendado como una de sus

⁶⁷. *Decretos del Rey Don Fernando VII, ... año 1.816*, pp. 235-237.

⁶⁸. De los diversos Consejos que integraban la monarquía moderna, se destacaba como el principal el Consejo de Castilla, que aunque originariamente no fuera sino el Consejo Real de esta región, por el papel preponderante ejercido por la misma respecto a los demás territorios, ... y de hecho se convirtió en el Consejo Real o simplemente en el Consejo por antonomasia. Y así, como "Secuela del Consejo de Castilla" fue la Cámara de Castilla, organizada como consejo particular o áulico de los monarcas, para aquellas cuestiones de gracia o merced, más vinculadas en su decisión a la persona del soberano. En todo caso, el Consejo de Castilla desapareció a principios del siglo XIX, refundido con los demás en un nuevo y único Consejo de Estado. (AA.VV. *Diccionario de Historia de España*, dirigido por Bleiberg G., Tomo 1, Barcelona, 1.986, pp. 943-945). Así, según esta misma fuente, La Cámara de Castilla: Organismo internacional de la Administración central en la Edad Moderna, surgida como una hija del Consejo de (continúa...)

funciones principales velar por la defensa del Orden Público. En apoyo de ambas afirmaciones, se puede señalar la Circular del Consejo Real de 10 de marzo de 1.818, que reiteraba el puntual cumplimiento de lo prevenido en la Real Orden de 22 de febrero de 1.815, a efecto de que fueran castigados bajo la forma que se expresaba los escándalos y delitos públicos, como voluntarias separaciones de matrimonio, palabras obscenas, las irrelevancias a los templos y otros⁶⁹. Concretamente se prescribía que se castigasen: "... los escándalos y delitos públicos ocurridos por voluntarias separaciones de los matrimonios, y vida licenciosa de los cónyuges, o algunos de ellos, por amancebamientos también públicos de personas solteras, y por la inobservancia de fiestas eclesiásticas; y asimismo las palabras obscenas, las injurias hechas a los Ministros de la religión, el desprecio con que se habla se de ellos, y las irreverencias en el templo. ..."

7. LEGISLACIÓN ELECTORAL

Con la vuelta de Fernando VII, la parroquia deja de ser la circunscripción electoral, tal y como señalaba la Real Orden de 25 de diciembre de 1.814, por la que se mandaba que las Juntas para preparar y hacer elecciones de Justicias celebradas en muchos pueblos en las Iglesias, se ejecutaran en lo sucesivo en las casas de Ayuntamiento donde se reunían para tratar los asuntos del Concejo⁷⁰.

⁶⁸(...continuación)

Castilla y organizada con personalidad propia por Carlos I y Felipe II, como un Consejo especialmente personal y vinculado a los monarcas para aquellos asuntos mas directamente dependientes de la misma. Felipe II lo reorganizó en 1.588, como un Consejo especial o "Real Cámara", con sus propias ordenanzas, que comprendía una reglamentación minuciosa de 27 artículos. Subsistió hasta los inicios del Siglo XIX. (Ibidem, p. 647).

⁶⁹ Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.818, cit. pp. 123-124.

⁷⁰. *Decretos del Rey Don Fernando VII, ... expedidas por los diferentes ministerios y*
(continúa...)

En virtud de su contenido, se venían a derogar las disposiciones liberales anteriores, de suerte que cualquier tipo de acto de elección que requiriese votación y discusión se extrapolaba fuera de las iglesias, y se atribuía al Municipio.

El deseo del legislador era claro, pretendía evitar cualquier discusión dentro de las iglesias. Literalmente se señalaba: *"... las elecciones a justicias se celebran en muchos pueblos en las iglesias, a cuyo respeto y veneración es muy frecuente faltarse con motivo de los acaloramientos y disputas que se suscitan en semejantes reuniones; se ha servido mandar que en lo sucesivo se celebren tales reuniones en las casas donde se reúne el Ayuntamiento para tratar los asuntos del Concejo. ..."*.

8. JURAMENTO

En la línea señalada de ruptura con todo lo actuado por las Cortes de Cádiz, se promulgó, en relación al juramento de la Constitución, la Circular de 27 de junio de 1.814, mandando que los que no hubieran tomado posesión hasta ahora de los empleos conferidos por la Regencia no tenían necesidad de jurar el guardar la Constitución y que tampoco estaban en el caso de cumplir los que hubieran jurado⁷¹.

⁷⁰(...continuación)

consejos desde 4 de mayo hasta fin de diciembre de 1.814, ... , cit. p. 407.

⁷¹. *Decretos del Rey Don Fernando VII, ... expedidas por los diferentes ministerios y consejos desde 4 de mayo hasta fin de diciembre de 1.814, ... , cit. p. 102.*

CAPÍTULO V

CAPÍTULO V

EL TRIENIO LIBERAL: (1.820-1.823)¹

I. EL TRIENIO LIBERAL: (1.820-1.823)

1. INTRODUCCIÓN

Se puede afirmar que en el año 1.820 se había creado un clima de desconfianza hacia el gobierno absolutista de Fernando VII que era justamente todo lo contrario del que, basado en la confianza ilimitada, existía en 1.814. Y, siguiendo la opinión de Palacio Atard², los factores que contribuyeron a ese cambio en el enjuiciamiento del régimen habían sido los siguientes:

1º. El ambiente de crisis política, acentuada desde los cambios ministeriales³ de septiembre de 1.818.

2º. Las conspiraciones militares, como la de Lacy y Milans del Bosch en Cataluña, en la primavera de 1.817, o la de Vidal, descubierta y abortada antes de la fecha prevista para el pronunciamiento en Valencia el 1 de enero de 1.819.

¹. Comellas García-Llera, J.L., *Los Realistas en el Trienio Constitucional (1.820-1.823)*. Pamplona, 1.958, p. 15. Comienza esta obra delimitando este período: "... El período de nuestro siglo XIX comúnmente llamado Trienio Constitucional -que, en realidad, comprende, dentro de su total desarrollo, cuatro años, de 1.820 a 1.823- señala la consagración de la lucha abierta, en España, por cuestiones políticas. ...".

². Palacio Atard, V. *La España del ...*, cit. p. 115.

³. Pintos Vieites, M^a del C., *La política de ...*, cit. p. 368. Contiene un cuadro que se reproduce como Anexo N^o 1, donde se pueden verificar los continuos cambios ministeriales.

3º. El marasmo económico y hacendístico¹, que no pudieron remediar las reformas de M. Garay, sino que más bien lo acentuaron.

2. LOS LEVANTAMIENTOS MILITARES: DE NUEVO LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

Sobre el apartado de las conspiraciones castrenses, hay que señalar que los militares, bajo el manto de la sociedad secreta de la masonería² y con el apoyo económico de la burguesía³, encabezaron a lo largo de este período una serie de

¹. Sevilla de Andrés, D., *Historia Política...*, cit. p. 90. Con respecto al estado de la economía y el erario público, señala que: "La Nación lejos de reponerse de las calamidades de la guerra, se empobreció en medio de la más profunda paz y de las más abundantes cosechas; perdió su gloria y fue objeto de lástima o burla de las naciones extranjeras, pocos días después de haberlo sido de su admiración; el Rey perdió el amor del pueblo y fue tratado por los extranjeros en sus escritos con el mayor desacato y vilipendio; la deuda nacional creció en vez de disminuirse; el crédito público quedó arruinado; la defección de las provincias de Ultramar se aumentó y cobró fuerzas; el comercio se extinguió del todo y, en fin, el desencanto llegó a penetrar en las más incultas aldeas. Fueron muchos los realistas -Elio y el Inquisidor general, entre otros- que esperaron y aconsejaron al Rey cambiar de política, lo que hubiese hecho inútil la conspiración masónica que dió el triunfo a Riego"

² Sobre la masonería en los tiempos de Fernando VII existen numerosas obras que se han encargado de su estudio. Para un mayor detalle, entre otras, veasé El marqués de Valdelomar, *Fernando VII y la masonería*, Madrid, 1970. Resultan especialmente interesantes los apéndices que contiene, que muestran la realidad del momento.

³. Tomás y Valiente, F., *Manual de Historia del Derecho español*, Madrid, 1987. Se pregunta si ¿hubo revolución burguesa en España? (pp. 403-404). Partiendo de las discusiones de los historiadores sobre si puede hablarse o no de la existencia de una verdadera revolución burguesa en España, señala que lo que les agrupa o separa es el concepto mismo de revolución. La opinión de Tomás y Valiente al respecto era la siguiente: *Entiendo por revolución burguesa el proceso estructural que transformó las bases de la sociedad del Antiguo Régimen y creó las condiciones jurídicas y políticas necesarias para la constitución de una sociedad dominada por la burguesía, organizada políticamente bajo la forma del Estado liberal y caracterizada por la implantación y desarrollo de unas relaciones capitalistas de producción y cambio*. Con arreglo a este (continúa...)

levantamientos destinados, en último término, a sustituir la Monarquía absoluta restaurada por Fernando VII en 1.814 por una monarquía liberal basada en los principios de las reformas gaditanas⁷.

Ese protagonismo de los militares, que ya se apuntaba en ese período, se concretaría durante toda nuestra historia en este siglo XIX. Pero en relación a los diferentes pronunciamientos que aparecieron en esos seis años, ha advertido Comellas, tras su estudio detallado, como todos presentaban una tipología muy similar, capaz de sintetizarse en unas breves conclusiones⁸:

1º. Los pronunciamientos no obedecían a una causa que pudiera denominarse obligatoria, esto es, un motivo que fuera capaz de justificarlos y desencadenarlos por absoluta necesidad. Es decir, los pronunciamientos aparecían más como una pretensión movida por ambiciones políticas, sociales o económicas que como una necesidad común al pueblo español.

⁶(...continuación)

concepto parece indudable que en España sí que hubo revolución burguesa, si bien ésta se llevó a cabo no según las pautas del modelo francés, ni tampoco obedeciendo a los criterios y normas de un supuesto "tipo ideal" de revolución burguesa (en ningún lugar realizado), sino tal y como lo permitieron las reales y peculiares características de la sociedad española. Como tal proceso, la revolución burguesa española tuvo sus fases, sus oscilaciones y sus frustraciones provisionales: fue ciertamente un proceso discontinuo e intermitente. Pero a través de este proceso se produjeron bruscas mutaciones estructurales, cambios profundos que significaron la ruptura de continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Régimen, entre dos modelos de organización social. Por consiguiente, lo específico del cambio revolucionario consistió en la liquidación de las bases del Antiguo Régimen y en la simultánea creación de unos nuevos fundamentos de la organización social, de las bases de un nuevo sistema jurídico y político.

⁷. Sánchez Mantero, R., *Fernando VII ...* cit. p. 70.

⁸. Comellas García-Llera, J.L., *Los primeros pronunciamientos en España, 1.814-1.820*, Madrid 1.958. pp. 357-361. Tras un estudio detallado de la motivación de los pronunciamientos, el pensamiento político de Fernando VII y los diferentes pronunciamientos acontecidos en este período, llega a unas interesantes conclusiones que a continuación se señalan de forma somera.

2º. Eran obra de una minoría. El pueblo permanecía ajeno, y casi siempre hostil a los intentos. La clase media pudo mirarlos con cierta simpatía, sobre todo en los momentos finales, pero sólo una pequeña parte les prestó su colaboración activa. La nobleza estuvo representada, sobre todo en la conjura de 1.817, pero sólo de forma parcial, puesto que la inmensa mayoría permanecía neutral o adicta a Fernando VII. Las multitudes y las manifestaciones no surgieron hasta que la empresa hubo triunfado y el Rey jurado la Constitución, pero esa multitud no había tenido parte en el pronunciamiento.

3º. Su motivación era triple: Por una parte, encontramos el influjo de las ideas del liberalismo. No es ajeno a ese móvil utópico el tipo de "Militar romántico", joven y soñador, aunque no exento a veces de ambición personal. En segundo lugar, el deseo de alcanzar grados militares tan accesibles en la guerra de la independencia, y tan esquivos después por una política diseñada para impedir la promoción de los antiguos triunfadores. Y en tercer lugar, el móvil económico, con abundantes ejemplos en forma de participación y apoyo por parte de las clases mercantiles, sobre todo en las conspiraciones de la última época.

4º. Los intentos son esporádicos y carecen de repercusión. Excepto en la última y decisiva ocasión, se quedaron siempre solos.

5º. Como corolario de las conclusiones señaladas anteriormente, los pronunciamientos se muestran siempre afectados de particularismo: siendo personalistas en la primera época y sectarios en la segunda.

El pronunciamiento era, en suma, más que la expresión de una conciencia, el producto de un afán particular, bien de un individuo, bien de un grupo hermético de individuos.

6°. Los pronunciamientos eran la más clara expresión de un carácter y de una época. La desorientación de ideas, el sueño utópico, el ideal romántico y exaltado; la falta de una personalidad señera capaz de representar, cuando no de encarnar el espíritu del momento ... todo ello tiene su reflejo exacto en el planteamiento y el desarrollo de los pronunciamientos.

7°. Los pronunciamientos son, por todos los conceptos considerados, extraordinariamente frágiles. Basta el más nimio contratiempo para impedir su explosión, y hasta la más ligera obstrucción para, una vez estallado, reducirlo a cenizas.

8°. Debilidad del régimen, tanto en la respuesta a los pronunciamientos, como para el Gobierno de la propia nación.

Examinadas las características comunes, hay que detenerse en el pronunciamiento que iba a conseguir implantar de nuevo el texto gaditano. Su nacimiento se situaba tras los últimos sucesos en América, puesto que era necesario enviar ejércitos a las Colonias para ahogar las insurrecciones y evitar su pérdida. A tal efecto, en las cercanías de la ciudad de Cádiz, se fueron reuniendo tropas para ser enviadas a las colonias. Esa concentración militar empezó rápidamente a flaquear en su ánimo, la fiebre amarilla hizo estragos entre los soldados, los víveres escaseaban, la guerra de América era una aventura incierta, e incluso faltaba la seguridad en los barcos que habían de transportarles⁹. Todo ese cúmulo de circunstancias desfavorables propiciaron que los liberales consiguieran ganarse la confianza de estos militares para su causa, de suerte que asumieron el protagonismo del levantamiento.

⁹. Nos referimos al conocido negocio ruinoso de España en la compra de navios a Rusia, con la participación directa del miembro de la conocida camarilla, amigo personal de Fernando VII y embajador ruso en España: *Tatischeff*.

El Teniente Coronel Riego, al mando del ejército con una columna de alrededor de 1.500 soldados, el primer día del año iniciaba un largo periplo para tratar de conseguir adeptos a la causa liberal que le llevaba por Conil y Vejer hasta Algeciras, desde allí a Málaga, para subir luego hasta Córdoba y dirigirse hasta Extremadura. En realidad no sólo no conseguía levantar a las poblaciones por donde pasaba, sino que iba perdiendo hombres a medida que subía más hacia el norte, y cuando todo parecía que iba a terminar, el 21 de febrero surgía en la Coruña un levantamiento dirigido por un grupo de oficiales al mando del coronel Acevedo. Poco después, en Zaragoza se secundaba el levantamiento no sólo por su guarnición militar, sino que también era seguido por la población civil. Estos fueron los detonantes que hicieron que por las ciudades de España se clamara por la implantación de una monarquía liberal¹⁰

Tal vez podría afirmarse que en este período comprendido entre el 1º de enero y el 7 de marzo de 1.820, habría acontecido una guerra civil en España. Sin embargo, en opinión de Comellas no merece el apelativo de guerra civil, puesto que más que lucha hubo tensión, cálculo, expectativa en unos y otros hasta ver operarse la decisión final¹¹.

En cuanto a las ideas políticas que inspiraron el levantamiento, siguiendo a Artola, se puede afirmar que en 1.820, año en que por primera vez un pronunciamiento resultaba triunfante, se dió la circunstancia de que el movimiento, organizado en lo militar, no tenía un programa definido hasta la víspera de producirse. Los manifiestos que se leyeron a la tropa no fueron escritos

¹⁰. Sánchez Mantero, R., *Fernando VII* ..., cit. pp. 74-76. Otros muchos historiadores se han ocupado también del estudio de este levantamiento, entre otros, y con mayor detenimiento véase Gil Novales, A., *Rafael de Riego. La Revolución de 1.820 día a día. Cartas, escritos y discursos*. Madrid, 1.976.

¹¹. Comellas García-Llera, J.L., *Los Realistas ...*, cit. p. 17.

sino a última hora; y ni siquiera se sometieron a discusión entre los conjurados. El 19 de diciembre de 1.819, Alcalá Galiano redactaba en Jerez el que había de servir a Quiroga, y el de Riego aún fue elaborado más tarde, tardanza ampliamente compensada por la profusión de manifiestos que siguieron al levantamiento. Durante la primera quincena de enero se publicaron media docena de estos escritos y se elevó una representación al Rey. Ninguno de ellos tenía un contenido programático sistemático, y se reducían, fundamentalmente, a reivindicar la Constitución. Aunque en los primeros no se mencionara explícitamente cuál, no impidió que se proclamase el 1 de enero de 1.820 el texto de 1.812¹².

Gil Novales ha definido a este Trienio liberal como un paréntesis en el que las fuerzas sociales se miden mutuamente, y hasta cierto punto admiten muy brevemente el juego de las contrarias. Intelectualmente sirve además para completar la Ilustración, para igualarla -aunque sea traducida- con lo que había sido un cuarto de siglo antes la ilustración europea¹³.

3. LA JURA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL REY

Tal y como ha señalado Comellas, "*el Régimen de Fernando VII no supo defenderse. Tal vez, en un principio, dió menos importancia de la que merecía ... Luego ante la amenaza creciente, fue tanteando una política de sucesivas concesiones, que acabarían llevándole a la claudicación definitiva*"¹⁴. Siguiendo esa afirmación, hay que señalar que los acontecimientos se desarrollaron

¹². Artola, M., *Partidos y programas ...*, cit. p. 207.

¹³. Gil Novales, A., *El trienio liberal*, Madrid, 1.980. p. 66.

¹⁴. Comellas García-Llera, J.L., *El Trienio Constitucional*, Madrid, 1.963. pp. 24-25.

rápidamente, y que tan sólo se puede hablar de tres temerosos intentos de Fernando VII para defenderse de los revolucionarios liberales, representados por tímidas reformas del Antiguo Régimen. Éstos fueron:

1º. En el mes de febrero de 1.820 se instituyó la Junta de Reformas. Sin embargo, esa medida no supuso freno a las aspiraciones de los liberales para con un nuevo sistema político.

2º. Un paso más fue el Real Decreto de 3 de marzo de 1.820, por el que se invitaba al Consejo de Estado, el Supremo de Castilla y a los demás de la Nación, a que consultaran a S.M. todo cuanto creyeran conveniente para el mejor orden de la Monarquía¹⁵. En este decreto se expresaba una petición de ayuda pública a todas las Instituciones¹⁶ del Reino para intentar solucionar los problemas que acuciaban a España. Literalmente se contenía que: *"... me consulten y expongan, con sana libertad que es su obligación hacerlo, todo lo que útil juzguen al bien de mis pueblos en ambos hemisferios, y al lustre y mayor brillo de mi corona; teniendo presentes las leyes fundamentales de la Monarquía y las variaciones que los tiempos y diversas circunstancias exijan en pro y utilidad del Estado, para que bien examinadas, me sean propuestas las que convenir puedan, y recibiendo su debida sanción, sean una firme barrera y sostén fuerte contra ideas perturbadoras del orden, procurando al mismo tiempo*

¹⁵. *Decretos del Rey Don Fernando VII, o Colección de las Reales Resoluciones expedidas por los diferentes Ministerios y Consejos desde 1º de enero de 1.820 hasta el 7 de marzo inclusive del mismo año, día en que S.M., a impulso de una facción impía y escandalosa, fue privado de su preciosa libertad*. Madrid, en la imprenta nacional, 1.829. pp. 33-37. (Se encuentra recogido dentro del mismo volumen relativo al año 1.823: *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, Regencia del Reino y los expedidos por Su Majestad desde que fue libre del tiránico poder revolucionario, comprensivo del año 1.823, Tomo VII, Madrid en la imprenta real, 1.824*).

¹⁶. Era tal la magnitud de la consulta, que se solicitaba la opinión, entre otros, de las diferentes Universidades, e incluso de los Jueces y Magistrados.

cuantas ventajas la ilustración y benéficas ideas de un buen Gobierno dándole sea proporcionar. ...". De su lectura general parece que se vislumbraba la convocatoria de Cortes, y esa debió ser la determinación de todas las Instituciones consultadas, puesto que unos días más tarde, el 6 de marzo, se proponía la celebración de Cortes.

3º. Tras esa consulta se establecía la Convocatoria de Cortes. A tal fin se aprobaba el Real decreto de 6 de marzo de 1.820, por el que S.M. ordenaba que el Consejo Supremo de Castilla dispusiera lo conveniente para la celebración de Cortes, por ser con arreglo a la observancia de las leyes fundamentales que S.M. tiene juradas¹⁷. Esta convocatoria de Cortes seguía el sistema tradicional de los tres Estamentos.

Esas tres medidas de apertura no fueron suficientes para satisfacer los deseos de los liberales partidarios no de la reforma del Antiguo Régimen, sino de la vigencia del Nuevo Régimen, donde la Constitución era un pilar irrenunciable.

A partir de esa fecha, grupos de manifestantes empezaron a llenar las calles de Madrid, sin que nadie pensase en oponer resistencia, cuando, según un autor de la época, un sólo batallón de guardias hubiera bastado para que todo volviese a entrar en orden. Pero el aturdimiento de Fernando VII y de sus palaciegos en aquellos momentos, hacía que la noche del 6 al 7 de marzo fuera decisiva, puesto que, ante las amenazas, Fernando VII, enemigo jurado de todo riesgo y de toda violencia, no quiso saber más y se plegó a las exigencias aparentando, para no comprometerse ante los triunfadores, un gesto alegre y

¹⁷. *Decretos del Rey Don Fernando VII, o Colección de las Reales Resoluciones expedidas por los diferentes Ministerios y Consejos desde 1º de enero de 1.820 hasta el 7 de marzo inclusive del mismo año, ...*, cit. pp. 37-38.

espontáneo¹⁸.

Tras esos sucesos, el 7 de marzo de 1.820 Fernando VII expresaba su decisión de jurar la Constitución promulgada en Cádiz, lo que efectuó en el Salón de Embajadores del Palacio Real de Madrid el día 9 de marzo¹⁹.

El juramento de la Constitución suponía la entrega del poder a los liberales. Sin embargo, ese acto formal del juramento se vió acompañado, al igual que había ocurrido también en la primera etapa absolutista, de la presentación de un Manifiesto a la Nación de fecha de 10 de marzo de 1.820²⁰. En dicho manifiesto venía a explicar por qué censuró la obra de Cádiz a su vuelta a España, y como él, a partir de este momento, sería el mayor defensor de la Constitución, con la célebre frase: *"Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional; mostrando a Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras naciones ha sido acompañada de lágrimas y desgracias, ..."*²¹. En virtud de estos acontecimientos, se reinstauraba en España el Régimen Constitucional sin apenas haberse ocasionado actos violentos, de forma que la revolución no ensangrentaría a España porque el propio Fernando VII se ponía al frente de ella.

Después de todos esos acontecimientos, la situación política en España planteaba algunos interrogantes. Entre otros, se pueden citar: ¿Podían los liberales

¹⁸ Comellas García-Llera, J.L., *El Trienio* ... cit. p. 25.

¹⁹ *Gaceta Extraordinaria de Madrid del miércoles 8 de marzo de 1.820*, p. 239.

²⁰ *Gaceta Extraordinaria de Madrid del domingo 12 de marzo de 1.820*, pp. 263-264.

²¹ Tal y como ha señalado Comellas García-Llera, J.L., *El Trienio* ... cit. p. 25, ... años más tarde, recordando aquella famosa frase: "marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional", los liberales le llamarían perjuro y los realistas cobarde.

confiar en Fernando VII²² para el desarrollo del sistema Constitucional?. ¿Quién ocuparía el vacío de poder que se generaría hasta la convocatoria de Cortes? ¿Se podía dejar en manos del Rey?. Etc ... En cualquier caso, su resolución requería de rápidas soluciones.

Tal y como relata Pérez de la Canal²³, el restablecimiento de la Constitución y de las instituciones derivadas de ella no podía entregarse al sólo impulso de quienes al tiempo del alzamiento ejercían el gobierno de la Monarquía. Por ello el 9 de marzo le fue impuesta a Fernando VII una Junta Provisional. Nos referimos al Decreto de 9 de marzo de 1.820, por el que se creaba dicha Junta Provisional hasta la convocatoria de Cortes²⁴. Junto a su nombramiento recogía también el juramento de la Constitución por parte de sus miembros. Estaba compuesta por diez personas, pero al igual que había ocurrido antes durante la vigencia de esta Constitución (1.812-1.814), al frente de ella, y en el cargo de Presidente, se situaba un eclesiástico de muy alta dignidad; en este caso fue el Arzobispo de Toledo.

²². Gil Novales, A., *Textos exaltados del Trienio Liberal*, Madrid, 1.979. Recoge en esta obra algunos ejemplos del pensamiento liberal español del momento. Uno de los artículos que contiene está dedicado a la figura del Rey. Se trata del artículo de Atanasio Lescura, incluido en una publicación de la época denominada la Tercerola, su nº 9 de 1.822. (pp. 168-172. -concretamente p. 172-): "... Señor arrojese de una vez V.M. en los brazos de sus liberales: deposite toda su confianza en el Congreso de la nación; aleje para siempre de su lado á esos pérfidos que fraguan su ruina, y será feliz ... y será Rey de España. Si V.M. no lo hace así, su corona vacilará, y tal vez tal vez ... , dejará de ocupar el trono de San Fernando por incapacidad moral, cuya idea no suponen algunos políticos muy distante de poder ser ventilada en el augusto congreso nacional. ¡Oh! quiera la divina providencia ayudar a V.M. á rectificar sus pasos como lo desean. ..."

²³. Pérez de la Canal, A., Restablecimiento de la gobernación constitucional del interior del reino en 1.820, en *Anuario de Historia del Derecho Español*. Tomo LX. Madrid 1.991. p. 550.

²⁴. *Gaceta extraordinaria de Madrid del jueves 9 de marzo de 1.820*. p. 251.

Esta Junta era un órgano consultivo²⁵, de suerte que todas las disposiciones que emanaban del Gobierno debían ser consultadas a la Junta y se debían publicar con su acuerdo.

Esta Junta se ocupaba de poner en marcha inmediatamente el Nuevo Régimen. El primer paso era la reinstauración de la Constitución, y tras ello, en cuestión de días se llevaban a cabo las medidas oportunas para que los órganos constitucionales se pusieran de nuevo en funcionamiento²⁶. Como ejemplo se puede señalar el Decreto de 9 de marzo de 1.820 para que se procediese en todos los pueblos de la monarquía a la celebración inmediata de elecciones de Alcaldes y Ayuntamientos constitucionales con arreglo a lo prevenido en la Constitución política sancionada en Cádiz²⁷.

²⁵. Pérez de la Canal, A., *Restablecimiento ...*, cit. pp. 551-552. *De todos modos, la Junta entendió que al menos, esa función consultiva estaba revestida de la cualidad de suprema, y de ahí que en la sesión celebrada el 13 de abril por la noche acordara representar al Rey "que por las particulares circunstancias de la Junta ninguna de sus propuestas debe ir a informe del Consejo de Estado, ni a ninguna otra corporación, porque de lo contrario esta Junta no debe subsistir ni llenaría el objeto de su establecimiento y debería ser responsable a la nación de su condescendencia. ... La junta se propuso, y llevó a cabo con éxito notable, la delicada tarea de armonizar las aspiraciones revolucionarias de radical e inmediato cambio político con la conservación de la autoridad del Gobierno, indispensable para que la transición del régimen absoluto al representativo se realizara, como efectivamente sucedió, sin trastornos ni conmociones"*

²⁶ Para un mayor detalle, y sobre la puesta en marcha de los órganos constitucionales en España en este corto período, entre otros, vease Pérez de la Canal, A., *Restablecimiento ...*, cit. pp. 557-574.

²⁷. *Gaceta Extraordinaria de Madrid* del viernes 10 de marzo de 1.820, p. 253.

II. LA IGLESIA FRENTE AL TRIENIO LIBERAL

El punto de partida era el mismo que el de anteriores capítulos, por un lado, nos encontramos ante una Iglesia anclada en el pasado²⁸, y que, tras el transcurso de 20 años de este siglo XIX, todavía continuaba siendo impermeable a las reformas operadas durante la vigencia de la Constitución de Cádiz gracias a la protección del monarca.

Por otro lado, la mayoría de sus miembros²⁹ se mostraban claramente a favor del Antiguo Régimen, y ello en base a distintos motivos, pero sobre todo, por el conocimiento práctico de los efectos en su status del régimen constitucional, junto con la comunión de las altas jerarquías eclesiásticas con el absolutismo de Fernando VII³⁰, y sin olvidar las muestras de adhesión al régimen

²⁸. Revuelta González, M., *Política religiosa de los liberales en el Siglo XIX. Trienio Constitucional*, Madrid, 1.973. p. 23-27. Muestra el aspecto que presentaba la Iglesia tras el sexenio liberal. "¿Qué aspecto nos ofrece la Iglesia del sexenio? En su aspecto administrativo y exterior, el mismo del siglo XVII fundamentalmente. Una Iglesia que presenta un ropaje barroco sobre una estructura medieval. Bajo el punto de vista administrativo, salvo algunas excepciones, es la misma estructura desigual e irregular de las viejas diócesis de la reconquista, salpicadas de territorios autónomos, de jurisdicciones exentas y territoriales o personales. ...".

²⁹. Esta afirmación genérica debe ser atemperada, puesto que si bien es cierto que este era el sentir de la mayoría de los miembros del clero, podemos también señalar claros exponentes a favor del liberalismo, tanto altas dignidades como el Cardenal Borbón (presidente de la Junta Provisional), como otras clases inferiores del clero. Un claro ejemplo de esto último recoge Revuelta González, M., *Política ...*, cit. p. 337.: "... Los aires liberales penetraron en el seno de algunas comunidades religiosas provocando dolorosas tensiones entre los religiosos que se mantenían fieles. Había frailes, superiores y conventos enteros con fama de liberales, tal era el ejemplo de la comunidad de mínimos de la Victoria de Málaga, quién remitió a las Cortes una exposición sugiriendo la conversión de su convento en hospital, y la designación de la comunidad como suprimida con el sueldo de monacales. ...".

³⁰. Fernando VII se había opupado de crear un episcopado adicto al régimen. Tal y como señala Revuelta Gonzalez, M., *Política ...* cit. p. 340.: "... Fernando se encontró en (continúa...)

que se requerían a los interesados en obtener beneficios y prebendas.

Esta situación era perfectamente conocida por los liberales, pero ello no fue óbice para que se intentara, como había ocurrido en las Cortes de Cádiz, contar con el apoyo de la Iglesia para la instauración del Régimen Constitucional³¹. Sin embargo, el punto de partida no era el mismo; por un lado, debía procederse al arreglo general de la Iglesia³², puesto que no se concebía

³⁰ (...continuación)

1.814 la mitad de las sedes vacantes, y las cubrió con hombres realistas, pero ortodoxos; en cambio, los liberales se encontrarán con la herencia de un cuadro episcopal realista casi completo, y buscarán candidatos liberales sospechosos de doctrinas no seguras a la Santa Sede. En el momento de la instauración del sistema liberal solamente había cuatro sedes vacantes en España. ..."

³¹ Como ha señalado, entre otros, Martí Gilabert, F., *Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII*, Pamplona, 1.994, p. 121, *Los liberales procuraron crear un episcopado adicto, como lo había hecho anteriormente Fernando VII, para reforzar el absolutismo durante el sexenio. Pero los obispos electos por el Gobierno encontraron resistencia en la Santa Sede para su confirmación a causa de su doctrina poco segura. A la mayoría de los presentados se les negó las bulas. La indignación del gobierno se tradujo en la persecución a los obispos absolutistas más señalados. Unos fueron alejados de sus diócesis por haber firmado el manifiesto de los "persas". Otros fueron expulsados por su oposición a las órdenes del Gobierno. Algunos se vieron obligados a huir o sometidos a prisión, sin que faltara el asesinato.*

³² Siguiendo a Revuelta González, M., *La Iglesia española ...*, cit. pp. 92-93, debemos afirmar la existencia e importancia de los *dos planes de reforma de la Iglesia*, que aunque nunca llegaron a aprobarse, fueron diseñados en este período. Se trataba de dos planes ambiciosos, que con el punto de partida, o referencia situado en la Asamblea francesa de 1.790, pretendían remodelar a la Iglesia desde sus cimientos: (grados de jerarquía, demarcación de las diócesis y parroquias, reorganización de cabildos, extinción de colegiatas, los cuadros pensionados del clero, seminarios conciliares, y administración de rentas eclesiásticas. Pero, como literalmente señala, existía una gran diferencia entre el plan elaborado por las primeras Cortes y las segundas: *El primer plan, inspirado por Villanueva, contiene positivos aciertos y no le falta solidez doctrinal ni celo pastoral. Además, siguiendo las insinuaciones conciliadoras de Amat, facultaba al Gobierno para llegar a un acuerdo con el Papa y los Obispos cuando lo juzgara conveniente, lo que era abrir una vía a un posible concordato. Pero este plan parecía a los más exaltados demasiado generoso, y lograron diferir la discusión. El nuevo plan se inspiraba en las doctrinas de Llorente, y se desataba en demeritos contra la curia* (continúa...)

como un estamento privilegiado y debía perder las prerrogativas que ostentaba en el Antiguo Régimen³³; y por otro lado, la Inquisición³⁴ se consideraba contraria al orden constitucional.

Se había producido un cambio importante: *la religión no había desaparecido, pero de ser el fundamento de todo, pasaba a formar parte, en el mejor de los casos, de aquellas cuestiones que configuraban la idiosincrasia de las naciones*³⁵. Por ello, y conforme al pensamiento de los liberales, se podía buscar la connivencia de la Iglesia con el Nuevo Régimen y al tiempo pensar en su imprescindible reforma.

El diseño para captar ese apoyo partía de patrones conocidos, puesto que como Presidente de la citada Junta Provisional que gobernaría España hasta la convocatoria de Cortes, tal y como se ha señalado, se situaba a un eclesiástico de muy alta dignidad. En este caso fue el Arzobispo de Toledo. Constituida la Junta Provisional, fue ésta quien se encargó de diseñar diferentes medidas para buscar

³²(...continuación)

romana, ignoraba de hecho la primacía del Papa, suprimía las reservas pontificias y disponía que la confirmación de los Obispos nombrados por el rey debía ser hecha por el primado o los metropolitanos. ...

³³. Entre otros, uno de los privilegios que finalizaba era el de fuero. Las Cortes liberales establecieron su fin mediante el Decreto de 26 de septiembre de 1.820, por el que se declaraban desaforados y sujetos a la jurisdicción ordinaria todos los Eclesiásticos seculares o regulares por el hecho mismo de cometer algún delito que merezca pena "corporis afflictiva". (*Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 141-142).

³⁴. Mediante la Orden de 10 de marzo de 1.820 se declaraba incompatible con la Constitución el Tribunal de la Inquisición, por lo que desde ese día se suprimía el referido Tribunal, junto con todos sus órganos dependientes. (*Gaceta Extraordinaria de Madrid del viernes 10 de marzo de 1.820*, p. 253).

³⁵. Montesinos Sánchez, N., *La tutela de la religión ...* cit. p 328.

el apoyo de la Iglesia. La primera de ellas estuvo constituida por el envío de una carta a Roma, por parte del propio monarca, donde se exponía que el nuevo régimen respetaría la religión católica en España. Esta epístola fue contestada por otra emitida por el Sumo Pontífice³⁶ donde de forma principal le exponía al Rey la necesidad de que en España se guardara la religión católica y las leyes eclesiásticas.

Por otro lado, la falta de espontaneidad en el clero a favor de la Constitución en los primeros momentos fue muy pronto suplida por la iniciativa de la Junta Consultiva Provisional, ordenando el 26 de marzo el juramento de la Constitución a todos los españoles, bajo pena de destierro. Esta jura tenía un carácter político religioso, no sólo por realizarse ante los Evangelios y el crucifijo, sino porque iba acompañada a menudo de funciones religiosas como la santa misa, el Te Deum y la exhortación o sermón del párroco, obispo o superior religioso³⁷.

De la misma forma que en los períodos anteriores, para involucrar a la Iglesia en el sistema político, se usaba de ceremonias religiosas para conmemorar actos políticos, de entre otras disposiciones, cabe señalar la Orden de 16 de julio de 1.820, para que en todas las Iglesias de la monarquía se den gracias al Altísimo por la instalación y apertura de las Cortes, implorándose el divino auxilio para el acierto de sus resoluciones y las del Gobierno de S.M.³⁸ Otra manifestación,

³⁶ *Gaceta de Madrid del jueves 18 de mayo de 1.820*, pp. 575-576. Literalmente se afirmaba que: "... guarde en todos los tiempos y en todas las circunstancias la pureza de la fe, la santidad de las costumbres y la exacta observancia de las leyes eclesiásticas ..."

³⁷ Revuelta González, M., *Política* ..., cit. pp 122-123.

³⁸ *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820*. Mandada publicar de orden de las mismas. Tomo VI. Madrid, en la Imprenta nacional, (continúa...)

quizá más representativa, se puede encontrar en una institución importantísima para los liberales como fue la Milicia nacional. Nos referimos concretamente, a la expresión del juramento por parte de sus miembros. Su regulación se contenía en el Decreto de 31 de agosto de 1.820 que aprobaba el Reglamento provisional para la Milicia nacional local³⁹. Se preceptuaba que para proceder a los juramentos, el primer domingo se pasaba en formación a la Iglesia, y asistían a la misa mayor, después de la cual el Cura párroco les hacía una exhortación, en la que les recordaba sus obligaciones para con la patria, con referencia a la gran importancia de defender su independencia y libertad civil, que se resume en la defensa de la Constitución.

Siguiendo a Cuenca, se puede afirmar que la Iglesia, por su parte en un primer momento, ante el triunfo de los pronunciamientos, se limitó a aceptar los hechos consumados y mostró una aceptación, al menos formal, a la nueva venida del Régimen Constitucional. Esa aceptación se verificaba en el acatamiento de esas ceremonias religiosas y en los sermones de los párrocos⁴⁰.

Sin embargo, la práctica totalidad de los eclesiásticos no tardaron en enfrentarse con el Nuevo Régimen, y así en sus conversaciones públicas y privadas no dudaban en dibujar al nuevo sistema político como un presagio

³⁸(...continuación)
1.821. pp. 5-6.

³⁹. *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 64-79.

⁴⁰. Cuenca, J.M., *D. Pedro de ...*, cit. p. 204-205. Ha señalado cuál fue el primer sentimiento de la Iglesia para con el restablecimiento del Régimen Constitucional: "en todas las Catedrales y Colegiatas de la nación se cantaron solemnes *Te deums* e, incluso, abundaron las exhortaciones de los Obispos a sus diocesanos para que viviesen *bajo el dulce imperio de la Constitución llamándola baluarte de la religión, y base política de la monarquía que aseguraba la felicidad de la nación ...*".

seguro e infalible de su próxima ruina, afirmando que traería consigo el fin de la religión católica. Pero, también hubo intentos para conseguir integrar la religión católica dentro del Nuevo Régimen como la circular emitida por el obispo de Barcelona en fecha de 17 de abril de 1.820⁴¹, donde se animaba a los eclesiásticos a no entrometerse en el régimen político de España: *"... dejemos a la Nación y al Rey en la justa libertad de hacer las leyes, y de acordar cuantas providencias estimen oportunas al bien de la patria y nosotros, lejos de darlas interpretaciones siniestras, cuidemos sólo de obedecerlas. ..."*

De cualquier forma, no tardaron en llegar los problemas entre Junta Provisional, en un primer momento, y de forma más aguda con las Cortes después, y la Iglesia. El punto de inflexión estuvo representado por el Decreto de 24 de abril de 1.820 por el que se señalaba la enseñanza al pueblo de la Constitución, por personas dignas en su respeto y consideración, para que conocieran sus derechos y obligaciones⁴². Mediante éste, se convertía a los miembros del clero en apologistas de la Constitución, puesto que no sólo se les obligaba a que la explicaran a los fieles en sus iglesias, sino a rebatir cualquier juicio que en las ceremonias se expresara contra ella.

En opinión de Revuelta, este Decreto desde el punto de vista político no dejaba de tener su justificación. En primer lugar, procuraba acabar con la ignorancia que tenía de la Constitución la gran masa del pueblo, y deshacer al mismo tiempo las especies extendidas de la contradicción entre el constitucionalismo y la religión católica. Pero además hay que ver una prueba de fuerza del Gobierno liberal sobre el estado eclesiástico, y un medio de hacer

⁴¹ *Gaceta de Madrid del martes 2 de mayo de 1.820*, pp. 495-497.

⁴² *Gaceta Extraordinaria de Madrid del miércoles 26 de abril de 1.820*, pp. 469-470.

patente su filiación o enemistad⁴³.

Conforme a lo señalado, la Iglesia se enfrentaba con el Nuevo Régimen cuyas Cortes y Gobierno elaboraban disposiciones que traían consigo efectos negativos para con sus intereses. En este sentido, ha escrito Cuenca⁴⁴ que los puentes iban resquebrajándose, las medidas adoptadas a fines de mayo comenzaron a abrir la fosa que habría de ensancharse con el correr del tiempo hasta conducir a una completa ruptura con la Iglesia y el Papa.

En realidad, la complicidad de la Iglesia en el sexenio servía de fácil justificación para la adopción de medidas contrarias a los intereses de la Iglesia. Entre otras, se pueden citar:

- Desamortización de sus bienes.

 - Minoración del diezmo en un 50 por 100.

- Abolición de Casas de religiosos de ambos sexos y de Colegiatas.

- Fiscalización y Nueva organización de los ingresos de la Iglesia.

 - Reforma de los regulares y seculares.

 - Nombramiento de Cargos eclesiásticos.

- Limitaciones al clero para el acceso a las Cortes.

- Menor protagonismo en el Derecho de Libertad de imprenta.

- La imposición de la jura de la Constitución.

- Etc ...

Todas esas disposiciones incidían muy negativamente en los intereses de la Iglesia, y sin entrar a valorar si eran o no necesarias para sustentar el Nuevo

⁴³. Revuelta González, M., *Política ...*, cit. pp. 125-126.

⁴⁴. Cuenca, J.M., *D. Pedro de ...*, cit. pp. 213.

Régimen, sí que propiciaron que se creara un enfrentamiento feroz entre la Iglesia y el Estado⁴⁵.

III. DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1.812 DURANTE ESTA ÉPOCA

Para conocer efectivamente cuál fue el trato que el Derecho dispensó al factor religioso no bastaría con reproducir lo señalado en la Constitución de Cádiz, toda vez que desde el desarrollo legislativo⁴⁶ efectuado en este periodo, es donde se puede observar todo el alcance de las disposiciones aprobadas en contra de los intereses de la Iglesia⁴⁷.

⁴⁵. Nos estamos refiriendo al denominado Estado liberal. Sobre éste, ha señalado González del Valle, J. M^º., *Derecho Eclesiástico Español*, Oviedo, 1.995, p. 42. "El movimiento político más importante del Siglo XIX, el liberalismo, concreta el tema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en estos cuatro puntos: a) El Estado no debe ser confesional, ni preferir o favorecer una concreta religión sobre otras. b) Los ciudadanos tienen derecho a la libertad religiosa. c) Las confesiones religiosas deben estar sometidas al común Derecho estatal en calidad de asociaciones privadas. d) Entre el Estado y la Iglesia debe existir la máxima separación"

⁴⁶ Dentro de este desarrollo legislativo, cabe destacar simplemente como una pequeña curiosidad relativa a la dificultad para conocer las diferentes disposiciones que se aprobaban en estos años, que, aunque resulta común a todos los periodos abarcados en la presente investigación, aquí merecía, -conforme al criterio del legislador-, la promulgación de un Decreto. Nos referimos a la que se podía denominar "promulgación formal de las leyes" referida en el Decreto de 4 de septiembre de 1.820, por el que se contenía que en Madrid, una vez promulgada una disposición, el Jefe político, acompañado del Ayuntamiento, salía en público desde donde se juntaba ordinariamente el pleno, y pasando a la Panadería, sita en la plaza de la Constitución, promulgaba la ley desde el balcón principal de aquella, haciéndola leer por el Secretario del expresado Ayuntamiento" (*Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. p. 94).

⁴⁷. Resulta interesante la lectura Martínez Yangües, F., *Antología de las Cortes de 1.821-1.823*, Madrid, 1.914. Toda vez que contiene recopilaciones de las más interesantes (continúa...)

1. DESAMORTIZACIÓN

La modernización del Estado y la solución de sus problemas (reconstrucción del país tras la guerra de la independencia, la Deuda pública, etc ...), tal y como ha señalado Gil Novales, apuntaban en la misma dirección: poner en venta las inmensas propiedades de la Iglesia, convirtiéndolas en bienes nacionales. Esa parecía la solución económica ideal para resolver los problemas del Estado. La desamortización, además, ampliaría la base burguesa del país. Bajo el Trienio Liberal se vendieron fincas propiedad de la Iglesia por todo el país, y se creó una enorme corriente de opinión pública en contra de la persistencia de la propiedad feudal eclesiástica. Por lo que el liberalismo nacional, aún no queriendo ser revolucionario, empezaba a eliminar uno de los sustentos básicos del Antiguo Régimen: la propiedad feudal de la Iglesia⁴⁸.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la desamortización de los bienes de la Iglesia, aún a pesar de representar un porcentaje muy importante de propiedades, no fue la única llevada a cabo. En realidad lo señalado anteriormente debe ampliarse a todos los bienes que estaban en poder de las denominadas "manos muertas", de suerte que incluso los bienes propiedad del Rey no escaparon a dichas ventas públicas⁴⁹.

⁴⁷(...continuación)

sesiones de las Cortes sobre temas concretos, y relacionadas por años.

⁴⁸. Gil Novales, A., *El trienio ...*, Madrid, 1.980. pp. 62-63.

⁴⁹. Tal y como se desprende de, entre otras disposiciones, de la Orden de 9 de agosto de 1.820, por la que se ratificaba el desprendimiento hecho por S.M. de parte de las fincas que antes se conocían con el nombre de Patrimonio Real; previniendo que el Crédito público las incluya en la venta de bienes acordada, reservando o postergando el Lomo del Grullo en Sevilla. (*Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta*
(continúa...)

Esa visión de la desamortización como vía para la solución de los problemas económicos de España, era la que motivaba que se procediera a las ventas de bienes denominados "nacionales". A este fin se promulgaron diferentes disposiciones; de entre ellas, cabe destacar el Decreto de 9 de agosto de 1.820, por el que se mandaba proceder a la venta de todos los bienes asignados al crédito público⁵⁰. Su artículo 1 venía a desarrollar el ilustrativo título del decreto:

"La Junta nacional del Crédito público procederá inmediatamente a la venta en subasta, conforme a las leyes, de todos los bienes que le están designados por los decretos y reglamentos de 1.813, 1.815 y 1.818, e incluyendo los de la extinguida Inquisición, los que se han separado del Patrimonio del Rey por su real decreto de 30 de mayo y los que las Cortes separen todavía en uso de la facultad que se les concede por el artículo 214 de la Constitución, empezando por los que ofrezcan más fácil y pronta salida".

La intención del legislador se mostraba claramente en este Decreto en dos extremos:

⁴³(...continuación)

9 de noviembre de 1.820, ... , cit. pp. 35-36). Esta Orden, a su vez, desarrollaba el Decreto de 30 de mayo de 1.820 que recogía las fincas y derechos conocidos con el nombre de Patrimonio Real, que resultaban de la lista impresa que se incluía. Se aprobaron numerosas disposiciones de este tipo, donde se detallaban los bienes que se incorporaban a la Nación; entre otras, se puede citar también el decreto que señalaba el Estado que presentaba el Mayordomo mayor del Rey en consecuencia del Real decreto de 28 de abril último para que tenga efecto la separación de los palacios y sitios de recreo, que reserva S.M., de las demás fincas que ha tenido a bien ceder para el pago de la deuda pública. (*Gaceta de Madrid del martes 6 de junio de 1.820*, pp. 654-655).

⁵⁰. *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820*, ... , cit. pp. 33-35.

Uno: La rebaja de la deuda pública. Para los remates no se admitía dinero en metálico, y sí vales reales, recibos de intereses reales, escrituras de capitales, y cualquier otra clase de créditos, es decir, toda la deuda⁵¹ anterior y posterior al 18 de marzo de 1.808.

Dos: La necesidad de crear riqueza mediante la puesta a disposición de los bienes desamortizados en poder de las denominadas "manos vivas". Los adquirentes debían tener en cuenta una condición que se establecía en este decreto; los rematantes no podrían jamás vincularlos, ni pasarlos en ningún tiempo, ni por ningún título a manos muertas.

Una vez ordenadas las enajenaciones, la principal disposición para llevarlas a cabo se expresaba en el Decreto de 3 de septiembre de 1.820, que contenía el Reglamento para la venta de fincas consignadas al crédito público⁵². Esta regulación⁵³, con algunos pequeños cambios, será seguida en momentos

⁵¹. Resulta oportuno detenerse en la aplicación del destino de la deuda que se consiguiera recuperar con estas ventas, puesto que se señalaba que se quemaría públicamente, tras haberse anunciado previamente la fecha, hora y lugar. Se trataba de un simbolismo, mediante el cual se demostraba que la deuda era satisfecha por el Estado y se extinguía mediante el fuego. Simbolismo que se repetirá con el tiempo en sucesivas extinciones de deuda.

⁵². *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820*, ... , cit. pp. 86-91.

⁵³. A grandes rasgos, se puede afirmar que la Junta Nacional de Crédito Público reunía toda la información que tuviera sobre dichas fincas, y procedía a dar traslado a los Comisionados de las provincias para que procedieran a su enajenación. Tras ello, cuando se hubiera reunido la suficiente información, se solicitaba a los Jueces de Primera Instancia que formaran los expedientes para las subastas. En lo referente a la tasación, los peritos consignaban "... el verdadero producto líquido, y su valor en renta y venta ..." teniendo en cuenta la producción anual de las fincas o predios rústicos y urbanos, especialmente los de alquiler o arriendo, con deducción de las inversiones necesarias para su reparación, contingencias que existieran en cada inmueble y sus gastos corrientes de
(continúa...)

posteriores.

Diseñado el marco jurídico donde habrían de ejecutarse las enajenaciones, quizá el decreto más dañino en este período para con los intereses de la Iglesia fue el Decreto de 1 de octubre de 1.820, por el que se acordaba la supresión de monacales y reforma de Regulares⁵⁴. Se establecía la supresión de todos los monasterios de las Ordenes Monacales, alcanzando incluso a aquellos que comprendían dentro de sus muros otras funciones como colegios, hospitales, etc... . Se exceptuaban de esta disposición tan sólo algunos santuarios específicos, concretamente los denominados "*célebres desde los tiempos más remotos*", aunque con una limitación numérica muy precisa (ocho), que el Gobierno encomendaría a la orden u órdenes que tuviera por conveniente.

Esta disposición restrictiva se endurecía más, puesto que para asegurar su

⁵³(...continuación)

administración. Efectuada la tasación, se promocionaban las ventas dotándolas de suficiente publicidad mediante carteles, por un plazo de 30 días. Otra nota que se puede señalar era que no se admitían posturas por debajo de la tasación de la finca. En caso de no existir postores para alguna o algunas fincas, se solicitaba por el Comisionado una nueva tasación o, como se señala literalmente, la "... retasa ..." de ellas. Efectuado el pago, se realizaba la adjudicación mediante una serie de supuestos donde destacaba la figura del Comisionado y del propio Juez de Primera Instancia, quienes, según los diferentes supuestos, eran los encargados de entregarle la posesión.

La promoción de las ventas mediante el anuncio público de los bienes que se enajenaban fue desarrollado posteriormente por diferentes disposiciones. En prueba de esta afirmación se puede citar, entre otras, la Orden de 5 de mayo de 1.821, mandado que se publicara mensualmente una razón circunstanciada de las fincas que se vendían. (*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año*. Impresa por orden las mismas. Tomo VII. Madrid, en la Imprenta real, 1.822. p. 72).

⁵⁴. *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820*, ... , cit. pp. 155-159.

aplicación futura prohibía dar nuevos hábitos y profesar novicios⁵⁵.

La supresión de los monasterios y conventos llevaba consigo la extinción de los beneficios eclesiásticos que existían en los inmuebles disueltos⁵⁶.

⁵⁵. Como es conocido, el propio Fernando VII, se negó a firmar este decreto, en primera instancia, aunque lo firmó bajo la amenaza de desórdenes públicos en las calles de Madrid.

Esta oposición, ha sido puesta de relieve por muchos autores, entre otros, vease Artola, M., El Trienio liberal (1.820-1.823) en *La Historia de España* dirigida por Menéndez Pidal, R., Tomo XXXII La España de Fernando VII, la guerra de la independencia y los orígenes del constitucionalismo. Madrid, 1.983. en su nota 46 (p. 833-834), recoge una reserva efectuada por Fernando VII (A.C., Reservado Fernando VII, leg. 23, pp. 474-475). Donde recoge el Borrador de la luego famosa coletilla, leída por Fernando VII en las Cortes a propósito de la sanción de la ley de regulares, que dice: "... Pues vamos ahora a la sanción real de que trata el capítulo 8º, por su artículo 142 es mía la sanción que previenen los tres siguientes, con qué fórmulas los he de sancionar o poner el veto, y en este caso que dé las razones que tengo para ello, devolviendo el original a las Cortes para que se conserve en su archivo, ... , diciendo terminantemente el art. 147 que si el Rey negare la sanción no se volverá a tratar en las Cortes de aquel año, pero podrá hacerse en las del siguiente, teniendo yo la facultad de sancionarlas o negarlas por segunda y última vez, ... , cuando la sanción de las leyes de la extinción de los monacales y quitar a la Iglesia su inmunidad, mi conciencia me mandaba imperiosamente, y me convencía de que no les podía sancionar sin la anuencia y consentimiento de la misma Iglesia por medio del vicario de Jesucristo, y aun por razones políticas en que yo hubiera fundado mi veto, pero no llegó este caso, habiendo sido bien manifestado y no ignorando nadie la violencia con que se me hizo, amenazándome que la tranquilidad de Madrid estaba en peligro, y que todo el pueblo estaba alarmado y pedía su sanción; ... He dicho todo lo que tenía que decir, haciendo ver lo atacada y atropellada que está mi dignidad y mi persona, y que es preciso que nos unamos las dos autoridades, ejecutiva y legislativa, para que nadie pueda con nosotros; sigamos la marcha constitucional, cumplamos religiosa y fielmente su capítulo 2º, artículo 12, en que dice que la religión de la nación española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica y Romana, única verdadera, y que la Nación la protege con leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de toda otra; cumplamos con toda ella y acordémonos que por el título 10, capítulo único, se prohíbe expresamente el hacer ni proponer ninguna alteración en ella hasta pasados ocho años, artículo 375, ...".

⁵⁶. A pesar de extinguirse los beneficios eclesiásticos, en conformidad con el art. 4 se establecía que: "Los méritos contraídos en sus respectivos institutos, y las graduaciones que hayan obtenido en ellos los religiosos, serán atendidos particularmente por el Gobierno en la provisión de arzobispados, obispados, prebendas y demás beneficios eclesiásticos".

Los eclesiásticos que ocupaban esos inmuebles se veían obligados a abandonar sus monasterios, por lo que se dispuso que recibieran una dotación estatal para su supervivencia.

De entre sus interesantes disposiciones, hay que destacar las medidas que recogía tendentes a promocionar la secularización de los eclesiásticos. A tal efecto, se puede afirmar que usó de tres vías:

1. *Inmunidad de coacción*: Puesto que prescribía que el Gobierno protegería por todos los medios que estuvieran a su alcance la secularización de los regulares que lo solicitaran, impidiendo toda coacción o violencia por parte de sus superiores.

2. *Promoción*: Toda vez que se señalaba expresamente que *"El Gobierno ... promoverá que se les habilite para obtener prebendas y beneficios con cura de almas o sin ella"*

3. *Financiación*: Prescribía la entrega de cien ducados anuales a todo eclesiástico ordenado *"in sacris"* que optara por la secularización. Dicha congrua era disfrutada hasta que recibiera cualquier tipo de renta. En ese caso y dependiendo su cuantía, se reducía la prestación estatal o se extinguía, cuando la disfrutada por otros capítulos resultaba superior.

Junto a esas vías de promoción, se encontraban también otras medidas tendentes a facilitar los trámites para proceder a la secularización. Concretamente se disponía que bastaba con presentarse ante el Jefe político de la provincia para que se llevase a cabo.

Por lo que respecta a los Conventos, se especificaba que sólo podría permanecer abierto uno de la misma orden por cada pueblo, exceptuándose aquellos casos extraordinarios donde: *"... en alguna población agrícola que haga parte del vecindario una capital, y que a juicio del Gobierno necesite la conservación de algún convento que hubiese en el campo, hasta que se erija la correspondiente parroquia"*.

A esa restricción de un convento por pueblo para cada orden, se adicionaba otra condición que dificultaba más la continuación de esas casas. Se trataba de la necesidad de que en cada comunidad debían vivir, al menos, veinticuatro ordenados sacris", aunque se suavizaba a términos ya conocidos por disposiciones anteriores de nuestro Derecho, es decir, a doce miembros profesos en el supuesto que se tratase del único convento del pueblo.

Para las casas que no reunieran ese número se decretaba que debían unirse al convento de la misma orden más cercano.

Las Cortes, cuando aprobaron este Decreto, ya conocían de las grandes dificultades prácticas que podía plantear su ejecución. Por ello hicieron constar una autorización a favor del Gobierno para que procediera a la resolución de las dudas que se plantearan, siempre en conformidad con las necesidades de los pueblos y teniendo en cuenta la opinión de los religiosos⁵⁷. Fruto de esta autorización, encontramos disposiciones como el Decreto de 2 de abril de 1.822, por el que se disponía que los Jefes Políticos, de acuerdo con los diocesanos, remitieran al Gobierno en Mayo de cada año, razón del estado de los conventos

⁵⁷. "El Gobierno resolverá las dudas sobre supresión o permanencia de algunos conventos, a que pudiesen dar lugar los dos artículos anteriores, consultando siempre la conveniencia del público y la de los mismos religiosos". (Art. 20).

de sus distritos que se hallaran en el caso de ser suprimidos⁵⁸. Como indicaba su título, se solicitaban noticias sobre el estado de los conventos para verificar si debían ser o no abolidos⁵⁹.

Siguiendo a Revuelta, se puede afirmar que *la ley de regulares se cumplió con desconocida exactitud. En diciembre habían quedado desalojados e incautados los 324 conventos y monasterios de las órdenes suprimidas. A mediados de 1.821 se había ejecutado el trasiego de religiosos "reformados". A principios de 1.822 éstos estaban reunidos en 860 conventos y habían abandonado 801. Pero la cifra de los conventos suprimidos aumentaba sin cesar, pues las muertes o las secularizaciones hacían bajar a las comunidades por debajo de la tasa permitida; y en 1.822 se ordenó, además, el cierre de conventos en descampado⁶⁰.*

Por su parte Cuenca ha señalado como *la ley de monacales provocó una gran conmoción en los ambientes eclesiásticos. El país se vió inundado de una fuerte corriente panfletista en favor y en contra de sus cláusulas⁶¹.*

⁵⁸ Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822. Impresa por orden de las mismas. Tomo IX. Madrid, en la Imprenta real. 1.822. pp. 52-53

⁵⁹ Sobre la supresión de conventos, encontramos numerosas disposiciones, entre otras, la Orden de 19 de junio de 1.822, por la que se suprimían los conventos de la orden de S. Francisco de Berneo y el de Forrua, y se autoriza al Gobierno hasta la próxima legislatura para que tome igual medida con los demás conventos que se hallen en el mismo caso. (*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. p. 417).

⁶⁰ Revuelta González, M., *La Iglesia española ...*, cit. p. 89.

⁶¹ Cuenca, J.M., Iglesia y Estado, Siglos XVIII-XX, en *Diccionario de Historia eclesiástica de España*, dirigido por Aldea Vaquero, Q., ; Marín Martínez, L., ; Vives Gatell, J., V II. Madrid, 1.972. p. 1.163. Señala el caso concreto del Arzobispo de Valencia: " ... Mientras que un verdadero alud de literatura inundaba el país en favor y en contra de sus cláusulas, el Arzobispo de Valencia, Arias Texeiro, enviaba, a
(continúa...)

La supresión de casas religiosas efectuada por decretos desamortizadores no constituía una novedad legislativa de este período⁶². Sin embargo, sí lo fueron las disposiciones tendentes a que se agruparan varias casas religiosas en una sóla. Se trataba de disposiciones que no usaban de la fuerza, y sí del convencimiento mediante el establecimiento de una serie de incentivos económicos para aquellos institutos que decidieran adoptar voluntariamente esta medida. Concretamente se prescribía que recibirían la pensión de 100 ducados para cada uno de los religiosos de ambos conventos que se reunieran en uno, y que además se les reservaba una parte de las fincas, cuyo producto les sería entregado, aunque después, los incentivos se limitaban a la entrega de la señalada congrua personal. Esas medidas fueron adoptadas, en primer lugar por la Orden de 15 de marzo de

⁶¹(...continuación)

en contra de sus cláusulas, el Arzobispo de Valencia, Arias Texeiro, enviaba, a comienzos de noviembre, una extensa y fogosa representación al órgano legislador en la que sometía a dura crítica todo el articulado de la famosa ley. Sin reparar en la inmunidad eclesiástica ni, sobre todo, en el derecho de representación que asistía a todo Obispo, el prelado valenciano fue, sin pérdida de tiempo, extrañado de España. Pese a las protestas provocadas por este hecho en la mayor parte del episcopado y la acusación de anticanonicidad contra la ley de monacales, gran número de sus miembros era, todavía a fines de 1.820, partidario de un entendimiento con la potestad temporal. ...".

⁶². Al igual que había ocurrido en las Cortes de Cádiz, la Orden de los Jesuitas también fue suprimida en España durante este período. A tal efecto se aprobaron numerosas disposiciones, entre otras, la Orden de 1 de septiembre de 1.820 recordando que había sido publicada en las Cortes la ley de 17 de agosto último, sancionando por S.M. en 30 del mismo, sobre la supresión en toda la monarquía de la Compañía de Jesús. (*Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 45-46). Sin embargo, el Decreto de 17 de agosto de 1.820, que contenía la supresión de la Compañía de Jesús, y restitución al Cabildo de la iglesia de S. Isidro de esta Corte de los derechos y funciones que obtuvo al tiempo de su erección. (*Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 43-44). Era la disposición que expresaba no sólo la disolución de la Orden, sino que establecía también determinadas pensiones: de 300 ducados anual para los individuos pertenecientes a dicha orden suprimida. Sin embargo esa pensión era de mil quinientos reales al año para aquellos que no disfrutaban de congrua alguna. Además se expresaban otras determinaciones como la restitución a sus respectivas provincias, y vigilancia por parte de los respectivos Ordinarios de las Provincias de residencia, o su colocación.

1.822, que más tarde fue sustituida por la Orden de 20 de mayo de 1.822, para que a los religiosos que de dos conventos se reunieran en uno se les pagaría por el crédito público las pensiones como a los demás de su clase⁶³. Posteriormente, estas disposiciones se extendieron también a las religiosas⁶⁴.

Las medidas desamortizadoras no sólo se llevaron a cabo hasta los tiempos finales del Régimen Constitucional, sino que en esos momentos incluso se intensificaron. Una muestra de esa afirmación era el Decreto de 15 de noviembre de 1.822, por el que se contenía la ley por la que se suprimían todos los conventos y monasterios que estuvieran en despoblados y en pueblos que no pasaran de 450 vecinos, excepto el de San Lorenzo del Escorial⁶⁵. El valor de aquellas fincas y su contenido se aplicaba al crédito público y a los eclesiásticos que ocupaban dichos lugares se les permitía acudir a cualquier otro convento o monasterio, exceptuados aquellos que se encontraban fronterizos a zonas bélicas.

Esos conventos y monasterios desamortizados tenían como destino su venta en subastas para reducir la deuda. Sin embargo, se establecía una excepción a través de la cual algunos de ellos no eran enajenados y se transformaban en lugares de utilidad pública. Esto, aunque adquirirá mayores dimensiones en momentos posteriores aparecía ya apuntado en este Decreto, e incluso para una más pronta aplicación al interés común, las Cortes autorizaban al Gobierno para

⁶³ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 165-166.

⁶⁴ Orden de 22 de mayo de 1.822, para que a las monjas que se reúnan a otros conventos por haberse suprimido los suyos se les señalará igual pensión que a los religiosos en semejante caso. (*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 168-169).

⁶⁵ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes Extraordinarias, que comprende desde 3 de octubre de 1.822 hasta 19 de febrero de 1.823. Impresa por orden de las mismas Tomo X Madrid, en la imprenta real, 1.823.* p. 31.

que procediese a la transformación del destino de esos inmuebles⁶⁶.

Durante todo este marasmo de disposiciones en contra de los intereses de la Iglesia en España, encontramos una disposición que especialmente requiere nuestra atención, puesto que supone un cambio importantísimo en la política desamortizadora del momento. Su marco era evidente: el estado de los ingresos que recibía la Iglesia española había sido recortado de forma radical, -tal y como se acredita en el epígrafe siguiente-, por lo que en un momento muy determinado, al igual que el Estado estaba enajenando fincas para sanear el crédito público, se pensó en la posibilidad de que las comunidades religiosas de ambos sexos pudieran vender inmuebles de su propiedad para el pago de sus deudas. Esta idea partía de solicitudes dirigidas por las casas de religiosos de ambos sexos a las Cortes. En base a ellas, las Cortes mediante la Orden de 21 de mayo de 1.821, autorizaban al Gobierno para que habilitase a las comunidades religiosas de ambos sexos en la venta de fincas para el pago de sus deudas⁶⁷. Pero solamente para aquellos casos que demostraran la verdadera existencia de deudas y la auténtica necesidad de vender para proceder a la cancelación de las mismas.

Esta disposición, como hemos señalado, llama poderosamente la atención, puesto que sólo estuvo en vigor durante tres días. Pronto reconocieron las Cortes su error, y así, mediante el Decreto de 24 de mayo de 1.821, se anulaban las ventas de todas clases de bienes pertenecientes al clero y fábrica de iglesias que no se hicieran por el Crédito Público⁶⁸. Dicha sanción de nulidad operaba no

⁶⁶. "El Gobierno podrá destinar para establecimientos de utilidad pública los conventos suprimidos que crea más a propósito". (Art. 26).

⁶⁷. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 108-109.

⁶⁸. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias*
(continúa...)

desde la fecha de aprobación de este Decreto, sino que retrotraía sus efectos en el tiempo sin limitación⁶⁹ Este Decreto abarcaba la totalidad de operaciones llevadas a cabo: *"Se declara nula y sin ningún valor toda especie de enajenaciones o empeños de bienes raíces, rústicos y urbanos, censos, foros, rentas y derechos que poseen el clero y las fábricas de las Iglesias, ..."*.

Con respecto a los bienes muebles existentes en monasterios y conventos suprimidos, hay que decir que fueron también desamortizados. Sin embargo, su regulación jurídica no fue uniforme, puesto que bajo la regla general de su conceptualización como bienes enajenables, y por tanto, con aplicación directa al crédito público, nacieron excepciones.

Esa regla general aparecía diseñada en el citado Decreto de 1 de octubre de 1.820, por el que se acordaba la supresión de monacales y reforma de Regulares. Dicho marco ya contenía la excepción lógica de la posibilidad que ostentaban los secularizados para llevarse consigo sus objetos muebles de uso personal.

Pese a esa disposición genérica, los responsables de los conventos y monasterios que iban a ser suprimidos, a sabiendas de su fin, comenzaron a enajenar los muebles que atesoraban. En un primer momento, y para cortar esa práctica, se aprobaba la Orden de 26 de octubre de 1.820, previniendo que el Gobierno tomara las medidas convenientes para cortar el abuso que se había

⁶⁹(...continuación)

de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ..., cit. p. 114.

⁷⁰ Abarcaba tanto el presente como el futuro, literalmente señalaba: "... que se hubieren hecho o se hicieren desde el día de hoy"

notado al venderse por parte de algunos monasterios sus efectos⁷⁰.

Pero esa disposición se suavizó, permitiendo la venta de algunos efectos, aunque en todo caso, los objetos artísticos estaban excluidos de cualquier tipo de transacción económica, tal y como se disponía en el Decreto de 7 de noviembre de 1.820, sobre la venta de efectos de las casas de Regulares suprimidas⁷¹. Concretamente se entendía por objetos artísticos las pinturas, manuscritos, ornamentos y demás objetos pertenecientes a las bellas artes, literatura o culto divino.

Los bienes existentes en las casas de religiosos de ambos sexos, que subsistieron a las disposiciones desamortizadoras, tampoco pudieron conservarse en su totalidad, puesto que únicamente se les permitía retener lo más estrictamente necesario en función del número de individuos subsistente. Por ello, el sobrante de los muebles que según el Gobierno resultaba, se retiraba de esas casas y se repartía de la siguiente forma: Una parte entre las parroquias menos favorecidas, y el resto se aplicaba al crédito público⁷².

⁷⁰. *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 256-257.

⁷¹. *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820. ...*, cit. pp. 303-304.

⁷². Así se disponía en la Orden de 19 de marzo de 1.821, por la que se determina que el Gobierno en la distribución y aplicación de alhajas para las casas monacales que hayan de subsistir observe las reglas prescritas respecto a las que pertenecían a conventos suprimidos. Literalmente señalaba que: "... Atendiendo al número que hayan de quedar para la conservación del santuario y de la edificación de la piedad de los fieles, se distribuirán por los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos de los respectivos distritos a las parroquias pobres de sus Diócesis, y que las otras que por su preciosos valor y distancia del culto más sirven de ornato para aquél objeto, se reserven y apliquen al crédito público, ...". (*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes* (continúa...))

Tras haber comentado lo más representativo de la política desamortizadora de este período, hay que reflejar que la posibilidad de una "marcha atrás" sobre lo señalado en esas disposiciones se excluía por motivos básicamente económicos⁷³, aunque, como se ha venido afirmando en la presente tesis, la vertiente económica, aún siendo importante, no fue la única que motivó la desamortización en España.

2. FINANCIACIÓN

Antes de desarrollar el abundante trabajo de las Cortes y el Gobierno en este capítulo para con la Iglesia y el clero, hay que delimitar el marco concreto donde operaron toda esta serie de reformas. En primer lugar, nos encontramos verdaderos esfuerzos legislativos de cara a modernizar la organización del erario público, entendiendo por "modernizar" varios aspectos: la unidad de recaudación y distribución de las rentas públicas⁷⁴, la creación de una dirección orgánica⁷⁵, e

⁷²(...continuación)

ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ... , cit. p. 6).

⁷³ Ferrer Muñoz, M. La Constitución de Cádiz y su aplicación en la nueva España, México, 1.993, p. 85-86. Ha señalado que: *"En ocasiones, las razones que se daban para sustentar la legislación que había suprimido órdenes y congregaciones religiosas y excluir la posibilidad de una marcha atrás eran de naturaleza económica, y se basaban en la valoración de las dificultades a que habría de enfrentarse el Estado en el caso hipotético de que se desprendiera de los bienes eclesiásticos adquiridos con anterioridad. Era esto lo que argumentaba a principios de 1.820 un manifiesto apologeta de Agar, antiguo presidente del Consejo de Regencia y contrario a la restauración de los jesuitas: agobiado el erario público por la multiplicación de gastos"*

⁷⁴ Se trata del Decreto de 24 de marzo de 1.820, se decretaba la unidad de recaudación y distribución de las rentas públicas. (*Gaceta de Madrid del martes 28 de marzo de 1.820*, pp. 355-356). En su desarrollo, se aprobaba la Circular de 25 de marzo de 1.820, que resultaba todavía más ilustrativa, puesto que literalmente señalaba "... tiene por (continúa...)

incluso su propio sistema administrativo⁷⁶. En segundo lugar, nacían los primeros intentos para conocerse, a priori, el volumen de gastos del erario público mediante el esbozo de un Presupuesto General de Gastos⁷⁷. En tercer lugar, se intentaba dinamitar la economía mediante disposiciones tendentes a la liberalización para fomentar el crecimiento económico⁷⁸. Todos esos extremos nos diseñan la verdadera revolución que se estaba operando en la organización de la incipiente Hacienda española, y por consiguiente, la voluntad de crear un marco propicio para el crecimiento económico⁷⁹.

⁷⁴(...continuación)

objeto, como en el mismo se manifiesta, la reunión en un sólo punto y bajo una sola mano de todos los fondos que en cualquiera concepto pertenezcan a la Hacienda pública, para que conocido su total importe se atienda con la igualdad que exige la justicia al cumplimiento de las obligaciones del Estado en toda su extensión ...". (*Ibidem*, p. 356.).

⁷⁵. Nos referimos al Reglamento para la Dirección o Junta Gubernativa de la Hacienda pública. (*Gaceta de Madrid del martes 30 de mayo de 1.820*, cit. pp. 626-629).

⁷⁶. Mediante el Decreto de 29 de junio de 1.821, estableciendo el sistema administrativo de la Hacienda Pública. (*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 298-344).

⁷⁷. Se trata del antecedente de los conocidos Presupuestos Generales del Estado, aunque si bien, en este primer momento sólo se recogían los presupuestos de gastos. Nos referimos al Decreto de 29 de junio de 1.821, estableciendo el Presupuesto General de Gastos para el presente año económico -hacía referencia desde el 1 de junio próximo hasta fin de julio-. (*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 345-355).

⁷⁸. Este parece ser el sentido que tenía el Decreto de 27 de septiembre de 1.820, que suprimía toda especie de vinculaciones. (*Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 145-149).

⁷⁹. Dentro de este contexto de ideas, se puede señalar, a mayor abundamiento, el Decreto de 2 de octubre de 1.820, asegurando el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria. (*Ibidem*, pp. 160-164).

Todas esas medidas novedosas tenían su razón de ser en el esfuerzo que, desde las Cortes y el Gobierno, debían acometer los liberales para sanear la maltrecha economía española.

Ante ese estado que podríamos denominar de "quiebra técnica", la desamortización, -vista únicamente desde el plano económico-, surge como una necesidad, como un ingreso extraordinario, que puede colaborar en la solución del maltrecho estado de las arcas públicas⁸⁰.

Esa afirmación debe ser atemperada, puesto que la desamortización no fue el único instrumento usado a tal efecto. Entre otras disposiciones tendentes a generar fondos a favor de las arcas públicas, pueden señalarse el cobro anticipado de contribuciones⁸¹, o la abolición de antiguos privilegios fiscales propios del Antiguo Régimen, comenzando por los que disfrutaba el monarca⁸² y

⁸⁰. En apoyo de la anterior afirmación, no sólo encontramos diversas opiniones al respecto, sino que su fundamento se encuentra incluso en disposiciones de la época como la Orden de 24 de octubre de 1.820, previniendo a la Junta nacional de crédito público, para que en la próxima legislatura, presente al Congreso la tasación de todas las fincas que están a disposición de aquel establecimiento. (*Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 250-251).

⁸¹. Se trataba de una medida que, a pesar de comprender una rebaja de los tributos que recibía el erario, ponía en sus manos de forma anticipada capitales. Nos referimos al Decreto de 13 de agosto de 1.820, mediante el cual se condonaba una parte de su contribución a los pueblos que satisficieran los dos tercios de ella en las épocas que se expresaban. (*Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. p. 39).

⁸². El privilegio económico más representativo era, sin duda, el que gozaba el monarca. Éste se derogaba mediante el Decreto de 3 de abril de 1.820, por el que se declaraban abolidos los privilegios del Real Patrimonio. (*Gaceta Extraordinaria de Madrid del martes 4 de abril de 1.820*, p. 389). Sin embargo, a diferencia de lo acontecido en las Cortes de Cádiz, que actuaron de igual forma para con esta prerrogativa, las del Trienio, a pesar de haber abolido los privilegios de la Casa Real y nacionalizado algunas de sus

(continúa...)

posteriormente cualesquiera otros⁸³, que venían a representar el esbozo del principio de igualdad en el campo tributario⁸⁴.

Dentro de este nuevo marco financiero diseñado por los liberales⁸⁵, la Iglesia, en su estatus económico, iba a sufrir modificaciones profundas, que se efectuaron sin contar para nada con la propia Iglesia, puesto que ni el Papa ni los Obispos fueron consultados⁸⁶. Para su mejor exposición, se pueden clasificar en los siguientes apartados:

⁸²(...continuación)

propiedades, no desatendieron a ésta económicamente, sino que procedieron a establecer una partida económica anual para el Rey y los gastos de la Casa Real, la Reina, para las Infantas y los infantes (Decreto de 8 de agosto de 1.820 sobre la dotación de la Real Casa -*Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 32-33-).

⁸³. La abolición de cualesquiera otros privilegios se producía mediante Decreto de 13 de abril de 1.820, por la que se incorporaban a la Nación los señoríos jurisdiccionales, y quedaban abolidos los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos. Aunque éstas últimas tampoco constituían disposiciones nuevas para nuestro Derecho, puesto que ya habían sido adoptadas por las antiguas Cortes de Cádiz, no por ello dejaban de ser igualmente importantes en este período. (*Gaceta de Madrid del martes 18 de abril de 1.820, p. 436*).

⁸⁴. Una muestra del llamado contenido esencial de este principio se contenía en el decreto citado de abolición de privilegios del Rey, literalmente señalaba: "... *no es posible la Monarquía que consiga toda la unión y felicidad que necesita y a que debe aspirar mientras todos los españoles no sean iguales en goces y cargas, en derecho y deberes; he resuelto ... que en su consecuencia cesen inmediatamente todos los referidos privilegios del Real Patrimonio y la exacción de derechos consiguiente a ellos, ...*"

⁸⁵. Como ha señalado Artola, M., *La Hacienda del Siglo XIX Progresistas y moderados*, Madrid, 1.986. pp. 82-99. resulta muy interesante la obra de Canga Argüelles al frente de la cartera de Hacienda como máximo responsable de la reforma fiscal.

⁸⁶. En este sentido se han pronunciado numerosos autores, entre otros, veasé Revuelta González, M., *La Iglesia española ...*, cit. p. 91. "... Es evidente que los religiosos, los beneficiados y los diezmos necesitaban reformas; pero fue una lástima que éstas se hicieran de forma unilateral, precipitada y con un regalismo lleno de orgullo y autosuficiencia".

2.1 CONTRIBUCION DE LA IGLESIA AL ESTADO

En primer lugar, y por lo que respecta a las diferentes contribuciones directas que la Iglesia dispensaba al erario público, en este periodo, a diferencia de los anteriores, nos encontramos con una planificación de gastos e ingresos "a priori" por parte del Estado. Por consiguiente, se puede comenzar señalando que en el Decreto de 6 de noviembre de 1.820, que contenía el Plan de gastos y contribuciones para el año corriente desde 1 de julio hasta fin de junio próximo⁸⁷, se expresaba que el Gobierno se proponía ingresar de la Iglesia⁸⁸ la cantidad de 57 millones de reales, en virtud de varios conceptos. Efectuada esta aclaración, se puede afirmar que, independientemente de las participaciones en los diezmos, primicias y otros que tenía el erario público en los ingresos de la Iglesia, dos eran las imposiciones que principalmente exigía a la Iglesia:

1). *Las denominadas contribuciones correspondientes a tributos generales (Contribución Territorial y otros)*. Así se verifica de diversas disposiciones: entre otras, del Decreto de 8 de noviembre de 1.820, que recogía las medidas sobre contribuciones del clero⁸⁹. Se trae a colación esta disposición por dos motivos fundamentales. En primer lugar, a diferencia de sus predecesoras, y aunque no fijaba claramente las deudas de la Iglesia para con el erario de años anteriores, determinaba la cantidad de 37.076.777.rs. limitando la deuda de años anteriores

⁸⁷. *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 279-289.

⁸⁸ Porcentualmente, y del total de ingresos prefijados en el Presupuesto, la contribución de la Iglesia suponía algo más del 17,2 por 100.

⁸⁹. *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. p. 306.

correspondiente a la contribución territorial, y aclaraba igualmente que sobre esa cantidad no permitía reducción alguna, aunque aceptaba la rebaja de las contribuciones relativas a los bienes desamortizados. A pesar de esa rigidez formal que diseñaba el decreto citado, sí que resultaba posible encontrar exenciones en otras rentas que percibían los eclesiásticos, tal era el caso de las primicias que recibían los Cabildos eclesiásticos y Curas párrocos⁹⁰. Y en segundo lugar, si se compara este Decreto con otros del período anterior del sexenio, resulta sencillo verificar un detalle muy importante como era que, en este momento, se partía de una nueva situación negocial entre ambas potestades; ahora el Estado se sitúa en un plano superior a la Iglesia.

2). *La Contribución del Clero*: Ésta se venía abonando por la Iglesia al erario público también en el sexenio, pero ahora, y pese a la desamortización y al recorte de los recursos propios de la Iglesia, se exigía en su cifra máxima, sin las rebajas que Fernando VII había autorizado en períodos anteriores. Muestra de ello resulta el Decreto de 29 de junio de 1.821, sobre el repartimiento de 30 millones al clero por contribución⁹¹. En esta disposición, al igual que otras señaladas en capítulos anteriores, se establecía la contribución que la Iglesia había de satisfacer al poder civil en concepto de contribución del clero. Por otra parte, y dentro del análisis de este Decreto, es necesario destacar la ingerencia del legislador, puesto que no sólo se limitaba a exigir dicho subsidio de los 30

⁹⁰. Así se contenía en la Orden de 25 de abril de 1.821, por la que se declaraban libres de pago de la contribución directa las rentas que con título de primicias perciben los Cabildos eclesiásticos y Curas párrocos. (*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año.* ... , cit. pp. 54-55).

⁹¹ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año.* ... , cit. pp. 251-252.

millones, sino que se contenía expresamente la contribución que correspondía a cada una de las Diócesis⁹²

Para comprender la voracidad recaudadora para con la Iglesia, resulta oportuno señalar otra disposición aprobada en igual sentido a la citada anteriormente, sólo que promulgada en los últimos momentos de vigencia de este trienio liberal, donde se verificaba como a pesar de todas las disposiciones contrarias a los intereses económicos de la Iglesia, ello no fue óbice para que el Estado continuara solicitando el pago de la contribución que le correspondía a la Iglesia, con la sola rebaja de un 33 por 100. Nos referimos al Decreto de 25 de junio de 1.822, por el que se fijaba en 20 millones la cantidad con que deba contribuir el clero por vía de subsidio en el año económico que acaba en 30 de junio de 1.823⁹³. El reparto por provincias se efectuaba mediante el Decreto de 29 de junio de 1.822, fijando el repartimiento de 20 millones de rs. sobre el clero⁹⁴.

2.2 REDUCCIÓN DE LOS PAGOS A ROMA.

La injerencia en la financiación de la Iglesia llegó hasta límites insospechados, y clara muestra de ello fue la fiscalización de las entregas de dinero o cosas equivalentes que la Iglesia española efectuaba a Roma.

⁹² Se detalla dicha contribución en el Anexo N° 2.

⁹³ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. p. 452.

⁹⁴ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 534-536.

Se señalan dichos repartos mediante el Anexo N° 3.

Como ha señalado Martí Gilabert, la salida de dinero a Roma era motivada por las reservas pontificias que, como primado, concedía el Papa, consistentes en ciertas gracias y dispensas. Los solicitantes otorgaban a la Santa Sede una cantidad pecuniaria por la concesión de dichas gracias. Para impedir la salida de dinero a Roma cabían dos posibilidades: suplicar al Papa que cediese a los Obispos una serie de gracias y dispensas, o seguir suplicándolas, sin enviar dinero⁹⁵.

Las Cortes llegaron a determinar por Decreto la cantidad que debía destinarse a Roma, quedando así esta facultad fuera de la libre disposición de la propia Iglesia. Se trataba del Decreto de 17 de abril de 1.821, prohibiendo las prestaciones de dinero que se hacían a Roma, y asignando una cuota anual a Su Santidad⁹⁶. Parece ser que el motivo que llevó a esta determinación fue la creencia de que las cantidades que se satisfacían a Roma eran muy cuantiosas, y por esa razón se determinaba la sustitución de los pagos genéricos y los efectuados por servicios puntuales por la entrega de una cantidad anual fija. En dicha cantidad fija, y tal y como se decretaba por las Cortes, se entendían recogidas las prestaciones de dinero o cosas equivalentes para Roma con motivo de bulas de Arzobispados, Obispados, de dispensas matrimoniales, y de otros cualquiera rescriptos, indultos, o gracias apostólicas. En todo caso, las Cortes, conscientes de la gran dificultad que entrañaba esa disposición, autorizaban al Gobierno para que llevara a la práctica esa disposición mediante las gestiones que estimara oportunas ante Su Santidad⁹⁷.

⁹⁵. Así ha sido señalado por Martí Gilabert, F., *Iglesia y Estado en el reinado ...*, cit. p. 106.

⁹⁶ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 36-37.

⁹⁷. Resulta interesante lo señalado por Martí Gilabert, F., *Iglesia y Estado ...*, cit. p. 107.
(continúa...)

2.3 MEDIDAS RESTRICTIVAS CONTRA LA PROPIA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA:

A partir de finales del mes de junio de 1.821 las medidas económicas en contra de los intereses de la Iglesia comenzaron a endurecerse. A tal efecto, las Cortes aprobaron toda una serie de disposiciones que provocarían que se tambalease el sistema financiero que presentaba la Iglesia en España. El fin estaba claro: se pretendía ir avanzando en la reforma de la Iglesia desde su vertiente económica.

Por orden cronológico se pueden citar las siguientes medidas:

1). El Decreto de 29 de junio de 1.821, por el que se operaba la reducción del diezmo y primicias⁹⁸. Su contenido era lapidario, los diezmos y las primicias

⁹⁷(...continuación)

Toda vez que señala que: ... *El agente español en Roma, Aparici, luchaba para conseguir la expedición gratuita de las dispensas. Aunque el Papa no aprobaba la ley votada en Cortes, por Gracia especial y bien de los fieles daba curso a las dispensas. Pero había una dificultad: los sueldos y propinas a agentes y escribanos de Roma. Éstos no estaban dispuestos a hacer gratis su trabajo y se negaban a dar curso a las bulas y gracias si no se les adelantaban los honorarios. El Gobierno ordenó provisionalmente que se pagaran "puramente los gastos del ejercicio" de las gracias retenidas con los 9.000 duros que el Papa no quiso aceptar. Las Cortes, en abril de 1.822, -resolviendo una dificultad no prevista- ordenaban el pago de los gastos de secretaría de las bulas, que debían pagar los interesados. Si bien la nueva tarifa era una cuarta o quinta parte de la antigua, hubo disgusto y decepción de muchos al saber que tenían que abonar el dinero antes de recibir la dispensa. Al parecer el Gobierno, estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con Roma, pero lo impidió la expulsión del nuncio. Al tener que salir también Aparici de Roma dejaba 2.000 preces acumuladas.* ...

⁹⁸ Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden (continúa...)

quedaban reducidos a su mitad, y dicho producto se aplicaría única y exclusivamente a la dotación del clero y el culto, con las solas excepciones de las cantidades destinadas a establecimientos de instrucción y beneficencia por las prebendas que disfrutaban, y sólo hasta el arreglo definitivo del clero.

A esa disposición le seguía la renuncia del Estado en las participaciones que disfrutaba sobre esos ingresos⁹⁹, excepto en la proporción que le correspondía por las vacantes de las mitras y de las dignidades, canongías y prebendas de las iglesias catedrales, colegiatas y magistrales, quedando fuera, en todo caso, las que se comprendieran en los expedientes de reducción del clero.

Sin embargo, dichas prescripciones implicaban la necesidad de indemnizar a los seculares partícipes de diezmos. Por ello, se aplicaban a tal efecto los bienes raíces rústicos y urbanos, censos, foros y algunos otros de menor entidad, exceptuándose de esa aplicación algunos bienes como prediales, casas rectorales y huertos y jardines poseídos por curas párrocos o por M. RR. Arzobispos y RR. Obispos¹⁰⁰.

Esa reducción en sus percepciones también llevaba aparejado algo quizá,

⁹⁸(...continuación)

desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ..., cit. pp. 245-249.

Aunque se señala este decreto el primero, realmente no fue así, puesto que ya se había aprobado otro anteriormente a tal efecto. Sin embargo, técnicamente éste resultaba mucho más satisfactorio, toda vez que regulaba también los efectos de dicha reducción. (Ese Decreto era el de 28 de mayo de 1.821, sobre que el pago del diezmo de dicho año se verifique con arreglo a la reducción de su mitad. -*Ibidem*. pp. 118-119-).

⁹⁹. Tales como noveno, excusado, tercias Reales en Castilla, y tercio diezmo en la Corona de Aragón, diezmos novalés y de exentos, y de nuevo riego. ... (Art. 2).

¹⁰⁰. Resulta ilustrativo comparar este Art. 5 descrito con lo dispuesto al respecto en el futuro Concordato de 1.851. Realmente aquí se desgranar las bases de los bienes que más de treinta años después no se permutarán por títulos de deuda intransferibles al tres por ciento a la Iglesia.

a nuestro juicio, más perjudicial para la Iglesia, puesto que se diseñaba el embrión de la futura intervención del Estado¹⁰¹ en la distribución de las dotaciones del clero y del culto. Nos referimos a la constitución de Juntas diocesanas¹⁰² en cada capital de los obispados al efecto de proceder a los repartos. Su estructura estaba formada por el Prelado diocesano, o de la persona que nombrare para su representación, de dos miembros señalados por el cabildo, uno de las colegiatas y seis de los curas propios o de beneficiados que ejercieran cura de almas, y un beneficiado por los que no la ejercieran.

El nuevo sistema previsto para la exacción del diezmo requería de disposiciones concretas que lo autorizaran cada año. Como ejemplo se puede traer a colación el Decreto de 17 de junio de 1.822, por el que se señalaba que las Juntas diocesanas continuarán el presente año en la recaudación y distribución del medio diezmo en los términos que se expresa¹⁰³

Como ha señalado Artola¹⁰⁴, " ... El problema de las rentas decimales afectaba no sólo a los eclesiásticos que obtenían de ellas sus ingresos más

¹⁰¹ En este momento se limitaba a organizar simplemente desde fuera con su potestad normativa: "Se establecerá una Junta diocesana en la capital de cada obispado para hacer la distribución de las dotaciones al clero y a las iglesias, con arreglo a las bases que adoptaren las Cortes en el plan eclesiástico; ..." (Art. 10). Esa potestad se extendía también a configurar los integrantes de dichas Juntas (Art. 11). Unos años más tarde esa intervención será integral, señalando las cantidades que corresponden a cada dignidad eclesiástica, y abonando el mismo dichas congruas.

¹⁰² La constitución de estas Juntas diocesanas, fue desarrollada mediante el Decreto de 29 de junio de 1.821 por el que se aportaban las reglas para la formación de la Junta diocesana. (*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 249-250).

¹⁰³ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 406-407.

¹⁰⁴ Artola, M., *El Trienio liberal (1.820-1.823) en La Historia de España...*, cit. p. 753.

saneados, sino también a buen número de partícipes legos, que en ocasiones se beneficiaban de la parte más substancial de tales rentas, dejando reducidos a los sacerdotes encargados de la cura de almas a la percepción de una simple congrua. El Ministerio calculaba el valor de tales rentas, *cobradas según las reglas de su instituto*, en 600 millones de reales, y para aliviar los apuros del erario propuso reducir el diezmo a la mitad, *cuya exacción se deje a cargo de los eclesiásticos como la tienen en el día, intervenidos por las diputaciones provinciales, incorporar al Estado las fincas rústicas y urbanas y demás de las iglesias, catedrales, colegiadas, santuarios y monasterios aún existentes, para indemnizar con ellas a los poseedores legos por los diezmos que deban perder, aplicando el resto al tesoro público*. Los eclesiásticos -tal era el planteamiento- percibirían iguales o mayores rentas y los contribuyentes pagarían la mitad, con lo que se esperaba poder imponer una contribución territorial directa por un total de 200 millones. ...".

2). Otra medida contraria a los intereses económicos de la Iglesia fue la decisión del Gobierno por la que se fiscalizaban las aportaciones para con la Iglesia y el clero contenidas en los presupuestos de Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y cualesquiera otros órganos de la Administración.

Esta política, básicamente se puede resumir en dos palabras:

A). Finalización de los gastos religiosos realizados a título gratuito. Y,

B) Restricción de las entregas de dinero que se efectuaban para el pago de servicios eclesiásticos contratados por organismos públicos.

Con respecto a las entregas a título gratuito, afectaban fundamentalmente a las comunidades de religiosas que subsistieron a las disposiciones

desamortizadoras, toda vez que ahora perdían las ayudas económicas que antes recibían de las administraciones públicas. Así se disponía en la Orden de 16 de abril de 1.822, por la que se prescribía que cesaran las asignaciones que cobraban del Erario público algunas comunidades de religiosas¹⁰⁵. El único motivo que se apuntaba en esta Orden para justificar esa decisión era la escasez de medios económicos del Estado para hacer frente a sus obligaciones.

En lo referente a la limitación del capítulo relativo a "gastos religiosos", se trataba de un ejemplo más de ese espíritu restrictivo y austero para las arcas de la Administración sobre todo lo relacionado con la Iglesia. Concretamente, los recortes se centraban en evitar la celebración de más de tres ceremonias religiosas por año en cada Ayuntamiento. Nos referimos a la Orden de 14 de mayo de 1.822, por la que se sancionaba que los pueblos de la Nación no pagarían de los fondos de propios y arbitrios más funciones de Iglesia que la del Corpus, la del aniversario de la Constitución y la de los patronos de cada pueblo¹⁰⁶. Además, los gastos para esas únicas tres ceremonias anuales venían tasados, de suerte que se limitaban al abono del coste de las funciones religiosas. Es decir, la posibilidad del Ayuntamiento de costear los víveres que se ofrecían en las ceremonias también fue restringida mediante la Orden de 6 de mayo de 1.822, por la que se prohibía que los Ayuntamientos, mayordomos y otras personas pagaran a costa de los fondos públicos refrescos y otros obsequios con motivo de fiestas eclesiásticas; así como también el hacer aquellos cuestaciones para gastos de iglesia¹⁰⁷.

¹⁰⁵. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 78-79.

¹⁰⁶. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 140-141.

¹⁰⁷. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 121-122.

3). Tras esos recortes económicos, nos encontramos otro punto de gran interés, como era la injerencia del poder civil en la administración de las rentas que cobraba la Iglesia. En este sentido, se puede señalar el Decreto de 23 de abril de 1.822, por el que se señalaban las reglas que habían de ser observadas por las Juntas diocesanas en el reparto del medio diezmo del año anterior¹⁰⁸. Entre otras disposiciones, especificaba que los curas párrocos nunca recibirían menos de 300 ducados anuales, concurriendo una vez verificada esta entrega con los demás partícipes de la diócesis al reparto del sobrante¹⁰⁹. Para asegurar esa congrua a los curas párrocos se llegaba incluso a la rebaja de las cuotas asignadas a los Obispos.

En esta línea, y haciendo especial referencia al sistema de autorización anual para el cobro del nuevo "medio diezmo", se debe señalar que junto a las disposiciones que acordaban su renovación anual, se aprobaban directrices para su reparto. Un ejemplo de esas disposiciones resultaba el Decreto de 29 de junio de 1.822, por el que se determinaba el modo de repartir el medio diezmo y la primicia¹¹⁰. En dicho Decreto se contenía el modo de repartir el medio diezmo y la primicia para el año 1.822-23. A tal efecto, se establecía un mínimo y un máximo sobre el cual podría oscilar la dotación para cada individuo del clero.

¹⁰⁸. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 89-90.

¹⁰⁹. El Art. 4 del decreto citado de 29 de junio de 1.821, ya había dispuesto esa disposición al respecto de los curas párrocos, pero poco tiempo después, las disposiciones sobre este extremo serían recordadas y ampliadas mediante la Orden de 24 de junio de 1.822, por la cual los curas párrocos después de recibir la congrua de 300 ducados tenían derecho como los demás partícipes del medio diezmo al acervo común sobrante en tanto y cuanto hayan percibido en el último quinquenio en proporción a los frutos repartibles. (*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. p. 439).

¹¹⁰. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 547-553.

Para mayor ilustración, se puede afirmar que era el M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo quien disfrutaba la dotación mayor, que contenía 500.000 rs. de mínimo a 800.000. rs. de máximo. Los Obispos disfrutaban un mínimo de 30.000. rs. Además aparecían jerárquicamente señalados numerosos miembros del clero, para quienes se detallaban algunos de sus ingresos y la forma en que incrementaban el llamado "minimum". En todo caso, la técnica utilizada para fijar las congruas de todos los ministros de la Iglesia era idéntica, puesto que, tras unas operaciones matemáticas básicas, se comenzaba asegurando el mínimo, y después se hacía frente a una serie de gastos que se conocían referidos a hospitales, hospicios, u cualesquiera otros establecimientos de beneficencia, establecimientos de instrucción y sus personas empleadas, seminarios conciliares, y el pago de las cantidades necesarias para el culto y la manutención de los ministros inferiores en las respectivas Iglesias.

Las Juntas diocesanas eran las designadas para proceder a los distintos repartos entre el "minimum y maximum", con la única limitación de la necesidad de haber oído a los párrocos.

El decreto contenía la posibilidad de que el medio diezmo y la primicia no bastaran para cubrir el termino medio de las dotaciones personales, los gastos de culto y las pensiones de justicia, en cuyo supuesto se reservaban los predios rústicos y urbanos necesarios para completar estas obligaciones. Pero en todo caso, las Juntas diocesanas debían instruir los expedientes oportunos para remitirlos al Gobierno quien decidía en último caso.

4). La intervención de las Cortes y el Gobierno en la financiación de la Iglesia llegaba a todos los rendimientos que disfrutaba, desde aquellos que recibía el clero del pueblo o instituciones públicas -como los señalados-, hasta los que eran generados por el funcionamiento mismo de la Iglesia. Una muestra del

control sobre los que podríamos denominar "ingresos típicos" de la Iglesia se encontraba en lo relacionado con las bulas, donde el precio de las mismas era establecido unilateralmente por el poder civil. Prueba de ello resultaba el Decreto de 21 de marzo de 1.821, por el que se tasaba el precio de Bulas para el año de 1.822¹¹¹. Ese control sobre el coste de servicios eclesiásticos se encontraba también, en mayor medida, en el Decreto de 15 de mayo de 1.822, sobre arancel de los derechos que se han de exigir por los Reales títulos, presentaciones eclesiásticas y otros despachos que se expidan por las secretarías del Consejo de Estado¹¹².

5). Esa reducción y fiscalización abarcaba también a los rendimientos que recibían los propios miembros del clero. Esta actuación se limitaba básicamente a dos extremos:

A). Sueldos de eclesiásticos que disfrutaban empleos civiles. Una de las disposiciones más importantes aprobadas en este sentido fue el Decreto de 2 de septiembre de 1.820, acerca de los sueldos que habían de gozar los eclesiásticos que servían empleos civiles, y que no podían obtener más de un beneficio¹¹³. En su articulado no prohibía que siguieran prestando sus servicios en los destinos civiles que ocupaban, ni tampoco obligaba a que cada eclesiástico tuviese sólo un

¹¹¹. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 10-11. A fin de aportar un mayor detalle de esa fiscalización en las Bulas se puede citar también la Orden de 20 de marzo de 1.821, prescribiendo reglas acerca de repartimento de Bulas (*Ibidem*, p. 8-9).

¹¹² *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 144-147.

¹¹³. *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 85-86.

beneficio o empleo. Por el contrario, permitía esas múltiples ocupaciones. Sin embargo, prescribía que no era posible disfrutar simultáneamente las retribuciones de ambos, debiendo optar por una sola de las que se recibieran, esto es, bien las congruas eclesiásticas o bien uno de los sueldos civiles, para el caso de ser varios. Esta medida, indirectamente también incidía en las remuneraciones que disfrutaban los miembros del clero, puesto que muchos ocupaban cargos eclesiásticos y civiles. Como es sabido, era muy frecuente esta situación, por ejemplo, en la enseñanza, en cualquiera de sus niveles.

B). Sueldos de los eclesiásticos en empleos militares. Nos referimos a los Capellanes párrocos castrenses. Su dotación, dependiendo de los casos, oscilaba de setecientos a mil reales al mes. Se trataba de congruas superiores a los curas párrocos, que compatibilizaban con el cobro de algunos servicios religiosos. Mediante el Decreto de 6 de noviembre de 1.820, sobre dotación de los Capellanes párrocos castrenses¹¹⁴, se les detraían algunos de los derechos que venían cobrando como el de estola y también el conocido mediante el término vulgar de soltería.

2.4 PENSIONES A EXCLAUSTRADOS Y SECULARIZADOS.

La desamortización había ocasionado que muchos miembros del clero habían tenido que dejar sus monasterios y conventos, por lo que se encontraban verdaderamente en una situación precaria, sin medios económicos y fuera de sus lugares de residencia. Por ello, fue necesario establecer pensiones para esta clase

¹¹⁴ *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 277-278.

del clero por parte del Estado, tal y como se contenía en uno de los decretos desamortizadores más importantes de este período -citado anteriormente-; nos referimos al de 1 de octubre de 1.820, por el que se acordaba la supresión de monacales y reforma de Regulares¹¹⁵.

La razón de ser de esta clase de subsidios respondía al establecimiento de simples ayudas para lograr la supervivencia de estas clases del clero, puesto que se establecía expresamente que cesaban en el momento en que recibieran cualquier otra renta, bien eclesiástica, o bien civil, siempre y cuando fuera superior a la recibida, o, en caso contrario, continuaban su disfrute pero minorando la dotación por las rentas obtenidas.

Concretamente, y por citar algunas de ellas, se puede afirmar que a todo monje que estuviera ordenado "in sacris", y que no tuviera más de 50 años se le abonaban cada año trescientos ducados, al que tuviera más de 50 años pero que no hubiera cumplido 60, se le abonaban cuatrocientos ducados. Y para los mayores de 60 se les abonaba seiscientos ducados. El resto de los profesos recibían anualmente cien ducados, siempre que no hubieran cumplido los 50 años, puesto que en caso contrario, recibían doscientos ducados. Esas rentas se disponían también para con los correspondientes a Ordenes Militares, a los Jesuitas, y Hospitalarios y Betlemitas, a los que se les pagaba entre doscientos y cien ducados sin distinción de edad.

Todas esas pensiones citadas venían a amortiguar las condiciones tan rígidas que se señalaban para la supresión de los conventos y monasterios, toda vez que, como es sabido, las Cortes pretendían que los eclesiásticos cuyos

¹¹⁵. *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 155-159.

hogares se habían suprimido se incorporaran a la casa de la misma orden más cercana. Esta política de agrupación necesitaba de la oportuna dotación de fondos para las casas de acogida, puesto que podía ocurrir que la casa de destino no tuviera suficientes fondos económicos para atender a más individuos. Por ello, en este Decreto citado, se acordaba que en esos supuestos, el Gobierno debía entregar las cantidades que estimara necesarias para su subsistencia directamente a estos conventos y monasterios.

A esas ayudas para esta clase de miembros del clero, se unía una política de promoción de la secularización desde el plano económico, puesto que se dispensaba una dotación económica para aquellos ordenados in sacris que accedían voluntariamente a secularizarse. Por ello, podemos encontrar disposiciones como la Orden de 2 de abril de 1.821, por la cual se establecía que sólo los legos profesos de los monasterios tenían derecho para obtener, cuando se secularicen, la asignación de 100 ducados¹¹⁶.

El pago de las dotaciones personales de esta clase del clero encontró, al menos formalmente, preocupación por su cumplimiento por parte del poder civil, porque gozaba de prioridad con respecto a otras cargas del Estado. Así se contenía en la Orden de 11 de mayo de 1.822, señalando que las asignaciones de los religiosos secularizados se pagaran con preferencia a otras atenciones menos urgentes¹¹⁷.

¹¹⁶ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 25-26.

¹¹⁷ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 132-133.

3. ENSEÑANZA

La regulación de la enseñanza en el trienio comenzaba con la abolición del sistema de enseñanza vigente y reinstaurando el que regía antes de la Guerra de la Independencia. A tal efecto se aprobaba el Decreto de 6 de agosto de 1.820, restableciendo interinamente el plan de estudios publicado en Cédula de 12 de julio de 1.807¹¹⁸. Como indicaba su título, se ponía de nuevo en vigor el plan general de estudios de 1.807, pero sólo de forma interina hasta que se elaborara un nuevo plan de enseñanza, derogándose todas las disposiciones aprobadas desde 1.814. De forma expresa, y como premisa previa, ya se anunciaba que el Gobierno señalaría los libros que debían servir de texto para las diferentes enseñanzas. Y también, de forma cautelar, se contenían otra serie de medidas para los estudios superiores¹¹⁹, hasta que se procediera al arreglo general de la enseñanza¹²⁰.

Estas disposiciones estuvieron vigentes algo menos de dos años, puesto que se diseñaba un novedoso plan integral de estudios mediante el Decreto de 29

¹¹⁸. *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 30-31.

¹¹⁹. Por lo que respecta a los estudios de Jurisprudencia se reducían los años que duraban esos estudios, pasando de diez a ocho años, operándose igual reducción para los estudios de derecho canónico. Esa minoración iba acompañada de la creación de nuevas materias que se incluían en las licenciaturas.

¹²⁰. Los datos que han sido reflejados por los historiadores sobre el analfabetismo en el que se encontraba sumido el pueblo español a comienzos de siglo eran esclarecedores de los resultados de los viejos esquemas educativos. Por citar alguna opinión, veasé, entre otros Cierva, R. de la., *Historia de la España actual (1.800-1.974)*, Barcelona, 1.974, p. 38. Quien literalmente señala: *El pueblo español del siglo XIX no era sólo absoluta y relativamente iletrado, sino, con menos eufemismos, abrumadoramente analfabeto. Según estimaciones de 1.803, sólo seiscientos mil españoles de la metrópoli (es decir, entre el 5 y el 6 % del total) sabían leer y escribir, con probable inclusión de los semialfabetos en el porcentaje favorable.*

de junio de 1.821, por el que se contenía el Reglamento general para la instrucción pública¹²¹.

Antes de comentar su desarrollo, hay que afirmar que en este Decreto se contenía el primer texto legal por el que se diseñaba una nueva estructura educativa de carácter liberal en España. Ya en el análisis de sus contenidos, se partía de los mismos presupuestos que en el período correspondiente a la vigencia del texto constitucional (1.812-1.814), donde la enseñanza pública¹²² era gratuita y uniforme, entendiendo por uniforme la aplicación de un único método de enseñanza, junto con unos mismos libros y materiales. Sin embargo, esta enseñanza pública dejaba un gran margen de actuación a la iniciativa privada, la cual encontraba sólo la limitación necesaria para *que no se pudieran enseñar máximas o doctrinas contrarias a la religión divina que profesaba la Nación o subversivas de los principios sancionados en la Constitución política de la Monarquía*.

En todo caso, para dispensarse enseñanza privada era necesario contar con autorización previa¹²³ de la Dirección General de Estudios, *tras haberse*

¹²¹. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año. ...*, cit. pp. 362-381.

¹²² Dentro de esta enseñanza pública, la mujer continuaba siendo amargamente marginada, puesto que tal y como se contenía en el Art. 120, la enseñanza a las niñas quedaba restringida a que supieran leer, escribir, y contar, y a las adultas las labores y habilidades necesarias para el hogar. Para ello, el Gobierno encargaba a las Diputaciones Provinciales su desarrollo. Realmente la discriminación por razón de sexo era enorme; basta señalar el tenor literal de este Art. 120 para darse cuenta: "Se establecerán escuelas públicas, en que se enseñe a las niñas a leer, escribir y contar, y a las adultas las labores y habilidades *propias de su sexo*"

¹²³ Este extremo puede compararse a la realidad jurídica de nuestro tiempo, donde desde ese examen previo al titular del centro para verificar su capacidad para impartir la enseñanza se ha pasado a un sistema mucho más complejo, conforme con las exigencias (continúa...)

asegurado de la idoneidad del aspirante a esta gracia por medio de un examen que hacían los sujetos de su confianza designados al intento por la misma.

Por lo que hacía referencia a los distintos niveles de educación, se dividía en tres grados: Primera, Segunda y Tercera¹²⁴.

¹²³(...continuación)

constitucionales de la enseñanza como libertad pública. A tal efecto, puede traerse a colación lo escrito por Martín Sánchez. I., *La libertad de enseñanza en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, en *ADEE*, II (1986). p. 216. sobre la autorización previa para la creación de centros docentes en relación con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ha señalado que " ... La apertura y funcionamiento de los centros docentes privados está sometida a un sistema de autorización administrativa reglada -STC. de 13 de febrero de 1.981, FJ. nº 8; art. 23 LODE-, y los límites para la creación de centros docentes han sido claramente determinados por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 13 de febrero de 1.981 -FJ. nº 7. Con referencia a los límites que establecía la L.O.E.C.E.-. Tales límites son: En primer lugar, el respeto a los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución, a las leyes que lo desarrollan y, especialmente, al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia (art. 20, 4, C.E.). En segundo lugar, el respeto a los principios constitucionales, que, como los del Título Preliminar (libertad, igualdad, pluralismo, unidad de España, etc.), no son derechos fundamentales (art. 26, 6 C.E.). En tercer lugar, los límites que señala el artículo 27, 2 C.E., según el cual *La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales*. Según el Tribunal Constitucional, no cumplen una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva. Señala además, el Tribunal Constitucional que, en la interpretación de los valores a los que se refiere el artículo 27, 2 C.E. hay que tener en cuenta las precisiones y matizaciones que contiene el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1.966.-. Finalmente, cuando se trata de centros docentes que han de impartir enseñanzas regladas, hay que tener en cuenta el límite adicional de que *se han de acomodar a los requisitos que el Estado imponga para los centros de cada nivel. ...*".

¹²⁴. Puellas Benites. Manuel de., *Educación e ideología ...*, cit. p. 80. Señala que *esa división de la educación en tres niveles que se superponen entre sí era una de las grandes virtudes del reglamento, puesto que esta idea de clara inspiración francesa, permitía una mínima racionalización del caótico espectáculo que la educación presentaba en el Antiguo Régimen.*

1º. *La Primera enseñanza*, se dispensaba en las escuelas públicas de primeras letras¹²⁵ y desde la infancia. Su contenido se restringía a lo preceptuado en el Art. 25 de la Constitución¹²⁶. Por lo que los niños aprendían a leer y escribir correctamente, y asimismo las reglas elementales de aritmética, y un catecismo que comprendía brevemente los dogmas de la religión, las máximas de buena moral, y los derechos y obligaciones civiles.

El esfuerzo de las Cortes y el Gobierno de fomentar la creación de escuelas de primeras letras se puede contemplar en muy diversas disposiciones. Entre otras, se puede traer a colación la Orden de 29 de junio de 1.821, por la cual quedaba autorizado el Gobierno para aprobar los arbitrios que las Diputaciones provinciales le propusieran con el fin de dotar con ellos escuelas de primera enseñanza¹²⁷.

2º. *La Segunda enseñanza*, estaba diseñada como paso previo a los estudios superiores. Esos establecimientos se denominaban Universidades de Provincia¹²⁸. Dentro de esos centros, y para la impartición de docencia se

¹²⁵ Se establecía que en cada pueblo que llegara a 100 vecinos se establecería una escuela de primeras letras. En las poblaciones de menor vecindario, donde no hubiera este tipo de escuelas, eran las Diputaciones provinciales quienes debían proponer lo necesario para que se dispensara este tipo de enseñanza. Y en los pueblos de gran vecindario, se establecía una escuela por cada 500 vecinos. (Art. 14).

¹²⁶ Concretamente, se refería a lo contenido en el apartado Sexto, en virtud del cual, se hacían depender los derechos de ciudadano de una condición: *saber leer y escribir*.

¹²⁷ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. p. 240.

¹²⁸ Sin embargo, la desigualdad entre estos centros dependiendo de la provincia en la que estuvieran encuadrados no sólo era un hecho, sino que parece ser que era permitida por este Decreto, o al menos así parece entenderse: "... *atendiendo particularmente a la situación y circunstancias peculiares de cada provincia*" (Art. 29).

diseñaban diferentes cátedras¹²⁹.

3º. *La Tercera enseñanza* hacía referencia, como en los anteriores planes de estudios, a la enseñanza universitaria¹³⁰.

Junto al diseño citado, resulta oportuno destacar también la creación de una *Dirección General de Estudios*¹³¹. Las facultades que ostentaba este órgano comprendían los siguientes extremos:

1. Velar por el cumplimiento de lo señalado en el nuevo plan de estudios.
2. Recibir las solicitudes, reclamaciones, y propuestas de todos los centros docentes y pasarlos con su informe al Gobierno.
3. Encargarse de la formación de planes y reglamentos que estime oportunos, auxiliándose de quienes tuviera a bien, oyendo, en todo caso, a la

¹²⁹. Concretamente se señalaban las siguientes Cátedras: Dos de gramática castellana y de lengua latina; Dos de geografía y cronología; Dos de literatura e historia; Dos de matemáticas puras; Una de física; Una de química; Una de mineralogía y geología; Una de botánica y agricultura; Una de zoología; Una de lógica y gramática general; Una de economía política y estadística; Una de moral y Derecho natural; Una de Derecho público y Constitución. (Art. 24).

¹³⁰. Por lo que respecta a los estudios de Jurisprudencia se distribuían de la siguiente forma: Cátedras: Una de principios de legislación universal; Una de Historia y elementos del Derecho Civil Romano; Dos de Historia e Instituciones del Derecho español. Quedando el aprendizaje de las fórmulas y prácticas forenses a las academias y Tribunales. (Art. 43). Dentro de este marco, el Derecho Canónico se diseñaba como asignatura común a las carreras de Derecho y Teología (Art. 44). Y por lo que respecta a la impartición de la docencia, se creaban las siguientes cátedras: Una de Historia y elementos de Derecho Público y Eclesiástico; Una de Instituciones Canónicas; Una de Historia Eclesiástica y Suma de Concilios. (Art. 45). El idioma general en que eran impartidas las clases era el castellano. Sin embargo, para la teología, el derecho canónico y el derecho civil romano se utilizaba el latín (Art. 46).

¹³¹. Esa Dirección General de Estudios tenía su sede en Madrid, y a su vez, se establecían otras dos Subdirecciones de Estudios para América, que se situaban en Méjico y en Lima.

Academia Nacional¹³², antes de pasar sus propuestas de reglamentos al Gobierno.

4. Promover la mejora de los métodos de enseñanza y la formación y posterior publicación de tratados elementales por medio de premios a sus autores.

5. Presentar los informes relacionados a los planes de estudios, siempre a propuesta o con informe de la Academia Nacional.

6. Cuidar de la conservación de las bibliotecas públicas del Reino, y promover la creación de otras nuevas. 7. Presentar una memoria anual al Gobierno para que la pase a su vez a las Cortes donde se contuviera el estado de la enseñanza pública.

8. Así como otras funciones que se le atribuya mediante su reglamento organizativo.

En opinión de Puellas, *el Reglamento no fue bien recibido. De un lado, no podía complacer el sector absolutista para quien la instrucción pública no era sino "una peligrosa novedad"; de otro, no podía satisfacer las aspiraciones de los exaltados, pues aunque el reglamento recogía buena parte de las aspiraciones liberales, se apartaba un tanto de lo que el liberalismo radical o democrático consideraba como necesario e imprescindible. También el sector de los afrancesados presentó una tenaz oposición al reglamento, por considerarlo irrealizable. En realidad, el reglamento era el esbozo o la primera muestra de lo que llegaría a ser la educación en manos del liberalismo moderado. Promulgado estando en el poder los doceañistas, conserva aún viejos principios del liberalismo radical, si bien es realmente significativo el tratamiento que en el texto legal se dio a la libertad de enseñanza. Puede decirse que en el reglamento de 1.821 comienza esa tendencia al pacto o a la transacción con la Iglesia en materia de enseñanza, que va a caracterizar la política de los*

¹³². Esta Academia Nacional se creaba con el fin de perfeccionar y propagar los conocimientos humanos. Por lo que respecta a su organización, era un órgano colegiado compuesto por cuarenta y ocho individuos. (Art. 108).

*moderados españoles*¹³³.

Para finalizar, cabe destacarse la incidencia de la desamortización en el desarrollo de la enseñanza pública mediante la conversión de algunos de los edificios que habían sido desamortizados en centros docentes, u otras categorías relacionadas con la instrucción pública.

Ese hecho, tan sólo venía a verificar lo que ya se había previsto por el Reglamento de instrucción pública¹³⁴. Sin embargo, esa disposición se desarrollaba por otras como la Orden de 6 de abril de 1.822, por la que se autorizaba al Gobierno para que aplicase conventos suprimidos, y algún jardín o huerto incorporados a ellos, a establecimientos de escuelas especiales u otro literario¹³⁵.

4. LIBERTAD DE IMPRENTA

Como se ha venido señalando, una de las aspiraciones de los liberales era el Derecho de libertad de imprenta sin sujeción a censura previa. No se trataba de un derecho "de nuevo cuño" en el Trienio, puesto que ya se configuró en esos términos en el texto gaditano.

Por lo que respecta a este período, se puede afirmar que el ejercicio de este

¹³³. Puellas Benitez, M. de., *Educación e ideología* ..., cit. pp. 79-80.

¹³⁴. Art. 128: "Se autoriza al Gobierno para que, oyendo a las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos respectivos, destine a Universidades y escuelas los edificios públicos que elija como más a propósito entre los pertenecientes a establecimientos o corporaciones suprimidas".

¹³⁵. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822*, ... , cit. p. 55.

derecho fue un hecho desde que Fernando VII se pronunciara a favor de la Constitución, toda vez que la Junta Provisional se estimó competente para restablecer el ejercicio de este derecho, sin necesidad de esperar a la reunión de las Cortes. Por ello, el Rey a instancias de la Junta Provisional restablecía en nuestro Derecho las disposiciones promulgadas por las Cortes de Cádiz sobre libertad de imprenta mediante la Orden de 10 de marzo de 1.820¹³⁶

Para la aplicación real del contenido de esta orden se necesitaba poner en marcha también las antiguas Juntas de Censura, eligiendo a los miembros que habían de componerlas. A tal efecto se autorizaba a la Junta Provisional para que propusiese para su nombramiento a las personas que habían de componerla¹³⁷

La reinstauración de las normas que habían aprobado las Cortes de Cádiz sobre esta materia no suponía el olvido de los abusos que se produjeron en ese periodo. Por ese motivo, junto a ese restablecimiento de la libertad de imprenta, y tan sólo dos días después, se formulaba por parte de la Junta Provisional un aviso dirigido a evitar abusos de este derecho mediante la Orden de 10 de marzo de 1.820¹³⁸. Literalmente contenía que: "*... Que sirva esta prerrogativa a la propagación de las luces y de las virtudes; pero que jamás se abuse de ella para los odios y rencores particulares...*"

Cuando se constituyeron las Cortes del Trienio diseñaron un nuevo marco jurídico para la regulación de este Derecho. Sin embargo, y antes de proceder a su desarrollo, hay que afirmar siguiendo a Fiestas que lo que hicieron esos

¹³⁶ *Gaceta Extraordinaria de Madrid del viernes 10 de marzo de 1.820*, p. 254.

¹³⁷ El restablecimiento de las Junta Suprema y Provinciales de Censura para ello se apobaba una Orden de 21 de marzo de 1.820 (*Gaceta de Madrid del martes 21 de marzo de 1.820*, p. 307).

¹³⁸ *Gaceta Extraordinaria de Madrid del domingo 17 de marzo de 1.820*, p. 266.

legisladores fue interpretar el Art. 371 de la Constitución partiendo de una diferenciación entre lo "religioso" y lo "político" e incluyendo dentro de "lo religioso" las cuestiones referentes a las Sagradas Escrituras y a los dogmas de la Religión Católica y dando cabida dentro de "lo político" a las restantes cuestiones¹³⁹.

La primera disposición promulgada en el Trienio para la regulación de la libertad de imprenta estuvo representada por el Decreto de 22 de octubre de 1.820 que aprobaba el Reglamento acerca de la libertad de imprenta¹⁴⁰. Se partía de los mismos parámetros que habían servido de bandera en la regulación de este derecho a las Cortes Gaditanas, es decir: *Todo español tenía derecho a imprimir y publicar sus pensamientos sin necesidad de censura previa, con una sólo excepción, los escritos que versaban sobre las Sagradas Escrituras y sobre los dogmas de nuestra santa religión, los cuales necesitaban licencia previa del Ordinario para su impresión*¹⁴¹.

Ahora bien, la censura previa aparecía diseñada en otros términos bien distintos a los dibujados en el desarrollo legislativo de la Constitución de Cádiz. En este Decreto se prescribía que para la licencia de publicación era necesaria una censura previa, que tenía que conocer el autor o editor, y en caso de no mostrarse conforme con ella podía contestar mediante una exposición motivada de sus argumentos para que recayera sobre la obra una segunda censura. En caso de ser negativa, el interesado podía recurrir ante la Junta de protección de libertad de imprenta. A partir de aquí, el trámite era el mismo que se señaló en el período

¹³⁹ Fiestas Loza, A., La libertad de imprenta ... , cit. p. 426.

¹⁴⁰ . *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ... , cit. pp. 234-246.*

¹⁴¹ . Así se contenía en los artículos 1 y 2 de este Reglamento.

constitucional anterior; la Junta emitía su informe que llegaba al Ordinario para "mayor ilustración", y en todo caso se pronunciaba sobre el mantenimiento o no de la censura, sólo que ahora se solucionaba la laguna legislativa mediante una conducta activa de las Cortes. Éstas conocerían del asunto para el caso concreto de que el Ordinario se hubiera negado a autorizar un escrito que tuviera el visto bueno de la Junta, puesto que ésta última pondría el asunto en manos de las Cortes para que decidieran sobre su publicación.

Esa censura previa decaía también ante un supuesto muy concreto, a nuestro juicio de gran interés. Nos referimos a los escritos efectuados en el seno de las Universidades que versaban sobre la Sagrada Escritura y sobre los dogmas de la religión católica, puesto que se puede afirmar, siempre sabiendo que se trata de una manifestación del siglo XIX, que en este caso la libertad de cátedra se imponía a la censura previa del Obispo contenida en la legislación de imprenta, y se entendía suplida por la libertad de cátedra de los doctores señalados por las propias Universidades. Esta excepción no se expresaba en este Reglamento, sino que se establecía casi un año después, mediante Orden de 9 de mayo de 1.821, que declaraba no hallarse comprendidas en el Art. 2 de la ley de libertad de imprenta las conclusiones que versan sobre la Sagrada Escritura. Pero, siempre y cuando se tratara de creaciones propias de las Universidades y hubieran sido censuradas previamente por los doctores designados por los Estatutos de dichas Universidades¹⁴².

Siguiendo con el desarrollo del Reglamento, su Título II se dedicaba a los abusos de la libertad de imprenta. Curiosamente, comenzaba su articulado señalando que se abusaba de este derecho cuando se publicaban máximas o

¹⁴² *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. p. 75

doctrinas que conspiraran de un modo directo a destruir o trastornar la religión del Estado, o la actual Constitución de la monarquía. Es decir, se protegía la religión católica en el mismo plano que la Constitución; incluso formalmente la religión aparecía consignada en el artículo anterior al que recogía la protección de la propia Constitución.

Establecidos estos dos grandes pilares, aparecían en un segundo término otros extremos dignos de protección frente a este derecho, como:

- El orden público (o tranquilidad pública, tal y como señala literalmente el Reglamento).
- La provocación tendente a la desobediencia de leyes o autoridades.
- Los escritos obscenos, o contrarios a las buenas costumbres.
- Aquellos que difamaban el buen nombre de cualquier persona o que enjuiciaban su conducta privada.

Para los liberales, este derecho suponía la capacidad de crítica y así se verificaba en este Reglamento. Una muestra de esta afirmación la encontramos de los artículos 7 y 8 de este Reglamento. Su Art. 7 mencionaba que en el supuesto de escritos difamatorios o injuriosos su autor no se eximiría de la pena, ni en aquellos casos que demostrase que lo que señalaba era cierto. Sin embargo, el artículo 8 prescribía que para aquellos casos de escritos que imputaren delitos y fueran ciertos, el autor quedaba exonerado de toda pena cuando lograra probarlo.

Las únicas calificaciones que podían recibir los artículos abusivos de la libertad de imprenta eran¹⁴³:

¹⁴³. En caso de no poderse determinar un escrito con ninguna de estas categorías se debía (continúa...)

Subversivos. Se trataba de la categoría que mayor reproche encontraba¹⁴³, y se aplicaba para con aquellos escritos que fueran en contra de:

- La Religión del Estado, y
- La Constitución de la Monarquía.

Dentro de esta categoría sorprende la no inclusión de los ataques contra el Rey. Puede interpretarse que estaban incluidos dentro de la protección de la Constitución de la Monarquía, pero lo cierto es que nuestra tradición legislativa, hasta este momento, y en momentos posteriores, incluía siempre a la persona del Rey en un lugar específico¹⁴⁴.

Sediciosos, era la calificación que recibían aquellos escritos que presentaban los siguientes contenidos:

Escritos dirigidos a excitar a la rebelión o a la perturbación de la tranquilidad pública.

¹⁴³(...continuación)

absolver tal y como señala el Reglamento. Literalmente se prescribía en el art. 18: "No se podrá usar bajo ningún pretexto de ninguna otra calificación más que de las expresadas en los artículos anteriores; y cuando los Jueces de hecho no juzgen aplicable a la obra ninguna de dichas calificaciones usarán la siguiente fórmula: *absuelto*".

¹⁴⁴ De cualquier forma, a semejanza de los grados de aplicación de las penas señalados en el Código Penal, se establecían tres grados en esta categoría: grado primero, segundo y tercero, sobre los cuales podía oscilar la calificación de subversivo.

¹⁴⁵ Sin embargo, pese a esa protección degradada, y frente al Nuevo Régimen que modificaba las atribuciones del Rey, se declaraba desde el principio que éste estaba situado en el plano que le correspondía, -al menos formalmente-. Así se verificaba mediante la Orden de 17 de julio de 1.820, para que se diera toda la notoriedad posible al Decreto de 19 de abril de 1.814, por el que se declaraba que el tratamiento de Su Majestad correspondía solamente al Rey. (*Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. p. 8).

Tras ese comportamiento genérico se recogían ciertos supuestos casuísticos bajo una calificación determinada¹⁴⁶.

Libelos infamatorios, Esta última clasificación abarcaba todo impreso que hiciera referencia a injurias a monarcas extranjeros o que excitare a los subditos a la rebelión.

Las penas que se aplicaban por la comisión de estos delitos se regulaban en el Título siguiente: De las penas correspondientes a los abusos.

Para una persona que fuera considerado culpable por un escrito subversivo en primer grado, la pena señalada era seis años de prisión¹⁴⁷, en segundo grado de cuatro años, y en tercer grado de dos. Esa pena privativa de libertad iba aparejada de privación de empleos y honores, y *curiosamente, ocupándosele las temporalidades si fuera eclesiástico*.

Los eclesiásticos pasaban de considerarse prácticamente como sujetos no calificables, a ser examinados como cualquier otro autor, y recibiendo mayores sanciones, con una específica como era la ocupación de temporalidades¹⁴⁸.

¹⁴⁶. Por ejemplo, se señalaba que el impreso en que se incitara directamente a desobedecer las leyes o Autoridades legítimas se calificaría de incitador a la desobediencia en primer grado, y aquel en que se provocara a la desobediencia con sátiras o invectivas de incitador en grado segundo. En todo caso se contenían tres grados dentro de esta categoría.

¹⁴⁷. La prisión no era encierro carcelario en un establecimiento penitenciario, sino que esa prisión acontecía en un "lugar seguro", tal y como señalaba la ley.

¹⁴⁸. Es necesario destacar la fijación que existía en este período en las Cortes y Gobiernos por ocupar los bienes de los eclesiásticos. Pero lo realmente curioso, es que la pérdida de las temporalidades pertenecientes a los eclesiásticos autores de algún hecho contrario al régimen constitucional, se convertía en una sanción constante, que iba aparejada a la pérdida de sus empleos eclesiásticos, a diferencia de los empleados civiles que solo eran
(continúa...)

Tampoco escapaban de la posible responsabilidad por abusos de este Derecho los propios Diputados¹⁴⁹. Sin embargo, éstos tampoco sufrían la ocupación de sus bienes.

Los autores de escritos sediciosos en primero, segundo y tercer grado recibían iguales penas que los subversivos¹⁵⁰. Para aquellos cuyas obras eran declaradas obscenas o contrarias a las buenas costumbres, se establecía que debían satisfacer una sanción económica¹⁵¹

¹⁴⁹(...continuación)

removidos de sus destinos. El propio Código Penal recogía como sanción añadida a conductas tipificadas de eclesiásticos la privación de sus temporalidades, -tal y como se relata en el apartado de la regulación penal-. Sin embargo, se puede traer a colación en desarrollo de esta afirmación el Art. 526, puesto que contenía expresamente: "En cualquiera caso en que un eclesiástico, secular o regular, incurra en pena de privación u ocupación de temporalidades, sufrirá, si no tuviere algunas, la pena de cuatro años de reclusión sobre las demás que le correspondan"

¹⁴⁹ Todos estaban sujetos a responsabilidad por el abuso de este derecho, incluso los Diputados, así se establecía en el Decreto de 7 de junio de 1.821, donde se contenían las reglas para el procedimiento en los delitos de los Diputados por abuso de libertad de imprenta. (*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 130-133).

¹⁵⁰ Sin embargo, se establecía un supuesto excepcional para el castigo de aquellos escritos que incitaran a la violencia. Para su tipificación, se empleaba la casuística, donde se recogía un determinado comportamiento junto a su correspondiente sanción. Entre otros, "*el autor de un escrito que incite directamente a la desobediencia de las leyes o de las Autoridades será castigado con un año de prisión; y el que provoque esa desobediencia con sátiras o invectivas pagará una multa de cincuenta ducados, y si no pudiera satisfacer tal cantidad, sufrirá un mes de prisión*"

¹⁵¹ Resulta interesante, como para calcularse el monto total de la sanción, no se tenía en cuenta el volumen de la tirada, o los ejemplares vendidos, es decir, no preocupaba cual había sido su efectiva distribución, sino que se establecía una sanción económica fija, que se determinaba por la simple multiplicación del precio de venta del impreso por la cantidad de 1.500 ejemplares. Y al igual que en el resto de la regulación de los tipos anteriores, se establecían penas privativas de libertad, pero de forma alternativa, para el supuesto que no se hiciera frente a la sanción económica.

Una de las calificaciones más interesantes era la de escritos injuriosos, puesto que del tenor literal del Reglamento parecía desprenderse que era donde los Jueces ostentaban mayor discrecionalidad, por la cual a la vista de todas las circunstancias podían señalar el grado concreto de pena previsto¹⁵².

La reincidencia afectaba por igual a todas las calificaciones, de suerte que en caso de acontecer multiplicaba por dos la pena de forma automática.

Para finalizar con el detalle de las sanciones, hay que decir que, como medida común a todos los tipos señalados, se recogía la figura del secuestro de los impresos, e incluso algo más peculiar cuando el artículo declarado en algunas de esas categorías formaba parte de una obra más amplia, puesto que era posible que el impreso siguiera funcionando, tras previamente haberse apartado o arrancado el artículo conflictivo¹⁵³.

Las personas responsables de los delitos de imprenta aparecían señaladas en el Título V. A este respecto nos encontramos, de forma principal, a tres personas. En primer lugar se establecía la responsabilidad para el autor o el editor, puesto que era necesario que estuvieran siempre localizados e identificados, quedando tales datos en manos del impresor. Este último, aparecía como responsable subsidiario en todos los casos¹⁵⁴, y debía identificarse en todas

¹⁵². Se señalaba que "Según la gravedad de las injurias, atendidas todas las circunstancias, procederán los jueces de hecho a calificar el escrito de injurioso en primero, segundo y tercer grado, ..."

¹⁵³. Literalmente se señalaba "*Además de las penas especificadas en los artículos anteriores, serán recogidos cuantos ejemplares existan por vender de las obras que declaren los Jueces comprendidas en cualquiera de las calificaciones expresadas en el título 3, pero si sólo declarasen comprendida en dicha calificación una parte del impreso, se suprimirá ésta, quedando libre y corriente el resto de la obra*".

¹⁵⁴. Se señala que era responsable en los casos en que se negara a facilitar la identidad
(continúa...)

sus publicaciones.

Para asegurar la presencia de todos esos requisitos se establecían algunas consecuencias económicas para forzar su inclusión en todo impreso.

El Título siguiente se ocupaba de precisar quien ostentaba capacidad activa para perseguir los delitos cometidos por la libertad de imprenta. Para los denominados subversivos o sediciosos, es decir, los más graves, tenían acción directa todos los españoles. Sin embargo, en todos los casos, excepto en las injurias, debía denunciar de oficio el Fiscal de imprenta, o los síndicos del Ayuntamiento, pudiendo presentar denuncia por orden del Jefe político o del Gobierno o de los propios Alcaldes Constitucionales.

Por su parte el Título VII regulaba el modo de procederse en estos juicios. El procedimiento comenzaba con el envío de la denuncia al Alcalde constitucional, quien convocaba a los jueces¹⁵⁵ para que conocieran del asunto¹⁵⁶

¹⁵⁴(...continuación)

del autor o editor, o no los conociera, para el supuesto que ignorase sus domicilios. Sin embargo, el espíritu de esta responsabilidad subsidiaria lo encontramos en la expresión literal "... para que no quede el juicio como ilusorio". Por lo que siempre que no hubiera otro responsable, vamos a hallar culpable al impresor.

¹⁵⁵. Éstos eran nombrados en el municipio, y únicamente debían ser mayores de 25 años y estar en posesión de sus derechos civiles. Su designación se producía por suerte, y en número de nueve. Los así elegidos eran citados por el Alcalde para tomarles juramento y asegurar su imparcialidad y justicia.

¹⁵⁶. Si el parecer de las dos terceras partes de los Jueces de hecho se inclinaba por la formación de causa, el Alcalde constitucional pasaba el impreso y la denuncia al Juez de Primera Instancia y, según la naturaleza de la acusación, el responsable de la publicación era aprehendido, o bien designaba un fiador o abonaba la correspondiente fianza. Una vez aprobada la correspondiente instrucción de la causa, y antes de entablarse juicio, el Alcalde había de facilitar al Juez de Primera Instancia una lista de doce jueces de hecho encargados de calificar el impreso, "sacados por suerte de entre los que quedaron insaculados en el primer sorteo"; hasta siete de estos jueces podían ser recusados por la
(continúa...)

Lo relacionado con *la Junta de protección de Libertad de Imprenta*, aparecía contenido en el Título IX. Eran siete los miembros que componían dicha Junta, y eran nombrados por las Cortes cada dos años, y obligatoriamente habían de residir en Madrid¹⁵⁷.

Por lo que respecta a las características que debían reunir estos individuos, era necesario que tuvieran cumplidos los 25 años, estar en posesión de los derechos civiles, y además, ostentar, lo que el texto reglamentario denominaba, "competente instrucción".

Por lo que respecta a las funciones que estaban encomendadas a esta Junta, hay que señalar las siguientes:

a). Proponían informes a las Cortes donde se citaban todas las dudas o problemas que se suscitaban en aplicación de la legislación sobre el derecho de libertad de imprenta.

b). Presentaban a las Cortes cualesquiera quejas de los autores en los casos

¹⁵⁶(...continuación)

parte demandada. El juicio, propiamente dicho, se celebraba a puerta abierta y comenzaba por una recapitulación a cargo del Juez letrado "para ilustración de los jueces de hecho". A continuación, éstos deliberaban en una sala contigua y procedían a calificar el impreso. Para los casos en que los Jueces de hecho hubiesen calificado el escrito en cuestión como subversivo, sedicioso o incitador a la desobediencia de las leyes en primer grado, y el Juez de Primera Instancia considerara errónea esa apreciación, se le facultaba para suspender la aplicación de la pena y obtener del Alcalde el nombramiento de otros doce Jueces de hecho que no hubieran intervenido en la formación de la causa ni en la primera calificación.

¹⁵⁷. Asimismo, también en los primeros días de su funcionamiento, las Cortes nombraban de igual forma otras tres Juntas de protección para México, Lima y Manila, subordinadas a la de Madrid.

que los Ordinarios rehusaran dar licencia para la publicación de cualquier artículo relacionado con la Religión católica.

c). Complimentaban un informe en el comienzo de cada legislatura en el que se detallaba el estado en que se hallaba este Derecho. Y, en caso de necesitar algún cambio, exponían lo que bajo su opinión debía modificarse mediante la expresa indicación de las medidas a adoptarse para remediar los abusos.

d). Examinaban las causas terminadas o en curso sobre abusos de libertad de imprenta que los Jueces les remitían de forma mensual.

e). Conferían la oportuna publicidad a las Sentencias sobre libertad de imprenta.

Toda esta regulación propia del Trienio se modificó poco antes de un año. Para tal efecto se aprobó el Decreto de 12 de febrero de 1.822, que contenía una Ley adicional a la de 22 de octubre de 1.820 sobre libertad de imprenta¹⁵⁸. Como indicaba su título,¹ se incluían algunas modificaciones a la ley vigente de imprenta.

La primera de las adiciones que contenía, hacía referencia a la laguna señalada al respecto de la persona del Rey, puesto que en la calificación de los escritos, se añadía que se trataba de: *"... escritos que debían calificarse como subversivos cuando contuvieran injurias contra la persona del Rey o contra*

¹⁵⁸. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes extraordinarias, que comprende desde el 22 de septiembre de 1.821 hasta el 14 de febrero de 1.822*. Impresa por orden de las mismas. Tomo VIII. Madrid, en la imprenta real, 1.822. pp. 265-268.

*alguno de los artículos contenidos en el texto constitucional*¹⁵⁹.

Con respecto a lo establecido sobre los artículos de la Constitución, se trataba simplemente de una precisión para no dar lugar a interpretaciones donde se especificaba que la protección a la Constitución debía entenderse, tanto para con el conjunto del texto -como se detallaba en el Reglamento citado anteriormente-, como sobre derechos o disposiciones concretas que contenía -tal y como se afirmaba en esta Ley-.

La categoría de escritos sediciosos también encontraba alguna puntualización dirigida a encuadrar aquí aquellos en que se difundieran máximas o doctrinas, o se contuvieran hechos dirigidos a excitar la rebelión o la perturbación de la tranquilidad pública¹⁶⁰.

De cualquier forma, es oportuno señalar que dentro de esa denominación tan amplia del término "escritos" se incluían los dibujos, pinturas y grabados, estando sujetos a las mismas restricciones señaladas.

¹⁵⁹. Concretamente, nos referimos al Art. 1 "Son subversivos los escritos en que se injuria la sagrada e inviolable persona del Rey, o se proclaman máximas o doctrinas que le supongan sujeto a responsabilidad. Son igualmente subversivos los escritos en que se propagan máximas o doctrinas que supongan destruidos alguno o algunos de los artículos fundamentales de nuestra constitución, o que se dirijan a destruirlos".

¹⁶⁰. Dentro de esta categoría mención específica merece destacarse lo que podríamos denominar "intento por acotar el ingenio", puesto que se entendían como escritos subversivos aquellos que provocaran con sátiras o invectivas, aunque disfrazaran su exposición con tiempos pasados u otros nombres, siempre que los jueces pudieran comprender que estaban haciendo alusión a persona o personas determinadas. Por lo que respecta a la otra gran categoría diseñada por el anterior Reglamento -libelos infamatorios-, se reseñaba que serían así catalogados los escritos en los que se vulnerase la reputación o el honor de los particulares, mediante la tacha de su conducta privada, aunque no se les designe por sus nombres, sino mediante anagramas, alegorías, o cualesquiera otros símbolos.

El segundo bloque de adiciones se dedicaba a las penas que se aplicaban contra los excesos de este Derecho. Concretamente se señalaba que se aplicaría una pena de seis meses de prisión para la excitación a la desobediencia por medio de sátiras o invectivas. Seis, cuatro y dos meses de prisión¹⁶¹ para los escritos injuriosos, además de la pecuniaria señalada en el Reglamento anterior.

Otro capítulo que se veía modificado era el referente a las personas responsables¹⁶². Y por que respecta a las personas que podían denunciar los impresos, también se prescribía alguna precisión¹⁶³.

Las normas procesales también sufrían alguna modificación en lo relativo al nombramiento de los Jueces de hecho. Ahora el Ayuntamiento nombraba una tercera parte, y la Diputación provincial las dos restantes¹⁶⁴.

¹⁶¹. Al igual que se señalaba en el Reglamento anterior, las penas de prisión no se cumplían en establecimientos penitenciarios comunes, sino que se completaban en la fortaleza o castillo más cercano.

¹⁶². A este respecto, se incluía la figura de la reimpresión, de suerte que cualquier escrito que se reimprimiese podía ser denunciado en el lugar de la reedición, siendo responsables el editor o impresor que respectivamente la hubiesen propuesto y finalmente llevada a cabo, y ello en los mismo términos que se disponía para la impresión.

¹⁶³. Concretamente se aclaraba que los promotores fiscales de los Juzgados de Primera Instancia estaban obligados a interponer denuncia siempre y cuando así se lo propusiera el Gobierno o el Jefe político de la misma, y además a continuarla en el oportuno juicio de calificación.

¹⁶⁴. Tras esta adición, se establecía que el Art. 37 de la Ley de 22 de octubre citada, quedaba en estos términos:

El Ayuntamiento de la capital de provincia nombraba una tercera parte, y la Diputación provincial las dos restantes. Una y otra elección se entiende a pluralidad absoluta de votos. La Diputación provincial hará su elección en el mes de Marzo; y verificada pasará lista de los nombrados al Ayuntamiento, para que éste practique inmediatamente la suya. El jefe político y el intendente no tendrán voto para este nombramiento en la Diputación.

Por esa sola vez los Ayuntamientos sortean de entre los ya elegidos la tercera parte que les corresponde; y verificado el sorteo pasarán lista de los que queden nombrados Jueces de hecho a las Diputaciones provinciales, para que éstas hagan desde luego su elección.

(continúa...)

Otra precisión se efectuaba para con aquellos escritos que podríamos denominar en sentido amplio "*escritos oficiales*"¹⁶⁵, toda vez que se especificaba que *los escritos oficiales no estaban sujetos a las prescripciones señaladas en estos textos legales, y sí a su legislación especial*, es decir, a la responsabilidad de los empleados públicos.

Tras haberse señalado la regulación existente sobre libertad de imprenta, y su incidencia sobre el factor religioso, nos encontramos otro punto de especial interés sobre el cual era necesaria una especial postura. Nos referimos a las listas de libros prohibidos, puesto que antes se encargaba de su elaboración la Inquisición, que ahora, como es sabido, había sido abolida. Así las cosas, fue el Gobierno quien se encargó de esa tarea. Esta función se verificó de la Orden de 14 de abril de 1.821, por la cual se recomendaba que el Gobierno procediera en uso de sus facultades a la formación de la lista de libros que no debían correr, y que tomara las medidas más enérgicas para que no circularan aquellos, ni los escritos ni estampas obscenas¹⁶⁶.

Con respecto a la forma, se ha señalado como esas listas de libros

¹⁶⁴(...continuación)

que queden nombrados Jueces de hecho a las Diputaciones provinciales, para que éstas hagan desde luego su elección.

La declaración de los jueces de hecho, en que se dice: "ha lugar o no ha lugar a la formación de la causa", se publicará de oficio en la Gaceta de Madrid, como se prevenía en la ley de 2 de octubre de 1.820, expresándose en ambos casos los nombres de los Jueces de hechos que hayan votado si o no.

¹⁶⁵. Por este concepto, no sólo se entendían los escritos emanados de cualquier organismo público, sino que también se encuadraban aquí los firmados por cualquier funcionario, siempre y cuando su contenido hiciera referencia a las funciones que ostentaba por razón de su cargo.

¹⁶⁶. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ... , cit. p. 35.*

prohibidos, ahora eran elaboradas por el Gobierno. Pero, con respecto a su contenido, se puede afirmar que no eran realizadas con tanta diligencia como lo venía haciendo la Inquisición, y ello en base a numerosos motivos. Por destacar alguno, en primer lugar, hay que decir que el Gobierno no poseía los conocimientos técnicos que ostentaba la Inquisición al respecto, y, en segundo lugar, la motivación no era la misma en un Gobierno que desamortizaba a la Iglesia y desarticulaba su sistema fiscal al tiempo que entendía a la libertad de imprenta como un instrumento de crítica¹⁶⁷ para desmontar el Antiguo Régimen, donde como es sabido la Iglesia era uno de los principales pilares.

Prueba cierta de lo anterior resultaba la Orden citada, donde literalmente se contenía que: *"... se constata la circulación de libros y escritos no sólo contrarios a la religión, sino también que corrompen las buenas costumbres y ofenden la decencia pública, y aun estampas que abren los ojos a la inocencia, y frustran y destruyen por sus cimientos la sana y religiosa educación que en*

¹⁶⁷ Esa visión de la Libertad de imprenta como capacidad de crítica encuentra una prueba cierta no sólo en el plano ideológico, sino que desde el propio Derecho se hallan ejemplos prácticos. Tal era el caso del Decreto de 21 de octubre de 1.820, sobre las reuniones de individuos para discutir en público asuntos políticos. Su Art. 2, disponía que: "Los individuos que en adelante quieran reunirse periódicamente en algún sitio público para discutir asuntos políticos, y cooperar a su recíproca ilustración, podrán hacerlo con previo conocimiento de la Autoridad superior local, la cual será responsable de los abusos, tomando al efecto las medidas que estime oportunas, sin excluir la de suspensión de las reuniones" (*Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820*, cit. pp. 229-230). Por citar algún ejemplo más, se puede traer a colación lo contenido en el propio Código Penal de 1.822. Concretamente, se determinaba como derecho de la libertad individual de los españoles. Nos referimos al Art. 242: "El que impidiere o coartare a algún español el ejercicio de la facultad legítima que tiene para hablar, escribir y hacer libremente todo aquello que no esté prohibido o se prohíba por las leyes o por legítima autoridad con arreglo a ellas, y que no ceda en perjuicio de otra persona, o que aunque ceda esté autorizado por la ley, es violador de la libertad individual, y sufrirá un arresto de dos días a dos meses. ..." (El Decreto de 8 de junio de 1.822, contenía la ley que aprobaba el Código Penal de 1.822, -*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822*, ... cit. pp. 211-381).

todas las clases del Estado desean promover las Cortes. ..."

En el Trienio, las Juntas Protectoras de la libertad de imprenta tuvieron la misma importancia que en el período de las Cortes de Cádiz. Y de igual forma, se puede afirmar que la presencia de eclesiásticos dentro de estos órganos administrativos fue constante. Muestra de ello resultaba la Orden de 13 de Mayo de 1.821, avisando el nombramiento de individuos para la Junta protectora de libertad de imprenta y juramentos de los mismos¹⁶⁸. De entre sus disposiciones, resulta de especial interés la presencia de dos eclesiásticos de entre siete miembros, que a la postre, resulta un porcentaje del 28,5 por ciento de participación de los eclesiásticos en esta Junta¹⁶⁹.

Para completar el estudio de la legislación sobre libertad de imprenta, hay que señalar, en último término, lo contenido en el Código Penal de 1.822¹⁷⁰, donde se encontraban numerosas disposiciones tipificando comportamientos contrarios a la legislación sobre libertad de imprenta¹⁷¹. En este sentido, se pueden citar, entre otros, no sólo los que concretamente se diseñaban para dispensar protección a la religión católica -señalados en su capítulo específico-,

¹⁶⁸. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 83-84.

¹⁶⁹. Por lo que respecta a su composición administrativa (personal a su servicio, sustituciones por enfermedad, el desarrollo de sus sesiones, etc ...), el Decreto de 23 de junio de 1.821, era el que contenía el Reglamento para las Juntas Protectoras de Libertad de Imprenta. (*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 181-184).

¹⁷⁰. El Decreto de 8 de junio de 1.822, contenía la ley que aprobaba el Código Penal de 1.822. -*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 211-381-.

¹⁷¹. Sobre las disposiciones al respecto de la libertad de imprenta contenidas en el Código Penal, veasé, entre otros, Fiestas Loza, A., "...", cit. pp. 457-469.

o aquellos tendentes a evitar comportamientos contrarios a las buenas costumbres¹⁷², como los contenidos en los artículos 532 a 534, sino que la regulación más importante se contenía en los artículos 592 a 604¹⁷³. Y en relación a las ofensas a particulares por medio de este derecho, deben destacarse los artículos 699 a 718¹⁷⁴.

La última disposición que se elaboró sobre libertad de imprenta tuvo lugar en los últimos momentos de la vigencia del Régimen liberal, en el mes de julio de 1.823, cuando las Cortes se congregaban en la Iglesia de San Felipe Neri. Se trató del Decreto de 14 de agosto de 1.823, por el que se efectuaban nuevas adiciones a la Ley de 22 de octubre de 1.820¹⁷⁵. Si bien, por el momento en que se aprobó, hay que afirmar que su vigencia estuvo muy limitada, o que fue prácticamente nula.

Las disposiciones que se contenían, respecto del fenómeno religioso católico, venían a reducir de forma drástica la protección que se le dispensaba. Es decir, se preceptuaba que al autor o al editor de cualquier impreso que versara sobre las Sagradas Escrituras o sobre los dogmas de la religión, y que se hubiera

¹⁷² Dentro del Código Penal, el legislador los situaba en la Parte Primera "De los Delitos contra la sociedad", Título VII "De los Delitos contra las buenas costumbres" concretamente su Capítulo Primero "De las palabras y acciones obscenas en sitios públicos; y de la edición, venta y distribución de escritos, pinturas y estampas de la misma clase".

¹⁷³ Se encontraban ubicados en el Código Penal en su Parte Primera "De los Delitos contra la sociedad", en el Título IX "De los Delitos y culpas de los impresores, libreros y otras personas en el abuso de la libertad de imprenta", en su Capítulo Único.

¹⁷⁴ Estos artículos se contenían dentro de la Parte Segunda "De los Delitos contra los particulares", Título II "De los delitos contra la honra, fama y tranquilidad de las personas", Capítulo Primero "De las calumnias, libelos infamatorios, injurias y revelación de secretos confiados".

¹⁷⁵ El texto de este Decreto no se encuentra ni en la Gaceta de Madrid, ni en la Colección Legislativa de España, puede consultarse en A.C., Leg. 130, nº 53.

publicado sin licencia previa, no se le impondría otro castigo que una multa económica de quince a treinta duros, independientemente de la calificación o sanciones que correspondieran en consonancia con la calificación del Jurado. Y para los casos de reincidencia se aplicaba lo establecido en el Código Penal.

Asimismo, se contenían otras disposiciones que modificaban entre otros extremos: responsabilidad de autores y editores, aspectos procesales, etc

Ciertamente, tras verificar periódicos de la época como el Restaurador u otros títulos, se puede observar como bajo este derecho se encaminaron verdaderos ataques contra todo el Nuevo Régimen. La religión no escapaba a ellos, como le ocurría a la propia Constitución, o también al propio sistema político.

Por lo que respecta a las colonias españolas, esta libertad de imprenta facilitada por Cádiz, y después por el Trienio Constitucional, significó, además de los efectos señalados en la península e islas adyacentes, un terreno abonado para el uso indiscriminado de ese derecho por parte de los partidarios de la independencia de las colonias españolas¹⁷⁶.

Para finalizar, hay que afirmar que la libertad de imprenta tuvo un efecto, que podríamos denominar boomerang, puesto que no sólo afectó a la Iglesia, sino que se volvió en contra del propio sistema constitucional¹⁷⁷.

¹⁷⁶. En este sentido se pronuncia, entre otros, Ferrer Muñoz, M. *La Constitución ...*, cit. p. 136-140. En sus afirmaciones contiene una carta privada dirigida al Obispo de Guadalajara, Ruiz de Cabañas (México), donde se abundaba en las razones que le habían inducido a abolir la libertad de imprenta y se afirmaba en la convicción de que había sido instrumentalizada por los partidarios de la Independencia.

¹⁷⁷. Eguizabal, J. E. de., *Apuntes para una historia de la legislación española sobre* (continúa...)

5. EL ESTATUTO DEL CLERO

El apoyo incondicional de la Iglesia al Antiguo Régimen iba a pasarle factura dentro del corto Trienio, de suerte que la estrecha unión con Fernando VII servía de fácil justificación para multitud de reformas.

En lo que respecta al estatuto del clero encontramos un esfuerzo, tanto por parte de las Cortes, como por parte del Gobierno para establecer numerosas reformas, que encontraron una frontal oposición por parte de la Iglesia, quien no estaba dispuesta a perder su estatus sin presentar una fuerte resistencia. Por ello, las recuperadas tensiones entre España y la Santa Sede durante el Trienio constitucional culminarían en enero de 1823 con la expulsión del suelo español de Monseñor Giustiniandi, Nuncio de Su Santidad ante el Gobierno español. Este incidente, derivado del rechazo por la Secretaría de Estado del embajador designado por España para su representación diplomática en Roma, no fue sino el término de un proceso que había generado serias tensiones entre el Estado y la Iglesia en España durante estos escasos cuatro años¹⁷⁸

Se puede afirmar que, en este sector, junto a la desamortización y la financiación, fue donde las reformas efectuadas desarrollaron las medidas adoptadas por las Cortes de Cádiz, pero ahora, sin cortapisas ni complejos, de suerte que los intereses de la Iglesia se vieron gravemente dañados.

¹⁷⁷ (...continuación)

imprensa desde el año 1.480 al presente Madrid, 1.979. Recoge la exposición de las sucesivas disposiciones legales aprobadas reguladoras de este Derecho. Como apéndice incluye, bien en su totalidad, o bien parcialmente, no sólo las citas en este capítulo, sino las expresadas en el presente trabajo.

¹⁷⁸ Sobre la expulsión del Nuncio de España, véase, entre otros, Martí Gilabert, F., *Iglesia y Estado en el reinado* ..., cit. pp. 125-129.

5.1 PROMOCIÓN DE LOS ECLESIAÍSTICOS MÁS CERCANOS AL RÉGIMEN.

Ya se ha señalado como en un primer momento se buscó el apoyo de la Iglesia para sustentar el Nuevo Régimen en España. Sin embargo, pronto se verificó como no era posible, aunque ello no fue óbice para que durante todo el Trienio se promocionara a los eclesiásticos más cercanos al pensamiento liberal.

Sobre este punto, se deben reseñar algunas disposiciones interesantes, como el Decreto de 29 de junio de 1.821 sobre reducción del diezmo y primicias¹⁷⁹. El estudio de este Decreto no debe quedarse única y exclusivamente restringido al epígrafe citado de la financiación de la Iglesia, puesto que, en nuestra opinión, va mucho más allá, y realmente se estaba patrocinando al elemento de la Iglesia que más cerca estaba del pensamiento liberal. Se trataba de los curas párrocos, en detrimento de las altas dignidades. Mientras que los Obispos tan sólo aparecían representados con un voto, -el que tenía el Prelado diocesano, o la persona que lo sustituyera- los curas párrocos o beneficiados con curas de almas ostentaban seis, pero además el régimen de elección de éstos imposibilitaba que el Prelado diocesano pudiera intervenir, puesto que se elegían por sorteo entre todos los que existían en las diócesis¹⁸⁰.

¹⁷⁹. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 245-249. (Citado más extensamente en el apartado correspondiente a Financiación).

¹⁸⁰. Decreto de 29 de junio de 1.821 por el que se aportaban las reglas para la formación de la Junta diocesana. Su artículo 1. señalaba que: "... y poniendo en una bolsa los nombres de todos los Párrocos del Obispado, incluso para este efecto los de territorio vere nullius, comprendidos en su demarcación, o que para efectos semejantes se le haya agregado, sacarán por suerte nueve curas". (*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo* (continúa...))

5.2 OBLIGACIONES POLÍTICAS DEL CLERO.

La disposición que desató los enfrentamientos con la Iglesia fue el Decreto de 24 de abril de 1.820 mediante el cual se prescribía la enseñanza al pueblo de la Constitución, "por personas dignas en su respeto y consideración", para que conocieran sus derechos y obligaciones¹⁸¹. A este respecto se contenían algunas disposiciones:

1º Los prelados diocesanos debían procurar, por una parte, que los curas párrocos o los miembros del clero que desarrollaban aquella labor explicaran a sus feligreses los domingos y días festivos la Constitución política de la Nación, como una parte más obligatoria de las ceremonias religiosas o, para ser más exactos, de los sermones. Pero esa explicación se puede calificar como adoctrinamiento, toda vez que se trataba de una explicación donde se tenían que poner de manifiesto *las ventajas que acarrearía a todas las clases del Estado*. Por otra parte, *ese adoctrinamiento* les obligaba a erigirse en paladines del texto constitucional, al consignarse la obligación de rebatir las acusaciones que se produjeran por los que intentaran desacreditarla.

2º. También había de enseñarse en todas las escuelas de primeras letras por alguno de los maestros.

¹⁸⁰(...continuación)

período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ..., cit. pp. 249-250).

¹⁸¹. *Gaceta Extraordinaria de Madrid del miércoles 26 de abril de 1.820*, pp. 469-470.

3°. En las Universidades la docencia se impartiría por uno de los catedráticos de leyes; en los seminarios conciliares, por el catedrático de filosofía moral.

4°. En los colegios en general, públicos o privados, e incluso en conventos, por la persona que se estimara más cualificada¹⁸².

5°. Se controlaba efectivamente el comienzo de las enseñanzas de la Constitución, puesto que se prescribía que cuando fueran a comenzar las explicaciones en todos esos establecimientos señalados, debía advertirse por parte de los encargados superiores a los Jefes políticos¹⁸³.

Pese a que el deseo del poder civil era contar con la Iglesia para la difusión y enseñanza de la Constitución al pueblo, el comportamiento de los eclesiásticos fue absolutamente contrario a tal afán. Tal y como se verificaba de la realidad de la época constatada en la literatura humorística, abundaban ejemplos de curas y frailes que *calentaban los cascos* de las personas a las que atendían espiritualmente con críticas viscerales al régimen constitucional¹⁸⁴.

La mayoría de los distintos obispos se manifestaron abiertamente en contra

¹⁸². En caso de centros privados religiosos -la gran mayoría- era el prelado quien debía designar a la persona más capacitada para ello.

¹⁸³. Esos jefes políticos también daban cuenta de forma mensual a sus respectivos superiores, hasta llegar la información sobre el cumplimiento al propio Ministerio de Gobernación.

¹⁸⁴. Ferrer Muñoz, M. *La Constitución ...*, cit. p. 89. Señala que como ocurría en toda parodia, se hallaban en esas composiciones indicios de verdad aunque, al caricaturizar los defectos que denunciaban, la carga de subjetividad deformaba aquella misma realidad.

de este Decreto¹⁸⁵.

Y ese comportamiento divergente no sólo se limitó a exponer desde el púlpito máximas contrarias al régimen, sino que en ocasiones llegó a proponer el enfrentamiento armado contra el sistema constitucional desde los pulpitos. Una buena prueba de la existencia de esos hechos se puede extraer de la Orden de 30 de abril de 1.821, por la que se adoptaban varias medidas para reprimir y castigar a los eclesiásticos que abusando de su sagrado ministerio intentaban sumir a la nación en una guerra civil¹⁸⁶. En esta Orden se contenían disposiciones tendentes a evitar esos comportamientos de miembros del clero, donde la figura de los Obispos se constituía como presupuesto esencial.

Se partía de la existencia de grupos facciosos contrarios al Nuevo Régimen, y de la participación en ellos de diversos eclesiásticos. Esto inevitablemente daba lugar a comportamientos represivos de sus superiores en las distintas Diócesis.

¹⁸⁵ Así ha sido puesto de relieve por numerosos autores, entre otros, véase, Martí Gilabert, F., *Iglesia y Estado en el reinado ...*, cit. pp. 64-66. Pone como ejemplo al Obispo de Orihuela, quien se negó a explicar la Constitución en iglesias y colegios alegando que suponía la confusión de los planos religioso y temporal. Mas clara quizá era la pastoral emitida desde su destierro en Roma -tras haber sido expulsado de España y haberse ocupado sus temporalidades-, puesto que contenía que: "Obligar a los curas a que explicasen la Constitución política, es darles una misión nueva, es transformarlos de ministros de la palabra de Dios, en ministros de las palabras de los hombres; es convertir la cátedra del Espíritu Santo en cátedra de Derecho Público; es ocupar el tiempo destinado por la Iglesia para la instrucción de los fieles en las leyes divinas y máximas de fe, en instruir a los mismos en las leyes políticas ordenadas por la potestad civil para el Gobierno y felicidad temporales, finalmente, imponerles un peso ajeno a su ministerio, y en muchos casos también sobre sus fuerzas"

También señala como fueron expulsados los Obispos de Tarragona, Oviedo, León y Tarazona, Cádiz, Ceuta, Málaga, Barcelona, Pamplona, Urgel y Solsona, etc... De suerte que al finalizar el trienio existían 15 sedes vacantes.

¹⁸⁶ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 60-63

Por ello, además de la obligación de los Obispos de informar a las Cortes, por parte del Gobierno se les solicitaba informes detallados sobre:

1. Las medidas canónicas y públicas que se habían adoptado contra esos eclesiásticos.

2. Lo acordado para su corrección y contención.

3. El detalle de las medidas acordadas para con los feligreses, y las Diócesis.

Tras esa exigencia de una conducta activa de los Obispos, y para el caso de actitudes permisivas o al menos omisivas, se establecía su estrecha responsabilidad de cara a las Cortes.

Una vez acreditada esa existencia de grupos facciosos encabezados por eclesiásticos, encontramos también la clásica preocupación de los liberales: *los sermones desde los púlpitos*. Literalmente se disponía que:

"Que respecto a constar que algunos eclesiásticos esparcen especies contrarias a las leyes y decisiones de las Cortes y del Rey, y a la obediencia a las Reales órdenes de S.M. dirigidas a su cumplimiento, poniendo en riesgo de seducción a los fieles sencillos, y siendo muy estrecha obligación de los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos y de los Gobernadores eclesiásticos el promover en sus súbditos la obediencia a las legítimas potestades y la paz y tranquilidad pública, exija de todos ellos el Gobierno que en el preciso término de ocho días circulen por sus Diócesis un breve edicto pastoral, exhortando a sus diocesanos a que las obedezcan y cumplan por estar a ello obligados en conciencia: y de cuya

exhortación enviarán copia inmediatamente a la Secretaría del Despacho por donde se les comuniqué esta orden: y no haciéndolo así en este término perentorio, proceda el Gobierno a lo que haya lugar según sus facultades¹⁸⁷"

Los Obispos eran responsables directos de cualesquiera excesos que contra la Constitución efectuaran, no sólo los eclesiásticos que dependían de su dirección, sino también los feligreses, y ello en base a la obligación que habían contraído de defender la Constitución por el hecho de haberla jurado.

En resumen, las Cortes, no sólo desde el convencimiento, sino también mediante el uso de la fuerza, es decir, por todos los medios que tenían a su alcance, intentaban nuevamente con esta importante Orden conseguir el apoyo de los eclesiásticos de todas las jerarquías.

Esta depuración de personas contrarias al régimen constitucional, no sólo alcanzó a los eclesiásticos, sino que se puede afirmar que abarcó a todas las clases del Estado. Pero, por lo que respecta a los eclesiásticos presuntamente contrarios al sistema constitucional, se establecía la posibilidad de acordar el cambio de sus destinos. Así se determinaba mediante el Decreto de 1 de noviembre de 1822, por el que se facultaba al Gobierno para trasladar de un punto a otro, remover y separar a empleados eclesiásticos, civiles y militares y suspender a los individuos de los Ayuntamientos¹⁸⁸. En su virtud, se ponía en manos del Gobierno la posibilidad de trasladar, remover y separar a los eclesiásticos y otros empleados públicos (civiles, militares e individuos de

¹⁸⁷ Se trataba del Art. 4.

¹⁸⁸ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes Extraordinarias, que comprende desde 3 de octubre de 1822 hasta 19 de febrero de 1823, ...*, cit. pp. 17-19.

ayuntamientos). Antes de exponer su contenido, cabe advertir que, tal y como se señalará más adelante, en este período ya se conceptuaba a los eclesiásticos como una parte más de los funcionarios públicos.

Entrando ya en sus disposiciones, hay que decir que se recogían, en primer lugar, los poderes que se conferían al Gobierno para tal fin, y concretamente, se determinaba que podían ser trasladados de sus diócesis a otras los párrocos y demás eclesiásticos que habían sido separados de su ministerio, y también para con aquellos a quienes se les habían recogido sus licencias. Ese traslado sólo tenía una limitación: *no podía ser efectuado fuera de España*. Pero no quedaba ahí la potestad del Gobierno, sino que se extendía a aquellos que gozaran de un sueldo o pensión del erario público, sin posibilidad de resistirse, ni aún en el caso de renunciar a sus emolumentos.

Al igual que se ha resaltado en el capítulo anterior, ahora se advertía a los Prelados diocesanos que a la hora de la formación de las ternas para los curatos vacantes debían tener presente, además de las censuras y cualidades de los opositores, la simpatía por el régimen constitucional de los designados en las ternas¹⁸⁹. Así se establecía en el Decreto de 26 de abril de 1.822, para que los M.RR. Arzobispos y RR. Obispos no expidieran dimisorias, ni confieran órdenes mayores hasta el arreglo del clero, sino a las personas que se expresan; y en la provisión y supresión de curatos se arreglen a lo que se les previene¹⁹⁰.

La situación de enfrentamiento entre los Obispos y el poder civil alcanzaba grandes cotas, tal y como se desprendía de la Orden de 6 de mayo de 1.822, por

¹⁸⁹. Literalmente señalaba: "... lo resuelto por las Cortes en el Art. 9 del decreto de 30 de abril de 1.821." (Art. 3).

¹⁹⁰. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 95-97.

la que se autorizaba al Gobierno para extrañar del reino y ocupar las temporalidades de los RR. Obispos cuando éstos se desvíen de los deberes de su ministerio¹⁹¹.

Las duras disposiciones que separaban a los Obispos y al resto de eclesiásticos de sus ministerios fueron acompañadas de medidas económicas que, de alguna manera, aseguraban su subsistencia. Así se determinaba en el Decreto de 1 de Noviembre de 1.822 por el que se dejaba a la prudencia del Gobierno el señalamiento de alimentos y pensiones a los Prelados y eclesiásticos separados de sus diócesis o del ejercicio de su ministerio: las sillas de los obispos extrañados del reino se declaran vacantes, y se toman otras medidas contra los facciosos y empleados que no contribuyan a su exterminio¹⁹².

Por un lado, tal y como señalaba el título del Decreto, se dejaba en manos del Gobierno la fijación del "quantum" económico para el sustento de esas personas, con la excepción de aquellos que habían abandonado el país.

Por otro, se habilitaba al Consejo de Estado para que procediese a realizar las propuestas oportunas para ocupar las sillas vacantes de los Obispos que habían sido extrañados del reino¹⁹³.

¹⁹¹. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 120-121.

¹⁹². *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes Extraordinarias, que comprende desde 3 de octubre de 1.822 hasta 19 de febrero de 1.823, ...*, cit. pp. 16-17.

¹⁹³. Este Decreto contenía también otras prescripciones diseñadas para hacer frente a los revolucionarios partidarios del fin del Régimen Constitucional. Estas contenían varias advertencias, como la relacionada con la pérdida de las tres cuartas partes del sueldo, para aquellos que cobraran del erario público, en el supuesto concreto de recibirse en su localidad ataques de los denominados facciosos, y no proceder a su rechazo y
(continúa...)

5.3 ARREGLO DEL CLERO

El arreglo del clero fue afrontado en el Trienio desde diferentes campos de actuación que ya habían sido esbozados en el anterior período constitucional. Sin embargo, en este capítulo se puede afirmar que su principal preocupación se dirigía hacia la reducción del número de eclesiásticos, junto con la mencionada desamortización de sus bienes.

Por lo que respectaba al número de eclesiásticos, en primer lugar, y recogiendo la herencia de las Cortes de Cádiz, se partía de la existencia de un problema todavía no solucionado: los secularizados durante el período 1.812-14, puesto que la respuesta aportada por Fernando VII a su vuelta a España no había dejado contento a nadie.

Ésta cuestión fue abordada por la Junta Provisional mediante el Decreto de 21 de abril de 1.820¹⁹⁴ que modificaba profundamente las disposiciones anteriores, y que contenía los siguientes extremos:

1º. Se declaraban válidas las secularizaciones efectuadas en la anterior época constitucional.

2º. Todos aquellos que estuvieran tramitando su secularización en aquella época continuaban con ella, siempre que así lo desearan.

¹⁹³(...continuación)

persecución. O también la advertencia para con las autoridades de los pueblos de su obligación de dar aviso circunstanciado en caso de encontrarse dichos facciosos en sus localidades.

¹⁹⁴. *Gaceta extraordinaria de Madrid del martes 25 de abril de 1.820*. p. 461.

3º. Que no se pusiera ningún obstáculo a los que desearan secularizarse.

4º. Se les permitía a los de esta clase opositar a los cuartos y beneficios eclesiásticos vacantes.

Mediante numerosas disposiciones se establecieron las máximas facilidades para que aquellos miembros del clero que lo desearan pudieran acceder a la secularización. Un caso muy concreto lo encontramos en la Orden de 31 de marzo de 1.821, mandando que se llevase a efecto el cumplimiento de la Ley de 25 de octubre de 1.820 sobre secularización de regulares¹⁹⁵. Para ello, se establecían facilidades básicamente en dos aspectos; el primero, en lo relacionado con los motivos para solicitar la secularización: *"... se debía levantar el rigor de las antiguas leyes de secularización, y exigir tan sólo del regular pretendiente la manifestación de tener justos motivos y causas internas para solicitarla, sin expresarlas, pero uniendo sus preces a las generales impuestas por S.M. ..."*. Y en segundo lugar, en lo relativo al sustento económico, toda vez que se establecía el derecho a disfrutar de dotación estatal desde el momento en que se abandonase el convento.

Esa política diseñada por parte de las Cortes y el Gobierno, cuyo fin era reducir el número de eclesiásticos, encontró también disposiciones tendentes a buscar en la Santa Sede comportamientos que no dejaran vacías de contenido las disposiciones señaladas. Concretamente se puede citar la Orden de 8 de junio de 1.821 por la que se disponía que el Gobierno pusiera todos los medios más eficaces a fin de conseguir que Su Santidad conceda las prórrogas de tiempo para

¹⁹⁵. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 19-22.

las secularizaciones de los regulares¹⁹⁶. Se pretendía que se concedieran poderes suficientes al Nuncio para que se aceleraran los trámites necesarios para la secularización de los Regulares.

Esas medidas intentando agilizar los trámites canónicos en las secularizaciones iban acompañadas de protección económica para los mismos. En realidad ese sustento fue una preocupación de las Cortes y del Gobierno, como se verifica solamente con el gran número de disposiciones que se aprobaron en ese sentido. Entre otras, se puede citar, la Orden de 11 de junio de 1.821 para que la asignación hecha a cada monje sobre el crédito público se tuviera por congrua suficiente para su secularización¹⁹⁷.

Entre otras disposiciones que por su interés deben señalarse están, por un lado, el tan conocido y tan dañino Decreto para con los intereses de la Iglesia - señalado en el apartado de la desamortización- de 1 de octubre de 1.820, por el que se acordaba la supresión de monacales y reforma de Regulares¹⁹⁸, que no desaprovechaba la ocasión, y contenía disposiciones tendentes a restringir el número de eclesiásticos, puesto que expresaba la prohibición de dar hábitos y profesar novicios. Por otro lado, se puede citar la Orden de 8 de abril de 1.821, por la que se mandaba que se suspendiera la provisión de beneficios y capellanías que no tuvieran aneja cura de almas, interin se acordase lo conveniente sobre el

¹⁹⁶. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 137-138.

¹⁹⁷. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. p. 160.

¹⁹⁸. *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 155-159.

plan general del clero¹⁹⁹.

Otra medida, también tendente a incentivar las secularizaciones, o al menos que se aprobó como consecuencia de esa actuación citada, fue el derecho de los secularizados a poseer bienes, aunque siempre a contar desde la fecha de secularización, y nunca de forma retroactiva²⁰⁰.

Pero la disposición más importante, en este período, para procederse al arreglo del clero era el Decreto de 29 de junio de 1.822, de Medidas y facultades que se daban al Gobierno para mejorar el estado político de la Nación²⁰¹. Mediante éste, las Cortes concedían al Gobierno una capacidad de obrar amplia en los campos de la política nacional que más urgente necesitaban de su promoción. De entre ellos, se pueden señalar la mejora de la instrucción pública, la realización de obras públicas, la milicia nacional. Pero lo más interesante de cara a la presente investigación, consistía en la autorización que el Gobierno recibía de las Cortes para proceder al arreglo del clero. Esa delegación de las Cortes no se efectuaba sin límites, sino que presentaba unas bases de actuación muy concretas que debía seguir el Gobierno:

1. Se encargaba al Gobierno que usara enérgicamente de toda la amplitud de sus facultades con los Obispos y Prelados que, por su desobediencia o

¹⁹⁹ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. p. 31.

²⁰⁰ Se dispuso mediante el Decreto de 26 de junio de 1.822, por el que se aprobaba la Ley que habilitaba a todos los regulares secularizados de uno y otro sexo para adquirir bienes de cualquier clase. (*Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 456-457).

²⁰¹ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822, ...*, cit. pp. 556-559.

desafección al actual sistema político, se resistieran y pusieran obstáculos a su consolidación.

2. Asimismo, debía excitar y obligar a los RR. Prelados diocesanos a que inmediatamente publicaran pastorales, en que clara y terminantemente manifestaran la conformidad de la Constitución política de la monarquía con la religión católica, apostólica y romana y sus ventajas, apremiándoles a ello hasta con el extrañamiento y ocupación de sus temporalidades, conforme a las leyes de España, si se resistieren, o lo hiciesen en términos poco satisfactorios.

3. Autorizaba al Gobierno para que trasladase a otras Iglesias a los Prebendados de las Catedrales en donde lo crea conveniente.

4. Se encomendaba también al Gobierno que hiciera ver eficazmente a los Obispos y Prelados la necesidad de que recogieran las licencias de aquellos eclesiásticos de sus respectivas diócesis que, con su conducta política, inspirasen desafección a dicho sistema e influyeran siniestramente en la opinión pública, sin conceder el uso de las funciones de su ministerio sino a aquellos eclesiásticos de cuya conducta puedan responder.

5. Se le confiaba también al Gobierno que efectuara las gestiones oportunas para que los Jefes políticos y Diputaciones provinciales le informaran mensualmente con total exactitud de la conducta sospechosa de los eclesiásticos de sus provincias, para que con este conocimiento dispusiera que por los Obispos y Prelados se separase del ministerio de sus parroquias a los Curas propios que inspirasen desconfianza, dejándoles lo necesario para su sustento; y removiendo a los ecónomos o mutuales que estuvieran en el mismo caso, cuyos destinos se proveerían en otros eclesiásticos de conducta patriótica. Asimismo esa obligación de informar se extendía también a la conducta política que observaran en los

demás empleados.

6. Llegaban las Cortes a autorizar al Gobierno para que tomase las medidas oportunas para impedir que los Prelados diocesanos, Curas párrocos, Vicarios y superiores de los conventos permitieran que en sus respectivas iglesias se predicara sermón alguno sin su expresa licencia y conocimiento de sus doctrinas, siendo responsables del abuso que se cometa en el desempeño de este ministerio. E igual autorización se otorgaba para lo relacionado con las misiones que se verificaran en los sitios públicos.

7. Para la averiguación de la existencia de grupos facciosos se habilitaba al Gobierno para que se preguntara a los Prelados de las Diócesis ¿en qué parte de sus circunscripciones se habían levantado?, y para el caso de tratarse de algún eclesiástico, ¿qué medidas habrían de tomarse contra él?, exigiendo, en todo caso, que la respuesta fuera documentada y a vuelta de correo, procediendo desde luego contra aquellos Prelados, tanto diocesanos como regulares locales que no hubieran cumplido con el decreto de 30 de abril de 1821.

8. Se recomendaba al Gobierno el puntual pago de las dotaciones señaladas a los ex-monacales y demás secularizados, a cuyo fin debía emplear todos sus esfuerzos, y si fuera necesaria, podía solicitar la cooperación de las Cortes.

9. Se ordenaba que el Gobierno dispusiera lo conveniente para que en todo convento o monasterio, cualquiera que fuera su situación, en donde el Jefe político por informes gubernativos averiguase que hallaban abrigo los facciosos, o que se mantenían comunicaciones sospechosas, debía quedar suprimido y se distribuirían los religiosos en las casas de otras provincias a elección del Jefe político.

Tal y como se observa de lo anteriormente citado, se trataba de una autorización muy amplia de las Cortes para con el Gobierno, de forma que se le permitía un gran campo de actuación en todos los extremos señalados. Esa autorización no sólo contenía aspectos relacionados con el arreglo del clero, sino que también expresaba medidas en autodefensa del sistema político.

El arreglo del clero necesitaba también de una reforma de sus demarcaciones territoriales, toda vez que no se correspondía con la división civil. Aunque este extremo no llegó a ser afrontado en el Trienio, sí que reformaron la distribución provincial civil del territorio español, tal y como se detallaba en el Decreto de 27 de enero de 1.822, por el que se procedía a una nueva división del territorio español²⁰². Mediante este Decreto se desarrollaba el Art. 2 de la Constitución. Sin embargo, esta nueva división del territorio español se puede entender como la incidencia del Nuevo Régimen dentro de nuestras fronteras provinciales. Se trataba de aportar una nueva división territorial al país en la que se detallaban 52 provincias, y tras señalarse su población se atribuían un número de diputados por cada una de ellas. Dicho número oscilaba de 1 (Vitoria) a 5 (Barcelona).

5.4 RESIDENCIA DEL CLERO

Como había ocurrido en otros períodos anteriores, la residencia en el lugar donde se hallaba sito el beneficio eclesiástico disfrutado, volvía a recordarse por los legisladores del Trienio mediante el Decreto de 28 de junio de 1.822, sobre la obligación de residir personalmente los beneficiados eclesiásticos excepto en

²⁰². *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes extraordinarias, que comprende desde el 22 de septiembre de 1.821 hasta el 14 de febrero de 1.822, ...*, cit. pp. 186-246.

Art. 97²⁰⁶.

Este artículo 97 fue desarrollado por numerosas disposiciones. De entre ellas se puede destacar, en primer lugar, por la claridad de su título, la Orden de 6 de abril de 1.821, por la que se consideraba al Episcopado como un cargo público de nombramiento del Gobierno, y por lo mismo comprendido en el espíritu del Art. 97 de la Constitución²⁰⁷. En su virtud, se impedía que los Obispos accedieran a las Cortes cuando hubieran sido elegidos en su provincia.

El citado contenido pronto fue más desarrollado mediante el Decreto de 26 de junio de 1.821, por el que se declaraba que no podían ser nombrados Diputados a Cortes los eclesiásticos que se expresaban²⁰⁸. Se prohibía que fueran nombrados Diputados los Arzobispos, Obispos, Prelados con jurisdicción cuasi episcopal, Gobernadores de los Obispos, Provisores, Vicarios generales y los Jueces eclesiásticos y Fiscales que para el ejercicio de sus funciones necesitaban ser nombrados por el Gobierno.

Estas disposiciones restrictivas emanadas en desarrollo del citado artículo constitucional, que en principio afectaba a los Obispos y otras jerarquías eclesiásticas, pronto se extendería a todos los eclesiásticos, tal y como se puede observar en la Orden de 12 de junio de 1.821, por la que se declaraba que los párrocos que vivían fuera del recinto de sus parroquias no podían dar ni recibir

²⁰⁶ Art. 97: "Ningún empleado público nombrado por el Gobierno podrá ser elegido diputado de Cortes por la provincia en que ejerce su cargo"

²⁰⁷ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 29-30.

²⁰⁸ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 196-197.

votos en las Juntas electorales de las que sean pastores²⁰⁹.

Del conjunto de las disposiciones citadas, se pueden obtener algunas interesantes conclusiones. En primer lugar, la conceptualización de los eclesiásticos como empleados civiles. Y, en segundo lugar, el hecho cierto de las restricciones diseñadas por los liberales para impedir a los eclesiásticos que pudieran llegar a ser Diputados.

Aunque estos obstáculos suponían importantes limitaciones, no se anulaba el derecho a ser elegido Diputado, puesto que se les permitía ser sujetos pasivos (elegibles) en las Juntas electorales donde tuvieran su vecindad y residencia. Y, por contra, se les privaba del derecho activo y pasivo en las provincias donde ejercieran como párrocos. En un estudio más detallado se puede afirmar que esas cautelas, en la práctica, suponían importantes trabas a la presencia de eclesiásticos en las Cortes.

Para una mayor ilustración en la configuración general de este derecho, hay que señalar que la libertad electoral estaba amparada en el Código Penal²¹⁰. Más concretamente, se dispensaba una doble protección. Por un lado, encontramos la existencia de tipos que sancionaban comportamientos pasivos de los sujetos encargados de celebrar elecciones, esto es, Alcaldes y Jefes políticos²¹¹. Por otro, se sancionaban conductas activas contrarias a la celebración

²⁰⁹. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ...*, cit. pp. 161-162.

²¹⁰. En su Parte Primera, denominada "De los delitos contra la sociedad" en su Título primero "De los delitos contra la Constitución y Orden Político de la Monarquía", en su Capítulo Primero, "De los delitos contra la libertad de la Nación".

²¹¹. La tipificación se efectuaba en los Artículos 200, 201 y 203, donde se recogían las
(continúa...)

de elecciones, cuya pena podría llegar a la muerte²¹².

7. JURAMENTO

El juramento de la Constitución, tras el triunfo de los liberales, se realizó en los mismos términos en que se efectuó en 1.812, puesto que así lo prescribía la Junta Provisional en el Decreto de 16 de marzo de 1.820²¹³.

Entendían los liberales que la prestación del juramento era la mejor manera de instaurar de nuevo la Constitución gaditana, de suerte que se aprobó un Decreto de 26 de marzo de 1.820, por el cual se consideraba indigno de ser español a todo aquel que no jurara sin reservas la Constitución²¹⁴. Mediante este decreto se tomaba una medida de fuerza en contra de los partidarios del sistema constitucional, puesto que se contenía expresamente que todo español que se resistiera a jurar la Constitución, o que al hacerlo usara reservas contrarias al espíritu de la misma, resultaba indigno de considerarse español. Esa afirmación

²¹² (...)continuación)

sanciones de pérdida de sus oficios junto a una multa económica. A modo de ejemplo, se puede enunciar el Art. 200: "Los alcaldes de los pueblos que no hicieren celebrar en ellos las juntas electorales de parroquia en los días señalados por los artículos 36 y 37 de la Constitución, avisando a los vecinos con una semana de antelación, serán privados de sus oficios, y pagarán una multa de cuarenta a cien duros"

²¹³. Se trata del Art. 204: "Cualquier persona que impidiere la celebración de unas u otras juntas electorales, o embarazase su objeto, o coarte con amenazas la libertad de los electores, sufrirán la pena de privación de empleo, sueldos y honores que obtenga, y de seis a diez años de presidio. Si para ello usare de fuerza con armas o de alguna connotación popular, será condenada a muerte"

²¹⁴. Nos referimos al Decreto de 16 de marzo de 1.820, que prescribía que se procediera de nuevo al juramento de la Constitución de Cádiz en toda la Nación. (*Gaceta Extraordinaria de Madrid del viernes 17 de marzo de 1.820* p. 287).

²¹⁵. *Gaceta de Madrid del jueves de 30 de marzo de 1.820*, p. 367.

no era una expresión vacía, sino que implicaba que los opositores que se negaran a aceptar sin reservas la Constitución perderían todos los honores, empleos, y serían expulsados de España. Y para el caso de los eclesiásticos, como se ha señalado en otras disposiciones citadas, llevaba aparejada también la sanción específica de la pérdida de todos sus bienes.

El Rey, una vez convocadas las Cortes, juró la Constitución ante ellas, tal y como se contenía en la Orden de 9 de julio de 1.820, para que se anunciara a toda la Nación el solemne juramento prestado por el Rey ante las Cortes, prevenido por la Constitución política de la monarquía²¹⁵. Literalmente se señalaba:

"Excmo. Sr. A las once menos cuarto de la mañana de este día ha prestado S.M. ante las Cortes en el salón de sus sesiones el juramento solemne prevenido por la Constitución; habiendo concurrido a tan augusto acto la Reina y los Infantes con todos los Jefes de Palacio y real servidumbre, los Secretarios del despacho, el Cuerpo Diplomático extranjero, Consejo de Estado, Tribunal Supremo de Justicia, Generales de mar y tierra, y un inmenso pueblo, que arrebatado de gozo prorrumpió en los más tiernos sentimientos de amor y respeto al Rey en el seno de la representación nacional; todo lo que contribuyó a la majestad y júbilo de tan venturoso día. Lo comunicamos a V.E., para que pueda circularse inmediatamente a toda la Nación, no menos interesada que ansiosa de este fausto suceso ...".

²¹⁵. *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. p. 2.

El ansiado juramento del Rey había sido recibido por las Cortes liberales, y por ello no sólo se aprobó la Orden anterior para darle la oportuna publicidad, sino que se hizo un esfuerzo para intentar perpetuar dicho juramento²¹⁶

Otros juramentos que presentaban interés en este período eran:

1. El juramento prestado por la Milicia Nacional: Mediante el Decreto de 31 de agosto de 1.820 se aprobaba el Reglamento provisional para la milicia nacional local²¹⁷. Como es sabido, la milicia nacional era y sería una institución importante para los liberales, pero ya desde su creación se observaban rasgos confesionales, no ya sólo en el juramento en sí, sino en la forma de llevarse a cabo, puesto que para proceder a los juramentos²¹⁸ el primer domingo se pasaba en formación a la Iglesia para asistir a la misa mayor, después de la cual el cura párroco les hacía una exhortación en la que les recordaba sus obligaciones para con la patria, con mención específica a la importancia de defender su independencia y libertad civil, haciéndoles ver que se resumía en la defensa de la Constitución. Tras ese discurso, la autoridad política superior del pueblo tomaba juramento a la milicia de la mano de su comandante, mediante la

²¹⁶. En este sentido nos encontramos la Orden de 8 de septiembre de 1.820, por la que se mandaba que en el dosel del trono del salón de Cortes y sobre la puerta principal de éste, se inscribieran palabras que perpetuaran la memoria del juramento del Rey. (*Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. p. 96). O también la Orden de 11 de septiembre de 1.820, para que la academia de S. Fernando publicara un programa, sobre cual ofreciera un premio al artista español que presentara el mejor pensamiento para perpetuar la memoria del juramento de S.M. en el seno del Congreso. (*Ibidem*, p. 99).

²¹⁷ *Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 64-79.

²¹⁸ Concretamente, eran los artículos 38 a 41 los que contenían lo relacionado con la expresión del juramento.

siguiente fórmula:

¿Juráis a Dios defender con las armas que la patria pone en vuestras manos la Constitución política de la monarquía, obedecer sin excusa ni dilación a vuestros jefes en cualquier acto del servicio nacional, y no abandonar jamás el puesto que se os confie?

La respuesta era muy breve, y era emitida por todos de forma simultánea: ¡Sí juro!.

Tras ello, el cura párroco recobraba de nuevo protagonismo, puesto que tomaba la palabra y decía:

¡Si así lo hicieréis, Dios os lo premie y si no, os lo demande!, a lo que apostillaba el Comandante ¡Y seréis responsables de vuestros actos conforme a las leyes!.

2. El juramento del ejército: Su regulación básica se encontraba en el Decreto de 29 de octubre de 1.821, que contenía la fórmula del juramento que había de prestarse por la tropa a las Banderas y Estandartes²¹⁹. A tal efecto se establecía la siguiente fórmula:

¿Juráis a Dios y prometeis a la Nación y al Rey guardar y defender la Constitución de la Monarquía española, seguir con valor y constancia las banderas nacionales, defenderlas hasta perder vuestras vidas, y no abandonar al que os estuviera mandando en acción de guerra o disposición para ella?

A esa pregunta, respondía la tropa en voz alta:

²¹⁹. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes extraordinarias, que comprende desde el 22 de septiembre de 1.821 hasta el 14 de febrero de 1.822, ...*, cit. pp. 5-6.

¡Sí juramos!.

Tomando después la palabra el Capellán afirmaba también en voz alta:

¡Si así lo hicieréis , Dios os los ayude; y si no, os lo demande!.

Se trae a colación este Decreto porque, a diferencia del periodo anterior, presentaba menor carga confesional que sus predecesores. Sin embargo, el acatamiento del orden constitucional mediante la formulación del juramento continuaba teniendo una importancia enorme. Sólo así es posible explicarnos su defensa mediante el Código Penal, donde se establecía que cualquier funcionario, de forma previa a la toma de posesión de su cargo debía jurar la Constitución, señalándose, en caso contrario, la pena de pérdida de sus empleos y un arresto²²⁰

Para finalizar con el desarrollo del juramento en este periodo, debemos afirmar que la mayoría de los miembros de la Iglesia, al igual que el monarca, se vieron obligados a jurar la Constitución. Y señalamos que fue la mayoría, puesto que como se ha relatado, dentro de la Iglesia existían sectores liberales que se mostraban a favor del Nuevo Régimen²²¹.

²²⁰ Estos hechos aparecían consignados en el Art. 501 del Código Penal. Su ubicación se encontraba en la Parte Primera "De los delitos contra la sociedad", en su Título VI "De los delitos y culpas de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos", en su Capítulo VIII " De los funcionarios públicos que anticipan o prolongan indebidamente sus funciones, o ejercen las que no les corresponden" Y su expresión literal era: "El funcionario público de cualquier clase que empezare a ejercer sus funciones antes de haber prestado el juramento prescrito respectivamente por la Constitución, y los demás a que esté obligado por las leyes y reglamentos de su ramo, perderá el empleo o cargo, y sufrirá un arresto de quince días a tres meses"

Por ello, se debe, a nuestro juicio, atemperar la afirmación escrita por Lorente Sariñena, M., *El juramento ...*, cit. p. 623. : *La Iglesia en el Trienio se sintió, como el monarca, obligada a jurar y explicar la Constitución haciendo uso de ceremonias religiosas.*

8. EL CÓDIGO PENAL DE 1.822: LA PROTECCIÓN PENAL DE LA RELIGIÓN CATÓLICA, DE LA IGLESIA Y DE LOS ECLESIASTICOS.

Como cuestión previa, al análisis del Código Penal, hay que detenerse en una situación novedosa que se planteó en nuestro Derecho con la abolición de la Inquisición en relación con el delito de herejía, puesto que, dicha supresión no llevó consigo la desaparición de este delito. Y así se señalaba expresamente en su artículo IV²²², al prescribirse que: *"Todo español tiene acción para acusar del delito de herejía ante el Tribunal eclesiástico, ..."*, además se contenía que en este supuesto el fiscal siempre haría de acusador. Por ello, y como consecuencia natural se volvía a aplicar la Ley II, Título XXVI, Partida VII, puesto que habilitaba a los Obispos y sus Vicarios para conocer de las causas de fe.

Tras lo anterior, hay que afirmar que, se continuó prestando una gran protección a la religión, pero con diferencias muy substanciales con respecto al momento anterior a la aprobación de este Decreto -el de la abolición de la Inquisición-, puesto que los jueces eclesiásticos necesitaban el apoyo concreto de los jueces ordinarios, si bien no para todos los casos, tal y como se disponía en el artículo VI: *"Si la acusación fuere sobre delito que deba ser castigado con pena corporal, y el acusado fuere lego, el juez eclesiástico pasará testimonio del sumario al Juez respectivo para su arresto, y éste le tendrá a disposición del Juez eclesiástico para las demás diligencias hasta la conclusión de la causa. ..."*. Por otra parte los militares no gozaban de fuero para estas causas, y para los eclesiásticos de cualquier tipo (regular o regular), era el Juez eclesiástico quien procedía al arresto.

²²². Se trata del Art. IV contenido en el Decreto citado que establecía la abolición de la Inquisición en España.

En todo caso, el Juez eclesiástico se limitaba a proponer la pena que correspondiera conforme a Derecho, y era siempre el juez civil quien imponía la pena, a la vista del expediente tramitado por el eclesiástico.

Tras este breve comentario previo, hay que adentrarse en el análisis del primer Código Penal español, que nacía de la mano de los liberales y en desarrollo de la Constitución de 1.812. En virtud del Decreto de 8 de junio de 1.822, se promulgaba la Ley que aprobaba el Código Penal de 1.822²²³.

Tal y como ha señalado Morillas, a pesar de la influencia de las ideas de la Revolución Francesa y de la Enciclopedia, el Código Penal recogía las ideas contenidas en el Código Penal francés²²⁴.

Las notas principales que definían este cuerpo legal eran su extensión²²⁵, minuciosidad y la ampliación de los tipos penales a cuestiones meramente civiles o mercantiles²²⁶, junto a un sistema punitivo muy severo propio de la época de su

²²³ *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822*. Impresa por orden de las mismas. Tomo IX. Madrid, en la imprenta real. 1.822. pp. 211-381.

²²⁴ Siguiendo lo manifestado por Morillas Cueva, L., *Los delitos contra la libertad religiosa*. Granada. 1.977. pp. 27-35, hay que afirmar que el Código recogía las ideas de *Filangieri* quien consideraba los delitos contra la religión como la infracción de los deberes de los hombres frente a la religión del Estado, y no de los deberes de los hombres para con Dios. También las de *Bentham*, desde su visión utilitarista, donde el Estado encontraba en la religión fuerza para castigar los delitos y al tiempo fortalecer la virtud, es decir, es una fuerza que ayuda en la consecución de fines sociales. Y Beccaria al respecto de la separación de las penas y pecados. (A mayor abundamiento, entre otros, veasé el análisis de la obra de este autor efectuada por Tomás y Valiente, F., *Notas al libro de BECCARIA "De los delitos y las penas"*, Madrid, 1.969).

²²⁵ Este Código Penal contenía 816 artículos.

²²⁶ Se trataba de un Código Penal muy minucioso, puesto que pretendía regular muchos aspectos que, objetivamente, no encontraban razón de ser dentro de él, y sí en alguna (continúa...)

elaboración.

Como quiera que el objeto de la presente investigación se ciñe al estudio de la regulación del fenómeno religioso nos encontramos con una cualidad que debe ser destacada por encima de las demás: la férrea confesionalidad que protege a la única religión permitida: *la Religión Católica*²²⁷. Esta confesionalidad a ultranza venía a desarrollar, de forma principal, el Art. 12 de la Constitución, así como otras muchas disposiciones anteriormente señaladas.

En este sentido, ha escrito Morillas²²⁸ que *"En contra de su inicial carácter abierto y progresista, los liberales de Cádiz fueron muy moderados en lo concerniente a su relación con la Iglesia"*. En apoyo de esta afirmación, trae

²²⁶(...continuación)

otra disposición. Como ejemplo de esta afirmación se puede señalar, entre otros, el Art. 481 del Código Penal, que prescribía que los curas párrocos (además de otras personalidades), que abiertamente, o por medio de actos simulados, o por persona interpuesta se dedicaran al comercio de cualquier clase de mercancías, dentro del distrito donde ejercieran sus funciones, perderían su empleo. La única salvedad que se expresaba era el comercio de los productos procedentes de sus haciendas propias. En este mismo sentido se puede citar también el Art. 491 que contenía la obligación de no abandonar sus destinos.

Esta calificación ha sido señalada por Antón Oneca, J., Historia del Código Penal de 1.822, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*. Madrid, 1.965. p. 273.

²²⁷. Como nota curiosa, que nos puede ayudar a entender algunos tipos a lo largo de esta exposición del Código Penal de 1.822, cabe destacarse cual era la visión del principio "indubio pro reo", y de la presunción de inocencia, puesto que se partía de una concepción dogmática, que hoy, no sólo nos resultaría contraria a nuestra Constitución, sino incluso a los principios más simples de la lógica. Nos referimos al Art.1 : *"Comete delito el que libre y voluntariamente y con malicia hace u omite lo que la ley prohíbe o manda bajo alguna pena. En toda infracción libre de la ley se entenderá haber voluntad y malicia, mientras que el infractor no pruebe o no se resulte claramente lo contrario"*.

²²⁸. Morillas Cueva, L. *Los delitos contra la libertad religiosa ...*, cit. p. 107 y 110.

a colación lo escrito por Carr²²⁹, *"eran muy conscientes de los peligros de un ataque a la posición de la Iglesia en una Asamblea en la que el clero constituía el grupo principal; veían que su mayoría menguaba de modo alarmante en cuanto se tocaban cuestiones eclesiásticas. Cualquiera que fuesen sus convicciones íntimas, los liberales estaban dispuestos a mantener el catolicismo afianzado como religión única en España, a considerar delito la herejía, y a permitir la censura episcopal de las obras religiosas"*²³⁰. Sin embargo, estas afirmaciones deben ser matizadas, puesto que no fueron efectuadas al amparo del contexto del Trienio Liberal, sino del nacimiento del texto de 1.812, y como es sabido, el Código Penal se aprobó en 1.822. En ese año, las Cortes del Trienio ya habían realizado multitud de reformas en el status de la Iglesia y el clero, (valga recordar la propia ley de monacales, que sale adelante, incluso con la objeción de conciencia del propio monarca). Pero hay un dato que no puede pasarse por alto. Nos referimos a las medidas relatadas en el apartado de legislación electoral para apartar de las Cortes a los eclesiásticos (Art. 97 de la Constitución y su desarrollo señalado). Tras haber señalado lo anterior, no se puede afirmar que los liberales del Trienio hubieran sido moderados con respecto a su relación con la Iglesia.

A nuestro juicio, resulta más cierto afirmar que la confesionalidad del Código Penal responde a la del texto constitucional y a todas las normas que lo desarrollaban. Baste recordar lo señalado al comienzo de este capítulo, donde los liberales del Trienio buscaban el apoyo de la Iglesia para con la Constitución, (Decreto de la explicación y enseñanza de la Constitución al pueblo en la iglesias). Bien es cierto que esa Iglesia necesitaba reformas, pero aún así, que España era católica no era puesto en duda por los liberales del Trienio. Incluso

²²⁹ Carr, R., *España 1.808-1.839*. Barcelona 1.970, p. 123

²³⁰ Esta afirmación de Carr, R., *Ibidem*, p. 123, se sitúa bajo el título "La oposición conservadora y el regreso de Fernando VII. 1.813-1.814. Con lo que extenderla al año 1.822, tras dos años de vigencia del Trienio Liberal, a nuestro juicio, no resulta acertado.

los más progresistas, que entendían la necesidad de reformas radicales en la Iglesia católica española, no propugnaban la libertad religiosa. En apoyo de estas afirmaciones, baste señalar el capítulo de la Constitución de 1.837, donde tiene lugar el primer proyecto de ley sobre tolerancia religiosa, que simplemente se quedó en proyecto.

En razón de ello, se partía de una premisa previa: Los delitos contra la religión se asimilaban a los de "lesa majestad", y los que atentaban directamente contra ella estaban penados con la muerte. De cualquier forma, unido a esa defensa a ultranza de la Religión católica, y precisamente por los deseos de protección del Nuevo Régimen, vamos a encontrar la tipificación de comportamientos de eclesiásticos contrarios al sistema constitucional desde dos puntos concretos; uno, desde su equiparación con los funcionarios civiles; y dos, por su calidad específica de ministros de la Iglesia.

Esta doble vertiente es consecuencia de la propia política del Nuevo Régimen con respecto al fenómeno religioso católico: búsqueda de apoyo para su causa, y al tiempo, su reforma profunda.

Las afirmaciones señaladas se apoyan en el análisis de los diferentes tipos penales que en este Código Penal regulan el fenómeno religioso católico. Sin embargo, para abordar su estudio se deben desarrollar los siguientes extremos:

8.1 NUEVA REGULACIÓN DEL FUERO ECLESIAÍSTICO.

Respecto del fuero de los eclesiásticos se produjo una modificación profunda, puesto que, como es sabido, bajo el Antiguo Régimen disfrutaban de la excepción del fuero, de suerte que se sometían a los propios Tribunales

eclesiásticos en detrimento de los Juzgados y Tribunales del Estado²³¹.

Ese privilegio del fuero, antes de la aprobación del Nuevo Código Penal, ya había sido limitado tan sólo a los delitos que no llevaban aparejada pena "corporis afflictiva". Nos referimos al Decreto de 26 de septiembre de 1.820, por el que se declaraban desaforados y sujetos a la jurisdicción ordinaria todos los Eclesiásticos seculares o regulares por el hecho mismo de cometer algún delito que merezca pena "corporis afflictiva"²³².

Esa disposición citada era anterior a la aprobación del Código Penal. Sin embargo, su espíritu restrictivo encontraba su continuación en lo dispuesto en el Art. 183 de este cuerpo legal²³³, donde se operaba una limitación importante de

²³¹. Ese privilegio de fuero se enunciaba en el Código Penal de 1.822, concretamente en el Art. 28: "A ningún delito, y por ningunas circunstancias, excepto en los casos reservados a los fueros eclesiástico y militar, se aplicarán en España ..."

²³². El fin del privilegio se establecía en los siguientes términos: "Cuando un eclesiástico secular o regular cometa alguno de los delitos expresados, el juez ordinario secular competente debe proceder por sí sólo a la prisión del reo, y a la sustanciación y determinación de la causa con arreglo a la Constitución y a las leyes, sin necesidad de auxilio ni cooperación alguna de autoridad eclesiástica (Art. 3). (*Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820, ...*, cit. pp. 141-142).

Por lo que respecta a estas penas *corporis afflictiva*, venían reguladas en el Código Penal en su Art. 28, bajo la expresión *Penas Corporales*: "... Penas corporales. Primera. La de muerte. Segunda. La de trabajos forzados. Tercera. La de deportación. Cuarta. La de destierro o extrañamiento perpetuo del territorio español. Quinta. La de obras públicas. Sexta. La de presidio. Séptima. La de reclusión en una casa de trabajo. Octava. La de ver ejecutar una Sentencia de muerte. Novena. La prisión en una fortaleza. Décima. La de confinamiento en un pueblo o distrito determinado. Undécima. La de destierro perpetuo o temporal de un pueblo o distrito determinado. ..."

²³³. Art. 183: "Los eclesiásticos que cometan alguna de las culpas o delitos comprendidos en este código, y en los sobredichos reglamentos y ordenanzas particulares, serán siempre juzgados como los legos por los jueces y tribunales civiles; pero todas las demás faltas, culpas y delitos en que por razón de su estado incurran contra la disciplina eclesiástica, se reservan a la autoridad y jurisdicción de los prelados respectivos, para que conozcan (continúa...)"

este fuero, de suerte que el privilegio del fuero se reducía a los delitos y faltas que se cometieran en contra de la disciplina eclesiástica, quedando así sujetos, prácticamente como cualquier ciudadano, a la acción de los Juzgados y Tribunales españoles.

8.2 PROTECCIÓN PENAL DE LA RELIGIÓN CATÓLICA Y DE LOS ECLESIASTICOS.

Este Código Penal nacía al amparo de la Constitución de Cádiz, donde la Religión católica no sólo era la de los españoles, sino también la del propio Estado. Esta confesionalidad a ultranza de su Art. 12 y otras disposiciones aprobadas en su desarrollo, significaba que el propio Estado se confesaba católico, apostólico y romano. Por ello, el Código Penal de este momento no podía olvidar una especial protección penal de la religión, de suerte que los delitos contra la Religión católica eran considerados de "lesa magestad".

Esa protección penal para con la Iglesia, aunque en una primera lectura del índice de los Títulos y Capítulos de este Código puede pensarse que se concentraba en un capítulo específico situado en su Parte primera, "De los delitos contra la sociedad", Título Primero "De los delitos contra la Constitución y el orden político de la Monarquía", Capítulo III "De los delitos contra la religión del

²³³(...continuación)

se reservan a la autoridad y jurisdicción de los prelados respectivos, para que conozcan con arreglo a los canones y al código de procedimiento; sin que en ningún caso puedan hacerlo ex informata conscientia, ni dejar de arreglarse a lo que la Constitución y las leyes prescriben o prescribieren en defensa de la libertad y de los demás derechos legítimos de todos los españoles".

Estado", concretamente los Artículos 227 a 241²³⁴. Sin embargo, hay que afirmar que si bien aquí se encontraba la tipificación de los comportamientos más significativos contrarios a la Religión católica, la inclusión de tipos a tal efecto en el Código se produce de forma difusa, puesto que en otros capítulos existían otros artículos dedicados al mismo fin, e incluso, como ha resaltado Morillas, *la regulación contenida en ese capítulo señalado era bastante confusa. La titulación del capítulo que significó un relativo avance, peca de imprecisa y carente de propiedad en cuanto en ella se contienen delitos de religión, de culto, contra la Religión y especies ajenas a cualquiera de estos epígrafes*²³⁵.

De cara a su exposición se debe comenzar con los comportamientos comprendidos en ese Capítulo III:

1). Conspiraciones para establecer otra religión distinta, o bien para que se dejara de profesar en España la religión católica, apostólica y romana²³⁶

La sanción penal que recogía el tipo era la máxima de las contenidas en este Código Penal: la de muerte.

2). Propagación de doctrinas contrarias a la Religión que tuvieran tendencia directa a destruir o trastornar la Religión del Estado²³⁷

²³⁴ El contenido de estos artículos puede observarse no sólo en el texto del Código Penal. Ha sido transcrito por varios autores que han estudiado en monografías los delitos contra la libertad religiosa, entre otros, vease Morillas Cueva, L., *Los delitos contra ...*, cit. pp. 106-109. Pérez-Madrid, F., *La tutela penal del factor religioso en el Derecho español*, Pamplona, 1.995, pp. 58-60.

²³⁵ Morillas Cuevas, L., *Los delitos contra la libertad religiosa ...*, cit. p. 106.

²³⁶ Art. 227 del Código Penal.

²³⁷ Art. 229 del Código Penal.

La sanción penal que se señalaba para este tipo era la misma que recibían los comportamientos dirigidos a destruir o corromper la propia Constitución.

3). Los ataques a la Religión católica aparecían también penalizados cuando faltaba esa cualidad específica del tipo anterior: "la tendencia directa a destruir o trastornar la religión del Estado". Nos referimos a los supuestos donde, de palabra o por escrito, se enseñaban doctrinas opuestas a alguno de los dogmas de la religión católica, y además se persistía en ellas después de haber sido declaradas contrarias a la Religión por medio de las autoridades eclesiásticas competentes.

En cuanto a la sanción penal, llama la atención la sustanciosa rebaja del tipo, para cuando estos hechos eran cometidos por extranjeros. Toda vez que, cuando eran llevados a cabo por españoles, la sanción señalada era la de reclusión de uno a tres años, y después quedaba sometido a vigilancia estrecha de la autoridad. Pero si por el contrario, el autor material no era un español, la pena se rebajaba sustancialmente a una reclusión de cuatro a dieciocho meses, aunque cumplida la pena, era extrañado de España para siempre²³⁸.

4). La libertad de imprenta, como se ha señalado en este capítulo, también la utilizó el Código penal para sancionar algunos excesos contrarios a la Religión católica. Se trataba de los siguientes:

a). Cuando en materia de religión, independientemente de la calificación que tuviera el escrito, no se hubiera observado la necesaria censura previa establecida tanto por la Constitución como por la legislación en desarrollo.

²³⁸. El espíritu de esta diferenciación hay que relacionarlo con lo señalado en el capítulo de la Constitución de Cádiz al respecto de las cartas de naturaleza y del ciudadano, (el citado Decreto de 13 de abril de 1.813).

La represión de estos comportamientos contenía principalmente la pérdida de los ejemplares y multa, o de forma sustitutoria para caso de impago, el arresto de veinte días a tres meses²³⁹.

b). Los impresos publicados en el extranjero que, habiendo sido prohibidos por el Gobierno, se vendían o distribuían en España²⁴⁰

Para estos supuestos se prescribía igual sanción que la relatada anteriormente²⁴¹

c). Estas cautelas penales para evitar ataques contra la religión por medio de la imprenta llegaban incluso a la tipificación de la tenencia de libros prohibidos por particulares, siempre que éstos conociesen tal calificación.

La pena señalada se restringía a una leve multa económica y a la destrucción del libro, o al menos de su parte prohibida²⁴²

5). Se entendía también por delito el hecho de apostatar de la Religión católica, cuando era cometido por un ciudadano español.

En este caso se prescribía como consecuencia penal, no sólo la pérdida de todos los honores, sueldos y destinos, sino que su autor dejaba de considerarse

²³⁹. Se trataba del Art. 230 del Código Penal.

²⁴⁰. Desaparecida la Inquisición se quiso aprovechar también la confección de un texto penal acorde con la Constitución para recoger en él aquellos supuestos que trataban de burlar las leyes españolas sobre imprenta, puesto que en España tan sólo se distribuían y vendían, eludiendo así los requisitos necesarios señalados en este capítulo.

²⁴¹ Art. 231 del Código Penal.

²⁴² Art. 232 del Código Penal.

español.

Dentro de este tipo se contenía la posibilidad de volver nuevamente al seno de la Iglesia católica, pero siempre voluntariamente. En ese supuesto, recuperaba sus honores y consideración de ciudadano español. Sin embargo, para recuperar sus sueldos y empleos, debía autorizarlo el propio Gobierno²⁴³.

6). La blasfemia contra Dios, la Virgen o los Santos aparecía tasada bajo la distinción de pública o privada. Para la valoración de este último extremo se acudía a lo contenido en la regulación de los delitos de injurias y calumnias.

Con respecto a la pena señalada, hay que distinguir tres variantes: la primera, las blasfemias públicas que se sancionaba con prisión o reclusión de quince días a tres meses; la segunda, las blasfemias privadas que se reprimían con arresto de ocho a cuarenta días; y un supuesto cualificado por la personalidad del autor, cuando era autor material algún funcionario público o eclesiástico secular o regular, y además la blasfemia se producía en el ejercicio de sus funciones. En ese caso la pena se multiplicaba por dos²⁴⁴.

7). Los actos dolosos de escarnio o ultraje contra los objetos destinados al culto y en los lugares destinados a su ejercicio, mediante palabras, acciones o gestos.

El castigo previsto consistía en reclusión o prisión de quince días a cuatro meses. Con un agravante especial reservado para los eclesiásticos seculares o regulares o demás funcionarios públicos, puesto que en caso de ser autores alguno

²⁴³ Art. 233 del Código Penal.

²⁴⁴. Se trataba del Art. 234 del Código Penal.

de estos sujetos la pena se multiplicaba por dos²⁴⁵

8). Los mismos actos señalados anteriormente también se sancionaban como delito cuando no acontecían dentro de los lugares de culto. Nos referimos a los supuestos de vulneraciones por medio de pinturas, estampas, relieves u otras manufacturas que se expusieran al público, vendieran, o se distribuyeran de cualquier forma.

La pena era la misma que la del apartado anterior²⁴⁶.

9). Actos de menoscabo o destrucción de objetos destinados al culto²⁴⁷

La pena señalada coincidía con la preceptuada en el apartado anterior²⁴⁸

10). Comportamientos tendentes a herir, maltratar de obra, ultrajar o injuriar a los ministros de culto cuando se hallaban ejerciendo sus funciones.

La pena que correspondía a estos comportamientos, en cuanto delito especial contra los ministros de culto, se correspondía con una multa de cinco a cuarenta duros. Después se aplicaban las reglas comunes para sancionar los

²⁴⁵ Se trataba del Art. 235 del Código Penal.

²⁴⁶ Estos hechos también se recogían en el mismo Art. 235 del Código Penal, aunque realmente existen diferencias entre ambos tipos, por lo que hubiera sido deseable que se hubiera dedicado un artículo concreto para estos hechos.

²⁴⁷ La redacción literal del Art. 236 señalaba "... derribare, rompiere, mutilare o destruyere alguno de los objetos destinados al culto público". La utilización de esos términos hacía referencia a todos los objetos destinados al culto, pero el uso de esas palabras parece darnos a entender que se buscaba la protección de esculturas, y cualesquiera otras obras de arte que también existían en las Iglesias.

²⁴⁸ Art. 236 del Código Penal.

atentados contra la salud en caso de ser agresiones físicas, o las señaladas para proteger el honor, fama y tranquilidad de las personas²⁴⁹. Además, en tanto y cuanto los ministros de culto podían ser funcionarios públicos, se observaban también las reglas aportadas por el Código Penal para sancionar los atentados contra los funcionarios públicos cuando procedían como tales²⁵⁰.

Con todo ello, se puede señalar que para determinar la pena que correspondía a este tipo de acciones entraban en concurso varios tipos penales, por lo que su determinación era posible únicamente atendiendo a cada caso concreto, y donde los Jueces y Tribunales recibían un gran margen de actuación para su resolución mediante este concurso de más de tres tipos²⁵¹.

11). El ejercicio público de la religión también estaba protegido, de suerte que se contemplaba la posibilidad de que una función religiosa, bien celebrada en el templo, o bien fuera de éste, pudiera ser impedida, retrasada, retardada o turbada mediante alguna reunión tumultuaria, alboroto o desacato, o cualquier otro desorden.

Los autores de estos hechos eran arrestados y conducidos inmediatamente a la presencia del Juez, y sufrían una sanción compuesta de multa de cinco a setenta duros, junto con un arresto de ocho días a cuatro meses, sin olvidar que

²⁴⁹. El tipo de este Art. 327 del Código Penal, se remitía a la Parte Segunda de este Código, concretamente a los artículos 605 a 698 (Delitos contra las personas), y a los artículos 699 a 722 (Delitos contra la honra, fama y tranquilidad de las personas).

²⁵⁰. Se remitía a la Parte Primera de este Código, concretamente a los artículos 326 a 337 (De los atentados contra las autoridades establecidas, o contra los funcionarios públicos cuando procedan como tales, y de los que les usurpan o impiden en libre ejercicio de sus funciones, o les compelen en ellas con fuerza y amenaza).

²⁵¹. Art. 237 del Código Penal.

en caso de graves desórdenes podían entrar en juego otros tipos penales²⁵².

12). El hurto o robo, aunque aparecía tipificado en los artículos que regulaban esos delitos, en este capítulo encontraba un tipo cualificado, por el hecho de recaer sobre objetos religiosos, entendiendo por éstos, no sólo aquéllos que se dedicaban al culto, sino también los de mera ornamentación.

Como tipo de hurto y robo cualificados, se establecía la aplicación de la pena máxima establecida para los tipos comunes, con la posibilidad de aumentar en un tercio dicho máximo, en función del "grado del delito"²⁵³.

13). La existencia de la confesionalidad obligaba al Estado a proteger la doctrina católica, sancionando los comportamientos contrarios a esa verdadera enseñanza de la Iglesia católica. Por este motivo, se disponía que si un eclesiástico regular o secular predicaba dogmas contrarios a los Evangelios, prácticas supersticiosas, profecías o cualquier otra doctrina reprochable, eran las autoridades locales las encargadas de denunciarle ante el Prelado. Si éste último no adoptaba las oportunas medidas, las autoridades civiles podían impedir de forma cautelar que dicho eclesiástico continuara con su enseñanza.

La sanción de este comportamiento se dejaba en manos de los obispos conforme al Derecho Canónico²⁵⁴.

²⁵². Art. 238 del Código Penal.

²⁵³. Art. 239 del Código Penal.

²⁵⁴ De alguna manera, podemos contemplar en este artículo 241 del Código Penal una doble protección (civil y canónica) de la doctrina cristiana frente a las sectas, o incluso contra simples interpretaciones de la doctrina católica distintas a las manifestadas por la autoridad eclesiástica. Sin embargo, esa doble protección dejaba la sanción en manos de la propia Iglesia católica, toda vez que el poder civil tan sólo podía acordar medidas cautelares, tal y como lo demuestra la falta de señalamiento de pena dentro de este (continúa...)

La protección de la religión católica denominada "difusa", ocasionaba que algunos de esos comportamientos recogidos en el Capítulo III señalado entraran en concurso con otros hechos tipificados fuera de esa parte analizada del Código. Este era el caso de los supuestos relatados en los apartados 6), 7), 8), 10), y 11), puesto que en la regulación de los delitos contra las buenas costumbres²⁵⁵ se tipificaban comportamientos que podían coincidir con los señalados. En este sentido se pueden citar los siguientes:

1). Los que dentro de las iglesias, o en cualquier acto religioso profirieran escandalosamente palabras torpes y deshonestas.

La sanción determinada consistía en arresto de quince a cuarenta días, duplicándose cuando para ello se hubiera usado de acciones indecentes²⁵⁶.

2). También se tipificaban actos contrarios a la Religión católica o a los eclesiásticos cometidos en otros lugares públicos, como teatros, calles, plazas, paseos, o cualquier otros.

Como represión a esos hechos se determinaba un arresto de ocho a veinte días, con igual incremento para supuestos indecentes.

²⁵⁴(...continuación)

cautelares, tal y como lo demuestra la falta de señalamiento de pena dentro de este artículo, junto a la remisión de tal decisión a favor de los respectivos Obispos.

²⁵⁵ Dentro del Código Penal, el legislador los situaba en la Parte Primera "De los Delitos contra la sociedad", Título VII "De los Delitos contra las buenas costumbres", concretamente su Capítulo Primero "De las palabras y acciones obscenas en sitios públicos; y de la edición, venta y distribución de escritos, pinturas y estampas de la misma clase".

²⁵⁶. Art. 527 del Código Penal.

Dentro de ese tipo se contenía otro cualificado, que se aplicaba cuando esos delitos se cometían por los propios actores en los lugares de representación, elevándose la pena al mismo arresto, pero de uno a tres meses, con una multa de veinte a setenta duros, junto con la prohibición específica de "no poder volver a representar o ejecutar sus suertes o habilidades" durante un año²⁵⁷.

En ambos supuestos, los autores podían ser apartados del lugar público y puestos a disposición judicial, quedando en su derecho los agraviados, en caso de existir, de ejercer las acciones por injurias y calumnias²⁵⁸.

Tras toda esta regulación especificada, hay que señalar que aunque la totalidad de eclesiásticos se consideraban funcionarios públicos, algunos tenían además una especial protección penal²⁵⁹, de suerte que para éstos operaban otras disposiciones que, por una parte, incrementaban la protección enunciada, y, por otra, les imponían obligaciones.

Entre otros extremos relacionados con la protección que por su consideración como funcionarios se les dispensaba, podemos destacar lo contenido en la Parte Primera "De los delitos contra la sociedad", Capítulo Primero "De los delitos contra la Constitución y Orden Político de la Monarquía",

²⁵⁷. También en el Art. 527 del Código Penal.

²⁵⁸ Artículos 529 y 530 respectivamente.

²⁵⁹ El Código Penal nos aportaba un dato de especial interés, que ya ha sido apuntado en la presente investigación. Nos referimos a la consideración de los eclesiásticos como funcionarios. Sin embargo, la especial protección penal para con los eclesiásticos, por su condición de funcionarios, se limitaba únicamente a: "... los prelados y cuantos ejerzan jurisdicción eclesiástica, los que ejerzan cura de almas, o cualquier otra función pública por razón de dignidad, cargo o comisión eclesiástica que obtengan renta, sueldo o emolumento para ello ... ". Pero siempre y cuando se cometieran los delitos " en el ejercicio de sus funciones ..." (Ambas referencias se contenían en el Art. 135 del Código).

Capítulo VI "De los atentados contra las autoridades establecidas, o contra los funcionarios públicos cuando proceden como tales, y de los que usurpan o impiden el libre ejercicio de sus funciones, o les compelen en ellas con fuerza o amenazas". Artículos 326 a 337.

En este Capítulo se recogían los siguientes tipos:

1). Atentados con la intención de causar la muerte de Prelados diocesanos, ordinarios, o cualquier otro funcionario eclesiástico²⁶⁰, que se cometieran cuando estuvieran ejerciendo las funciones de su ministerio, o que se produjera por motivo de su cargo.

La pena señalada era de cuatro a ocho años, o de uno a cinco años, dependiendo del cargo de la persona perjudicada²⁶¹. En todo caso, hay que decir que se trataba de un tipo de "mera actividad", puesto que, aunque resulte curioso, no se tomaba en cuenta el resultado de la agresión, de forma que la frustración y la tentativa se calificaban igual que el delito consumado. Sin embargo, dependiendo del resultado de la acción, concursaba con otros tipos penales en

²⁶⁰. En este Art. 326 se recogían un gran número de personalidades. A los efectos de nuestra investigación, se han señalado sólo los miembros del clero que gozaban de la protección penal. Sin embargo, el tipo recogía las siguientes personalidades: "Diputado de Cortes, Secretario de Estado y Del Despacho, Consejero de Estado, Magistrado o Juez, Jefe Político o alcalde, General en Jefe o de división, Capitán o comandante general de provincia, o Gobernador militar, Prelado eclesiástico, ordinario, individuo de Diputación provincial o de ayuntamiento, o cualquier otro funcionario que ejerza jurisdicción y autoridad pública, civil, militar o eclesiástica, ...".

²⁶¹. Como se ha señalado en el artículo precedente, algunos cargos públicos venían expresamente señalados, y otros reseñados genéricamente. Para los ataques contra los primeros se establecía la pena de cuatro a ocho años, y para los que se enunciaban genéricamente la de uno a cinco.

función del resultado²⁶²

2). Atentados sin intención de causar la muerte de Prelados diocesanos, ordinarios, o cualquier otro funcionario eclesiástico, que se cometieran cuando estuvieran ejerciendo las funciones de su ministerio, o que se produjera por motivo de su cargo²⁶³

La sanción contenía igual distinción que el tipo anterior, aplicándose la de reclusión de seis meses a cuatro años o de un mes a un año y satisfacción pública del agraviado en ambos supuestos. Y también, como tipo especial concursaba por razón del resultado con otros tipos penales en función del resultado.

3). Amenaza con fuerza a los mismos sujetos que los citados en los dos tipos anteriores cuando se hallaran ejerciendo sus funciones o por razón de su ministerio²⁶⁴.

La pena tenía igual distinción que en los tipos anteriores, aplicándose la de reclusión de un mes a un año o de ocho días a dos meses y satisfacción pública del agraviado en ambos supuestos. Y asimismo, como tipo especial concursaba por razón del resultado con otros tipos penales en función del resultado²⁶⁵

4). La falta de respeto debido con palabras, gestos o acciones insultantes o indecentes, o perturbación de la solemnidad del acto.

²⁶² Art. 329 del Código Penal.

²⁶³ Art. 327 del Código Penal.

²⁶⁴ Art. 328 del Código Penal.

²⁶⁵ Art. 329 del Código Penal.

Se preceptuaba un castigo de arresto de cuatro días a dos meses, sin perjuicio de las reclamaciones civiles que procedieran por esos hechos²⁶⁶.

5). La intimidación o venganza contra estos funcionarios a través de la perpetración de daños en sus propiedades.

La pena se determinaba mediante la remisión al Capítulo correspondiente a los daños en las cosas. Sin embargo, se incrementaba el castigo a reclusión o prisión de dos meses a dos años, si se trataba de los funcionarios descritos en el primer párrafo del Art. 326 (Prelados eclesiásticos y ordinarios, y además se hubieran cometido los hechos mediante allanamiento, o con escalamiento, o asalto violento de su habitación o morada). Por contra, si era cualquier otro funcionario público (de los señalados genéricamente en el segundo párrafo del Art. 326) la pena se reducía a la mitad²⁶⁷.

6). La usurpación de cargos no poseídos.

Para la determinación de la pena se distinguía también entre las autoridades señaladas expresamente en el primer párrafo y las mencionadas genéricamente en el segundo párrafo del Art. 326, puesto que se preceptuaba reclusión de seis meses a cuatro años, o bien prisión de quince días a un año (respectivamente)²⁶⁸.

Aunque se trataba de un tipo especial, dependiendo de los hechos podía concursar con los tipos expresados en la Primera Parte, Título V, Capítulo IX "De

²⁶⁶. Art. 330 del Código Penal.

²⁶⁷. Art. 331 del Código Penal.

²⁶⁸. Art. 332 del Código Penal.

los que se suponen con títulos o facultades que no tienen, o usan de condecoraciones o distintivos que no les están concedidos"

7). El mero estorbo doloso en las funciones que esas autoridades tenían asignadas.

Para la determinación de la pena se atendía también a la distinción efectuada entre las autoridades señaladas anteriormente. Y así se determinaba reclusión o prisión de dos meses a dos años; y un arresto de ocho días a seis meses (respectivamente). Si bien se podía incrementar al doble, si para la realizar los hechos del tipo se había usado de armas de fuego, acero o hierro. Si eran armas de otro tipo se aumentaba tan sólo en un veinticinco por ciento²⁶⁹

8). Los que con amenazas o por medio de la fuerza forzaran a los funcionarios públicos a hacer algo que no deseaban, aunque sea justo.

Para la fijación de la pena se advertía la distinción de autoridades anterior, conteniéndose reclusión o prisión de tres meses a tres años; o un arresto de quince días a un año (respectivamente). El castigo se podía incrementar si para tal fin se habían usado armas, operando igual distinción al respecto que la señalada antes²⁷⁰

Para estos ocho tipos señalados se prescribían dos consecuencias comunes. Por un lado, una agravante por el que las penas se aumentaban desde el veinticinco al cien por cien, cuando se hubiesen realizado los hechos en reunión

²⁶⁹, Art. 333 del Código Penal.

²⁷⁰, Art. 334 del Código Penal.

tumultuaria y con uso de armas de distintas clases²⁷¹. Y por otro lado, una consecuencia accesoria sin reproche penal, puesto que se disponía que los actos o resoluciones adoptadas en esos casos descritos por cualquier autoridad eran nulos y sin ningún valor²⁷².

Dentro de esa defensa de la religión católica, y por ello de los eclesiásticos, se deben traer a colación las disposiciones aprobadas para evitar suplantaciones:

El Código Penal en su Parte Primera "De los delitos contra la sociedad", Título V "De los Delitos contra la Fe Pública", Capítulo IX "De los que se suponen con título o facultades que no tienen, o usan de condecoraciones o distintivos que no les están concedidos", (Artículos 447 a 450).

Tipificaba actuaciones tendentes a suplantar a ministros de la Iglesia. De suerte que para aquellos que llevaban a cabo suplantaciones se les aplicaba la pena de dos a seis años de presidio, sin perjuicio del concurso con otros tipos a la vista de cada comportamiento concreto²⁷³.

²⁷¹ Art. 336 del Código Penal.

²⁷² Art. 337 del Código Penal.

²⁷³ Se trataba de los artículos 447 y 448. Toda vez que la suplantación de funcionarios eclesiásticos aparecía contenida en el Art. 447, pero la de sacerdotes, diáconos o subdiaconos se encontraba reflejada en el Art. 448.

8.3 TIPIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE ECLESIASTICOS CONTRARIOS AL NUEVO RÉGIMEN.

Eran muy variadas las disposiciones penales que se contenían en este texto para exigir determinados comportamientos de los eclesiásticos, pero la nota que identificaba a todos esos hechos tipificados era su fin: "impedir ataques contra el Nuevo Régimen". Por ello, se puede afirmar que, al igual que se prescribía una protección importante para con la Religión católica y los eclesiásticos, también se contenían otras disposiciones tendentes a defender el sistema de los ataques dirigidos por los eclesiásticos bajo la bandera de la propia Religión católica que el propio Estado profesaba.

Para una mejor exposición de estas disposiciones, se pueden establecer varios bloques:

1) La sanción penal de aquellos comportamientos adoctrinadores contrarios al Nuevo Régimen efectuados por los miembros del clero. Nos referimos, en primer lugar, al problema de los sermones y escritos de los eclesiásticos contrarios a la Constitución, que ya habían sido abordados en tantas disposiciones meramente civiles. Estos tipos, aunque se establecían para evitar la conducta de cualquier español, siempre contenían mención expresa en todos los artículos para los eclesiásticos. Y por otro lado, supuestos que tipificaban actos de oposición contra la ejecución de leyes, actos de justicia, o cualesquiera determinaciones del poder civil, o bien la provocación a la desobediencia civil, e incluso la reprobación de los actos del Gobierno. Concretamente, se deben traer a colación los siguientes:

A) Aquellos que iban dirigidos a promocionar o a inducir levantamientos contra el Nuevo Régimen.

En este supuesto eran considerados como inductores, por lo que se les imputaba igual pena que a los que se hubieran levantado en armas²⁷⁴.

B) Aquellos que estaban dirigidos a propagar máximas contrarias a la Constitución.

Se establecía una pena de cuatro a ocho años de prisión, junto con la pérdida de honores, empleos y sueldos, así como la ocupación de sus temporalidades²⁷⁵.

C) La oposición dolosa mediante hechos concretos, a la ejecución de alguna ley, actos de justicia, reglamentos o cualquier otra disposición²⁷⁶.

La sanción penal que se dispensaba contra estos hechos era la de reclusión o prisión de uno a cuatro años, aumentándose si en la perpetración de los hechos se hubieran usado armas.

²⁷⁴. Art. 211: "Si el funcionario público o el eclesiástico con su sermón, discurso, carta pastoral, edicto o escrito oficial, según el artículo precedente, causaren alguna sedición, motín o alboroto popular, sufrirán la pena prescrita contra los autores principales de este delito, según la clase a que corresponda; pero en ningún caso, se podrá aplicar una pena menor que las señaladas en el segundo párrafo del artículo precedente".

²⁷⁵. Así aparecía regulado en los artículos 212 y 213. Este último, contenía una pena superior -la expuesta-, para el supuesto de cometerse este tipo por parte de eclesiásticos.

²⁷⁶. Art. 321, que regulaba su tipo mediante una remisión al Art. 287.

D) La oposición a los hechos anteriores, pero efectuada de palabra o por escrito. Dentro de esta modalidad, se distinguía entre si la provocación había sido directa, o bien si ésta se había producido por medio de sátiras o invectivas²⁷⁷.

E) Pero el tipo que quizá puede resultar más curioso, de entre todos los señalados hasta ahora, era el que se expresaba en el Art. 325, puesto que se puede afirmar que contenía una especie de "cajón de sastre", de suerte que cualquier comportamiento contrario al orden civil, y que olvidara la supremacía de éste sobre la Iglesia podía considerarse como delito²⁷⁸.

Al igual que el resto de comportamientos detallados anteriormente, cualquier persona podía ser autor material de este delito. Sin embargo, a la vista

²⁷⁷ Se contenían tipos diferentes, dependiendo de la forma en que se hubiera efectuado la provocación: nos referimos a los artículos 323 y 324. En el Art. 323: "El que de palabra o por escrito excitare o provocare directamente a desobedecer al Gobierno o a alguna autoridad pública, o a resistir o impedir la ejecución de alguna ley u otro acto de los expresados en el Art. 321, sufrirá una reclusión de seis a dieciocho meses, si la excitación o provocación no hubiese surtido efecto; pero en este caso será dicha pena de uno a cuatro años. Si hiciere la excitación o provocación un funcionario público o un eclesiástico secular o regular cuando ejerzan las funciones de su ministerio, se le aumentarán dos años más de pena en ambos casos, con privación de empleos y sueldos, honores y temporalidades". Sin embargo, el Art. 324 se diseñaba para aquellos ataques que, de alguna manera, se encubrían con el ingenio. Art. 324: "*El que de palabra o por escrito provocare con sátiras o invectivas a desobedecer alguna ley o al Gobierno u otra autoridad pública, sufrirá ... Pero si un eclesiástico secular o regular, abusando de su ministerio en sermón o discurso al pueblo, o en edicto, carta pastoral u otro escrito oficial censurase o calificase como contrarias a la religión o a los principios de la moral evangélica las operaciones o providencias de cualquiera autoridad pública, sufrirá una reclusión de dos a seis años, y se le ocuparán las temporalidades. Si denigrare con alguna de esas calificaciones al cuerpo Legislativo, al Rey, o al Gobierno supremo de la Nación, será extrañado del reino para siempre, y se le ocuparán también las temporalidades*".

²⁷⁸ La técnica utilizada por el legislador para conformar este artículo, fue como se ha señalado, la tipificación de una afirmación genérica, toda vez que no se especificaba hecho alguno dentro del tipo.

de su contenido, y de la especialidad que reseñaba su segundo párrafo, parece ser que se diseñaba especialmente para ser aplicado a los miembros del clero:

"El que de palabra o por escrito negare o impugnare las legítimas facultades de la suprema Potestad civil, su soberanía e independencia en todo lo temporal, su imperio sobre el clero, y su autoridad acerca de todas las materias de la disciplina exterior de la Iglesia de España, será castigado como incitador a la desobediencia Si cometiere este delito un funcionario público o un eclesiástico secular o regular ejerciendo su ministerio en discurso o sermón al pueblo, o en edicto, carta pastoral u otro escrito oficial, sufrirá una reclusión o prisión de uno a tres años; y si insistiere o reincidiere, será extrañado del reino para siempre, y se ocuparán las temporalidades al eclesiástico"²⁷⁹.

Disposiciones similares a éstas se pueden encontrar también dentro del principal capítulo destinado a proteger a la religión del Estado²⁸⁰, pero se señalan en este lugar puesto que, a diferencia de las anteriores, tendían a evitar los ataques que los eclesiásticos podían dirigir en función de su ministerio contra personas físicas, y contra el orden público o buenas costumbres. Concretamente nos referimos a:

F). Cuando algún eclesiástico secular o regular, en el ejercicio de su ministerio, calificaba de antirreligiosa, herética o sospechosa a alguna persona o doctrina no declarada como tal por la autoridad competente.

²⁷⁹. Art. 325 del Código Penal.

²⁸⁰. Nos referimos a la citada Parte primera, "De los delitos contra la sociedad", en su Título Primero "De los delitos contra la Constitución y el orden político de la Monarquía", en su Capítulo III "De los delitos contra la religión del Estado", concretamente los Artículos 227 a 241.

La pena señalada era la reprensión y un arresto de uno a seis meses, privándosele de la mitad de sus temporalidades. Y todo ello sin perjuicio del concurso con los tipos de injurias y calumnias que pudieran ser aplicados a tales hechos²⁸¹

G). Cuando por algún eclesiástico regular o secular, se predicaban dogmas contrarios a los Evangelios, prácticas supersticiosas, profecías o cualquier otra doctrina reprochable²⁸², y cuando estas doctrinas atentaban directamente contra el orden público, buenas costumbres o la seguridad y tranquilidad de algunas personas.

El reproche penal prescrito para estos hechos coincidía con el señalado en el apartado anterior.

2). Al igual que la consideración de algunos eclesiásticos como funcionarios públicos les repercutía una especial protección penal, en algunos aspectos también les irrogaba la posibilidad de encontrar sanciones penales a comportamientos determinados:

A). Algunos de esos comportamientos se encuentran regulados en la Parte Primera "De los delitos contra la sociedad", Título V "De los delitos contra la Fe Pública", Capítulo VI "De los que violen el secreto que les está confiado por razón del empleo, cargo o profesión pública que ejerzan, y de los que abran o

²⁸¹ Art. 240 del Código Penal.

²⁸² Estos hechos son los mismos que se contenían en el Art. 241, ya citado, sólo que su párrafo segundo contenía una variante del tipo, no tanto dirigida a evitar esas máximas contrarias a la Iglesia, sino que se trataba de una autorización a favor del poder civil cuando esas doctrinas incidían directamente en cuestiones civiles.

supriman indebidamente cartas cerradas. (Artículos 421 a 428).

De este bloque de disposiciones, hay que destacar la violación del *secreto de confesión*²⁸³. Se trataba de la revelación de secretos que les habían sido confiados a los eclesiásticos por razón de su ministerio²⁸⁴, y los hacían públicos fuera de los casos en que la ley lo permitía.

Para ese caso, se establecía una pena de arresto de dos meses a un año, junto con una multa de treinta a cien duros. Pero si dicha revelación era de un secreto que podía ocasionar a la persona que lo confió alguna responsabilidad criminal, deshonor, ociosidad, mala nota o desprecio en la opinión pública, se le imputaba al reo una pena de uno a seis años. Si además, en el procedimiento se probase que el secreto fue revelado por soborno²⁸⁵, el reproche penal se endurecía, puesto que se le imponía también el castigo de infamia, con lo que no podría volver a ejercer su profesión u oficio.

B). Las prescripciones contenidas en la Parte Primera "De los delitos contra la sociedad", Título VI "De los delitos y culpas de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos", Capítulo VI "De los funcionarios públicos que no obedecen o no cumplen las leyes u órdenes superiores de los que impiden o embarazan, o se conciertan para impedir o embarazar su ejecución, o la de algún acto de justicia; y los que incurren en otras faltas de subordinación y asistencia al desempeño de sus obligaciones". (Artículos 483 a 491).

²⁸³. Art. 424 del Código Penal.

²⁸⁴ Dentro del tipo no sólo se encontraban los eclesiásticos, también se incluían los abogados, médicos, cirujanos, boticarios, barberos, comadrones, matronas o cualesquiera otros.

²⁸⁵. Hay que advertir, que para el sobornador se establecía la pena de arresto de un mes a un año.

A este respecto se debe señalar, entre otros, el Art. 491 sobre la obligación de residencia del clero, que ya ha sido citado en el apartado de estatuto del clero.

C). Otras disposiciones aplicables a los miembros de la Iglesia, por el hecho de su equiparación con los funcionarios, las encontramos en la Parte Primera "De los delitos contra la sociedad", Título VI "De los delitos y culpas de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos", Capítulo VII "De los funcionarios públicos de mala conducta, y de los que tratan mal a sus inferiores y a las personas que tienen que acudir a ellos por razón de su oficio; de los que cometen violencias en el ejercicio de sus funciones; y de los que abusan de la autoridad o poder que tengan por su empleo para asuntos particulares" (Artículos 492 a 500).

Mediante esta denominación, tan extensiva, quedan fijados claramente los hechos que eran penados según las disposiciones de este Código Penal. En todo caso, se debe advertir que en este Capítulo no se mencionan nunca expresamente a los eclesiásticos, ni a ningún funcionario determinado, a diferencia de otros tipos señalados.

D). Dentro de esta equiparación, la Parte Primera "De los delitos contra la sociedad", Título VI "De los delitos y culpas de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos", Capítulo X "De los Tribunales y jueces eclesiásticos que hacer fuerza" se contenían algunos artículos tendentes a regular comportamientos reprochables de responsables de la Jurisdicción eclesiástica. (Artículos 510 a 512).

Los hechos tipificados eran comportamientos dolosos que vulneraban bien leyes civiles o canónicas, y se resumen en los siguientes actos: "ejercer alguna fuerza" de cara a conocer asuntos que no les correspondieran, en proceder de forma contraria a las leyes, o bien no otorgando apelaciones legítimas que conforme al derecho de los justiciales²⁸⁶ Mediante esta disposición se estaban tipificando comportamientos que atentaban contra la institución regalista del conocido "recurso de fuerza".

La pena que se estipulaba para este tipo de acciones era la de suspensión de empleo y sueldo de seis meses a un año. Aunque se diseñaba un tipo cualificado para aquellos casos en que apercibidos por otro Juzgado o Tribunal, continuaran con esos comportamientos. En ese supuesto la pena contenía la pérdida de todos los empleos, sueldos, rentas y honores que tuvieran de la potestad civil, junto con la expulsión "para siempre" del territorio español²⁸⁷.

3). Aunque ya existían disposiciones que prescribían el control previo de las bulas pontificias, edictos y pastorales, y otros, el Código Penal no desaprovechaba la ocasión y tipificaba la posibilidad de decretarse por el Rey, a propuesta del Consejo de Estado, el secuestro de los decretos conciliares y bulas pontificias, pastorales, instrucciones o edictos de prelados y jueces eclesiásticos, siempre y cuando contuvieran doctrinas contrarias a la Constitución, aunque, para casos de urgencia, se establecía un procedimiento especial²⁸⁸.

²⁸⁶ El Art. 510 del Código Penal era el que recogía esos comportamientos descritos.

²⁸⁷ Esos tipos cualificados los encontramos en los artículos 511 y 512 del Código Penal.

²⁸⁸ Nos referimos al Art. 217 del Código Penal. "Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, el Rey, oyendo al Consejo de Estado en el modo y forma que previene la Constitución respecto de los decretos conciliares y bulas pontificias, podrá suspender el curso, y recoger las pastorales, instrucciones o edictos que los prelados y los jueces
(continúa...)

Ese secuestro de impresos encontraba también tipificación activa para aquellos sujetos, que a sabiendas de la detención de los documentos, procedieran a su divulgación. Para este supuesto, se establecían sanciones muy importantes²⁸⁷.

8.4 LA CONDICIÓN DE ECLESIAÍSTICO COMO AGRAVANTE

La condición de eclesiástico fue considerada por el legislador como una agravante específica que incrementaba las penas, tanto económicas como privativas de libertad, puesto que en los supuestos de hecho que recogían los artículos, se establecían diferentes soluciones penales si el autor era seglar o eclesiástico.

²⁸⁵(...continuación)

eclesiásticos dirijan a sus diocesanos en el ejercicio de su ministerio, si se creyese que contienen cosas contrarias a la Constitución o a las leyes, y mandar formar causa contra el autor si hubiere méritos para ello. En Ultramar el Jefe superior político de cada provincia, consultando a los fiscales de la audiencia territorial, o si no existieren en la provincia, a dos letrados promotores fiscales, podrá recoger la pastoral, edicto o instrucciones, remitiéndolo al Rey para los efectos indicados. Pero, en caso de grave urgencia y peligro en la dilación, aun los jefes políticos superiores de la Península e islas adyacentes podrán, bajo su responsabilidad, recogerlas igualmente, precediendo la expresada consulta, y remitiéndolo también todo al Gobierno"

²⁸⁹, Art. 218: "El eclesiástico secular o regular de cualquiera clase y dignidad que sea, que sin embargo de saber que ha sido detenida, o que no ha obtenido el pase del Gobierno alguna disposición conciliar, bula, breve, rescripto o gracia pontificia, la predicar o publicar a pesar de ello, o procediere con arreglo a ella en el ejercicio de su ministerio, será extrañado del reino para siempre, o sufrirá una prisión de ocho a catorce años en alguna fortaleza de las islas adyacentes, ocupándosele además sus temporalidades"

Esta agravante se contenía en numerosos artículos. De entre ellos, se pueden citar, entre otros, los números 212, 213, 323, 324, 234, 235, 236.

Pero además, se establecía otra sanción también específica para los eclesiásticos como era la ocupación de sus temporalidades, aunque hay que afirmar que esta sanción no constituía en nuestro Derecho novedad alguna, puesto que en otras muchas disposiciones civiles aprobadas anteriormente ya se contenía dicho extremo. Lo que sí constituía una novedad en nuestro Derecho era lo establecido al respecto para el supuesto, nada extraño, donde los eclesiásticos carecieran de bienes. Pues bien, para regular estos casos se contenía el Art. 526 del Código Penal²⁹⁰ que recogía la pena de cuatro años de reclusión, adicionada a la que por razón de los hechos correspondiera.

En nuestra opinión, esta sanción penal funcionaba automáticamente, incluso en aquellas ocasiones en que un comportamiento de cualquier eclesiástico, no constituyendo delito, sí pudiera calificarse como contrario a alguna disposición civil que tuviere aparejada la ocupación de sus bienes, y éste no tuviere ninguno.

²⁹⁰. Este artículo se hallaba ubicado en la Parte Primera "De los delitos contra la sociedad", Título VI "De los delitos y culpas de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos", al final de sus doce capítulos, bajo la denominación de "Disposiciones comunes a los doce capítulos precedentes, y alguno de los títulos anteriores".

8.5. SOBRE EL MATRIMONIO

El Código Penal contenía disposiciones sobre el matrimonio canónico, único posible en España. Se encontraban tipificados actos realizados por eclesiásticos en relación con la autorización para la celebración de matrimonios, o bien cuando era un eclesiástico el que contraía matrimonio²⁹¹.

²⁹¹ Se contenía su regulación en la Parte Primera "De los Delitos contra la sociedad", Título VII "De los Delitos contra las buenas costumbres", su Capítulo III "De los bigamos, y de los eclesiásticos que se casan" (Artículos 543 a 551), y Capítulo IV "De los matrimonios clandestinos o faltos de las previas solemnidades debidas" (Artículos 552 a 559). De entre todos esos artículos señalados, y a modo de ejemplo, se puede señalar lo contenido en el Art. 548, donde se recogía la sanción para aquellos eclesiásticos que, a pesar de conocer la existencia de un matrimonio anterior, autorizaban la celebración de otro nuevo. Si bien se excluían del tipo cuando demostraban que habían sido engañados (Art. 550). Por lo que respecta a los eclesiásticos que contraían matrimonio, la sanción penal que se establecía era su consideración como autores de un delito de bigamia (Art. 551).

ANEXO N° 1

Se trata de una relación de los diferentes Ministros que estuvieron al cargo de las distintas carteras durante el periodo 1.814-1.820. (Pintos Vieites, M^a del C., *La Política de ...*, cit. p. 386).

	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820
GOBIERNO	San Carlos	Cervantes		León y Pizarro		Cataluña (Interino)	San Fernando
	29 Mar.	16 Nov.			14 Sep.	27 Jun.	7 Mar.
JUSTICIA	Mazonar	Moyano	Cavadas (Interino)	Piñero (Interino)		Lorenzo de Torres	Matallorda
	4 May.	8 Nov.	25 Ene.	30 Oct.	26 Ene.		1 Nov.
DEFENSA	Equipo	Ballesteros	Campos Segredo			Equipo	A. B. S.
	20 Mar.	25 Mar.	25 Oct.	19 Jun.		15 Jan.	7 Apr.
INTERIORES	Góngora	Villanelli (Interino)	Vallés	Ibarra	Araula		Salmon (Interino)
	20 May.	13 Sep.	2 Feb.	10 Dic.	27 Ene.	14 Sep.	7 Mar.
				23 Dic.		3 Nov.	
AGRICULTURA		Solazar		Vázquez Figueroa		Cineros	A. B. S. (Interino)
	25 May.		27 Ene.			14 Oct.	23 Jan.

ANEXO nº 2

Decreto de 29 de junio de 1.821, sobre el repartimiento de 30 millones al clero por contribución²⁴².

DIOCESIS	CUPOS EN rs. vn.
Albarracín	48.850. rs.
Ager (nullius)	42.829. rs.
Almería	320.556. rs.
Astorga	723.000. rs.
Avila	532.976. rs.
Badajoz	259.075. rs.
Barbastro	77.917. rs.
Barcelona	147.917. rs.
Burgos	523.356. rs.
Cádiz	419.417. rs.
Calahorra	484.749. rs.
Canarias	241.000. rs.
Cartagena	614.550. rs.
Ciudad Rodrigo	113.004. rs.
Córdoba	1.213.328. rs.
Coria	275.225. rs.
Cuenca	409.700. rs.
Gerona	809.398. rs.
Granada	512.037. rs.
Guadix	259.194. rs.
Huesca	253.875. rs.
Ibiza	21.976. rs.
Jaca	57.265. rs.
Jaén	799.704. rs.
León	433.701. rs.
Lérida	702.274. rs.
Lugo	412.617. rs.
Málaga	694.490. rs.
Mallorca	470.713. rs.
Menorca	63.093. rs.
Mondónedo	313.300. rs.
Orense	837.594. rs.
Orihuela	429.957. rs.
Osma	392.294. rs.
Oviedo	943.705. rs.
Palencia	791.964. rs.
Pamplona	769.326. rs.
Plasencia	433.800. rs.
Salamanca	547.015. rs.
Santander	61.042. rs.
Santiago	1.341.124. rs.
Segorbe	120.500. rs.
Segovia	437.181. rs.
Sevilla	1.747.250. rs.
Sigüenza	573.819. rs.
Solsona	545.021. rs.
Tarazona	270.192. rs.
Tarragona	532.389. rs.
Teruel	229.832. rs.
Toledo	2.309.485. rs.
Tortosa	116.403. rs.
Tudela	27.642. rs.
Tuy	517.230. rs.
Valladolid	227.742. rs.
Valencia	939.900. rs.
Vich	582.015. rs.
Urgel	597.318. rs.
Zamora	358.278. rs.
Zaragoza	1.069.080. rs.
<hr/>	
TOTAL	30.000.000. rs.

²⁴². Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo periodo de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, ... , cit. pp. 251-252.

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VI

LA SEGUNDA RESTAURACIÓN DE FERNANDO VII, (1.823-1.833)

I. LA SEGUNDA RESTAURACIÓN DE FERNANDO VII, (1.823-1.833)

1. INTRODUCCIÓN

El régimen liberal no contó con las simpatías de los realistas, y así desde finales de 1.820 y a comienzos de 1.821, ya existieron noticias de enfrentamientos armados. Sin embargo, no fue hasta 1.822 cuando se generalizaron las partidas organizadas por todo el país. Sus métodos fueron muy similares a los que usaron las guerrillas durante la guerra de la independencia. A partir de ahí, se protagonizaron numerosos enfrentamientos armados, pero no fueron estas partidas las que consiguieron acabar con el Trienio Liberal, sino que, su fin fue provocado por la intervención de potencias extranjeras¹.

Esta intervención fue llevada a cabo por Francia² por medio del famoso

¹. Sánchez Mantero, R., *Fernando VII ...*, cit. pp. 94-95.

². Comellas García-Llera, J.L., *Los Realistas ...*, cit. pp. 194-196. Ha escrito: "Es posible que la expedición del ejército del duque de Angulema haya sido tan impopular en Francia (continúa...)"

ejército conocido bajo el nombre de los Cien Mil hijos de San Luis, el día 7 de abril de 1.823³

Siguiendo a Palacio Atard, se puede afirmar que en realidad no hubo guerra. La intervención de las tropas francesas fue un paseo militar, y el Duque de Angulema entró fácilmente el 23 de mayo en Madrid, puesto que de los tres ejércitos que se habían formado para combatir la intervención francesa, uno en Cataluña se encerró en Barcelona y se rindió sin combatir, otro en Castilla que se retiró también sin entrar en combate, y el tercero, en vez de moverse para cortar el paso en Somosierra, intervino en un oscuro manejo, cuyo objeto era un golpe de Estado que estableciera el régimen de Carta Otorgada, pero sus soldados desertaron pasándose a los realistas. Así las cosas, seguía recorriendo España sin

(...continuación)

como en España. Fue una medida aconsejada por circunstancias de alta política, de la que, si el gobierno francés esperaba obtener frutos ventajosos, no es posible asegurar que los hubiera conseguido realmente. En Francia se hizo oír desde el primer momento un núcleo liberal, opuesto a toda clase de intervención en los asuntos españoles. No está de más recordar que ya en 1.822 Luis XVIII hubo de explicar a las Cámaras, en el discurso de la Corona, que el ejército de observación acantonado en los Pirineos tenía por objeto evitar la propagación ... de las epidemias registradas entonces en España. ... Cuando el 28 de Enero se abrieron las cámaras, Luis XVIII anunció, ya casi sin paliativos, la inminencia de la guerra, pero la idea no se impuso en el Parlamento sino después de dura lucha. El mismo Royer-Collard se levantó una vez para asegurar si la empresa era *justa, necesaria y conveniente*, y para exponer el peligro de algo más grave todavía: el de privar a España de espontaneidad para decidir sus propios destinos. Una idea muy parecida, aunque en sentido algo más favorable fue la que expresó el conde de La Bourdonnaie. La oposición más grave se personificó en Jean Antoine Manuel, el diputado de izquierdas que hubo de ser expulsado de la Cámara después de repetidos escándalos. La agitación trascendió a la calle, que registró durante los primeros días de marzo violentos motines de los grupos de exaltados. Era natural que el gobierno francés vacilara ... Sin embargo la decisión llegó: como que las tropas de Angulema estaban cruzando en aquellos momentos el Bidasoa. ..."

³ Palacio Atard, V., *La España ...*, cit. p. 132. Afirma que el número de los cien mil hijos de San Luis resulta exagerado, pues no sobrepasó de 56.000. A ellos se sumaron, eso sí, unos 35.000 soldados realistas españoles, ya que en marzo se había operado el repliegue sobre la frontera de las guerrillas pirenaicas para secundar la entrada de los franceses.

resistencia, de suerte que se llegaba a Cádiz, donde tras una pequeña resistencia de los liberales, las Cortes, allí reunidas, decidieron dejar libre al Rey y negociar el fin de las hostilidades con Angulema⁴.

Tras esos hechos, se había culminado el final del Trienio y el Rey con el conocido manifiesto retrotraía a España al estado en que se encontraba en el año 1.820, y comenzaba la represión contra los constitucionalistas.

Durante todos estos acontecimientos bélicos, y poco después de la entrada de los franceses en España, se había constituido una Junta en Oyarzun, que junto con la Regencia de Madrid⁵ derogaron todas las innovaciones y reformas eclesiásticas que habían sido diseñadas en el Trienio Liberal. De suerte que cuando Fernando VII retornó a Madrid, ya toda la obra de reparación había sido cumplida por esa Junta de Regencia.

Por lo que respecta al Régimen del Trienio Constitucional, hay que decir que intentó, sin éxito, defenderse de los ataques de sus detractores. Se puede citar, entre otros, el Decreto de 11 de noviembre de 1.822, por el que se determinaba como se había de proceder con los facciosos aprehendidos y que se aprehendieran en lo sucesivo⁶. Se contenían varios supuestos mediante técnica casuística, pero, en todo caso, se puede mostrar una conclusión común a todos

⁴. Palacio Atard, V., *La España ...*, cit. p. 133.

⁵. Acta de la instalación solemne y juramento de la Regencia del Reino de 26 de mayo de 1.823, y en la misma fecha, el Tratamiento de la Regencia y de sus individuos: aviso de su instalación a las Autoridades de Madrid a toda la Nación. (*Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, Regencia del Reino y los expedidos por Su Majestad desde que fue libre del tiránico poder revolucionario, comprensivo del año 1.823*, Tomo Séptimo, Madrid en la imprenta real, 1.824. pp. 2-5, y 6 -respectivamente-).

⁶. *Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes Extraordinarias, que comprende desde 3 de octubre de 1.822 hasta 19 de febrero de 1.823, ...* cit. pp. 23-24.

ellos: las sanciones se limitaban a servir en el ejército, y en los supuestos más graves dicho servicio iba acompañado de extrañamiento a las provincias de ultramar.

Otra tentativa de defensa estuvo constituida por el perdón para todos aquellos que entregaran las armas. Así se contenía en el Decreto de 18 de febrero de 1.823, por el que se recogía una amnistía a los facciosos, sus jefes o cabezas, que hallándose con las armas en la mano las depusieran y se presentaran a las autoridades antes de 1 de abril⁷. Se les ofrecía la posibilidad de restituirse a sus familias, sabiendo que no serían castigados. Sin embargo, una disposición, en principio tan bondadosa, nacía muerta desde su aprobación por el aviso que contenía en su articulado, puesto que la sola advertencia de que el Gobierno podía señalarles servicio de armas contra los sublevados o cualquier otro que estimara oportuno, parece que abortaba a esta disposición.

Fernando VII fallecía⁸ el día 29 de septiembre de 1.833, pero sin haber entrado a solucionar los problemas que se planteaban en España, y dejando una herencia de guerra civil por la sucesión en el trono de la Nación⁹, plasmada en la

⁷. *Ibidem*, pp. 165-166.

⁸. Mediante la Real provisión de 30 de septiembre de 1.833, se daba noticia a las Justicias y demás personas de estos Reinos del fallecimiento del Sr. Rey D. Fernando VII, y de la confirmación que hacía S.M. la Reina Gobernadora, en nombre y durante la menor edad de su augusta Hija la Sra. Reina Doña Isabel II, de todas las Autoridades establecidas, mandando continuaran en el ejercicio de sus funciones, con lo demás que se expresaba. (*Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII, y de la Reina Su augusta esposa: reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.833*, Tomo Decimoctavo, Madrid en la imprenta real, 1.834. pp. 243-245).

⁹. Díaz-Plaja, F. *Fernando VII. El más querido y el más odiado de los reyes españoles*, Barcelona, 1.991. p. 223. Señala literalmente: *Fernando VII decía a menudo que España era como una botella de cerveza cuyo tapón lo constituía él mismo. Cuando yo me muera, repetía, se desparramará toda. Evidentemente no se le ocurrió, a lo largo de su* (continúa...)

conocida Pragmática-Sanción con fuerza de Ley de 30 de septiembre de 1.833, para que se guardaran y cumplieran las soberanas disposiciones y última voluntad del Sr, Rey D. Fernando VII, por las cuales se sirvió nombrar e instituir Regenta Gobernadora de toda la monarquía a su amada Esposa para que por sí sola, aunque consultando los negocios arduos con un Consejo de gobierno que designó, la rija durante la menor edad de su augusta Hija la Señora Doña Isabel II¹⁰.

2. EL MANIFIESTO DE FERNANDO VII

"Las Cortes, en último término, y ante el fracaso consumado del liberalismo en el Trienio, devolvieron la soberanía a Fernando VII, quien antes de trasladarse al Puerto de Santa María, el 30 de septiembre de 1.823, dió un Decreto generoso, de perdón y olvido, y de respeto de personal y cargos, cualesquiera que fuesen las alteraciones que hubiese de introducir en la gobernación del país. Al día siguiente, 1 de octubre de 1.823, ya libre, promulgó otro Decreto de signo contrario, con el que comienza la represión cruel e ininteligente, a la española. Lejos quedaba la Monarquía moderada que buscaban los franceses, y parte de sus amigos españoles¹¹".

Ese último Decreto citado era el conocido manifiesto de S.M. De 1 de octubre de 1.823 declarando haber carecido de entera libertad desde el día 7 de marzo de 1.820, hasta el 1º de octubre de 1.823, por lo que, eran nulos y de ningún valor todos los actos del Gobierno llamado constitucional: y en cuanto a

⁹(...continuación)

reinado, procurar con medidas amplias y comprensivas que esa presión dejara de existir mucho antes de que constituyera un peligro para la estabilidad del país.

¹⁰. *Decretos del Rey Don Fernando VII y de la Reina ... año 1.833, cit. pp. 248-253.*

¹¹. Gil Novales, A., *El Trienio ...* , cit. , pp. 58-59.

lo decretado y ordenado por la Junta provisional y la Regencia, áquella creada en Oyarzun, y ésta en Madrid, lo aprueba S.M. , entendiéndose interinamente¹².

Su contenido, al igual que había ocurrido con aquél de 1.814, se limitaba a declarar nulos todos los actos del Gobierno constitucional, no sin aprovechar la ocasión de emitir numerosas alusiones despectivas a su labor. De entre ellas, se puede destacar la que afirmaba que:

"... Gobernados tiránicamente, en virtud y a nombre de la constitución, y espiados traidoramente hasta en sus mismos aposentos, ni les era posible reclamar el orden ni la justicia, ni podían tampoco conformarse con leyes establecidas por la cobardía y la traición, sostenidas por la violencia, y productoras del desorden más espantoso, de la anarquía más desoladora y de la indigencia universal. ...".

En dicho manifiesto, como se puede advertir en su lectura-, y al igual que había ocurrido con los realistas levantados en armas contra los liberales, la religión católica aparecía señalada al lado de la causa del monarca en clara oposición directa con la constitución:

"... los cuerpos armados que lidiaron contra los soldados de la constitución, vencedores unas veces, y vencidos otras, siempre permanecieron constantes a la causa de la Religión, y de la monarquía, ... , la nación entera era religiosa, monárquica y amante de su legítimo Soberano. ...".

¹². Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, Regencia del Reino y los expedidos por Su Majestad desde que fue libre del tiránico poder revolucionario, comprensivo del año 1.823. Tomo Séptimo. Madrid en la imprenta real. 1.824. pp. 147-149.

Por otra parte, el Rey mostraba su anuencia para con la labor de la Regencia y la Junta provisional de Gobierno, encontrando así sus diferentes disposiciones la correspondiente sanción real. Sin embargo, la Inquisición no fue restablecida en España¹³. Se puede afirmar que se trató de una de las pocas disposiciones acordadas en el Trienio que fue respetada por los restauradores, aunque no resultaba menos cierto que quizá fue así por presiones internacionales. Pese a ello, se establecieron las denominadas "Justas protectoras de la Fe" en manos de los obispos que sustituían las funciones que se llevaban a cabo por la Inquisición, pero ahora en manos de los respectivos Prelados de cada circunscripción eclesiástica. Dichas Juntas de protección de la Fe perdían su importancia con el Decreto de 6 de febrero de 1.830, en virtud del cual se encauzaban hacia la Nunciatura las apelaciones a las causas de fe.

3. EL RESTABLECIMIENTO DEL ANTIGUO RÉGIMEN

El restablecimiento de Fernando VII al frente de España, tras la disolución de las Cortes, suponía la vuelta del absolutismo despótico a nuestro país.

Como ha señalado Díaz-Plaja¹⁴, *los liberales, encerrados en su reducto gaditano, habían creído, ¡una vez más!, a Fernando VII, cuando el último día gaditano prometió el perdón para todos. Éstos quedaron estupefactos; unos buscaron su salvación en la huida, otros fueron arrestados, encarcelados o asesinados por las calles. ... La verdad es que el invasor francés, tras restablecer a Fernando VII en sus derechos totales, hizo lo imposible para evitar la brutal reacción del Rey. Angulema, inspirador del edicto protector de los*

¹³. Para un mayor desarrollo de este aspecto, veasé, entre otros, Martí Gilabert, F., *Iglesia y Estado ...*, cit. pp. 164-169.

¹⁴. Díaz-Plaja, F., *Fernando VII ...*, cit. pp. 176-178.

perseguidos, hizo llegar a su rey Luis XVIII las tremendas noticias represivas y el Monarca galo escribió a Fernando VII pidiéndole clemencia para su pueblo. ... Pero el Fernando VII que había pedido auxilio era muy distinto del que ya no lo necesitaba. El Rey no hizo el menor caso de esa invocación lejana como no lo hacía de la cercana insistencia del Duque de Angulema¹⁵.

Con la misma rapidez que los liberales del Trienio se encargaron de construir símbolos para conmemorar la jura de la Constitución por Fernando VII, los partidarios del Antiguo Régimen se encargaban de apartar de la Cortes y Sitios Reales todo lo relacionado con el sistema constitucional. Por ello, se aprobó una Real orden de 4 de octubre de 1.823 que determinaba que quienes habían tenido algo que ver en el Régimen anterior no podían acercarse a menos de cinco leguas en contorno del viaje de S.M. a Madrid, ni tampoco podían entrar en la Capital ni en los Sitios reales, debiendo permanecer a un radio de quince leguas¹⁶.

Se trataba de una medida que pretendía un doble efecto; por una parte, potenciar la seguridad personal del Rey en momentos de plena represión; y por

¹⁵. Ese perdón solicitado por el monarca francés, fue concedido el día 1 de mayo de 1.824 mediante la Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo, por la cual se concedía indulto y perdón general, con relevación de penas corporales o pecuniarias en que hubieran podido incurrir, a todas las personas que desde principios de 1.820 hasta el 1º de octubre de 1.823; hubieran tenido parte en los excesos y desórdenes ocurridos en estos Reinos con el objeto de sostener y conservar la pretendida constitución de la Monarquía, con tal de que no fueran de las que se mencionaban y exceptuaban en el Real decreto inserto. A pesar del perdón general que se citaba en la Real cédula, se establecía tal número de excepciones que resultaba aplicable a muy pocos, con lo que en la práctica iba a reflejar el resentimiento y la reacción brutal contra los liberales en España. (*Decretos del Rey Don Fernando VII ... junio de 1.824. ...*, cit. pp. 325-333.

¹⁶. *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional. ... año 1.823. ...*, cit. pp. 152-153.

otra, asegurar la no presencia de los liberales¹⁷ cerca del lugar desde donde se gobernaba la Nación. Así se conseguía que los antiguos poderes del sistema constitucional estuvieran alejados de los centros de poder.

Otra disposición, que entre otras consecuencias perseguía un control político, estuvo constituida por la creación de la policía¹⁸ en virtud de la Real Cédula de 13 de enero de 1.824, por la que se mandaba guardar y cumplir el Real Decreto inserto que comprendía de las reglas que habían de observarse en el establecimiento de la Superintendencia general de la Policía del Reino, con lo demás que se expresaba¹⁹.

Sobre las funciones de control político se puede afirmar que se diseñaban en una doble dirección, por un lado para impermeabilizar nuestras fronteras de ideas que pudieran importar españoles en el extranjero, y por otro lado, control de los extranjeros que venían a España. Para el primer fin, se dotaba de competencias a la policía para exigir a todos los españoles que regresaran a España de países extranjeros la presentación del oportuno visado de conducta visado por los embajadores, Ministros plenipotenciarios, encargados de Negocios,

¹⁷. Concretamente se establecía que las personas que debían cumplir esa distancia de seguridad eran: "... ningún individuo que durante el sistema constitucional haya sido Diputado a Cortes en las dos últimas legislaturas, ni tampoco los Secretarios del Despacho, Consejeros de Estado, Vocales del Supremo Tribunal de Justicia, Comandantes Generales, Jefes políticos, Oficiales de las Secretarías del Despacho, Jefes y Oficiales de la extinguida Milicia Nacional voluntaria, ...". Sin embargo, se exceptuaba de esta determinación a "... aquellos que después de la entrada del Ejército aliado hayan obtenido por la Junta Provisional o la Regencia del reino un nuevo nombramiento o reposición del que tenían por S.M. antes del 7 de marzo de 1.820, pero unos y otros con la precisa condición de encontrarse ya purificados. ...".

¹⁸. A esta policía se la dotaba de numerosas competencias, pero, de cara a la presente investigación, tres extremos concretos llaman nuestra atención, las funciones sobre control político, las de protección de la Religión católica y las funciones sobre libertad de imprenta.

¹⁹. *Decretos del Rey Don Fernando VII ... junio de 1.824, ...*, cit. pp. 49-63.

Cónsules o Vicecónsules, legalizados en debida forma. Y sobre el control de los extranjeros, era la policía quien debía visar sus pasaportes.

Por lo que respecta a nuestro Derecho, y al igual que había ocurrido en el período relatado de 1.814-1.820, suponía una vuelta a la Novísima Recopilación de las leyes de España. Sin embargo, ese retroceso en el tiempo cada vez era más difícil.

La eliminación del Nuevo Régimen no impidió que se utilizarán algunas de las creaciones jurídicas propias de él. A modo de ejemplo, se puede citar el uso de los presupuestos, tal y como se señalaba en el Real decreto de 31 de diciembre de 1.829, por el que era aprobado por S.M. el presupuesto general de gastos para la Monarquía para el año 1.830²⁰. Se trataba de la segunda vez en nuestra historia que se elaboraban unos presupuestos durante el reinado de Fernando VII sin estar vigente un texto constitucional. La primera fue el año anterior pero se elaboraron tan sólo para ocho meses y no para doce²¹

II. APOYO DEL ABSOLUTISMO A LA IGLESIA

Como puede verificarse, en relación con el título del epígrafe del Capítulo III, ahora el título de este capítulo no señala el apoyo de la Iglesia al absolutismo, sino que se han variado los términos, señalándose "apoyo del absolutismo a la

²⁰. *Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.829.* Tomo Decimocuarto, Madrid en la imprenta real. 1.830. pp. 340-341.

²¹. Real orden de 16 de mayo de 1.829, sobre continuación y régimen de los presupuestos anuales. (*Decretos del Rey ... año 1.829, cit.* pp. 173-174).

Iglesia". El motivo de esta aclaración se centra en que durante la vigencia del Trienio, la Iglesia, o mejor dicho, sus ministros en su mayor parte, y sobre todo los que contaban con más poder habían ensalzado al monarca y vilipendiado la Constitución, no sólo de palabra, sino que, como es conocido, incluso con la participación armada en contra del Nuevo Régimen. Por este motivo, y aunque Fernando VII no pensaba cambiar la condición privilegiada del status de la Iglesia, ahora tenía una gran deuda que debía satisfacer.

Al igual que había ocurrido en todos los períodos abordados en la presente investigación, las ceremonias religiosas eran los vehículos de celebración elegidos para conmemorar la victoria de un bando sobre otro. Pero además, se debe señalar que en este momento se las dotaba de un mayor peso confesional, fruto no sólo de la coincidencia de la causa de los realistas con la religión católica, sino del apoyo de la Iglesia en la Religión y viceversa, tal y como lo significaba el citado manifiesto de 1 de octubre de 1.823 "... la nación entera era religiosa, monárquica y amante de su legítimo soberano. ...". Como elemento identificador de esas medidas en este momento, hay que decir también, que no desaprovechaban la ocasión para proceder a la depuración de las raíces de los pensamientos liberales, dentro de esa línea reaccionaria y vengativa.

Como claro ejemplo se puede citar el Real decreto de su Majestad de 6 de octubre de 1.823, en que se mandaba que en todos los pueblos de la Monarquía se celebrase una solemne función de desagravio al Santísimo Sacramento: que se cuidara por las Autoridades eclesiásticas disponer misiones que impugnaran las doctrinas perniciosas y heréticas, y pusieran en reclusión a los eclesiásticos que habían sido agentes de la facción desorganizadora²².

²². *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional. ... año 1.823, ...* . cit. pp. 154-155.

Otro gesto confesional, también tradicional en nuestro Derecho, estuvo constituido por la celebración de misas o funciones religiosas por los fallecidos en la guerra²³.

La vuelta del sistema absolutista trajo consigo la normalidad en las relaciones con la Santa Sede, y por ello no sólo regresaba el Nuncio a Madrid, sino que también volvía a su normalidad la forma de dirigir las Preces a Roma tal y como se hacía antes del Trienio Liberal²⁴.

En esta línea de apoyo a la Iglesia, hay que decir que las deudas morales que Fernando VII había contraído con la Iglesia, por un lado, y el estado en que se encontraban algunos establecimientos religiosos, por otro, fueron los motivos que impulsaron la aprobación de la Real orden de 20 de abril de 1.824, por la creaba S.M. una Junta para que entendiese de la mejora de los establecimientos piadosos²⁵, pese al maltrecho estado de las arcas del erario público. Contenía la creación, únicamente a título orientativo, de una Junta en Madrid que, compuesta por cinco vocales se dedicaría a verificar el estado de todos los establecimientos religiosos, haciendo especial hincapié en la situación en que se encontraban. Para

²³. El título de la disposición resultaba elocuente: Real decreto de 9 de octubre de 1.823 para que en todas las iglesias de la Monarquía se celebre un solemne funeral, en sufragio de las almas de los que desde el 7 de marzo de 1.820 han fallecido por sostener la causa de Dios y la de S.M. (*Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ... cit. pp. 155-156*).

²⁴. Se efectuaba mediante la Orden circular de 30 de junio de 1.823, por la que se restablecía el modo de dirigir las preces a Roma, bajo el orden y método que se observaba antes del 7 de marzo de 1.820 (*Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ... cit. p. 57*).

²⁵. *Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. en los seis meses contados desde 1º de enero hasta fin de junio de 1.824*, Tomo Octavo, Madrid en la imprenta real, 1.824. pp. 317-320.

ello se establecía, en términos amplísimos²⁶, que los directores de esos centros estuvieran obligados a prestar a la Junta toda la información necesaria. Tras esa fiscalización, la Junta recibía la obligación de confeccionar una memoria general de todos los establecimientos, proponiendo según su criterio, las mejoras que creyeran oportunas. Las atenciones urgentes encontraban anticipado interés, toda vez que se contaba con los fondos de muchas de las mitras vacantes. El aspecto económico estaba presente en la Junta, puesto que se la encargaba que examinase los diferentes proyectos de arbitrios o nuevas imposiciones que se habían dirigido al Gobierno para aumento y dotación de algunos establecimientos, de forma que no fueran contradictorios a lo contenido por la Hacienda Real²⁷.

Aunque se ha señalado como su función era meramente consultiva, se la autorizaba para que en el supuesto en que verificara "... abusos o descuidos notables dignos de protección ...", se pusieran dichos hechos rápidamente de manifiesto.

La última de las obligaciones de la Junta era la de calificar a los directores de los centros que evaluaban, de suerte que esta Junta examinaba también que las personas que se encontraban al frente no fueran simpatizantes del movimiento liberal.

²⁶. Dicha información era muy extensa, puesto que comprendía los siguientes extremos: "... cuantos datos y noticias ésta les pidiere, con el fin de enterarse de sus respectivos institutos, fundaciones y reglas por las que se dirigen, rentas de su dotación y objetos en que se invierten; consignaciones que reciben de los fondos decimales, o de otros arbitrios que dependan del Gobierno, aunque sean de la clase de los municipales; empleados que los dirigen o manejan; mejoras que admitan, y obstáculos que se opongan a su prosperidad. ...".

²⁷. Debido a esta prescripción, dentro de esta Junta se encontraba un Director de Rentas de la Hacienda Real.

Por último, y aunque no se mencionaba expresamente en la disposición, sí se pudo leer entre líneas que también se pretendía que estos trabajos de la Junta potenciaron la información que poseía el poder civil sobre esos "establecimientos piadosos".

Una vez derrotados los liberales, y con los realistas en el poder, como se ha señalado, se destapó un fuerte ánimo de venganza, donde la Iglesia aparecía identificada con el absolutismo fernandino. Por lo que en este sentido, y siguiendo a Revuelta, hay que afirmar que no se trataba de una sana unión de la Iglesia con el Estado, sino que era una identificación de aquella con la política realista de éste, tal y como lo propagaban los dirigentes políticos y buena parte de la jerarquía clerical²⁸.

En cualquier caso, y de la misma forma que había ocurrido en todos los períodos señalados en la presente investigación, el nuevo gobierno procedía a la "limpieza" de los eclesiásticos afines a la causa liberal. Los primeros fueron los secularizados, después se ordenó la destitución y prisión en los monasterios de aquéllos que hubieran prestado su colaboración al Nuevo Régimen, y para terminar, la depuración llegó incluso a los Obispos liberales²⁹.

En otro orden de ideas, la cooperación de la Iglesia con el Antiguo Régimen se verificaba no sólo en su status privilegiado³⁰, sino en la colaboración

²⁸. Revuelta González, M., *Política religiosa ...*, cit. p. 368.

²⁹. Como señala Martí Gilabert, F., *Iglesia y Estado ...*, cit. p. 152. "... Algunos obispos tildados de liberales -admitidos por la santa Sede- fueron obligados a renunciar. Aunque Pío VII no accedió a las renunciaciones de algunos obispos como Fernando VII le pedía, sí lo hizo su sucesor León XII. ...".

³⁰. Status privilegiado, no sólo dentro de España, sino que el propio Estado español, prestaba esa especial consideración a Roma, y en especial al Santo Padre. Así se verifica (continúa...)

que prestaba al Estado. Algunos ejemplos han sido detallados en el apartado relativo a la financiación, como era el caso del impuesto de herencias, pero, por citar algún otro ejemplo, se puede señalar la colaboración que prestaba entregando los justificantes de "fe de vida", puesto que para el cobro de pensiones de las clases pasivas, o rentas de las clases activas, era necesario entregar un justificante de vivencia, que podía ser realizado bien por escribanos, o bien por los párrocos. En este sentido se puede citar la Real orden de 3 de abril de 1.826, para que se encargara que, al dar los párrocos y escribanos las certificaciones de vida, procedieran con la mayor circunspección, por los fraudes que se solían cometer en el cobro de haberes³¹.

Por su parte, el propio Estado se encargaba de evitar cualquier tipo de trabas en las relaciones con la Iglesia, tanto dentro de nuestro país, como cuando se relacionaba la Iglesia española con Roma. Por ello, resulta sencillo encontrar disposiciones como la Real orden de 6 de junio de 1.828, que mandaba que fueran admitidas con libertad de derechos las reliquias o cuerpos santos que vinieran de Roma³².

³⁰(...continuación)

cuando después de haber transcurrido casi un cuarto de este siglo XIX, la Santa Sede aparece como organismo de arbitraje para solucionar los problemas económicos existentes entre Francia y España. Nos referimos al Convenio entre Sus Majestades Católicas y Cristianísima para arreglar el pago de la deuda, en virtud de los convenios de 1.824 citados en este, publicado el 20 de enero de 1.829. En esta disposición se contemplaba la intervención mediadora del Pontífice para fijar los importes que se adeudaban entre Francia a España y viceversa, en función de diferentes convenios anteriores. (*Decretos del Rey ... año 1.829, ... cit. pp. 9-12*). En todo caso, hay que afirmar que, como es sabido, no era una circunstancia novedosa en nuestro Derecho esta situación, ya que se había dado en otras ocasiones durante la historia de España.

³¹. *Decretos del Rey ... año 1.826, ... cit. p. 99.*

³². *Decretos del Rey ... año 1.828, ... cit. p. 233.*

III. DESARROLLO LEGISLATIVO EN ESTE PERÍODO

Las disposiciones que vamos a encontrar en este período tenían por único objeto retrotraer la situación del país a la que se ha relatado en el período 1.814-1.820. Por ello, se puede afirmar que se trataba de una vuelta a nuestro antiguo Derecho de la Novísima Recopilación de las Leyes de España, a la que se añadían algunas disposiciones que actualizaban su contenido o que, en todo caso, desarrollaban las mismas, junto con las aprobadas para anular la obra legislativa del Trienio.

El calificativo que se puede señalar para ellas es el de reaccionarias, en tanto y cuanto no sólo en sus exposiciones de motivos, sino incluso en sus articulados, podemos encontrar calificaciones despectivas a las normas que derogaban.

Por lo que respecta a su incidencia en la Iglesia, se verifica mediante el presente desarrollo como supusieron una defensa de su status, y como venían a patrocinar sus intereses, de suerte que se conseguía una hiperprotección de la religión católica que había servido como base ideológica a los realistas revolucionarios en 1.823.

1. DESAMORTIZACIÓN

Por medio del citado Decreto de 1 de octubre de 1.823, que contenía el Manifiesto de Fernando VII, se declaraba nula y sin ningún valor la obra desamortizadora del Trienio. Si bien, tras esa genérica disposición, era necesario aclarar algunos extremos.

La devolución a la Iglesia de las Capellanías y cofradías detentadas por el crédito público se efectuó en virtud de la Orden de 2 de septiembre de 1.823, en la que se prevenía que quedaba sin efecto el Decreto de las llamadas Cortes de 9 de noviembre de 1.820, por el que se incorporó al Crédito público todos los bienes raíces, derechos y acciones de las capellanías vacantes, los de ermitas, santuarios, cofradías y otros³³.

La situación de los Regulares se retrotraía también a la que existía en 1.820, mediante la Orden de 11 de junio de 1.823, por la que se declaraban nulos todos los actos y decretos del Gobierno constitucional sobre Regulares, y se reducían al estado que tenían antes³⁴.

Tras señalarse la devolución de los bienes, quedaba pendiente el problema de los frutos que dichos inmuebles habían generado. Para solucionar esta cuestión se aprobaba la Orden circular de 12 de agosto de 1.823, en la que se declaraba que como consecuencia de estar acordado el reintegro a los monasterios de sus bienes y rentas, pertenecían los frutos pendientes en las fincas enajenadas, según y en la forma que se expresaba, a los compradores o arrendatarios³⁵. Llama la atención más que lo contenido en dicha norma, que no era otra cosa que el aprovechamiento de los frutos pendientes para después abandonar las propiedades, el reconocimiento de la práctica real que se producía al respecto, puesto que expresamente se señalaba la existencia de transacciones entre compradores y la propia Iglesia, de cara a solucionar entre las partes afectadas dicha controversia.

³³. *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ...*, cit. p. 105.

³⁴. *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ...*, cit. p. 35.

³⁵. *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ...*, cit. pp. 87-88.

Señala Revuelta que "los compradores de los bienes nacionales solicitaron a la Regencia la revalidación de tales ventas y la subsanación de los perjuicios que les causaba el despojo. El Gobierno halló resuelta la primera cuestión, por tratarse de bienes injustamente usurpados, cuya devolución a los eclesiásticos ya estaba decretada. En cuanto a la subsanación de los perjuicios, o sea, los frutos de la última cosecha, la Regencia los otorgaba a los compradores sólo por aquel año y previo el abono a las comunidades religiosas de los precios que estipulaban las antiguas escrituras de arrendamiento, y a falta de éstas, según la tasa que hicieran los peritos³⁶".

Tal fue la minuciosidad de la devolución de los bienes, que se llegó incluso a regular la devolución de los bienes que se encontraban en los institutos religiosos y habían salido en virtud de testamentos de exclaustros. Nos referimos a la Real Resolución de 13 de enero de 1.824, por la que se declaraban nulas las disposiciones testamentarias efectuadas por los monjes exclaustros en los tres años del gobierno revolucionario, y se mandaba devolver a los monasterios respectivos todo cuanto dejaron aquéllos a su fallecimiento, deducidos los gastos ocasionados³⁷.

2. FINANCIACIÓN

La financiación de la Iglesia en este período, se va a situar en los mismos términos en que se encontraba antes del Trienio Liberal, puesto que todas las importantes reformas señaladas en el capítulo anterior se entendían nulas. Sin embargo, esto no implica que en este momento no existan disposiciones dignas

³⁶. Revuelta González, M., *Política religiosa ...*, cit. p. 373.

³⁷. *Decretos del Rey Don Fernando VII ... junio de 1.824, ...*, cit. pp. 47-48.

de ser examinadas y tenidas en consideración.

Una de las primeras disposiciones acordadas significaba la vuelta al sistema decimal anterior, por lo que mediante la Orden circular de 6 de junio de 1.823 se anulaba el Decreto de las Cortes de 29 de junio de 1.821 relativo a diezmos; y reducía el subsidio anual a diez millones³⁸. La reducción de la cuantía anual se explicaba por las penurias que había soportado la Iglesia durante ese período del Trienio Liberal. A pesar de esa reducción, el Estado contaba con los ingresos que debía haber efectuado la Iglesia durante el Trienio para el buen funcionamiento de sus arcas. Es por ello que una de las medidas adoptadas por la Regencia contenía el requerimiento a la Iglesia para que procediera a abonar las cantidades atrasadas, durante el Trienio constitucional, del subsidio que anualmente pagaba al Estado, aunque rebajado en los términos indicados³⁹.

Desde hacía ya tiempo, el pago del diezmo no era aceptado de buena gana por los obligados a su pago, y máxime cuando habían estado en vigor disposiciones, que en todo caso, hacían suponer modificaciones futuras en esta carga. Como se ha señalado, en virtud del propio Derecho se volvía al sistema decimal propio de enero de 1.820, pero ello no significaba que se aceptara por parte de los sujetos pasivos. Por este motivo se verifica la existencia de disposiciones como la Circular de 14 de diciembre de 1.826, que incluía la Real orden con las leyes que regían para el exacto pago de diezmos⁴⁰. En realidad, tan

³⁸. *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ...*, cit. pp. 18-20.

³⁹. Así se contenía en la Real orden circular de 24 de noviembre de 1.823, para que la Dirección General de Rentas cuide de la cobranza de los atrasos del clero por razón del subsidio de los años 1.821 y 1.822 (*Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ...*, cit. pp. 201-202).

⁴⁰. *Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos* (continúa...)

sólo se recordaba toda la legislación que contenía el cumplimiento de la exacción decimal con referencia expresa a la Novísima Recopilación en sus leyes 2ª, 3ª y 6ª, del Libro I, del Título VI, o a otras disposiciones que anteriormente recordaban su cumplimiento⁴¹, como entre otras, la Real orden de 10 de noviembre de 1.825.

En lo que respectaba al cobro de la contribución del clero, es decir, aquellas cantidades que la Iglesia abonaba directamente al Erario Público, la monarquía absolutista, a diferencia de lo que habían determinado las Cortes, por medio del propio Rey solicitaba directamente dicha exacción a Roma. Una muestra evidente de este aspecto era la Bula expedida por Su Santidad en Roma el 15 de abril de 1.817, donde se concedía indulto al Rey nuestro señor Fernando VII para que válida, libre y lícitamente pudiese por el espacio de seis años exigir para el alivio de su Real Erario de todos y cada uno de los frutos del Clero, tanto secular como regular, el subsidio anual de 30 millones de reales⁴².

De la misma forma que el Estado solicitaba permiso a Roma para recibir una dotación de los recursos de la Iglesia, para los casos en que alguna orden o instituto religioso deseara pedir limosna dentro de nuestras fronteras, debía obtener la autorización previa. En este sentido se puede citar la Real orden de 10 de junio de 1.826, que mandaba que las Órdenes Religiosas de Redención de cautivos volvieran al libre ejercicio de la colectación y administración de las

⁴⁰(...continuación)

de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.826, Tomo Undécimo, Madrid en la imprenta real, 1.827. pp. 221-226.

⁴¹. En esta orden se reiteraban expresamente mediante su exposición escrita las señaladas normas de la Novísima Recopilación de las Leyes de España.

⁴². *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.817, ...*, cit. pp. 247-255.

limosnas y demás con que corrían antes del 6 de diciembre de 1.814⁴³. Aunque en todo caso, hay que señalar que disposiciones de este tipo convivían con lo contenido al respecto en la Novísima Recopilación de las Leyes de España.

Dentro de la incipiente financiación estatal, se produce también la vuelta a los sistemas anteriores al Trienio, donde el Estado permite la existencia del antiguo sistema impositivo de la Iglesia, pero al tiempo se apoya en ella para recibir algunos ingresos propios. Entre otros supuestos, se puede citar lo relacionado con el pago de herencias⁴⁴ en favor del Estado, y la manda pía forzosa en favor de la Iglesia⁴⁵.

⁴³. *Decretos del Rey ... año 1.826, ...*, cit. pp. 132-133.

⁴⁴. Como ejemplo, puede citarse la Real orden de 18 de diciembre de 1.832, declarando S.M. que estaban sujetas al pago del impuesto sobre herencias las mandas hechas a favor de los Santos lugares, exceptuando la manda llamada forzosa. (*Decretos del Rey ... año 1.832, ...*, cit. p. 298).

⁴⁵. La Manda Pía forzosa consistía en una determinada cantidad de dinero fija -aunque podía aumentarse por la sola voluntad del finado, herederos o legatarios- que se detraía del caudal hereditario de los que fallecían. Dichos rendimientos iban a parar directamente a las arcas del Estado, quien después los canalizaba para obras benéficas (pensiones de perjudicados por la guerra, los que habían perdido sus fortunas por la invasión francesa, los misioneros en Africa, Asia, etc...). Los recaudadores eran los párrocos que oficiaban el funeral, quien junto al cobro de sus derechos retenían la manda pía para entregarla posteriormente a las arcas del erario público. En un primer momento se había instituido por tiempo de 10 años -el 3 de mayo de 1.811-, pero se prorrogaron sus efectos y se delimitó más su contenido mediante la *Real orden de 8 de agosto de 1.825 restableciendo y rectificando la Manda pia forzosa que debe hacerse en los testamentos que se otorguen en todos los dominios de la monarquía del modo que se expresa*. En realidad se prorrogaban sus efectos y lo más importante de cara a esta investigación, se determinaba que *"Los párrocos cobrarán la Manda pia forzosa bajo su responsabilidad sin salario ni emolumento alguno al mismo tiempo que sus derechos y los demás del funeral, ..."*. La liquidación de esas retenciones se producía cada cuatro meses a manos de las Contadurías de provincia. Sin embargo, la obligación formal recaía antes del pago, y ésta se cumplía frente a los intendentes facilitando los párrocos a éstos las listas de todos los finados durante ese tiempo. (*Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.825, ...*, cit. pp. 237-242).

La permisión y promoción por parte del Estado de ese sistema fiscal de la Iglesia, coincidía con los intentos presupuestarios de la monarquía absolutista para generar más ingresos de cara a sanear los números del Erario público. Producto de esos intentos, se pueden señalar algunos supuestos de doble imposición, donde un mismo hecho imponible le correspondía al Estado y a la Iglesia. Ante ello, se iban arbitrando soluciones concretas para cada caso, donde de forma general, la Iglesia dejaba de ingresar sus derechos en favor de los del Estado, pero resulta muy interesante examinar la forma en que se llevaban a cabo las negociaciones, puesto que se entablaban conversaciones directamente entre el Estado y la Iglesia Romana. Un ejemplo de ello lo constituía la Real Cédula de 31 de marzo de 1.828, por la que se mandaba cumplir el Breve de S.S. que en ella se insertaba, declarando exentos del subsidio del Clero los diezmos laicos de Cataluña, y las primicias que en Aragón administraban los Magistrados; y al mismo tiempo se prorrogaba por otros seis años la facultad de exigir el citado subsidio⁴⁶. Otro supuesto de doble imposición que se resolvía a favor del clero aparecía contenido en la Real orden de 24 de noviembre de 1.831, mandando que no se cargaran contribuciones civiles a los bienes que pagaban subsidio del clero⁴⁷.

⁴⁶. *Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.828*, Tomo Decimotercero, Madrid en la imprenta real, 1.829. pp. 61-67.

⁴⁷. *Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.831*, Tomo Decimosexto, Madrid en la imprenta real, 1.832. p. 366.

3. ENSEÑANZA

Antes de la liberalización de Fernando VII, la propia Regencia ya había derogado el sistema de enseñanza del Trienio, y reinstauraba las normas que regían el sistema educativo en España antes del 7 de marzo de 1.820. Nos referimos al Decreto de 24 de septiembre de 1.823, para que en toda las Universidades y Seminarios Conciliares del Reino se enseñara, por ahora, lo dispuesto en la circular del Consejo real de 27 de octubre de 1.818⁴⁸.

Sin embargo, tras esa disposición, no era difícil verificar por los propios absolutistas como su sistema se había quedado desfasado, y como la realidad del momento no se adaptaba a lo que reflejaban esos planes.

Por ese motivo, algo menos de dos años después, se abordaba una reforma integral del sistema educativo. Se trataba de la reforma de los estudios en las escuelas de primeras letras e incluso con fecha anterior, la reforma de la enseñanza universitaria.

Para su estudio comenzamos con la reforma de la base de la enseñanza, es decir, la operada en las escuelas de primeras letras. Este arreglo se efectuaba mediante el Real Decreto de 16 de febrero de 1.825 por el que se aprobaba y mandaba poner en ejecución el plan adjunto y reglamento de escuelas de primeras letras⁴⁹.

⁴⁸. *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ...*, cit. p. 128.

⁴⁹. *Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.825, ...*, cit. pp. 51-88.

La religión en esta primera enseñanza estaba presente con un gran peso específico. Se concretaba un proyecto ambicioso detallado en un Reglamento compuesto por 207 artículos. Se trataba de un Reglamento técnicamente muy completo, donde a través de sus diferentes Títulos se pretendía una nueva regulación integral de esta primera enseñanza.

En lo relacionado con *las escuelas y su diferente clasificación*, en primer lugar se expresaba la necesaria creación de centros docentes, puesto que establecía la implantación de escuelas de primeras letras en todos los pueblos que llegaran a los 50 habitantes. Se clasificaban conforme a las siguientes categorías de primera clase, de segunda, de tercera y de cuarta.

La iniciativa privada era permitida para la creación de estas escuelas. Sin embargo, lo contenido en el reglamento al respecto fue poco después desarrollado, en base a diferentes disposiciones. De entre ellas se debe destacar la Circular de 26 de marzo de 1.825, por la que se incluía una Real orden sobre las circunstancias que habían de concurrir para abrirse por particulares Colegios o Casas de pensión para la enseñanza de la juventud⁵⁰. Concretamente se prescribían los siguientes requisitos: la persona que debía estar al frente (como director), podía ser eclesiástico o seglar, pero con cualidades específicas. En el caso de un seglar, debía tener bien conocida moralidad y conducta docente. Sin embargo, si se trataba de un eclesiástico, debía contar simplemente con testimonio suficiente emitido por el Prelado donde constara de igual forma su conducta y aptitud para la dirección del centro⁵¹. Los distintos docentes debían

⁵⁰. Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.825, cit. pp. 108-110.

⁵¹. Veasé como la diferencia estribaba en que la persona seglar debía probar su "moralidad, conducta y demás calidades a este propósito", y el eclesiástico sólo su conducta y aptitud. La moralidad se daba por supuesta con la emisión del certificado del Prelado correspondiente.

de ostentar su oportuna titulación. En todo caso, el dato más interesante, a nuestro juicio, era la *necesaria autorización previa* antes de su constitución. Los trámites estaban perfectamente definidos. En primer lugar se debía confeccionar por el Director del centro una especie de proyecto docente denominado "Reglamento de orden interior con que ha de gobernarse el establecimiento", que debía hacer especial incapié a las partes de: " ... gobierno de los maestros, económica y disciplina moral y religiosa. ...". Todo ese proyecto se presentaba ante el Consejo, y tras las observaciones oportunas, la decisión de autorizar su constitución recaía en manos de Rey. Con lo cual, la participación de la iniciativa privada, tras el cumplimiento de los requisitos señalados, se hacía depender de la discrecionalidad del monarca, cuya decisión era firme⁵². Dentro de esta enseñanza privada, aparecía también la conocida "enseñanza doméstica", puesto que se decretaba que los maestros autorizados de escuelas públicas podían tener en sus casas algunos niños cuyos padres o tutores les hubiesen confiado.

En todo caso, se debe afirmar que se intentó potenciar la creación de escuelas privadas de primeras letras. En este sentido, se puede citar la Real orden de 30 de abril de 1.826, para que no obstante el nuevo Reglamento de Escuelas de primeras letras se permitiera abrirlas a los maestros examinados, como lo han hecho hasta aquí⁵³.

Volviendo al estudio de esa norma marco de primera enseñanza, su Título II se dedicaba a las materias y los libros de enseñanza. A este respecto se configuraba un contenido mínimo para todas las escuelas, que después

⁵². Este control de oportunidad, a la postre, lo que contenía era la restricción del acceso a la creación de centros docentes para aquellos que pudieran tildarse de contrarios al régimen, con que, en todo caso, se aseguraban que en la educación primaria no entrarían corrompidas ideas liberales.

⁵³. *Decretos del Rey ... año 1.826, ...*, cit. pp. 110-111.

dependiendo de la clase de las mismas se podía aumentar. A este respecto, se señalaba que *"... En todas las escuelas del Reino, y hasta en las de la menor aldea, se enseñará a los niños la doctrina cristiana, leer y escribir correctamente, la ortografía, las cuatro reglas de contar por números enteros, y las de denominados menos ..."*.

En lo relacionado con la enseñanza de la doctrina cristiana, el Ordinario de la diócesis era el encargado de señalar el catecismo "básico" necesario para su enseñanza, y en las escuelas de primera, segunda y tercera clase la exigencia era mayor, y se pasaba de un catecismo esencial, a otras obras más completas⁵⁴.

Este cuidado detalle en la enseñanza de la religión, contenía incluso obligaciones para con los profesores, puesto se les obligaba a que las clases de doctrina cristiana estuvieran documentadas mediante textos más o menos complicados dependiendo del tipo de escuela al que pertenecieran⁵⁵.

Esto representaba un cambio radical con respecto al sistema anterior, toda vez que pasaba de explicarse el "catecismo político", a simplemente explicarse "el catecismo". La diferencia es elocuente, y el motivo claro: evitar una vez más que la enseñanza más básica se convirtiera en enseñanza política de los más jóvenes, de suerte que de adultos no abrigaran ideas de cambio o liberales.

⁵⁴. A este respecto el texto literal del reglamento señalaba "... ; y en las Escuelas de primera, segunda y tercera clase se ampliará la instrucción, o por el Compendio histórico de la Religión de Pintón, o por los interrogatorios del Catecismo histórico de Fleuri. ..." (Art. 17).

⁵⁵. Se obligaba a impartir las lecciones conforme al Catecismo del Concilio de Trento y de Pouget, para las de primera y segunda clase. Los de tercera clase debían seguir, al menos, uno de estos. y para los de cuarta era suficiente con el explicado por Ripalda y Astete. (Art. 25).

El Título siguiente se dedicaba a los métodos de enseñanza. Conviene destacar de este capítulo la determinación concreta que prescribía que para aprender a leer se usaría de la lectura de los textos católicos señalados.

La influencia de la Iglesia en la enseñanza no sólo se limitaba a la enseñanza de la religión, ni a que los niños aprendieran a leer con los catecismos y obras religiosas, o a la memorización de oraciones para ceremonias católicas. Su preponderancia llegaba a la fiscalización de estos centros mediante todas las vías posibles:

En primer lugar, se puede señalar la Junta Superior de Inspección⁵⁶ de todas las Escuelas del Reino. Estaba encargada de la ejecución y puntual cumplimiento de este plan en todas las escuelas del reino sobre las que ejercía una superior autoridad, inspección y vigilancia. Esas funciones en la práctica llegaban hasta el extremo control de las impresiones o publicaciones de los textos que se enseñaban en las escuelas.

Esa Junta Superior era asistida en un segundo término por las Juntas de Capital⁵⁷, quienes eran las encargadas de inspeccionar y vigilar las escuelas de provincia, celebrar oposiciones y exámenes, formar las censuras, expedir certificados, y velar por la más religiosa y esmerada enseñanza en las escuelas de primeras letras.

⁵⁶. Su composición obedecía al siguiente detalle: Un Ministro del Consejo Real, como presidente, y un Eclesiástico condecorado, ambos nombrados por S.M., el Provincial de las escuelas pías de Castilla y dos maestros de primera clase que también eran nombrados por el Rey, junto a un secretario sin voto.

⁵⁷. Se establecía la formación de una Junta por cada Capital de Provincia, compuesta por el Regente de la Cancillería o Audiencia, donde éstas existieren, y donde no, del Corregidor o Alcalde mayor, de un Eclesiástico condecorado nombrado por el Diocesano, quienes nombraban tres maestros acreditados y un secretario.

A su vez, las Juntas de Capital estaban seguidas de las Juntas de Pueblo⁵⁸, y eran estas últimas las que representaban el último peldaño de esa ramificación en el control de la enseñanza. Sus funciones principalmente se resumían en la inspección y vigilancia. En este sentido tenían obligación de visitar las escuelas cada dos meses. Sin embargo, cualquiera de los individuos que componían dichas Juntas podían realizar visitas por sorpresa siempre que lo estimaran conveniente, y el objeto aparecía claramente determinado el reglamento "*... inspeccionando por las clases la instrucción y método de enseñanza, corrigiendo a los niños desaplicados o díscolos, y amonestando privadamente a los maestros y pasantes que no desempeñen sus obligaciones, o dando cuenta a quien competa cuando fuere necesario.*" La fiscalización de la enseñanza cristiana y de las prácticas religiosas era otra de sus funciones principales⁵⁹.

En todo caso, se determinaba que esta potestad pertenecía a los Obispos y Párrocos, y por ello, para los ascensos de los maestros y pasantes era necesario el visto bueno de éstos, que se expresaría para los casos donde hubieren demostrado suficiente dedicación y empeño en sus funciones.

Pero esa labor de investigación depositada en manos de la Iglesia se aumentaba todavía más en la figura de los Obispos, puesto que se les autorizaba para que visitaran las Iglesias de sus diócesis, con posibilidad de amonestar a los maestros que enseñasen errores en materia de doctrina o de moral cristiana⁶⁰.

⁵⁸. Su composición era más limitada, puesto que se configuraba con el Corregidor o Alcalde mayor, o primer Alcalde ordinario respectivamente, del párroco o de los dos más antiguos donde hubiere muchos, y del Procurador Síndico personero.

⁵⁹. Art. 153.

⁶⁰. Así se expresaba en el Art. 156: "A los M.RR. Arzobispos y Obispos se ruega y encarga conserven y redoblen el celo que tanto les recomienda y ha recomendado siempre a los Prelados de España: promoviendo el establecimiento, dotación y buena enseñanza en las Escuelas de primeras letras; visitándolas aun cuando algunas estuvieren bajo la inmediata protección Regia, al mismo tiempo que hagan la visita a sus parroquias; (continúa...)"

Lógicamente, se acentuaba su poder sobre las Escuelas Gratuitas creadas por la Iglesia, al señalarse expresamente que: *"La misma inspección y vigilancia se encarga a los Prelados Regulares sobre sus Escuelas gratuitas. Nombrarán maestros instruidos y piadosos, los visitarán residenciándolos y penándolos cuando fuere preciso, o según su mérito, y con exenciones análogas a las que sus leyes conceden a los Religiosos que siguen las carreras de Cátedra y de Púlpito. ..."*.

En otro orden, el Reglamento se encargaba también de regular los haberes que recibirían los maestros de todas las clases de escuelas y categorías (Catedráticos, maestros, pasantes, etc ...).

Con respecto al contenido de la presente investigación, volvemos a encontrar especialmente interesante el Título XVII *Policía de las Escuelas*⁶¹, y *prácticas religiosas que han de observarse en ellas*. La confesionalidad de la época se veía reflejada claramente en estas disposiciones. Se establecía la necesidad de que en todas las escuelas existiera una estampa de Jesucristo o de la Virgen, a la que los niños debían prestar adoración al entrar y salir de la escuela, y además cada escuela debía tener un Santo protector, cuya imagen debía estar situada en el centro educativo para *"... excitar la devoción de los niños. ..."*. Dentro de las prácticas religiosas, se establecía la obligación de los estudiantes

⁶⁰(...continuación)

enseñanza en las Escuelas de primeras letras; visitándolas aun cuando algunas estuvieren bajo la inmediata protección Regia, al mismo tiempo que hagan la visita a sus parroquias; suspendiendo a cualesquiera Maestros que enseñen errores en materia de doctrina o de moral cristiana; y dando cuenta de esta providencia para que se provea de otros, sin perjuicio de las canónicas que por su autoridad divina y con arreglo a los Canones acordaren".

⁶¹. En lo que se conocía como Policía de escuelas, destacaban las disposiciones que prohibían extremos tan curiosos como la existencia cercana de una taberna, y también se resaltaba fuertemente la necesidad de que las escuelas de niñas estuvieren separadas de las de los niños. (artículos 181 y 179 -respectivamente-).

de llegar a las escuelas antes de las horas de clase para la práctica de oraciones, repitiéndose esa práctica antes de la salida de los estudiantes. Además de esa oración de entrada a los centros, las clases comenzaban mediante otra serie de oraciones, y cuando se cumplía el tiempo fijado para cada clase se formulaba otra oración. También se establecían otras prácticas religiosas excepcionales, puesto que se indicaba que cuando por las inmediaciones de la escuela pasase el Santísimo Viático para los enfermos, saldría el maestro con los niños a la calle y acompañarían su paso cantando alabanzas al Santísimo hasta la iglesia y reserva del Sagrario. De cualquier forma, las clases terminaban rezando el Rosario durante el último cuarto de hora⁶².

Las prácticas religiosas incluían también la confesión y la comunión, pero se reservaban lógicamente para aquellos niños con edad suficiente. Sin embargo, los que no tenían suficiente edad, asistían de forma pasiva.

Por lo que respecta a la enseñanza superior o universitaria, antes de comenzar con su desarrollo, hay que señalar la denominada "purificación de catedráticos y alumnos" que se operó en las Universidades españolas tras el triunfo de los realistas. Nos referimos a la Real cédula de 21 de julio de 1824 que extendía a las distintas Universidades el sistema de purificaciones⁶³. Dicha "purificación", siguiendo a Peset, se puede afirmar que se realizaba por una Junta

⁶². Muestra de este detalle contenido en los artículos 184 y siguientes se puede citar, literalmente, el artículo 191, puesto que, resume cual era el fin que se perseguía con todas esas prácticas: *"A las prácticas religiosas y a la enseñanza del modo de ayudar en Misa, de oírla devotamente y estar en la Iglesia con el debido respeto, procurando que los niños se reúnan en un sitio separado y a la vista del maestro; añadirá este las instrucciones oportunas sobre la principal importancia de las buenas obras, inocencia del corazón y pureza de costumbres"*.

⁶³. *Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII, y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. en los seis meses contados desde 1º de julio a fin de diciembre de 1.824*, Tomo Noveno, Madrid en la imprenta real, 1.825. pp. 106 y ss.

especial formada, en las Chancillerías y Audiencias, por su Regente, un Ministro, un Arzobispo, Obispo o eclesiástico, un Rector de una de las Universidades de su territorio, y un doctor. Cinco miembros, nombrados por el Consejo los tres primeros; los otros, previo examen de su conducta, por aquellos tres, quienes también elegían el Secretario. Se precisaban razones y casos en que debía proceder, así como se declaraban vacantes y dispuestas a nueva oposición las cátedras de los impurificados. Se dictaban asimismo reglas más benévolas, para la purificación de los alumnos⁶⁴.

Efectuada esa acotación previa, el plan de estudios y arreglo general de las universidades españolas se aprobaba mediante el Real decreto de 14 de octubre de 1.824⁶⁵. Sin entrar a enjuiciar su contenido⁶⁶, se puede afirmar que recogía una defensa a ultranza de la religión católica, que implicaba la necesidad de acudir a funciones religiosas por parte de los estudiantes de quinto curso, y además de comulgar en determinados momentos del año académico, bajo la sanción de pérdida de curso.

En todo caso, la colaboración de la Iglesia en la enseñanza fue solicitada por el propio Estado, puesto que como ha señalado Martí Gilabert, "se efectuó en

⁶⁴. Peset Reig, M., *La enseñanza del derecho y la legislación sobre universidades, durante el reinado de Fernando VII (1.808-1.833)*. Madrid, 1.968. p. 339-340.

⁶⁵. *Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII, y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. en los seis meses contados desde 1º de julio a fin de diciembre de 1.824, ...*, cit. pp. 230 y ss.

⁶⁶. Como curiosidad, valga señalar que, por lo que respectaba a los estudios de jurisprudencia, y el consiguiente ejercicio de la abogacía, se limitaba su ejercicio desde la edad de 25 años, de forma que no se expedía ningún título de licenciado en derecho a nadie que no tuviera cumplida esa edad (Real orden de 8 de junio de 1.826, para que a ninguno se le expida título de abogado que no haya cumplido 25 años. -*Decretos del Rey ... año 1.826*, cit. pp. 131-132-).

base a motivos doctrinales, políticos y económicos. Se instaba a los religiosos a que abrieran sus escuelas, por carecer de medios el Erario, teniendo en cuenta que las limosnas que recibían de los pueblos merecían esta correspondencia⁶⁷". En esa misma línea, se puede citar la circular de 25 de marzo de 1.824, por la que se excitaba el celo de los Regulares, para que se dedicaran a la enseñanza de la juventud, conforme a la Real orden de 19 de noviembre de 1.815⁶⁸.

4. LIBERTAD DE IMPRENTA

La libertad de imprenta en su concepción liberal, tras la frustración del Nuevo Régimen, vuelve a desaparecer en nuestro país, ajustándose a las prescripciones existentes antes del 7 de marzo de 1.820. Pero, junto a esas disposiciones antiguas, se arbitran nuevos mecanismos de control. Como se ha señalado, la creación de la policía⁶⁹ tuvo consecuencias en el derecho de libertad de imprenta, toda vez que se la dotaba de competencias en la fiscalización de este derecho. Sobre las funciones encomendadas, hay que señalar que debían cuidar que no entrara en nuestro país ninguna publicación, independientemente de su idioma de publicación, sin que aquél que la introdujera tuviera orden expresa para ello⁷⁰. Debiendo, previas las averiguaciones oportunas, detener por orden del Subdelegado de Imprentas, o de los particulares de las provincias, secuestrar los

⁶⁷. Martí Gilabert, F., *Iglesia y Estado ...* , cit. p. 154.

⁶⁸. *Decretos del Rey Don Fernando VII ... junio de 1.824, ...* , cit. pp. 282-283.

⁶⁹. Real Cédula de 13 de enero de 1.824, se mandaba guardar y cumplir el Real Decreto inserto que comprendía de las reglas que habían de observarse en el establecimiento de la Superintendencia general de la Policía del Reino, con lo demás que se expresaba (*Decretos del Rey Don Fernando VII ... junio de 1.824, ...* , cit. pp. 49-63).

⁷⁰. Literalmente el Art. 13, 7ª contenía: "... sin que el introductor presente orden expresa Mía, o la correspondiente licencia del Consejo. expedida en vista del ejemplar remitido previamente a él, u oído el Subdelegado general de imprentas y librerías del reino".

ejemplares que se hubieran penetrado en España sin autorización, arrestando a los sujetos que los detentaren. Y también debían impedir no sólo la entrada y circulación, sino incluso la lectura de los periódicos, folletos, cuadros satíricos, caricaturas u otros cualesquiera papeles o estampas en que se atacara a la persona del Rey, o se ridiculizaran o censuraran las providencias de su gobierno, aprehendiendo a los portadores o autores de dichos impresos. Y además, hay que señalar la existencia de una circular de 14 de octubre de 1.824 donde se ordenaba la entrega de todos los libros, folletos, láminas, etc ... impresos en España desde el 1 de enero de 1.820 a septiembre de 1.823, o introducidos del extranjero en ese tiempo, así como los prohibidos anteriormente por la Inquisición, en plazo de un mes. Con lo que se pretendía, no ya sólo efectuar un control mucho más rígido que el que operaba en el Trienio, sino que se pretendía llevar a cabo con más de tres años de retraso la censura que según el criterio absolutista debían haber encontrado todos los impresos.

Con respecto a los escritos elaborados dentro de la Iglesia, (Breves, pastorales, etc ...), hay que señalar que, a grandes rasgos, el absolutismo, pese a su comunión con la Iglesia, empleaba el mismo control que había previsto nuestro Derecho en el Trienio Liberal. Esta afirmación se apoya en diferentes disposiciones, entre otras, la Real orden de 26 de agosto de 1.825 comunicada al Consejo Real para que los Prelados diocesanos dirigieran a este Supremo Tribunal diez ejemplares de los edictos pastorales que publiquen o hayan publicado⁷¹. O también la Circular de 1 de julio de 1.829, que incluía una Real orden para que se previniera a los Prelados eclesiásticos del Reino que no publicaran ningún edicto de la Sagrada Congregación del Índice, sin que se le hubiera dado el pase correspondiente por el Consejo⁷².

⁷¹. *Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.825, ...*, cit. pp. 262-263.

⁷². *Decretos del Rey Don Fernando VII ... año 1.829, ...*, cit. pp. 197-198.

Se partía de un control férreo de cualquier impreso, puesto que se era necesario identificar cualquier escrito. Y así, en cumplimiento de la legislación vigente, se recordaba que no se debía dar curso a papeles anónimos o sin firma de persona conocida, y que se procurara averiguar y castigar los autores y cómplices de tales impresos⁷³. Ese aviso se dirigía a las autoridades; concretamente a Tribunales, Jueces y otras menores.

Con respecto a la censura, no sólo se le aplicaban las normas aprobadas hasta 1.820, sino que se aprobaron numerosas disposiciones a tal efecto. Así se verifica con la Real orden de 17 de marzo de 1.826, para que se llevaran al debido efecto las Reales cédulas y circulares de 11 de abril, 22 de diciembre de 1.824, 17 de junio y 11 de agosto de 1.825 sobre la entrada y circulación de libros impíos, estampas y pinturas obscenas⁷⁴, toda vez que su título ya nos muestra la gran creación normativa a este respecto.

Esta censura con respecto a los temas que versaban sobre religión, como es sabido, era más exhaustivo. Y además, no sólo se limitaba a los impresos de todo tipo que se confeccionaban en España, sino que se efectuaba también a los impresos que editados en cualquier otro país y cualquier idioma, llegaban a nuestro país. El control sobre estos últimos era más difícil, puesto que una vez que entraban en España encontraban la mayoría de las veces la impunidad ante sus excesos. Por ello se tomaba una medida muy drástica que pretendía inmunizar o aislar a España de este tipo de escritos, con independencia del idioma o el lugar de procedencia, mediante la Real orden de 27 de febrero de 1.830, prohibiendo

⁷³. Concretamente se trató de la Real orden de 21 de julio de 1.826 para que observándose lo que previenen las leyes no se de curso a papeles anónimos o sin firma de persona conocida, y que se procure averiguar y castigar los autores y cómplices de tales papeles (*Decretos del Rey ... año 1.826. cit. pp. 143-144*).

⁷⁴. *Decretos del Rey ... año 1.826. cit. pp. 77-78*.

la entrada en el Reino de las obras que trataran sobre materias de Religión⁷⁵.

Para la regulación de la libertad de imprenta durante el absolutismo, llegó un momento en que se comprobó la imposibilidad de continuar con la vieja regulación que sustentaba este derecho (Novísima Recopilación, y de decretos, órdenes y circulares señalados). Por este motivo, en 1.830 nacia en España la primera elaboración de una norma marco para este derecho durante el reinado de Fernando VII.

Nos referimos a la Real Cédula de 12 de julio de 1.830 que contenía el Reglamento de imprentas⁷⁶.

Técnicamente se puede significar que resultaba en algunos aspectos impreciso e incompleto, que en todo caso sin desprenderse de la tradición, y con estricta sujeción a la censura previa, intentaba establecer claramente todos los trámites necesarios para que se pudiera llevar a cabo el derecho de imprenta, pero siempre sujeto a importantísimas restricciones.

La exposición de motivos ya advertía de su contenido, "*... Que por las leyes del reino comprendidas en el título XVI, Libro VIII de la Novísima Recopilación, se reconoce la consideración, cuidado y escrupulosidad con que todos los Sres. Reyes mis predecesores, desde los Católicos, han mirado la delicada materia de la impresión de libros, la introducción en el reino de los extranjeros, y el curso de las estampas y otros artefactos peligrosos, a fin de*

⁷⁵. *Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.830*, Tomo Decimoquinto, Madrid en la imprenta real, 1.831. pp. 69-70.

⁷⁶. *Decretos del Rey ... año 1.830, ...*, cit. pp. 278-285.

contener y evitar se ofenda en lo más mínimo la pureza de nuestra religión católica, las sanas doctrinas y las costumbres públicas, sin impedir el de las obras que puedan contribuir al fomento de las ciencias, industria y artes, ...".

El fin de este esperado reglamento estaba perfectamente delimitado: contribuir al incremento de lo podíamos denominar cultura, sin que existiera menoscabo en el orden público.

La regulación que contenía se puede calificar de severa y rígida, puesto que, entre otros, contenía los siguientes extremos:

1). En cuanto a la impresión de cualquier tipo de folletos -en sentido genérico: libros, periódicos, e impresos en general-, era requisito previo contar con la licencia del Consejo, del subdelegado general de imprentas o de los particulares de las respectivas provincias⁷⁷, pero no se trataba de una licencia para imprimir cualquier impreso, sino que se trataba de una autorización que era necesario renovar para cada concreta impresión. Y que una vez concedida, cuando estaba impresa la obra, y antes de su distribución, por esas mismas personas se cotejaba con el borrador autorizado.

2). Por lo que respecta a los autores, su nombre debía figurar en sus obras y no podían usarse seudónimos⁷⁸. Por lo que en cualquier impresión figuraba

⁷⁷. La personalidad de los sujetos que debían prestar su consentimiento concediendo la autorización a los impresores aparecían regulados en su punto segundo. Así, si las licencias eran expedidas por el Consejo, las prestaba un escribano de la Cámara de Gobierno; si era el subdelegado, las firmaba éste personalmente.

⁷⁸. Se regulaba el caso específico donde por las circunstancias de la publicación fuera necesario incluir el nombre del autor, se hacía saber a las personas que debían autorizar dicha obra, y si éstos lo autorizaban se podía evitar que el nombre completo del autor fuera en la obra, pero en todo caso, quedaba consignado en el original que retenían, y en
(continúa...)

siempre el nombre del autor, junto con el nombre del editor y el lugar y fecha de la edición.

3). La censura previa de todo tipo de obra otorgaba un régimen preferencial a la figura de los censores, puesto que estaba especialmente protegida, de suerte que la identidad de los censores no era conocida por los autores.

4). La religión católica ya se encontraba especialmente protegida antes de esta disposición, por lo que ahora se continuaba con esa línea de forma decidida. En este sentido, se contenía: *"... Se prohíbe la impresión de todo libro o papel grande o pequeño que sea contra nuestra santa y única religión católica, o en que se abuse de los sagrados textos para materias profanas en cualquier idioma que esté escrito, ..."*.

Esa especial protección de la religión católica se dispensaba también para aquello que podemos denominar "orden público", y que además de la propia religión contenía: las buenas costumbres, los usos legales, la forma de gobierno. y el respeto a las leyes. Del contexto de esta disposición se puede afirmar que tras esa especie de "bloque primario" se situaba otro, donde también el legislador decididamente quería evitar intromisiones. En ese segundo bloque cabe destacar el respeto a las autoridades, tribunales, cuerpos del Estado, jueces y particulares.

Además de esa autorización concreta para cada publicación, los editores debían contar con la debida autorización para ejercer su oficio⁷⁹. Y tener un

⁷⁸(...continuación)

el impreso se consignaban las iniciales.

⁷⁹. El apartado decimosegundo contenía: *"Ninguna persona podrá establecer prensa en (continúa...)"*

domicilio que debía ser dado a conocer al Consejo y a su ministro juez subdelegado general de imprentas.

Para terminar con el somero estudio de este derecho, hay que afirmar que la protección de esas materias citadas no sólo se dispensaba contra escritos, sino que se alargaba también en las estampas o dibujos⁸⁰.

5. EL ESTATUTO DEL CLERO

5.1 OBLIGACIONES POLÍTICAS DEL CLERO

Como se ha señalado, la mayoría de los eclesiásticos se habían enfrentado al Nuevo Régimen, pero otros se habían identificado con el movimiento liberal, e incluso habían sido promovidos por sus convicciones políticas, sin olvidar la figura de los secularizados, a los cuales, no sólo se les había pensionado, sino que también se les había promocionado a ciertos beneficios eclesiásticos.

Este planteamiento previo que Fernando VII se encontraba, le obligaba a tomar algunas medidas al respecto. Los primeros en comprobar la crudeza de sus determinaciones fueron los secularizados, nos referimos a la Circular de 28 de abril de 1.823, por la que se mandaba a los Prelados que recogieran las licencias

⁸⁰(...continuación)

esta Corte no siendo con licencia del Consejo o de su ministro subdelegado general, que deberá darse por escrito y refrendada de escribano, y en las demás ciudades y lugares del reino, de los respectivos jueces subdelegados.

⁸¹. Se puede señalar, entre otras, la Real orden de 16 de julio de 1.830, disponiendo lo conveniente para que no se introdujeran ni circularan estampados de figuras obscenas en ninguna clase de géneros. (*Decretos del Rey ... -año 1.830-, ... , cit. pp. 287-288*).

y títulos que se hubieran expedido a favor de los Regulares secularizados, quienes deberían restituirse a los pueblos de su naturaleza, con lo demás que se expresaba⁸¹. Como señalaba su título, se requería a los Obispos para que procedieran a retirar las licencias de predicar y confesar, junto con los títulos⁸² otorgados a favor de esta clase del clero. La idea estaba clara: los Prelados debían procurar sustituirles con eclesiásticos seculares o monjes de los que hubieran salido del claustro "... en fuerza de las expulsiones arbitrarias decretadas por el Gobierno revolucionario; ..." y en su defecto por religiosos que hubieran permanecido en el claustro sin que su conducta hubiera dado lugar a censura. Y tras esta determinación, su destino no era otro que la restitución a sus pueblos, claro está, guardando silencio sobre el abono de pensiones, lo que nos indicaba su finalización junto con el régimen constitucional.

Unos meses más tarde, esta clase del clero veía como se endurecía aún más la represión hacia ellos mediante la Orden circular de 31 de junio de 1.823, para que se recogieran las licencias de confesar y predicar, expedidas en favor de los Regulares secularizados, como también los títulos de Curatos, de servidores, beneficios y Capellanías⁸³. Se trataba de un aspecto más de la declaración de nulidad de todos los actos anteriores del Gobierno Constitucional, pero dirigido concretamente al sector de los secularizados.

El segundo extremo que preocupaba a Fernando VII era la promoción de los eclesiásticos adictos al sistema. Por ello, las determinaciones que habían supuesto la promoción de eclesiásticos durante el Trienio, debían ser

⁸¹. *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ...*, cit. 1-2.

⁸². Literalmente se mencionaba que: "... , como también los títulos de economatos de Curatos, servidores de beneficios, Capellanías, y administraciones que se les hayan concedido en estos tres último años, ...".

⁸³. *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional. ... año 1.823, ...*, cit. p. 14.

consideradas también nulas por la existencia del citado manifiesto⁸⁴. Sin embargo, este hecho encontró la individualización de normas particulares para su desarrollo, como la Orden circular de 16 de junio de 1.823, en la que se prevenía a los Ordinarios que separasen a los eclesiásticos de las iglesias que se les hubieran encargado durante el pretendido régimen constitucional, y de aquellos cuyas cualidades canónicas no les constaran⁸⁵. Se determinaba que todos los eclesiásticos que hubieran sido puestos al frente de iglesias en el período constitucional debían separarse de sus destinos⁸⁶, y el motivo alegado era la designación directa del poder civil sin la debida participación de la Jerarquía eclesiástica, y más concretamente, la oportuna autorización de los Ordinarios.

Previamente a esta orden se había determinado que los traslados de eclesiásticos de una diócesis a otra eran nulos⁸⁷.

⁸⁴. Nos referimos al conocido manifiesto de S.M. de 1 de octubre de 1.823 declarando haber carecido de entera libertad desde el día 7 de marzo de 1.820, hasta el 1º de octubre de 1.823, por lo que eran nulos y de ningún valor todos los actos del Gobierno llamado constitucional: y en cuanto a lo decretado y ordenado por la Junta provisional y la Regencia, aquella creada en Oyarzun, y ésta en Madrid, lo aprueba S.M. , entendiéndose interinamente. *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ...* , cit. pp. 147-149.

⁸⁵. *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ...* , cit. pp. 38-39.

⁸⁶. El texto literal era bastante duro: *"En medio del desorden y anarquía que desgraciadamente ha reinado durante el pretendido sistema constitucional se han encargado muchas parroquias vacantes a eclesiásticos, de cuya suficiencia y demás cualidades que recomiendan los sagrados canones no constaba a los respectivos Ordinarios, ..."*.

⁸⁷. Mediante la Orden circular de 5 de junio de 1.823, expedida por el Ministro de Gracia y Justicia, en que se mandaba que los eclesiásticos trasladados de una diócesis a otra en virtud del decreto de Cortes de 1º de noviembre de 1.822. se restituyeran a sus respectivas iglesias. (*Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ...* , cit. p. 17).

Como consecuencia directa de todo lo anterior, los eclesiásticos que habían sido apartados, o bien que habían huido de sus ocupaciones en el régimen anterior, ahora se tenían que ver repuestos en la situación que existía el 6 de marzo de 1.820. A este fin se aprobaron numerosas disposiciones; de entre ellas, se puede destacar la Orden circular de 22 de julio de 1.823, para que los Obispos y demás Prelados compelieran a los Clérigos que se hubiesen ausentado voluntariamente de sus iglesias a residir en ellas⁸⁸. Se trataba de una disposición que recomendaba que los eclesiásticos huidos en el régimen constitucional de sus parroquias regresaran a sus tareas, una vez que ya se había restablecido el orden anterior.

5.2 ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS AL CLERO

La residencia de los eclesiásticos ha sido a lo largo de este siglo XIX un caballo de batalla para el Estado; ya a comienzos de siglo se han señalado normas a este respecto. Pero ahora el panorama que se nos presenta, por un lado, es la huida de los eclesiásticos contrarios al régimen liberal de sus obligaciones, que tras el triunfo de los realistas, regresan a sus ocupaciones, y por otro lado, resurge el mismo problema planteado en el período de 1.814 a 1.820, es decir, la ausencia injustificada de los eclesiásticos de sus ocupaciones. En este sentido, nos encontramos con la Real orden de 8 de enero de 1.824, para que los prebendados y párrocos residieran en sus respectivas iglesias⁸⁹.

Era una práctica común que muchos de los eclesiásticos llegaban a la Corte y subsistían pidiendo limosna, (no sólo los secularizados en el Trienio). Por

⁸⁸. *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ...*, cit. p. 75.

⁸⁹. *Decretos del Rey Don Fernando VII ... junio de 1.824, ...*, cit. p. 13.

ello se aprobaron disposiciones tendentes a evitar la residencia de los eclesiásticos en la Corte y en los Reales Sitios. De entre estas disposiciones, se puede citar la Real orden de 23 de octubre de 1.832, permitiendo a los eclesiásticos venir a Madrid y Sitios Reales, del modo que se expresaba⁹⁰. Resulta curioso el razonamiento empleado, puesto que se menciona que su situación no podía ser distinta a la de las demás clases del Estado, por lo que se les sitúa y compara con el resto de funcionarios públicos incluso, en un momento en el que no recibían la dotación directa del Estado.

6. EL CONSEJO DE LA CÁMARA

Cuando se aprobó que toda la obra del Trienio se debía tener por nula, una de sus consecuencias fue la puesta en funcionamiento, de nuevo, del Consejo de la Cámara, como órgano que debía conocer de los asuntos eclesiásticos. En este sentido, y aunque no hubiera sido necesaria su promulgación, al retrotraer Fernando VII en su manifiesto a España a 1.820, se quiso señalar expresamente su continuidad. Nos referimos a la orden de 30 de mayo de 1.823 expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia, en que se mandaba reunir el Supremo Tribunal de la Cámara para que continuara desempeñando las atribuciones de sus instituto⁹¹.

Como en ocasiones anteriores, esta Cámara era la que conocía de las solicitudes de los eclesiásticos para piezas vacantes. Así se disponía mediante la Real orden de 13 de marzo de 1.824 para que se pasaran a la Cámara todas las solicitudes y expedientes que existieran en esta secretaría de vacantes y piezas

⁹⁰. *Decretos del Rey ... año 1.832, ...*, cit. p. 229.

⁹¹. *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ...*, cit. pp. 13-14.

eclesiásticas⁹². Pero estas disposiciones seguían teniendo su fuente en la Novísima Recopilación de las Leyes de España y más concretamente en las leyes IV y V de del Libro I, Título XV.

7. JURAMENTO

Durante estos períodos absolutistas, el juramento presenta una importancia inferior a la que representaba durante los períodos constitucionales. Aún así, tras la muerte de Fernando VII se pueden señalar algunas disposiciones, como los Juramentos de la Regencia o los juramentos de los diferentes reinos tras la muerte de Rey, aceptando a la Infanta Doña María Isabel⁹³, y el propio juramento de ésta⁹⁴. E, incluso, el juramento que debían prestar los cargos públicos donde se señalaba expresamente que debían afirmar no pertenecer a las denominadas "sociedades secretas", con lo cual se aseguraba su adhesión al régimen⁹⁵.

⁹². *Decretos del Rey Don Fernando VII ... junio de 1.824, ...*, cit. p. 13.

⁹³. Real decreto de 4 de abril de 1.833 mandando a los Reinos jurar como Princesa heredera del Trono a la Serma. Infanta Doña María Isabel Luisa. (*Decretos del Rey Don Fernando VII y de la Reina ... año 1.833, ...*, cit. pp. 84-85).

⁹⁴. Real decreto de 10 de mayo de 1.833, concernientes al juramento de la Serma. Infanta Doña María Isabel Luisa (*Decretos del Rey Don Fernando VII y de la Reina ... año 1.833, ...*, cit. pp. 114-115).

⁹⁵. Circular de 22 de noviembre de 1.833 incluyendo una Real resolución sobre el juramento que deben seguir haciendo los individuos que hayan de ejercer cargos públicos, como se expresa. (*Decretos del Rey Don Fernando VII y de la Reina ... año 1.833, ...*, cit. pp. 285-286).

8. PROTECCIÓN PENAL DE LA RELIGIÓN CATÓLICA TRAS LA DEROGACIÓN DEL CÓDIGO PENAL.

Sobre la protección que se dispensaba hacia la religión católica, se seguían aplicando las normas vigentes en marzo de 1.820, toda vez que el Código Penal fue declarado nulo por la Regencia y confirmado como tal por Fernando VII.

Pero en este sentido, se pueden citar algunas disposiciones especial interés:

Por lo que respectaba al fuero de los eclesiásticos, se derogaba expresamente lo contenido en el Código Penal, fundamentalmente en virtud de dos disposiciones. Nos referimos a Circular de 21 de febrero de 1.832, que contenía la resolución de S.M. para que todos los Tribunales cuando fuera necesaria la declaración de los eclesiásticos en causas criminales, se arreglaran a la circular de 24 de junio de 1.796⁹⁶. Y la Circular de 18 de abril de 1.833 incluyendo una Real orden que prescribe el carácter que debe tener en las causas criminales contra eclesiásticos el acompañando del juez que entienda en ellas⁹⁷.

Por otra parte, y con referencia a la protección de la Religión católica como la única verdadera y profesable en España, hay que señalar que ésta, a pesar de haberse derogado las disposiciones que se contenían en el Código Penal, continuaba siendo protegida por el Estado católico de la misma forma que lo era antes del 7 de marzo de 1.820. Sin embargo, en este período encontramos algunas disposiciones tendentes a proteger la Religión católica prohibiendo cualquiera

⁹⁶. *Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.832*, Tomo Decimoséptimo, Madrid en la imprenta real, 1.833. pp. 19-21.

⁹⁷. *Decretos del Rey Don Fernando VII y de la Reina ... año 1.833, ...*, cit. pp. 90-91.

otra dentro de nuestras fronteras. En este sentido se pueden traer a colación algunas disposiciones, como la Real orden de 21 de agosto de 1.825, señalando el castigo que debían sufrir los Masones aprehendidos en una logia de Granada, y los que se aprehendieran en lo sucesivo⁹⁸.

Más ilustrativa de esa confesionalidad, acompañada de intolerancia religiosa y defensa a ultranza de la religión católica, resultaba la asunción por parte del Derecho español de una Bula emitida por el Papa en la cual se condenaba toda doctrina distinta de la católica. Se trataba de la Real Cédula de 13 de febrero de 1.827, por la que se mandaba guardar y cumplir la Bula inserta de nuestro Santísimo Padre León XII, en la que prohibía y condenaba, de nuevo, toda secta o sociedad clandestina, cualquiera que fuera su denominación⁹⁹. El Rey la incorporaba a nuestro Derecho, y, tras el oportuno pase regio, se reproducía totalmente su contenido y se exigía su cumplimiento en España.

Concretamente se preceptuaba la obligación para con todos los cristianos de no alistarse a "sectas o sociedades secretas", ni ayudarlas, ni fomentarlas, sino que debían denunciarlas ante quien correspondiera. Dicha denuncia conllevaba la prescripción de delatar a sus miembros o cómplices, y señalarlas siempre que se conocieran. Y esas responsabilidades se requerían, puesto que un país como España debía por una parte proteger a la Iglesia, y por otra parte para proteger el orden público estatal, puesto que esas asociaciones implicaban "*... convulsiones políticas ...*".

⁹⁸. *Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.825*, Tomo Décimo, Madrid en la imprenta real, 1.826. pp. 260-261.

⁹⁹. *Decretos del Rey ... año 1.827, ...*, cit. pp. 36-63.

Esas disposiciones venían a desarrollar una práctica efectuada por el Estado desde la creación de la policía¹⁰⁰, puesto que desde su creación se le atribuyó la obligación de perseguir las denominadas "sectas". Concretamente, sobre las funciones de protección a la Religión católica, se establecía que debían *"perseguir las asociaciones secretas, ora sean comuneros, masones, carbonarios o de cualquiera otra secta tenebrosa que exista hoy o existiere en adelante; ora se reúnan para cualquier otro objeto, sobre cuyo carácter reprobado infunda sospechas la clandestinidad de las juntas"*¹⁰¹.

Con respecto a las irreverencias que se cometieran en los templos, encontramos alguna disposición que sustituye a lo contenido en el citado Código Penal. Nos referimos a la Circular de 7 de abril de 1.829, que incluía una Real orden y bando por el que se señalaban las penas que se habían de aplicar a los que cometieran irreverencias en los templos¹⁰².

Las penas eran singulares, y desde luego, hoy impensables, puesto que se contenía que la persona que en cualquier acto de culto se produjera en expresiones o hechos que ofendieran al respeto debido a Dios, sus ministros o el templo, sería castigado con cárcel durante un tiempo de diez años. También se entendía que se faltaba al respeto cuando alguna persona se situara en las puertas de los templos con el sólo deseo de burlarse de las personas que frecuentaban esos lugares sagrados, y por ello se contenía una alta sanción económica o bien se sustituía por cárcel por seis meses. El uso de palabras obscenas también

¹⁰⁰. Real Cédula de 13 de enero de 1.824. se mandaba guardar y cumplir el Real Decreto inserto que comprendía de las reglas que habían de observarse en el establecimiento de la Superintendencia general de la Policía del Reino, con lo demás que se expresaba (*Decretos del Rey Don Fernando VII ... junio de 1.824, ...*, cit. pp. 49-63).

¹⁰¹. Art. 13. 13ª.

¹⁰². Decretos del Rey ... año 1.829. cit. pp. 141-142.

aparecía tipificado con multa o tres meses de prisión.

Tal y como se ha reflejado, aparecía especialmente protegido bajo sanciones desmesuradas la falta de respeto en los momentos en que se realizaban los actos de culto¹⁰³.

¹⁰³. Las disposiciones de este tipo en nuestro Derecho se repitieron con frecuencia, en este sentido, veasé, entre otras, la Orden de la Regencia de 22 de septiembre de 1.823, en la que se reitera la Real orden de 22 de febrero de 1.815, para que el Gobierno cuidara de que se castigaran los escándalos y delitos públicos, palabras obscenas y las irrelevancias en los templos. (Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, cit. p. 124).

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VII

EL ESTATUTO REAL DE 1.834¹

I. EL ESTATUTO REAL DE 1.834

1. INTRODUCCIÓN

Como es conocido, Fernando VII fallecía en el año 1.833 y, tras la polémica de la Ley sálica, quedaba como regente su esposa Doña María Cristina de Borbón en virtud de la minoría de edad de Doña Isabel. Sin embargo, la sucesión en la Corona de España no era un asunto fácil. Hay que tener en cuenta que en caso de no haberse promulgado dicha ley, hubiera recaído la corona en manos de D. Carlos María Isidro, -hermano del Rey fallecido-. Los problemas sucesorios venían a enturbiar más aún los políticos que existían en nuestro país, de suerte que Fernando VII, incluso muerto, volvía a ser el protagonista de enfrentamientos entre españoles.

Esta pugna traería consigo las famosas guerras carlistas², donde con el trono de España como pretexto, se constituían dos bandos perfectamente

¹. Texto aprobado el 10 de abril de 1.834.

². Sobre la guerra civil, y el enfrentamiento carlistas y liberales existen numerosos trabajos. Entre otros, véase: Pirala, A., *Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista*, Tomo 4, Madrid 1.984.

delimitados con ideas políticas antagónicas, por lo que el mapa político se veía enturbiado por la guerra civil entre los Carlistas, partidarios de D. Carlos, quienes representaban al tradicionalismo y absolutismo³, y los partidarios de la hija del rey fallecido, doña Isabel, representantes del liberalismo.

Esa unión de los liberales con la causa de la Reina se cristalizaba en las primeras medidas por las que se cambiaba a varios Capitanes Generales, y movían otros puestos de la Administración Pública, sustituyendo siempre a los realistas más radicales por moderados. Pero quizá la muestra más decidida de cambio estuvo constituida por el Real Decreto de 20 de abril de 1.834, que ampliaba la amnistía, y derogaba las excepciones que contenía⁴. En su virtud se permitía la vuelta a España de todos los liberales exiliados tras el Trienio Liberal. Además, se rehabilitaban todos los empleos, honores y distinciones conferidas en el Trienio Liberal⁵.

³. Las ideas fundamentales del carlismo se pueden resumir, como es conocido, en las siguientes palabras, Dios, Patria, Rey y Fueros. De forma que la Religión, al igual que era columna vertebral del Antiguo Régimen, se convertía en pilar del ideario carlista. Sin embargo, lo que quizá más debe destacarse del carlismo es que esa vieja sociedad clerical y agraria que representaba, fue capaz de defender las estructuras del Antiguo Régimen incluso al precio de una guerra civil.

⁴. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su Real Nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora, y Reales órdenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.834*, Tomo Decimonoveno, Madrid, en la imprenta real, 1.835, pp. 269-270. Esa amnistía llegaba incluso a los representantes directos del Régimen constitucional del Trienio. Nos referimos a los ex-Diputados. (Real Decreto de 7 de febrero de 1.834, ampliando el de amnistía a todos los ex-Diputados a Cortes que estaban fuera del Reino. -*Ibidem*, pp. 52-53-).

⁵. Así se establecía en el Real Decreto de 30 de diciembre de 1.834 rehabilitando los empleos, honores y distinciones desde 7 de marzo de 1.820, hasta 30 de septiembre de 1.823. (*Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora, ... 1.834*, cit. pp. 484-485).

Antes de morir Fernando VII se vislumbraban elementos conflictivos que habían de poner en convulsión al catolicismo hispano tan pronto como estallara la revolución política y la guerra civil. Un claro exponente de ello eran los juramentos exigidos de fidelidad a Isabel II, toda vez que, como ha señalado Martí Gilabert⁶, ya significaron el primer conato de oposición entre algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia y el nuevo Régimen que se iba a diseñar. Al finalizar el año 1.833, en los tres primeros meses de guerra civil, el clero se había sumado en gran parte a la insurrección, y por ello el número de fusilados era mucho mayor.

Pero, en todo caso, hay que afirmar que el fallecimiento de Fernando VII marcaba el final de una época para la Iglesia en España, y a su vez, el comienzo de otra representado por el reinado de Isabel II, con su madre como Regente. Suponía la proclamación del Nuevo Régimen en España, con los liberales al frente, aunque mediante una política regalista.

Por lo que respectaba a la Iglesia, hay que señalar que pronto comprobaría cómo se revitalizarían las medidas acordadas durante las Cortes de Cádiz y las del Trienio.

Señala Jiménez Asensio que los primeros años de esta tímida implantación del liberalismo en España van a conocer también las primeras medidas de desmantelamiento del Antiguo Régimen. Entre ellas podríamos destacar la supresión de Consejos y de los gremios, la disolución de órdenes religiosas y la desamortización de sus bienes, la supresión de las jurisdicciones señoriales, así como la abolición definitiva del Tribunal del Santo Oficio. El Antiguo Régimen

⁶. Martí Gilabert, F., *Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II*, Pamplona, 1.996. pp. 28-31.

desaparecía así de modo paulatino y definitivo⁷.

2. SIGNIFICADO Y CONTENIDO

En el nacimiento del Estatuto Real de 1.834, como ha señalado Villarroya, se podían diferenciar tres etapas en su proceso de elaboración: la primera comprendía una serie de reuniones iniciadas a finales de enero, que daban lugar a un borrador. En la segunda, durante el mes de marzo, el Consejo de Gobierno estudiaba el proyecto, y así redactaba un largo informe en el cual se proponían numerosas modificaciones. Y la última correspondía a las sesiones del Consejo de Ministros dedicadas a examinar las modificaciones sugeridas por el Consejo de Gobierno y a preparar la redacción definitiva del Estatuto Real⁸.

Esta Carta Otorgada tenía gran paralelismo a la concedida por Luis XVIII en 1.814 a los franceses. La que por otra parte, y como es sabido, había sido sugerida por áquel y el Duque de Angulema a Fernando VII, tras el fin del Trienio Liberal.

Siguiendo a Fernández Segado⁹, podemos afirmar que la aparición del Estatuto Real fue seguida por la publicación en la Gaceta de varios artículos destinados a comentar y glosar sus preceptos, y en último término, el Gobierno preparó y dictó una serie de medidas encaminadas a dar contenido a las instituciones perfiladas por el Estatuto:

⁷. Jiménez Asensio, R., *Apuntes para ...* cit. p. 59.

⁸. Villarroya, T.J., *El sistema político del Estatuto Real (1.834-1.836)*, Madrid, 1.968 pp. 53 y ss. En la misma línea, y entre otros a Fernández Segado, F., *Las Constituciones ...*, cit. pp. 126-127.

⁹. Fernández Segado, F., *Las Constituciones ...*, cit. p. 127.

- Un Decreto de 20 de mayo convocando las Cortes generales del Reino¹⁰.

- Otro de igual fecha por el cual se establecía el sistema electoral con arreglo al cual debían elegirse a aquellas primeras Cortes¹¹.

- Se designaban las personas que formarían el Estamento de los Próceres y se determinaban los reglamentos parlamentarios¹².

La Carta Otorgada suponía que el monarca, conforme con su soberanía y como concesión graciosa¹³, se desprendía o delegaba determinadas funciones que transfería a otros órganos que se creaban o que ya existían. En realidad, era una medida que no bastaba ni para contentar a los realistas, puesto que suponía una concesión a los liberales, ni para los liberales, toda vez que tampoco lo consideraban como un texto Constitucional.

El Estatuto debía su nacimiento al deseo de restablecer las antiguas leyes de la monarquía, y como tal, fijaba sus ojos en la tradición con cortesías y

¹⁰. Se trataba del Real Decreto de 20 de mayo de 1.834, convocando y mandando reunir las Cortes generales del Reinio. (*Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.834, cit. pp. 270-271).

¹¹. Real Decreto de 20 de mayo de 1.834 para la elección de Procuradores a las Cortes generales del Reino. (*Ibidem*, pp. 271 y ss).

¹². El Real Decreto de 24 de junio de 1.834, por el que se señalaba el tratamiento, fuero y uniforme de los Próceres del Reino. Real Decreto de 20 de mayo de 1.834 para la elección de Procuradores a las Cortes generales del Reino. (*Ibidem*, pp. 318-326). La regulación del funcionamiento de las Cámaras se establecía mediante el Real Decreto de 15 de julio de 1.834 que contenía los Reglamentos para el régimen y gobierno de los Estamentos de Próceres y Procuradores del Reino. (*Ibidem*, pp. 133-183).

¹³. Villarroya, T. J. en: *El Estatuto Real de 1.834 y la Constitución de 1.837*, Madrid. 1.985, pp. 15 ss y en *Breve historia* ..., cit. p. 33.

condescendencias más o menos sinceras a la revolución¹⁴.

Por lo que respectaba a la Iglesia, este período¹⁵ suponía el definitivo punto de partida para el desmoronamiento de sus viejos privilegios y estructuras. Y todo ello, desde el punto de vista diseñado a partir de las Cortes gaditanas, donde las medidas relacionadas con la Iglesia se tomaban unilateralmente desde el Gobierno.

En orden con la vieja idea de romper con todo lo que fuera propio del Antiguo Régimen y acreditar cuanto antes el nuevo orden constitucional, se promulgaba el Real Decreto de 27 de enero de 1.837, mandando observar lo prevenido por las Cortes, y en el que se establecía que se demolieran todos los signos de vasallaje¹⁶. En éste se reproducía el Decreto promulgado por las Cortes de Cádiz, y abolido por Fernando VII, de fecha de 26 de mayo de 1.813, por el que se mandaba quitar y demoler todos los signos de vasallaje que hubiera en los pueblos.

En cuanto al contenido del Estatuto, siguiendo a Fernández Segado¹⁷, se puede afirmar que en síntesis los "principios constitucionales" contenidos en su

¹⁴. Sánchez Agesta, L., *Historia del ...*, cit. p. 243.

¹⁵. El Nuncio, en este nuevo período era Monseñor Amat de San Felipe, quien fue nombrado como nuevo Nuncio apostólico en España por designación directa de Fernando VII, tras ser ofrecidos a él la lista de 4 prelados confeccionada por el Papa, quien había señalado como idóneo al designado a la postre por el monarca. Nombrado el 5 de Octubre de 1.832.

¹⁶. *Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las secretarías del despacho, desde 1º de enero hasta fin de junio de 1.837*, Tomo XXII, En la Imprenta Nacional, Madrid, 1.837. pp. 33-34.

¹⁷. Fernández Segado, F., *Las Constituciones ...*, cit. pp. 130-131. Se sigue su clasificación en la presente exposición.

articulado eran los siguientes:

a) Principio de *Soberanía compartida*: Como quiera que se guardaba silencio a lo largo de su articulado sobre la soberanía, esta ausencia de pronunciamiento expreso servía para negarla.

Por lo que se refiere a la Monarquía, señala Villarroya¹⁸ que ni el Estatuto, ni la exposición preliminar, ni las disposiciones que se dictaban para completarlo contenían expresión alguna que recordase la teoría del derecho divino. Este silencio ofrecía un doble contraste; de una parte, con el preámbulo de la Carta francesa de 1.814 que recogía expresamente la teoría del derecho divino de los reyes: "La divine Providence en nous rappelant dans nos Etats, après una longue absence, nous a imposé de grandes obligations ..." y el art. 74 de la misma que parecía realzar formalmente el vínculo que ligaba a la realeza con la divinidad. Nada de esto se encontraba en el Estatuto. De otra parte el silencio de éste contrastaba también con las fórmulas utilizadas por D. Carlos en algunos de sus primeros manifiestos, que parecían dar por supuesta la existencia y validez de aquel principio¹⁹.

b) Principio de la *colaboración de poderes*: No se proclamaba el principio de la separación de poderes de la forma que lo efectuaban otros textos del Siglo XIX pero, pese a la ausencia de un pronunciamiento expreso al respecto, en

¹⁸. Villarroya, T.J., *El sistema político ...*, cit. pp. 146-161.

¹⁹. Señalar entre otros, y a modo de ejemplo el manifiesto de Castello-Branco, fechado el 4 de noviembre de 1.833 . "*Llamado por Dios para ocupar el trono español, para defender su justa causa y hacer felices a mis pueblos...*". Si bien conforme a las declaraciones, entre otros, de Trueba, y Martínez de la Rosa, la Teoría del Derecho Divino se consideraba anacrónica y superada, pero la doctrina oficial del Estatuto, tampoco admitía la soberanía nacional como principio legitimador de las instituciones políticas.

realidad inspiraba y presidía el sistema político que intentaba establecer.

c) La cualidad o principio más importante de este texto, estaba constituida por su *Inspiración moderada y conciliadora*: El Estatuto venía a colmar las aspiraciones de los moderados; se trataba de conjugar la tradición con el cambio. De forma que las aspiraciones del texto representaban deseos que podríamos denominar como "*reconciliación nacional*".

En este sentido, ha precisado Carr²⁰ como "Al igual que los libertadores de 1.812, los artífices de la Constitución de 1.834 afirmaban haber *restablecido con plena fuerza y vigor las leyes fundamentales de la monarquía*. Progreso y tradición, libertad y orden podían ser reconciliados al rechazarse los principios abstractos en favor de los procesos históricos que habían creado la *Constitución interina* de España. Esta Constitución, reconocida por las Cortes aunque no creada por ellas, comprendía las soberanías independientes y paralelas del *rex* y del *regnum*, del dogma democrático de los poderes constituyentes de la nación y la pretensión realista de que las Constituciones fueran concesiones graciosamente otorgadas por el Rey. En términos legales la ficción de un esfuerzo por *salvar antiguas instituciones rejuveneciéndolas* significaba un ejecutivo fuerte como emanado de las prerrogativas de la Corona, unas Cortes convocadas y disueltas por el Rey sin iniciativa legislativa; una segunda Cámara compuesta de grandes y dignatarios eclesiásticos, civiles y militares nombrados por la Corona; y un sistema censitario estrecho".

A esa lista señalada por Fernández Segado, se debe añadir otro principio, que aunque no se contenía en el texto, se admitía pacíficamente. Nos referimos a:

²⁰. Carr, R., *España ...*, cit. p. 165.

d) *La confesionalidad del Reino*: Pese a que no se contenía ningún tipo de declaración sobre la Religión católica en el Estatuto, era clara la consideración de España como católica, apostólica y romana, de igual forma que ocurría antes de la muerte de Fernando VII. Algunos instrumentos coetáneos al Estatuto así nos lo manifestaban. Los más representativos eran el Testamento de Fernando VII, y el Manifiesto de la Regente. Así las cosas, la confesionalidad en España no era puesta en entre dicho por nadie, ni tan siquiera por los progresistas autores del Código Penal del Trienio que consideraban delito de lesa majestad los hechos tendentes a introducir en España otra religión. Si bien, ello no implicaba, como se señalará, el convencimiento de la necesidad de efectuar reformas en su estatus, creando una Iglesia católica en España acorde con los principios del liberalismo.

3. NATURALEZA JURÍDICA

La doctrina se encuentra dividida sobre la naturaleza jurídica del texto. Como punto de partida podemos afirmar que no se trataba de una Constitución, puesto que su origen era únicamente real, donde las Cámaras diseñadas en su articulado no intervinieron en su discusión. De ahí, la afirmación de Solé Tura y Aja, quienes señalan que el objetivo principal y casi único era la convocatoria de Cortes, y que su fundamento se encontraba en las Leyes tradicionales de la monarquía, como las Partidas y Nueva Recopilación, rechazando la base liberal de las Constituciones²¹.

Bajo nuestro punto de vista, y siguiendo a gran parte de la doctrina, no se puede afirmar que se tratara de un texto constitucional, pero entendemos que su intención era bastante más que una mera convocatoria de Cortes. En este sentido,

²¹. Solé Tura, J., y Aja, E., *Constituciones ...*, cit. p. 29.

Sánchez Agesta señala que "en el Estatuto no hay el designio de conceder por gracia de la Corona una representación, sino de revalidar una institución histórica". Para defender esta idea, recoge una afirmación efectuada por Martínez de la Rosa, en el Diario de Sesiones de 20 de septiembre de 1.834: "No es gracia de la Corona, sino un derecho de la nación que se restablece"²². Con muy similares afirmaciones al respecto, se pronuncia Fernández Segado, quien, tras recoger las opiniones al respecto de gran parte de la doctrina sobre la naturaleza jurídica de este texto, escribe: "el Estatuto tuvo una intención constitucional, lograda con mayor o menor plenitud, pero, en todo caso, superior a la de una mera convocatoria de Cortes"²³.

Lo cierto es que nunca se logró ver el presente texto como una Constitución, lo que implicó tal y como afirma Villarroya, que un amplio sector liberal no llegara nunca a aceptarlo como norma constitucional ni quisiera integrarse en el sistema político establecido por él²⁴.

Para Tomás y Valiente²⁵, los autores del Estatuto Real trataron de encontrar una vía media entre el constitucionalismo y la continuidad de la situación privilegiada de los grupos sociales arropados en torno a la monarquía; con él se pretendía salir del absolutismo sin entrar en el liberalismo, cuadratura del círculo político que tienta en ocasiones intermitentes a quienes en momentos de inexorables cambios aspiran a controlarlos y a reducirlos.

²². Sánchez Agesta, L., *Historia del ...*, cit. p. 252.

²³. Fernández Segado, F., *Las constituciones ...*, cit. pp. 128-129.

²⁴. Villarroya, T. J., *Breve historia ...*, cit. pp. 45-46.

²⁵. Tomás y Valiente, F., *Notas para una nueva historia del Constitucionalismo español*, en revista de ciencias sociales Sistema, número 17-18. Abril, 1.977. pp. 78-79.

II. LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN EL ESTATUTO

1. INTRODUCCIÓN: VALORACIÓN DEL HECHO RELIGIOSO, ANTES DE LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO.

La situación de la Iglesia era externamente igual que a principios del siglo, pero internamente estaba mucho más debilitada. Era una Iglesia arcaica, cansada, internamente dividida y políticamente comprometida con el absolutismo. Una Iglesia que se ofrecía por tercera vez como objeto de reforma, crítica y venganza a los liberales que muy pronto volverán a dirigir los destinos de España²⁶.

Ésta se había colocado tanto bajo la protección de Fernando VII que se había confundido con su régimen, identificándose con las ideas políticas que profesaba: el absolutismo despótico. De suerte que temporalmente se había evitado una necesaria reforma del clero a través de la protección real, pero ahora se enfrentaba a un nuevo futuro incierto, puesto que, muerto su paladín y en un contexto social donde el liberalismo estaba muy arraigado en la sociedad, las ideas liberales significaban una amenaza no sólo teórica para el estatus de la Iglesia, toda vez que ya había experimentado en la práctica sus consecuencias.

La reforma de la Iglesia continuaba viva en el ánimo del legislador. Por esto no era casual la existencia de un Decreto para proceder a su renovación coincidiendo con la llegada al poder de los liberales. Nos referimos al Real Decreto de 22 de abril de 1.834, al que seguía una instrucción aprobada por su S.M. sobre la formación de una Junta Eclesiástica para el arreglo del clero secular

²⁶. Revuelta González, M., *La Iglesia española ...*, cit. p. 113.

y regular²⁷.

Desde el punto de vista político, esa "concordia" que significaba el Estatuto Real de 1.834 para las distintas ideas políticas, se intentaba impulsar hacia la Iglesia católica, pero siempre bajo el convencimiento de la mayor parte de los sectores de la necesidad de reformarla para adaptarla al Nuevo Régimen. Esa idea, una vez más, chocaba frontalmente con lo querido por la propia Iglesia Católica, representada, en este momento, no ya sólo por la jerarquía española (diseñada por Fernando VII), sino que esta vez en la polémica intervino directamente el Sumo Pontífice. Nos referimos al hecho cierto de su "indefinición" al respecto de la Corona española, puesto que no se pronunció a favor de ninguno de los aspirantes al trono²⁸.

La indefinición de la Santa Sede coincidía con la diversidad de posturas del resto de potencias internacionales de nuestro entorno, toda vez que Francia e Inglaterra mostraron su apoyo al Gobierno de la Regente, pero por el contrario, Austria, Rusia y Prusia miraban con recelo el nuevo orden. El Vaticano no accedió a reconocer en el Trono español a la jovencísima Reina Isabel II, tal y como se puede constatar en la nota de 14 de octubre de 1.833²⁹. Todo esto no

²⁷. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.834, cit. pp. 210-214.

²⁸. Carcel Ortí, V., *Política Eclesial de los Gobiernos Liberales Españoles 1.830-1.840*, Pamplona, 1.975, pp. 127 ss. O también, entre otros, Martí Gilabert, F., *Iglesia y Estado* ... , cit. pp. 35-38.

²⁹. "Il Cardinal Segretario di Stato ha ricevuta la partecipazione che V. Ecc. si è compiaciuta di fargli con sua nota dei 14 corrente, e ne ha appreso ciò che ha avuto luogo nella R. Corte di Spagna in seguito della morte di Rey Fernando VII. Facta di ciò relazione a Sua Santità egli è autorizzato ad annunziare a V. Ecc. che mentre in Santo Padre intende dalla sua parte che le relazioni diplomatiche esistenti fra i due governi rimangano indefinitamente, in seguito degli avvenimenti sopraggiunti, sul piedi stesso in cui esse sono attualmente, la Santità Sua si riserva di procedere ad ulteriori dichiarazioni (continúa...)"

hacía más que encrespar aún más a los liberales.

Sobre el papel seguido por la Iglesia ante la Guerra Civil, hay que señalar que, como era notorio y públicamente conocido, una gran parte del clero secular y regular militaba abiertamente a favor de D. Carlos.

Así las cosas, el gobierno no quiso tomar medidas generalizadas de fuerza directamente contra el clero, sino que, por una parte, dispuso de medidas coercitivas sólo contra los eclesiásticos beligerantes³⁰, y por otra, intentó ganarse su confianza mediante invitaciones secretas a Obispos y superiores de órdenes religiosas para que manifestaran su simpatía por la nueva Reina y su causa. No obstante, el pueblo sí protagonizó algunos actos anticlericales como matanzas de

(...continuación)

dopo che avrà meglio conociuto il partito che prenderano in proposito altre corti, dalle quali non saprebbe Essa diversi senza prima apprezzare i titoli per cui sa che queste ricasano di ricasano di riconoscere l'ordine di sucession che ora si è sostituito all'antico nella monarchia di Spagna. V. Ecc. può esser certa che il Santo Padre non sarà intanto per fare alcun passo che non corrisponda alla linea di semplice osservatore impaziale ch'Engli si è proposto di seguire fino momento, in cui sarà per pronunziare a cose ben conosciute il contegno definitivo a cui sarà per appliciarsi". (D. 8129, Bernetti-Labrador, 19 de octubre de 1.833, ASV SS 262 -1.830-45- 549). Copia en ASV AN Madrid 297 y AAEESS. II España 164. Publicada por Castillo, I apéndice pp. 31-32.

³⁰. Sirvan como ejemplos, entre otros: el Real Decreto suprimiendo el Monasterio o convento donde ocurrieran los casos que se citaban, con lo demás que se expresa, de fecha de 26 de Marzo de 1.834. Disponía que *"... Mas como una lamentable experiencia ha hecho conocer que algunos monasterios y conventos han sido y son profanados con hechos y planes subersivos ..."* con un articulado casuístico donde se contenían los motivos que daban lugar a la supresión de monasterios o conventos. Entre los señalados, se puede destacar el refugiar a rebeldes, el pasarse algún clérigo al bando carlista sin ser comunicado por el Prelado de la Orden, el aceptar en depósito materiales de guerra, etc... . Otro Real Decreto aprobado en igual dirección era el de fecha 26 de marzo de 1.834, que mandaba ocupar las temporalidades de los eclesiásticos que cometieran los delitos de que se hacía mención. (*Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora. ... 1.834, cit. p. 170-171 y pp. 172-173, -respectivamente-*).

frailes y quemas de conventos³¹ motivadas por el patrocinio de la causa carlista por parte del clero, toda vez que no hay que olvidar que a la cabeza de las sublevaciones se encontraban en algunos casos párrocos y canónigos.

Examinados los extremos anteriores, hay que traer a colación algunas disposiciones de especial interés, que a diferencia de las señaladas en la presente investigación, prescribían el final de determinadas ceremonias religiosas ordenadas por el Antiguo Régimen. Como ejemplo se puede señalar el fin de aquellas que se venían realizando por deseo de Fernando VII, conforme con la Real Orden de 15 de abril de 1824, que prescribía ceremonias religiosas en memoria de su libertad, y en desagravio de la impiedad, irreligión y desórdenes cometidos desde el año de 1.808. Para acabar con esa tradición se aprobaba la Real Orden de 17 de febrero de 1.835 revocando la Orden citada sobre celebración de una función religiosa cada año³². La propia Orden recogía expresamente que "aunque esta función debiera mirarse como impulsada de la piedad, no ha faltado con todo quien la considerase como el triunfo de los principios políticos de aquella época, cuya diversa inteligencia ha dado lugar ya a desavenencias y disgustos. Deseando, pues, la Reina Gobernadora evitar que se confunda lo sagrado con lo profano, y alejar todo pretexto de discordias

³¹. Carcel Orti, V., El liberalismo en el poder, en *Historia de la Iglesia en España*, dirigida por García Villoslada, R.; Tomo V, Madrid, 1.979, p. 134. Ha señalado como durante los días 15 al 17 de julio de 1.834, se llevó a cabo la matanza de eclesiásticos, con el fácil pretexto de haber envenenado las aguas potables y provocado una epidemia de cólera. El pueblo se amotinó e invadió el Colegio Imperial de los jesuitas, donde fueron asesinados cuatro religiosos. Después corrió la misma suerte el convento de San Francisco, y más tarde el de los de carmelitas y dominicos. Las víctimas fueron cerca de un centenar.

³². *Decretos de la Reina Nuestra Señora Donal Isabel II, dados en su Real Nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos generales expedidos por las Secretarías del Despacho universal desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.835*. Tomo vigésimo. Madrid, en la imprenta Real, 1.836. p. 79.

cuando se afana en afianzar la unión de todos los españoles, ha tenido a bien revocar la mencionada Real Orden".

El fuero de los eclesiásticos fue otro de los extremos que se modificaba en este período, de suerte que corría el mismo camino señalado en los momentos del Trienio Liberal o en las Cortes de Cádiz. Nos referimos al Real Decreto de 17 de Octubre de 1.835, mandando que las justicias ordinarias conocieran, siendo de delitos atroces ó graves en las causas de los eclesiásticos³³. En su exposición de motivos se expresaba la lucha histórica por el conocimiento de los delitos cometidos por eclesiásticos entre la jurisdicción eclesiástica y real. Esta disposición no suponía una novedad para nuestro Derecho, puesto que, se basaba no ya en las disposiciones citadas de este siglo, sino en otras mucho más anteriores de finales del siglo XVIII. Concretamente se refería a la Real Orden mandada por Carlos IV, de fecha de 19 de noviembre de 1.799, suprimiendo el Consejo de Castilla, atribuyendo ya carácter para conocer a los Tribunales reales. En el número 2º de su articulado recoge que: "las causas contra eclesiásticos por delitos atroces o graves, se formarán desde el principio, sustanciarán y fallarán en todo el reino, sin intervención alguna de la Autoridad eclesiástica, por los Jueces y Tribunales Reales a quienes competan, con arreglo a las leyes y decretos vigentes³⁴

³³. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II. dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.835, cit. pp. 485-487.

³⁴. A este respecto, este fuero personal de los clérigos ha ido desapareciendo de todas las naciones. En España su desaparición final ocurrió con el Decreto-ley de 6 de diciembre de 1.868, conocido con el nombre de "Unificación de fueros". Hoy aparece señalada esa exclusividad de la jurisdicción estatal en el conocimiento de materias penales en el Art. 23, 1 de la Ley Orgánica num. 6/1.985. de 1 de julio, del Poder Judicial.

Otro de los aspectos que se modificaba en este período eran las denominadas Juntas de fe. Como es sabido, al abolirse la Inquisición se habían creado las Juntas de fe en manos de cada Ordinario Diocesano para el conocimiento de las causas eclesiásticas que antes conocía la Inquisición, pero circunscritas al territorio de sus diócesis. Ahora, estas Juntas protectoras de la fe eran abolidas mediante la Real Orden de 1 de julio de 1.835, mandando que cesaran las Juntas llamadas de fe, y que en el conocimiento de estas causas se arreglen los tribunales eclesiásticos a los Canones y ley de Partida que se citaba³⁵.

Esa pérdida de privilegios del Antiguo Régimen no sólo se resumía en los recortes de su fuero; otra de las modificaciones operadas en su estatus fue la que hacía referencia al servicio de armas de los futuros "ordenados in sacris", puesto que se prohibía su ordenación hasta la edad de 25 años, sólo para con aquellos que debieran pasar por sorteo³⁶.

Volviendo a la confesionalidad implícita en el Estatuto, hay que traer a colación las declaraciones formales anteriores o precedentes a su aprobación, toda vez que señalaban esa confesionalidad a ultranza de España. Nos referimos a dos disposiciones aprobadas poco tiempo antes de la promulgación del Estatuto, que permitían que el articulado del texto de 1.834 no efectuara referencia confesional. Esas disposiciones mencionadas estaban compuestas por dos declaraciones formales constituídas por:

³⁵. Se trataba de la Ley 2. Título 26. Partida 7. (Decretos ... 1.835. pp. 276-277).

³⁶. Nos referimos a la Real Orden de 4 de febrero de 1.837, por la que se expresaba que no podían ordenarse in sacris los mozos sujetos al sorteo hasta la edad de 25 años. (*Colección de ... junio de 1.837, ...*, cit. p. 59).

A) EL TESTAMENTO DE FERNANDO VII

Muerto el Rey, los mecanismos institucionales se pusieron en funcionamiento para asegurar la continuación formal de la monarquía³⁷, pero también y sobre todo, para tratar de adelantarse a las pretensiones de don Carlos y a los intentos de la revolución. En primer lugar, la misma Gaceta que anunciaba la muerte de Fernando VII, publicaba dos Decretos de la Reina viuda confirmando en sus cargos al ministro Cea y a todas las autoridades del reino. En segundo lugar, se publicaba el Testamento de Fernando VII³⁸, el día 9 de octubre de 1.833.

Las primeras cláusulas no aparecían publicadas en la Colección de Decretos señalada, aunque se dice que eran las generales de la fe. Así se dice literalmente : "...el Testamento del señor Rey D. Fernando VII, que está en gloria, firmado y rubricado de su real mano en diez del propio mes y año y entre sus cláusulas, antes de las que tocan á mandas, limosnas y legados, y a continuación de las generales de la protestación de fe, recomendación del alma y disposición de su funeral, y otras tocantes al arreglo interior de su Real Casa y Familia, se encuentran las siguientes ...".

³⁷. Villarroya, J.T., *El sistema político ...* cit. pp. 19-27.

³⁸. Pragmática sanción con fuerza de ley, para que se guardaran y cumplieran las soberanas disposiciones y última voluntad del Sr. Rey D. Fernando VII. (*Colección de Decretos del Rey nuestro Señor Don Fernando VII, y de la Reina su Augusta esposa, donde figuran las Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos generales expedidos por las secretarias del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.833*, Tomo Decimoctavo. en la Imprenta Real, Madrid 1.834. pp. 248-254).

Este testamento, a la postre, representaba la última disposición que Fernando VII efectuó para con la Iglesia católica en España.

B) EL MANIFIESTO DE LA REGENTE

Este manifiesto³⁹ concretaba los principios o directrices que iban a seguirse por la Regente en el gobierno de España, y como todo manifiesto, aportaba esa nota de publicidad para dar a conocer el nuevo orden político a los ciudadanos.

Sin embargo, para su mejor exposición, hay que señalar que dentro del manifiesto de la Regente se podían distinguir dos partes⁴⁰: una contenía un programa político y la otra un programa administrativo.

De cara a nuestra investigación, hay que detenerse en el estudio del Programa político, puesto que era ahí donde se condensaba en la defensa íntegra de los dos pilares cardinales de la nación española: "La Religión y la Monarquía", toda vez que aseguraba la continuidad del Antiguo Régimen con el imperio de la religión y la conservación de la monarquía absoluta. Literalmente se expresaba que:

"La religión y la monarquía, primeros elementos de la vida para España, serán respetados, protegidos, mantenidos por mí en todo su rigor y pureza.

³⁹. Real Provisión de 4 de octubre de 1.833, por la cual se daba noticia á las Justicias y demás personas de estos reinos del fallecimiento del Sr. Rey D. Fernando VII, y de la confirmación que hacia S.M. la Reina Gobernadora, en nombre y durante la menor edad de su augusta hija la Sra. Reina Doña Isabel II, de todas las autoridades establecidas, mandando continuaran en el ejercicio de sus funciones, con lo demás que se expresaba. (*Ibidem*, pp. 243-248).

⁴⁰. Villarroya, T.J. *El sistema político ...*, cit. pp.21-22.

El pueblo español tiene en su innato celo por la fe y el culto de sus padres la más completa seguridad de que nadie osará mandarle sin respetar los objetos sacrosantos de su creencia y adoración: mi corazón se complace cooperar y presidir a este celo de una nación católica; asegurarla de que la religión inmaculada que profesamos, su doctrina, sus templos y sus ministros, serán el primero y más grato cuidado de mi gobierno... Yo mantendré religiosamente la forma y las leyes fundamentales de la monarquía sin admitir innovaciones peligrosas ...".

Tras esas afirmaciones se determinaba claramente la política a seguir para con la religión católica, no sólo señalándose la propia de la nación española, sino que el nuevo orden liberal, en palabras de la Regente, expresaba en términos programáticos no sólo su apoyo a la religión oficial, sino la firme protección para con sus ministros, templos y doctrina.

2. REFLEJOS DE LA CONFESIONALIDAD EN EL ESTATUTO

Para efectuar una valoración del hecho religioso en este texto es necesario verificar la situación de la legislación española en su conjunto, toda vez que, como se ha especificado, el texto no recogía ningún tipo de declaración sobre la religión oficial del reino. Y esto, bajo nuestra opinión, era así porque se trataba de un aspecto sobre el cual no existía ningún tipo de controversia. La única referencia que se efectuaba en el texto que debe ser señalada en la presente investigación estaba constituida por la participación de las altas dignidades del clero en el Estamento de Próceres, es decir, dentro del Estamento que representaba a los Grandes de España.

A) EL ESTAMENTO DE LOS PROCERES DEL REINO.

El Estatuto recogía el sistema tradicional de los Estamentos frente a las Cortes constitucionales. La asunción de este sistema implicaba, en la práctica, el sostenimiento de las ideas tradicionales consagradas en este texto del 34.

Los Estamentos se conformaban en dos instituciones perfectamente separadas, como lo estaban los Próceres⁴¹ y los Procuradores. La consecuencia tras la vuelta al sistema tradicional era la instauración en España del establecimiento de un sistema bicameral.

Políticamente esta distribución de las Cámaras, y más concretamente este estamento de Próceres, suponía un paso atrás porque implicaba una vuelta a las ideas absolutistas, propias de la representación estamental del siglo XVII, aunque se suavizaba con el estamento más progresista de Procuradores⁴².

Estas Cortes eran representación del poder soberano del Rey, y su establecimiento respondía a una concesión graciosa del monarca. Y para que este extremo quedara perfectamente claro, evitando así toda duda en contrario, se señalaba que era el Rey el encargado de convocar, suspender y disolver las Cortes⁴³.

⁴¹. Villarroja, J.T., *Breve historia ...*, cit. p. 42. Cree que no se trataba de una asamblea nobiliaria, sino una asamblea que pretendía reunir a todas las aristocracias sociales del país. En contra Solé Tura, J., y Aja, E., *Constituciones y períodos ...*, cit. p. 29, para quienes se trataba de una asamblea nobiliaria.

⁴². Para ser elegido procurador se debían reunir unas ciertas características personales y económicas. Su condición estaba sujeta al plazo de tres años.

⁴³. Tal y como se señalaba en el Art. 24 "Al Rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las Cortes". Y en el Art. 38 "En el caso que el Rey suspendiese las (continúa...)"

El sistema bicameral respondía a un diseño propio para cada Cámara, toda vez que el estamento de Próceres era aristocrático y el de Procuradores electivo, aunque bajo sufragio directo y censitario. Además sus sesiones se producían en recintos distintos y separados⁴⁴, tal y como prescribía el Art. 47 del texto.

Por lo que respecta a la presencia de eclesiásticos en las cámaras, el Art. 3 recogía la composición del estamento de Próceres, señalándose, en su apartado 1º, la presencia de *muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos*.

Además de los eclesiásticos recogía otras cinco clases sociales que formaban este estamento. Se trataba de individuos de incuestionable condición social, como Grandes de España, Títulos de Castilla, personalidades públicas, terratenientes, industriales o profesores u otras personalidades públicas, que poseían una renta anual superior a sesenta mil reales.

En este cuerpo de Próceres no tenían gran cabida las ideas progresistas, ya que por su propia composición le hacía proclive a las ideas tradicionalistas⁴⁵.

Por otra parte, el texto del Estatuto no establecía un número máximo, y el cargo era vitalicio, e incluso en algunos supuestos hereditario.

(...continuación)

suspender y disolver las Cortes". Y en el Art. 38 "En el caso que el Rey suspendiese las Cortes, no volverán estas a reunirse sino en virtud de una nueva Convocatoria".

⁴⁴. En este sentido, véase entre otros Villarroja, T.J., *Breve historia ...*, cit. p. 41, quien afirma que: "la novedad constitucional más importante del Estatuto era la división de las Cortes en dos Cámaras o Estamentos, -Bicameralismo-". En el mismo sentido, entre otros, veasé, Attard, E., *El Constitucionalismo ...*, cit. p. 79.

⁴⁵. En este sentido véase Sánchez Agesta. L., *Historia del ...* cit. p. 255, para quien *El estamento de próceres, indicaba cuáles eran las fuerzas de carácter conservador que tenían en cuenta los autores del Estatuto*.

Era suficiente ostentar la condición de Arzobispo u Obispo electo o auxiliar para poder formar parte de este Estamento⁴⁶.

Como reflejo de la confesionalidad estatal y formalista, se equiparaba a los Arzobispos y Obispos con el conjunto de los Grandes de España en el estamento de los Próceres, encuadrándose esta decisión dentro del tradicionalismo histórico español del siglo anterior.

La apertura de los Estamentos se celebraba el 24 de julio de 1.834, una semana después de la conocida matanza de frailes y quema de conventos.

III. DESARROLLO LEGISLATIVO DEL ESTATUTO REAL DE 1.834

Como se ha señalado, el Estatuto no recogía ningún tipo de pronunciamiento sobre la religión católica, por lo que para verificar la regulación jurídica que se efectuó sobre la Iglesia y sus ministros, es necesario, quizá con mayor motivo que en los períodos anteriores, detenerse en el estudio de su desarrollo legislativo.

Lo cierto es que la producción normativa que se elaboró en este período sobre el factor religioso católico fue de gran envergadura.

⁴⁶. Conforme con el Art. 4: "Bastará ser Arzobispo u Obispo electo o auxiliar para poder ser elegido, en tal clase de tal, y tomar asiento en el estamento de Próceres del Reino".

El legislador volvía a arremeter contra el status de la Iglesia también de forma unilateral, modificando los privilegios que ostentaba de la misma forma que había ocurrido en periodos anteriores.

El desarrollo legislativo del Estatuto se producía por los partidos moderado y progresista. Los moderados estaban constituidos inicialmente por el núcleo de los liberales que habían entrado a formar parte del Gobierno con Martínez de la Rosa, entroncándose a su vez con los ilustrados de la última etapa absolutista y con los afrancesados. Los progresistas eran, al menos en los primeros momentos, aquellos liberales todavía en el exilio al tiempo de promulgarse el Estatuto, que regresaban a España una vez instaurado el nuevo orden político, y tras la amnistía decretada por los moderados.

Los personajes más representativos de este período fueron, entre otros; Cea Bermudez, Martínez de la Rosa, el conde Toreno⁴⁷, y Mendizabal.

1. DESAMORTIZACIÓN

La desamortización de los bienes de la Iglesia, en dos ocasiones frenada por Fernando VII, ahora no sólo encontraba definitivamente su punto de partida, sino que las enajenaciones o subastas de bienes efectuadas al abrigo de sus diferentes disposiciones no serían anuladas.

⁴⁷. Cuenca, J.M., *La Iglesia española ante la revolución liberal*, Madrid 1.971, pp. 28-29. Ha señalado que los Decretos del equipo ministerial del conde Toreno abrirán un ciclo de persecución contra los miembros del estamento eclesiástico sin paralelo hasta entonces en la historia española.

La desamortización no sólo se producía sobre los bienes de la Iglesia, sino que también alcanzaba a los que estaban en propiedad de Ayuntamientos o cualesquiera otras corporaciones civiles⁴⁸.

Los primeros decretos desamortizadores servían para liquidar definitivamente la Inquisición⁴⁹, y para volver a expulsar de España de nuevo a los jesuitas⁵⁰.

Sin embargo, las medidas más importantes comenzaban con el Real Decreto de 25 de julio de 1.835 suprimiendo los monasterios y conventos que no tuvieran doce religiosos profesos⁵¹. Su exposición preliminar presentaba las intenciones del legislador que después se detallaban en su articulado, toda vez que se expresaba la siguiente declaración:

⁴⁸. Aunque en la presente investigación nos ceñimos al estudio de la desamortización de los bienes de la Iglesia, se pueden señalar algunas disposiciones relativas a los bienes denominados "propios". En este sentido, y entre otras, se puede citar la Real Orden de 24 de agosto de 1.834, sobre el modo el proceder por los Ayuntamientos a la subasta y enajenación de las fincas de Propios. (*Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.834, cit. pp. 359-360).

⁴⁹. Así se disponía mediante el Real Decreto de 15 de julio de 1.834, suprimiendo definitivamente el Tribunal de la Inquisición, en el cual se suprimía una inquisición ya antes desmantelada de sus labores, adjudicándose los bienes que poseía a la extinción de la deuda pública. (*Ibidem*, pp. 331-333).

⁵⁰. Se ordenaba mediante el Real Decreto de 4 de julio de 1.835 suprimiendo la Orden de la Compañía de Jesús. Dentro de su articulado recogía las siguientes disposiciones: 1º. Se suprimía perpetuamente en todo el territorio de la monarquía la Compañía de Jesús, como ya lo había sido en diversas ocasiones. 2º. Los individuos de la Compañía no podrían volver a reunirse en cuerpo ni comunidad. 3º. Se ocupaban sus temporalidades, así como se acordaba el sustento de sus miembros con cargo a la Caja de Amortización. 4º. No disfrutarían de pensiones ni los extranjeros ni los novicios. (*Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.835, cit. pp. 280-281).

⁵¹. *Ibidem*, pp. 335-337.

"El aumento inconsiderado y progresivo de monasterios y conventos, el excesivo número de individuos de los unos y de la cortedad del de los otros, la relajación que era consiguiente de la disciplina regular, y los males que de aquí se seguirán a la Religión y al Estado, ... De aquí procede que existan hoy en España más de 900 conventos, que por el corto número de sus individuos no pueden mantener la disciplina religiosa ni ser útiles a la Iglesia. Teniendo presente que conforme a varias constituciones apostólicas de diferentes sumos Pontífices, se requiere en todo convento a lo menos el número de doce religiosos profesos, ...".

Dentro de su articulado se deben destacar, entre otras, las siguientes medidas:

- Los monasterios y conventos de religiosos que no tuvieran doce miembros profesos, de los cuales dos terceras partes fueran de coro, quedaban suprimidos, y en lo sucesivo lo mismo se verificaría respecto de aquellos cuyo número viniera a reducirse con el tiempo a menos de lo establecido⁵².

- Los monasterios y conventos que se hallaban cerrados al tiempo de aprobarse esta norma se entendían suprimidos. Quedaba exceptuada la aplicación de estas reglas a las casas de clérigos regulares, las escuelas pías, y colegios.

⁵². No sólo se conformaba el legislador con suprimir los conventos y monasterios que tuviesen un número de profesos menor de doce, sino que se diferían en el tiempo los efectos de la norma declarando que, para el futuro, en los conventos y monasterios que después de la fecha del Decreto tuvieran más de doce, pero que con el tiempo rebajaran su número, también quedarían suprimidos.

- Además los bienes, rentas y efectos de cualquier clase que eran propiedad de los monasterios y conventos suprimidos se aplicaban a la extinción de la deuda pública o al pago de sus réditos.

De dicha disposición se exceptuaban expresamente los archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres que pudieran ser útiles a los institutos de ciencias y artes, así como los monasterios y conventos, sus iglesias, ornamentos y vasos sagrados, de los que el legislador se reservaba disponer una vez oídos los Ordinarios eclesiásticos y Prelados generales de las órdenes.

Como quiera que las reformas operadas por el Decreto anterior no satisfacían totalmente los deseos desamortizadores del Gobierno, se procedía a la promulgación del Real Decreto de 12 de octubre 1.835 suprimiendo los monasterios de órdenes monacales y los demás de regulares en los casos y del modo que se expresaba⁵³.

Tras efectuar referencia al Real Decreto anterior, mostraba como todavía era indispensable y muy urgente una reforma más extensa, no sin antes considerar lo desproporcionado era en relación a los medios actuales de la Nación el número de casas monásticas que quedaba, y lo inútiles o innecesarias resultaban la mayor parte de ellas para la asistencia espiritual de los fieles. Todo ello se ponía en relación con la deuda del Estado, señalándose literalmente que "cuan grande el perjuicio que al reino se le sigue de la amortización de las fincas que poseen, y cuanta la conveniencia pública de poner estas en circulación para aumentar los recursos del Estado, y abrir nuevas fuentes de riqueza".

⁵³. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II. dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.835. cit. pp. 457-460.

Después de su exposición de motivos recogía disposiciones en consonancia con las ideas restrictivas a través de un articulado casuístico.

Aunque con los decretos anteriores ya se apuntaba la política que sobre los bienes de la Iglesia iba a seguir el legislador, las disposiciones más dañinas para la Iglesia vinieron de la mano del Gabinete de Mendizábal⁵⁴.

De entre las disposiciones de Mendizabal destacaba el Decreto de 19 de febrero de 1.836 como la disposición más significativa para con los intereses de la Iglesia Católica, si bien su obra desamortizadora durante los años 1.836 y 1837 (hasta el mes de junio que se aprueba el texto constitucional de 1.837) se desarrolló en numerosas Leyes, Reales Decretos y Ordenes.

⁵⁴. El personaje más famoso en este período desamortizador es Mendizábal. Éste continuó la obra del anterior Ministro Toreno bajo el convencimiento de que con la venta de los bienes eclesiásticos podía hacer frente a la cuantiosa deuda pública. Pero a su vez pretendía otros resultados no menos apetecibles: la debilitación económica de los carlistas, financiados con bienes eclesiales dada su afinidad con el clero; la creación de nuevos propietarios afines al régimen liberal; debilitar la gran potencia económica del clero; con esos pequeños propietarios promocionaría la riqueza del país al abandonar dichos bienes las llamadas "manos muertas" y pasar a poder de lo que podríamos denominar "manos necesitadas de trabajo". Tal y como ha señalado Simón Segura, F., *La desamortización Española del Siglo XIX*. Madrid, 1.973. p. 84, ha escrito que *"Independientemente de la relación que Mendizabal estableciera entre las necesidades económicas de la nación y sus ideas anticlericales, el desarrollo de los hechos se orientó de tal modo (guerra carlista, aumento de la deuda, negociaciones fallidas con Inglaterra) que solamente acudiendo a la venta de los inmensos bienes que poseía el clero podía seguir adelante con su ambiciosa política. Y a ello encaminó sus esfuerzos después de haber obtenido el voto de confianza y haber disuelto las Cortes. Esperaba obtener de manera inmediata los recursos suficientes para acabar con la guerra fratricida, amortizar la deuda y, además, poner en circulación a manos del interés individual los bienes que poseía la Iglesia, con el ánimo de vincular a numerosas familias a la causa de Isabel. Privaba en primer lugar un aspecto netamente político y, en segundo término, uno social y económico"*.

Tras esa pequeña aclaración, hay que significar que comenzaba la obra desamortizadora del nuevo Gabinete mediante el Real Decreto de 25 de enero de 1.836, disponiendo lo que había de hacerse con los edificios que fueron monasterios y conventos⁵⁵. Con esta norma se reflejaba el deseo de encontrar destino para los edificios que fueron conventos o monasterios y que habían quedado suprimidos de sus antiguos fines. En este Decreto se ordenaba la creación de una Junta compuesta por el Gobernador Civil de la Provincia, el corregidor y tres individuos en representación de los acreedores del Estado.

Esta Junta propondría para su aprobación el destino que juzgaran más oportuno para cada uno de los expresados edificios según su capacidad y situación. Los distintos usos que se señalaban para estos edificios, entre otros, fueron: cárceles, nuevas calles y ensanche de las actuales, plazas y mercados de nueva planta, así como enajenación a particulares en su caso. Tal fue la competencia de dichas Juntas que incluso se pronunciaban sobre la necesidad o no de efectuarse obras en dichos edificios.

En desarrollo de esta última norma se aprobaba una Real Orden de 26 de enero de 1.836, sobre destino de los edificios que fueron monasterios y conventos⁵⁶.

No hay que olvidar que, en líneas generales, estos edificios urbanos eran menos apetecidos por los particulares, ya que tenían un precio elevado y por contra su rentabilidad resultaba escasa.

⁵⁵. *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora, y Reales órdenes, Resoluciones y Reglamentos generales expedidos por las Secretarías del Despacho universal desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.836*. Tomo XXI, Madrid, en la imprenta nacional, 1.837. pp. 30-31.

⁵⁶. *Ibidem*, p. 32.

La creación de Juntas para velar por los bienes nacionales fue moneda de uso común y sus funciones no se limitaban sólo a los edificios, sino que se extendieron a todo tipo de bienes, llegándose incluso a crear una Junta por Provincia. En este sentido se puede señalar, entre otros, el Real Decreto de 15 de febrero de 1.836, creando una comisión en cada Provincia para que tuviera a su cuidado las fincas de la Nación destinadas a amortizar la deuda pública⁵⁷.

El Decreto más importante aprobado por el gobierno de Mendizabal fue el Real Decreto de 19 de febrero de 1.836 declarando en venta todos los bienes que habían pertenecido a las suprimidas corporaciones religiosas con la excepción que se decía⁵⁸.

Destacaban de entre sus disposiciones las siguientes:

1). Quedaban declarados en venta todos los bienes raíces de cualquier clase, que habían pertenecido a las Comunidades y Corporaciones religiosas extinguidas y los demás que habían sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo, y también todos los que en adelante lo fueran desde el acto de su adjudicación.

2). Se exceptuaban los edificios que el Gobierno destinase para el servicio público o para conservar obras de arte, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El mismo Gobierno publicaría una lista de los edificios excluidos de la venta pública.

⁵⁷. *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.836. cit. pp. 70-72.

⁵⁸. *Ibidem*, pp. 77-82.

3). Se formaba un Reglamento sobre el modo de proceder a la venta de estos bienes.

4). La compra de los llamados bienes nacionales podía ser instada por cualquiera, incluso por los extranjeros. El trámite consistía en una solicitud escrita dirigida al Intendente para que dispusiese la tasación de la finca o fincas que se pretendiesen adquirir, siempre que éstas todavía no hubiesen sido tasadas ni comprendidas por tanto a subasta. La tasación se ejecutaba por los peritos que estuviesen nombrados, pero el interesado podía designar otro perito a fin de que concurriera y tomara parte en la operación. Si de la tasación resultaba desacuerdo entre las partes era dirimida por un nuevo perito que designaba el Intendente⁵⁹.

5). Dentro del articulado de esta disposición se recogían todos los pasos para la enajenación: la publicación del valor en periódicos, el derecho de adquisición preferente de la persona que solicitó la tasación a igual precio que el de remate en subasta, las formas de realizar el pago (dinero o deuda pública), el momento de la adjudicación, incluso facilidades de pago, y publicación mensual de las ventas realizadas.

⁵⁹. Resulta curioso comprobar que más de 160 años después, es decir, al día de hoy, el procedimiento fiscal español actualmente previsto para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales -supuesto de comprobación de valores por la Agencia Tributaria-, presenta grandes similitudes con lo señalado, para el caso específico de no existir acuerdo en cuanto a la valoración de bienes inmuebles. Dicho procedimiento aparece señalado en la propia Ley General Tributaria, art. 52, 1, e) y 52, 2 "*El sujeto pasivo podrá, en todo caso, promover la tasación pericial contradictoria*", y también en el *Texto Refundido Impuesto de Transmisiones Patrimoniales* art. 120.

Tras el estudio de la norma, hay que destacar la minuciosidad de las disposiciones desamortizadoras, reforzada, por una parte, con la Instrucción de 1 de marzo de 1.836 para llevar a efecto la enajenación decretada de bienes nacionales en el Real Decreto de fecha de 19 de febrero⁶⁰, que explicaba, todavía más a fondo, lo anteriormente señalado. Así como por otra parte, cabe significar expresamente que al Decreto señalado de 19 de febrero, le siguieron otros Decretos para su desarrollo o pronta ejecución⁶¹.

A fin de suprimir mayor número de conventos, se añadían otros motivos para forzar el cierre de más institutos de vida consagrada mediante el Real Decreto de 8 de marzo de 1.836, suprimiendo los monasterios, conventos y demás congregaciones religiosas con las excepciones que se señalaban⁶² y al que seguía un Reglamento para su desarrollo. En el Decreto se disponía que "Quedan suprimidos todos los Monasterios, Conventos, Colegios, Congregaciones y demás casas de Comunidad o de Instituto religioso de varones, incluidas las de Clérigos regulares, y las de las Cuatro Ordenes militares y San Juan de Jerusalén, existentes en la Península, Islas Adyacentes y posesiones de España en Africa". Esta medida no tenía otro fin que aportar al Estado más bienes para incrementar la Caja de Amortización.

⁶⁰. *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.836, cit. pp. 99-111.

⁶¹. Véase, entre otros, el Real Decreto de 2 de septiembre de 1.836, acordando su S.M. varias medidas para la más pronta enajenación de fincas nacionales, y para la rápida ejecución del Real Decreto de 19 de febrero de 1.836. (*Ibidem*, pp. 369-371).

⁶². *Ibidem*, pp. 120-140.

Del cierre de casas de vida consagrada no escapaban los Conventos de religiosas, si bien el trato fue distinto, de forma que el número de religiosas debería ser mayor para no cerrarse sus conventos. En este sentido, el límite establecido era de 20 religiosas, aunque se recogían algunas excepciones a esta regla mediante la Real Orden de 18 de abril de 1.836⁶³.

Como ya hemos señalado, otro fin de la obra desamortizadora era crear una serie de nuevos propietarios afines al Nuevo Régimen liberal. De alguna manera, la intención política que se pretendía cumplir con esta medida estaba configurada por el deseo de poner la tierra en manos de los jornaleros, al menos en teoría, ya que en la práctica fracasó en gran medida. Por eso se promulgaron las Reales Ordenes de 8 y 9 de junio de 1.836 sobre preferencia en las subastas de bienes nacionales y designando los peritos que han de concurrir a la tasación de fincas nacionales⁶⁴, -respectivamente-.

Eran las Juntas las que se encargaban de las ventas públicas guiando su esfuerzo hacia la obtención de buenos resultados financieros. Por ello, el ejecutivo intentaba optimizar el funcionamiento de estas Juntas, promulgando el Real Decreto de 13 de septiembre de 1.836, por el que se arreglaban las Juntas que habían de entender en la enajenación de los edificios de los conventos y sus muebles y efectos⁶⁵. De la misma forma se actuaba sobre la Caja de Amortización, y en este sentido se aprobaba el Real Decreto de 14 de septiembre

⁶³. Real Orden de 18 de Abril de 1.836, por la que se autoriza a las Juntas diocesanas para que, cuando ocurran circunstancias especiales, propongan queden abiertos algunos conventos con menos de veinte religiosos. (*Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.836, cit. p. 185).

⁶⁴. *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.836, cit. pp. 246 y 247 -respectivamente-.

⁶⁵. Ibidem, pp. 391-392.

de 1.836⁶⁶.

Esta optimización llegaba incluso a combinar algunas funciones de ambas instituciones. Con este fin, se promulgaba la Real Orden de 25 de noviembre de 1.836 comunicada a la Dirección General sobre el mejor modo de proceder a la tasación y venta de fincas nacionales⁶⁷. Dentro de ésta se reconocía que en la enajenación de bienes nacionales existieron problemas por el modo en que se subastan las fincas, excepto en Madrid, Cádiz y Barcelona, donde los resultados fueron superiores a las esperanzas. Sin embargo, en casi todos los demás puntos geográficos, los remates fueron por el valor de tasación con algún insignificante aumento. También se reconocía que la Dirección General observaba poca exactitud en las valoraciones.

Teniendo en cuenta que algunos eclesiásticos habían entregado bienes de las Iglesias e institutos religiosos a los carlistas para su causa, o que podían ser hurtados por éstos de los lugares de culto, se aprobó la Real Orden de 29 de noviembre de 1.836 para poner en seguridad los caudales y alhajas de las Iglesias⁶⁸.

Mediante la anterior orden, se disponía el recaudo de los objetos de valor, si bien se señalaba que solamente se trataba de una "medida de simple depósito". Los objetos a depositarse eran todos los caudales, oro y plata labrados, alhajas y objetos preciosos de cualquiera especie, sin ninguna excepción, que existían en las catedrales, colegiatas, parroquias, santuarios, ermitas, hermandades, cofradías,

⁶⁶. Real Decreto de 14 de septiembre de 1.836, sobre el arreglo de la Caja de Amortización. (Ibidem, pp. 394-396).

⁶⁷. Ibidem, pp. 538-539.

⁶⁸. Ibidem, pp. 546-550.

obras pías y demás establecimientos eclesiásticos en cada provincia, trasladándose estos bienes a sus respectivas capitales o fortalezas cercanas, y se regulaba incluso la forma en que debían ser custodiados.

Con esta medida se aseguraban del pillaje o de los carlistas los objetos preciosos eclesiásticos, es decir, los de mayor valor, pero quizá esta disposición encerraba entre líneas otros fines inconfesables por parte del Estado, ya que, a la vista del contexto jurídico, parece poco creíble que se tratara de una norma que pretendiera únicamente el mero depósito.

La participación de los eclesiásticos en la guerra carlista, por un lado, junto con la obligación de residencia personal de los eclesiásticos, motivaba la aprobación de otras normas como el Real Decreto de 24 de septiembre de 1.836 mandando ocupar las temporalidades de los eclesiásticos que sin licencia se hallaran en el extranjero⁶⁹.

La consecuencia que se derivó fue la ocupación y aplicación a las urgencias del Estado de las temporalidades de todos los eclesiásticos españoles que se hallaban fuera del Reino.

Pero este Real Decreto pretendió ser ejemplar y extenderse en el tiempo, señalando que se ocuparían con igual aplicación las temporalidades de los que en lo sucesivo se ausentaran del Reino sin especial permiso del Gobierno.

⁶⁹. Ibidem, pp. 423-424.

Analizando en una visión de conjunto el Gabinete de Mendizábal, García Gárate⁷⁰ advierte la progresión geométrica en las medidas tomadas por el gobierno de Mendizabal en su legislación anticlerical, iniciándola con medidas más o menos intrascendentes hasta culminar en algunas muy graves y de gran repercusión. Fue más radical que sus predecesores.

En otro orden de cosas, una de las pugnas de intereses se centró en la devolución de los bienes nacionales, vendidos en la época del Trienio Liberal, y luego expropiados por la reacción absolutista⁷¹.

Dentro del marco desamortizador nos encontramos en un momento histórico marcado por el enfrentamiento entre el poder político y la Iglesia Católica, donde ninguna parte desea abandonar sus posiciones perfectamente diferenciadas. Por un lado, la Iglesia que no deseaba ser parte del Nuevo Régimen, no quería saber nada ni de ilustración ni de revoluciones, ya que todo ello no podía sino dañar su status, y por otro lado, un Estado que pretendía olvidar el Antiguo Régimen a marchas forzadas, y modificar una Iglesia que le

⁷⁰. García Gárate, A., *Desamortización y Concordato de 1.851*. En prensa, y que se dispone por gentileza de su autor.

⁷¹. Colomer Viadel, A., *Los liberales ...* cit. p. 16. En este sentido se pueden señalar, entre otras, las siguientes disposiciones tendentes a solucionar este problema sobre la devolución de los bienes adquiridos en virtud de la desamortización en el Trienio: Por lo que respectaba a los bienes "de propios", el Real Decreto de 9 de junio de 1.835, que contenía la ley determinando el modo de reintegrar a los compradores de bienes vinculados. La devolución, no consistía en el reintegro del bien, a no ser que estuvieran en su posesión, sino en la entrega de la cantidad económica que pagaron en su día incrementada con un interés del 3 por 100. (*Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.835, cit. pp. 253-257). O también, y con respecto a los bienes pertenecientes a la Iglesia el Real Decreto de 3 de septiembre de 1.835, por el que se restablecía en su fuerza y vigor las ventas de bienes que pertenecieron a varios conventos e institutos religiosos. A diferencia de las devoluciones de propios, sólo se contenía la devolución, no se comprendía la figura de la devolución más intereses de las cantidades entregadas. (*Ibidem*, pp. 372-373).

era hostil, pero a la vez necesitaba contar con su apoyo para favorecer el cambio.

La legislación del Estado en este período se puede calificar como anticlerical, si nos atenemos a sus resultados prácticos. Esta espiral normativa hizo que el Estado muchas veces entrara a regular materias que debieron ser reguladas sólo por la propia Iglesia, como las que afectaban al orden interno.

Las medidas normativas señaladas supusieron sólo el comienzo de una serie de disposiciones contrarias a los intereses de la Iglesia Católica, que aunque incidieron fundamentalmente sobre el clero regular, fueron continuadas e incluso incrementadas a partir de la vigencia del texto constitucional de 1.837.

2. FINANCIACIÓN

Por lo que respecta a la incipiente financiación del Estado, el Estatuto significaba de nuevo la oportunidad para adentrarse en la reforma señalada en los momentos anteriores, aunque en realidad, desde el año 1.834 hasta el año 1.836, en este capítulo, nos situamos en un punto muerto, donde hay que señalar como medidas más significativas, la continuidad en la vigencia de las normas del sistema absolutista, es decir, una Iglesia que seguía disfrutando de los diezmos, y un Estado, que vuelve a la carga contra sus bienes amortizándolos. Sin embargo, no hay que olvidar que en este período fue cuando se produjo la gestación del sistema de dotación estatal a favor de los miembros del clero, es decir, la dotación personal que se constatará con la Constitución de 1.837.

Así las cosas, en este período, los extremos que deben citarse al respecto de la financiación de la Iglesia son varios:

En primer lugar, la llegada de los liberales de nuevo al poder suponía la conocida incertidumbre sobre la financiación propia de la Iglesia, sobre todo del diezmo. Como quiera que durante el Trienio Liberal se había establecido el medio diezmo, ahora, con la vuelta de los liberales al poder, no se conocía cuál sería el destino que sufriría este tributo. Por ello, los obligados a su pago cada vez eran más reticentes al abono voluntario. Para solucionar esta polémica sobre el diezmo se promulgaba el Real Decreto de 5 de julio de 1.834, sobre el exacto pago de diezmos y primicias⁷². Tras esta norma quedaba claro que los moderados no pretendían abolir el sistema tradicional de financiación de la Iglesia en nuestro país.

En segundo lugar, otro extremo de importancia venía significado por la exacción por parte del Estado a la Iglesia del conocido subsidio del clero, toda vez que éste se exigía incluso en pleno apogeo del fenómeno desamortizador, aunque con una rebaja del 33 por 100, así de la cuota de 30.000.000.rs se rebajaba a la de 20.000.000.rs. Esta afirmación aparecía recogida en la Real Orden de 20 de octubre de 1.836 que fijaba el subsidio del clero en 20 millones⁷³.

En tercer lugar, se continuaba con el desarrollo de la incipiente financiación estatal, para lo cual se prescribía la ayuda de la Iglesia en la consecución de los fines económicos del Estado, puesto que no hay que olvidar que los párrocos de las distintas iglesias eran los que mejor conocían la capacidad económica de los contribuyentes. Para ello se promulgaron algunas disposiciones como la Real Orden de 7 de febrero de 1.834, por la que se prevenía a los párrocos que debían evacuar los informes que les pidieran los Subdelegados de

⁷². *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.834, cit. pp. 326-327.

⁷³. *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.836, cit. pp. 485-486.

Rentas sobre la conducta de sus feligreses en delitos de contrabando, sin que necesitaran la licencia de Vicarios y Provisores⁷⁴.

En cuarto lugar, el aspecto más importante, de cara a la presente investigación, aparecía significado por los antecedentes del sistema de financiación directa por parte del Estado del culto y el clero. En este período nos encontramos simplemente con el nacimiento de algunas pensiones que podíamos denominar "de supervivencia", puesto que contenía prestaciones económicas realmente escasas.

En este sentido, se pueden señalar algunas disposiciones. De entre ellas cabe destacar el importante Real Decreto de 8 de marzo de 1.836, que suprimía los monasterios, conventos y demás congregaciones religiosas, con las excepciones que se señalaban⁷⁵. Dichos antecedentes, aparecían constituidos por la creación de las Juntas diocesanas, quienes proponían al Gobierno la cuota que conceptuaban suficiente para sufragar los gastos del culto en las Iglesias de los Conventos de ambos sexos no suprimidos. Esos denominados gastos de culto, contenían asignaciones para la subsistencia de los regulares no suprimidos.

Para el abono de esas pensiones de supervivencia, los Prelados locales debían remitir una nota todos los meses a las Juntas diocesanas donde se contenía el número de religiosos, con expresión de la orden a la que pertenecían, clase y demás circunstancias personales⁷⁶.

⁷⁴. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.834, cit. p. 54.

⁷⁵. *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.836, cit. pp. 120-141.

⁷⁶. Así se disponía en el Art. 23.

Por lo que respecta a los exclaustrados y secularizados de ambos sexos que aspiraban a una pensión del Estado, se establecía la naturaleza rogada de ellas, en tanto y cuanto, los aspirantes a su disfrute debían hacerlo saber a las Juntas diocesanas mediante una nota escrita, donde necesariamente debían expresar los siguientes datos: nombre y apellidos, pueblo de naturaleza, residencia y edad, Orden y convento al que pertenecían, y lo que el Decreto denominaba "circunstancias literarias", junto con los documentos justificativos de todos los datos señalados. Tras la decisión de su concesión, esta clase del clero debía remitir todos los meses a estas Juntas diocesanas una fe de vida firmada por el Alcalde y párroco respectivos.

Ese embrión del sistema de pensiones se desarrollaba mediante la Real orden circular de 15 de junio de 1.836, sobre el pago de gastos en la instalación de las Juntas diocesanas, y pago de pensión a los religiosos⁷⁷.

Esas pensiones de supervivencia llegaban incluso a los eclesiásticos que habían sido separados de sus destinos por su adhesión a la causa carlista. Así se contenía en la Real Orden de 9 de septiembre de 1.836 mandando ocupar las temporalidades a los Prelados eclesiásticos separados de sus Iglesias⁷⁸. Mediante esta Orden, no sólo a los Obispos, sino a todos los eclesiásticos, se les ocupaban todos sus bienes. Sin embargo, a éstos se les dotaba de una pensión alimenticia anual, siempre que residieran donde hubiera autorizado el Gobierno. Dicha pensión anual ascendía a 200 rs. para los Prelados y a 100 rs. para cualquiera otras dignidades. Esa pensión no tenía lugar cuando los interesados residieran en el extranjero, o bien estuvieren procesados.

⁷⁷. *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.836. cit. pp. 250-252.

⁷⁸. *Ibidem*, pp. 384-385.

Esta nueva financiación incipiente del clero, tenía que regular aquellos supuestos donde se recibían varios rendimientos por parte de algunos miembros del clero. En este sentido, se puede traer a colación la Real Orden de 25 de febrero de 1.836 por la cual se determinaba que los párrocos incongruos optaran entre novenar o aceptar la congrua que señalaba la Real Hacienda⁷⁹. En ella, se determinaba que esta clase del clero debía optar entre disfrutar del "novenar", o bien aceptar la congrua ofrecida por el Erario público.

Por lo que respecta a los secularizados se regularizaba de nuevo su situación, puesto que, como es sabido, después del régimen constitucional vieron como su situación económica se sancionaba con la nulidad por Fernando VII a su vuelta al poder. Ahora, con el Estatuto en vigor y con los liberales en el poder, se volvía a dar solución a sus problemas económicos, toda vez que se establecía el derecho de los miembros de esta clase del clero al recibo de sus emolumentos incluso en caso de haber capitalizado sus pensiones⁸⁰.

En quinto lugar, el legislador pretendía que los bienes que quedaban en manos de la Iglesia tributaran como cualesquiera otros inmuebles en propiedad de cualquier otra persona física o jurídica en España. Para ello, se declaraba mediante el Real Decreto de 6 de marzo de 1.836 que todos aquellos bienes adquiridos con posterioridad al Concordato de 1.753 estaban sujetos al pago de frutos civiles⁸¹. La excepción de los bienes anteriormente poseídos por la Iglesia aparecía señalada en el Art. 8 de dicho Concordato.

⁷⁹. *Ibidem*, pp. 89-90.

⁸⁰. Así se disponía en la Real Orden de 13 de octubre de 1.836, por la que se determinaba que a los eclesiásticos que capitalizaron sus pensiones se les siguieran pagando éstas por ahora. (*Ibidem*, p. 460).

⁸¹. *Ibidem*, p. 117.

3. ENSEÑANZA

En dos ocasiones habían fracasado los liberales en sus intentos de reformar la enseñanza en España, chocado con el absolutismo de Fernando VII. Ahora, tras la muerte del monarca, el futuro era incierto pero en todo caso, aparecía como punto de partida el Estatuto Real.

Este texto no trajo cambios significativos con respecto al sistema anterior señalado en el período de 1.823-1.834. Se continuaba con el papel predominante de la religión dentro de los diferentes planes de estudios y el protagonismo de los eclesiásticos en el sistema educativo. Sin embargo, durante este período se procedió a elaborar algunos proyectos que cristalizaron a finales del sistema instaurado por este texto, y cuya vigencia fue realmente breve.

A diferencia de lo contenido en la Constitución gaditana, donde la regulación de la enseñanza estaba encomendada a las Cortes, ahora, en el Estatuto Real del 34, se atribuía al Gobierno⁸².

Para la reforma de la enseñanza se creaba una comisión mediante el Real Decreto de 31 de agosto de 1.834, mandando establecer una Comisión que se ocupara de formar un plan general de Instrucción primaria⁸³. Posteriormente, y

⁸². Así se contenía en el Art. 31: "Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto, que no se haya sometido expresamente a su examen en virtud de un decreto Real".

⁸³. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora* 1.834, cit. pp. 188-189. Por lo que respecta a los miembros que la conformaban se indicaban mediante el Real decreto de 6 de septiembre nombrando una Comisión para la formación de un plan de Instrucción primaria. (*Ibidem*, p. 190).

para auxiliarla en sus funciones, se diseñaba la Dirección de Estudios⁸⁴.

La formación de los planes de estudio se iba a diferir en el tiempo, pero la reforma de la enseñanza no podía esperar demasiado, y sobre todo, la denominada primera enseñanza. Por ello, se promulgaba la Real Orden de 21 de octubre de 1.834, que contenía la Instrucción de las Escuelas de primeras letras del Reino⁸⁵. De entre sus contenidos se debe significar dos determinaciones importantes. En primer lugar, se continuaba hasta que se aprobara la reforma, con el plan de 1.825 y su desarrollo posterior. Y en segundo lugar, la figura de los párrocos era importante en el control de esta primera enseñanza, toda vez que formaban parte de las Comisiones⁸⁶ que se creaban en cada capital de provincia.

Se ha señalado que una de las características del Estatuto era su voluntad conciliadora, y en relación con la enseñanza, se puede verificar esa nota en la Real Orden de 12 de noviembre de 1.834, comunicada a la Dirección General de Estudios por la que se mandaba que se revalidasen los grados conferidos en estudios aprobados durante el período constitucional⁸⁷.

En otro orden de cosas, la llegada de los liberales moderados supuso el

⁸⁴. Real Decreto de 25 de septiembre de 1.834 suprimiendo la Inspección general de Instrucción pública, y creando una Dirección de Estudios (*Ibidem*, pp. 394-395).

⁸⁵. *Ibidem*, pp. 417-424.

⁸⁶. Dichas Comisiones estaban compuestas por el Gobernador civil como presidente, del párroco donde no haya más que uno, o del que elija el mismo Gobernador, si hubiese otros; y de tres vecinos padres de familia conocidos por su instrucción y celo por la buena educación de la niñez, nombrados todos ellos por dicha autoridad a propuesta del Ayuntamiento. (Art. 1).

⁸⁷. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.834, cit. pp. 443-444.

final de los castigos corporales en las casas de educación⁸⁸.

Una de las tareas que los liberales asumieron con mayor empeño era la reforma de los seminarios conciliares, toda vez que el Gobierno quería que fueran la cuna del futuro clero liberal, y por ello, antes de la aprobación de los planes moderados de enseñanza, nos encontramos con la reforma de estos centros de la Iglesia. Así se establecía en la Real Orden de 12 de octubre de 1.835, señalando la carrera de estudios que habían de hacerse en los Seminarios conciliares, y demás que se expresaba⁸⁹. Su exposición de motivos literalmente contenía:

"... perpetrado el Real ánimo de S.M. la Reina Gobernadora de que nada importa tanto al bien del Estado y de la misma religión como el dar a la educación destinada al servicio de la Iglesia aquel carácter de uniformidad en las doctrinas, y de concierto y regularidad en su estudio, que son a un tiempo la mejor salvaguarda de las costumbres, y una fianza muy segura del orden público, desterrando de nuestras escuelas el espíritu de secta y de partido, que no sólo ha retrasado siempre el progreso del saber, sino que ha sembrado también la sociedad abundantes semillas de odio, disputas y discordias, ...".

En todo caso, la reforma de los seminarios se efectuó tras haber sido escuchada la Junta eclesiástica.

La semilla liberal se introducía en los seminarios mediante la selección de los nuevos profesores necesarios para completar los nuevos planes de estudios,

⁸⁸. Tal y como se disponía en la Real Orden de 25 de agosto de 1.834, prohibiendo el castigo de azotes en todos los Colegios y casas de educación. (*Ibidem*, p. 188).

⁸⁹. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.835. cit. pp. 460-463.

toda vez que se señalaba que: "... dando cuenta a S.M. por la Secretaría de mi cargo, de los sujetos que eligieren, con expresión de sus méritos, circunstancias y concepto público que merezcan por su moralidad y adhesión al trono de la Reina nuestra Señora y a las libertades patrias; ...". Tras ese filtro de los nuevos profesores, se pretendía, en igual sentido, conocer perfectamente la realidad de los profesores anteriores, puesto que con respecto a ellos se requería que se remitiera al Ministerio de Gracia y Justicia una "... razón nominal de los Catedráticos actuales de sus respectivos Seminarios, con expresión de su carrera, concepto público que merezcan por su moralidad y opinión política, y si han obtenido las cátedras por oposición, o por libre y sólo nombramiento del Diocesano".

Operada la reforma de los seminarios, la preocupación del Gobierno seguía centrada en gran medida sobre la primera enseñanza. En estos primeros momentos, aunque si bien no se había aprobado todavía ningún nuevo plan de estudios, el deseo de impulsar este tramo básico de enseñanza se podía verificar también mediante la Real Orden de 4 de diciembre de 1.835, comunicada a los gobernadores civiles sobre arreglo de la enseñanza primaria⁹⁰. En esta orden no se contenían ningún tipo de novedades respecto al sistema educativo que regulaba la primera enseñanza. Sin embargo, se consignaban diferentes disposiciones para obligar a los Ayuntamientos a desarrollar desde el plano económico esta primera enseñanza.

El sistema educativo del Estatuto estuvo representado por el Real Decreto de 4 de agosto de 1.836, que incluía un plan general de instrucción pública⁹¹. Se trataba de una planificación ambiciosa, que regulaba tres grados de enseñanza:

⁹⁰. *Ibidem*, pp. 552-554.

⁹¹. *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II. dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora , ... 1.836, cit. pp. 301-328.*

primera, segunda y tercera, los establecimientos públicos y privados, el profesorado, la administración y el gobierno de los centros del Estado, los métodos de enseñanza, los grados académicos, etc

Por lo que respecta a los diferentes grados contenidos en el nuevo sistema educativo, hay que comenzar con el desarrollo del más elemental, denominado educación primaria⁹². Éste se dividía a su vez en dos grados: elemental y superior. En ambos grados era preceptiva la enseñanza de los principios de religión y de la moral, y además, se concretaba en el primer lugar de la lista de asignaturas⁹³.

Esta enseñanza se contemplaba bajo el punto de vista de la desigualdad, toda vez que, por una parte, expresamente se contenía la posibilidad de ampliarse en los pueblos cuyos recursos económicos lo permitieran⁹⁴, y por otra parte la posibilidad de reducirse las enseñanzas en los pueblos con menos recursos económicos. Pero esa reducción de contenidos, en ningún caso podía afectar a la enseñanza de la doctrina cristiana⁹⁵.

⁹². La enseñanza primaria podía ser pública o privada, entendiéndose por pública toda aquella que, de alguna manera, se financiase, total o parcialmente, con fondos públicos. (Art. 2). Y por lo que respecta a la enseñanza privada podía cualquier español regentar estos establecimientos, siempre que se dieran las circunstancias previstas en el Art. 15. De entre ellas se debe destacar la necesidad de un certificado expedido por la autoridad municipal donde constara la "buena conducta". En todo caso, dicha autorización debía ser anterior a la apertura de cualquier centro docente.

⁹³. En el grado elemental, junto a la enseñanza de la religión y de la moral, se contenían las siguientes asignaturas: lectura, escritura, principios de aritmética (sumar, restar, multiplicar y dividir), y la gramática castellana. Y en el superior, junto a estas asignaturas, se impartían mayores nociones de aritmética, principios de geometría, dibujo, nociones de física, química, y nociones de geografía e historia. (Artículos 4 y 5).

⁹⁴. Art. 7.

⁹⁵. Expresamente el Art. 8 contenía: "En las poblaciones donde no fuere posible sostener escuela elemental completa, se procurará establecer una, aunque sea incompleta, donde se enseñen las partes más indispensables, como leer, escribir y doctrina cristiana...".

Este plan continuaba con la reprochable discriminación por razón de sexo que se contenía en todos los planes anteriormente señalados, pero ahora se podía observar un pequeño avance, toda vez que se establecía que en los casos en que las circunstancias lo permitieran se acomodaría la enseñanza en las escuelas de las niñas a las correspondientes elementales y superiores de niños, aunque si bien se señalaba expresamente que con las modificaciones y en la forma conveniente al sexo⁹⁶.

El siguiente grado de enseñanza era la denominada enseñanza secundaria⁹⁷, y al igual que en la primaria, se establecía también la diferencia entre pública y privada, y su gradación en elemental y superior, y por lo que respecta al estudio de la Religión católica, se contenía igualmente en este grado elemental y superior junto con moral y política.

El último de los peldaños del sistema educativo estaba representado por la tercera enseñanza. Este plan, en este capítulo, tan sólo se limitaba a especificar los estudios que se podían cursar en facultades, escuelas especiales y estudios de erudición.

La fiscalización de la enseñanza se efectuaba mediante una serie de comisiones que aparecían determinadas en el plan. Se trataba de las de instrucción pública de provincia, partido y pueblo. En estas comisiones, la

⁹⁶. Art. 21.

⁹⁷. Por esta se entendía aquella que comprendía "los estudios a los que no alcanzaba la primaria superior, pero que son necesarios para completar la educación general de las clases acomodadas, y seguir con fruto las facultades mayores y escuelas especiales". (Art. 25).

presencia de miembros del clero se correspondía al siguiente detalle: en la de provincia y partido, uno entre los ocho miembros, y en la de pueblo, uno entre seis.

Junto a esas comisiones, se diseñaba el órgano más importante encargado de la fiscalización del plan, que era el Consejo de Instrucción pública, y estaba constituido por un presidente, de doce a veinte consejeros⁹⁸, y un secretario que era nombrado directamente por el Rey.

La vigencia del plan de estudios moderado fue realmente breve, toda vez que se suspendía su ejecución en el mes de septiembre, es decir, justo un mes después de su aprobación⁹⁹. Y como consecuencia directa de esa suspensión, se restablecía la Dirección General de Estudios vigente en el anterior período constitucional¹⁰⁰, por lo que el Consejo de Instrucción Pública se derogaba apenas había comenzado a desarrollar sus funciones.

Este diseño general de la enseñanza sentaba las bases del pensamiento moderado para con la educación, y fue conocido como el plan del duque de Rivas, puesto que era él quien firmaba dicho Decreto.

Siguiendo a De Puelles¹⁰¹, se puede afirmar que las características

⁹⁸. Dichos consejeros eran nombrados directamente por el Gobierno.

⁹⁹. En este sentido se puede señalar la Real Orden de 4 de septiembre de 1.836 comunicada al Jefe político de Burgos, por el que se prevenía que se suspendiera la ejecución del nuevo plan de estudios. (*Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.836, cit. p. 372).

¹⁰⁰. Real Decreto de 8 de octubre de 1.836, restableciendo interinamente la Dirección general de Estudios según la Constitución. (*Ibidem*, pp. 456-457).

¹⁰¹. Puelles Benitez, M. de., *Educación e ideología* ... , cit. pp. 98-99.

principales que presentaba eran:

1. Se abandonaba el ideal progresista de la gratuidad de la enseñanza en todos sus grados.

2. La segunda enseñanza no abundaría en contenidos educativos, sino que servía principalmente de preparación a la universitaria.

3. La enseñanza universitaria se concebía en términos elitistas.

Aun con todo ese esquema, el plan sólo diseñaba las grandes líneas de la enseñanza, pero sin establecer una regulación pormenorizada, puesto que para ello se debían elaborar posteriores reglamentos.

Por lo que respecta a la libertad de cátedra, y más concretamente a la designación unilateral de los libros de texto, en este plan se contenía un avance respecto a los sistemas anteriores, toda vez que permitía a los docentes la elección de los materiales que estimaran oportunos.

La religión católica continuaba siendo una asignatura explicada, no sólo en los tramos de primaria y secundaria, sino que incluso en las propias universidades, en las diferentes carreras existía la obligatoriedad de su estudio. En apoyo de esta afirmación se puede traer a colación el dato señalado por Peset¹⁰², quien señala que "... Los alumnos de quinto curso de jurisprudencia organizan desórdenes en la clase de religión, porque la consideran inútil y protestan y no responden a la lista; desean sustituirla por oratoria forense, y con el tiempo lo conseguirán. ...".

¹⁰². Peset, M., y Peset, J.L.. *La universidad española* ... cit. pp. 404-405.

Pese a lo relatado, la llegada de los liberales traía las primeras semillas para proceder al cambio del sistema educativo en España. Prueba de ello resultaba, incluso antes de la aparición de los planes de estudios, la abolición de la antigua exigencia de la llamada *prueba de limpieza de sangre* que, como es conocido, se requería para admitir a los jóvenes en cualquier carrera o profesión. Mediante la Orden de 31 de enero de 1.835 quedaba abolida la llamada prueba de limpieza de sangre¹⁰³. En realidad se sustituía dicha prueba por la presentación de una partida de nacimiento que acreditase la legitimidad de un certificado de buena moral y conducta.

Un ejemplo claro del cambio operado por los moderados con respecto al sistema de Fernando VII sobre la enseñanza de la religión se verificaba convenientemente a través de los señalados Catecismos Nacionales usados en las escuelas de primeras letras, y más concretamente, en uno de los que se usaban en este momento histórico¹⁰⁴, toda vez que su contenido se conformaba mediante una relación de preguntas y respuestas que los alumnos habían de memorizar y repetir en las escuelas de primeras letras. Pero a los efectos de la presente investigación, cabe destacarse su Quinta Parte, que literalmente disponía:

P: ¿Cuáles son las garantías nacionales?

R: La religión, la educación, la libertad de imprenta y la propiedad.

¹⁰³. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.835, cit. pp. 67-68.

¹⁰⁴. "Catecismo Nacional", publicado en el Boletín Oficial en la Provincia de Córdoba, el 6, 8 y 10 de febrero de 1.835, recogido en la obra *Catecismos políticos españoles. arreglados a las Constituciones del Siglo XIX*, cit. p. 240.

P: ¿Por qué es garantía la religión?

R: Porque de Dios traen su origen todas las cosas de este mundo: porque nuestro señor Jesucristo es el oráculo de la verdad, y la práctica de su divina moral, el mejor fundamento de las sociedades humanas.

P: ¿Cómo se aplican los principios cristianos a la conservación de la Nación?

R: Porque el evangelio recomienda la sumisión a la autoridad civil, y reconoce la obligación de cumplir con los deberes sociales.

A la vista de lo anterior, debe señalarse la gran diferencia con el Catecismo Político reseñado en la Constitución de 1.812, puesto que ahora la Religión no sólo se encontraba al servicio del Estado, sino que se trataba de una garantía nacional. El cambio resulta muy significativo.

Como se ha venido destacando en todos los períodos abarcados de este siglo XIX, la educación siempre ha sido una gran preocupación para cualquier legislador. Dentro de esa línea de desarrollo y su extensión al pueblo, hay que destacar como todos aquellos bienes propiedad de la Iglesia o bien de los municipios que estaban dedicados a la enseñanza fueron declarados exentos de la desamortización¹⁰⁵. O también la posibilidad de emplear fondos públicos en los momentos de grave crisis financiera del Erario público, que se permitía a los Ayuntamientos para la designación de maestros¹⁰⁶.

¹⁰⁵. Real Orden de 15 de Octubre de 1.836 declarando libres del impuesto de Amortización a los bienes destinados a las escuelas. (*Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.836, cit. pp. 465-466).

¹⁰⁶. Así se disponía para con lo relacionado al desarrollo de la enseñanza primaria. Nos
(continúa...)

Las medidas desamortizadoras no sólo se detenían en el acercamiento de recursos económicos para el erario público, sino que se puede afirmar que expresaban determinaciones de cara a incidir en otros aspectos. En este sentido se puede señalar como ejemplo de esta afirmación la pretensión de acercar la cultura¹⁰⁷ al pueblo llano a través de distintas disposiciones como la Real Orden de 14 de diciembre de 1.836¹⁰⁸. En ella se expresaba que eran muchas las riquezas artísticas que existían en los conventos y que convenía darles un destino más oportuno, bien para enriquecer el Museo Nacional, o bien para formar Museos provinciales donde estuvieran reunidas a la vista de todos para que sirvieran de modelos y contribuyeran a difundir el buen gusto y la afición a las bellas artes.

Esta preocupación por conservar la cultura se manifestó en otras disposiciones como, entre otras, la Real Orden de 27 de mayo de 1.837 sobre conservación y destino de objetos científicos y artísticos procedentes de los conventos suprimidos¹⁰⁹. Se establecía la formación de comisiones para que

(...continuación)

referimos a la Real Orden de 4 de diciembre de 1.835, dirigida a los gobernadores civiles sobre el arreglo de la enseñanza primaria. (*Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.835, cit. pp. 552-554). Literalmente se señalaba: "*Se autoriza también a los Ayuntamientos para nombrar los maestros de primeras letras pagados de los fondos del común, porque además de merecer sus individuos la confianza del pueblo, son interesados personalmente en el acierto. Esta facultad no es ilimitada, porque el interés individual que se desenvuelve con toda energía al disponer de los caudales propios, suele perder una gran parte de su actividad al hacer uso de los fondos públicos*".

¹⁰⁷. Entendiendo por cultura toda la riqueza artística que se encontraba dentro de los conventos suprimidos: libros, cuadros, esculturas, archivos, etc... .

¹⁰⁸. "Para que a los cuadros de los conventos suprimidos se les de un destino conveniente". *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.836, cit. pp. 579-580.

¹⁰⁹. *Colección de ...-hasta junio de 1.837-*, cit. pp. 260-262.

conocieran de las obras de arte, libros y demás objetos existentes en los conventos suprimidos. Entre sus disposiciones se recogía que las obras serían depositadas en edificios para que sirvieran a la vez de biblioteca y de museo; dichos edificios eran reconvertidos o creados para este fin, determinando la propia comisión científica las obras que serían conservadas por su interés y cuáles las desechadas y vendidas en pública subasta. Pero en todo caso, como nota común se disponía el uso de los propios conventos suprimidos como bibliotecas o museos.

4. LIBERTAD DE IMPRENTA

El Derecho de libertad de imprenta continuaba siendo una gran preocupación para el legislador, y por ello se aprobaba una reglamentación nueva de este derecho antes incluso de promulgarse el Estatuto. Nos referimos al Real Decreto de fecha de 4 de Enero de 1.834, que contenía el Reglamento del derecho de imprenta¹¹⁰. Por este motivo, el texto del 34 no hacía mención alguna a este respecto, puesto que ya se había regulado su contenido varios meses antes.

Ya en el examen del contenido de este Decreto, *la libertad de imprenta aparecía diseñada como principio básico e irrenunciable, pero bajo la advertencia expresa que la libertad absoluta e ilimitada no podía existir.*

La exposición de motivos ya se encargaba de delimitar este aspecto, que después se concretaba en el articulado del reglamento. En todo caso, esa exposición de motivos resultaba significativa, puesto que en pocas líneas trataba

¹¹⁰. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora , ... 1.834, cit. pp. 1-13.*

de explicar el motivo de su promulgación, y además recogía literalmente el valor de la religión dentro de la libertad de imprenta:

"No pudiendo existir la absoluta e ilimitada libertad de imprenta, publicación y circulación de libros y papeles, sin ofensa de la pureza de nuestra religión católica, y sin detrimento del bien general, ni todas las trabas y restricciones que ha sufrido hasta aquí, sin menoscabo de la ilustración tan necesaria para la prosperidad de estos reinos".

Tras esa indicación del preámbulo, se concretaba en el articulado una lista de materias que, en todo caso, debían estar sujetas a censura previa, junto a otras que no resultaba necesario. Expresamente se determinaba que se encontraban libres de censura y de licencia todos los libros y papeles que trataran puramente de oficios mecánicos y artes, de literatura, matemáticas, astronomía, navegación, agricultura, comercio, geografía, materia militar, botánica, medicina, farmacia, física química, mineralogía, zoología, y demás ciencias naturales y exactas y de materias económicas y administrativas.

Y por contra, se sujetaban a censura previa todas las obras que tratarasen sobre cinco grandes bloques o materias. En primer lugar, las de religión, materias sagradas y eclesiásticas. En segundo término, las que versaban sobre la moral, política y gobierno¹¹¹. En tercer lugar, las obras relacionadas con el Rey, su familia o materias de Estado¹¹². En el cuarto, se recogían los trabajos relacionados con la geología, historia y viajes, o de recreo o pasatiempo, además de poesías, novelas y composiciones dramáticas, los periódicos (a no ser que fueran

¹¹¹. Por Gobierno se entendía todas aquellas críticas que hacían referencia a la legislación española en sentido amplio.

¹¹². Por materias de Estado, tal y como recogía el Art. 8, se entendían tratados de paz, negociaciones y convenios con aliados de España e incluso monarcas de otros países.

únicamente publicaciones técnicas, o tratasen sólo de artes, ciencias naturales, o de literatura). En último término se recogían los discursos, alegaciones forenses, memoriales ajustados y cualesquiera otros papeles pendientes de los tribunales.

La censura se llevaba a cabo por parte de los censores. Éstos eran una serie de personas especializadas en las materias sujetas a censura, y que conocían por reparto de los distintos impresos, con el fin de emitir sus informes y dictámenes. Por lo que respecta a su nombramiento, eran señalados por los subdelegados de fomento, y nombrados directamente por el Rey. Pero, para los asuntos relatados en el bloque de las obras que versaban sobre asuntos de religión, se establecía la censura directamente por parte de la autoridad episcopal, con la única limitación de que los encargados tenían que fundamentar la censura que aplicasen¹¹³. En caso de censura, se entregaba una copia al autor, quien podía recurrir la censura eclesiástica ante el Consejo Supremo de Castilla, quien controlaba la resolución eclesiástica¹¹⁴.

Los escritos propios de la actividad de la Iglesia, es decir, las bulas, breves y todos los demás rescriptos apostólicos, debían obtener su oportuno pase mediante el visto bueno de los consejos de Castilla e Indias, toda vez que sólo podían circular en España tras su presentación y fiscalización, no por parte de los censores ordinarios, sino de los fiscales ordinarios especializados que dependían

¹¹³. Merece destacarse lo contenido en la parte final del Art. 17, toda vez que se establecía una sutil diferencia entre la autorización para la publicación entre los censores civiles y los censores eclesiásticos. Tal interpretación se extrae de su tenor literal que afirmaba: "... En el caso de que la autoridad episcopal aprobase una obra, no podrá usar de la palabra *imprimase*, reservada a la potestad civil".

¹¹⁴. Esta referencia al Consejo de Castilla, como órgano superior para conocer los recursos contra las censuras emitidas por los eclesiásticos suponía, desde el punto de vista del Derecho, un avance técnico importante, puesto que no hay que olvidar los problemas que en otras reglamentaciones anteriores de este derecho había causado la fiscalización de la censura eclesiástica.

de esos Reales Consejos. Así se establecía no sólo en este Decreto, sino que incluso antes de su aprobación ya se había determinado mediante la Real Orden de 3 de enero de 1.834, para que no se admitiese ni se diera curso a bulas y rescriptos pontificios que no se presentaran por la Agencia General de Preces¹¹⁵.

En la censura de los periódicos, y a pesar de contenerse su censura en el Decreto señalado, su concreta fiscalización se detallaba más aún en la Real Orden de 1 de junio de 1.834, en la que se contenía un reglamento relativo a la publicación de periódicos¹¹⁶. En su virtud, todo periódico, previamente a su edición, precisaba de autorización administrativa¹¹⁷ del Ministerio de lo Interior, a no ser que se tratara de un periódico técnico o que versara sobre artes, ciencias naturales o literatura.

Tras la autorización administrativa, cada número debía ponerse a disposición de los censores para que fiscalizaran su contenido¹¹⁸. Sin embargo,

¹¹⁵. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.835, cit. pp. 1-2.

¹¹⁶. (*Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.834, cit. pp. 296-301). La censura de los periódicos fue seguida de otras normas organizativas. De entre ellas se puede citar el Real Decreto de 18 de agosto de 1.835, por el que se disponía que los censores de periódicos en la Corte formaran una junta al efecto de examinar y censurar dichos papeles. (*Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.835, cit. pp. 363-364).

¹¹⁷. Los Gobernadores Civiles debían manifestar previamente su parecer sobre la utilidad de la concesión y sobre las circunstancias de los que la pretendan como editores responsables de cada periódico. En caso de concederse dicha autorización el interesado debía consignar una fianza de veinte mil reales, cuando estaba sito en Madrid, y de diez mil en el resto de las provincias.

¹¹⁸. Resulta curioso observar como se establecía en este Reglamento que tras la censura, los artículos eliminados por los censores no podían figurar como "espacios en blanco" en los periódicos. De suerte que el lector no podía saber que artículos habían sido expresamente censurados.

a pesar de todos esos controles previos, los censores ni tan siquiera entraban a enjuiciar los artículos que contuvieran doctrinas dirigidas a vertir máximas o doctrinas que conspiraran a destruir o alterar la Religión¹¹⁹, puesto que su inclusión estaba expresamente prohibida.

Otros extremos que se regulaban eran, entre otros, las obligaciones y derechos de los sujetos activos: autores, traductores, impresores, grabadores, etc.

Esta nueva regulación nos presentaba una Iglesia y una religión especialmente protegida de las opiniones de terceras personas, bien ajenas al mundo de la Iglesia Católica, o bien de su propio seno, siempre que no coincidiera con su doctrina interna. De forma que el hecho religioso, o mejor dicho, la opinión sobre religión y la Iglesia quedaba vetada en la libertad de imprenta.

5. EL ESTATUTO DEL CLERO

El espíritu conciliador de este texto se tradujo en la intención de una reforma no traumática de la Iglesia, que operaría en base a la actividad de varias Juntas, todas ellas dependientes del Gobierno y del Consejo Supremo de Castilla. Sin embargo, esa idea no fue posible llevarla a cabo en este período, y así, los deseos de reformas tendentes a modificar la Iglesia española no pudieron llevarse

¹¹⁹. Junto con esa protección especial para con la religión señalada, se añadía la protección para con los derechos y prerrogativas del Trono, el Estatuto Real y demás leyes fundamentales de la Monarquía, los dirigidos a alterar la denominada "tranquilidad pública", los que incitaran a infringir la ley, o a desobedecer a alguna Autoridad, los licenciosos y contrarios a las buenas costumbres, los tendentes a injuriar o deshonorar la reputación o conducta privada de particulares o empleados públicos, y por último los que injurien a los Soberanos y Gobiernos extranjeros, o bien que exciten a sus súbditos a la rebelión.

a cabo, por lo que fueron sustituidos por la promulgación de diversas disposiciones tendentes a controlar algunos aspectos parciales de la Iglesia como los extremos relacionados con el número de eclesiásticos, la adopción de medidas coercitivas contra los eclesiásticos afines a la causa liberal, o bien la fiscalización de los sermones de los eclesiásticos en los púlpitos, o también el procurar que ascendieran a beneficios y prebendas aquellos eclesiásticos afines al régimen liberal.

En todo caso, se puede afirmar que todas esas disposiciones tendentes a controlar la actividad de la Iglesia, en la mayoría de los supuestos, presentaban como nota común la irrogación de efectos nocivos para la Iglesia, pudiendo perfectamente ser calificadas, en ocasiones, incluso como anticlericales.

De cualquier forma, para la mejor exposición de dichas actuaciones parciales en la reforma de la Iglesia se pueden resumir en los siguientes extremos:

5.1 EL ARREGLO DEL CLERO

Todo el sector liberal, incluso los moderados, ahora al frente del Gobierno, estaban plenamente convencidos de la necesidad de proceder a la reforma de la Iglesia y el clero.

Por este motivo, y tan sólo 12 días después de la aprobación del Estatuto, se constituía una Junta Eclesiástica para el arreglo del clero¹²⁰.

¹²⁰. Nos referimos al Real Decreto de 22 de abril de 1.834, al que sigue una instrucción aprobada por su S.M. sobre la formación de una Junta Eclesiástica para el arreglo del clero secular y regular. (*Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.834, cit. pp. 210-

En su exposición de motivos indicaba claramente las motivaciones a las que respondía este decreto, toda vez que literalmente se señalaba:

"... Que esta Junta se ocupe desde luego de examinar el estado actual de todo el territorio español en lo formal y material concerniente al culto divino y sus ministros; instruyendo los expedientes oportunos por medio de los documentos e informaciones que crea en cada caso ...".

De entre las determinaciones que se establecían en su articulado, cabe destacar las siguientes:

- 1) Examen de la extensión de los arzobispados y obispados.
- 2) Razón del número de los ministros y colaboradores de cada iglesia, con expresión de cargas y su procedencia.
- 3) Averiguar número, localización y organización de las iglesias.
- 4) Recoger el número de parroquias que se contenía en cada diócesis, su respectiva dotación fija o eventual y su procedencia.
- 5) Investigación de los beneficios simples o servideros, y cualesquiera otros beneficios eclesiásticos, que formaran cuerpo o estuvieran diseminados, estado actual, cargas, dotación y patronato.
- 6). Sobre las bases de la estadística que se estimaran de los datos anteriores, se propondría el plan de división territorial eclesiástica, número y

(...continuación)
214).

dotación de los ministros que se considerase más conducente para "las intenciones de S.M.", que eran -entre otras-:

- a). Que todos los españoles recibieran pasto espiritual.
- b). Que los ministros del Señor percibieran, con la posible independencia, "la retribución anchurosa que reclama su elevado ministerio".
- c). Que se procurase hacer coincidir, siempre que fuera posible, la división eclesiástica con la civil para que el sacerdocio y el imperio se auxilien recíprocamente.

Junto a la creación de esa Junta para el arreglo del clero, se diseñaban otras Juntas en cada diócesis, denominadas *Juntas diocesanas*, que se creaban mediante en el Real Decreto citado de 8 de marzo de 1.836, concretamente en su Art. 47, y se concebían como una pieza clave para las relaciones de Iglesia con el Estado, tal y como se puede verificar a la vista de las competencias que tenían atribuidas¹²¹. Por una parte, se les asignaban unas funciones relacionadas con controles estadísticos, que consistían en la remisión al Gobierno de información relacionada con los ministros de la Iglesia, entre otros, sobre el número de religiosos existentes en los Conventos, sobre su composición (sacerdotes, ordenados "in sacris", etc ...), sobre los exclaustros residentes en sus demarcaciones territoriales, sobre los secularizados hasta esa fecha y de los fondos económicos que disfrutaban, sobre el número de religiosas que continuaban en sus conventos, sobre las que se hubiera exclaustro, y finalmente

¹²¹. Estas competencias aparecían dibujadas en los artículos 42 y 43, del Reglamento que se contenía en el Real Decreto de 8 de marzo de 1.998, por el que se suprimían los monasterios, conventos y demás congregaciones religiosas, con las excepciones que se señalaban. (*Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II. dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora* 1.836, cit. pp. 120-140).

sobre las secularizadas en épocas anteriores. Tras toda esa información relacionada, sobre todo, con datos anteriores a la fecha de aprobación del Decreto, se atribuían a las Juntas diocesanas tareas tendentes a proporcionar datos al Gobierno sobre el estado del clero, de suerte que se le exigía que de forma trimestral señalase: el número de los religiosos de ambos sexos que se exclaustaran en adelante, de los que fallecieran, y de los que hubieran sido recolocados, y sobre por los que cualquier causa y motivo dejaran de recibir pensión.

De igual forma, a dichas Juntas diocesanas se les atribuía la potestad de velar por la "pronta colocación" de los exclaustados y secularizados, tanto en los cargos que ostentaron en la etapa del Trienio liberal, como en las futuras vacantes que se produjeran.

Esa potestad no sólo cuidaba de su colocación, sino que también recogía la posibilidad de que esta clase del clero pudiera regentar algunos centros docentes en los lugares que quisieran, y además se les facultaba para que pudieran ser designados por los Ayuntamientos como maestros con preferencia a otros individuos. Esos privilegios de cara a la primera enseñanza se continuaba en los restantes grados de la enseñanza y en los propios Seminarios conciliares. Y por último, sobre esta clase del clero, se establecía la posibilidad de que fueran colocados en Bibliotecas públicas.

La opinión de las Juntas, o mejor dicho, la de la denominada Junta eclesiástica para el arreglo del clero, fue tomada en cuenta, al menos formalmente, en la aprobación de la mayoría de las disposiciones cuyas determinaciones recaían sobre intereses del clero, de suerte que en sus preámbulos se podía

observar siempre la expresión "tras haber sido oída la Junta eclesiástica ..." ¹²².

5.2 REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ECLESIÁSTICOS

Respecto al número de eclesiásticos que existían en España, el legislador era consciente de su elevada cifra, y por ello se aprobaron diversas disposiciones tendentes a solucionar esta cuestión. Entre otras, se pueden señalar las siguientes medidas:

En primer lugar, se pretendió paralizar el crecimiento del número de eclesiásticos mediante la interrupción de las provisiones de piezas eclesiásticas que no llevaran aparejada la cura de almas. Esa medida del Gobierno implicaba la congelación de la provisión de cualesquiera de esos beneficios. Así se contenía en el Real Decreto de 9 de marzo de 1.834, por el que se suspendían, por ahora, la provisión de prebendas eclesiásticas, con la excepción que se expresaba ¹²³. La exclusión contenida en el título de la disposición abarcaba a las prebendas que llevaban aparejada la cura de almas, las llamadas de oficio, y las dignidades con presencia en los cabildos.

Tras la congelación de destinos se operaba la finalización de las ordenaciones "in sacris" mediante el Real Decreto de 8 de octubre de 1.835, disponiendo que los Prelados eclesiásticos se abstuvieran de dar órdenes ni dimisorias, sino para los que ya se hallaban ordenados "in sacris", y a los que

¹²². Por citar alguna de las disposiciones, y entre otras, se puede taer a colación el Real Decreto de 8 de octubre de 1.836, (*Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora* 1.836, cit. pp. 458-459).

¹²³. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora* 1.834, cit. p. 132.

tuvieran tomada colación canónica, en los casos que se expresaban¹²⁴. La exposición de motivos de este Decreto resultaba esclarecedora, toda vez que literalmente afirmaba que:

"Deseando remediar los gravísimos perjuicios que se siguen al Estado y a la Iglesia de ser tan excesivo y desproporcionado el número de eclesiásticos en la mayor parte del Reino, con tanto daño de estos mismos como de los demás españoles, que sufren exclusivamente las cargas públicas de que están exentos aquellos; ... , que por ahora, y hasta que con todo el examen necesario de los trabajos hechos por la Junta eclesiástica se determine, de acuerdo con las Cortes, lo que más convenga sobre la reforma del Clero, los muy Reverendos Arzobispos y Obispos y demás Prelados a quienes competa, se abstengan absolutamente de expedir dimisorias y conferir Ordenes mayores bajo ningún título, ni por ningún motivo ni pretexto".

Continuando la política de congelación del número de eclesiásticos establecida en las anteriores disposiciones, hay que traer a colación el Real Decreto de 8 de octubre de 1.836, por el que se conminaba con las medidas que se señalaban a los Prelados Diocesanos que confirieran órdenes o para ello dieran dimisorias en contravención de lo mandado¹²⁵. Este Decreto se promulgaba para cortar de raíz algunas prácticas subrepticias que se venían realizando para conseguir que algunos eclesiásticos se ordenaran "in sacris", a pesar de la prohibición señalada por el Gobierno. Para tal fin, los eclesiásticos se ordenaban en España en secreto, o bien marchaban a países vecinos con ese propósito. Para cortar de raíz esa práctica se sancionaba que los Prelados diocesanos que

¹²⁴. *Ibidem*, p. 453.

¹²⁵. *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora* 1.836, cit. pp. 458-459.

confirieran órdenes, bien a españoles o extranjeros, o bien que expidiera dimisorias para que los interesados pudieran recibirlas de otro Prelado, ya fuera nacional o extranjero, serían extrañados de España, y sus temporalidades ocupadas por el Estado.

5.3 MEDIDAS TENDENTES A EVITAR LA COLABORACIÓN DEL CLERO CON EL CARLISMO.

Las medidas aprobadas en este sentido contenían principalmente los siguientes efectos: la supresión de conventos, el traslado de sus miembros a otras casas en España y la ocupación de sus temporalidades

La disposición más importante aprobada en este sentido era el Real Decreto de 26 de marzo de 1.834, suprimiendo el monasterio o convento donde ocurriesen los casos que se citaban, con lo demás que se expresaba¹²⁶. El motivo de la promulgación de este Decreto respondía a la intención del Gobierno de evitar que los establecimientos religiosos se convirtieran en refugio de los carlistas.

Como quiera que la colaboración de algunos de los eclesiásticos con la causa carlista era moneda de uso común, este Decreto sancionaba que sería suprimido cualquier monasterio o convento, independientemente de su Instituto, del que se hubiera fugado para pasarse a los rebeldes algún individuo de su comunidad, siempre y cuando el Prelado no hubiera dado parte a la autoridad en el plazo de 24 horas. O también cuando, incluso habiendo comunicado dichas salidas, se hubiera fugado una sexta parte de sus miembros. Tras esas causas,

¹²⁶. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora 1.834, cit. pp. 170-171.*

también se acordaba la desaparición de dichas casas cuando sirvieran para ocultar armas, municiones o cualquiera otros efectos militares pertenecientes a las filas carlistas. Y el último supuesto de disolución hacía referencia a la celebración de juntas clandestinas en defensa del carlismo.

En desarrollo de este Decreto se aprobaron numerosas disposiciones. De entre ellas se pueden destacar:

1). Real Decreto de 10 de abril de 1.834 sobre traslación de los religiosos de conventos suprimidos¹²⁷. Para aquellos casos donde los individuos pertenecientes a casas de vida consagrada hubiesen colaborado en la causa carlista, se decretaba el cierre de sus monasterios y conventos.. Tras ese cierre se disponía que los individuos que residiesen en ellos fueran trasladados a otras casas de la misma orden tal y como hubiesen determinado los Prelados superiores.

2). Real Decreto de 10 de abril de 1.834, sobre las recaudaciones en las provincias de las temporalidades ocupadas a los eclesiásticos infidentes¹²⁸. En esta disposición se determinaba que los productos de las temporalidades ocupadas se recaudasen en cada Obispado por medio de una Comisión compuesta de un eclesiástico que hubiera acreditado previamente su adhesión al régimen¹²⁹, designado por el respectivo Prelado. Además existía otro eclesiástico designado por el Intendente de Rentas de provincia. En todo caso, podía nombrar a un seglar para ayudarle. La junta terminaba su composición con la presencia del Procurador

¹²⁷. *Ibidem*, pp. 194-195.

¹²⁸. *Ibidem*, pp. 195-196.

¹²⁹. Para describir esa adhesión al régimen, el Decreto señalaba literalmente que: "...un eclesiástico de acreditado celo, virtudes y conocida lealtad a mi extensa hija Doña Isabel. ...".

Síndico general del pueblo en el que había residido el eclesiástico cuyas temporalidades se ocupaban. La labor principal de esta Comisión consistía en averiguar por todos los medios las rentas que conformaban las temporalidades ocupadas a los eclesiásticos contrarios al régimen.

Ese apoyo del clero a la causa carlista llevó al legislador, incluso, a controlar las ventas de objetos de valor de los establecimientos religiosos, para evitar que los fondos generados con las enajenaciones engrosaran las arcas carlistas. Como ejemplo se puede citar la Real Orden de 17 de junio de 1.834, comunicada al Sr. Presidente del Consejo Real de España e Indias para que el Clero secular y regular pidieran licencia a S.M. si habían de enajenar alhajas y bienes propios de los establecimientos eclesiásticos¹³⁰.

5.4 CONTROL DEL COMPORTAMIENTO DEL CLERO Y PROMOCIÓN DE LOS ECLESIASTICOS CERCANOS AL RÉGIMEN.

Los liberales desde el poder, como ya habían intentado en las dos ocasiones anteriores expuestas, volvieron a atraerse a los miembros del clero para que sustentaran la causa liberal, aunque en este momento de forma más decidida debido a la existencia de la Guerra Civil. Conforme a esta política, se procedía a la promoción de los eclesiásticos más cercanos al régimen mediante la Real Orden Circular de 20 de noviembre de 1.835 sobre las pruebas de conducta política que habían de dar los eclesiásticos para ser propuestos y ascendidos en

¹³⁰. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.834, cit. p. 310.

beneficios¹³¹. Para llevar a cabo ese control, los Gobernadores civiles se encargaban de emitir certificaciones a favor de los eclesiásticos que acreditaban su buena conducta política y su adhesión al legítimo Gobierno de Isabel II.

En desarrollo de la anterior disposición se aprobaba la Real Orden de 26 de febrero de 1.836, para que los Gobernadores civiles vigilaran que no ejercieran el ministerio de la predicación y confesión los eclesiásticos que hubieran dado pruebas de infidelidad al Gobierno¹³². El contenido era el mismo que el citado antes, sólo que ahora se expresaba con mayor claridad y fuerza, puesto que literalmente se contenía que: "... , ha tenido a bien S.M. autorizar a los Gobernadores civiles para que no permitan que en el distrito de su respectivo mando ejerzan las santas funciones de la predicación y confesión aquellos eclesiásticos que por su conducta y opiniones políticas hayan hecho ver que se olvidan de la fidelidad que deben a su Soberana legítima, de las obligaciones que los ligan a la sociedad y a la Patria en que nacieron, y de los sublimes preceptos que forman la doctrina del divino maestro. ...".

Como corolario de lo anterior, la no identificación de los ministros de la Iglesia con el pensamiento liberal, o mejor dicho, los que no tuvieran acreditado dicho extremo eran blanco de disposiciones muy dañinas, de suerte que se les llegaba incluso a prohibir predicar o confesar. Así se disponía en la Real Orden de 28 de febrero de 1.837, que prevenía que no se permitiera predicar ni confesar a los sacerdotes que no inspiraran confianza a las autoridades¹³³. La propia Orden justificaba su contenido afirmando: "... que por su conducta y opiniones políticas

¹³¹. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora* , ... 1.835, cit. pp. 542-544.

¹³². *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora* , ... 1.836, cit. pp. 92-93.

¹³³. *Colección de ... (hasta junio 1.837)*, op. cit. pp. 87-88.

hayan hecho ver que se olvidan de la fidelidad que deben al Gobierno y de las obligaciones que les ligan a la patria".

5.5 RESIDENCIA DE LOS ECLESIÁSTICOS

Otro punto de especial interés resultaba la residencia de los eclesiásticos en el lugar donde se encontraba el beneficio que disfrutaban. Este extremo había sido puesto de manifiesto en numerosas ocasiones en nuestro Derecho por medio de diferentes disposiciones. Sin embargo, ahora la obligación de residencia no sólo nacía del desempeño de las funciones encomendadas a los ministros de la Iglesia, sino que obedecía también a la existencia de la guerra carlista, toda vez que se verificaba la existencia de algunas normas en contra de los eclesiásticos que abandonaban sus destinos de forma sospechosa.

En este sentido se promulgaban varios Decretos, entre otros, el Real Decreto de 24 de septiembre de 1.836 mandando ocupar las temporalidades de los eclesiásticos que sin licencia se hallaban en el extranjero¹³⁴. En su articulado se detallaban las afirmaciones señaladas¹³⁵.

¹³⁴. *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.836, cit. pp. 423-424.

¹³⁵. Pero además, como consecuencia accesoria se señalaba la ocupación de sus bienes y su traslado a la Caja de Amortización.

5.6 LOS SECULARIZADOS

Tras todos los problemas que habían acontecido con los secularizados, al fin se conseguía que desde Roma se autorizara a esta clase del clero para obtener parroquias. Así se expresaba en el Real Decreto de 21 de septiembre de 1.835 que contenía la bula de S.S. concediendo a los Religiosos secularizados la facultad de obtener parroquias¹³⁶.

Con respecto a esta clase del clero, también se promulgaron otras normas que pretendían su pronta colocación en diversos destinos. En este sentido, se puede traer a colación la Real Orden de 6 de octubre de 1.836, por la que resolvía S.M. que los prelados diocesanos propusieran con preferencia para curatos a los presbíteros secularizados que tuvieran los requisitos debidos¹³⁷.

6. EL JURAMENTO

No contenía el Estatuto fórmula alguna de juramento para cargos públicos, si bien se puede citar a este respecto, las Reales Ordenes de 22 de diciembre de 1.834 y de 26 de Febrero de 1.836¹³⁸. Ambas recogían un tipo de juramento muy similar pero totalmente distinto al que se prescribía en el texto constitucional de 1.812. Así la primera Orden dirigida al Decano del Consejo y de las Ordenes y a los Regentes de las Audiencias, en la cual señalaba el juramento para

¹³⁶. *Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.835, cit. pp. 385-388.

¹³⁷. *Ibidem*, pp. 448-449.

¹³⁸. Real Orden de 26 de febrero de 1.836 prescribiendo la fórmula de juramento que habían de hacer los promovidos a cargos eclesiásticos, de justicia, Abogados, etc ... (*Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora*, ... 1.836, cit. pp. 90-91).

Presidente, Ministros y Fiscal del Consejo de las Ordenes, los Regentes, Ministros y Fiscales de las Audiencias, establecía la siguiente fórmula:

"Juro a Dios ser fiel a la Reina Doña Isabel II y a su agusta madre como Regenta y Gobernadora, observar las leyes del Reino, y administrar justicia con arreglo a ellas".

Por su parte, la Real Orden de 26 febrero de 1.836, se dirigía a los cargos eclesiásticos, los de justicia y abogados, y prescribía la siguiente fórmula:

"Juro a Dios ser fiel a la Reina Doña Isabel II y a su agusta Madre como Regenta y Gobernadora, observar las leyes del Reino, y cumplir bien y fielmente las obligaciones de mi cargo".

Ambas fórmulas son prácticamente iguales, cambiando sólo el final. A efectos de la confesionalidad, se puede decir que son juramentos desnaturalizados en su fondo con respecto a las fórmulas usadas en el texto del 12.

En estos juramentos no hay que olvidar que lo que se busca como primera finalidad es la adhesión y fidelidad a la Reina menor y a su madre la Regente.

CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO VIII

CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1.837¹

I. LA CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1.837.

1. INTRODUCCIÓN:

El contenido conciliador propugnado por el Estatuto no logró las metas que perseguía, puesto que se topó con bloques infranqueables. Siguiendo a Palacio Attard, se puede afirmar que María Cristina no era liberal, lo que significaba que sus relaciones con los políticos liberales "flotarían siempre sobre un fondo de mutua desconfianza". Pero además existían otras fuerzas internas que estaban llamadas a desmoronar el edificio del Estatuto. Esas fuerzas provenían de dentro del sistema, y obedecían a la debilidad interna del liberalismo español, a ese "antagonismo aniquilador entre las dos facciones principales de la familia política liberal: los moderados y progresistas"². Junto con esos aspectos, no se debe olvidar la existencia de la Guerra Civil en España, dato que, por un lado,

¹. Texto aprobado en el Palacio de las Cortes de Madrid. a 8 de Junio de 1.837.

². Palacio Atard, V., *La España ...*, cit. p. 191.

añadía aun mayor estabilidad a la situación política, y por otro, atribuía mayor protagonismo a la clase militar en la vida política española.

Tras varios levantamientos en nuestro país sin objetiva importancia, protagonizados por la milicia nacional, en Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba, o la sublevación en Zaragoza del General San Miguel, el punto y final de la vigencia del Estatuto Real en España fue producto del conocido motín de la Granja³, donde varios sargentos hicieron jurar la Constitución de 1.812 a la Regente.

Una vez jurada la Constitución por la Reina Gobernadora, mediante el Real Decreto de 13 de agosto de 1.836 se declaraba, de nuevo, la vigencia de la constitución de 1.812⁴. Y de la misma forma nació un nuevo Gobierno progresista encabezado por Calatrava.

Pero como ha indicado Villarroya, "las Juntas y Autoridades que ensalzaban la Constitución como bandera de libertad y símbolo de soberanía nacional, pero juzgaban que no era instrumento hábil para el Gobierno de una nación cuyas circunstancias, desde 1.812, habían cambiado profunda y decisivamente⁵". Por ese motivo, tan sólo unos pocos días después, en el mes de agosto, se convocaban Cortes para reformar la Constitución de Cádiz, o bien formar una nueva, según las necesidades de la Nación, tal y como recogía el Real

³. Sobre estos sucesos de la Granja, entre otros, veasé, Suárez Verdeguer, F., *Los sucesos de la Granja*. Madrid, 1.953.

⁴. Se trataba del Real Decreto de 13 de agosto de 1.836, mandando S.M. publicar la Constitución de 1.812. (*Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora, ... 1.836*, cit. p. 330).

⁵. Villarroya, T.J., *Breve historia ...*, cit. p. 47.

Decreto de 21 de agosto de convocatoria a Cortes con arreglo a la Constitución⁶.

Así las cosas, tras un primer intento de instaurar el constitucionalismo en nuestro país en 1.812 y tras las convulsiones políticas que significaron el ensalzamiento del texto del doce (1.820-1.823), o el derribo de éste (década ominosa), la segunda oportunidad que se le ofrecía a España estuvo representada en el texto de 1.837.

Por lo que respecta a la originalidad de este texto constitucional de 1.837, hay que significar que, a pesar de partir bajo la vigencia del de 1.812, y por consiguiente de sus esquemas, no es menos cierto que los constituyentes tenían las ideas claras con respecto a lo que había que cambiar, y por ello fue capaz de nacer con personalidad propia, superando la primera idea del constituyente de mera reforma para erigirse en un texto original, aunque siempre con la mirada y la comparación en la de 1.812⁷.

Esa idea de reforma de la Constitución gaditana se contenía incluso en el propio Preámbulo, toda vez que presentaba a la Constitución de 1.837 como una reforma de la de 1.812, pero, en la misma línea señalada antes, en las sesiones del constituyente se pudo verificar que la intención real era la creación de un texto

⁶. *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora, ... 1.836*, cit. p. 337-344.

⁷. *Diario de Sesiones de las Cortes*, sesión de 17 de marzo de 1.837, pp. 2201-2205 y 2205-2208, -respectivamente-. En este sentido, a mayor abundamiento es oportuno señalar algunas intervenciones de miembros del constituyente: Sr. Caballero donde en una brillante intervención se pregunta sobre el nacimiento de la Constitución de 1.837, en la cual va comparando el contenido de las constituciones de 1.812 y 1.837, cuestionándose sobre si era una reforma o era una nueva constitución. Se permite hacer incluso referencias también con el propio Estatuto Real de 1.834. así como con la Carta francesa y belga respectivamente. Afirma que no se trata de una nueva Constitución. En sentido contrario se manifestaba el Sr. Sancho.

nuevo, tal y como ha puesto de manifiesto Villarroya⁸. En igual sentido Torres del Moral⁹ afirma que las Cortes elaboraron un proyecto que era algo más que una mera reforma de la Constitución de 1.812; era un edificio constitucional de nueva planta en el que, junto al precedente gaditano, se detectaba la influencia de las Constituciones francesa de 1.830 y belga de 1.831.

Por lo que respecta a la Iglesia, hay que destacar que al amparo de este texto se iba a intensificar la desamortización de sus bienes, y que el propio artículo 11 del texto constitucional, sin grandes declaraciones confesionales como la del 12, establecía la obligación del Erario Público de financiar directamente los gastos del culto y el clero, naciendo así la financiación directa de la Iglesia en España.

Como resumen se puede señalar lo manifestado por Ibán, Prieto Sanchís y Motilla¹⁰: "... los nuevos planteamientos secularizadores de las instituciones políticas y sociales que propugnaban las corrientes liberales era lo suficientemente revolucionario para no poder llevarse a cabo de forma pacífica. Al contrario dio lugar a una serie de enfrentamientos entre las fuerzas políticas o entre los partidos, donde la cuestión religiosa se situaba en materia de discordia y aspecto neurálgico que enfrenta a las dos posiciones y divide al país; primero a los liberales y los regalistas, y luego en isabelinos frente a carlistas. Nunca el problema histórico se había situado en el ojo del huracán con tal intensidad como en esta etapa histórica."

⁸. Villarroya, T.J., *El Estatuto Real de 1.834 y la Constitución de 1.837*, Madrid, 1.985. p. 51.

⁹. Torres del Moral, A., *Constitucionalismo histórico ...* cit. p. 66.

¹⁰. Ibán, I. C., Prieto Sanchís, L., y Motilla de la Calle, A., *Derecho Eclesiástico*, Madrid. 1.997. p. 45.

La intervención de los eclesiásticos en el constituyente fue mucho más limitada que en el texto gaditano, toda vez que el número fue de trece, de los cuales tres eran Obispos, así como uno de ellos era catedrático de Derecho Canónico.

2. SIGNIFICADO Y CONTENIDO

Solé Tura y Aja han señalado que "la importancia del presente texto constitucional es que consolida definitivamente el sistema constitucional en España. A partir de él, las distintas fuerzas políticas (una vez acabada la guerra carlista) establecerán regímenes distintos, pero siempre dentro del sistema constitucional, es decir, sometiéndose a unas normas que garantizan ciertos derechos a los ciudadanos y limitan el poder de los gobernantes¹¹".

El texto de la Constitución de 1.837 es mucho más breve que la de 1.812, puesto que frente a los 384 artículos que contenía la gaditana, ésta presenta tan sólo 77 artículos.

En cuanto a su reforma, se trataba de una Constitución flexible, toda vez que al no establecerse nada especialmente para su reforma, se entendió que el mismo sistema para reformar cualquier ley ordinaria podía ser seguido para proceder a su reforma¹².

¹¹. Solé Tura, J., y Aja, E., *Constituciones y períodos* cit. p.33.

¹². En este sentido afirma Villarroya, T.J., *Breve historia ...* , cit. p. 50. " ... la Constitución podía reformarse por el mismo método que ésta establecía para hacer y deshacer las leyes ordinarias, es decir: mediante el concurso de la Corona y de las Cortes. ...".

En cuanto al contenido, siguiendo a Villarroya¹³, se puede afirmar que, en síntesis, los "principios constitucionales" recogidos en su articulado eran los siguientes:

a) Principio de *Soberanía nacional*: Se contenía el principio de Soberanía nacional gaditano aunque con sensibles modificaciones, toda vez que ahora aparecía situado no en el articulado del texto, sino en su Preámbulo y bajo la expresión: "Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su soberanía, la Constitución política promulgada en Cádiz ..." ¹⁴.

b) Principio de *colaboración y mutua interacción de poderes*: A diferencia del texto gaditano, que establecía la separación de poderes, esta Constitución dibujaba un régimen de colaboración y mutua interacción de poderes, propio de un sistema parlamentario, tal y como se colige de los artículos 62 y 26 ¹⁵

c) *La elasticidad del texto constitucional*, toda vez que regulaba instituciones básicas de nuestro Derecho (libertad de imprenta, sistema electoral, organización de Ayuntamientos, Milicia Nacional, etc ...), mediante referencia

¹³. Ibidem, pp. 51-53. Se sigue su clasificación en la presente exposición.

¹⁴. Fernando Segado, F., *Las Constituciones ...*, cit. p. 200. Señala que: "La soberanía nacional, en opinión de los constituyentes, podrá ser un dato histórico, pero no un programa de gobierno ni un precepto del que se produzcan consecuencias jurídicas. De ahí que, sin renunciar a este *principio abstracto*, los constituyentes se limiten a consignar el hecho de la soberanía en la fórmula ...".

¹⁵. El Art. 62 permitía la comunicación entre el Gobierno y las Cortes, al contener que "Los Ministros pueden ser Senadores o Diputados, y tomar parte en las discusiones de ambos cuerpos colegisladores; pero tendrán un sólo voto en aquel a que pertenezcan". Por su parte el Art. 26 ponía en manos del monarca la potestad de resolver conflictos, al encargarle la disolución de las Cortes. Literalmente expresaba que: "Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender y cerrar sus sesiones, y disolver el Congreso de los Diputados; pero con la obligación, en este último caso, de convocar otras Cortes. y reunir las dentro de tres meses".

expresa a posteriores leyes de desarrollo. Con ello se pretendía que la Constitución fuese base propicia a los dos partidos liberales, moderados y progresistas, en caso de acceder al Gobierno¹⁶, de suerte que pudieran establecer la regulación que tuvieran por conveniente.

A esos principios, Fernández Segado¹⁷ añade dos más:

d) El denominado *principio de la libertad*. Mediante éste se refiere al contenido de los artículos 2 a 10 del texto, concretamente la práctica totalidad del Título I (de los españoles). Afirma que mediante este contenido se sustituían una serie de preceptos abstractos por preceptos prácticos de un contenido jurídico positivo.

Acertadamente ha puntualizado Clavero¹⁸ que "se consagraban en ese título primero las libertades y derechos, evitándose así la dispersión que presentaba el texto del 12. Pero quedaban excluidos los españoles de ultramar. Pero, en todo caso, se comenzaba por las libertades, por aquello que aún estorbaba la reducción entera y completa de la norma constitucional a mero marco formal sin compromisos sustantivos. Aunque a tenor del contenido del título, más precisamente se trataba de un entendimiento de las mismas, no exactamente como derechos primordiales del sistema, sino como garantías que frente a él se establecían".

e) Y la *tolerancia religiosa*. Sobre este principio, bajo nuestro punto de

¹⁶. No hay que olvidar que, pese a tratarse de un texto elaborado por los progresistas, algunas ideas básicas utilizadas respondían a principios moderados: el bicameralismo, el derecho de disolución de la Corona.

¹⁷. Fernández Segado, F., *Las Constituciones históricas* ..., cit. p. 201.

¹⁸. Clavero, B., *Manual de ...* , cit. p. 57.

vista, hay que afirmar que si bien es cierto que el Art. 11 suponía un claro avance respecto a su análogo del texto gaditano (art. 12), ello no significa que se pueda señalar el principio de tolerancia religiosa del contenido formal de la Constitución de 1.837, tal y como se señalará posteriormente. Sin embargo, sí se puede adelantar que significó la desaparición de una confesionalidad a ultranza por una confesionalidad sociológica, pero ello no significaba la tolerancia de otros cultos en nuestro país. En este sentido se puede traer a colación lo señalado por Carr¹⁹, quien afirma que: "La Constitución de 1.837 conservaba la posición dominante de la Iglesia católica en España frente a los demás credos, como George Borrow comprobó a costa suya cuando trató de vender las Biblias de la sociedad misionera protestante. Lo que la Iglesia no podía aceptar, ni los liberales abandonar era la versión liberal de las antiguas pretensiones de la monarquía absoluta en cuanto a su ámbito jurisdiccional: la regulación unilateral por el Estado de las cuestiones eclesiásticas temporales".

Sin embargo, esa idea de tolerancia sí que estuvo presente tanto en la discusión parlamentaria del Art. 11 del texto constitucional como en el posterior proyecto de tolerancia religiosa, aunque no es menos cierto que no llegaron a triunfar.

En resumen, sobre el texto constitucional se puede decir que vertebraba un sistema político traspasado de resonancias modernas: sistemática declaración de las garantías de derechos, régimen bicameral, gobierno surgido de la mayoría parlamentaria, soberanía nacional, así como que fue capaz de fundar algunas instituciones que perduran en nuestro ordenamiento español: Congreso, Senado y en resumen, régimen parlamentario²⁰.

¹⁹. Carr, R., *España*, cit. p. 177.

²⁰. Colomer Viadel. A., *Los liberales y el origen de la Monarquía Parlamentaria en*
(continúa...)

II. LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN LA CONSTITUCIÓN

1. INTRODUCCIÓN: VALORACIÓN DEL HECHO RELIGIOSO.

Como punto de partida nos encontramos con una Iglesia en España inmersa en pleno proceso de reformas que, desde poco después de la muerte de Fernando II, habían comenzado los liberales. Hasta ahora los moderados habían sido los que habían ostentado el poder durante más tiempo, y quienes las comenzaron. Pero con los progresistas al frente se intensificaron, no sólo por la necesidad de la reforma de la propia Iglesia, sino por la actuación de los eclesiásticos en España a favor de los carlistas (en la guerra que finalizaba en 1.840), y de la Santa Sede hacia la monarquía española.

A tal extremo llegaron las relaciones entre el Estado y Roma que en 1.841 se aprobaba el Decreto de 28 de junio de 1.841 que mandaba publicar un manifiesto en que se expusieran los agravios que España y su Iglesia habían recibido de la corte Romana²¹. En dicho Decreto se señala a Roma como enemiga de las Instituciones y de los cambios reformistas que se perseguían en España; la mencionada locución del Sumo Pontífice fue calificada por el Supremo Tribunal de Justicia como "documento altamente ofensivo a la Nación Española y a su

²⁰(...continuación)

España, Valencia, 1.993. pp. 123 y ss.

²¹. *Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de enero hasta fin de Diciembre de 1.841*. Tomo XXVII, Madrid, en la imprenta nacional, 1.842. pp. 423-427.

Gobierno", y por consiguiente, de atentatorio a la autoridad soberana, de turbativo del orden, quietud y tranquilidad de los pueblos. Dentro de su articulado se contenía una velada amenaza, ya que señalaba que si bien el Ministerio de Gracia y Justicia, por una parte, había asumido el sustento decoroso del culto y el clero, no dudaría en reprimir con mano fuerte sus demasias. Y por otra parte, la amenaza se trasladaba a los Prelados eclesiásticos que procediesen a la formación de sumarios, a la prisión y entrega y puesta a disposición para con los Tribunales seculares, de todos aquellos clérigos que en sus sermones o ejercicios espirituales excitasen a sus feligreses a desobedecer las disposiciones del Gobierno²², en conformidad con la Ley 7ª, del Título 8º, Libro Iº de la Novísima Recopilación²³.

Producto de esa complicada relación, hay que señalar que estuvo casi prohibida la comunicación con la Santa Sede hasta prácticamente el final de la vigencia del texto constitucional de 1.837. Concretamente la Orden de 23 de noviembre de 1.844 que dejaba sin efecto la Real Orden de 5 de agosto de 1.842, prohibiendo hasta nueva disposición dar curso a las preces dirigidas a Su Santidad²⁴. La mencionada Orden de 1.842, prohibía todo tipo de comunicaciones a Su Santidad excepto las relativas a dispensas matrimoniales y a breves de

²². Otras muchas disposiciones con este contenido fueron aprobadas en este sentido, de suerte que esta determinación se desarrollaba convenientemente. Nos referimos, entre otras a la Circular de 9 de abril de 1.841 del Ministerio de Gracia y Justicia desaprobando la conducta del cabildo de la Santa Iglesia de Toledo. Así como al Real Decreto de 24 de abril de 1.841 mandando fuera extrañado del Reino D. Severo Andriani, Obispo de Pamplona, y ocupadas sus temporalidades. Dicho Obispo recibía esta sanción por sus ideas y opiniones emitidas en su exposición escrita ante el Ministerio de Gracia y Justicia. (*Colección de ... -1.841-*, cit. pp. 258-261 y 286, -respectivamente-).

²³. Dicha Ley recoge la obligación de los Prelados de cuidar que los clérigos o religiosos no prediquen o hablen mal de las Personas Reales, Estado o Gobierno.

²⁴. *Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por los respectivos Ministerios, desde 1º de julio hasta fin de diciembre de 1.844*. Tomo XXXIII. Madrid, en la imprenta nacional, 1.845. pp. 343-344.

penitenciaria. Pues bien, con esta Orden quedaba abolida dicha restricción, restableciéndose formalmente las relaciones.

Por lo que respecta a las diferentes disposiciones aprobadas para regular el hecho religioso, desde el Gobierno, y pese a la existencia de la Junta Eclesiástica, y posteriormente la Comisión de Negocios Eclesiásticos, la reforma de la Iglesia se continuó efectuando de forma unilateral por parte del Gobierno y las Cortes. Como ha escrito Carr²⁵ analizando el discurso del Diputado Sr. Urquiona²⁶, "lo que la Iglesia no podía aceptar ni los liberales abandonar era la versión liberal de las antiguas pretensiones de la monarquía absoluta en cuanto a su ámbito jurisdiccional: la regulación unilateral por el Estado de las cuestiones eclesiásticas temporales. Así, los argumentos de las Cortes reproducían los lugares comunes trasnochados de regalistas y janseistas: los sacerdotes debían estar sometidos al poder civil como en tiempos de la monarquía visigótica; "legiones de monjes" apoyaban la supremacía de Roma y la benevolencia para con las órdenes misioneras hubiera significado tolerar "una semilla envenenada".

La injerencia del poder civil en el clero continuaba siendo importante, de forma que, al igual que había ocurrido durante la vigencia del Estatuto Real, se exigía a los eclesiásticos un certificado de adhesión al Gobierno para poder prediar y confesar²⁷.

²⁵. Carr, R., *España ...*, cit. pp. 177-178.

²⁶. *Diario de Sesiones de las Cortes*, sesión de 6 de Mayo de 1.837, p. 3.710.

²⁷. Aunque posteriormente se atenderá con mayor detalle, baste anticipar como muestra del enfrentamiento entre la Iglesia-Estado la Orden de 16 de noviembre de 1.842 para que no se permitiera el ejercicio de la potestad espiritual a los eclesiásticos que no tuvieran certificado de adhesión al Gobierno, y que se impidiese la circulación de un breve que prorrogaba las licencias de confesar y predicar. (*Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales. expedidos por las Secretarías del Despacho.* (continúa...))

Por lo que respecta al fuero de los eclesiásticos, el texto constitucional, por una parte, contenía expresamente la unidad de fueros, y la exclusión de cualesquiera privilegiados. Nos referimos a lo contenido en el Art. 4 del texto constitucional: "Unos mismos códigos regirán en toda la monarquía, y en ellos no se establecerá más que un sólo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales". Y por otra parte, continuaban en vigor las normas aprobadas sobre este extremo durante la vigencia del Estatuto Real.

El "hecho religioso", tal y como han señalado Sánchez Agesta²⁸ y Fernández Segado²⁹ suscitó acres enfrentamientos entre moderados y progresistas. Mientras para los primeros el principio de unidad religiosa (con la subsiguiente confesionalidad del Estado) era algo absoluto, para los progresistas era tan sólo una cuestión de hecho. Así veían en esta Constitución el comienzo de la tolerancia religiosa.

Por primera vez no se afirmaba la confesionalidad del Estado sino que se admitía el hecho sociológico de que la mayoría de los españoles son católicos³⁰. Escribe Colomer Viadel³¹ que se abandonaba el confesionalismo del texto del doce y se entraba en una declaración cuasi sociológica del hecho religioso, a la vez de tender hacia el horizonte de la tolerancia.

²⁷(...continuación)

desde 1º de julio hasta fin de diciembre de 1.842. Tomo XXIX. Madrid, en la imprenta nacional, 1.843. pp. 514-516).

²⁸. Sánchez Agesta, L., *Historia del ...* cit. p. 266.

²⁹. Fernández Segado, F., *Las Constituciones ...* cit. p. 201.

³⁰. Laboa, J.Mª., *Iglesia y ...* , cit. p. 28.

³¹. Colomer Viadel, A., *Los liberales ...* , cit. p. 144.

Clavero³² afirma que la Constitución se refería a la religión católica como aquella que profesan los españoles, obligando a la Nación al mantenimiento de su Iglesia, pero evitando el confesionalismo político que más directamente afectaría al derecho de los ciudadanos.

Frente a la unidad religiosa y confesionalidad del Estado proclamada en el texto del 12, afirma Torres del Moral, que se acogía una *ecclética* tolerancia religiosa.

Se puede afirmar siguiendo a Laboa que resultaba evidente, a la luz de nuestro Derecho, que la Iglesia no había sabido adaptarse a la Revolución francesa ni a la influencia de la Ilustración³³, de ahí que seguía manteniendo un número desmesurado de eclesiásticos e incluso una organización territorial distinta a la del propio Estado.

No hay que olvidar el poder social que todavía ostentaba la Iglesia, aún a pesar de haber perdido gran parte de sus bienes por intervención del Estado. Por este motivo, no es ninguna paradoja que pese al despojo de sus bienes por intervención estatal, fuese el propio Gobierno de signo progresista, quien deseó y buscó el apoyo de la Iglesia para fortalecer el incipiente sistema constitucional. Sin embargo, la Iglesia dio la espalda a las teorías ilustradas y liberales que, en todo caso, empeorarían su status, y se manifestó beligerante contra el Estado que entendía había arrebatado su fortuna.

³². Clavero, B., *Evolución histórica del constitucionalismo español*. Madrid 1.984. p. 55.

³³. Laboa J.M^a., *Iglesia y ...*, cit. p. 26.

Pese a todo lo relatado anteriormente, no dejaba de resultar chocante el uso de fórmulas marcadamente confesionales propias del texto anterior del 12 o incluso de la Novísima Recopilación, para celebrar el fin de la Guerra Civil. En este sentido, se puede traer a colación la Real Orden de 18 de septiembre de 1.839 mandando cantar un Te Deum en todas las Iglesias metropolitanas y Catedrales con motivo de los faustos sucesos ocurridos en las Provincias del Norte³⁴. Significaba el final de la Guerra Civil³⁵. Contenía literalmente que "es imposible dejar de ver la mano de la divina providencia que apiadada de los padecimientos de una nación magnánima y religiosa quiere ya premiar su fidelidad y constancia, conduciéndola, desde los indecibles males con que se ha visto afligida por tantos años a las dulzuras y abundancia de la paz que van a asegurarse para siempre con el trono legítimo de nuestra excelsa Reina".

Además de mandarse celebrar dicha ceremonia, se instaba a los ministros de la Iglesia a que procurasen inspirar el bien general y fijar en los fieles las ideas de verdadera paz y sincera reconciliación en los fieles por medio de sus pastorales, así como que "a dichas ceremonias acudieran las autoridades de todas las clases, repartiéndose en las distintas parroquias en los lugares donde existieran

³⁴. *Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de enero hasta fin de Diciembre de 1.839*. Tomo XXV, Madrid, en la imprenta nacional, 1.840. pp. 449-450.

³⁵. Finalizada la guerra, quedarán sin efecto algunas disposiciones, como la Orden de 5 de agosto de 1.837 que trata de los eclesiásticos que se alejen de su domicilio, mediante la Orden de 18 de diciembre de 1.839, significando la igualdad entre eclesiásticos y civiles. Así literalmente se contiene que "*los eclesiásticos no estén sujetos a otras restricciones en materia de policía y seguridad que a las que lo están las demás clases del Estado, sin perjuicio por esto de aquellas obligaciones y formalidades a que les sujeten las disposiciones canónicas, sinodales de sus diócesanos, o las disposiciones de sus Iglesias*". (*Colección de ...-1.839-*, cit. pp. 565-566). De alguna forma está patente la idea manifestada por Llamazares con ocasión del estudio del clero en la nueva Constitución donde se intenta equiparar al clero con los funcionarios del propio Estado. señalada antes.

varias".

Esas ceremonias religiosas se extendían incluso a lo relatado en la Ley de 16 de junio de 1.840 que declaraba fiesta nacional el aniversario del juramento y promulgación de la Constitución³⁶. Resultaban evidentes los rasgos confesionales, fijados en la presente ley, ya no sólo por el concepto de festividad, sino por el propio preámbulo que señalaba esta ley: "Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquía española ...", esta fiesta sería el tercer domingo de cada mes de Junio de cada año. Por otra parte hacer coincidir la fiesta nacional por el juramento de la Constitución con un día como el domingo, con lo que representa éste para el cristianismo, supone también un matiz que no hay que descuidar.

2. LA CONFESIONALIDAD: EL ART. 11

En consonancia con las anteriores ideas, y antes de abordar el análisis de la confesionalidad reflejada en el texto, hay que aportar la opinión del constituyente resumida en palabras de un representante del Gobierno, el Sr. Secretario del Despacho de Gobernación de la Península (Diputado Sr. López³⁷).

³⁶. *Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de enero hasta fin de Diciembre de 1.840*. Tomo XXVI, Madrid, en la imprenta nacional, 1.841. pp. 220-221.

³⁷. Literalmente: "Pero no porque la materia sea difícil la hemos de fijar sin resolver. Fijo por principio que la religión es materia importante para todo gobierno y que el hombre es naturalmente religioso. Cualquiera que sea la ley de un país, cualquiera que sea su eficacia e influencia se necesita además de una fuerza activa que siga al hombre a todas partes, que le acompañe en la soledad, y que penetrado en su interior, erija un juez irrecusable, un magistrado severo que le acuse cuando los demás le absuelvan y le condene cuando los otros le aplaudan. Entonces la voz de la conciencia se mezcla con
(continúa...)

quien afirmaba que: "se encontró embarazado al tratar de la religión y hasta veinte veces hubo de reformarse el proyecto después de la indicación del Conde de Castelblanc, que reseñaba que ninguno pudiese ser inquietado por sus opiniones religiosas, ni turbado en el ejercicio de su culto".

Antes de comenzar con el estudio del Art. 11, debe comentarse la ausencia de declaraciones confesionales en el Preámbulo, puesto que el texto anterior de 1.812 contenía invocación expresa. Este silencio no fue objeto de azar, ya que durante las sesiones del constituyente tuvieron lugar debates acalorados sobre si debía o no existir esta invocación confesional tradicional.

Es necesario afirmar, como punto de partida, que la omisión era deliberada y respondía al reflejo de la realidad social española, constatada a través de las intervenciones de algunos de los miembros en las discusiones del constituyente, puesto que no sólo en el texto definitivo aprobado por las Cortes se verifica la desaparición de la invocación. Ya en el proyecto presentado ante las Cortes desaparecía la invocación preliminar que existía en la Constitución de 1.812.

³⁷(...continuación)

la de la ley, el cumplimiento de los deberes sociales forma parte de las obligaciones religiosas. Conocida la necesidad de la religión, examinemos los principios que deben dirigiarnos en este punto (en todo caso se trata de opiniones muy compartidas por los constituyentes, aunque no por la totalidad de ellos): Es necesario considerar separadamente la simple adoración, el culto privado y público. Considerando al culto privado no suficiente para ser objeto de ley, y menos como esta. Sobre la libertad en el culto público, ... ninguna Nación puede autorizar otros cultos distintos a los del Gobierno y a los de la Nación, y a la moral. ... Concluye con la expresión del deseo según su criterio que se introduzca en el artículo 11 que ninguno pueda ser perseguido por sus opiniones religiosas, siempre que respete el culto establecido, la moral y las leyes que lo protegen. (Diario de Sesiones de las Cortes, sesión del día 14 de Marzo de 1.837, p. 2136).

Esa omisión era consecuente con la opinión de la mayoría de los Diputados, quienes estaban conformes con la idea de eliminar del Preámbulo matices confesionales. Sin embargo, otros diputados reflejaron su oposición a que desapareciera. Tales posturas, a favor y en contra, aparecían reflejadas en las discusiones parlamentarias. Entre otras, se pueden destacar las siguientes intervenciones:

El Diputado Sr. Pizarro³⁸, que fue el autor de la declaración trinitaria del texto del 12, censuraba dicha omisión de la invocación inicial contenida en la Constitución de 1.812, afirmando que:

"Pudiera creerse que estorba esta invocación a la Constitución, pudiera causar un mal efecto y ser sensible a toda la nación en cuyo nombre hablo, porque es verdaderamente piadosa y religiosa, sin gazmoñerías ni embustes sin las preocupaciones en que abunda alguna otra vecina, muy presumida de ir adelante en la Ilustración. ... La nación española no es irreligiosa ni tampoco fanática. ... En la nación española está tan arraigada esta costumbre al carácter español, está tan generalizada, que no hay pobre trabajador que al emprender su trabajo no invoque el nombre de Dios. ... mismo hace el simple trabajador, hace el artesano, y en fin toda esa clase que se ha tratado siempre con desprecio. ... Se suele decir en tono satírico, que este principio de la Constitución de 1.812 parece principio de testamento. Estoy harto de oír esta especie a muchos señores ilustrados a estilo de Siglo XIX. Yo renuncio a semejante ilustración, si tal puede llamarse".

³⁸. *Diario de Sesiones de las Cortes*, correspondiente a la fecha 13 de marzo de 1.837, p. 2119.

El Diputado Sr. Olózaga³⁹ respondía a la anterior intervención: "¿Cómo ha podido creer el Sr. Pizarro que los españoles, que Diputados de la Nación española proscribirían nunca principios religiosos y el nombre del autor de nuestra religión?. ... ¿No reconoce el Sr. Pizarro en el tipo de época que se hicieron?, aquella época pasó, y con ella otras usanzas y las muestras de exterior devoción. Así presenta la Comisión un artículo donde dice que será obligación de la nación el mantener el culto y los ministros de la religión que profesan los españoles. Nada más dice por que la religión no es de los estados sino de los individuos que los componen. Se tiene en el corazón."

En este sentido ha escrito Villarroya⁴⁰ que el silencio confesional del preámbulo del texto era consecuente con la eliminación de la confesionalidad dogmática fijada en el art. 12 de Cádiz, y sustituido ahora por la confesionalidad meramente sociológica del art. 11.

Sobre la desaparición de la invocación inicial de la Constitución de 1.812, ha escrito Sánchez Agesta⁴¹ que no es casual, ya que los propios diputados de 1.837 la consideraban "ridícula y anticuada".

Tras la omisión intencionada del Preámbulo, se materializaba la declaración confesional en el Art. 11, situado dentro del Título I (De los españoles), es decir, dentro del Título dedicado a sistematizar los Derechos que se contenían el texto constitucional, y que literalmente preceptuaba que:

³⁹. *Ibidem*. pp. 2121-2122.

⁴⁰. Villarroya, T, J., *El Estatuto Real de 1.834 ...* , cit. pp. 52-53.

⁴¹. Sánchez Agesta, L., *Historia del ...* , cit. p.274.

"La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles".

Para verificar la evolución normativa resulta conveniente comparar una parte de este artículo (la religión católica que profesan los españoles), con el artículo 12 de la Constitución de Cádiz, (la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera). El cambio era muy importante. No se efectuaba declaración jurídica de confesionalidad, simplemente se expresaba una declaración sociológica de confesionalidad, al reconocerse a la religión católica como la profesada por los españoles. No aparecía una valoración sobre el hecho religioso⁴².

Colomer Viadel acertadamente señala el error que se encerraba bajo dicha afirmación, puesto que a pesar de la constatación cuasi sociológica, según su criterio a la vista de este artículo, o no eran españoles los no católicos, o la anterior afirmación era errónea⁴³.

⁴². Amorós Azpilicueta, J.J., *La Libertad Religiosa en la Constitución Española de 1.978*, Madrid, 1.984. p. 21-25. Ha señalado, con meros efectos sistemáticos, tres categorías aplicables a la confesionalidad contenida en los diferentes textos constitucionales. Éstos eran:

a). *Constituciones confesionales, sin matices*: Son aquellos textos en los que se expresa alguna de las formas de confesionalidad, pero sin que se contengan alusiones al régimen de tolerancia de cultos. En esta categoría incluye la Constitución de 1.837 y la de 1.845, y también el Estatuto Real de 1.834.

b). *Constituciones confesionales, intolerantes*: Se trata de aquellos textos que contienen una declaración del Estado en la que se califica a sí mismo como profesante de una determinada religión. En esta categoría incluye el Estatuto de Bayona de 1.808, y la Constitución de 1.812

c). *Constituciones confesionales, tolerantes*: Se trata de aquellos textos en los que se incluía el principio de tolerancia y la libertad de cultos. En esta categoría incluye la Constitución "non-nata" de 1.856, la Constitución de 1.869 y la Constitución de 1.876.

La constitución de la segunda república de 1.931 supuso una ruptura con los esquemas anteriores mediante una actitud no confesional.

⁴³. Colomer Viadel, A., *Los liberales*, cit. pp. 147-149.

La discusión parlamentaria del art. 11⁴⁴ resulta muy interesante de cara a fijar esa tolerancia deseada por algunos diputados, manifestada a través de sus intervenciones, pero siempre dentro del ejercicio privado de otras religiones. De suerte que se insistió por el constituyente sobre la conveniencia de que expresamente se declarara que nadie podía ser molestado por sus ideas religiosas y se establecieran las garantías de no ser perseguido por estos motivos. La solución de la Comisión, que aún compartiendo tal criterio, abogó sin embargo por que tales consecuencias y garantías fueran tratadas mediante la legislación civil, que curiosamente nunca se produjo durante la vigencia del texto constitucional, puesto que se quiso evitar la polémica que podía provocar una declaración formal de libertad religiosa en la propia Constitución, y también en la legislación civil.

La discusión parlamentaria fue larga y su resultado fue la aprobación de este artículo. Si bien este proceso se debe calificar como "controvertido", puesto que necesitó de dos votaciones. En la primera votación se concluía con 60 votos a favor por 40 votos en contra, la Cámara protestó por medio del Secretario de despacho el Sr. López, significando que no había suficiente quorum para la votación fuera considerada válida. Tras admitirse dicha objeción, fue necesario proceder a una segunda votación en la cual ya los votos a favor fueron 125 y los votos en contra 34⁴⁵.

⁴⁴. La primera lectura para su discusión y aprobación en la Cámara se produce en la sesión de 4 de abril de 1.837. Aunque hay que recordar que el "hecho religioso", no era la primera vez que era discutido por las Cortes, ya que comenzó la discusión acalorada ya en la del preámbulo o proemio, tal y como es llamado por los propios constituyentes. (*Diario de Sesiones de las Cortes*, p. 2478).

⁴⁵. El resultado de la votación aparece reflejado en el *Diario de Sesiones de las Cortes* de fecha de 6 de Abril de 1.837, así como los sucesos que hemos mencionado, vid. pp. 2527-2528 y 2496-2528, -respectivamente-.

Comenzó la discusión parlamentaria, pero no sin que antes manifestara el propio Gobierno su desacuerdo con este artículo a través del Ministro de Gracia y Justicia⁴⁶. Sin embargo esta intervención merece ser destacada, para verificar la opinión del ejecutivo para con el fenómeno religioso, puesto que este era uno de los artículos sobre el que el Gobierno se había reservado hacer algunas observaciones, que en resumen se pueden desglosar en:

1. El gobierno estaba convencido de que la religión católica era la verdadera y la más beneficiosa *y el propio gobierno se declaraba practicante*. Señalaba que en ocasiones había servido para unir a los pueblos y en ocasiones para enfrentarlos, recordando las guerras de religión.

2. Afirmaba que la religión podía ser un protesto bajo el cual se hicieran las persecuciones más horrendas y se atentara contra los derechos más sagrados, señalando que bajo un título donde se estaban preservando los derechos individuales, como la libertad individual, la seguridad personal, el asilo doméstico, para que los españoles no pudieran ser objeto de violencia y arbitrariedad, *debía tener un lugar respetable y conveniente aquel que asegurase que el español no pudiera ser perseguido ni inquietado por motivos de religión*.

3. *El art. 11 significa más un respeto, una consideración, un testimonio público de veneración a la religión que profesan los españoles, más que una garantía o un artículo constitucional.*

Después de esta exposición, solicitó públicamente que se modificara este artículo y que literalmente dijera:

⁴⁶. *Diario de Sesiones de las Cortes*, sesión de fecha de 6 de abril de 1.837, pp. 2478-2480.

"El Estado o la Nación protege por leyes sabias y justas a la religión católica, que es la de los españoles; no sería permitido en ningún caso perseguir a los españoles por opiniones religiosas, siempre que respetaran el culto y no ofendieren la moral pública".

La idea era reclamar que existiera libertad y seguridad para que los españoles supieran que no podían ser perseguidos por motivos de su religión.

Queremos dejar claro que el concepto de tolerancia manejado es paradójico, ya que la pretendida tolerancia, se rompía de alguna manera al continuar con sus manifestaciones, ya que afirmaba literalmente que: "Yo quisiera que los españoles profesen la religión católica que ha profesado hasta aquí; pero no quisiera que bajo el pretexto de religión pudiera ser perseguido ningún español, pues según las leyes que hoy existen, y según se halla el artículo, puede serlo".

El Diputado Sr. Caballero⁴⁷ manifestaba su opinión a favor para que la regulación del "factor religioso" no apareciera consagrado en el articulado de la Constitución. Y para el caso en que las Cortes entendiesen que debía aparecer volvería a manifestarse, siguiendo la idea ya presentada por otros diputados a favor de la tolerancia y la consignación en el texto de la siguiente garantía: "Nadie⁴⁸ podrá ser perseguido por sus opiniones religiosas". Señalaba como ejemplo de la tolerancia existente en España la Ciudad de Alicante, donde decía que existía un cementerio protestante, el cual era respetado por la población, de

⁴⁷. *Diario de Sesiones de las Cortes*, sesión de fecha 5 de abril de 1.837, pp. 2496-2498.

⁴⁸. Resulta interesante la matización efectuada por este diputado ya en 1.837, dentro del ámbito extensivo de la libertad religiosa, sobre la distinción entre: "Nadie podrá ser molestado ..." y "Los españoles no podrán ser molestados ...". Señala como con la expresión nadie ya está haciendo referencia tanto a los españoles, como a los extranjeros que se pudieran llegar a encontrar en tránsito por España.

forma que la mayoría de los habitantes cristianos permitían el culto protestante a través del respeto hacia su cementerio.

Aunque se han señalado *posturas tendentes a la tolerancia y a la apertura progresista o ilustrada* del hecho religioso, también existían posturas *conservadoras*, como se ha manifestado sobre el Preámbulo. Un ejemplo más de ésta fue la intervención del Diputado Sr. Tarancón⁴⁹. En primer lugar, manifestaba su deseo de que hubiese seguido vigente el art. 12 de la anterior Constitución, aunque después se limitaba a pedir que se consignaran los adjetivos de apostólica y romana, detrás de Religión Católica, para diferenciarla de las demás sectas y reafirmarla como la religión verdadera. Pero desde luego, era casi unánime en la Cámara el deseo de abandonar la antigua declaración confesional.

Tras haberse aprobado el art. 11, y además por una gran mayoría en las Cortes, se volvió en otras ocasiones por el Constituyente a tratar el "Hecho Religioso". Por ejemplo, en la discusión del artículo referente a la posterior aprobación de la ley electoral, volviendo a salir reflejadas las ideas de las Cortes sobre libertad, tolerancia, ejercicio público y privado del culto. Así la intervención del diputado Sr. Pascual⁵⁰, en la cual decía que no tenía porqué aparecer un artículo dedicado a la religión dentro de la Constitución, pero ya que existía, señalaba que debería contener expresamente que no se perseguiría a nadie por sus opiniones religiosas. Se reafirmaba en la absoluta necesidad de consignar expresamente la tolerancia, argumentando que en otra nación no habría menester de hacer una consignación expresa y terminante de este principio de tolerancia; en la española, después de tantos años como ha estado bajo el peso despótico de la Inquisición, es necesario que se hiciera una declaración explícita. Siguiendo

⁴⁹. *Diario de Sesiones de las Cortes*, sesión de fecha de 6 de Abril de 1.837, p. 2516.

⁵⁰. *Diario de Sesiones de las Cortes*, sesión del día 12 de mayo de 1.837, p. 3338.

con la línea de su intervención, concluía afirmando que era necesario que a los que quisieran establecerse en este país se les debía asegurar la libertad de su conciencia.

En contestación a las afirmaciones manifestadas, intervino el diputado Sr. Arguelles⁵¹, señalando que era preciso demostrar lo que se pretendía establecer en el art. 11 de la Constitución por medio de las adiciones hechas por el Sr. Pascual y otros Sres. diputados. Primero, asegurar que las creencias que profesan los españoles no serían menoscabadas. Y segundo, para hacerla conciliable con la libertad que debía haber en un país como España. Pero, en este sentido, al establecerse en el acta constitucional que se reconoce como un hecho irrefragable que los españoles profesan la religión católica, adiciones y ampliaciones. No se concebía que pudiera hablarse de otra manera en el acta constitucional, puesto que al existir las leyes civiles y canónicas, independientemente del texto constitucional, el legislador tenía medios para corregir los abusos que existieran y para establecer una especie de tolerancia y mansedumbre verdaderamente católica. Allí es donde se debería dar todo ese ensanche que pretendían los señores diputados.

Seguía afirmando que: "Yo quisiera, señores, que esta materia la examináramos con toda indiferencia, y con una imparcialidad verdadera, y veríamos que el artículo constitucional cual está aprobado, nada se opone a la libertad que desean los autores de las adiciones".

Señalaba Arguelles, sobre la tolerancia, que, con respecto a los extranjeros, siempre había existido en España tolerancia religiosa, y a estos efectos traía a colación la vigencia de la nota cuarta a la Ley 1ª de la Novísima

⁵¹. *Ibidem*, p. 3338.

Recopilación, en la cual se indica la Circular del reinado de Carlos IV, año 1.797, para que la Inquisición no molestase a los artistas y otros extranjeros protestantes, siempre que no ofendieren a las buenas costumbres⁵².

Sobre esta alegación de la no consignación del principio de tolerancia por entenderse ya legislado, hay que significar que esta ley en sí misma era intolerante, ya que excluía a otras confesiones religiosas, como por aquel entonces eran los judíos o la propia religión islámica.

Tras haberse analizado las manifestaciones más relevantes del constituyente sobre este Art. 11, hay que pasar a su detenido desarrollo comenzando por afirmar que, sí bien es cierto que, por una parte, no se prohibía en la Constitución el ejercicio de otros cultos o religiones, por otra parte, literalmente tampoco autoriza a practicar ninguna otra, con lo que se estaba legislando una ambigüedad sobre dicha declaración. Aunque no se puede obviar que respecto a la Constitución de 1.812 también ha desaparecido la prohibición de ejercicio de otros cultos distintos al católico, y sólo se contiene una adscripción del hecho que apunta hacia la tolerancia⁵³.

El tratamiento que se dispensaba a la cuestión religiosa en la Constitución de 1.837 era significativo para caracterizar el talante ideológico de este texto. Se constataba simplemente un hecho: el predominio mayoritario de la religión católica en la nación española y en consecuencia, la obligación legal de proteger al clero y al culto de esta religión. Se eludía toda referencia teológica sobre la

⁵². Por buenas costumbres no podemos de ninguna manera entender lo que hoy en nuestro Derecho Administrativo se denomina "orden público", si bien desde luego se pueden buscar precedentes válidos. En resumen, lo que se pretende significar con la expresión "buenas costumbres" es evitar escándalos.

⁵³. Sánchez Agesta, L., *Historia del ...*, cit. pp. 274-276.

autenticidad y veracidad del catolicismo. No se prescribía que los españoles debieran profesar esa religión. Por este motivo, existía el temor de algunos de que si no se expresaba la libertad de opiniones religiosas de una manera expresa, podían considerarse vigentes algunas disposiciones contrarias a esa libertad.

Citando a Sánchez Agesta, afirma Cuenca⁵⁴ que el art. 11 parece inspirado "en el tradicional regalismo jurídico de la corona hispánica, aunque en sus cauces latía ahora una indisimulable acritud hacia la Iglesia. En unos momentos en que la Guerra Civil que ensangrentaba la nación se hallaba en su climax y en el que el proselitismo de las logias masónicas y de los círculos protestantes se mostraba muy activo y virulento, la desembocadura del espíritu y la praxis religiosa desplegados hasta entonces por el régimen liberal en la tolerancia implícita formulada en el célebre art. 11, debe reconocerse que no desbordaba los cauces del extremismo y de las posturas maximalistas, aunque algunas de sus cláusulas se insertasen en la más genuina línea del regalismo hispano".

En resumen, se puede afirmar que el precepto se limitaba a constatar un hecho innegable: el que los españoles profesan la religión católica, con lo que "prima facie" se operaba un gran avance con respecto al contenido del texto del doce al haberse suprimido la prohibición del ejercicio de cualquier otra. Sin embargo, como quiera que se trataba de un punto espinoso, y ello a pesar de la reducida presencia de eclesiásticos en el constituyente de 1.837, la presunta tolerancia que una parte de la doctrina ha manifestado existir en este artículo, fue constatada, si es que existe, en términos sumamente ambiguos, y en todo caso se detiene ante la manifestación pública, es decir se limitaría única y exclusivamente al ámbito privado. En todo caso, en una visión más amplia de este Art. 11, al encuadrarlo dentro del Título en el que se halla situado, es fácil verificar como

⁵⁴. Cuenca Toribio. J.M.. *La Iglesia Española ante la Revolución Liberal*. Madrid. 1.971. pp. 57-59.

la formulación del resto de los derechos contenidos también nos muestra cierta ambigüedad, toda vez que, pese a contener principios claros, se remitía para su regulación a leyes posteriores. Por esto, aunque su desarrollo se ubica en otro epígrafe dentro del presente capítulo, se puede afirmar que la presunta tolerancia se quiso llevar a Derecho positivo mediante una ley posterior, que se limitó a la existencia de un proyecto de ley sobre tolerancia que fue rechazado por las Cámaras. Realmente se desperdició una oportunidad importante para haber recogido, por primera vez en España, la tolerancia religiosa dentro de un texto constitucional.

3. CONSECUENCIAS DE LA CONFESIONALIDAD

La confesionalidad del presente texto no sólo se manifestaba en este artículo citado, sino que se expresaba en otros diversos órdenes, de suerte que eran numerosos los artículos que de forma directa o indirecta entraban a formar parte de esta regulación confesional. Así, se pueden destacar los siguientes extremos:

A) FINANCIACIÓN

En esta línea de enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia, se recogía por primera vez en nuestro Derecho la obligación del Estado español de financiar al culto y al clero, puesto que, si bien es cierto que durante la vigencia del Estatuto Real se aprobaron algunas normas en este sentido, la verdadera legislación de financiación directa, no sólo de los eclesiásticos, sino también del culto, se consagró mediante la constatación en el texto constitucional de este Art. 11 y sus posteriores leyes de desarrollo, con lo que las normas sobre dotaciones

económicas aprobadas desde 1.834 a 1.836 tienen solamente el carácter de antecedentes.

Formalmente se encuadraba dentro del Título I, "De los españoles", donde se señalaba un catálogo de derechos irrenunciables para todos los españoles. Literalmente la obligación que asumía el Erario público tenía la siguiente extensión:

Art. 11: "La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles".

Esta determinación constitucional de financiar al culto y al clero nacía tras haber despojado el Estado a la Iglesia de la mayor parte de sus bienes, de suerte que la desamortización no puede separarse de la financiación de la Iglesia porque ésta última traía causa de la anterior. Como es conocido, los bienes eclesiásticos estaban compuestos de grandes fortunas, formadas a lo largo del Antiguo Régimen a través de herencias, bulas, y de un sistema fiscal muy superior al del propio Estado, dentro no sólo de un marco jurídico propio, -libros Iº y IIº de la Novísima Recopilación-, sino también dentro de un marco social muy definido. Baste como ejemplo señalar que era costumbre usual que en el testamento se legara una parte del patrimonio del causante a favor de la Iglesia. En este sentido, tampoco puede obviarse la influencia de la confesionalidad en la legislación española.

Aunque la primera consecuencia que se deduce de la primera parte del art. 11 es su necesaria aplicación debido a la desamortización⁵⁵, como ha manifestado Tomás y Valiente⁵⁶ "la desamortización ya no aparecía como una operación conectada primordialmente con la extinción de la deuda, sino más bien con la reforma tributaria y con el problema de la dotación para el mantenimiento de los gastos del culto y el clero". Pero dentro de ese marco global de la desamortización, aunque esta dotación directa se conectaba con la reforma del sistema tributario, no es menos cierto que en el establecimiento de la obligación constitucional de financiar el culto y el clero se podían extraer otros matices. Así, Llamazares⁵⁷ ha señalado que podría considerarse al culto "como una especie de servicio público por decirlo en términos actuales, asumiendo el Estado su sostenimiento⁵⁸".

⁵⁵. Fernández Segado, F., *Las Constituciones ...*, cit. pp. 201-202. Afirma que sobre la obligación de sostener al clero, desde luego, tal prescripción en modo alguno puede considerarse como una velada declaración de confesionalidad; por contra, es consecuencia en buena medida de la desamortización. Bajo nuestro punto de vista, esta afirmación no resulta correcta, toda vez que si bien es cierto que la financiación trae causa directa de la desamortización, no fue ésta la única causa, puesto que se podría haber legislado cualquier otra opción, como la solución de separación adoptada en Francia.

⁵⁶. Tomás y Valiente, F., *El marco político ...*, cit. p. 85.

⁵⁷. Llamazares Fernández, D., *Derecho Eclesiástico ...*, cit. p. 172.

⁵⁸. Además de otras alegaciones a favor de esta postura que han sido desarrolladas a lo largo de la presente investigación, en este período debe destacarse como muestra expresa de la citada idea, la ley de 21 de julio de 1.838, mandando llevar a efecto el proyecto de ley provisional para la dotación del culto y clero, con las modificaciones y alteraciones que expresa. Concretamente su Art. 4º establecía que: "el Gobierno, de acuerdo con los ordinarios, formará a la brevedad posible los aranceles de derechos parroquiales". (*Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de enero hasta fin de Diciembre de 1.838*. Tomo XXIV, Madrid, en la imprenta nacional. 1.839. pp. 341-342).

Otro argumento sobre el mantenimiento del culto y sus ministros, también ha sido expuesto por Sánchez Agesta, quien sostiene que "junto a una clara animosidad se trasluce aquí el pensamiento regalista: la sujeción de la Iglesia al poder político. La animosidad está también reflejada en otros preceptos como el que prohíbe el acceso de los eclesiásticos al Congreso de los Diputados⁵⁹".

Esta disposición constitucional significaba una gran novedad para nuestro sistema jurídico y que, tal y como pretendía el legislador, modificaba de forma muy importante el sistema tributario español establecido hasta entonces.

Para obtener fondos de cara al nuevo sistema de financiación, como se expondrá más adelante, se llegó por parte del Estado a establecer el "impuesto religioso⁶⁰" proporcional a las riquezas de cada uno y en el que todos los residentes se consideraban fieles católicos para el pago del impuesto. Los sujetos pasivos obligados eran tanto personas como industrias, comercios, y otros. Es decir, lo que con grandes reservas se podría calificar hoy como personas físicas y jurídicas. De suerte que incluso fábricas e industrias eran consideradas católicas, conforme con el art. 11 de la Constitución y otras normas que se citarán.

⁵⁹. Sánchez Agesta, L., *Historia del ...*, cit. pp. 274-276.

⁶⁰. González Armendia, J. R., *Sistemas históricos de dotación del Estado Español a la Iglesia Católica, -Siglos XIX-XX-*, Salamanca, 1.990. p. 41. En esta misma línea, pero sólo para las personas físicas, ha señalado: "Esta contribución asemejaría una suerte de *impuesto religioso* establecido por el Estado afectando a las necesidades del culto y clero católico, que tendría como sujetos pasivos a los católicos contribuyentes por los demás tributos civiles conforme a las listas contributivas públicas. Al menos teóricamente, todos los contribuyentes serán estimados como fieles católicos, conforme a la formulación constitucional de confesionalidad del art. 11".

B) COMPOSICIÓN DEL SENADO⁶¹ Y CONGRESO⁶²

Aparecía regulado dentro del texto en su Título III y IV. El III Del Senado, no especificaba si para ser Senador era necesario ser o no seglar, remitiéndose a regulación posterior mediante la ley electoral. El Título IV Del Congreso de los Diputados, expresamente cerraba el paso a los clérigos a estos cargos, conforme con el Art. 23⁶³:

⁶¹. Sánchez Agesta, L., *Historia del ...*, cit. p. 270. Escribe que el término "Senado" fue discutido por el constituyente, a diferencia del término "Congreso", que ya había sido aceptado por las Cortes de Cádiz. "Muchos diputados buscaban un natural paralelismo entre ambos nombres; y así hubo quien propuso que se las llamara simplemente Cámara de los diputados y Cámara de los senadores y quien arguyó que denominando simplemente Senado a la segunda Cámara, la primera debería llamarse simplemente -Diputación-. Las denominaciones del Estatuto, se rechazaron como nefadas, sin duda para trazar una clara diferencia, tanto más necesaria cuanto realmente se estaba aceptando uno de sus principios. Ni la palabra Estamento, ni la adaptación cámara de próceres, que parecía sugerir una cámara privilegiada, nobiliaria, se escucharon con paciencia. Sin pena ni gloria, sin otra razón que la de no hallar otro término más adecuado (se propuso incluso que se la llamara con un falso casticismo -Cámara de prohombres-), pasó el término Senado *que a nadie le gustaba, pero pasó con la fortuna histórica conocida, que lo mantuvo en todas las constituciones del S-XIX*.

⁶². *Diario de Sesiones de las Cortes*, de fecha de 13 de marzo de 1.837, p. 2111. Parece oportuno traer a colación la primera intervención efectuada en la discusión en el Congreso del proyecto constitucional. Dicha primera intervención fue efectuada por el Diputado Sr. Castro, en la cual entre otras afirmaciones, trata el porqué de la duplicidad de instituciones y así afirma que "Si reconocemos que en el Congreso se protegen los intereses que varían en el tiempo, y recurrimos al medio de que se hagan nuevas elecciones en períodos determinados, claro es que no convendremos en que la otra Cámara represente los mismos intereses: porque entonces; ¿Que significaría esta duplicidad de instituciones?. Es necesario considerar el Senado de otro modo; es necesario considerarlo si es posible, como una reunión de hombres menos expuestos a los embates de las pasiones, hombres cuya situación en la sociedad les asegura una independencia tal, que hace desaparecer absolutamente la idea de que puedan guiarse en sus operaciones por otro interés distinto del bien de la patria".

⁶³. Traer a colación, en desarrollo del art. 23 el Decreto de las Cortes de 29 de julio de 1.837 extinguiendo en la Península, islas adyacentes. y posesiones de España en Africa. todos los monasterios, conventos, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos. Dentro de este Decreto se evidencia la diferencia de trato existente entre laicos (continúa...)

"Para ser Diputado se requiere ser español del estado seglar, haber cumplido veinticinco años, y tener las demás circunstancias que exija la ley electoral".

Este artículo presentaba unos requisitos mínimos, remitiéndose a una posterior ley electoral, a fin de concretar los aspectos necesarios para ser Diputado. Pero aún a falta de ese desarrollo, ya se estaba excluyendo a cualquier eclesiástico para que pudiera ser Diputado. En este orden de ideas se han pronunciado, entre otros y a modo de ejemplo Sánchez Agesta⁶⁴, Fernández Segado⁶⁵ y Torres del Moral⁶⁶ afirmando que, siguiendo una vieja idea del laicismo liberal, la Constitución exige la condición de seglar para ser diputado, con lo cual se impide el acceso del clero a la Cámara Baja.

Por otra parte, hay que afirmar que esta disposición no suponía novedad dentro de nuestro sistema jurídico, toda vez que ya desde 1.812, como se ha venido señalando, a los eclesiásticos se les restringía la posibilidad de ocupar cargos en las Cortes.

⁶³(...continuación)

y eclesiásticos, ya que se recogía expresamente que los que no hubiesen recibido órdenes mayores gozarían de los mismos derechos y estarían sujetos a las mismas obligaciones que los demás españoles. (*Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de julio hasta fin de diciembre de 1.837*. Tomo XXIII. Madrid, en la imprenta nacional, 1.838. pp. 92-99).

⁶⁴. Sánchez Agesta, L., *Historia del ...*, cit. p. 275.

⁶⁵. Fernández Segado, F., *Las constituciones ...*, cit. p. 203.

⁶⁶. Torres del Moral, A., *Constitucionalismo histórico ...*, cit. p. 73.

C) PERSONALIDAD Y FUNCIONES DEL REY

Por lo que respecta a la persona del Rey, éste aparecía separado de cualquier tipo de responsabilidad, tal y como se contenía en el Título VI Del Rey, Art.44:

"La persona del Rey es inviolable, y no está sujeta a responsabilidad, ..."

Aparece superada ya la vieja idea la personalidad sagrada del Rey, si bien esta alienación de cualquier tipo de responsabilidad *era producto, más que de la realidad social, del uso de la técnica legislativa de 1.812, ya que estas afirmaciones no son seguidas por los liberales y progresistas de la época*⁶⁷.

Sobre la figura del Rey, han escrito Solé Tura y Aja⁶⁸ que "la Constitución de 1.837 lo configuraba como un monarca limitado, pero sin los recelos y las limitaciones que tenía el texto de Cádiz. Es inviolable siendo los ministros los que responden de sus decisiones en virtud de refrendo".

Siguiendo las ideas anteriores, se manifestaba en el texto la superación de la vieja teoría en la que el Rey ostentaba su cargo directamente por voluntad divina, y así se puede constatar como desaparece el adjetivo sagrada en las sesiones del constituyente de 1.837. Entre otras, la intervención del Diputado Sr. Montoya⁶⁹ en la cual, literalmente se contenía que: "Por de contado, yo encuentro que el dogma por el que las naciones tienen derecho a constituirse, y en cuya

⁶⁷. Clavero, B., *Manual de ...*, cit. p. 58.

⁶⁸. Solé Tura, J., y Aja, E., *Constituciones y periodos ...*, cit. p.35.

⁶⁹. *Diario de Sesiones de las Cortes*, sesión de fecha de 18 de marzo de 1.837, pp. 2219-2220.

virtud, no pueden ser jamás patrimonio de ninguna familia ni persona, no se haya consignado en ningún artículo del proyecto, cuando yo creo que debería estar escrito en todas partes para que no se pueda olvidar. *Los Reyes están en persuasión de que su poder les viene de Dios, y que no tienen que dar cuenta de sus acciones sino a la Divina Providencia. Para destruir esta doctrina es menester, repito, que se halle consignado en todas partes el dogma de la soberanía nacional, ese dogma que horroriza a los Reyes y que es detestado por todos ellos porque demuestra que los Gobiernos dependen de la voluntad de las naciones*".

D) ENSEÑANZA

Por lo que respecta a la educación, hay que entender que, a diferencia de lo establecido en el Estatuto Real y coincidiendo con lo que señalaba la Constitución de 1.812, se atribuía esta materia directamente a las Cortes, toda vez que la potestad legislativa recaía en manos del Senado y el Congreso, tal y como se contenía en el Título II (De las Cortes), sus artículos 12 y 13⁷⁰.

Las indicaciones que contenía el texto constitucional deben ser ampliadas mediante la exposición de la regulación aprobada tras restablecerse la Constitución de Cádiz en el año 1.836. Nos referimos al arreglo provisional aprobado por la Real Orden de 29 de octubre de 1.836, aprobando el plan general de estudios que seguía a continuación⁷¹. En realidad sus prescripciones se

⁷⁰. Art. 12 "La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey". y el Art. 13 "Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados".

⁷¹. *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora. ... 1.836, cit. pp. 496-502.*

limitaban a regular algún aspecto de la segunda enseñanza y a regular más exahustivamente la tercera enseñanza⁷².

Por lo que respecta a la educación primaria, que había quedado fuera de la anterior Real Orden, fue rápidamente reformada mediante la Real Orden de 27 de mayo de 1.837, comunicando el Reglamento que contenía la regulación de la escuela de instrucción primaria⁷³. Las prescripciones que incidían sobre el fenómeno religioso católico se reducían a los siguientes extremos:

- La obligación de designar a un cargo docente para que verificara la conducta moral de los alumnos. Se contenía expresamente que: "El vicedirector estará particularmente encargado de vigilar la conducta moral y religiosa de los alumnos". Asimismo, debía ordenar los actos religiosos que debían de celebrarse, velando, en todo caso, por su instrucción religiosa.

- En lo referente al programa de enseñanza, la enseñanza de la Religión en las escuelas de educación primaria junto con la moral, aparecía como disciplina obligatoria e indispensable. Es más, el artículo que señalaba esas materias "indispensables", en primer lugar, contenía una mención expresa en el párrafo primero, del art. 21, por lo que, al menos formalmente, se anteponía al resto de disciplinas⁷⁴.

⁷². Se establecían algunas normas respecto a los estudios universitarios de Jurisprudencia, Teología y Medicina. Por lo que respecta a la Jurisprudencia, se determinaba que se desarrollaba durante siete años, y para los que no recibieran el grado de licenciado en esos años, debían cursar un año más de estudios.

⁷³. *Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de enero hasta fin de junio de 1.837*. Tomo XXII. Madrid, en la imprenta nacional, 1.837. pp. 263-275.

⁷⁴. Art. 21: "Las materias de enseñanza indispensables serán las siguientes: 1ª Religión y (continúa...)"

- Sobre la disciplina que debía observarse en estos centros educativos de primera enseñanza, el propio reglamento afirmaba que "... sin ser dura, debería ser tan severa como conveniente a los individuos destinados a una profesión en que se requiere moralidad ejemplar, a jóvenes de tan esmerada educación⁷⁵.

- Quizá el hecho que nos aporta una verdadera visión de la confesionalidad de esta primera enseñanza estaba constituido, no ya en las distintas enseñanzas que conformaban la educación en estas escuelas primarias, sino que se puede afirmar que se encontraba en la admisión de los alumnos en el centro educativo, toda vez que para *la admisión de los alumnos en estas escuelas era necesario acreditar la fe de bautismo*⁷⁶.

E) JURAMENTO DE LA CONSTITUCIÓN

El texto constitucional, a diferencia con su predecesor del 12, no contenía fórmula de juramento, si bien no implica que el hecho del juramento como acatamiento del orden que contiene el texto no preocupara al legislador. Por ello, aparecía incluso antes de la promulgación del texto constitucional un Real Decreto de 15 de junio de 1.837, previniendo la forma con que debe jurarse la

⁷⁴(...continuación)
Moral ...".

⁷⁵. En consonancia con este punto resulta interesante traer a colación el Real Decreto de 31 de enero de 1.837, con el que las Cortes restablecen el Decreto de 17 de agosto de 1.813. relativo a la prohibición de la corrección de azotes en las escuelas, colegios y demás establecimientos de educación. (*Colección de ... -desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.837-*, cit. cit. pp. 44-45).

⁷⁶. Hay que recordar que tan sólo pocos años antes se había abolido la llamada prueba de limpieza de sangre.

nueva Constitución en los pueblos del reino⁷⁷. Este Decreto recogía, bajo el marco de un mismo juramento, la forma en que debía ser efectuado, distinguiendo entre el pueblo y el clero, los Tribunales y las demás corporaciones y dependencias del Gobierno y los ejércitos y la armada. Entre sus diversas disposiciones hay que señalar, entre otras, las siguientes: el primer día festivo inmediato se reunirán los vecinos *en la parroquia*, asistiendo el ayuntamiento, las autoridades y empleados públicos. En el pueblo en el que hubieran dos o más parroquias se distribuían el jefe político, los alcaldes constitucionales y regidores, de modo que en ninguna faltara uno de ellos que ocupara la presidencia. Se celebraba una misa solemne de acción de gracias; para después leerse la Constitución antes del ofertorio, que se hacía por el cura párroco o por el que éste designara. El ofertorio de esta misa obligatoriamente, debía contener una breve exhortación correspondiente al objeto, es decir, a la Constitución de 1.837. Después de concluida la misa, se prestaba juramento por todos los vecinos y el clero, a una voz y sin preferencia alguna, de guardar la Constitución bajo la fórmula siguiente:

¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios guardar la Constitución de la monarquía española decretada y sancionada por las Cortes generales de 1.837, y ser fieles a la Reina?.

A dicha pregunta, debían responder todos los concurrentes:

"Sí juramos".

Y posteriormente se cantaba el, ya conocido, Te Deum.

⁷⁷. Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.837) , cit. pp. 338-340.

Para los Tribunales y demás corporaciones y dependencias del Gobierno, se expresaba la misma fórmula de juramento aunque con algunas matizaciones, referentes al lugar de prestación del consentimiento, toda vez que no se daba en las parroquias, sino en las Catedrales, Colegiatas y Universidades, estableciéndose la concreción del juramento como requisito "sine qua non" para acceder, o seguir en sus cargos. Se respetaba también la necesidad de cantar el Te Deum.

Para el último colectivo contenido en este Decreto, los Ejércitos, se establecía la ceremonia militar de "jura de la bandera", donde a la misma pregunta señalada antes, al unísono se debía responder dentro de la ceremonia militar, debiendo los jefes militares remitir certificación a la autoridad civil donde constara la celebración de dicho acto.

Éste no sólo soportaba la carga confesional del propio juramento, sino que incidía más en el aspecto confesional, en cuanto que se juraba el texto Constitucional, poniendo por testigos a Dios y a los Santos Evangelios. El jurar por Dios, como podría parecer a simple vista, no es una redundancia sino que lleva aparejado un plus dentro del propio juramento.

F) LA LIBERTAD DE IMPRENTA

Dentro de los principios constitucionales que recogía el texto, se encontraba el principio de libertad, dedicando un título completo a enumerar una serie de derechos constitucionales. En tal título se aprecia con claridad la sustitución de una serie de preceptos abstractos por preceptos prácticos de un contenido jurídico positivo. Así en los artículos 2 a 10 expresan únicamente las consecuencias jurídicas de la libertad de imprenta, el derecho de petición, la

igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la seguridad procesal y penal, y la propiedad privada⁷⁸.

El propio texto constitucional recogía en su articulado el principio básico de libertad de imprenta en su Art. 2º:

"Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes.

La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados⁷⁹".

⁷⁸. Fernández Segado, F., *Las Constituciones ...*, cit. p. 201.

⁷⁹. *Diario de Sesiones de las Cortes*, correspondiente a la sesión de fecha de 14 de Marzo de 1.837, p. 2.135. El Sr. Secretario del despacho de la Gobernación de la península, durante una intervención para la defensa del proyecto presentado de Constitución de 1.837, manifiesta literalmente que: "La declaración de derechos que la Comisión la presenta está al abrigo de todo peligro, porque no consiste en máximas abstractas o indefinidas, sino en derechos marcados cuyo respeto se sanciona, y he aquí como venimos al examen de cada uno de ellos. El primero el de Libertad de imprenta, está colocado el primero por la referencia que de suyo merece, puesto que sin esta libertad todas las garantías son ilusorias. Tres caracteres distintivos tienen los gobiernos representativos, que no pueden confundirse con ningún otro: primero, la discusión, por la cual los poderes del estado están obligados a buscar en común la verdad; segundo la publicidad, por la cual los poderes del estado encargados de la investigación de la verdad están bajo las miradas y vigilancia de los ciudadanos; tercero, la libertad de imprenta por la que los mismos ciudadanos son provocados a buscar también la verdad y comunicarla al poder. De tal manera es esa libertad de la imprenta la esencia de los gobiernos representativos, que yo no puedo concebir ninguno que carezca de aquel precioso elemento. Ella es el freno del despotismo, el centinela constante contra la arbitrariedad, y para valerme de la expresión de un hombre célebre, la palanca de las fuerzas públicas. Los cánones, sin embargo, que sobre esta libertad deben consignarse en una Constitución, están reducidos a muy poco, y la Comisión los ha reunido de un modo feliz. Son sólo la abolición de previa censura y de todo medio que venga a interponerse entre el pensamiento y su publicación por escrito; y de otra parte el juicio por los jurados absolutamente independientes del poder, por que si el jurado tuviese tal dependencia de nada serviría. Dice dictamen de la Comisión que esta libertad se entiende con sujeción a las leyes, y excusado parece decir que las leyes en ningún caso serán preventivas, sino sólo represivas para castigar los abusos".

La libertad de imprenta en el Gobierno progresista bajo el marco de la Constitución de 1.837, se configuraba como una libertad esencial para el desarrollo de la persona. Pero esta libertad no fue bien ejercitada en la práctica, ya que se cometían continuos abusos, de suerte que se convertía la imprenta en vía fácil para dirigir ataques frontales contra las más altas instituciones del país; además no siempre encontraban los excesos su merecido castigo.

En todo caso, el segundo párrafo de dicho artículo se contituyó en el centro de las divergencias entre moderados y progresistas, toda vez que el Jurado era la institución irrenunciable para juzgar los delitos cometidos por medio de la imprenta para los progresistas, y la más deleznable para los moderados, al entender que no servía para el enjuiciamiento de los abusos.

Durante el período de sesiones del Constituyente el Gobierno adoptó algunas medidas tendentes a regular este Derecho, en las cuales resulta sencillo verificar esa tensión entre este derecho y los intereses de la Iglesia. Nos referimos al Real Decreto de 22 de Marzo de 1.837, que incluía la ley de las Cortes sobre las circunstancias que habían de proceder para la publicación de periódicos⁸⁰. Como principio general se preceptuaba el previo depósito de cualquier publicación para su censura, aunque se establecían casos excepcionales, donde

⁸⁰. *Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.837)*, cit. pp. 117-120. Se señalaban, dentro del articulado, circunstancias de obligado cumplimiento necesarias para poder imprimir un periódico como: exigencia previa la existencia de uno o más editores responsables, el depósito de cantidades económicas previo al inicio de actividad de la publicación, variando éstas, conforme con la periodicidad de la publicación. También se recoge en su articulado la responsabilidad a que están sujetos los periódicos por los abusos que contengan. Así recoge que, en primer lugar, será responsable la persona que haya firmado el original impreso. Si el artículo denunciado no tuviere firma o no la reconociese su autor, será responsable el editor del periódico. Esta responsabilidad se señala expresamente como subsidiaria. De igual forma se regula el supuesto de publicación de folletos, utilizando la analogía con el supuesto anterior para la responsabilidad del dueño de la imprenta, en el caso que los folletos carecieren de autor.

no era necesario ese depósito. Por otra parte, bastaba que el Jurado declarase que versaba un artículo sobre materias religiosas, para que el editor sufriera una multa cuantiosa.

III. DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA CONSTITUCIÓN.

1. DESAMORTIZACIÓN

Durante la vigencia del Estatuto Real se desamortizaron gran parte de los bienes de la Iglesia, pero quedaban aún bienes pertenecientes al clero secular. Con la entrada en vigor del texto del 37, y mediante las disposiciones jurídicas aprobadas en este período, se procedió a su desamortización⁸¹. Esta línea política originó un gran número de disposiciones jurídicas.

Uno de los puntos álgidos de este período lo constituyó el Decreto de las Cortes de 29 de julio de 1.837 extinguiendo en la Península, islas adyacentes, y posesiones de España en Africa, todos los monasterios, conventos, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos⁸². En su articulado se extinguían en los lugares descritos todos los monasterios, conventos, colegios,

⁸¹. Más extensamente, entre otros, véase: F. Tomás y Valiente, *El marco ...*; Rueda, G., *La desamortización de Mendizabal y Espartero en España*, Madrid, 1.986, pp. 11-27; Martín, T., *La desamortización, textos político-jurídicos*, Madrid, 1.973, pp. 19-43.

⁸². *Colección de ... (desde junio de 1.837 hasta fin de diciembre 1.837)*, cit. pp. 92-99. Este Decreto presentaba una peculiaridad en relación con la enseñanza, pues autorizaba la existencia de algunas casas de escolapios, mientras que por otra parte se dotaba por otros medios a la enseñanza, pasando a considerarse a estas casas no como conventos, sino como establecimientos de instrucción pública dependientes del Gobierno, o de los Ayuntamientos, e incluso de las Diputaciones Provinciales.

congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos, si bien se preveían algunas excepciones.

En esta norma se podía observar claramente la relación señalada entre desamortización y reforma de la Iglesia. En este sentido, se hacía referencia a las Juntas creadas por Real Decreto de 8 de marzo de 1.836, y se reiteraba la obligación de ir reduciendo el número de conventos de religiosas, pero en todo caso, ajustándose a las siguientes directrices:

- No se conservaría abierto ningún convento o monasterio que tuviera menos de 12 religiosas profesas, ni se volverían a abrir los que estuvieran ya cerrados, aunque antes de cerrarse tuvieran aquel número.

Fue en este momento cuando se iguala el número de religiosas en un convento con El exigido para los religiosos, sin olvidar que en el año 1.836 el mínimo era de 20 religiosas.

- No subsistiría en la misma población más de un convento de la misma orden.

- Si por circunstancias excepcionales debía ser incumplido lo anterior, era necesario comunicarlo al Gobierno.

En este Decreto es fácil verificar, una vez más, el afán recaudador del Estado, ya que todos los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de todas las casas de comunidad de ambos sexos se aplicaron a la caja de amortización para la extinción de la deuda pública.

También se aprecia el apuntado fenómeno secularizador en los bienes pertenecientes al clero en general, acogiendo el Gobierno los bienes inmuebles consistentes en conventos suprimidos para destinarlos a establecimientos de utilidad pública. En cuanto a los bienes muebles, los archivos, cuadros, libros y demás objetos pertenecientes a ciencias y artes, se aplicaron a las bibliotecas provinciales, museos, academias y demás establecimientos de instrucción pública. Esta disposición continuaba la política trazada años antes.

El Gobierno quería finalizar cuanto antes con la enajenación de los bienes desamortizados a la Iglesia, guiado principalmente por su deseo recaudador, pero como se ha venido señalando, no era sólo el único. Por ello se dictó la Circular de la Dirección General de Rentas y Arbitrios de amortización dirigida a activar la subasta de fincas nacionales de 5 de Marzo de 1.839⁸³.

Continuó la desamortización de los bienes pertenecientes a esta clase del clero con la Ley de 2 de septiembre de 1.841 relativa a la venta de las fincas del clero secular⁸⁴, donde se declaraba que todas las propiedades, bienes, derechos y acciones que de cualquier modo pertenecieran a las fábricas de las iglesias y a las cofradías eran bienes nacionales y se declaraban en venta, aunque se recogían algunas excepciones.

⁸³. *Colección de ... -1.839-*, cit. pp. 151-152.

⁸⁴. *Colección de ... -1.841-*, cit. pp. 614-629. Esta ley era producto de la aprobación en Cortes del Decreto de la Regencia provisional del reino de 21 de enero de 1.841 fijando las bases de un proyecto de Ley que debía presentarse a las Cortes, acerca de la venta de los bienes del clero secular. (*Colección de ... -1.841-*, cit. pp. 77-79).

En la enajenación de los edificios que habían pertenecido a la Iglesia se produjeron algunos problemas. Por una parte, el escaso interés de los particulares⁸⁵ sobre estos inmuebles, no sólo por el elevado valor económico que tenían, las especiales obligaciones de conservación, y en la mayoría de los casos los grandes gastos en que había que incurrir para su reparación, y además porque no podían producir riqueza, a diferencia del resto de las fincas que también podían adquirir los particulares en subastas y que eran susceptibles de gran aprovechamiento económico. Por otra, éstos estuvieron sujetos a unas disposiciones legales diferentes a las que se señalaban en los restantes.

La mayoría de estos edificios fueron vaciados de las riquezas que contenían y, siguiendo con la política señalada de conversión de éstos en establecimientos de utilidad pública, se crearon bibliotecas, centros educativos, hospitales, hospicios, cuarteles de milicia nacional, cárceles, parroquias, casas consistoriales y establecimientos análogos.

Aún con todo lo anterior, es cierto que una minoría de ellos sí fueron vendidos, aunque en condiciones más gravosas de mantenimiento que los llamados bienes nacionales. Estos edificios en algunas ocasiones fueron enajenados bajo condición de darles uso u ocupación pública. En este caso, la adquisición fue onerosa pero en una relación de 1,5 a 3 por cien sobre el valor de tasación. Estas grandes facilidades de compra estaban razonadas por el fin

⁸⁵. Decreto de 26 de julio de 1.842 sobre concesión de edificios de conventos suprimidos. (*Colección de ... -desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.842-*, cit. pp. 78-81). Literalmente: "Y en efecto, poca meditación se necesita para comprender desde luego que estas fincas son por su naturaleza de difícil enajenación, porque a los usos a que puede destinarlas un particular son escasos en número, porque su valor es ordinariamente desproporcionado a su producto en renta, y porque rara de ellas es la que para preparación y conservación no exija considerables gastos de dinero". Dentro del mismo Decreto también: "pero una anomalía inconcebible ha sucedido que estas fincas se han intentado siempre enajenar a condiciones más gravosas que todas las demás fincas nacionales".

público de tales edificios. En virtud de ese uso, se procedió en algunos supuestos a su cesión gratuita para los fines descritos (obras de interés social)⁸⁶. Aunque estas cesiones fueron efectuadas de forma temporal, el Estado no renunciaba a perder la titularidad de dichos bienes, puesto que se establecía una cláusula de reversión para el supuesto concreto que no tomaran el uso debido. No sólo se establecían las cautelas señaladas, sino que se intentaba regular el uso fraudulento de estos inmuebles, de suerte que los edificios que tuvieran otro uso diferente del solicitado abonarían un alquiler al intendente, sin perjuicio de ser algunos desocupados.

Se aplicó la misma solución para aquellos edificios que tuvieran una aplicación parcial a dichos fines. También se reguló el supuesto de subarriendo, pero en este caso se señalaba a la Hacienda Pública como organismo encargado de recaudar la renta.

Para supuestos de comportamientos dolosos que hubiesen producido menoscabo o incluso destrucción de ese tipo de edificios, se abrieron los expedientes oportunos a fin de exigir responsabilidades a quien correspondiera.

Todo lo expuesto no fue sino reflejo y continuación de la anterior línea política del legislador del 34.

⁸⁶. Sobre éstos, se pronunció la Orden de 17 de marzo de 1.845, mandando que las cesiones gratuitas de edificios-conventos hechas para objetos de utilidad pública sean y se entiendan temporales. (*Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por los respectivos Ministerios, desde 1º de enero hasta fin de junio de 1.845*. Tomo XXXIV. Madrid, en la imprenta nacional, 1.845. pp. 112-113).

Que no terminaban de subastarse los bienes nacionales⁸⁷ es una afirmación fundamentada en distintos argumentos, pero desde luego, uno de ellos no aportado hasta ahora y que aparecía en la legislación de la época, era la conducta de algunos de los administradores de estos bienes en relación con su enajenación: "para que la enajenación de los bienes marche con la rapidez que exige el estado económico y político de la nación, lo es una, la que se haga entender a los administradores de los bienes que sus funciones no se concretan a sólo administrar, sino que es de su obligación como agentes del ramo el activar sin descanso los expedientes de incorporación y venta de dichos bienes, removiéndolos por sí los obstáculos que a aquello se opusieren, y dando cuenta a la intendencia y a esta superioridad en caso necesario de los entorpecimientos que esté en su mano remediar, pues sólo así podrán evadirse de la responsabilidad que tienen⁸⁸".

Con la entrada de los moderados en el poder cambió la política hacia la Iglesia y se puso freno a la venta de los bienes pertenecientes a la misma. Uno de los primeros ejemplos es el Decreto de 8 de agosto de 1.844 por el que se suspendió la venta de los bienes que faltaban por vender, cuya titularidad correspondía al clero secular y a las comunidades de religiosas⁸⁹.

⁸⁷. Real Orden de 7 de octubre de 1.842 dando Reglas para la pronta enajenación de los bienes nacionales. (*Colección de ... -desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.842-*, cit. pp. 380-381). Como se puede observar en esta Orden los edificios desamortizados seguían teniendo grandes dificultades para ser enajenados, y así se instó a todos los intendentes provinciales para que inmediatamente tasaran todas las fincas rústicas y urbanas, las anunciaran para subasta en los Boletines Oficiales, describiéndolas extensamente y haciendo mención a sus cargas.

⁸⁸. Orden de 9 de enero de 1.843 para que se activen sin descanso los expedientes de incorporación y venta de los bienes nacionales. (*Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por los respectivos Ministerios, desde 1º de enero hasta fin de junio de 1.843*. Tomo XXX. Madrid, en la imprenta nacional, 1.843. p. 7).

⁸⁹. *Colección de ... (desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.844)*, cit. pp. 86-89.

Dentro de esta nueva política moderada se devolvieron al clero los bienes todavía no enajenados, y así se aprobó la Orden de 3 de abril de 1.845 sancionando la Ley para que se devolvieran al clero secular los bienes no enajenados de su pertenencia⁹⁰. En esta misma línea, mediante el Decreto de 11 de Abril de 1.845 se suspende la venta de los edificios-conventos de las comunidades religiosas suprimidas, aprobándose tres días después el Decreto de 13 de Abril de 1.845 dictando disposiciones relativas al destino que había de darse a los mismos⁹¹. Antes de consignarse sus nuevos usos, se oyó a los jefes políticos, autoridades militares, eclesiásticas, ayuntamientos, etc.. .

En resumen, la desamortización no cubrió el objetivo que con mayor fuerza buscaba, de forma que las preocupaciones financieras del Estado no quedaron resueltas, por lo que no representó "la tabla de naúfrago" que necesitaba el sistema financiero, tal y como esperaban los ministros de Hacienda progresistas. Los fondos se perdieron a lo largo de complicados trámites burocráticos cuando el dinero se transformaba en títulos de deuda, o bien, en el precio de tasación de las fincas, floreciendo una vez más, con gran fuerza, toda la picaresca española.

⁹⁰. *Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.845)* , cit. pp. 137-138.

⁹¹. (*Ibidem*. pp. 141-142). Siguiendo con la política señalada, se aprobó el Decreto de 13 de abril de 1.845 dictando disposiciones relativas al destino que se ha de dar a los edificios-conventos no enajenados. En dicha norma se recogía una relación nominal que clasificaba dichos inmuebles para después darles alguna aplicación definitiva. Se pensaba en su utilidad pública. Los destinos fueron: oficinas para el Estado, cuarteles, presidios, cárceles, casas de corrección o beneficencia, hospitales, escuelas, fábricas y otros establecimientos públicos, o establecimientos de convivencia más o menos general, bien para ser conservados como monumentos históricos o artísticos o quedar sus iglesias consagradas al culto divino. (*Ibidem*. pp. 142-144).

Otro de los objetivos de la desamortización, como era dotar de tierra a los jornaleros, tampoco fue satisfecho, sino que se inició un nuevo neolatifundismo burgués que llegará hasta nuestros días.

La clase social que salió más beneficiada y que más alentó la desamortización fue la burguesía que concurriendo a las subastas consiguió hacerse con grandes masas de tierra. No hay que olvidar que fueron católicos los grandes compradores de bienes nacionales.

Tampoco se logró modificar la estructura de la Iglesia a través de la tan ansiada reforma del clero, consiguiéndose tan sólo despojarla de propiedades que pasaron a otras manos.

Pero no todo fue negativo, puesto que la desamortización trajo a la España del Siglo XIX cambios, que aún a pesar de no conseguir los objetivos teóricos previstos por sus autores, deben calificarse como positivos y necesarios en la modernización en una España que necesitaba pasar del Antiguo Régimen al Nuevo Régimen. En esta línea, hay que recordar que se consiguió impulsar la creación de edificaciones de interés social, como bibliotecas, hospitales, colegios o museos aprovechando los edificios desamortizados, tal y como se ha señalado.

De cualquier forma, entendemos que el estudio pormenorizado de las normas desamortizadoras aporta una visión de conjunto indispensable para conocer perfectamente en que consistió la desamortización en España, tal y como ha quedado reflejado. En todo caso, se ha expuesto que se trató de una línea uniforme que comenzó a trazarse desde comienzos del Siglo XIX, donde

manteniendo las primeras normas desamortizadoras se fueron ampliando sus pretensiones, de forma que con el paso de los años se diseñó una progresión geométrica en los efectos de las anteriores normas que culminará con la solución del Concordato de 1.851.

2. FINANCIACIÓN

La incidencia de este hecho junto con otros factores, vendrá a modificar el sistema fiscal español. Frente a una Iglesia que posee un sistema de financiación consolidado históricamente, el Estado presenta un sistema incipiente de financiación, que había tomado para sí muchos aspectos de aquél. En este sentido, hay que recordar la participación que el Estado tenía en el Diezmo, o la Real Orden de 20 de octubre de 1.836⁹² que se promulgaba cerca del epicentro del proceso desamortizador, por la que se continuaban exigiendo cantidades económicas a la Iglesia.

Antes de proceder al desarrollo de la financiación del culto y el clero, hay que constatar *dos aspectos sustanciales*.

El primero es *la no operatividad del nuevo sistema*; llevar a cabo la financiación de la Iglesia Católica en el siglo XIX, y concretamente durante la vigencia del texto del 37, no resultó tarea fácil, fundamentalmente por tres tipos de razones.

⁹². Esta Orden declaraba que el subsidio que debía abonar el clero para el año era de 20 millones con la rebaja que se expresaba. (*Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora, ... 1.836*, cit. pp. 485-486).

La primera, es que se trató de una financiación complicada, canalizada a través de distintas administraciones, a la que hay que sumar una descompensada legislación en su desarrollo en sólo pocos años (1.837-1.845), donde entraron en juego demasiados factores que rompieron la concordia necesaria para el normal cumplimiento de la norma constitucional.

La segunda, razones propias al desarrollo de las distintas leyes reguladoras de la financiación. Entre otras, la dificultad en la formación de datos estadísticos, conforme con las exigencias legales (en todas las normas jurídicas aprobadas para la recopilación de datos estadísticos se alude a su falta y su no terminación, de suerte que ni con el nacimiento de la nueva Constitución estuvieron finalizados).

La tercera, la falta de colaboración para el cumplimiento de la ley que dispensaron los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales⁹³. A la mayoría de ellos se les podría calificar jurídicamente como morosos. Nunca llegaron a entregar las cantidades totales, se pagaban en el mejor de los casos tarde, y prácticamente en la mayoría de las ocasiones se contentaban los municipios con la entrega de cantidades a cuenta.

⁹³. Pruebas de la falta de colaboración de Ayuntamientos y Diputaciones provinciales y de la preocupación del Gobierno por solucionarlo son: la Orden de 20 de enero de 1.844 removiendo los obstáculos que han entorpecido la cobranza de la contribución del culto y el clero. Ésta pretende conseguir un comportamiento positivo de Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, conforme con las disposiciones legales; la Orden de 5 de marzo de 1.844, mandando que se proceda sin levantar la mano al repartimiento y cobranza del cupo de la contribución general del culto y clero correspondiente al presente año. Resulta muy gráfica la expresión "sin levantar la mano", donde se puede verificar una vez más la inutilidad del sistema. (*Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por los respectivos Ministerios, desde 1º de enero hasta fin de junio de 1.844*. Tomo XXXII. Madrid, en la imprenta nacional, 1.844. pp. 105-106 y pp. 384-385 -respectivamente-).

El segundo aspecto, es la gran dificultad en determinar la cantidad económica necesaria para el sustento del culto y el clero. En este último sentido destacan los grandes altibajos en las asignaciones presupuestarias, verificados en los distintos cálculos de cantidades comprendidas dentro de las memorias presentadas en las Cortes como suficientes para el sostenimiento del culto y el clero. Durante la vigencia de la Constitución estas cantidades fueron muy variables⁹⁴:

En una memoria presentada en Cortes el 30 de mayo de 1.837 se reguló la cantidad de 153.000.000 rs como suficiente para atender a las necesidades del culto y el clero.

Más tarde, en otra de 21 de febrero de 1.838 se hizo subir el presupuesto a la suma de 380.000.000 rs. Después la ley provisional de 21 de julio del mismo año se limitó a fijar bajo equitativas bases las asignaciones del personal, y estableció ciertas reglas generales para determinar los gastos del culto, quedando encargada su aplicación a los intendentes de las provincias y a las Juntas Diocesanas con la inmediata inspección de la Superior de la Corte. Sin embargo, no se conocía el producto que podrían dar los acervos decimales, y las rentas de los bienes del clero con las que se contaba todavía para cubrir las asignaciones y gastos, y tampoco se podían precisar las necesidades presupuestarias de estas mismas obligaciones al tiempo de formularse la ley, dando ocasión todo este sistema a infinidad de dudas y reclamaciones, en algunos casos más o menos fundadas.

⁹⁴. Esta relación se encuentra literalmente señalada en la Real Orden de 12 de junio de 1.844 Mandando que los M.RR. arzobispos y gobernadores eclesiásticos de las diócesis formen y remitan a la Junta superior de Dotación de culto y clero las relaciones de los haberes personales correspondientes a los individuos que componen el clero catedral, colegial, abacial y prioral de sus respectivas diócesis. (*Ibidem*. pp. 750-752).

Tomando como punto de partida la ley de 21 de julio, el Ministerio de Hacienda ideó en 1.839, para la subrogación del diezmo y primicia un reparto de 212.696.833 rs que sometió el 12 de septiembre a la aprobación nacional.

El 13 de junio de 1.841, conforme al criterio de la Junta Superior de Dotación se fijó un presupuesto que quedó reducido a 180.886.617 rs, y que en su aprobación final en Cortes se redujo aún más, estableciéndose en la cantidad de 75.466.412 rs⁹⁵.

Ya en 1.842⁹⁶ el Ejecutivo publicaba la Circular de 20 de abril, mediante la cual reducía las asignaciones. Como ejemplo prescribía que a ningún párroco se le abonase más cantidad de la de 3.300 rs. Tal resolución trajo consigo la preocupación de la opinión pública que se dejó sentir especialmente en la prensa de todas las tendencias, llegando a forzar al Gobierno a promover una nueva orden para suspender los efectos de la señalada.

Aún con todos los lastres aportados como realidad objetiva, el Gobierno no cesó en su empeño de llevar a cabo la ley, elaborando numerosísimas disposiciones legales, requiriendo incluso responsabilidades a muy diferentes tipos de funcionarios. Este empeño era desde luego claramente apreciable a través de la copiosa legislación emanada de los Ministerios de Hacienda y sobre todo, del de Gracia y Justicia para que nada faltara en el sustento del culto y para el sostenimiento de los ministros de la Iglesia.

⁹⁵. Ver anexo nº1, donde se refleja el reparto individualizado a cada una de las provincias del Reino.

⁹⁶. Ver anexo nº2, donde se refleja el reparto individualizado a cada una de las provincias del Reino.

2.1 LA DESAPARICIÓN DEL ANTIGUO SISTEMA DE FINANCIACIÓN. EL FIN DEL DIEZMO.

El diezmo era por excelencia el mayor exponente de la financiación de la Iglesia, aunque, como es conocido, no el único. Sin embargo, tras el estudio del diezmo es más fácil constatar la evolución de la financiación de la Iglesia dentro del nuevo sistema constitucional.

Esta obligación legal de satisfacer el llamado "diezmo" a la Iglesia Católica encuentra una larga tradición histórica en nuestro Derecho positivo. Su cobro fue autorizado por el Rey D. Alfonso XI en 1.355, por D. Juan I en 1.372, por los Reyes Católicos en Medina del Campo en 1.480, en Granada en 1.501, y por D. Carlos I y Doña Juana en Madrid en el año 1.534 y en Valladolid en el año 1.537.

Así, en la Novísima Recopilación de las Leyes de España, en su Libro Iº, Título VI, se encuentra la Ley II "General Obligación de pagar diezmos cumplidamente; modo y diligencias con que se debe hacer". En dicha Ley se recoge lo que podríamos denominar "espíritu de eternidad de la norma", ya que la propia norma señala su vigencia temporal "sine die". Además, para obligar a su cumplimiento se amenaza no sólo con coacciones civiles y penales, sino que llega incluso a mencionar el castigo divino para quien no la cumpla⁹⁷.

⁹⁷. "... Por ende mandamos y establecemos para siempre jamás, que todos los hombres de nuestro reino den sus diezmos derecha y cumplidamente a Nuestro Señor Dios de pan, y vino, y ganados, y de todas las otras cosas que se deben dar derechamente, según lo manda la Santa Madre Iglesia: y esto mandamos también por Nos, como por los Ricos-hombres como por los Caballeros, como por los otros pueblos, que todos demos cada uno el diezmo derechamente de los bienes que según Dios nos da. ...". (*La Novísima Recopilación de las Leyes de España*, Libro Iº. La fuente es una edición facsímil, elaborada por la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, impresa en Madrid en el año 1.975. pp. 54 y 55).

La anterior disposición tendrá una amplia vigencia en el tiempo, ya que no hay que olvidar que se aplicó desde el siglo XIV hasta casi mediados del siglo XIX, (casi 500 años de vigencia). Por otra parte, y para constatar el cambio de Antiguo Régimen al Nuevo, debe ser observada en contraposición a las normas desamortizadoras que se han aportado anteriormente.

No puede pasarse por alto que el propio Estado se servía de la Iglesia y del diezmo desde antes del siglo XIV, pero de forma temporal, por trienios y a través de autorizaciones desde Roma, en forma de Bulas⁹⁸ o Breves⁹⁹ dictadas por los Sumos Pontífices. Aunque, desde los Reyes Católicos será la propia Roma a través del Breve del Sumo Pontífice Alejandro VI, expedido en Roma el 13 de febrero de 1.494, la que instaure perpetuamente en el tiempo el recibo de la tercera parte del diezmo a favor de los Reyes¹⁰⁰. Pero será en el año 1.565 cuando el propio Estado aprobará una disposición exigiendo unilateralmente su

⁹⁸. Por Bula de Bonifacio VIII de 16 de Octubre de 1.302, se concedió a Fernando IV, Rey de Castilla y León, la gracia de que por un trienio, que debía contarse desde la Pascua de Navidad de aquel año, pudiese percibir la tercera parte de los frutos, réditos, rentas y obvenciones de los bienes eclesiásticos, que antes se había acostumbrado destinar para las fábricas de las Iglesias en ciertos lugares y partes de ambos reinos, y del mismo modo que antes se había autorizado a su bisabuelo el Rey D. Fernando por cierto tiempo, y lo habían percibido los demás reyes sucesores. (*Novísima Recopilación de las Leyes de España*, cit. Libro Iº, p. 54 y en nota a pie de página).

⁹⁹. Como ejemplos de estos breves, hay que citar de forma escueta: el Breve de Clemente V de 2 de Noviembre de 1.313, dirigido a los Arzobispos de Toledo, Sevilla y Santiago, con motivo de haberle suplicado el mismo Fernando VII, que se dignase a proveerle de algunos socorros para reparar los castillos y tierras del reino. Su Santidad se lo concedió por otro trienio. (*Novísima Recopilación de las Leyes de España*, cit. Libro Iº, p. 54 y en nota a pie de página).

¹⁰⁰. Breve de Alejandro VI, expedido en Roma a 13 de febrero de 1.494, como consecuencia y previa petición de los Reyes Católicos, los que le habían manifestado que los Pontífices antecesores habían concedido a los Reyes predecesores ciertas partes del diezmo, llamadas tercias. Su Santidad aprobó dicha petición y la amplió de forma que se recibiera esa tercia perpetuamente y durante los tiempos futuros, de suerte que comenzarían a recibirlas los Reyes Católicos y posteriormente sus sucesores. (*Novísima Recopilación de las Leyes de España*, cit. Libro Iº, p. 55 y en nota a pie de página).

prestación. Esta afirmación se apoya en la Pragmática dada en Madrid por Felipe II en el 30 de Marzo de 1.565¹⁰¹ bajo el título "Derecho de S. M. a las tercias o dos novenos de todos los diezmos, como correspondientes a su Real Patrimonio". Dependiendo de los distintos momentos históricos, el Estado varió su participación en el diezmo¹⁰².

Para terminar con esta breve exposición del diezmo en el tiempo, es necesario concluir con los debates parlamentarios donde se discutía sobre su supresión. Merece la pena destacar, como síntesis, la intervención de Alejandro Mon donde señalaba que la Hacienda española no había sido nunca capaz de organizar un auténtico sistema tributario, "de suerte que nunca hemos sabido, nunca hemos podido, nunca hemos tenido contribución ninguna que no haya sido fundada sobre rentas del clero. Esta es la cuestión que se debe tener presente"¹⁰³.

La resistencia al pago del diezmo no es un fenómeno que aparezca a fines del siglo XVIII o comienzos del XIX. Existen múltiples ejemplos de oposiciones al diezmo, como es en el caso del País Vasco¹⁰⁴, pero lo que es realmente cierto es que con la llegada del siglo XIX el diezmo comenzará a tambalearse en función de varios criterios objetivos: la noticia de la supresión del diezmo en la Francia revolucionaria, las discusiones en las Cortes gaditanas sobre su posible

¹⁰¹. Se puede encontrar dicha norma en la (*Novísima Recopilación de las Leyes de España*, cit. en el Libro Iº, Título VII bajo el título de los dos novenos, o tercias Reales de los Diezmos. pp. 64 a 66).

¹⁰². A modo de ejemplo conviene señalar el Decreto de 16 de junio de 1.812 donde se contienen las reglas para verificar la aplicación de parte de los diezmos a las urgencias del Estado. No hay que olvidar que se promulga en plena Guerra de la Independencia. (*Colección de los ... -desde el 24 de mayo de 1.812 a 24 de febrero de 1.813-*, cit. pp. 26 a 28).

¹⁰³. *Diario de Sesiones de las Cortes*, año 1.840, p. 2.339.

¹⁰⁴. Así lo afirma Fernández de Pinedo, E., *Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco, -1.100-1.850-*, Madrid, 1.974. pp. 194 y 272.

abolición, las discusiones y Decretos del trienio liberal. Todos estos hechos anteriores favorecieron la resistencia pasiva hacia la cobranza de los diezmos y que la pasividad acabara tornándose en negativa rotunda, dentro de los sectores favorables al cambio¹⁰⁵.

El Derecho, al abolir el diezmo, no hace otra cosa que reconocer la realidad social. El propio Mendizábal en la Sesión de las Cortes de 21 de febrero de 1.837¹⁰⁶, señaló literalmente: "Si pues esta contribución ha cesado o va cesando de hecho, no puede haber una ocasión más oportuna para suprimirla en derecho". Esta afirmación es engañosa, ya que el diezmo no se suprime, sino que cambia su titular para proceder a cobrarlo el propio Estado.

Tras lo expuesto, es fácil verificar cómo el punto de inflexión que muestra el cambio con el sistema anterior lo constituye la reforma del diezmo¹⁰⁷, principal fuente de financiación de la Iglesia hasta entonces. De forma que la contribución del diezmo pasará ahora a ser controlada por el Estado, mediante el Decreto de las Cortes de 16 de julio de 1.837 en el que se manda que se cobren en el presente año decimal todos los derechos que componían la contribución conocida hasta ahora con el nombre de diezmos y primicias¹⁰⁸. En el articulado se recoge expresamente que *"todos los derechos que componían la contribución conocida hasta ahora con el nombre de diezmos y primicias, ... se declara que todos los productos de esta contribución, cualesquiera que sea su clase y aplicación, pertenecen exclusivamente al Estado"*.

¹⁰⁵. Entre otros, véase Canales, E., *Decadencia y abolición de los diezmos en España*. Barcelona, 1.981.

¹⁰⁶. *Diario de Sesiones de las Cortes*, p. 1687.

¹⁰⁷. Sobre la reforma del Diezmo, entre otros, véase, Cuenca Toribio, J. M^a., *La Iglesia Española ...*, cit. pp. 61-68.

¹⁰⁸. *Colección de ... (desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.837)*, cit. pp. 37-40.

Tras la retirada del diezmo y otras fuentes de financiación, el Estado deja en manos del clero otros productos mediante la Orden de 19 de abril de 1.838 por la que se declara que los productos de los bienes pertenecientes a memorias, obras pías, patronatos, etc ..., deben corresponder a las juntas diocesanas¹⁰⁹. Esta disposición deroga la legislación anterior que atribuía estos rendimientos al Estado, pero en todo caso, se trata de rendimientos de menor entidad que los que disfrutaba por los diezmos.

Más adelante el Gobierno se contradirá en estas medidas, procediendo de nuevo a instaurar un diezmo algo particular. En cuanto a los diezmos, se fue autorizando su cobro en sucesivas disposiciones de 1.837, 1.838 y 1.840¹¹⁰. No hay que olvidar que el antiguo sistema de diezmos producía también de forma directa o indirecta importantes ingresos a la Hacienda Real¹¹¹.

En todo el período del Gobierno liberal-progresista se muestra viva la polémica entre abolicionistas y defensores del diezmo eclesiástico¹¹².

Pero en todo caso, hay que recordar que no sólo se retira la financiación a través del diezmo a la Iglesia Católica, sino que también se han desamortizado sus bienes, de forma que las rentas que pudiera recibir en virtud de esos concepto ya no existen, de suerte que no tiene posibilidad alguna de supervivencia si no es a través de una financiación estatal. Esta financiación será la implantada con el texto constitucional de 1.837.

¹⁰⁹. *Colección de ... (1.838)*, cit. pp. 169-170.

¹¹⁰. En este sentido, véase, entre otros, Tomás y Valiente, F., *El marco político ...*, cit. p. 85.

¹¹¹. Santillán, R., *Memorias (1.815-1.856)*, Pamplona, 1.860. Vol. I. p. 160.

¹¹². González Armendia, J.R., *Sistemas históricos de dotación ...*, cit. p. 52.

Más interesante que el estudio del diezmo¹¹³, resulta el análisis del desarrollo efectivo del mandato constitucional de financiación del culto y el clero que se lleva a cabo por las leyes que a continuación examinamos:

2.2 LEY DE 21 DE JULIO DE 1.838 MANDANDO LLEVAR A EFECTO EL PROYECTO DE LA LEY PROVISIONAL PARA LA DOTACIÓN DEL CULTO Y CLERO

Esta ley parte, en líneas generales, de los principios ya señalados en el Real Decreto de 16 de diciembre de 1.837¹¹⁴. Estos eran:

-promover la supervivencia de la Iglesia y sus ministros, pero desde la moderación.

¹¹³. Para el estudio del diezmo, entre otros, véase Martín Niño, J., La abolición del Diezmo y el sistema tributario de 1.845, en *Estudios de Hacienda de Ensenada a Mon.* Madrid, 1.984. pp. 373-385.

¹¹⁴. Real Decreto de 16 de diciembre de 1.837 creando una junta encargada de presentar un proyecto de ley para el arreglo del culto y de sus ministros. (*Colección de ... -desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.837-*, cit. pp. 409-410). Hay que traer a colación, como precedentes de esta norma, la creación de las Juntas para el arreglo del clero, y sobre todo la Comisión de Negocios Eclesiásticos. (*Diario de Sesiones de las Cortes*, Tomo I, Sesión de 5 de enero de 1.837, p. 894, Otras referencias en la misma fuente, pp. 33, 127, 594, etc). De la creación de dicha Junta y Comisión nacerá un proyecto de reforma del clero, presentado por el Secretario de dicha Comisión, el Sr. Joven Salas, aunque existió siempre controversia dentro de esta Comisión. Como prueba, hay que constatar que la intervención registrada inmediatamente después de su presentación es la del Sr. Esquivel, miembro también de la Comisión, en la que señala que "las Cortes habrán podido observar que dicho proyecto no está firmado ni por el Sr. Santaella, ni por él, dada su disconformidad con el proyecto", así de los 9 miembros que componían dicha Comisión, firmaron sólo 7 dicho proyecto. (*Diario de Sesiones de las Cortes* de fecha de 21 de mayo de 1.837, pp. 3547-3548). El señalado Proyecto de Ley para la reforma del clero, aparece recogido inmediatamente después mediante (apéndice al anterior número 203, cit. pp. 3549-3556).

-reducir el número de sus ministros, de forma que esté en relación con las necesidades del pueblo.

-reforma gradual y no traumática.

Para conseguir estos fines se creó en este Real Decreto otra nueva Junta encargada de llevar a un cuerpo legal estos principios¹¹⁵.

La Junta puso en manos del Gobierno sus resultados, que fueron presentados a las Cortes y tras las pequeñas modificaciones introducidas por éstas, se constituyó la primera ley provisional para la dotación del culto y el clero.

La nueva financiación diseñada por la Constitución comenzó su vigencia de forma provisional mediante la Ley de 21 de julio de 1.838 mandando llevar a efecto el proyecto de la ley provisional para la dotación del culto y clero¹¹⁶.

¹¹⁵. Resulta muy significativo, por lo que representa que en una ley votada en Cortes se establezca como exposición de motivos, la objeción de conciencia del monarca con respecto a su contenido normativo. Así literalmente el preámbulo de este Real Decreto señala: "*Movida por razones a que mi convicción no ha podido resistir, he creído conveniente al bien público no dar mi sanción a la ley votada por las últimas Cortes para el arreglo del clero. Pero apreciando como es debido los motivos que las Cortes tuvieron para procurar ese arreglo, muy conforme con el voto casi general de que se asegure la dotación del culto y de sus ministros sin dejarlos expuestos al abandono por accidentes que puedan prevenirse, moderándolo sin embargo de modo que no ofrezca ni el espectáculo de una opulencia tan repugnante al espíritu de la Iglesia como al triste estado de la riqueza pública, ni señal humillante de la indigencia que desautoriza y degrada; deseosa además de que el número de ministros se ponga en la conveniente relación con las necesidades de los fieles, que se determinen sus cualidades y circunstancias relativas habida conservación al bien de la Iglesia y el Estado. ...*".

¹¹⁶. *Colección de ... (1.838)*, cit. pp. 321-323.

En sus disposiciones se trataba de regular de forma minuciosa las cantidades que recibirían cada una de las distintas dignidades eclesiásticas, estableciendo expresamente una autorización a favor del gobierno para que incrementase dichas cantidades en razón a los mayores gastos según las diferentes localidades. A modo de ejemplo conviene señalar que para los curas párrocos la dotación presupuestaria era de entre 3.300 y 4.000 reales.

Se contenían incluso cláusulas encaminadas a asegurar la percepción de las cantidades reseñadas para cada dignidad. Se señalaba expresamente: "No se aplicará ni extraerá de una Diócesis a otra el importe del diezmo adeudado en ella mientras no esté cubierto el mínimo de las dotaciones y hayan percibido su parte los demás interesados en el Diezmo, ...".

A nuestro juicio, resultaba más importante la última disposición que contenía dicha ley, mediante la cual se dispuso que "el Gobierno, de acuerdo con los ordinarios, formará a la mayor brevedad posible los aranceles de derechos parroquiales"; estableciendo así la colaboración entre Gobierno e Iglesia Católica, en la determinación del precio de los servicios eclesiásticos¹¹⁷.

¹¹⁷. En cuanto a la formación de los "aranceles eclesiásticos", hay que recalcar que se componían por el clero y se aprobaban por el Ministerio de Gracia y Justicia, quien tenía funciones fiscalizadoras y decisorias.

2.3 LEY RELATIVA A LA DOTACIÓN DEL CULTO Y EL CLERO DE 16 DE JULIO DE 1.840

La siguiente disposición en el tiempo fue la Ley de 16 de julio de 1.840 relativa a la dotación del culto y el clero¹¹⁸, que trata de asegurar el sostenimiento económico a través de varias alternativas. Se estableció tanto la atribución directa de una cantidad de dinero por parte del Estado, como otras vías de financiación indirectas que sólo consistían en optimizar los pocos recursos que todavía quedaban en manos de la Iglesia, los que pudieran ser generados por ésta en el cumplimiento de su ministerio.

Las mencionadas vías indirectas a que hacía referencia esta ley, aparecieron reguladas de forma más exhaustiva en la Instrucción de 25 de julio de 1.840 para la observancia de la ley de 16 de Julio de 1.840, sobre dotación del culto, clero y establecimientos piadosos y de la beneficencia¹¹⁹.

¹¹⁸. *Colección de ... (1.840)* , cit. pp. 243-245.

¹¹⁹. *Colección de ... (1.840)*, cit. pp. 252-267. Sobre la intención de la Ley, y su posterior desarrollo a través de la señalada Instrucción, sirva citar los distintos Capítulos de ésta, como ejemplo de sus pretensiones: Capítulo I, De las Juntas Diocesanas. Capítulo II, De los Contadores. Capítulo III, De la Administración de los Bienes y Rentas de las Iglesias, Clero, Corporaciones y Establecimientos Eclesiásticos. Capítulo IV, De la ejecución del artículo 3º de la Ley -Art. 3. La administración recaudación y distribución de todos los productos que han de aplicarse a las obligaciones de cada Diócesis, estará a cargo de una Junta compuesta por representantes de las diferentes clases de perceptores en el acervo común y de un empleado del Gobierno en calidad de interventor-. Capítulo V, De las dotaciones del culto. Capítulo VI, del 4 por cien. Capítulo VII, De los ajustes alzados. Capítulo VIII, De los arrendamientos. Capítulo IX, De la distribución de la masa común. Instrucción para la Observancia de la ley de 16 de julio de 1.840 sobre dotación del culto, clero y establecimientos piadosos y de beneficencia.

Estos eran, por una parte, la continuidad sólo en la posesión y goce de sus bienes y fincas sin poder enajenar éstas últimas, ni tan siquiera empeñarlas sin autorización del Gobierno. Por otra parte, se les permitía continuar con los derechos de estola u obvenciones establecidos; las primicias conforme a las costumbres debiendo ser destinado este importe al sostenimiento del culto. También seguían recibiendo un 4 por cien de los frutos de la tierra y los productos de los ganados que estaban sujetos a la antigua prestación decimal, pero se especificaba que su reparto, se haría proporcionalmente, conforme con la ley de 21 de julio de 1.838 y la Real Orden de 2 de octubre de 1.838 aclaratoria de la Ley de 21 de julio del mismo año.

Se regulaba igualmente que las memorias, obras pías, aniversarios y misas que debían cumplirse por las comunidades religiosas suprimidas, y estén impuestas sobre fincas que aquellas poseían, se cumplirán en la Iglesia parroquial en cuya feligresía se hallen las fincas o bienes afectos a las mismas, y sus poseedores satisfacerían a dichas iglesias lo que debieran satisfacer a las comunidades que estaban obligadas a cumplirlas.

También se consignaban, de modo pasajero, los productos del ramo de la Cruzada al pago exclusivo de las pensiones alimenticias de las religiosas. Es fácil comprobar a través de numerosas normas como se daba preferencia en el cobro de sus asignaciones a las religiosas en detrimento de los miembros masculinos del clero¹²⁰.

¹²⁰. En este sentido y a modo de ejemplo, véase la Real Orden y Circular de 2 de febrero de 1.840, de la Dirección General de Rentas y Arbitrios de Amortización, acerca del pago de las pensiones de las comunidades de religiosas. La exposición de motivos de la propia Orden recoge que: "Queriendo S.M. la Reina Gobernadora aliviar la situación en que se encuentran las comunidades de religiosas por el considerable atraso con el que perciben sus asignaciones dispensándolas el auxilio compatible con otras necesidades públicas de perentoria urgencia ..." (*Ibidem*. p. 71-73).

En desarrollo de las anteriores disposiciones establecidas en la ley, se aprobaron otras disposiciones de jerarquía menor, como por ejemplo la Real Orden de 6 de febrero de 1.840, relativa a la cobranza del diezmo y exención declarada a favor de los bienes del clero secular y de las fábricas de las iglesias de los impuestos ordinarios y extraordinarios¹²¹.

Más que el texto dispositivo, interesa la disputa que recoge la exposición de motivos de la Orden, donde señalaba por una parte a la provincia de Zaragoza y más concretamente a su Diputación Provincial, y por otra a la Junta Diocesana de Tarazona; en virtud de la autorización que por la Real Orden de 17 de julio de 1.838¹²², se concedió para celebrar conciertos particulares con los Ayuntamientos, ajustando en una partida alzada el pago del impuesto decimal. Se continuaba afirmando que el cumplimiento de esta Orden, fue claro en los pueblos pequeños, pero no así en los de considerable vecindario, que se obstinaron en incumplirla. Además se señalaba expresamente que el clero y sus ministros se encontraban en la más espantosa miseria, con el riesgo evidente de cierre de muchos templos. Finalmente, aclaraba que el conflicto señalado de la ciudad de Zaragoza no era el único mal que sufría el clero, sino que el Ayuntamiento por disposición de la Diputación Provincial de Zaragoza, había obligado a que las fincas del propio clero y a que las fábricas de las iglesias contribuyeran a los impuestos ordinarios y extraordinarios indistintamente.

¹²¹. *Colección de ... (1.840)* , cit. pp. 75-78.

¹²². Real Orden de 17 de julio de 1.838 declarando que las juntas diocesanas debn presentar al tribunal mayor de cuentas las de los fondos que hayan integrado en su poder para satisfacer las pensiones señaladas a los secularizados, exclaustrados y conventos subsistentes de ambos sexos, y para atender a sus gastos interiores. (*Colección de ... (1.838)*, cit. pp. 316-317).

El Gobierno, encabezado por su ministro moderado el Sr. Arrazola quiso acercarse lentamente a la Santa Sede para ganarse la confianza del episcopado y del clero con esta ley¹²³, que fue publicada el 16 de julio de 1.840, pero no fue así.

2.4 LEY DE 31 DE AGOSTO DE 1.841 RELATIVA A LA DOTACIÓN DEL CULTO Y EL CLERO

La medida más importante durante 1.841 que se debe señalar como la tercera ley en el tiempo en la regulación de la dotación, fue la Ley de 31 de agosto de 1.841 relativa a la dotación del Culto y el Clero¹²⁴, que fue acompañada de dos anexos. En el primero se dispone una distribución económica para cada provincia, y en el segundo se contiene la Instrucción para llevar a efecto dicha ley.

Dicha Instrucción regulaba los pequeños detalles que despreciaba la ley, sirviendo, en todo caso, como modelo del espíritu normativo de la nueva ley. En este sentido, y a modo de ejemplo, valga mencionar sus diversos capítulos: Capítulo I Repartimiento de la contribución de culto y clero; Capítulo II De la recaudación; Capítulo III Contabilidad y Recaudación.

Se trató de la ley más importante promulgada para regular la financiación del culto y el clero, y aún así, estuvo vigente algo menos de cuatro años.

¹²³. Cárcel Ortí, V., El liberalismo en el poder 1833-68, en *La Historia de la Iglesia en España*, dirigida por García-Villoslada, R., Madrid, 1.979. p. 145.

¹²⁴. *Colección de ... (1.841)* , cit. pp. 584-597.

Entrando en el análisis del nuevo texto, era una ley que, tras derogar la anterior de 1.840, se puede calificar como exhaustiva, ya que regulaba con gran detenimiento las cantidades económicas para el sostenimiento del clero y del culto¹²⁵.

En primer lugar, la ley señalaba los gastos para el mantenimiento de las parroquias y de sus anejos, señalando para este sustento los derechos de estola y pie de altar¹²⁶, prescribiendo expresamente que la cantidad que faltara por abonarse se haría efectiva por los vecinos del pueblo que tuvieran allí su residencia, por reparto proporcional conforme con sus haberes.

En segundo lugar, se determinaban los gastos propios de las catedrales, colegiatas y abadías, además de los necesarios para su reparación, conservación y administración, así como los gastos de los individuos que las integraban, afirmando que se cubrirían con los derechos de estola y pie de altar, junto con la contribución general de culto y clero que establecía la ley.

¹²⁵. En esta ley se contienen dos apéndices, señalados con los numeros 1 y 2. En el primero se desglosan las cantidades económicas que corresponden a cada provincia de España, y en el segundo se contiene una instrucción desarrollando ampliamente la ley: el repartimiento de la contribución, la recaudación y la contabilidad, y la distribución.

¹²⁶. El Gobierno, a través de su Ministerio de Gracia y Justicia, decide regular prácticamente todo lo concerniente con el clero. Así se aprueba la Orden del Regente del Reino de 29 de septiembre de 1.841 mandando formar nuevos aranceles de derechos de estola y pie de altar. En dicha orden se recoge la obligación del clero de "formar una nueva lista de precios", acompañando la anterior, para que sea aprobada por el Ministerio de Gracia y Justicia. (*Colección de ... -1.841-*, cit. pp. 674-675).

En tercer lugar, estaban las asignaciones personales de los ministros de la Iglesia, que se constituirían por los derechos de estola y pie de altar que a cada dignidad correspondiera. Los eclesiásticos que tuvieran algún otro tipo de renta dejarían de disfrutarla, pasando todos a disfrutar una renta fija, tal y como se estableció en la Ley de 21 de julio de 1.838.

En cuarto lugar, se aumentaba la dotación parroquial con las memorias, obras pías, aniversarios y misas que debieran cumplirse por las comunidades religiosas suprimidas¹²⁷.

Por último, se obligaba a confeccionar una estadística con el número de eclesiásticos existentes en la península y en las islas adyacentes, señalando el cargo de cada uno y la dotación fija que a cada uno correspondía (art. 17). Este deseo de usar la estadística se puede decir, sin cautelas, que sólo quedó en deseo. Aunque bien es cierto fue generador de numerosas disposiciones normativas de rango menor que lo desarrollaban. En este sentido, sirva como ejemplo la Orden de la Regente del Reino de 19 de noviembre de 1.841 sobre formación de estados o inventarios de los bienes del clero secular, a fin de recabar toda la información posible acerca de los bienes correspondientes al clero secular¹²⁸.

Era tan importante la preocupación de las Cortes por conseguir el buen fin de esta ley, que se llegó a autorizar al ejecutivo para que dictara cuantas normas estimara oportunas y resolviera las dudas que se suscitaban para obtener la perfecta ejecución de la ley (Art. 14).

¹²⁷. Esta disposición no es novedosa; ya se recogía en la ley anteriormente señalada.

¹²⁸. *Colección de ... (1.841)*, cit. pp. 797-807.

En este período el presupuesto de la contribución general del culto y del clero quedó constituido por la cantidad de 105.406.412 rs, que se redujo en 33.525.605 rs., importe que resultaba a cargo de los respectivos pueblos.

A fin de cubrir este presupuesto se autorizó al Gobierno para que exigiera esas cantidades, pero con la expresa condición de que la cuota que fuera exigida al comercio y a la industria estuviera en proporción de uno a cuatro con la riqueza territorial y pecuaria. El reparto de cada pueblo en cada provincia se ejecutó por las Diputaciones Provinciales, señalando éstas los pueblos donde según la costumbre fuera posible admitir como dinero en pago granos y legumbres, pero sin que en ningún caso excediera de la mitad del importe.

Esta ley resultó, a la postre, una de las más importantes durante la vigencia de la Constitución de 1.837, no sólo por su regulación minuciosa que continuó en vigor incluso con las posteriores leyes de financiación, sino también porque se elaboró abundante legislación para su desarrollo.

Como ejemplos estaban: la Orden del Regente del reino de 30 de septiembre de 1.841 relativa a las dotaciones del clero secular¹²⁹. En dicha norma se intentaron fijar los ingresos del clero secular. Para ello, se partió de los contenidos en la ley de 1.838 como ingresos mínimos. Se contenían una serie de operaciones matemáticas donde, a través de las cuales, se llegaba a determinar el sueldo de las distintas dignidades del clero secular. Dichas operaciones matemáticas consistían en calcular cuáles habían sido sus rentas en frutos y en dinero durante los años 1.829 a 1.833, entendiendo por tales los recibidos por la entrega de cereales, vino, aceite, hilos, rentas económicas¹³⁰. Calculada así dicha

¹²⁹. *Colección de ... (1841)*, cit. pp. 676-678.

¹³⁰. Merecen destacarse estas operaciones matemáticas, que comprendían no sólo las
(continúa...)

cantidad, era necesario actualizar el resultado a cantidades del año 1.841, y después dividirlo entre cinco, para según señalaba la ley, "sacar el año común".

Otro ejemplo muy interesante lo constituyó la Orden del Regente del Reino de 3 de octubre de 1.841 sobre formación de presupuesto de gastos del culto¹³¹, mediante la cual se desarrolló la autorización que ostentaba el ejecutivo y dió traslado a la Iglesia para que examinara el presupuesto para el año siguiente y en su caso presentara las notas u observaciones que tenga convenientes. Pero siempre en atención del culto y de los fondos públicos.

Siguiendo con la gran dificultad práctica en el cobro de las contribuciones que la ley señalaba, es otra clara muestra la Resolución de 15 de septiembre de 1.842 mandando se excite el celo de los intendentes para que se active el cobro de la contribución de culto y clero¹³². Esta Orden exponía el problema de la lentitud y flojedad con la que se procedía en el presente asunto, y amenazaba con severos y ejemplares castigos a todos los que por apatía o falta de celo no prestaran de forma diligente el servicio al que estaban obligados en derecho.

Para que la Iglesia fuera recibiendo las contribuciones señaladas por la ley de financiación, se promulgaron por el Ministerio de Gracia y Justicia¹³³ diversas normas jurídicas ordenando dichos pagos a las Diputaciones Provinciales, que,

¹³⁰(...continuación)

retribuciones dinerarias, sino las retribuciones en especie, siendo de gran importancia las reglas para la valoración de las rentas en especie, sin olvidar que esto se produce en el Siglo XIX.

¹³¹. *Colección de ... (1841)* , cit. pp. 689-690.

¹³². *Colección de ... (desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.842)* , cit. pp. 308-309.

¹³³. Resolución de 22 de septiembre de 1.842, mandando que se efectúe el pago del segundo tercio para cubrir las atenciones del culto y del clero. Disposiciones como esta se produjeron 4 por año. (*Ibidem.* pp. 340-341).

como se ha señalado, eran los órganos encargados de satisfacer dichas asignaciones.

La novedad más importante de esta ley estuvo constituida por lo que hoy llamamos "impuesto religioso". Aunque aparecía señalado de forma algo confusa en la ley, ("... Lo que faltare para cubrir estos gastos, según las prácticas religiosas observadas en cada pueblo, se completará por un reparto entre todos los vecinos que tengan residencia en el mismo pueblo en proporción a sus haberes¹³⁴"), se puede verificar aún con más nitidez en las disposiciones legales aprobadas para su desarrollo, como fueron, entre otras: la Resolución de 1 de marzo de 1.843 sobre el modo de exigir a los empleados la contribución general del culto y del clero¹³⁵. Se aprecia como recaía la obligación clara y específica en los empleados de contribuir proporcionalmente por la parte de sus sueldos que percibían, deducidos los descuentos, y no por la totalidad de los mismos. Se trataba de una retención directa de sus sueldos para contribuir al sustento del culto y del clero. Igualmente la Orden de 22 de abril de 1.843 para que los empleados de la empresa del arriendo de la sal no paguen más contribución que la del culto y clero¹³⁶.

Pero sin duda el ejemplo más claro de "impuesto religioso" lo encontramos en la Real Orden de 11 de octubre de 1.842 sobre el modo de exigirse a los empleados la contribución general del culto y el clero, que establece la Ley de 14 de agosto del año último¹³⁷. Orden aprobada por el Ministerio de Hacienda, donde expresamente se contenía que los empleados contribuirían proporcionalmente por

¹³⁴. Art. 1 de dicha ley.

¹³⁵. *Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.843)*, cit. pp. 88-90.

¹³⁶. *Ibidem.* pp. 181-182.

¹³⁷. *Colección de ... (desde 1 de julio hasta fin de diciembre 1.842)*, cit. pp. 387-388.

la parte de sus sueldos que percibiesen, deducidos los descuentos y no por la totalidad de los mismos sueldos. La obligación de recaudar recaía en las Diputaciones Provinciales, sin embargo los Ayuntamientos tenían la obligación de facilitar a los intendentes de provincias el censo de los porcentajes aplicables a los sueldos de los empleados.

Constatada la ineficacia de la ley sobre financiación del culto y del clero, el Gobierno siendo consciente de este problema, dictó la Real Resolución de 20 de julio de 1.842 nombrando una comisión que propusiera las mejoras convenientes sobre subsistencia del clero y gastos del culto¹³⁸. Las conclusiones de dicha comisión se elaboraron dentro del Ministerio de Hacienda, para después someterlas al Parlamento en la siguiente legislatura.

La preocupación del Gobierno por conseguir financiar el culto y el clero es fácil constatarla a través de las distintas disposiciones emanadas de los distintos Ministerios. En este sentido, se debe destacar, entre otra, la siguiente disposición: la Resolución de 23 de septiembre de 1.842 mandando se atiendan con preferencia de los primeros fondos las obligaciones del culto divino¹³⁹.

Pero ante estas normas producto del empeño del Ejecutivo, no se puede olvidar la realidad objetiva de aquel momento histórico, donde disposiciones como la citada quedaban en meras estipulaciones de voluntad sin cumplimiento real¹⁴⁰.

¹³⁸. *Ibidem.* p. 70.

¹³⁹. *Ibidem.* p. 346.

¹⁴⁰. Vid la Resolución de 14 de octubre de 1.842 (promulgada por el mismo Ministerio, en algo menos de un mes que la anterior), dada para que a las consignaciones de culto y clero se les de la preferencia que les corresponda, y sean satisfechas con toda puntualidad. (*Colección de ... -desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.842-*, cit. pp. (continúa...))

El Ministerio que mayor número de normas elaboró fue el Ministerio de Gracia y Justicia. Algunas de ellas eran de importancia menor y se pueden denominar como de simple administración o de mero trámite¹⁴¹.

2.5 LEY DE 23 DE MAYO DE 1.845 DE DOTACIÓN DEL CULTO Y MANTENIMIENTO DEL CLERO

Casi finalizando la vigencia del texto constitucional se modificaron las disposiciones reguladoras de la financiación del culto y el clero, en conformidad con las nuevas ideas del ejecutivo. Así se aprobó Ley de 23 de mayo de 1.845 de dotación del culto y mantenimiento del clero¹⁴².

Se trató de una ley, que poseía como característica principal, la intención de asegurar de forma voluntariosa a la Iglesia Católica el recibo de sus asignaciones, pero dejando a salvo gran número de disposiciones todavía vigentes de la antigua ley de 1.838, y la de 1.841. Continuaban vigentes, entre otras, la distribución de la renta en función de la dignidad eclesiástica, conforme al modelo anterior de 1.838, o el impuesto religioso de 1.841.

¹⁴⁰(...continuación)
394-395).

¹⁴¹. Entre otras, la Circular de 2 de marzo de 1.841 a los diocesanos previniendo que se adopten medios para anticipar las cantidades necesarias para que se celebren las festividades de Semana Santa con el decoro y solemnidad acostumbrados. (*Colección de ... -desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.842-*, cit. pp. 85-87). Esta orden será reiterada por el Ministerio de Gracia y Justicia todos los años durante la vigencia del texto constitucional.

¹⁴². *Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.845)*, cit. pp. 184-185.

De cara al análisis de la propia ley, es necesario comenzar señalando la prestación económica que disponía para el sostenimiento del culto y el clero en el año 1.845, que consistió en la cantidad de 159.000.000 rs.

Dicha ley designaba las fuentes necesarias para la obtención de esa cantidad económica, señalando a este fin, en primer lugar, los productos que pertenecieron al clero y que no habían sido vendidos o bien, aquellos que en metálico recibiría el propio Estado como consecuencia de las enajenaciones de los bienes del clero secular durante el año 1.845, así como los productos de la Santa Cruzada¹⁴³.

Tras la suma anterior, el presupuesto se cubrirá mediante una partida propia incluida dentro de los Presupuestos Generales del Estado¹⁴⁴.

Esta ley contenía novedades muy importantes, con respecto a sus predecesoras, que se dirigían a lograr el funcionamiento del sistema, intentando anticiparse a las insolvencias, y siempre tendentes a asegurar a la Iglesia el recibo de sus asignaciones. Dichas novedades eran:

¹⁴³. Estos capítulos se consideran a efectos de la ley como ingresos propios, pero de cualquier forma, no constituyen disposiciones legislativas novedosas. Ya se habían aportado en las leyes analizadas.

¹⁴⁴. Aunque, como se ha señalado, ya se habían aprobado diferentes Leyes de Presupuestos de Gastos e Ingresos, es en este año 1.845 donde se señala por primera vez con el nombre de Ley del Presupuesto de los gastos y de los ingresos del Estado. En él, se recogían por partidas más o menos explícitas las relaciones de ingresos y gastos del Estado, detallando los diversos capítulos. Como ejemplo señalar algunos capítulos de gastos, dentro de la partida señalada con el nombre de INSTRUCCIÓN PÚBLICA:

Consejo de Instrucción pública	45.400 rs.
Junta de centralización	181.100 rs.
Universidades	4.020.556 rs.
Instrucción primaria	662.555 rs.
Colegio normal de ciegos	26.000 rs.
Etc... .	

En primer lugar, el aseguramiento de la cantidad restante, una vez retraídos los ingresos especificados como propios por la ley, mediante una póliza bancaria¹⁴⁵.

En segundo lugar, se indicaban las contribuciones públicas como garantía suplementaria y mancomunada para cubrir, en su caso, las partes restantes, y nombrando al clero (de forma genérica) verificador de la recaudación, administración y distribución de los productos de las contribuciones públicas. Esta función "fiscalizadora" no quedó especificada en la ley, sino que se remitió a una posterior regulación.

Resulta muy significativo y necesario para entender el espíritu de esta ley destacar las medidas que se tomaron para asegurar el cobro de las asignaciones, donde no sólo el propio Estado se obligó mediante una ley promulgada por Cortes a firmar un crédito con el Banco de San Fernando como garantía, sino que llegó a extremos hoy increíbles, como habilitar al clero para que en su caso pueda incluso verificar la recaudación, administración y distribución de los ingresos que recibía el Estado.

Las cautelas para asegurar el cobro no sólo fueron las constatadas en la ley, sino que incluso a través de normas jurídicas de rango inferior se elaboraron otras, como la Orden de 23 de mayo de 1.845 disponiendo la creación de una

¹⁴⁵. En este sentido, se aprobó la Orden de 31 de Mayo aprobando el convenio celebrado con el Banco de San Fernando para abrir un crédito de 100 millones con destino al culto y al clero. (*Colección de ... -hasta junio 1.845-*, cit. pp. 277-279).

junta de cinco individuos para que entienda en todo lo relativo a la ejecución de la Ley de dotación del culto y el clero¹⁴⁶. Dicha comisión se formó por tres eclesiásticos y dos seglares¹⁴⁷.

A fin de entender la importancia de la dotación económica aprobada por las Cortes para la Iglesia, se debe señalar la relación de gastos del Estado consignada en el Presupuesto. Además de verificar el monto total de la partida presupuestaria para el mantenimiento del culto y el clero, se puede comparar con las restantes partidas, de forma que se aprecia fácilmente su importancia. Aparece recogida en la Ley 23 de mayo de 1.845 sancionando la Ley del Presupuesto de los gastos y de los ingresos del Estado¹⁴⁸:

Capítulo 1º Dotación de la Casa Real	43.500.000 rs.
Capítulo 2º Gastos de los cuerpos colegisladores	1.142.300 rs.
Capítulo 3º Sueldos y gtos. del Ministerio de Estado	44.642.300 rs.
Capítulo 4º Idem del de Gracia y Justicia	10.213.220 rs.
Capítulo 5º Idem del de Gobernación de la Península	122.610.491 rs.
Capítulo 6º Idem del de Guerra, y guardia civil	322.334.007 rs.
Capítulo 7º Idem del de Marina, Comercio, Gobernación de Ultramar	88.422.681 rs.

¹⁴⁶. *Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.845)*, cit. p. 260.

¹⁴⁷. Si bien se menciona que el número de miembros de dicha junta será de cinco, en realidad son sólo cuatro los miembros designados mediante una Orden de 23 de mayo de 1.845 (es decir, la misma fecha en que se creaba la comisión), la que señala a D. Antonio Posada Rubin de Celis, -arzobispo electo de Toledo-, como presidente, y como vocales a D. Luis López Ballesteros, -marqués de Miraflores-, D. José Alcántara Navarro, -comisario general de la Cruzada- y D. Joaquín de la Cortina, -Vicario eclesiástico de Madrid-. (*Ibidem.* pp. 261).

¹⁴⁸. *Ibidem.* pp. 186-256.

Capítulo 8º Idem del de Hacienda	352.755.178 rs.
Capítulo 9º Idem del de caja de amortización	99.115.629 rs.
Capítulo 10º Obligaciones del clero secular y de las monjas ¹⁴⁹	125.495.447 rs.

Resulta igualmente interesante la comparación de dichas partidas entre sí, ya que el presupuesto del Capítulo 10º, Obligaciones del clero secular y de las monjas sólo es superado por los gastos de los Capítulos 6º y 8º, gastos del Ministerio de Guerra y Hacienda.

En desarrollo de esta ley se dictarán varias normas jurídicas. Entre otras, la Orden de 26 de mayo de 1.845 acordando varias disposiciones relativas a la dotación del clero y clasificación de los destinos parroquiales¹⁵⁰. El contenido de esta Orden se puede resumir en dos extremos. En primer lugar, la clasificación de las parroquias conforme se establecía en la Ley de 21 de julio. Es decir, de entrada, de primer ascenso, de segundo ascenso y de término. En segundo lugar, se establecían diferentes dotaciones para los distintos eclesiásticos adscritos a las señaladas parroquias, conteniendo expresamente que comenzaría a regir desde el primer día del mes de enero del año actual.

Hay que advertir que esta Ley fue la última norma durante la vigencia del texto del 37. Pero el nuevo texto constitucional continuará con este modelo de financiación, aunque el nuevo texto moderado, tendrá otros efectos sobre este sistema, afianzándose el Concordato de 1.851, como marco de solución a gran

¹⁴⁹. Este presupuesto es sólo la cantidad que desembolsará el Estado, ya que el resto de la asignación se conceptúa como ingresos propios del clero. Así dentro de la cantidad total 159.000.000.rs. se puede observar como los ingresos propios suponen en torno a un 21 % y la asignación estatal supone el 79 % restante.

¹⁵⁰. *Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.845)* , cit. pp. 263-266.

parte de las desavenencias ocurridas con ocasión de la implantación de este nuevo sistema, y como reflejo a su vez de la desamortización.

De cualquier forma, a partir de este texto legal el grueso de la dotación estatal para el culto y el clero se consignó en el impuesto más importante con que contaba el Estado en su incipiente sistema impositivo: la Contribución territorial. En realidad existieron estudios muy interesantes efectuados por los distintos ministerios, estudios que en algunas ocasiones aparecen adornando nuestra literatura jurídica dentro de los preámbulos de nuestro Derecho. Tal fue el caso de una norma de 1.846¹⁵¹, que en su exposición de motivos recogía datos muy interesantes sobre la cuantía del diezmo y la de la contribución territorial. En realidad se comparaban ambas magnitudes en su capacidad para recaudar medios económicos tanto para las arcas del Estado como para la financiación de la Iglesia.

Literalmente: "Sólo el valor del diezmo a principios de este siglo, según documentos oficiales que el Gobierno tiene en su poder, presenta un producto líquido de 2.176.000.000 reales, que unidos 525, también líquidos, en que se estimaban hace treinta años los alquileres de las casas de toda la península, arrojan una masa imponible de 2.710.000.000, cuyo 10 por 100 excede en 20.000.000 al cupo total de dicha contribución. ...

¹⁵¹. Real Orden de 28 de Octubre de 1.846 estableciendo reglas para que no se imponga mayor cuota que la del diez por ciento anual del producto líquido de sus bienes a los hacendados forasteros y lo mismo a las fincas rústicas y urbanas de ambos cleros (Colección legislativa ... -cuarto trimestre 1.846-, cit. pp. 72-76).

Sabido es además que el diezmo no revela ni puede revelar toda la importancia de la propiedad rústica, ya porque no de todas las tierras ni de todos los frutos se exigía, ni la cuota era igual en todas las partes, ya por las defraudaciones que se cometían aun en la época en que mejor se satisfacía esta prestación. Y si a esto se agrega:

1. La extensión asombrosa que se ha dado al cultivo en lo que va de este siglo.

2. Los grandes progresos de la agricultura.

3. La inmensa propiedad desamortizada en las dos épocas constitucionales, exenta de contribuciones, de la cual sólo las fincas rústicas y urbanas y los censos y foros de ambos cleros enajenados desde 1.836 y que faltan aun por enajenar, pero que son incluidos en los repartimientos, aumentan la masa imponible de dicha contribución en más de 123.000.000 de reales, que ofrecen al respecto del 10 por 100 una cantidad equivalente a la vigésima parte del cupo general de la contribución, o sea, 12.300.000 de reales, esto sin contar con el aumento de productos consiguientes bajo el dominio particular.

4. Que son otro aumento de la masa imponible sobre que recae esta contribución los terrenos no cultivados ni aprovechados por sus dueños, pero que pueden serlo dándoles una aplicación igual o semejante a la que se da a otros terrenos de la misma calidad en los respectivos pueblos.

5. Y por último, el vasto desarrollo que ha tenido la propiedad urbana por efecto de dicha desamortización y por la multitud de construcciones y mejoras que se ven por todas partes, queda indudablemente demostrada que aun suponiendo alguna desproporción de los cupos de la citada contribución entre

provincia y provincia, y que existe recargo comparativo en algunas, no sólo no puede en ellas exceder, bien distribuido el 10 por 100 del producto líquido de los dichos bienes, cultivo y ganadería, sino que ni llegar debe en pueblo alguno a ese tipo".

De suerte que tal y como hemos visto posteriormente, se trataba de instaurar el nuevo sistema impositivo de la contribución territorial pero bajo unos estudios previos, en función de las antiguas cuantías del diezmo, puesto que sería el Estado quien recibía esas aportaciones consiguiendo también cantidades suficientes para mantener a la Iglesia, al menos en teoría.

3. ENSEÑANZA

A lo largo de la historia, las diversas políticas de los gobiernos de distinto contenido político se han querido ver reflejadas siempre en la educación a través de la enseñanza.

Por lo que se refiere a las disposiciones legales que durante este período iban a regular la educación, hay que significar que básicamente la Real Orden de 29 de octubre de 1.836, aprobando el Plan General de estudios que seguía a continuación¹⁵², -cuyas disposiciones ya han sido citadas antes-, fue el texto que se aplicó durante la vigencia de este texto constitucional, puesto que las Cortes no fueron capaces de llegar a ningún acuerdo para su reforma, con lo cual los proyectos de 1.838 y de 1.841 se limitaron sólo a proyectos legislativos y discusiones en las Cámaras sin llegar a constituirse en textos de aplicación real

¹⁵². *Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora, ... 1.836*, cit. pp. 496-502.

en España.

La vigencia de ese cuerpo legal no evitó la aparición de algunas disposiciones sobre algunos aspectos concretos de la educación en nuestro país.

En esta época se puede apreciar la preocupación por crear una escuela primaria con unos principios definidos o, mejor dicho, con una serie de determinados valores. Para este fin se crearon las Comisiones de instrucción primaria. Un reflejo se contenía en la Real Orden de 18 de abril de 1.839¹⁵³, donde de alguna manera se puede observar la preocupación por la enseñanza y su concepto como servicio público¹⁵⁴. Es necesario señalar que el motivo de la

¹⁵³. Real Orden de 18 de abril de 1.839, comunicando el Reglamento que seguía de las comisiones de instrucción primaria. (*Colección de ... -1.839-*, cit. pp. 261-267).

¹⁵⁴. Con todas las reservas oportunas, considerar en esta época histórica a la enseñanza como un servicio público de carácter prestacional, quizá sea aventurado, pero en este sentido, es ilustrativo traer a colación la exposición de motivos de dicha Orden, en la que literalmente se contiene que: "La experiencia general de todos los países donde la educación pública prospera, ha mostrado que para que esta corresponda a la actual civilización europea, es preciso que los establecimientos destinados a la instrucción del pueblo estén siempre, en cuanto posible sea, a la vista del Gobierno, encargado y responsable de este ramo del servicio público, esencial a la felicidad de los gobernados, no conociéndose otro medio de dar a la enseñanza el impulso general, uniforme y sostenido que necesita para progresar".

Se puede destacar también la delegación de facultades para el cuidado de estas escuelas que la propia Orden dispone, utilizando sus mismas palabras por no perder dicha literatura jurídica, así (*reconociendo que es cierto que en la historia de España, desde muy antiguo, han estado las escuelas a cargo de los respectivos Ayuntamientos, como administradores naturales de los intereses del vecindario*): "Al Gobierno supremo, sin embargo, no le es dado el cuidar por sí, e inmediatamente, de cada uno de estos establecimientos, examinar de continuo su verdadero estado, conocerlo con exactitud, juzgar simultáneamente de las circunstancias en que se encuentran, y ocurrir a las necesidades de todos. Tiene que valerse, como en otros ramos, de agentes que le auxilien y pongan en estado de emplear su autoridad y sus medios con oportunidad y provecho. La naturaleza de este servicio, exige que tales agentes sean más bien corporaciones poco numerosas que individuos aislados; corporaciones en que se reúnan variedad de conocimientos y destinos, y hasta vocación especial en todos, o por lo menos en algunos de sus individuos. Ha de ser, por otra parte, un servicio debido al

(continúa...)

creación de dichas Comisiones aparecía reflejado incluso dentro de esta propia Orden.

Desde un punto de vista confesional, hay que señalar la convicción de las diversas Comisiones de que sólo una buena educación moral, religiosa, intelectual e industrial, podía disminuir los males que afligían a la sociedad de la época.

En otro extremo, siguiendo con lo dispuesto en dicha Orden, lo que se pretendía lograr era la escolarización de las clases sociales más desfavorecidas¹⁵⁵.

Remarcando la ya señalada preocupación del nuevo Gobierno constitucional por la educación¹⁵⁶ no sólo esta preocupación se daba por el contenido, sino también por el número, hacerla llegar a cuantas más personas

¹⁵⁴(...continuación)

convencimiento del bien que resulta, o a la satisfacción de contribuir a la felicidad de los demás. No es una obligación que deba imponerse a un empleado cualquiera. Se necesita otro móvil más poderoso que el de un deber limitado y ordinario para sacrificios de esta especie, es preciso que intervengan sentimientos más elevados, que se deban a la libre determinación de la voluntad, o que sean sacrificios propiamente espontáneos: más meritorios por lo mismo, y más dignos de la gratitud general".

¹⁵⁵. "Tratarán de establecer escuelas donde falten, a fin de que las clases más pobres puedan cultivar su razón hasta el punto necesario a todo el que vive en la sociedad civil; cuidarán de que los niños más destituidos de medios aprovechen la enseñanza, evitando a toda costa que permanezcan abandonados sin ninguna especie de preparación para mejorar su suerte futura o se habitúen a la mendicidad y a los vicios que la ociosidad produce y sostiene", (Real Orden de 18 de abril de 1.939 comunicando el reglamento que sigue de las comisiones de instrucción primaria, *Colección de ... -1.839-*, cit. pp. 261-267).

¹⁵⁶. Se llega a publicar incluso un Boletín oficial de Instrucción pública, mediante la Orden de 1 de enero de 1.841, donde se indica literalmente que "En la necesidad de promover eficazmente los adelantamientos de la instrucción pública y de llamar hacia este importante ramo la atención y los esfuerzos del país. la Regencia provisional del Reino ha juzgado conveniente la publicación oficial de un periódico exclusivamente destinado a este objeto. Para esta publicación se dispone que las administraciones de Correos y de la Imprenta nacional. prestarán a esta publicación iguales auxilios que para con la Gaceta del Gobierno. (*Colección de ... -1.841-*, cit. pp. 3-5).

mejor. Así, concurrían una serie de disposiciones creando centros de enseñanza tanto de educación primaria como secundaria en la práctica totalidad de las provincias de España¹⁵⁷.

Continuaba vigente en el ánimo del legislador el deseo de secularización de la cultura, o mejor dicho, el deseo de ponerla en manos del pueblo. Es interesante traer a colación lo señalado por la Orden de 22 de septiembre de 1.838 mandando formar bibliotecas públicas en las capitales de provincia para utilizar las riquezas literarias que contenían los conventos suprimidos¹⁵⁸.

Queremos señalar que la enseñanza de la disciplina eclesiástica, además de las colecciones canónicas en estudios universitarios dentro del campo del Derecho, se modificaba a través de la Resolución de 1 de octubre de 1.842 dando una nueva organización a la carrera de estudios de jurisprudencia¹⁵⁹. Así literalmente el Art. 5º: "El programa de enseñanza de esta carrera comprenderá con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores las asignaturas pendientes:

... Sexto curso: Historia y Disciplina eclesiástica general y especial de España, colecciones canónicas.

¹⁵⁷. Creación durante 1.841 de Institutos de segunda enseñanza en muchas provincias de España, por ejemplo en Burgos por la Orden de 10 de abril; en Sevilla por la Orden de 26 de marzo; en Albacete por la Orden de 15 de mayo; en Murcia y Cáceres por la Orden de 15 de mayo; etc ... (*Colección de ... -1.841-*, cit. pp. 262-263; 249-250; 320; 321-323. -Respectivamente-).

¹⁵⁸. Esta afirmación cabe señalarse a la vista del tenor literal de la propia Orden que recoge que *"han sido muchos los intentos reconoce que no se han logrado todavía los efectos deseados, por falta de locales convenientes o por la escasez de recursos para hacer frente a los gastos indispensables"*. En un intento de eficacia se sustituye a la comisión por el órgano competente de la universidad en las provincias que existiera. (Orden de 22 de septiembre de 1.838, *Colección de ... -1.838-*, cit. pp 468-469).

¹⁵⁹. *Colección de ... (desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.842)*, cit. pp. 358-367.

"La historia y disciplina eclesiástica los dos primeros meses; el resto del curso las colecciones canónicas, acompañando su estudio con los correspondientes títulos de las Partidas y de la Novísima Recopilación, y ampliando los conocimientos de los alumnos en la importante parte de la autoridad Real en los negocios de la Iglesia".

Es necesario reflejar expresamente que el especial interés descrito por la educación se manifestaba a través de una enseñanza de marcados rasgos confesionales. En este sentido, la Orden de 25 de Julio de 1.844 reduciendo al número de treinta para cada sexo las escuelas públicas de instrucción primaria elemental de Madrid¹⁶⁰.

Esta Orden, que según su título puede parecer de mera organización, volvía a recoger la enseñanza de la religión, no sólo de forma obligatoria en este tipo de escuelas, sino que incluso se anteponía la enseñanza de los principios de religión y morales, a la escritura y lectura. Por otra parte, recogía la formación de una comisión compuesta por distintos miembros, destacando entre estos, la existencia de un cargo público, un teniente de alcalde, y un cargo eclesiástico, un cura párroco, y otras personas ilustradas, que no ostentaban cargos públicos.

La existencia de un cura párroco dentro de la comisión debe interpretarse como la presencia de la Iglesia dentro de la Instrucción pública.

En esta línea de educación confesional, aparecía en 1.842 el Catecismo Político de los niños¹⁶¹, con el fin de enseñarse en las escuelas de instrucción

¹⁶⁰. *Colección de ... (desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.844)* , cit. pp. 57-63.

¹⁶¹. Catecismo Político de los Niños corregido y adicionado por su autor D. Manuel Benito Aguirre, Vocal Secretario de la Comisión de examen de libros de instrucción (continúa...)

pública de primeras letras. Trata como los anteriores citados de la religión, y presentaba a grandes rasgos, mediante preguntas y respuestas tasadas, la misma indefinición que el propio texto constitucional, puesto que indicaba, por una parte, a la Religión Católica como la verdadera e indispensable para la nación. Y por otra, literalmente señala que:

P. ¿Es lícito aborrecer a los hombres que no profesan nuestra misma religión?

R. La Religión católica aconseja el amor a nuestros semejantes, y por consiguiente prohíbe que se les tenga odio o mala voluntad. Un católico puede compadecer al que profese un dogma equivocado; pero de ningún modo debe aborrecerle.

Se está haciendo referencia a la tolerancia, pero a una tolerancia compasiva que ve a los practicantes de otras religiones como equivocados, pero aún así debía ser permitido.

4. LA LIBERTAD DE IMPRENTA

Como en períodos anteriores, el Derecho de libertad de imprenta iba a representar un punto de conflicto entre moderados y progresistas, donde la institución del Jurado iba a ser gran responsable de ello.

Por lo que respecta a los ataques contra la religión mediante la libertad de imprenta, hay que decir que continuaron existiendo en este período. Algunas manifestaciones se pueden encontrar a través del Derecho. Un ejemplo fue la

¹⁶¹(...continuación)

pública, Madrid, 1.842. (Publicado en Catecismos Políticos españoles ..., cit. pp. 243 y ss.).

Resolución de 10 de enero de 1.843 para que se suspendiera la circulación de cualquier escrito que se considerara capaz de poner en peligro la tranquilidad pública, y que se recogiera y depositara como prevenía la Ley de imprenta¹⁶². En su articulado se constataban los ataques contra las más altas instituciones como monarquía o Constitución, y aunque no se mencionaban los ataques contra la Iglesia católica, no por esto se debe pensar que no existieron, ya que a través del estudio de otras disposiciones jurídicas se puede constatar como se efectuaba referencia expresa sobre este extremo. Así, en la Resolución de 24 de mayo de 1.843 acerca de los abusos de la prensa¹⁶³, se preceptuaba que "se aplique el condigno castigo a aquellos escritores, que olvidando lo que a su misma patria deben, o exciten con sus publicaciones al desorden, o ataquen la ley fundamental o la religión o la moral, o faltaren al respeto que le son debidos al Trono y al jefe del Estado que lo representa".

El uso de la imprenta para el ataque y la burla hacia la Iglesia fue el vehículo por excelencia usado para la crítica que, en muchas ocasiones, fue mucho más allá, convirtiéndose en arma arrojadiza y vehículo anticlerical. Para apoyar dichas afirmaciones, debe traerse a colación la Orden de 30 de mayo de 1.844 en la cual se requería a los promotores fiscales¹⁶⁴ para que denunciaran los impresos y caricaturas contrarios a los dogmas de nuestra sagrada religión¹⁶⁵. La sola promulgación de esta Orden ya señalaba la relajación de los promotores fiscales en sus funciones, permitiendo una libertad de imprenta "amplia", y esta relajación en favor de la libertad de expresión, no sólo se produjo para las

¹⁶². *Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.843)* , cit. pp. 9-11.

¹⁶³. *Ibidem.* pp. 232-234.

¹⁶⁴. Como es sabido, los promotores fiscales eran los encargados de velar conforme a las leyes de imprenta señaladas, para que no se cometieran abusos por medios escritos, remitiendo sus denuncias a los órganos instructores.

¹⁶⁵. *Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.844)* , cit. pp. 732-733.

publicaciones que versaban sobre la religión, sino que es extrapolable a otros muchos campos de la vida social de la época.

En la regulación positiva de la libertad de imprenta posterior a la Constitución del 37, hay que comenzar por el Real Decreto de 17 de octubre de 1.837 arreglando el uso de la libertad de imprenta¹⁶⁶.

En este Decreto¹⁶⁷, si bien no se hacía mención clara sobre los delitos de imprenta por ataques contra el clero, sí que se señalaba que serían calificados como subversivos, y sufrirían la pena de tales, los periódicos o impresos que atacaran directamente a las Cortes, o a cualquiera de los órganos colegisladores. Este silencio respondía a las ideas progresistas contenidas en la Constitución de 1.837 que entendían que no se debía limitar "a priori" a la libertad de imprenta.

¹⁶⁶. *Colección de ... (desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.837)* , cit. pp. 254-257.

¹⁶⁷. En algunos puntos de su articulado se contenía una mera repetición de la legislación anterior, concretamente sobre la responsabilidad de los autores y editores. Por lo que respecta a su contenido, a grandes rasgos se puede afirmar que se establecían las condiciones necesarias para ser editor en los artículos 1º, 2º y 3º. Los artículos 4º al 8º, trataban sobre el Jurado, composición, organización, votación, etc... . Aparecía una novedad digna de mencionarse dentro del presente Decreto, y ésta era el Derecho de réplica. Literalmente el Art. 9 disponía que: "La persona que se crea ofendida en un periódico, o su pariente más cercano en el caso de que haya muerto, tiene derecho a que se le inserte en el mismo periódico la contestación que quiera dar, reducida a negar, desmentir o explicar los hechos que sirvan de pretexto o fundamento a la ofensa, y esta no quedará obligado a pagar cosa alguna por esta inserción, cuando la respuesta no exceda del doble del artículo contestado; o de 30 líneas, si el artículo ocupa menos de 15, pero pagará lo que exceda, según la tarifa o práctica ordinaria del periódico". Sobre el momento en que debería ser llevado a la práctica por el periódico y el plazo para presentar la réplica se pronunciaba el art. 10: "La contestación se insertará en alguno de los tres números primeros que se publiquen después de entregada aquella en la redacción, y deberá entregarse dentro de los seis días después de la publicación del artículo contestado, teniendo además los ausentes el tiempo necesario para la ida y vuelta del correo". También resultaba novedoso en la época el secuestro de publicaciones en el supuesto que hicieran peligrar la "tranquilidad pública", e incluso se recogían en el Decreto distintos plazos de caducidad para ejercitar la acción de abuso de libertad de imprenta en su artículo final.

Tras partir de ese principio de libertad sin restricciones recogido en el art. 2 de la Constitución, se suavizaba su aplicación prácticamente durante toda la vigencia del texto constitucional. El primer ejemplo de esa mitigación estuvo representado mediante la Orden de 5 de junio de 1.839 por la cual se establecían las reglas para el uso de la libertad de imprenta¹⁶⁸. Su Preámbulo expresamente señalaba que "ni la moral ni la religión se encuentran a salvo de la licencia".

Ya en su contenido positivo¹⁶⁹ se disponía que si se hallaban artículos capaces de comprometer la tranquilidad pública, que atacaran a la religión u ofendieran a la moral, las costumbres o el pudor, se suspendería inmediatamente su circulación y se tomarían las medidas más eficaces para que no se distribuyeran hasta ser calificados por el Jurado.

Lo anterior no deja lugar a dudas; en poco menos de dos años se modificaba el criterio o, mejor dicho, la aspiración constitucional, pasando de la libre publicación sin licencia anterior, a la censura previa antes de su divulgación.

Casi al final del régimen constitucional, con el Gobierno de España por los moderados, se aprobaba el 10 de abril de 1.844 una nueva ley de libertad de

¹⁶⁸. *Colección de ... (1.839)*, cit. pp. 349-352.

¹⁶⁹. Entre otras medidas se recoge que los jefes políticos están bajo su responsabilidad. encargados de que se cumpla lo prescrito en las leyes de imprenta. *Los editores de periódicos y demás personas responsables, debían presentar dos horas antes de su distribución o venta un ejemplar para que la autoridad pueda prevenir el daño que causaría su publicación.* Se permite a los jefes políticos rodearse de una o más personas "ilustradas" para que le apoyen en estas tareas.

imprensa¹⁷⁰. Nueva ley que en una primera visión debe calificarse como "extensa", a la vista de sus 112 artículos, y también de exhaustiva por sus pretensiones.

Curiosamente, el punto de partida es la censura previa, toda vez que se había constatado esta libertad como promotora de abusos contra todo género de instituciones. Se recogía literalmente que "antes de proceder a la expedición de cualquier impreso se entregará un ejemplar al jefe político, y si no residiese en el pueblo donde se haga la publicación, al alcalde, y otro al promotor fiscal".

Dentro de tan extensa Ley, algunos de los sectores más importantes relacionados con esta investigación son, en primer lugar, los delitos de imprenta, cuyo concepto aparecía recogido en el art. 34: "Son delitos de imprenta los escritos subversivos, sediciosos, obscenos o inmorales". Esta distinción se situaba en función de la materia. Los escritos contrarios a la religión católica, apostólica, romana, y los en que se hiciera mofa de sus dogmas o culto, eran considerados subversivos y aparecían en primer lugar en la sistematización de la ley. Su privilegiada tipificación resultaba evidente al compararse con el resto de los tipos, puesto que no sólo recibían esos ataques el calificativo de subversivos, sino que, por una parte, se situaba su catalogación en el primer lugar del articulado, y en segundo lugar, este calificativo tan sólo se dispensaba a los impresos que vulneraban la religión, la Constitución, la persona del Rey, o los que atacasen a las Cámaras legislativas.

¹⁷⁰. Ley de 10 de abril de 1.844 reformando la legislación de imprenta. (*Colección de ... -desde 1º de enero hasta fin de junio 1.844-*, cit. pp. 472-492).

Esta conceptualización implicaba la imposición de distintas penas, imponiéndose para los subversivos las penas mayores¹⁷¹.

Esa calificación de los escritos que vulneraban la religión se desarrollaba más aún mediante un Título completo de la ley bajo el nombre de "los escritos que trataban de la religión y Sagrada Escritura". Éste abarcaba, tan sólo, dos artículos: el 105 y 106. En su virtud, se constituía una censura autónoma para estos temas, siendo el encargado de verificar su posible publicación el diocesano¹⁷², pero bajo la expresa advertencia de que dichos escritos serían

¹⁷¹. Puede ser interesante constatar la mencionada clasificación, así como las penas, recogidas por la ley en sus artículos 34 a 38, y 39 a 41:

Art. 34 señalado "supra"

Art. 35 Son subversivos:

1º. Los impresos contrarios a la religión católica, apostólica, romana, y los en que se haga mofa de sus dogmas o culto.

2º. Los que se dirijan a destruir la ley fundamental del Estado.

3º. Los que ataquen a la sagrada persona del rey, su dignidad o sus prerrogativas constitucionales.

4º. Los que ataquen la legitimidad de los cuerpos colegisladores, insulten su decoro o propendan coartar la libertad de sus deliberaciones.

Art. 36 Son sediciosos:

1º. Los impresos que publiquen máximas o doctrinas que tiendan a trastornar el orden o a turbar la tranquilidad pública.

2º. Los que inciten a la desobediencia a las leyes o las autoridades.

Art. 37 Son obscenos los impresos contrarios a la decencia pública.

Art. 38 Son inmorales los impresos contrarios a las buenas costumbres.

Art. 39 A los responsables de los impresos que el jurado califique de subversivos, se les impondrá desde 30,000 a 80,000 reales de multa. ..."

Art. 40 A los responsables de los impresos sediciosos, se les impondrá la multa desde 20,000 a 50.000 reales".

Art. 41 A los que lo sean de escritos obscenos o inmorales se les condenará a pagar de 10,000 a 30.000 reales".

¹⁷². Art. 105: "las obras o escrito sobre dogmas de nuestra santa religión, sobre sagrada escritura y moral cristiana. no podrán imprimirse sin previo examen y aprobación del diocesano".

susceptibles de penas. Esta duplicidad de regulación no se puede ver como un error redundante del legislador, sino que es necesario interpretarlo conforme con el contexto descrito de búsqueda de una especial protección para con el fenómeno religioso¹⁷³.

Como se ha significado, el secuestro de las publicaciones en los términos en que se fijaba, constituía una novedad en nuestro Derecho. Como muestra de su aplicación efectiva se puede citar la Orden de 2 de agosto de 1.838 relativa a las traducciones de la Biblia hechas en vascuence y gitano o romaní¹⁷⁴. Mediante esta Orden y tras el informe presentado por el Arzobispo de Toledo y el Obispo de Córdoba, se acordaba el secuestro de los ejemplares puestos en venta y que los que se habían detenido en la jefatura política se precintaran y sellaran. Y esto debido a las notas aclaratorias, tal y como sucedió con la traducción al castellano. Sin embargo, se permitía a las bibliotecas que pudieran guardar dos ejemplares de estas traducciones ya que según esta Orden no carecían de valor filosófico.

La dificultad que atravesaban las relaciones de la Iglesia con el Estado durante este período se verificaba en la libertad de imprenta por medio de ataques incluso de la propia Santa Sede al Estado español. En este sentido puede traerse a colación las restricciones fijadas por el Gobierno para evitar la circulación en España de bulas, rescriptos, y cualesquiera otros documentos de la Curia Romana que no hubieran obtenido el pase regio. Nos referimos a la Orden de la Regencia provisional de 19 de abril de 1.841, sobre las bulas y rescriptos de Roma que no

¹⁷³. Art. 106: "Los impresos que traten de dogma, de escritura y moral cristiana, y que se publiquen sin licencia, serán embargados por la autoridad civil, y sus autores o editores, y los impresores en su caso, sufrirán, además del perecimiento de la obra, las penas a las que haya lugar".

¹⁷⁴. *Colección de ... (1.838)*, cit. pp. 341-342.

habían obtenido el pase del Gobierno¹⁷⁵. Resulta muy interesante señalar su inicial exposición de motivos de la que se puede destacar: "Las tentativas de la Curia romana para invadir la potestad temporal y para ejercer un influjo lucrativo en los negocios políticos y civiles de España, han sido repetidas en diversas épocas y sostenidas siempre con empeño, con tenacidad y muchas veces con peligro de turbar la tranquilidad y el sosiego público. Nuestras leyes antiguas y modernas ofrecen la pruebas constantes y claras así del respeto de los legisladores españoles al Padre común de los fieles, como del celo y firmeza que desplegaron para conservar la independencia de la Nación, mantener ilesas las prerrogativas del poder Real, y rechazar las exorbitantes pretensiones de los curiales que con el pretexto de la religión , han querido encubrir y satisfacer sus miras interesadas y mundanas. El reinado del católico y piadoso Monarca D. Carlos III fue fecundo en sabias y vigorosas disposiciones dirigidas a este objeto. En él se estableció el modo y los medios de acudir a Roma con las preces dirigidas a la Santa Sede, y en él se estableció que las bulas, breves, rescriptos y despachos pontificios no corriesen ni fuesen ejecutados sin obtener el pase o execuatur Regio¹⁷⁶".

Esta Orden se promulgaba a pesar de la aprobación de disposiciones con igual contenido en años anteriores, y además, curiosamente, en vez de recordar esas disposiciones, se remontaba a la cita de la ley de la Novísima Recopilación.

¹⁷⁵. *Colección de ... (1.841)* , cit. pp. 274-276.

¹⁷⁶. Novísima Recopilación de las Leyes de España, cit. Ley 14, título 3º, libro 2º . encargando a los corregidores, alcaldes mayores y demás justicias por punto general, que sin consentir su uso y ejecución remitiesen al Consejo todas las bulas, breves, rescriptos. monitorios o cualesquiera otros despachos que vinieren de la curia romana, que no se hubieren presentado para obtener el pase.

5. EL ESTATUTO DEL CLERO

5.1 CREACIÓN DE JUNTAS PARA EL ARREGLO DEL CLERO.

La idea de arreglar el clero traía causa desde 1.808, pero hasta la fecha se había ido quedando solamente en idea, de suerte que no se llegó nunca a aprobar una norma jurídica marco que recogiera la reforma integral de la Iglesia. Sin embargo, lo que sí se realizó por nuestro Derecho fue, por una parte, la creación de Comisiones encargadas de proponer reformas en la Iglesia, o la creación de dependencias especializadas para la consulta sobre los asuntos relacionados con la Iglesia. Pero dichos órganos, en realidad, fueron siempre inoperantes, ya que sus trabajos no dieron el fruto deseado de una reforma integral de la Iglesia. Por otra parte, ante el fracaso de esos proyectos de reforma, los distintos ejecutivos liberales, e incluso los propios ministros del absolutista Fernando VII, aprobaban normas concretas que incidían en muchos aspectos de la propia Iglesia: (la residencia de los eclesiásticos, los secularizados, su financiación, la congelación del número de eclesiásticos, la desamortización de sus bienes, reforma de sus seminarios, etc...).

Tras esta pequeña recapitulación de los períodos anteriores, y antes de abarcar la creación de nuevos órganos encargados de proyectar el denominado "arreglo del clero", hay que señalar que la Junta Eclesiástica para el arreglo del clero que se creó durante el Estatuto fue muy mencionada por el Constituyente de 1.837, tal y como se verifica del Diario de Sesiones de las Cortes. Sirva a título meramente indicativo, señalar que estaba compuesta por nueve miembros¹⁷⁷,

¹⁷⁷. *Diario de Sesiones de las Cortes*, 1.836-1.837, Tomo II, de fecha 5 de enero de (continúa...)

obviando las altas y bajas dentro de ella, ya que no modificaban el número.

En esa sesión del 5 de enero de 1.837 se refleja, mediante una lista, la totalidad de Comisiones que estaban en funcionamiento en ese momento, y la indicación de sus miembros. Llama la atención en una primera vista, que la Comisión de Negocios Eclesiásticos estaba formada por 9 miembros, al igual que las principales Comisiones como legislación, gobierno y libertad de imprenta entre otras, teniendo otras Comisiones tan sólo 7 ó 5 miembros¹⁷⁸.

Esa Junta para el arreglo del clero, que también era denominada como la Comisión de Negocios Eclesiásticos, presentaba un proyecto de Ley para la reforma del clero que fue muy discutido, pero no sólo por las Cortes. La controversia existía incluso dentro de la propia Comisión¹⁷⁹.

¹⁷⁷(...continuación)

1.837, p. 894. Aunque el nombramiento de la Comisión de negocios eclesiásticos aparece en otras sesiones de las Cortes, véanse las páginas 33, 127, 594 en el Tomo I y la página 5574.

¹⁷⁸. Las comisiones nuevamente nombradas por la Mesa con arreglo al Reglamento eran: Comisión de poderes, de Legislación, de Hacienda, de Guerra, de Marina, Eclesiástica, de Infracciones, de Comercio, de Agricultura y Artes, de Instrucción Pública, de Diputaciones Provinciales, de Libertad de Imprenta, de Biblioteca, de Ultramar,, de Gobierno Interior, de Corrección de estilo, de Estado, de Crédito público, así como otra comisiones especiales entre las cuales cabe señalar la Comisión especial de reemplazos, de moneda, de división del territorio, etc ... (*Diario de Sesiones de 5 de enero de 1.837*, cit. p. 5575).

¹⁷⁹. El proyecto se presenta por el Secretario de la Comisión, el Sr. Joven Salas. La intervención registrada inmediatamente después de ésta fue la del Sr. Esquivel, miembro también de la Comisión de negocios eclesiásticos, en la que señala que las Cortes habrán podido observar que dicho proyecto no está firmado por el Sr. Santaella ni por él, dada su disconformidad con el proyecto. Así de los 9 miembros 7 firmaron dicho proyecto de ley. (*Diario de Sesiones de las Cortes de fecha de 21 de mayo de 1.837*, pp. 3547-3548. El Proyecto de ley para la reforma del clero, aparece recogido inmediatamente después mediante apéndice, a este número 203, pp. 3549-3556).

La idea central del proyecto era que el Congreso no tenía por qué ocuparse de materias puramente eclesiásticas, ni descender a los pormenores que correspondían más bien al poder ejecutivo. Pero por lo que respecta a su contenido, se pueden efectuar las siguientes consideraciones, reducidas a cuatro capítulos:

1º.- Se dirigía a restablecer la disciplina de la Iglesia española y del patronato íntegro de los príncipes, a impedir que siguiera creciendo el número de los ministros fuera de lo que necesitaban las necesidades de la nación, a suprimir los cuerpos exentos y los tribunales privilegiados, y a remediar el mal económico de la multiplicidad de fiestas, sin que ello fuera en perjuicio de la religión.

2º.- El arreglo de la división eclesiástica de la Península y sus islas adyacentes, para que en lo posible se acomodara a la demarcación civil.

3º y 4º.- Versaban sobre el personal eclesiástico activo y sobrante y la dotación del clero y del culto.

En resumen, se trataba de un proyecto muy ambicioso, que seguramente fuera necesario para España y para la propia Iglesia Católica, y que prescribía una organización integral de la Iglesia, en un proyecto en el que se asignaban incluso las funciones a cada ministro de la Iglesia. A modo de ejemplo: "Cada parroquia gobernará un cura párroco el cual tendrá los coadjutores que sean necesarios, según la población". Otro ejemplo, lo constituye el deseo de diseñar la jerarquía eclesiástica. Así, se disponía: "El clero español consta de Rdos. Arzobispos, Obispos, cabildos, párrocos ordinarios y castrenses, coadjutores y profesores y alumnos de los seminarios conciliares. No se reconoce otro título de ordenación que los anteriores".

Resulta también importante señalar la cantidad fijada como presupuesto para el mantenimiento del clero, fábricas y culto, conforme al nuevo arreglo, en el cual se recogen incluso partidas para el clero excedente, señalando una cantidad total de 151.774.800. Reales.

En todo caso, hay que reiterar la gran disputa que existió en dicha propuesta de ley, no sólo ya dentro de la propia Comisión de Negocios Eclesiásticos sino también en los debates parlamentarios del Congreso, donde se encontraron posturas enfrentadas, constatadas a través de intervenciones de numerosos diputados.

Al fin y al cabo, y tal y como se afirma en la exposición, este proyecto no llegó a ser operativo, y las reformas efectuadas en la Iglesia en este período se produjeron a través de distintas normas jurídicas que daban solución a casos concretos y particulares, sin llegar a abordar los problemas de fondo señalados, y siempre de forma unilateral por el Estado.

Tras el fracaso del proyecto, y una vez aprobada la nueva Constitución, se disolvía esa Junta para el arreglo del clero, -también denominada: Comisión de Negocios Eclesiásticos-, puesto que mediante el Real Decreto de 16 de diciembre de 1.837 se creaba una Junta encargada de presentar un proyecto de ley para el arreglo del culto y de sus ministros¹⁸⁰.

Sin embargo, y pese a la importancia que representaba en la España de esos años un nuevo proyecto de ley para la reforma global del clero, resulta más significativo la objeción de conciencia manifestada por la Regente en el Preámbulo de dicho Decreto.

¹⁸⁰. *Colección de ... (desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.837)*, cit. pp. 409-410.

Dicha objeción de conciencia era importante no sólo por su reflejo en la confesionalidad, sino también por lo que representa que en una ley votada en Cortes se estableciera como exposición de motivos la disconformidad de la Regente respecto a su contenido. Así literalmente el preámbulo recogía que: "Movida por razones a que mi convicción no ha podido resistir, he creído conveniente al bien público no dar mi sanción a la ley votada por las últimas Cortes para el arreglo del clero. Pero apreciando como es debido los motivos que las Cortes tuvieron para procurar ese arreglo, muy conforme con el voto casi general de que se asegure la dotación del culto y de sus ministros sin dejarlos expuestos al abandono por accidentes que puedan prevenirse, moderándolo sin embargo de modo que no ofrezca ni el espectáculo de una opulencia tan repugnante al espíritu de la Iglesia como al triste estado de la riqueza pública, ni señal humillante de la indijencia que desautoriza y degrada; deseosa además de que el número de ministros se ponga en la conveniente relación con las necesidades de los fieles, que se determinen sus cualidades y circunstancias relativas habida conservación al bien de la Iglesia y el Estado. ...". Tras el Preámbulo, su articulado preceptuaba la creación de una Junta encargada de presentar "...con toda brevedad que el extraordinario estado del clero reclama" un proyecto de ley para el arreglo del culto y de sus ministros.

Los trabajos de esta Junta tampoco llevaron a la aprobación de un plan general de reforma de la Iglesia española. Pero las que se promulgaron fueron algunas disposiciones que, incidiendo en algunas cuestiones concretas, modificaban parcialmente el estatus de la Iglesia. En este sentido se pueden señalar, entre otras, la Orden de la Regencia de 14 de noviembre de 1.840 mandando arreglar la demarcación de las parroquias y juzgados de Madrid¹⁸¹. Sobre esta idea de la demarcación territorial nacieron en 1.841 algunas normas,

¹⁸¹. *Colección de ... (1.840)*, cit. pp. 372-375.

de entre las que se deben citar, el Decreto del Regente del reino de 11 de diciembre de 1.841 sobre supresión y unión de parroquias¹⁸². Su primera frase de la exposición de motivos concentraba el espíritu de este Decreto: "No fue siempre la comodidad de los fieles en la administración del pasto espiritual la causa de la creación de iglesias parroquiales, aunque debía haber sido la única". Ya en su articulado se hacía constar que el número de las iglesias parroquiales en los pueblos de España era desmesurado para con el número de habitantes, y para su recomposición, se remitía a los propios Diocesanos del reino para que, después de haber oído a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamientos de los pueblos donde hubiera más de una parroquia y a los curas encargados de ellas, fueran áquellos los primeros en proponer al Gobierno las supresiones y uniones que estimaran oportunas, dándose a los diocesanos para esta labor un plazo de dos meses.

Otros ejemplos de supresiones y uniones de parroquias los encontramos en los Decretos de 22 y 23 de septiembre de 1.843 señalando las parroquias que se suprimen o se conservan en Toledo, Burgos, Canarias, Orense, Zamora y Zaragoza¹⁸³. Estos Decretos eran aprobados por el Gobierno, pero se limitaba a verificar los expedientes canónicos que con arreglo a la Circular de 15 de diciembre de 1.841 habían instruido los diocesanos de las provincias mencionados. En sus disposiciones se recogía con gran meticulosidad las parroquias que se suprimían o que pervivían, así como cualquier tipo de modificaciones¹⁸⁴. Por lo que se refería a las supresiones de parroquias sobre esos

¹⁸². *Colección de ... (1.841)* , cit. pp. 835-839.

¹⁸³. *Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por los respectivos Ministerios, desde 1º de julio hasta fin de diciembre de 1.843*. Tomo XXXI. Madrid, en la imprenta nacional. 1.844. pp. 187-191.

¹⁸⁴. Como ejemplo se puede señalar lo recogido para con Alcalá de Henares: "Se
(continúa...)

territorios, hay que decir que alcanzaba en torno a 88 parroquias solamente en las demarcaciones señaladas.

La tramitación de los expedientes para la suspensión, unión y erección de parroquias se modificaban mediante la Orden de 24 de febrero de 1.844 sobre la instrucción que habían de tener para que recayese la Real aprobación los expedientes de suspensión, unión o erección de parroquias¹⁸⁵. Este asunto fue desarrollado por otras disposiciones, pero en esta Orden se señalan los trámites administrativos necesarios para que S. M. diera su aprobación a dichos expedientes. Estos consistían en:

1º.- No sólo se oirá a las partes principalmente interesadas, como párrocos y patronos, sino que se oirá también a la autoridad local, así como a dos feligreses de reconocida instrucción.

2º.- El expediente debía ser uno para cada caso particular, que se pasaría al fiscal eclesiástico, para que expusiera su parecer sobre el expediente.

3º.- Este último emitiría auto, y lo notificaría a las partes.

4º.- Dicho expediente recaería finalmente en el Ministerio de Justicia, donde se pasaba a la firma real.

¹⁸⁴(...continuación)

conservan las de San Pedro y Santa María, uniéndose a esta la de Santiago que se suprime, quedando su templo como capilla pública, y en clase de anejo con un teniente la llamada de los Hueros".

¹⁸⁵. *Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.844)*, cit. pp. 292-293.

Ha señalado Souto¹⁸⁶ que la reforma territorial tenía como objetivo la adecuación de la organización territorial eclesiástica a la nueva distribución territorial y administrativa del Estado. Esta reforma supuso la supresión de numerosas diócesis, una nueva delimitación territorial para la mayoría y la creación de algunas nuevas diócesis, entre ellas la de Madrid.

5.2 EL ELEVADO NUMERO DE ECLESIAÍSTICOS

Tras haberse establecido la congelación del número de eclesiásticos durante la vigencia del Estatuto, la llegada de los progresistas al poder tras los sucesos de la Granja suponía incluso la prohibición de proveer piezas eclesiásticas. Nos referimos a la Real Orden de 10 de enero de 1.837, por la que se mandaba suspender, por ahora, toda provisión de piezas eclesiásticas¹⁸⁷. Su exposición de motivos coincidía con lo señalado a este respecto, toda vez que contenía que: "A fin de facilitar el cumplimiento de lo que se disponga en el arreglo general del clero, de cuyo plan se ocuparán próximamente las Cortes, procurando al mismo tiempo al Estado recursos para atender a sus muchas y perentorias urgencias, y deseando S.M. regularizar la conducta de su Gobierno sobre la provisión de beneficios y prebendas eclesiásticas ...".

Esta idea se desarrollaba en su articulado, de suerte que se adoptaban medidas cautelares muy importantes para con la Iglesia hasta el momento en que se llegara al arreglo definitivo del clero. Éstas consistían básicamente en: suspensión hasta nueva orden de la provisión de todas las piezas eclesiásticas cualquiera que fuera su clase y oficio, ya pertenecieran al Patronato efectivo de

¹⁸⁶. Souto, J. A., *Derecho Eclesiástico del Estado -el derecho de la libertad de ideas y creencias-*. Madrid. 1.992. p. 35.

¹⁸⁷. *Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.837)*, cit. p. 5.

la Corona, al eclesiástico o particular, con aplicación de sus rentas al Estado; paralización de las oposiciones y concursos tanto futuros como de los ya convocados.

Aunque para la "congelación del número de eclesiásticos" se aplicaron las medidas anteriores, se continuaba efectuando principalmente mediante la prohibición de su ordenación "in sacris".

A pesar de que estas disposiciones ya se habían adoptado durante la vigencia del Estatuto Real, en este momento esa política se intensificaba. En este sentido, hay que señalar que la Iglesia no cumplió debidamente las disposiciones restrictivas, puesto que las ordenaciones "in sacris" continuaron produciéndose en nuestro país, bien mediante el envío de dimisorias a Prelados nacionales de territorios carlistas, o bien a extranjeros.

Ante esto, el Gobierno procedió a establecer trabas, de nuevo, para que los ordinarios diocesanos no expedieran dimisorias ni órdenes mayores. Esas medidas se limitaban a recordar las ya señaladas de 1.835, 1.836 y 1.838. Esta política continuaría hasta casi el final de la vigencia del presente texto. De esta forma se manifestaba, una vez más, por parte del Gobierno que existían demasiados eclesiásticos.

En este último sentido citado, se deben mencionar, entre otras, la Real Orden de 10 de diciembre de 1.840 encargando el cumplimiento de lo mandado acerca de que los Arzobispos y Obispos no expidieran dimisorias ni conferieran órdenes mayores¹⁸⁸. En este mismo sentido, poco más de un año después se promulgaba el Real Decreto de 11 de abril de 1.841 relativo a los eclesiásticos

¹⁸⁸. *Colección de ... (1.840)*, cit. pp. 455-456.

ordenados de mayores con posterioridad al Real Decreto de 8 de Octubre de 1.835¹⁸⁹.

A la luz de las normas jurídicas, se prueba convenientemente la afirmación realizada al inicio, de utilización de medios fraudulentos para eludir las disposiciones que restringían el crecimiento. Teniendo en cuenta esta circunstancia, ambas disposiciones, pero de forma más decidida el último Decreto citado, recogían disposiciones tendentes a poner remedio a estas situaciones, declarando en la mayoría de los casos nulas las órdenes tomadas de forma subrepticia, estableciendo la obligación de concurrir ante el Ministerio de Gracia y Justicia, así como obligaciones incluso para los jefes políticos y los alcaldes, señalando a estos últimos como los encargados para evitar que no ejercieran sus funciones. Literalmente se ordenaba que: *"todos aquellos a quienes se recojan los títulos y licencias dejarán de gozar del fuero y de los demás privilegios concedidos a los eclesiásticos, y serán considerados como seglares para todos los efectos civiles"*.

Este control efectuado a través del Ministerio de Gracia y Justicia no se limitaba a una mera disposición sin contenido efectivo, toda vez que para ratificar esta afirmación se puede citar la Orden de 28 de mayo de 1.845 mandando que los M. RR. obispos, ocho días después de cada témpora, remitan al Ministerio de Gracia y Justicia relación de los sujetos que hubieren ordenado en ella, con expresión de sus circunstancias, título a que lo hubieran verificado y diócesis a que pertenecían¹⁹⁰.

¹⁸⁹. Colección de ... (1.841) , cit. pp. 263-267.

¹⁹⁰. Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.845) , cit. pp. 271-272.

5.3 RESIDENCIA DEL CLERO

A las motivaciones de las disposiciones sobre residencia del clero se sumaban, como ocurría durante el período del Estatuto Real, las circunstancias objetivas de la guerra, y la participación de los eclesiásticos a favor de los carlistas¹⁹¹. Por ello, se intentó que los miembros del clero estuvieran sujetos territorialmente en su ubicación geográfica.

Como fruto de esta política de evitar que los eclesiásticos engrosaran las filas carlistas se aprobaba, entre otros, la Real Orden de 5 de julio de 1.837 para que ningún eclesiástico se alejara de su residencia habitual sin permiso de la autoridad pública¹⁹². Al final de la guerra carlista era cuando se igualaba en los derechos de residencia a los eclesiásticos con las demás clases del Estado mediante la Real Orden de 18 de diciembre de 1.839, por la que se mandaba que quedara sin efecto la de 5 de agosto de 1.837 que trataba de los eclesiásticos que se alejaran de sus domicilios¹⁹³.

Esa igualdad de movimientos entre los eclesiásticos y cualquier otro ciudadano fue pronto restringida, toda vez que para asegurar el denominado "pasto espiritual" a los fieles, se aprobaba la Orden del Regente de 5 de septiembre de 1.841 sobre residencia de los eclesiásticos¹⁹⁴.

¹⁹¹. A mayor abundamiento, véase, entre otros, Cuenca Toribio, J. M., *La Iglesia Española ...*, cit. pp. 70-107.

¹⁹². *Colección de ... (desde 1º de junio hasta fin de diciembre 1.837)*, cit. pp. 119-120.

¹⁹³. *Colección de ... (1.839)*, cit. pp. 565-566.

¹⁹⁴. *Colección de ... (1.841)*, cit. pp. 632-635.

Mediante esta última Orden se derogaba toda la legislación anterior, y se establecía la obligación de restituirse a sus respectivas iglesias a los que se hallaren ausentes. Los jefes políticos estaban obligados a investigar la residencia de los eclesiásticos y enclaustrados. Pese a esta disposición, se permitían excepciones, siempre y cuando fuera por justa causa, aunque se obligaba a los Prelados a notificar los datos de la persona, lugar donde se encontraba y la causa. La propia Orden recogía la forma de obtener el permiso para salir de su residencia, mediante las oportunas testimoniales del Prelado.

5.4 PROMOCIÓN DE LOS ECLESIASTICOS AFINES AL RÉGIMEN.

Con el fin de la Guerra Civil se pudo observar un cambio de actitud hacia el clero, toda vez que se producía la abolición de ciertas normas controladoras de conductas no sólo como las señaladas de residencia, sino otras, relacionadas con el control de las funciones de su ministerio. Nos referimos a aquellas disposiciones que incidían sobre la conducta política, como las descritas en otros periodos¹⁹⁵, o las que se promulgaron al amparo del texto del 37. De entre ellas se pueden destacar, entre otras, la Real Orden Circular de 14 de diciembre de 1.841 acerca de la provisión de beneficios, curatos, capellanías, etc ... ¹⁹⁶. En su Preámbulo se explicaba la razón de este control de promoción de los eclesiásticos afines al régimen, toda vez que literalmente se contenía que: "Grande ha sido siempre, y no puede dejar de ser, la influencia de los ministros del culto sobre sus

¹⁹⁵. Valga recordar, entre otras, la ya mencionada, adoptada durante la vigencia del Estatuto Real, la Real Orden Circular de 20 de noviembre de 1.835 sobre las pruebas de conducta política que habían de dar los eclesiásticos para ser propuestos y ascendidos en beneficios. (*Decretos de la Reian Nuestra Señora Doña Isabel II, dados e su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora. ... 1835*, cit. pp. 542-544).

¹⁹⁶. *Colección de ... (1.841)*, cit. pp. 844-847.

administrados, y con especialidad la de los párrocos en los pueblos de corto vecindario. Ellos dirigen las conciencias de sus feligreses, son los consultores en todos los negocios, los que consuelan sus aflicciones y desgracias. Si el ascendiente que necesariamente han de producir estos oficios lo emplean bien los eclesiásticos; si éstos animados de un espíritu verdaderamente evangélico, imbuyen a sus feligreses en las sublimes máximas que brillan en las hermosas páginas de aquel libro santo de obedecer a las supremas potestades, Más si en vez de inculcar estas máximas fundamentales de nuestra sacrosanta religión, son ellos los primeros a contrariarlas; si dan el funesto ejemplo de desobedecer las órdenes del Gobierno; si exhortan a desobedecerlas, entonces es consiguiente la alarma, temible la turbación del orden público, ...". De este Preámbulo se verifica como el poder civil, con independencia de su ideología, pretendía la existencia de un clero absolutamente dócil, y como no estaba dispuesto a permitir ninguna voz en las iglesias contraria a su orden. Por ello, el control a través de la promoción de los más cercanos al régimen interesaba a todos los partidos políticos. De alguna manera estas determinaciones directas del Ejecutivo, eran la forma de conseguir esa sumisión regalista de la Iglesia para el poder civil.

En realidad, las disposiciones contenidas en las dos últimas órdenes citadas se limitaban a prevenir que no fuese conferido ningún cargo eclesiástico sin que acreditaran los interesados, con certificaciones de la autoridad gubernativa, su buena conducta política y su adhesión decidida al legítimo Gobierno¹⁹⁷.

¹⁹⁷. En este sentido se promulgaron numerosas disposiciones. Por señalar alguna más, puede citarse también la Real Orden de 16 de noviembre de 1.842 para que no se permitiera el ejercicio de la potestad espiritual a los eclesiásticos que no tuvieran certificado de adhesión al Gobierno, y que se impidiese la circulación de un breve que prorrogaba las licencias de confesar y predicar. (*Colección de ... -desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.842-*, cit. pp. 514-516).

Esa línea tan dura que se había trazado mediante las disposiciones señaladas se suavizaba, prácticamente al final del régimen de este texto constitucional, mediante la Real Orden de 28 de enero de 1.844, por la cual se derogaban las circulares que prevenían la necesidad de los atestados de conducta política expedidos por la autoridad civil para que la eclesiástica concediera a los eclesiásticos las componentes licencias para ejercer su ministerio¹⁹⁸. Pero pese a lo que pueda parecer, esta resolución no significaba el fin de la injerencia en la Iglesia. Por el contrario, esta Orden se puede considerar como una mera anécdota dentro de una política marcada por el intervencionismo mediante una laicidad beligerante, que no sabe distinguir entre Iglesia y Estado si no es traumáticamente. Un exponente de la afirmación anterior lo constituía la Orden de 6 de febrero de 1.844 encargando a los diocesanos que observaran e hicieran observar al clero las obligaciones ordinarias y naturales que les imponía su Santo ministerio¹⁹⁹. En realidad, la regulación se situaba en términos muy similares, toda vez que literalmente se expresaba que: "... se encarga que mediante su ejemplo y con su palabra la sumisión y obediencia a las potestades legítimas, la lealtad y amor al trono, y el culto político que se tributa al Rey, así en los actos profanos como en los religiosos en todo género de monarquía".

5.5 EL VESTIDO DEL CLERO.

El vestido del clero se trae al presente epígrafe tan sólo para señalar la existencia de disposiciones contradictorias. En la primera se prohibía el uso público del hábito religioso, mientras que en la segunda se obligaba al uso del traje propio del cargo públicamente. Concretamente, nos estamos refiriendo a:

¹⁹⁸. *Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.844)* , cit. pp. 152-155.

¹⁹⁹. *Ibidem.* pp. 189-191.

El Real Decreto de 29 de julio de 1.837 extinguiendo en la Península, islas adyacentes, y posesiones de España en Africa, todos los monasterios, conventos, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos²⁰⁰. Este Decreto llegaba incluso a prohibir el uso público del hábito religioso.

Y la Resolución de 28 de junio de 1.844 renovando las medidas dirigidas a que los clérigos usaran de su correspondiente traje²⁰¹. Literalmente exponía que: "no contentos algunos sacerdotes aficionados a lo profano con imitar en el color y forma del vestido, borrada la corona y depuesto el traje clerical a los más modestos seglares, sino propasándose a usar de colores impropios y de prendas y dijes de puro lujo y adorno, que muy mal cuadran con la vida retirada y austera que su santo ministerio requiere".

6. EL JURAMENTO

Siguiendo con el desarrollo posterior de los juramentos, hay que volver a detenerse en los ordenados ante la mayoría de edad de S. M. la Reina Doña Isabel II. En este sentido se promulgaba la Real Orden de 27 de noviembre de 1.843 por la que se prevenía como se había de prestar el juramento de obediencia a la Reina²⁰².

Antes de proceder con el análisis de su contenido, hay que decir que llama poderosamente la atención que en una sociedad que se va desembarazando de su confesionalidad ante un acto de estas características, vuelve a tomar matices

²⁰⁰. Colección de ... , (desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.837) , cit. pp. 92-99.

²⁰¹. Colección de ... (desde 1º de enero hasta fin de junio 1.844) , cit. pp. 352-353.

²⁰². Colección de ... (desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.843) , cit. pp. 366-367.

confesionales, poco diferenciables de las fórmulas de primeros de siglo propias de los textos de 1.808 y 1.812.

Ya en su articulado se prevenía que el juramento se prestaría en todos los pueblos de la monarquía, y más concretamente, en la Iglesia principal de cada población con asistencia de todas las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, de las corporaciones, de los empleados de todas clases y categorías y de los individuos del clero. Una vez todos presentes en los templos, en vez prestarse dicho juramento al unísono, se tomaba en primer lugar al jefe político de las capitales de provincia, en manos del alcalde primero, y en los demás pueblos el alcalde primero. Después el presidente recibía el juramento de todas las personas asistentes.

Concluidos los juramentos, se continuaba con el canto de un Te Deum.

La fórmula del juramento era la siguiente:

¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios guardar fidelidad a S. M. Doña Isabel II, Reina constitucional de las Españas, declarada mayor de edad por las Cortes del Reino?.

La contestación era:

Sí Juro,

y ante esa respuesta, quien recibía el juramento decía a continuación:

Si así lo hiciérais, Dios os lo premie, y si no lo demande.

7. LEGISLACIÓN ELECTORAL

La propia Constitución señalaba que la regulación de la legislación electoral se haría mediante desarrollo posterior, por lo que la Ley Electoral de 20 de julio de 1.837²⁰³ nacía de ese mandato expreso constitucional.

De entre los contenidos que presentaba, habría que afirmar que regulaba con deseo de meticulosidad todo lo relativo a la forma de realizarse las elecciones, formación de las listas, cualidades necesarias para ser elector, para ser Senador o Diputado, los modelos de las actas de los distritos electorales, de escrutinio, modelo de papeletas electorales, así como el número de senadores y diputados por provincia, según su población. Como rasgos curiosos de esta ley, señalar la gratuidad de los cargos y la publicidad de las listas, sufragio censitario, etc... .

A los efectos de nuestra investigación hay que destacaba el contenido de algunos artículos, y concretamente el Art. 57, 4º que preceptuaba que no podrían ser elegidos para Diputados ni Senadores: los Arzobispos, Obispos, Provisores, Vicarios Generales. Aunque también hay que decir que estas prohibiciones se extendían también a otros cargos públicos como Capitanes Generales, Comandantes Generales, Jueces y Magistrados, entre otros.

Esta prohibición es redundante, porque ya aparecía expresamente recogida en el texto constitucional, y aún así, la preocupación del legislador de excluir al clero de las Cámaras era constante, puesto que esa prescripción se contenía en gran número de las disposiciones que se aprobaban sobre legislación electoral.

²⁰³. Colección de ... , (desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.837) , cit. pp. 48-68.

Un ejemplo de esta afirmación se recogía en el Real Decreto de las Cortes de 25 de agosto de 1.837, declarando que los salarios de los jueces y dependientes del foro, como asimismo las congruas de los curas párrocos, no pueden servir para ser inscritos en las listas electorales²⁰⁴.

Un dato curioso era la consideración del proceso electoral como algo digno de ser apartado de los edificios destinados al culto. Así, la Real Orden de 9 de enero de 1.840 encargando a los Ayuntamientos que procuraran para las operaciones electorales destinar edificios que no estuvieran consagrados al culto divino²⁰⁵. El articulado de esta Orden intentaba justificar esta medida por los escándalos, a que muchas veces ha dado lugar la celebración de estos actos, en que las pasiones humanas atropellaban con frecuencia los respetos que les eran debidos. Sin embargo la Orden no era excluyente. Se trataba de una recomendación a las autoridades municipales, y se disponía que en caso de existir otro edificio, o no haber podido habilitar otro para este efecto, se adoptaran por la autoridad local las medidas oportunas para que los concurrentes observaran todo el decoro y reverencia que correspondía a la Santidad de los templos consagrados al culto de nuestra religión.

El desarrollo normal de la legislación electoral implicaba la necesidad de exigir conductas negativas o positivas a algunos sectores sociales, para permitir la realización de las elecciones.

Dentro de estos sectores se encontraba el eclesiástico, pero no sólo éste. En apoyo de esta afirmación, se debe traer a colación la Resolución de 28 de septiembre de 1.843 mandando que los Diocesanos hicieran conocer al clero su

²⁰⁴. *Colección de ... (desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.837)* , cit. pp. 147-148.

²⁰⁵. *Colección de ... (1.840)* , cit. pp. 34-35.

obligación de respetar y acatar los principios y las reformas que la nación ha establecido²⁰⁶.

Esta Resolución, no sólo calificaba de "inadecuado" el comportamiento de algunos eclesiásticos durante las últimas elecciones celebradas, sino que expresamente señalaba cual había sido ese comportamiento: "en vez de ceñirse a emitir su voto, de una manera aislada y pacífica, como era de esperar de su ministerio y carácter, han desconocido los deberes que éste les impone, acaudillando electores, y propalando para seducirlos y fanatizarlos doctrinas opuestas a los principios que profesamos, y a las saludables reformas que por fortuna hemos llegado a obtener". Por ello, se disponía que los diocesanos informaran a los miembros del clero de su obligación de respetar las instituciones.

Como se ha dicho antes, otros sectores sociales también vulneraban la legislación electoral, tal y como se puede verificar de la Orden de la Regencia de 4 de enero de 1.841 acerca de la conducta que en las próximas elecciones deben observar las autoridades militares²⁰⁷. En su articulado se recogían ciertas afirmaciones, que serían válidas incluso hoy, mediante una gran belleza en su exposición, literalmente:

"El ciudadano que emite su voto acerca de las personas que son en conciencia más dignas de representar a la nación en el santuario de las leyes, ejerce uno de los derechos sociales más grandes y preciosos. La ley requiere que al manifestar su voluntad delante de la urna electoral, sea tan libre como su mismo pensamiento. Toda acción que tienda a coartar esta libertad en lo más mínimo, a presentar ni una sombra de sugestión y de violencia, es un crimen

²⁰⁶. Colección de ... (desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.843) , cit. pp. 198-199.

²⁰⁷. Colección de ... (1.841) , cit. pp. 11-12.

político, un atentado contra la majestad de las leyes, un ultraje a la letra y al espíritu de la Constitución pública de la Monarquía. Bajo la protección de la autoridad civil se celebran estos actos en que todos los electores son iguales, en que todas las clases del Estado se confunden. La militar desaparece en cierto modo de estas asambleas, porque nada se debe ver en ellas que lleve el carácter de fuerza: auxiliar al magistrado civil cuando lo reclame, acudir cuando no quede más que este recurso para defender al débil contra el fuerte, al desvalido contra el poderoso, para desagraviar, en fin, la ley contra los que traten de infringirla: he aquí a lo que se limitan sus deberes".

La parroquia, que como sabemos se había constituido en el centro del sistema en la Constitución gaditana al señalarse como circunscripción electoral, había perdido gran parte del peso específico que poseía, pero todavía se seguía usando como circunscripción electoral; ahora quedaba para las elecciones municipales. Esta afirmación encontraba su respaldo en los Decretos de 16 de noviembre de 1.843²⁰⁸ y de 27 del mismo, suspendiendo la celebración de Juntas parroquiales para la elección de Ayuntamientos²⁰⁹.

8. TOLERANCIA RELIGIOSA

Si hay algún proyecto de ley digno de ser señalado, debe ser el de tolerancia religiosa, por todo lo señalado por la doctrina sobre el art. 11 de la presente Constitución de 1.837 y su tendencia a la supuesta tolerancia.

²⁰⁸. Real decreto disponiendo se lleve a efecto la renovación de Ayuntamientos. (*Colección de ... -desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.843-*, cit. pp. 354-358).

²⁰⁹. *Colección de ... (desde 1º de julio hasta fin de diciembre 1.843)*, cit. p. 366.

No hay que olvidar que los propios constituyentes acordaron regular la tolerancia por ley civil, fuera del texto constitucional.

Como punto de partida previo, hay que dejar bien claro que el concepto de tolerancia, en este momento histórico, debe ceñirse exclusivamente al ejercicio privado de cultos distintos del católico.

Por primera vez en nuestra historia²¹⁰ después de la aprobación del art. 11, y acorde con las manifestaciones de algunos diputados que intervinieron en la discusión de este artículo, se iba a proponer el desarrollo por ley civil de la "Tolerancia" o el derecho a no ser molestado por las creencias religiosas distintas a las católicas.

El Diputado Sr. Becerra²¹¹ tomaba la palabra y proponía a la Comisión de legislación la creación de una norma jurídica para regular la tolerancia religiosa. Comenzaba con una breve exposición para justificar dicha petición, que se limitaba a recoger las impresiones manifestadas por los miembros del constituyente en la discusión del artículo 11 de la Constitución, para pasar posteriormente a proponer las siguientes medidas:

1ª. Todos los extranjeros residentes o transeúntes en cualquiera de los dominios de España estarían obligados, del mismo modo que los españoles, a respetar la religión católica y su culto; pero nadie sería perseguido ni molestado por sus opiniones religiosas, a no ser que por su medio perturbe la tranquilidad pública: en este caso lo será como perturbador de la tranquilidad, sin atención a

²¹⁰. Hay que señalar que era la primera vez en nuestra historia moderna que se proponía la creación de una Ley sobre tolerancia religiosa. (*Diario de Sesiones de las Cortes, de 1.837*, sesión de fecha 12 de mayo, p. 3349).

²¹¹. *Diario de Sesiones de las Cortes*, sesión de fecha de 12 de mayo de 1.837, p.3349.

que sus opiniones sean o no ortodoxas.

2ª. Quedaban por consecuencia, abolidas y derogadas todas las leyes que impusieran penas civiles o criminales a los disidentes en sus opiniones religiosas.

3ª. Esta Ley en nada se mezclaba con las facultades eclesiásticas de los ordinarios, que permanecían y quedaban "en el mismo pie y términos en que en el día se hallan" para imponer a los fieles penas puramente eclesiásticas y espirituales.

Pero estas penas no tendrían a partir de la aprobación de la ley de tolerancia ningún efecto civil.

A esta petición se van a incorporar otros diputados, los señores: Pascual, Corona, Jaén, Pedrosa, Tarín, Moscoso, Viadera, Osca, Alsina, Alonso, Sarabia, Tovar y Tovar, señalando que: "Pedimos a las Cortes, declarar por medio de una ley, que en lo sucesivo no se perseguirá ni incomodará a nadie por sus opiniones religiosas".

Ambas intervenciones fueron leídas por segunda vez²¹², acordando su pase a la Comisión de legislación.

Dentro de esta tolerancia, seguía latente la idea que más o menos soterradamente manifestaba más de un diputado, Tolerancia sí, libertad pública de cultos no.

²¹². *Diario de Sesiones de las Cortes*, sesión de fecha de 21 de mayo de 1.837, p.3527.

Por otra parte, se confundían ideas, hoy claras, que sin embargo los constituyentes de la época no alcanzaban a diferenciar: Tolerancia religiosa, libertad de cultos, persecución por motivos religiosos, ejercicio de otros cultos: ejercicio público y privado.

Hay que señalar que el motivo de esta petición era la asociación de la libertad con la Ilustración, y que producto de ello, se llegó incluso por parte de algún diputado a pedir que se llegara a contener la libertad religiosa, pero, como se ha dicho, se estaban limitando al mero ejercicio privado de los cultos, no a su exteriorización pública.

De cualquier forma, el concepto de tolerancia perfilado en este proyecto de ley dista mucho de lo señalado al respecto en 1.961 por Lombardía²¹³, puesto que afirmaba que: "Es importante perfilar -aunque sea muy brevemente- la precisa significación de este término. Se ha venido afirmando y el aserto tiene sus raíces en la doctrina de los Santos Padres- que sólo tiene sentido hablar de tolerancia con respecto al mal; por tanto, la tolerancia, como concepto jurídico, encierra un doble significado: por una parte supone dar estado jurídico -legalidad- a una determinada situación; por otra, implica también una tacha de imperfección con respecto al comportamiento tolerado. De aquí que la tolerancia tenga siempre un carácter de provisionalidad; debe estar supeditada a la persistencia de las circunstancias que obliguen a ella. Si contemplamos las amplias perspectivas que se abren desde la sencilla formulación de estos conceptos, fácilmente comprenderemos la grandeza de sus consecuencias. La legislación debe ser planificadora y optimista, abierta a una continua superación en pos de los más altos ideales; pero al tiempo ha de ser respetuosa con la realidad a la que hoy y ahora se aplica, evitando forzar las situaciones y alejándose de cualquier

²¹³. Lombardía, P., La Confesionalidad del Estado, hoy, en *Ius Canonicum*, año 1.961, p. 347.

tentación o fanatismo e intransigencia. La recta aplicación del principio de tolerancia exige un auténtico esfuerzo técnico por parte del legislador, del que los juristas no pueden desatender, por conocer lo que realmente ocurre en la sociedad, por la exacta suerte de sus destinatarios de sus normas. Aquí encuentran su cabal función -la grandeza de una misión de servicio- las técnicas de la moderna sociología. Se ha hablado de una tolerancia de cultos y está bien; pero esto no es más que un aspecto parcial de la cuestión. La tolerancia debe aplicarse en cuantas materias lo exija la realidad de la vida, contemplada en función de la doctrina tomista de las relaciones entre la justicia y la prudencia. A medida que las circunstancias evolucionen por un progresivo perfeccionamiento de la sociedad civil en orden al bien común temporal, que el legislador debe fomentar, la tolerancia ha de ir cediendo paulatinamente".

ANEXO Nº 1

CONTRIBUCIÓN DEL CULTO Y EL CLERO¹ PARA EL AÑO 1843,
Y TRES ÚLTIMOS MESES DEL CORRIENTE

— * —

Repartimiento que forma esta Contaduría General con arreglo a la Orden de S.A. el Regente del Reino fecha 7 del corriente, entre todas las provincias de la Península e Islas adyacentes, de 67.000.000 reales sobre la riqueza territorial y pecuaria, y 16.000.000 sobre la industrial y comercial, por las bases que sirvieron para la extraordinaria de 180.000.000.

PROVINCIAS	CUPOS		TOTAL
	SOBRE LA RIQUEZA TERRITORIAL Y PECUARIA	SOBRE LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	
Alava.....	430.282	104.000	534.282
Albacete.....	588.027	87.040	675.067
Alicante.....	1.735.056	472.000	2.207.056
Almería.....	1.359.845	288.000	1.627.845
Ávila.....	603.580	51.200	654.780
Badajoz.....	1.575.973	272.000	1.847.973
Barcelona.....	1.052.372	228.800	1.281.172
Burgos.....	3.179.829	1.792.000	4.971.829
Cáceres.....	1.021.833	102.400	1.124.233
Cádiz.....	1.180.556	128.000	1.308.556
Castellón.....	3.632.926	1.043.200	4.676.126
Ciudad Real...	571.650	96.000	667.650
Córdoba.....	791.452	144.000	935.452
Coruña.....	1.239.163	112.000	1.351.163
Cuenca.....	2.671.451	320.000	2.991.451
Gerona.....	1.546.000	464.000	2.010.000
Granada.....	1.272.071	128.000	1.400.071
Guadalajara...	1.001.387	320.000	1.321.387
Guipúzcoa.....	1.932.610	451.200	2.383.810
Huelva.....	815.833	92.800	908.633
Huesca.....	599.554	160.000	759.254
Jaén.....	1.036.304	112.000	1.148.304
León.....	795.490	76.800	872.290
Lérida.....	1.348.291	192.000	1.540.291
Logroño.....	1.232.622	128.000	1.360.622
Lugo.....	729.313	160.000	889.313
Madrid.....	1.036.201	160.000	1.196.201
Málaga.....	842.870	144.000	986.870
Murcia.....	4.752.748	1.856.000	6.608.748
Navarra.....	2.628.500	960.000	3.588.500
Orense.....	1.857.627	320.000	2.177.627
Oviedo.....	1.274.853	422.400	1.697.253
Palencia.....	736.832	136.640	873.472
Pontevedra....	922.571	208.000	1.130.571
Salamanca.....	1.265.788	144.000	1.409.788
Santander.....	868.930	208.000	1.076.930
Segovia.....	1.250.132	144.000	1.394.132
Sevilla.....	517.781	464.000	981.781
Soria.....	769.792	96.000	865.792
Tarragona.....	3.647.346	1.024.000	4.671.346
Teruel.....	403.245	38.400	441.645
Toledo.....	1.214.855	496.000	1.710.855
Valencia.....	594.155	38.400	632.555
Valladolid....	2.206.097	137.520	2.393.617
Vizcaya.....	1.838.005	608.000	2.446.005
Zamora.....	1.224.280	224.000	1.448.280
Zaragoza.....	682.706	256.000	938.706
I. Baleares...	838.802	99.200	938.002
I. Canarias...	1.702.714	240.000	1.942.714
	67.000.000	16.000.000	83.000.000

¹. Dada en Madrid, a 11 de Noviembre de 1.842.- GONZALO DE CÁRDENAS.-

ANEXO Nº 2

Repartimiento de 75.406.412 rs. , verificado entre todas las provincias del Reino con arreglo al artículo 10 de la ley 12 del corriente.

Dada en Madrid, a 31 de Agosto de 1.841.- PEDRO SURRÁ Y RULL.-

PROVINCIAS	CUPOS		TOTAL
	SOBRE LA RIQUEZA TERRITORIAL Y PECUARIA.	SOBRE LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	DE AMBOS CUPOS.
Alava.....	388.832	97.208	486.040
Albacete.....	473.638	118.409	592.047
Alicante.....	1.623.039	405.759	2.028.798
Almeria.....	1.172.865	293.216	1.466.081
Avila.....	446.487	111.621	558.108
Badajoz.....	1.309.962	327.490	1.637.452
Barcelona.....	3.944.634	986.158	4.930.792
Burgos.....	771.631	192.907	964.538
Cáceres.....	901.688	225.422	1.127.110
Cádiz.....	3.455.242	863.810	4.319.052
Castellón.....	665.707	166.427	832.134
Ciudad Real...	923.141	230.785	1.153.926
Córdoba.....	2.072.542	518.135	2.590.677
Coruña.....	1.491.640	372.910	1.864.550
Cuenca.....	961.353	240.339	1.201.692
Gerona.....	986.158	246.540	1.232.698
Granada.....	1.729.632	432.408	2.162.040
Guadalajara...	627.494	156.874	784.368
Guipúzcoa.....	557.438	139.359	696.797
Huelva.....	791.072	197.768	988.840
Huesca.....	597.326	149.332	746.658
Jaén.....	1.078.003	269.501	1.347.504
León.....	935.543	233.886	1.169.429
Lérida.....	641.573	160.393	801.966
Logroño.....	841.352	210.338	1.051.690
Lugo.....	698.557	174.639	873.196
Madrid.....	5.031.208	1.257.802	6.289.010
Málaga.....	2.715.120	678.780	3.393.900
Murcia.....	1.543.596	385.899	1.929.495
Navarra.....	1.271.413	317.854	1.589.267
Orense.....	621.796	155.449	777.245
Oviedo.....	818.223	204.556	1.022.779
Palencia.....	973.756	243.439	1.217.195
Pontevedra....	782.692	195.673	978.365
Salamanca.....	963.700	240.925	1.204.625
Santander.....	822.916	205.729	1.028.645
Segovia.....	600.679	150.169	750.848
Sevilla.....	3.444.515	861.129	4.305.644
Soria.....	302.686	75.671	378.357
Tarragona.....	1.309.626	327.407	1.637.033
Teruel.....	426.709	106.678	533.387
Toledo.....	1.630.748	407.687	2.038.435
Valencia.....	1.832.538	458.135	2.290.673
Valladolid....	1.030.740	257.685	1.288.425
Vizcaya.....	711.629	177.908	889.537
Zamora.....	648.947	162.237	811.184
Zaragoza.....	358.901	339.725	1.698.626
I. Baleares...	923.811	230.953	1.154.764
I. Canarias...	472.632	118.158	590.790
	60.325.130	15.081.282	75.406.412

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

PRIMERA

La Iglesia a finales del Siglo XVIII se nos presenta situada en las estructuras propias del Antiguo Régimen, y bajo la estrecha unión entre el Altar y el Trono. Esa comunión, se manifiesta desde parámetros regalistas donde el monarca es quien regula cuestiones propias de la Iglesia bajo el convencimiento de que las únicas materias propias de la Iglesia son los dogmas, los sacramentos y el culto, y aún éstas, no del todo, porque como quiera que contienen implicaciones civiles es el monarca quien debe regular su actividad. Esta situación de la Iglesia dominada por el poder civil, no era óbice para que fuera especialmente protegida por áquel, ni que sus ministros formaran parte de los estamentos privilegiados.

Por lo que respecta a la forma de adoptarse las disposiciones que regulaban el hecho religioso, como regla general, nos encontramos que las decisiones que se adoptaban por el poder civil, tenían en cuenta la opinión de la propia Iglesia, e incluso, en algunos supuestos se solicitaba la autorización a Roma, -tal fue el caso de la desamortización operada en España en 1.798-. Pero la muestra más importante de esa bilateralidad en la regulación del fenómeno religioso la encontramos en la existencia de los concordatos de 1.737 y 1.753.

SEGUNDA

El primer intento de instaurar en España el Nuevo Régimen vino de la mano del liberalismo francés bajo el Estatuto de Bayona. Con respecto a la regulación del hecho religioso se partía de una declaración de confesionalidad férrea y excluyente con respecto a cualquier otra religión que no fuera la católica apostólica y romana. Además se expresaba tal determinación en el primero de sus artículos, de suerte que las reformas que se iban a introducir en España de la mano del liberalismo francés nacían bajo la advertencia del mantenimiento de la Religión Católica en España. En nuestra opinión, ésto se debe al deseo de lograr el apoyo de los españoles para con el proyecto de Gobierno de los franceses, puesto que era sobradamente conocido por el invasor la importancia de la religión católica en nuestro país. En realidad, esta confesionalidad debe ser entendida tan sólo como una simple concesión efectuada a la Iglesia para lograr tanto su apoyo, como el de el resto de los sectores sociales españoles al régimen invasor.

Sólo teniendo en cuenta esta idea, se puede entender la existencia de la contradicción que encerraba esa declaración confesional dentro de un texto que consagraba con su espíritu liberal numerosos derechos fundamentales, toda vez que con respecto a la libertad religiosa, rompía esa línea clara que presentaba declarando expresamente la confesionalidad de España junto con el resto de las referencias apuntadas antes. En apoyo de esta afirmación se debe afirmar que en realidad dicha confesionalidad se limitó únicamente una serie de afirmaciones programáticas, puesto que en la legislación aprobada en su desarrollo se contenían disposiciones totalmente contrarias a los principios señalados.

Bajo este breve marco jurídico del Estatuto de Bayona, y de la mano del liberalismo francés aparecieron algunas de las más importantes claves del liberalismo español del Siglo XIX. Y ésta aparición se produjo desde dos polos perfectamente diferenciados. En primer lugar desde su contenido (la reforma de la Iglesia, su organización, número de miembros, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, el deseo de una regulación liberal de la libertad de imprenta, las primeras pautas de financiación estatal de la iglesia, la reforma del sistema de enseñanza, etc...). Y en segundo lugar, desde su forma, toda vez que se llevaron a cabo de forma unilateral por el poder civil, sin contar con el acuerdo de la propia Iglesia, y ello incluso pese a la existencia de un Ministerio denominado de Servicios Eclesiásticos.

Pero no hay que olvidar que estas medidas no pueden ser consideradas propias del liberalismo español, sino que su autor material es el liberalismo francés y su estudio resulta interesante no tanto desde el punto de vista de su autor ideológico, sino desde el punto de vista territorial,

Hay que significar la creación del Ministerio de Servicios Eclesiásticos, puesto que, bajo nuestra opinión, suponía un gran acierto a la luz de las importantes reformas que se pretendían operar en la Iglesia y el clero. Debido a su escasa vigencia, no fue capaz de cumplir con su cometido. Sin embargo, quizá su instauración por los franceses nos privó de la existencia de un Ministerio autónomo con similares características, encontrándonos que las funciones por él desarrolladas, junto a otras posteriores, serían gestionadas por alguna dependencia especial del Ministerio de Gracia y Justicia.

TERCERA

En plena guerra de la independencia surgía nuestro primer texto constitucional español. Esta Constitución acordaba de forma absolutamente cerrada la confesionalidad de la Nación española no sólo en tiempo presente, sino que esa declaración nacía incluso con vocación de futuro, como si tal prescripción escapara a la voluntad del propio constituyente, de suerte que obligara a cualquier otro que se enfrentara a regular este extremo en el futuro.

Esa declaración confesional, junto con los reflejos apuntados, en la práctica se limitó a meras declaraciones formales, puesto que tal y como se puede verificar de la actividad de la Cortes gaditanas, en realidad esa confesionalidad fue seguida de las disposiciones citadas que fueron en perjuicio de sus intereses, de todo punto contrarias a lo contenido en el artículo 12.

La Iglesia católica, pese a la numerosa intervención de miembros en el constituyente y el contenido del artículo 12, no se vió representada en el Nuevo Régimen, y esa previa desconfianza, posteriormente al comprobar en su status los efectos de las disposiciones señaladas, se tornó en un frente hostil contra el liberalismo.

A nuestro juicio, la conclusión más interesante de este período se debe extraer de la propia actuación del propio constituyente, puesto que a pesar de haber establecido un texto constitucional conteniendo derechos y libertades inspirados en el liberalismo, con respecto a la religión, traiciona sus principios cediendo ante una declaración de confesionalidad como la señalada. La respuesta sobre el porqué de la existencia de esta divergencia entre lo deseado por los liberales y lo realmente consignado en la Constitución tiene su explicación: se trató de una mera concesión para lograr el apoyo del clero a la Iglesia.

La llegada de Fernando VII suponía la vuelta a las estructuras del Antiguo Régimen, donde la Iglesia disfrutaba de una situación privilegiada y cómoda. Por ello, rápidamente se identificó con el monarca apoyando su política, ya que a la vista de lo anterior, pensaba que el liberalismo era una corriente "revolucionaria", y de todo punto, contraria a sus intereses.

CUARTA

La vuelta de Fernando VII supone el freno de la obra liberal de modernización de España, y esa línea política supuso un rápido retorno a las estructuras que estaban vigentes antes de la Guerra de la Independencia. Nuestro Derecho, como se ha señalado, constituye el reflejo fiel del deseo del monarca, toda vez que se limitan la práctica totalidad de disposiciones aprobadas a prescribir el recuerdo de leyes contenidas en la Novísima Recopilación de las Leyes de España. Esa remisión obedece al carácter de ese texto legal, donde como es sabido, se contenía la tradicional obra legislativa de la monarquía española.

Esa vuelta al Antiguo Régimen encontró el apoyo firme de la Iglesia quien tras haber experimentado directamente en su status las consecuencias prácticas del Nuevo Régimen no dudó en colocarse bajo la protección del monarca.

En realidad entre la monarquía y la Iglesia se produjo la simbiosis propia del absolutismo, donde ambas potestades se apoyaban la una en la otra. Esta última avalando su reinado y Fernando VII restableciendo su status mediante las disposiciones jurídicas señaladas, entre otras la devolución urgente de los bienes que le habían sido arrebatados en la forma prescrita, y volviendo a colocar al clero en el escalón social que le correspondía.

Se puede afirmar que la principal colaboración de la Iglesia en este período absolutista no fue la económica, sino la ideológica, puesto que se erigió en un pilar importante para sustentar su reinado. Por ello, el propio monarca se encargaba de promocionar a las dignidades eclesiásticas a los eclesiásticos afines al régimen mediante el filtro de la emisión de los informes de conducta señalados. En este sentido, también se debe citar el especial cuidado en la enseñanza para que no se dispensara por eclesiásticos adversos al Régimen. Como contrapartida, Fernando VII se encargaba de anular las reformas efectuadas durante el período constitucional, situando a la Iglesia a la posición privilegiada del Antiguo Régimen.

Este punto de apoyo que significó Fernando VII para la Iglesia tuvo un coste enorme, puesto que obligaba a esta última a luchar para la caída del sistema constitucional. En realidad, supuso un grave error por parte de la Iglesia, toda vez que por esta causa, aquellos católicos que habían defendido el Nuevo Régimen se veían obligados a enfrentarse contra la Iglesia que les había traicionado. De cualquier forma, no hay que olvidar que la mayoría del pueblo español manifestó su júbilo y su apoyo también al monarca, dando la espalda, o al menos, mostrando su indiferencia para con la obra gaditana.

Para finalizar con las conclusiones que se pueden extraer de este período, hay que decir que la confesionalidad aparece fuertemente arraigada en España, no solo en su aspecto formal como ocurría en las Cortes de Cádiz, sino en la práctica, y en los mismos parámetros en los que se encontraba a finales del Siglo XVIII, y cuyo reflejo quizá más significativo se constituyó por el restablecimiento de la Inquisición.

QUINTA

Durante el Trienio Liberal se vuelve a poner en vigor la Constitución de 1.812. Sin embargo, se deben comenzar las conclusiones de este período haciendo hincapié en el esfuerzo importantísimo por parte de las Cortes y los diferentes Gobiernos por establecer todo un sistema jurídico nuevo conforme con el texto fundamental gaditano. Desde la óptica del Derecho, se trataba de la construcción de unos pilares novedosos cambiando las prescripciones de la Novísima Recopilación de las Leyes de España por una abundantísima producción normativa de nuevo cuño. En realidad, acontecía una revolución en nuestro sistema jurídico que estuvo vigente tan sólo esos escasos cuatro años.

La realización del Nuevo Régimen necesitaba en primer lugar grandes reformas en la Hacienda pública que, aunque en detrimento de la Iglesia, implicaban el embrión de la moderna organización tributaria. Es en este contexto donde surgen las primeras Leyes de Presupuestos Generales del Estado, que en un primer momento contenían sólo los gastos, y que después contendrán también los ingresos.

Ya en el análisis de la incidencia en la Iglesia, hay que decir que sufre importantes modificaciones en su status, de suerte que se va a encontrar con todo un huracán de disposiciones que van a ir en contra de sus intereses. Y, a pesar de ello, el Nuevo Régimen partía con la idea de contar con el apoyo de la Iglesia para su instauración en España, pero, como se ha señalado, bajo el convencimiento de la posibilidad, o mejor dicho, de la necesidad de modificar su status.

Como consecuencia práctica, la Iglesia resiste a todo tipo de reformas mediante un comportamiento activo en contra del Nuevo Régimen, de forma que

algunos de sus miembros no se contentaban simplemente con los sermones enfervorizados, sino que llegaban a incitar a los feligreses a la lucha contra el Nuevo Régimen. De ahí, la reacción del propio Régimen en contra de la Iglesia mediante la adopción de disposiciones que, aunque algunos han calificado de anticlericales, en todo caso irrogaron efectos negativos para con la Iglesia católica que se agudizaron en los momentos finales del Régimen, -marzo del 23-, ante el avance de las tropas francesas y los realistas.

Para valorar las reformas de las Cortes del Trienio respecto del factor religioso, se debe afirmar que superaron a las efectuadas durante el embrión gaditano, pero que no llegaron a las que se dispondrán años después por los progresistas.

Esas ideas liberales, aunque en este momento tampoco triunfaron dentro de la Iglesia, sí que significaron el punto de partida para las reformas que acontecerán en los años venideros, puesto que las doctrinas liberales penetraron en los conventos, creando tensiones entre eclesiásticos liberales y tradicionalistas. Esta división se constató también en los propios Obispos, puesto que mientras que los partidarios del Antiguo Régimen, o bien salían de España, o eran depuestos de sus diócesis, los partidarios del Nuevo Régimen no sólo accedieron a estas últimas cuando quedaban vacantes, sino que como en el caso del cardenal de Borbón ocupaba la Regencia de España hasta después de la convocatoria de Cortes. Por ello, se debe concluir afirmando que el enfrentamiento se produjo entre dos bandos que, aunque políticamente eran muy divergentes, ambos coincidían en su creencia católica. Si bien unos entendían que se debía efectuar una reforma importante en la Iglesia para adecuarla al Nuevo Régimen, otros pensaban que se debían mantener las antiguas estructuras propias del Antiguo Régimen.

Centrándonos en la afirmación efectuada, y concretamente en la opinión que sobre la Iglesia mantenían los liberales, hay que poner de manifiesto como éstos, desde los mismos parámetros regalistas usados por los absolutistas, continuaban buscando el apoyo de la Iglesia para sustentar el Nuevo Régimen. Esa búsqueda de colaboración se verificó no sólo de sus relaciones con la Iglesia, sino también con el propio monarca, puesto que este Nuevo Régimen, pese a surgir con fuerza en contra del Antiguo Régimen, se apoyaba en esos dos pilares propios de este último (Rey e Iglesia). Esa búsqueda de colaboración resulta muy interesante, toda vez que, aunque se reformaba sustancialmente su status eliminando sus privilegios y desamortizando sus bienes mediante todas las disposiciones señaladas, de forma paradójica, se establecían pensiones para ambos. Con respecto al Rey, se le aseguran los gastos de la familia real, y para la Iglesia, no sólo las pensiones a los secularizados y exclaustros, sino que resulta más llamativa la entrega de un pago único a Roma de forma anual para el pago de los servicios eclesiásticos.

SEXTA

Para comenzar las conclusiones correspondientes al período de 1.823 a 1.833 (la segunda restauración de Fernando VII), hay que decir que, antes de acceder de nuevo al poder, ya se había formado una Regencia que se apresuró a elaborar disposiciones reaccionarias que borrarán todas las reformas eclesiásticas que los liberales habían diseñado bajo el Trienio. Esa labor de la Regencia posteriormente fue aprobada por Fernando VII, quien comenzó una persecución contra todo y todos los que hubieran tenido algo que ver en el sistema anterior. Sin embargo, y pese a esas persecuciones, durante su reinado no logrará que estuviesen contentos ni los realistas, ni los liberales.

En realidad, resultaba muy difícil querer situar a España, no ya en el día 6 de marzo de 1.820, sino que, en la práctica, ello suponía retrotraer las estructuras sociales, políticas y nuestro Derecho, al mismo mes de 1.808. Hay que afirmar que era imposible, tanto para los partidarios de un bando como los de otro, en una España que aunque unida por sus creencias religiosas, se encontraba dividida por sus ideas políticas.

La Iglesia, por su parte, o al menos su alta jerarquía, no sólo apoyaba cerradamente al monarca, sino que se llegaba a confundir dentro de su sistema político. Con ello volvía a su situación privilegiada del Antiguo Régimen, y conseguía frenar las medidas contrarias a sus intereses operadas en el Trienio. Pero esa "tabla de naufrago", que significaban los Decretos restauradores de Fernando VII, con el tiempo se revelaron contra ella, convirtiéndose en argumento para que los amigos de las reformas señaladas las solicitaran con mayor fuerza y logaran los fundamentos objetivos necesarios para llevarlas a cabo sin ningún complejo, al tiempo que se despertaban viejos deseos de revancha.

Por lo que respecta a este período, la Iglesia volvía por medio de distintas normas jurídicas a su condición privilegiada. Su sistema económico se retrotraía al existente en 1.820, sus bienes le eran devueltos, etc Es decir, se eliminaban en su status los efectos negativos que le había deparado el Trienio.

Un ejemplo realmente esclarecedor de la unión entre la Iglesia y el Estado en este período y su mutua colaboración, lo podemos encontrar en la comparación de dos Decretos:

Por una parte, el citado Decreto de 6 de octubre de 1.823, en que se mandaba en todos los pueblos de la Monarquía que se celebrase una solemne función de desagravio al Santísimo Sacramento: que se cuidara por las Autoridades eclesiásticas disponer misiones que impugnaran las doctrinas perniciosas y heréticas, y pusieran en reclusión a los eclesiásticos que habían sido agentes de la facción desorganizadora¹.

Y por otra, el citado Decreto del Trienio Liberal de 24 de abril de 1.820, por el cual se ordenaba la enseñanza de la Constitución al pueblo por personas dignas en su respeto y consideración, para que conocieran sus derechos y obligaciones².

Lo que resulta curioso de esta comparación es la reacción que produjeron ambas disposiciones en sus destinatarios, es decir, en los eclesiásticos, puesto que, cuando eran requeridos por Fernando VII para presentar alegaciones políticas en sus sermones a favor del absolutismo, no sólo no existía ningún tipo de reacción negativa dentro de la Iglesia, sino que al contrario, cumplían el mandato. Sin embargo, cuando dicha medida fue adoptada por los liberales, se alzaron rápidamente las voces en contra de ese encargo, alegando que se trataba de cuestiones políticas fuera del ministerio de la Iglesia, y que se requería por parte del poder civil una función adoctrinadora que no correspondía a la Iglesia. Curiosamente, ambos decretos son aprobados en los primeros meses de vigencia de ambos regímenes.

¹. *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, ... año 1.823, ...*, cit. pp. 154-155.

². *Gaceta Extraordinaria de Madrid del miércoles 26 de abril de 1.820*. pp. 469-470.

SÉPTIMA

Muerto Fernando VII, nos encontramos con una Iglesia que no desea ser parte del Nuevo Régimen, no quiere saber nada ni de ilustración ni de revoluciones, ya que todo ello no puede sino dañar su status, y un Estado que pretende salir del Antiguo Régimen a marchas forzadas, y modificar una Iglesia que le es hostil.

La legislación del Estado, emanada de los distintos gabinetes, se puede calificar de anticlerical por sus resultados prácticos. Cabe señalar también que el Estado muchas veces aprobaba disposiciones sobre materias que deberían ser reguladas sólo por la propia Iglesia, como eran las referentes al orden interno de la misma.

En esta dialéctica entre Estado e Iglesia ocurre algo realmente curioso, ya que a la vez que se maltratan, se apoyan mutuamente, si bien siempre tratando de influir el uno en la otra.

Las medidas normativas referenciadas suponen sólo el comienzo de una serie de disposiciones contrarias a los intereses de la Iglesia Católica, que, por una parte, ya no serían anuladas, y, por otra, se continuarían e incluso se incrementarían en su contenido a partir del texto constitucional de 1.837.

Se trataba de la primera vez que la monarquía se aliaba con los liberales, de suerte que los miembros más tradicionales de la Iglesia sólo encontraban la defensa a sus ideales en el partido carlista.

En realidad, los diseñadores del Estatuto Real, pretendían que al amparo de éste texto aconteciera en España una época de transición. Sin embargo, la

moderación que contenía no fue bien vista ni por los absolutistas, ni por los progresistas, de forma que la solución de concordia, de renuncia a posiciones doctrinales, no convenció a nadie. Y esa misma concordia, o conjugación de fuerzas que pretendía, acabó destruyendo el mismo orden que buscaba.

Nos encontramos con un ejecutivo fuerte, frente a unas Cámaras débiles y ancladas en un sistema estamental que no satisfacía ni a los absolutistas ni a los progresistas.

En cuanto al estudio de la legislación emanada en desarrollo del texto del Estatuto, resultan interesantes muchos aspectos de la misma. Pero quizá, en este período, las medidas más interesantes se concentraron dentro de la desamortización y de la financiación. Y ello, porque los efectos de la aquella ya no serían anulados, encontrando desde este momento su realización efectiva mediante ventas masivas, y, por lo que respecta a la financiación, hallamos en este momento los antecedentes de la financiación directa de la Iglesia por parte del Estado, que, aunque sólo se concebía en un principio en términos de estricta supervivencia, será desarrollada llegando hasta nuestros días.

La religión se conceptuaba como una garantía nacional, tal y como se verifica de su impartición en la primera y segunda enseñanza. Y es desde ese punto de vista desde donde se deben observar las distintas disposiciones señaladas, de suerte que resulta sencillo entender los antecedentes de la financiación directa de los miembros del clero, -incluso cuando habían sido separados de sus destinos-, o también los derechos que en otros puntos mencionados favorecían a la Iglesia. Y, junto a esta vertiente, también continuaba ese pensamiento liberal, según el cual era posible apoyar a la Iglesia y al tiempo decretar reformas profundas en su status.

OCTAVA

La declaración de confesionalidad contenida en el texto constitucional de 1.837 representaba un avance importante con respecto a su predecesor de 1.812, toda vez que se limitaba en el Art. 11 a contener una declaración cuasi sociológica. Ante esta determinación del Constituyente, debemos preguntarnos si ese artículo satisfacía la realidad social española, o si, por el contrario, se trataba de una concesión para con la Iglesia en términos similares a lo manifestado por Argüelles al respecto del Art. 12 de la Constitución gaditana. La respuesta es clara; se trataba de una tenue concesión que se limitaba a afirmar que la religión católica era la profesada por los españoles sin los matices contenidos en su texto predecesor. Pero, limitándonos a una escrupulosa visión jurídica del Art. 11 se debe afirmar que éste se debe ver como una consideración o un testimonio público de veneración a la religión católica, más que de una garantía.

Esta concreción expuesta fue la que evitó la existencia expresa de la sistematización de los deseos de una “tolerancia religiosa”, de suerte que ésta no sólo moría antes de nacer, al no ser contenida expresamente en el articulado constitucional, sino que, incluso, no se llegó a conseguir su inclusión en una posterior ley sobre tolerancia religiosa. En realidad, se quiso evitar, tanto con esta omisión, como con la no aprobación de la Ley, la polémica que hubiera implicado una declaración formal de libertad religiosa tanto en la Constitución, como en una posterior legislación civil.

Dentro del principio denominado de "elasticidad", se ha señalado como algunos preceptos del texto constitucional podían ser interpretados de formas distintas según fueran vistos por los moderados o los progresistas. Con ello se pretendía que la Constitución fuese base propicia a los dos partidos liberales, (moderados y progresistas), y que, en caso de acceder al Gobierno, pudieran

establecer la regulación que tuvieran por conveniente. Este artículo 11, bajo nuestro punto de vista, era visto por los moderados como un artículo confesional, y, a su vez, era conceptuado por los progresistas como una declaración encubierta de libertad, de tolerancia.

Sobre la mencionada tolerancia religiosa, hay que señalar que se llegó a debatir sobre la aprobación de una Ley para que se declarase expresamente en España, y que no se aprobó, debido a que, incluso los propios liberales, votaron en contra. La razón de esta oposición fue que la ideología liberal era contraria a cualquier identificación del Estado con una concreta religión.

Lo cierto es que, incluso en pleno proceso de radical enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, éste último, como en períodos anteriores, pretendía el apoyo de la Iglesia para el sostenimiento del orden constitucional. No hay que olvidar que si algún país era católico, éste era España, y la negación de este hecho hubiera supuesto el enfrentamiento con el sistema de muchas clases sociales.

Las disposiciones aprobadas en desarrollo de la presente Constitución para la regulación del hecho religioso, como se ha señalado, conllevaban en la mayoría de los casos efectos negativos para el status de la Iglesia católica, y las que de alguna manera podían favorecer sus intereses no lograron los efectos deseados, al no realizarse en la práctica las prescripciones que contenían.

Que la Iglesia Católica en España necesitaba una reforma importante era una afirmación que compartían incluso una gran mayoría de los propios eclesiásticos, pero, aún en este momento, en el que el sector liberal más progresistas estuvo en el poder, no se logró aprobar una regulación jurídica completa que recogiera ese tan deseado "arreglo del clero". Como se ha indicado, se constituyeron Juntas y Comisiones, pero todas ellas fueron inoperantes, y, pese

a sus intentos, no lograron diseñar un nuevo modelo para la Iglesia en nuestro país. Esa falta de un plan de actuación global para con la Iglesia se fue sustituyendo con la aparición de medidas sesgadas, tendentes a solucionar cuestiones parciales, puesto que se limitaban a resolver, en muchas ocasiones bajo ideales de partido, problemas urgentes que planteaba la realidad social de la Iglesia. Ejemplos de esta afirmación los encontramos en todos los campos estudiados en los diferentes Capítulos, pero quizá destaca por encima de todos, el campo de la Financiación directa de la Iglesia, puesto que es sólo después de haberse desamortizado los bienes de ambos cleros, y el cobro del diezmo resultaba de difícil aplicación, cuando se procede a la aprobación de las primeras leyes de financiación.

Por todo lo señalado anteriormente, hay que concluir afirmando que la legislación señalada no respondía a un plan preconcebido de reforma de la Iglesia, sino que, en gran número de ocasiones, obedecía a un intento de conciliar problemas que se planteaban y se iban solucionando, puesto que, como ocurría en períodos anteriores, esta reforma total desbordaba la capacidad de los débiles Gobiernos.

Merece la pena hacer también especial hincapié en el intento de equiparar a los eclesiásticos con los funcionarios públicos, toda vez que, a los hechos señalados en otros Capítulos, hay que sumar ahora la financiación directa por parte del Estado de sus congruas. En este sentido, también debemos señalar la confección conjunta, por el Ministerio de Gracia y Justicia y los Obispos, de los aranceles eclesiásticos.

ANEXO I

ANEXO I

ÍNDICES DE LA LEGISLACION UTILIZADA

I. ÍNDICE CRONOLÓGICO

Año 1.808

La expresión del juramento formulado por José Bonaparte en conformidad con el Estatuto de Bayona, de 13 de julio de 1.808.

Decreto de 4 de diciembre de 1.808. (Sobre desamortización)

Carta dirigida al pueblo de Madrid por el propio Napoleón, en la cual se contestaba a otra anterior firmada por el Ayuntamiento, el clero, nobleza y Diputación, de 16 de diciembre de 1.808.

Año 1.809

Informe sobre el estado del Reino de Nápoles donde se recogían las ideas liberales del gobierno invasor mediante la descripción de los logros realizados en Nápoles, de 20 de febrero de 1.809.

Decreto de 9 de junio de 1.809, sobre deuda pública.

Decreto de 20 de julio de 1.809. (Sobre desamortización)

Decreto de 18 de agosto de 1.809. (Sobre desamortización)

Decreto de 18 de agosto de 1.809. (Sobre desamortización)

Decreto de 20 de agosto de 1.809, determinando el sustento económico al clero.

Decreto de 21 de agosto de 1.809 prohibiendo la licencia de confesar y predicar.

Decreto de 27 de septiembre de 1.809. (Sobre desamortización)

Exposición hecha a S.M. sobre la Deuda Pública de la nación, con los estados de ella, por su ministro de Hacienda, y leída en la primera sesión del Consejo de Estado, 2, 5, 6, 7 y 8 de octubre de 1.809.

Decretos de 17 de octubre de 1.809 aprobados para designar los nombres de los profesores.

Decreto de 19 de octubre de 1.809, conteniendo la abolición del derecho de asilo en las Iglesias.

En suplemento a la Gaceta de Madrid, se insertaban relaciones detalladas de los bienes desamortizados que se enajenaban donde se señalaba no sólo su situación sino también el producto que generaba al año y su valor de adquisición, entre otros, 23 de octubre de 1.809.

Decreto de 30 de octubre de 1.809, determinando la creación de colegios denominados "*liceos*".

Año 1.810

Instrucción de fecha de 1 de enero de 1.810 por la que se dictaban los parámetros a observarse para la elección de los diputados a Cortes.

Decreto de 29 de enero de 1.810 sobre la celebración de Cortes.

Decreto de la Regencia de 18 de junio de 1.810 rectificando los términos de la Junta para la convocatoria de Cortes.

Decreto de 25 de septiembre de 1.810, por el que se mandaban publicar los Decretos anteriores, cantar el Te Deum, y hacer salvos y rogativas.

Decreto de 10 de noviembre de 1.810, sobre Libertad política de imprenta.

Decreto de 1 de diciembre de 1.810, por el que se encargaba al clero que impugnara las máximas con que el último tirano quería seducir a los incautos, y animara a los españoles a la defensa de la patria y de la santa religión: y se mandaba hacer rogativas, y cumplir las ordenanzas que prescribían los actos religiosos en los ejércitos.

Año 1.811

Decreto de 1 de enero de 1.811 negando validez a cualquier acto del monarca prisionero de Napoleón.

Decreto de 23 de enero de 1.811.

Decreto de 1 de febrero de 1.811 para la creación de una Junta consultiva de instrucción pública.

Decreto de 20 de abril de 1.811, sobre aplicar al erario los productos de los beneficios que estén en economato, los de espolios y vacantes y parte de las pensiones eclesiásticas.

Decreto de 3 de mayo de 1.811, que contenía el Reglamento sobre la imposición e inversión de una manda forzosa en los testamentos que se otorgaran en todos los dominios de la Monarquía durante la guerra y diez años después, destinada al socorro de nuestros prisioneros, sus familias, viudas, y otros.

Decreto de 22 de mayo de 1.811, señalando la celebración de una función religiosa en el día de San Fernando en memoria del levantamiento de la Nación a favor del Rey Fernando VII, y aniversario en el día siguiente por los que habían perecido en esta guerra.

Decreto de 31 de diciembre de 1.811, donde se contenía la obligatoriedad de la censura previa mediante la creación de *"una comisión encargada de examinar las obras dramáticas originales o traducidas"*.

Año 1.812

Decreto de 14 de marzo de 1.812 determinando las Solemnidades con que se mandaba firmar, jurar y publicar en Cádiz la Constitución política de la monarquía española.

Orden de 14 de marzo de 1.812, sobre la presentación de la Constitución política de la Monarquía española a la Regencia del Reino.

Decreto de 18 de marzo de 1.812, determinando las Solemnidades con que debía publicarse y jurarse la Constitución política en todos los pueblos de la Monarquía, y en los ejércitos y armada, y también se mandaba hacer visita a las cárceles por este motivo.

Decreto de 18 de marzo de 1.812 por el que se mandaba imprimir y publicar la Constitución política de la Monarquía española: fórmula con que la Regencia debía verificarlo.

Orden de 18 de marzo de 1.812, en la que se mandaba dar una gratificación a las tropas el día en que se publicaba la Constitución de la Monarquía.

Decreto de 17 de abril de 1.812, donde se determinaban las calidades que debían concurrir en los que habían de ser nombrados ministros del Supremo Tribunal de Justicia.

Decreto de 22 de mayo de 1.812, para que el clero y el pueblo prestaran el juramento a la Constitución a un mismo tiempo y sin preferencia.

Decreto de 3 de junio de 1.812, sobre las calidades que deben tener los empleados en la judicatura.

Decreto de 8 de junio de 1.812, por el que se aprobaba el Reglamento del Consejo de Estado.

Decreto de 16 de junio de 1.812 donde se contienen las reglas para verificar la aplicación de parte de los diezmos a las urgencias del Estado.

Decreto de 21 de septiembre de 1.812, por el que se determinaba que los eclesiásticos regulares tenían voto en las elecciones de los Ayuntamientos; pero no podían obtener en ellos ningún oficio.

Año 1.813

Decreto de 18 de febrero de 1.813, determinando providencias interinas sobre el restablecimiento de algunas casas religiosas permitido por el Gobierno.

Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se procedía a la abolición de la Inquisición, y al establecimiento de los tribunales protectores de la fe.

Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se manda leer en las parroquias el Decreto anterior, y el manifiesto en que se exponen sus fundamentos y motivos.

Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se mandan quitar de los parajes públicos y destruir las pinturas e inscripciones de los castigos impuestos por la Inquisición.

Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se declaraban nacionales los bienes que fueron de la Inquisición, y se disponían varias medidas sobre su ocupación, y sobre el sueldo y destino de los individuos de dicho tribunal.

Decreto de 8 de marzo de 1.813, por el cual se ordenaba la creación de una Regencia provisional, compuesta de los tres Consejeros de Estado más antiguos.

Decreto de 8 de marzo de 1.813, por el cual se declara presidente de la misma Regencia al M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo.

Decreto de 9 de marzo de 1.813, por el que se ordenaba que para la admisión en colegios del ejército o de la armada no se admitieran informaciones de nobleza, ni hubiera distinciones perjudiciales entre sus individuos.

Decreto de 13 de abril de 1.813, sobre la concesión y fórmulas de las cartas de naturaleza y de ciudadano.

Decreto de 26 de mayo de 1.813, por el que se mandaban quitar todos los signos de vasallaje que hubiera en los pueblos.

Decreto de 10 de junio de 1.813, conteniendo adiciones a la ley de libertad de imprenta.

Decreto de 10 de junio de 1.813, conteniendo el Reglamento de las Juntas de censura.

Decreto de 14 de junio de 1.813, por el que se señalaba que podían ser Diputados de Cortes los Catedráticos y Regulares secularizados, pero no los profesos de las Órdenes Militares.

Decreto de 15 de agosto de 1.813, por el que se aprobaba el Reglamento para la liquidación de la deuda nacional.

Decreto de 26 de agosto de 1.813, sobre el restablecimiento de algunos conventos y dotación de sus individuos.

Orden de 26 de agosto de 1.813, por la que se exigía responsabilidad a los Intendentes que no cumpliesen lo mandado acerca de la entrega de conventos a los Prelados regulares.

Orden de 7 de septiembre de 1.813, por la que se señalaba qué eclesiástico debía ejercer los actos señalados en el artículo 86 de la Constitución en defecto del R. Obispo.

Decreto de 1 de octubre de 1.813, por el que se mandaba cantar un Te deum por la instalación de las Cortes ordinarias, y que hubiera rogativas públicas por tres días, implorando el auxilio divino por el acierto del Congreso.

Año 1.814

Decreto de 2 de febrero de 1.814, por el que inhibían al Rey del ejercicio de sus facultades hasta que hubiera jurado la Constitución.

Orden de 2 de marzo de 1.814, previniendo se cantara un Te Deum, y hubiera tres días de rogativas públicas por la instalación de las Cortes en su segunda legislatura.

Proyecto de 7 de marzo de 1.814, conocido *informe Quintana*. (Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública).

Manifiesto del Rey de 4 de mayo de 1.814, declarando por nula y de ningún valor ni efecto la Constitución de las llamadas Cortes Generales y extraordinarias de la nación, disponiendo al mismo tiempo lo que ha de observarse, a fin de que no se interrumpa la administración de justicia, y el orden político y gubernativo de los pueblos.

Circular de 4 de mayo de 1.814, mandando observar lo que se prevenía sobre libertad de imprenta.

Circular de 15 de mayo de 1.814, mandando que se implorara por fervorosas rogativas a Dios el acierto que desea S.M. en el Gobierno de la Monarquía.

Real Orden de 20 de mayo de 1.814, relativa a que se hiciera entrega a los regulares de sus conventos y propiedades.

Real Orden de 23 de mayo de 1.814, relativa a la entrega a las religiosas de sus conventos y propiedades.

Real Decreto de 24 de mayo de 1.814, mandando a los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos celasen en el cumplimiento de su alto ministerio, y que sus respectivos súbditos guardasen y observasen en sus acciones, opiniones y escritos la verdadera y sana doctrina, no permitiéndose se hicieran asociaciones y ligas en perjuicio de la tranquilidad pública.

Real Orden de 24 de mayo de 1.814, comunicada por el primer Secretario de Estado al Nuncio de S.S. para que vuelva a esta Corte a desempeñar su legacía.

Real Decreto de 27 de mayo de 1.814 restableciendo el Consejo Real en el pie por ahora que estaba en el año 1.808, nombrando Presidente y Ministros que le han de componer.

Real Decreto de 3 de junio por el se declaraban nulas todas las plazas del Consejo de Estado y los honores que se hayan concedido por la Junta Central y demás gobiernos hasta la vuelta de Su Majestad.

Real Decreto de 5 de junio de 1.814, por el cual se restablece el Consejo de la Cámara bajo el pie que se encontraba en el año 1.808.

Real Orden de 24 de junio de 1.814, comunicada por el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia al Ministro de Hacienda, en la cual mandaba S.M. que los intendentes, comisionados del Crédito público, y demás empleados de la Real Hacienda, devolvieran y entregaran inmediatamente los conventos, bienes y rentas a los frailes y religiosas de las Órdenes militares, según se mandó en 20 de Mayo último.

Circular de 27 de junio de 1.814, mandando que los que no hubieran tomado posesión hasta ahora de los empleos conferidos por la Regencia, no tenían necesidad de jurar el guardar la Constitución, y que tampoco estaban en el caso de cumplir los que hubieran jurado.

Real Decreto de 21 de julio de 1.814, por el cual se restablece el Consejo de Inquisición y los demás tribunales del Santo Oficio al ejercicio de su jurisdicción, guardando el uso y ordenanzas con que se gobernaban en el año de 1.808.

Circular de 15 de agosto de 1.814, mandando a los Intendentes Directores del Crédito Público, o personas a quienes correspondía la recaudación de intereses reales, pusieran sin el menor obstáculo ni detención a disposición de los Tesoreros del Santo Oficio todas las fincas de cualesquiera clase que fueran pertenecientes al mismo Tribunal.

Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo, de 31 de agosto de 1.814, por la cual se servía aprobar el reglamento propuesto y formado para el reintegro de los bienes confiscados por el Gobierno intruso, con lo demás que se expresaba.

Real Decreto de 9 de octubre de 1.814, mandando que se expidieran Circulares a los M.RR. Arzobispos, R.R. Obispos y demás Prelados de España e Indias, con el objeto de que escribieran pastorales a sus respectivos diocesanos, a fin de corregir la corrupción casi general que había en las costumbres, previniendo a los párrocos para que persuadieran la obligación que tenían los padres de familia de enviar a sus hijos a la instrucción doctrinal.

Real Orden de 25 de diciembre de 1.814, por la que se mandaba que las Juntas para preparar y hacer elecciones de Justicias celebradas en muchos pueblos en las Iglesias, se ejecutaran en lo sucesivo en las casas de Ayuntamiento donde se reunían para tratar los asuntos del Concejo.

Año 1.815

Real Orden de 2 de marzo de 1.815, donde se mandaba cantar un solemne Te Deum en todas las iglesias de la Monarquía por el aniversario de la entrada de S.M. y A.A en el territorio español.

Real Orden de 12 de abril de 1.815, previniendo a los oradores que en los púlpitos no expusieran a los oyentes más que las doctrinas evangélicas, y cuanto sea conveniente a corregir los vicios, como por repetidas leyes y órdenes, y que a continuación se expresaban, esta mandado.

Real Orden de 25 de abril de 1.815, por la que prohibía S.M. todos los periódicos que se publicaban dentro y fuera de la Corte, y mandaba que sólo se publicaran la Gaceta y el Diario de Madrid.

Real Orden de 1 de junio de 1.815, donde se mandaba cantar un solemne Te Deum en todas las iglesias de la Monarquía por la victoria que obtuvieron los ejércitos aliados sobre el enemigo común el 18 de junio.

Edicto de la Suprema y general Inquisición de 22 de julio de 1.815, en el que se anotaban y señaladamente se condenaban como contrarios a la Religión y al Estado las obras o folletos que en estos últimos tiempos se habían impreso; cuya prohibición también era extensiva, y con acuerdo de S.M. se mandaba recoger hasta que fueran examinados y calificados los designados en lista adjunta, que con el nombre de periódicos habían circulado por toda la Nación.

Año 1.816

Real Decreto de 26 de junio de 1.816, sobre la provisión de los empleos así civiles como eclesiásticos, mediante los que son correspondientes a la Cámara consultar; y atribuciones de las Secretarías del Despacho de Gracia y Justicia sobre negocios contenciosos.

Real Decreto de 8 de julio de 1.816, sobre el establecimiento de escuelas de educación para niñas en los conventos de religiosas.

Año 1.817

Bula expedida por Su santidad en Roma el 15 de abril de 1.817, donde se concedía indulto al Rey nuestro señor Fernando VII para que válida, libre y lícitamente pudiese por el espacio de seis años exigir para el alivio de su Real Erario de todos y cada uno de los frutos del Clero, tanto secular como regular, el subsidio anual de 30 millones de reales.

Circular emitida por el Consejo real de 30 de junio de 1.817, para que se renovasen para su cumplimiento las leyes y penas acordadas sobre los delitos de la prensa en cuanto a la propiedad de los autores acerca de sus obras.

Real Orden de 10 de octubre de 1.817 por la que se declaraban sujetas al pago del subsidio extraordinario de los treinta millones, y de la contribución general del reino según que fuere la naturaleza de los bienes, las anualidades de prebendas eclesiásticas destinadas para la extinción de la deuda del Estado.

Real Orden de 11 de octubre de 1.817, donde se reiteraba a todas las autoridades así civiles como militares la observancia de la Ley 11, Título XXVIII, del Libro I de la Novísima Recopilación, que mandaba que a ningún eclesiástico extranjero secular o regular se le autorizara por ningún pretexto entrar en estos reinos para cuestar o pedir limosna.

Año 1.818

Real Orden de 3 de enero de 1.818, por la que se declaraban exentos de la contribución general los derechos de estola o pie de altar como tales; pero no los bienes gravados con fundaciones piadosas.

Real Orden de 3 de enero de 1.818, por la que se declaraba el sentido que tenía y había de darse a la bula de Su Santidad de 15 de abril último sobre quienes de los perceptores de diezmos estaban sujetos al pago de la contribución general.

Circular del Consejo Real de 10 de marzo de 1.818, que reiteraba el puntual cumplimiento de lo prevenido en la Real Orden de 22 de febrero de 1.815, a efecto de que fueran castigados bajo la forma que se expresaba los escándalos y delitos públicos, como voluntarias separaciones de matrimonio, palabras obscenas, las irrelevancias a los templos y otros.

Real Orden de 16 de marzo de 1.818, por la que se reiteraba cuanto estaba prevenido para que sobre los diezmos poseídos por personas eclesiásticas no se exigiera contribución.

Circular de 28 de marzo de 1.818, por la que se expresaba que en la contribución general no debían disminuirse las fundaciones piadosas tanto como sea la parte de aquella repartida y satisfecha, pero sí los productos de los bienes ajenos a ellas.

Real Orden de 26 de abril de 1.818, por la que se mandaba a los curas párrocos respectivamente en sus pueblos y jurisdicciones fueran vocales de las juntas particulares de contribuciones y repartimiento, mientras el Diocesano no diputara eclesiástico de su satisfacción.

Real Decreto de 4 de julio de 1.818, por el que se S.M. se dignaba instituir nuevamente una Junta para que exclusivamente entendiera en el restablecimiento de los Jesuitas, acordado en 29 de mayo de 1.815 y 3 del mismo mes del año siguiente.

Real Orden de 24 de septiembre de 1.818, por la que se prevenía que los religiosos secularizados por Prelados diocesanos en tiempo de la ocupación francesa se trasladaran a sus respectivos conventos sin dilación alguna, saliendo también de la Corte para sus diócesis cuantos en ella se hallaran con bulas corrientes de secularización.

Real Orden de 5 de octubre de 1.818, comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Comisión Apostólica del subsidio extraordinario: acordaba S.M. que en el presente año se redujera a veinticinco millones el repartimiento del subsidio en lugar de los treinta a que estaban afectas satisfacer las rentas eclesiásticas.

Año 1.819

Real Orden de 8 de abril de 1.819, por la que se encargaba a los Diocesanos y Prelados Regulares que hicieran que los religiosos secularizados y otros que presumían pasar por tales observaran, cuidadosamente y sin excusa, cuanto se prevenía y estaba acordado sobre la materia en repetidas Reales Órdenes.

Real Orden de 28 de agosto de 1.819, por la que se determinaba que los eclesiásticos por lo honorífico, y como contribuyentes, podían ser nombrados por las Juntas locales como peritos repartidores de la contribución general; pero sin obligarlos a la aceptación si lo resistieran.

Real Decreto de 13 de noviembre de 1.819, por el que S.M. determinaba que los M.RR. Arzobispos y RR. Obispos remitieran listas e informes de todos los eclesiásticos seculares y regulares de sus respectivas diócesis, que por sus virtudes y méritos debían ser colocados en las prebendas y dignidades eclesiásticas.

Año 1.820

Real Decreto de 3 de marzo de 1.820, por el que se invitaba al Consejo de Estado, el Supremo de Castilla y a los demás de la Nación, a que consultaran a S.M. todo cuanto creyeran conveniente para el mejor orden de la Monarquía.

Real Decreto de 6 de marzo de 1.820, por el que S.M. ordenaba que el Consejo Supremo de Castilla dispusiera lo conveniente para la celebración de Cortes, por ser con arreglo a la observancia de las leyes fundamentales que S.M. tiene juradas.

Real Decreto de 7 de marzo de 1.820 por el que Fernando VII expresaba su decisión de jurar la Constitución promulgada en Cádiz, lo que efectuó en el Salón de Embajadores del Palacio Real de Madrid el día 9 de marzo.

Decreto de 9 de marzo de 1.820, por el que se creaba dicha Junta Provisional hasta la convocatoria de Cortes.

Decreto de 9 de marzo de 1.820 para que se procediese en todos los pueblos de la monarquía a la celebración inmediata de elecciones de Alcaldes y Ayuntamientos constitucionales con arreglo a lo prevenido en la Constitución política sancionada en Cádiz.

Manifiesto de Fernando VII a la Nación de fecha de 10 de marzo de 1.820.

Orden de 10 de marzo de 1.820 se declaraba incompatible con la Constitución el Tribunal de la Inquisición, por lo que desde ese día se suprimía el referido Tribunal, junto con todos sus órganos dependientes.

Orden de 10 de marzo de 1.820, por la cual se restablecían en nuestro Derecho las disposiciones promulgadas por las Cortes de Cádiz sobre libertad de imprenta.

Orden de 10 de marzo de 1.820, por la que se expresaba un aviso dirigido a evitar abusos de este derecho.

Decreto de 16 de marzo de 1.820, que prescribía que se procediera de nuevo al juramento de la Constitución de Cádiz en toda la nación.

Orden de 21 de marzo de 1.820 para el restablecimiento de las Junta Suprema y Provinciales de Censura.

Decreto de 24 de marzo de 1.820, se decretaba la unidad de recaudación y distribución de las rentas públicas.

Circular de 25 de marzo de 1.820, desarrollando el Decreto de 24 de marzo de 1.820.

Decreto de 26 de marzo de 1.820, por el cual se consideraba indigno de ser español a todo aquel que no jurara sin reservas la Constitución.

Decreto de 3 de abril de 1.820, por el que se declaraban abolidos los privilegios del Real Patrimonio.

Decreto de 13 de abril de 1.820, por la que se incorporaban a la Nación los señoríos jurisdiccionales, y quedaban abolidos los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos.

Circular emitida por el obispo de Barcelona en fecha de 17 de abril de 1.820, -se trae a colación por su publicación en la Gaceta de Madrid.

Decreto de 21 de abril de 1.820, sobre las secularizaciones.

Decreto de 24 de abril de 1.820 mediante el cual se señalaba la enseñanza al pueblo de la Constitución, "por personas dignas en su respeto y consideración", para que conocieran sus derechos y obligaciones.

Real Decreto de 28 de abril último para que se tenga efecto la separación de los palacios y sitios de recreo, que reserva S.M., de las demás fincas que ha tenido a bien ceder para el pago de la deuda pública.

El 18 de mayo de 1.820 aparecía en la Gaceta -por ello se trae a colación-, el envío de una carta, por parte del propio monarca, a Roma donde se exponía que el nuevo régimen respetaría la religión católica en España. A esa carta, le siguió una contestación por parte del Sumo Pontífice.

Decreto de 30 de mayo de 1.820 que recogía las fincas y derechos conocidos con el nombre de Patrimonio Real, que resultaban de la lista impresa que se incluía.

Reglamento de 30 de mayo de 1.820 para la Dirección o Junta Gubernativa de la Hacienda pública.

Decreto de 29 de junio de 1.821, estableciendo el sistema administrativo de la Hacienda Pública.

Orden de 9 de julio de 1.820, para que se anunciara a toda la Nación el solemne juramento prestado por el Rey ante las Cortes, prevenido por la Constitución política de la monarquía.

Orden de 16 de julio de 1.820, para que en todas las Iglesias de la monarquía se den gracias al Altísimo por la instalación y apertura de las Cortes, implorándose el divino auxilio para el acierto de sus resoluciones y las del Gobierno de S.M.

Orden de 17 de julio de 1.820, para que se diera toda la notoriedad posible al Decreto de 19 de abril de 1.814, por el que se declaraba que el tratamiento de Su Majestad correspondía solamente al Rey.

Decreto de 6 de agosto de 1.820, restableciendo interinamente el plan de estudios publicado en Cédula de 12 de julio de 1.807.

Decreto de 8 de agosto de 1.820 sobre la dotación de la Real Casa.

Decreto de 9 de agosto de 1.820, se mandaba proceder a la venta de todos los bienes asignados al crédito público.

Orden de 9 de agosto de 1.820, por la que se ratificaba el desprendimiento hecho por S.M. de parte de las fincas que antes se conocían con el nombre de Patrimonio Real; previniendo que el Crédito público las incluya en la venta de bienes acordada, reservando o postergando el Lomo del Grullo en Sevilla.

Decreto de 13 de agosto de 1.820, mediante el cual se condonaba una parte de su contribución a los pueblos que satisficieran los dos tercios de ella en las épocas que se expresaban.

Decreto de 17 de agosto de 1.820, que contenía la supresión de la Compañía de Jesús, y restitución al Cabildo de la iglesia de S. Isidro de esta Corte de los derechos y funciones que obtuvo al tiempo de su erección.

Orden de 21 de agosto de 1.820, por la cual se mandaba observar en todas sus partes el decreto de las Cortes extraordinarias de 14 de junio de 1.813, y se desestimaba la solicitud de D. Josef Fajardo y Vargas, pidiendo que los frailes clérigos pudieran elegir y ser elegidos Diputados a Cortes.

Decreto de 31 de agosto de 1.820 que aprobaba el Reglamento provisional para la milicia nacional local.

Orden de 1 de septiembre de 1.820 recordando que había sido publicada en las Cortes la ley de 17 de agosto último, sancionando por S.M. en 30 del mismo, sobre la supresión en toda la monarquía de la Compañía de Jesús.

Decreto de 2 de septiembre de 1.820, acerca de los sueldos que habían de gozar los eclesiásticos que servían empleos civiles, y que no podían obtener más de un beneficio.

Decreto de 3 de septiembre de 1.820, que contenía el Reglamento para la venta de fincas consignadas al crédito público.

Decreto de 4 de septiembre de 1.820, por el que se contenía que en Madrid, una vez promulgada una disposición, el Jefe político, acompañado del Ayuntamiento, salía en público desde donde se juntaba ordinariamente el pleno, y pasando a la Panadería, sita en la plaza de la Constitución, promulgaba la ley desde el balcón principal de aquella, haciéndola leer por el Secretario del expresado Ayuntamiento.

Orden de 8 de septiembre de 1.820, por la que se mandaba que en el dosel del trono del salón de Cortes y sobre la puerta principal de éste, se inscriban palabras que perpetúen la memoria del juramento del Rey.

Orden de 11 de septiembre de 1.820, para que la academia de S. Fernando publicara un programa, sobre cual ofreciera un premio al artista español que presentara el mejor pensamiento para perpetuar la memoria del juramento de S.M. en el seno del Congreso.

Decreto de 26 de septiembre de 1.820, por el que se declaraban desaforados y sujetos a la jurisdicción ordinaria todos los Eclesiásticos seculares o regulares por el hecho mismo de cometer algún delito que merezca pena "corporis afflictiva".

Decreto de 27 de septiembre de 1.820, que suprimía toda especie de vinculaciones.

Decreto 1 de octubre de 1.820, por el que se acordaba la supresión de monacales y reforma de Regulares.

Decreto de 2 de octubre de 1.820, asegurando el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria.

Decreto de 21 de octubre de 1.820, sobre las reuniones de individuos para discutir en público asuntos políticos.

Decreto de 22 de octubre de 1.820 que aprobaba el Reglamento acerca de la libertad de imprenta.

Orden de 24 de octubre de 1.820, previniendo a la Junta nacional de crédito público, para la próxima legislatura, presente al Congreso la tasación de todas las fincas que están a disposición de aquel establecimiento.

Orden de 26 de octubre de 1.820, previniendo que el Gobierno tomara las medidas convenientes para cortar el abuso que se había notado al venderse por parte de algunos monasterios sus efectos.

Decreto de 26 de octubre de 1.820, relevando a los sesenta y nueve ex-Diputados que firmaron el manifiesto o representación al Rey en 12 de abril de 1.814 de la formación de causa, bajo las condiciones que se expresan.

Decreto de 6 de noviembre de 1.820, sobre dotación de los Capellanes párrocos castrenses.

Decreto de 6 de noviembre de 1.820 que contenía el Plan de gastos y contribuciones para el año corriente desde 1 de julio hasta fin de junio próximo.

Decreto de 7 de noviembre de 1.820, sobre la venta de efectos de las casas de Regulares suprimidas.

Decreto de 8 de noviembre de 1.820, que recogía las medidas sobre contribuciones del clero.

Año 1.821

Orden de 19 de marzo de 1.821, por la que se determina que el Gobierno en la distribución y aplicación de alhajas para las casas monacales que hayan de subsistir observe las reglas prescritas respecto a las que pertenecían a conventos suprimidos.

Orden de 20 de marzo de 1.821, prescribiendo reglas acerca de repartimento de Bulas.

Decreto de 21 de marzo de 1.821, por el que se tasaba el precio de Bulas para el año de 1.822.

Orden de 31 de marzo de 1.821, mandando que se llevase a efecto el cumplimiento de la ley de 25 de octubre de 1.820 sobre secularización de regulares.

Orden de 2 de abril de 1.821, por la cual se establecía que sólo los legos profesos de los monasterios tenían derecho para obtener cuando se secularicen la asignación de 100 ducados.

Orden de 6 de abril de 1.821, por la que se consideraba al Episcopado como un cargo público de nombramiento del Gobierno, y por lo mismo comprendido en el espíritu del Art. 97 de la Constitución.

Orden de 8 de abril de 1.821, por la que se mandaba que se suspendiera la provisión de beneficios y capellanías que no tuvieran aneja cura de almas, interin se acordase lo conveniente sobre el plan general del clero.

Orden de 14 de abril de 1.821, por la cual se recomendaba que el Gobierno procediera en uso de sus facultades a la formación de la lista de libros que no debían correr, y que tomaran las medidas más enérgicas para que no circularan aquellos, ni los escritos ni estampas obscenas.

Decreto de 17 de abril de 1.821, prohibiendo las prestaciones de dinero que se hacían a Roma, y asignando una cuota anual a Su Santidad.

Orden de 25 de abril de 1.821, por la que se declaraban libres de pago de la contribución directa las rentas que con título de primicias perciben los Cabildos eclesiásticos y Curas párrocos.

Orden de 30 de abril de 1.821, por la que se adoptaban varias medidas para reprimir y castigar a los eclesiásticos que abusando de su sagrado ministerio intentaban sumir a la nación en una guerra civil.

Orden de 5 de mayo de 1.821, mandando que se publicara mensualmente una razón circunstanciada de las fincas que se vendían.

Orden de 9 de mayo de 1.821 que declaraba no hallarse comprendidas en el Art. 2 de la ley de libertad de imprenta las conclusiones que versan sobre la Sagrada Escritura. Pero, siempre y cuando se tratara de creaciones propias de las Universidades y hubieran sido censuradas previamente por los doctores designados por los Estatutos de dichas Universidades.

Orden de 13 de mayo de 1.821, avisando el nombramiento de individuos para la Junta protectora de libertad de imprenta y juramentos de los mismos.

Orden de 21 de mayo de 1.821, autorizaban al Gobierno para que habilitase a las comunidades religiosas de ambos sexos en la venta de fincas para el pago de sus deudas.

Decreto de 24 de mayo de 1.821 se anulaban las ventas de todas clases de bienes pertenecientes al clero y fábrica de iglesias que no se hicieran por el Crédito Público.

Decreto de 28 de mayo de 1.821, sobre que el pago del diezmo de dicho año se verifique con arreglo a la reducción de su mitad.

Decreto de 7 de junio de 1.821, donde se contenían las reglas para el procedimiento en los delitos de los Diputados por abuso de libertad de imprenta.

Orden de 8 de junio de 1.821 para que el Gobierno pusiera todos los medios más eficaces a fin de conseguir que Su Santidad conceda las prórrogas de tiempo para las secularizaciones de los regulares.

Orden de 11 de junio de 1.821 para que la asignación hecha a cada monje sobre el crédito público se tuviera por congrua suficiente para su secularización.

Orden de 12 de junio de 1.821, por la que se declaraba que los párrocos que vivían fuera del recinto de sus parroquias no podían dar ni recibir votos en las Juntas electorales de las en que sean pastores.

Decreto de 23 de junio de 1.821, era el que contenía el Reglamento para las Juntas Protectoras de Libertad de Imprenta.

Decreto de 26 de junio de 1.821, por el que se declaraba que no podían ser nombrados Diputados a Cortes los eclesiásticos que se expresaban.

Decreto de 29 de junio de 1.821 por el que se aportaban las reglas para la formación de la Junta diocesana.

Orden de 29 de junio de 1.821, por la cual quedaba autorizado el Gobierno para aprobar los arbitrios que las Diputaciones provinciales le propusieran con el fin de dotar con ellos escuelas de primera enseñanza.

Decreto de 29 de junio de 1.821, por el que se contenía el Reglamento general para la instrucción pública.

Decreto de 29 de junio de 1.821, estableciendo el Presupuesto General de Gastos para el presente año económico.

Decreto de 29 de junio de 1.821, sobre el repartimiento de 30 millones al clero por contribución.

Decreto de 29 de junio de 1.821, por el que se operaba la reducción del diezmo y primicias.

Decreto de 29 de octubre de 1.821, que contenía la fórmula del juramento que había de prestarse por la tropa a las Banderas y Estandartes.

Año 1.822

Decreto de 27 de enero de 1.822, por el que se procedía a una nueva división del territorio español.

Decreto de 12 de febrero de 1.822, que contenía una Ley adicional a la de 22 de octubre de 1.820 sobre libertad de imprenta.

Orden de 15 de marzo de 1.822, para que a los religiosos que de dos conventos se reunieran en uno se les pagaría por el crédito público las pensiones como a los demás de su clase.

Decreto de 2 de abril de 1.822, por el que los Jefes Políticos de acuerdo con los diocesanos remitieran al Gobierno en Mayo de cada año, razón del estado de los conventos de sus distritos que se hallaran en el caso de ser suprimidos.

Orden de 6 de abril de 1.822, por la que se autorizaba al Gobierno para que aplicase conventos suprimidos, y algún jardín o huerto incorporados a ellos, a establecimientos de escuelas especiales u otro literario.

Orden de 16 de abril de 1.822, por la que se prescribía que cesaran las asignaciones que cobraban del Erario público algunas comunidades de religiosas.

Decreto de 23 de abril de 1.822, por el que se señalaban las reglas que habían de ser observadas por las Juntas diocesanas en el reparto del medio diezmo del año anterior.

Decreto de 26 de abril de 1.822, para que los M.RR. Arzobispos y RR. Obispos no expidieran dimisorias, ni confieran órdenes mayores hasta el arreglo del clero, sino a las personas que se expresan; y en la provisión y supresión de curatos se arreglen a lo que se les previene.

Orden de 6 de mayo de 1.822, por la que se autorizaba al Gobierno para extrañar del reino y ocupar las temporalidades de los RR. Obispos cuando éstos se desvíen de los deberes de su ministerio.

Orden de 6 de mayo de 1.822, por la que se prohibía que los Ayuntamientos, mayordomos y otras personas pagaran a costa de los fondos públicos refrescos y otros obsequios con motivo de fiestas eclesiásticas; así como también el hacer aquellos cuestaciones para gastos de iglesia.

Orden de 11 de mayo de 1.822, señalando que las asignaciones de los religiosos secularizados se pagaran con preferencia a otras atenciones menos urgentes.

Orden de 14 de mayo de 1.822, por la que se sancionaba que los pueblos de la Nación no pagarían de los fondos de propios y arbitrios más funciones de Iglesia que la del Corpus, la del aniversario de la Constitución y la de los patronos de cada pueblo.

Decreto de 15 de mayo de 1.822, sobre arancel de los derechos que se han de exigir por los Reales títulos, presentaciones eclesiásticas y otros despachos que se expidan por las secretarías del Consejo de Estado.

Orden de 20 de mayo de 1.822, para que a los religiosos que de dos conventos se reunieran en uno se les pagaría por el crédito público las pensiones como a los demás de su clase.

Orden de 22 de mayo de 1.822, para que a las monjas que se reúnan a otros conventos por haberse suprimido los suyos se las señalará igual pensión que a los religiosos en semejante caso.

Decreto de 8 de junio de 1.822, se promulgaba la Ley que aprobaba el Código Penal de 1.822.

Decreto de 17 de junio de 1.822, por el que se señalaba que las Juntas diocesanas continuarán el presente año en la recaudación y distribución del medio diezmo en los términos que se expresa.

Orden de 19 de junio de 1.822, por la que se suprimían los conventos de la orden de S. Francisco de Bermeo y el de Forrua, y se autoriza al Gobierno hasta la próxima legislatura para que tome igual medida con los demás conventos que se hallen en el mismo caso.

Orden de 24 de junio de 1.822, por la cual los curas párrocos después de recibir la congrua de 300 ducados tenían derecho como los demás partícipes del medio diezmo al acervo común sobrante en tanto y cuanto hayan percibido en el último quinquenio en proporción a los frutos repartibles.

Decreto de 25 de junio de 1.822, por el que se fijaba en 20 millones la cantidad con que deba contribuir el clero por vía de subsidio en el año económico que acaba en 30 de junio de 1.823.

Decreto de 26 de junio de 1.822, por el que se aprobaba la Ley que habilitaba a todos los regulares secularizados de uno y otro sexo para adquirir bienes de cualquier clase.

Decreto de 28 de junio de 1.822, sobre la obligación de residir personalmente los beneficios eclesiásticos excepto en los casos que se expresa.

Decreto de 29 de junio de 1.822, de Medidas y facultades que se daban al Gobierno para mejorar el estado político de la Nación.

Decreto de 29 de junio de 1.822, por el que se determinaba el modo de repartir el medio diezmo y la primicia.

Decreto de 29 de junio de 1.822, fijando el repartimiento de 20 millones de rs. sobre el clero.

Decreto de 1 de noviembre de 1.822, por el que se facultaba al Gobierno para trasladar de un punto a otro, remover y separar a empleados eclesiásticos, civiles y militares y suspender a los individuos de los Ayuntamientos.

Decreto de 1 de noviembre de 1.822 por el que se dejaba a la prudencia del Gobierno el señalamiento de alimentos y pensiones a los Prelados y eclesiásticos separados de sus diócesis o del ejercicio de su ministerio: las sillas de los obispos extrañados del reino se declaran vacantes, y se toman otras medidas contra los facciosos y empleados que no contribuyan a su exterminio.

Decreto de 15 de noviembre de 1.822, por el que se contenía la ley por la que se suprimían todos los conventos y monasterios que estuvieran en despoblados y en pueblos que no pasaran de 450 vecinos, excepto el de San Lorenzo del Escorial.

Año 1.823

Decreto de 18 de febrero de 1.823, por el que se recogía una amnistía a los facciosos, sus jefes o cabezas, que hallándose con las armas en la mano las depusieran y se presentaran a las autoridades antes de 1 de abril.

Circular de 28 de abril de 1.823, por la que se mandaba a los Prelados que recogieran las licencias y títulos que se hubieran expedido a favor de los Regulares secularizados, quienes deberían restituirse a los pueblos de su naturaleza, con lo demás que se expresaba.

Acta de la instalación solemne y juramento de la Regencia del Reino de 26 de mayo de 1.823.

Orden de 26 de mayo de 1.823, por la que se señalaba el tratamiento de la Regencia y de sus individuos, y su aviso de su instalación a las Autoridades de Madrid a toda la Nación.

Orden de 30 de mayo de 1.823 expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia, en que se mandaba reunir el Supremo Tribunal de la Cámara para que continuara desempeñando las atribuciones de sus instituto.

Orden Circular de 5 de junio de 1.823, expedida por el Ministro de Gracia y Justicia, en que manda que los eclesiásticos trasladados de una diócesis a otra en virtud del Decreto de Cortes de 1º de noviembre de 1.822, se restituyan a sus respectivas iglesias.

Orden Circular de 6 de junio de 1.823 se anulaba el Decreto de las Cortes de 29 de junio de 1.821 relativo a diezmos; y reducía el subsidio anual a diez millones.

Orden de 11 de junio de 1.823, por la que se declaraban nulos todos los actos y decretos del Gobierno constitucional sobre Regulares, y se reducían al estado que tenían antes.

Orden Circular de 16 de junio de 1.823, en la que se prevenía a los Ordinarios que separasen a los eclesiásticos de las iglesias que se les hubieran encargado durante el pretendido régimen constitucional, y de aquellos cuyas cualidades canónicas no les constaran.

Orden Circular de 30 de junio de 1.823, por la que se restablecía el modo de dirigir las preces a Roma, bajo el orden y método que se observaba antes del 7 de marzo de 1.820.

Orden Circular de 31 de junio de 1.823, para que se recogieran las licencias de confesar y predicar, expedidas en favor de los Regulares secularizados, como también los títulos de Curatos, de servidores, beneficios y Capellanías.

Circular de 22 de julio de 1.823, para que los Obispos y demás Prelados compelieran a los Clérigos que se hubiesen ausentado voluntariamente de sus iglesias a residir en ellas.

Orden Circular de 12 de agosto de 1.823, en la que se declaraba que en consecuencia de estar acordado el reintegro a los monasterios de sus bienes y rentas, pertenecían los frutos pendientes en las fincas enajenadas, según y en la forma que se expresaba, a los compradores o arrendatarios.

Decreto de 14 de agosto de 1.823, por el que se efectuaban nuevas adiciones a la Ley de 22 de octubre de 1.820.

Orden de 2 de septiembre de 1.823, en la que se prevenía que quedaba sin efecto el Decreto de las llamadas Cortes de 9 de noviembre de 1.820, por el que se incorporó al Crédito público todos los bienes raíces, derechos y acciones de las capellanías vacantes, los de ermitas, santuarios, cofradías y otros.

Orden de la Regencia de 22 de septiembre de 1.823, en la que se reitera la Real Orden de 22 de febrero de 1.815, para que el Gobierno cuidara de que se castigaran los escándalos y delitos públicos, palabras obscenas y las irrelevancias en los templos.

Decreto de 24 de septiembre de 1.823, para que en toda las Universidades y Seminarios Conciliares del Reino se enseñara, por ahora, lo dispuesto en la Circular del Consejo real de 27 de octubre de 1.818.

Manifiesto de S.M. de 1 de octubre de 1.823 declarando haber carecido de entera libertad desde el día 7 de marzo de 1.820, hasta el 1º de octubre de 1.823, por lo que, eran nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional: y en cuanto a lo decretado y ordenado por la Junta provisional y la Regencia, aquella creada en Oyarzun, y ésta en Madrid, lo aprueba S.M., entendiéndose interinamente.

Real Orden de 4 de octubre de 1.823 que determinaba que quienes habían tenido algo que ver en el Régimen anterior no podían acercarse a menos de cinco leguas en contorno del viaje de S.M. a Madrid, ni tampoco podían entrar en la Capital ni en los Sitios reales, debiendo permanecer a un radio de quince leguas.

Real Decreto de su Majestad de 6 de octubre de 1.823, en que se mandaba en todos los pueblos de la Monarquía que se celebrase una solemne función de desagravio al Santísimo Sacramento: que se cuidara por las Autoridades eclesiásticas disponer misiones que impugnaran las doctrinas perniciosas y heréticas, y pusieran en reclusión a los eclesiásticos que habían sido agentes de la facción desorganizadora.

Real Decreto de 9 de octubre de 1.823 para que en todas las iglesias de la Monarquía se celebre un solemne funeral, en sufragio de las almas de los que desde el 7 de marzo de 1.820 han fallecido por sostener la causa de Dios y la de S.M.

Año 1.824

Real Orden de 8 de enero de 1.824, para que los prebendados y párrocos residieran en sus respectivas iglesias.

Real Cédula de 13 de enero de 1.824, por la que se mandaba guardar y cumplir el Real Decreto inserto que comprendía de las reglas que habían de observarse en el establecimiento de la Superintendencia general de la Policía del Reino, con lo demás que se expresaba.

Real Resolución de 13 de enero de 1.824, por la que se declaraban nulas las disposiciones testamentarias efectuadas por los monjes exclaustrados en los tres años del gobierno revolucionario, y se mandaba devolver a los monasterios respectivos todo cuanto dejaron aquellos a su fallecimiento, deducidos los gastos ocasionados.

Real Orden de 13 de marzo de 1.824 para que se pasaran a la Cámara todas las solicitudes y expedientes que existieran en esta secretaría de vacantes y piezas eclesiásticas.

Circular de 25 de marzo de 1.824, por la que se excitaba el celo de los Regulares, para que se dedicaran a la enseñanza de la juventud, conforme a la Real orden de 19 de noviembre de 1.815.

Real Orden de 20 de abril de 1.824, por la que creaba S.M. una Junta para que entendiese de la mejora de los establecimientos piadosos.

Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo de 1 de mayo de 1.824, por la cual se concedía indulto y perdón general, con relevación de penas corporales o pecuniarias en que hubieran podido incurrir, a todas las personas que desde principios de 1.820 hasta el 1º de octubre de 1.823; hubieran tenido parte en los excesos y desórdenes ocurridos en estos Reinos con el objeto de sostener y conservar la pretendida constitución de la Monarquía, con tal de que no fueran de las que se mencionaban y exceptuaban en el Real Decreto inserto.

Real Cédula de 21 de julio de 1.824, por la que extendía a las distintas Universidades el sistema de purificaciones.

Real Decreto de 14 de octubre de 1.824, por el que se aprobaba el plan de estudios y arreglo general de las universidades españolas.

Año 1.825

Real Decreto de 16 de febrero de 1.825 por el que se aprobaba y mandaba poner en ejecución el plan adjunto y reglamento de Escuelas de primeras letras.

Circular de 26 de marzo de 1.825 por la que se incluía una Real Orden sobre las circunstancias que habían de concurrir para abrirse por particulares Colegios o Casas de pensión para la enseñanza de la juventud.

Real Orden de 8 de agosto de 1.825 restableciendo y rectificando la Mandapía forzosa que debía hacerse en los testamentos que se otorgaran en todos los dominios de la monarquía del modo que se expresaba.

Real Orden de 21 de agosto de 1.825, señalando el castigo que debían sufrir los Masones aprehendidos en una logia de Granada, y los que se aprehendieran en lo sucesivo.

Real Orden de 26 de agosto de 1.825 comunicada al Consejo Real para que los Prelados diocesanos dirigieran a este Supremo Tribunal diez ejemplares de los edictos pastorales que publiquen o hayan publicado.

Año 1.826

Real Orden de 17 de marzo de 1.826, para que se lleven al debido efecto las Reales Cédulas y Circulares de 11 de abril, 22 de diciembre de 1.824, 17 de junio y 11 de agosto de 1.825 sobre la entrada y circulación de libros impíos, estampas y pinturas obscenas.

Real Orden de 3 de abril de 1.826, para que se encargara que, al dar los párrocos y escribanos las certificaciones de vida, procedieran con la mayor circunspección, por los fraudes que se solían cometer en el cobro de haberes.

Real Orden de 30 de abril de 1.826, para que no obstante el nuevo Reglamento de Escuelas de primeras letras se permita abrirlas a los maestros examinados, como lo han hecho hasta aquí.

Real Orden de 8 de junio de 1.826, para que a ninguno se le expida título de abogado que no haya cumplido 25 años.

Real Orden de 10 de junio de 1.826, que mandaba que las Órdenes Religiosas de Redención de cautivos volvieran al libre ejercicio de la colectación y administración de las limosnas y demás con que corrían antes del 6 de diciembre de 1.814.

Real Orden de 21 de julio de 1.826 para que observándose lo que previenen las leyes no se dé curso a papeles anónimos o sin firma de persona conocida, y que se procure averiguar y castigar los autores y cómplices de tales papeles.

Circular de 14 de diciembre de 1.826, que incluía la Real Orden con las leyes que regían para el exacto pago de diezmos.

Año 1.827

Real Cédula de 13 de febrero de 1.827, por la que se mandaba guardar y cumplir la Bula inserta de nuestro Santísimo Padre León XII, en que prohibía y condenaba, de nuevo, toda secta o sociedad clandestina, cualquiera que fuera su denominación.

Año 1.828

Real Cédula de 31 de marzo de 1.828, por la que se mandaba cumplir el Breve de S.S. que en ella se insertaba, declarando exentos del subsidio del Clero los diezmos laicos de Cataluña, y las primicias que en Aragón administraban los Magistrados; y al mismo tiempo se prorrogaba por otros seis años la facultad de exigir el citado subsidio.

Real Orden de 6 de junio de 1.828, que mandaba que fueran admitidas con libertad de derechos las reliquias o cuerpos santos que vinieran de Roma.

Año 1.829

Convenio entre Sus Majestades Católicas y Cristianísima para arreglar el pago de la deuda, en virtud de los convenios de 1.824 citados en este, publicado el 20 de enero de 1.829. (España y Francia).

Circular de 7 de abril de 1.829, que incluía una Real Orden y bando por el que se señalaban las penas que se habían de aplicar a los que cometieran irrelevancias en los templos.

Real Orden de 16 de mayo de 1.829, sobre continuación y régimen de los presupuestos anuales.

Circular de 1 de julio de 1.829, que incluía una Real Orden para que se previniera a los Prelados eclesiásticos del Reino que no publicaran ningún edicto de la Sagrada Congregación del Índice, sin que se le hubiera dado el pase correspondiente por el Consejo.

Real Decreto de 31 de diciembre de 1.829, por el que era aprobando por S.M. el presupuesto general de gastos para la Monarquía para el año 1.830.

Año 1.830

Decreto de 6 de febrero de 1.830, en virtud del cual se encauzaban hacia la Nunciatura las apelaciones a las causas de fe.

Real Orden de 27 de febrero de 1.830, prohibiendo la entrada en el Reino de las obras que trataran sobre materias de Religión.

Real Cédula de 12 de julio de 1.830 que contenía el Reglamento de imprentas.

Real Orden de 16 de julio de 1.830, disponiendo lo conveniente para que no se introduzcan ni circulen estampados de figuras obscenas en ninguna clase de géneros.

Año 1.831

Real Orden de 24 de noviembre de 1.831, mandando que no se carguen contribuciones civiles a los bienes que pagan subsidio del clero.

Año 1.832

Circular de 21 de febrero de 1.832, que contenía la resolución de S.M. para que todos los Tribunales cuando fuera necesaria la declaración de los eclesiásticos en causas criminales, se arreglaran a la Circular de 24 de junio de 1.796.

Real Orden de 23 de octubre de 1.832, permitiendo a los eclesiásticos venir a Madrid y Sitios Reales, del modo que se expresa.

Real Orden de 18 de diciembre de 1.832, declarando S.M. que están sujetas al pago del impuesto sobre herencias las mandas hechas a favor de los Santos lugares, exceptuando la manda llamada forzosa.

Año 1.833

Real Decreto de 4 de abril de 1.833 mandando a los Reinos jurar como Princesa heredera del Trono a la Serma. Infanta Doña María Isabel Luisa.

Circular de 18 de abril de 1.833 incluyendo una Real Orden que prescribe el carácter que debe tener en las causas criminales contra eclesiásticos el acompañando del juez que entienda en ellas.

Real Decreto de 10 de mayo de 1.833, concernientes al juramento de la Serma. Infanta Doña María Isabel Luisa

Real Provisión de 30 de septiembre de 1.833, se daba noticia a las Justicias y demás personas de estos Reinos del fallecimiento del Sr. Rey D. Fernando VII, y de la confirmación que hacía S.M. la Reina Gobernadora, en nombre y durante la menor edad de su augusta Hija la Sra. Reina Doña Isabel II, de todas las Autoridades establecidas, mandando continuaran en el ejercicio de sus funciones, con lo demás que se expresaba.

Pragmática-Sanción en fuerza de ley, de 30 de septiembre de 1.833, para que se guardaran y cumplieran las soberanas disposiciones y última voluntad del Sr. Rey D. Fernando VII, por las cuales se sirvió nombrar e instituir Regenta Gobernadora de toda la monarquía a su amada Esposa para que por sí sola, aunque consultando los negocios arduos con un Consejo de gobierno que designó, la rija durante la menor edad de su augusta Hija la Señora Doña Isabel II.

Real Provisión de 4 de octubre de 1.833, por la cual se daba noticia a las Justicias y demás personas de estos reinos del fallecimiento del Sr. Rey D. Fernando VII, y de la confirmación que hacía S.M. la Reina Gobernadora, en nombre y durante la menor edad de su augusta hija la Sra. Reina Doña Isabel II, de todas las autoridades establecidas, mandando continuaran en el ejercicio de sus funciones, con lo demás que se expresaba.

Pragmática sanción con fuerza de ley de 9 de octubre de 1.833, para que se guardaran y cumplieran las soberanas disposiciones y última voluntad del Sr. Rey D. Fernando VII.

Circular de 22 de noviembre de 1.833 incluyendo una Real Resolución sobre el juramento que deben seguir haciendo los individuos que hayan de ejercer cargos públicos, como se expresa.

Año 1.834

Real Orden de 3 de enero de 1.834, para que no se admitiese ni se diera curso a bulas y rescriptos pontificios que no se presentaran por la Agencia General de Preces.

Real Decreto de fecha de 4 de Enero de 1.834, que contenía el Reglamento del derecho de imprenta.

Real Orden de 29 de enero de 1834 comunicada al Consejo, para que los Prelados del clero secular y regular celen el que sus individuos no extravíen la opinión de los fieles, ni se enerve la obediencia y sumisión del legítimo Gobierno de su majestad.

Real Decreto de 7 de febrero de 1.834, ampliando el de amnistía a todos los ex-Diputados a Cortes que estaban fuera del Reino.

Real Orden de 7 de febrero de 1.834, por la que se prevenía a los párrocos que debían evacuar los informes que les pidieran los Subdelegados de Rentas sobre la conducta de sus feligreses en delitos de contrabando, sin que necesiten la licencia de Vicarios y Provisores.

Real Decreto de 9 de marzo de 1.834, por el que se suspendían, por ahora, la provisión de prebendas eclesiásticas, con la excepción que se expresaba.

Real Decreto de 26 de marzo de 1.834, suprimiendo el monasterio o convento donde ocurriesen los casos que se citaban, con lo demás que se expresaba.

Real Decreto de 26 de marzo de 1.834, que mandaba ocupar las temporalidades de los eclesiásticos que cometieran los delitos de que se hacía mención.

Real Decreto de 26 de Marzo de 1.834 suprimiendo el Monasterio o convento donde ocurrieran los casos que se citan, con lo demás que se expresa.

Real Decreto de 10 de abril de 1.834 sobre traslación de los religiosos de conventos suprimidos.

Real Decreto de 10 de abril de 1.834, sobre las recaudaciones en las provincias de las temporalidades ocupadas a los eclesiásticos infidentes.

Real Decreto de 20 de abril de 1.834, que ampliaba la amnistía, y derogaba las excepciones que contenía.

Real Decreto de 22 de abril de 1.834, al que seguía una instrucción aprobada por su S.M. sobre la formación de una Junta Eclesiástica para el arreglo del clero secular y regular.

Real Decreto de 20 de mayo de 1.834, convocando y mandando reunir las Cortes generales del Reino.

Real Decreto de 20 de mayo de 1.834 para la elección de Procuradores a las Cortes generales del Reino.

Real Orden de 1 de junio de 1.834, en la que se contenía un reglamento relativo a la publicación de periódicos.

Real Orden de 17 de junio de 1.834, comunicada al Sr. Presidente del Consejo Real de España e Indias para que el Clero secular y regular pidan licencia a S.M. si han de enajenar alhajas y bienes propios de los establecimientos eclesiásticos.

Real Decreto de 24 de junio de 1.834, por el que se señalaba el tratamiento, fuero y uniforme de los Próceres del Reino.

Real Decreto de 5 de julio de 1.834, sobre el exacto pago de diezmos y primicias.

Real Decreto de 15 de julio de 1.834 que contenía los Reglamentos para el régimen y gobierno de los Estamentos de Próceres y Procuradores del Reino.

Real Decreto de 15 de julio de 1.834, suprimiendo definitivamente el Tribunal de la Inquisición.

Real Orden de 24 de agosto de 1.834, sobre el modo el proceder por los Ayuntamientos a la subasta y enajenación de las fincas de Propios.

Real Orden de 25 de agosto de 1.834, prohibiendo el castigo de azotes en todos los Colegios y casas de educación.

Real Decreto de 31 de agosto de 1.834, mandando establecer una Comisión que se ocupara de formar un plan general de Instrucción primaria.

Real Decreto de 6 de septiembre de 1.834 nombrando una Comisión para la formación de un plan de Instrucción primaria.

Real Decreto de 25 de septiembre de 1.834 suprimiendo la Inspección general de Instrucción pública, y creando una Dirección de Estudios.

Real Orden de 21 de octubre de 1.834, que contenía la Instrucción de las Escuelas de primeras letras del Reino.

Real Orden de 12 de noviembre de 1.834, comunicada a la Dirección general de Estudios por la que se mandaba que se revalidasen los grados conferidos en estudios aprobados durante el período constitucional.

Real Orden de 22 de diciembre de 1.834, que recogía el juramento para cargos públicos.

Real Decreto de 30 de diciembre de 1.834 rehabilitando los empleos, honores y distinciones desde 7 de marzo de 1.820, hasta 30 de septiembre de 1.823.

Año 1.835

Orden de 31 de enero de 1.835 quedaba abolida la llamada prueba de limpieza de sangre.

Real Orden de 17 de febrero de 1.835 revocando la Orden de 15 de abril de 1824, (que prescribía ceremonias religiosas en memoria de su libertad, y en desagravio de la impiedad, irreligión y desórdenes cometidos desde el año de 1.808) citada sobre celebración de una función religiosa cada año.

Real Decreto de 9 de junio de 1.835, que contenía la ley determinando el modo de reintegrar a los compradores de bienes vinculados.

Real Orden de 1 de julio de 1.835, mandando que cesaran las juntas llamadas de fe, y que en el conocimiento de estas causas se arreglen los tribunales eclesiásticos a los Canones y ley de Partida que se citaba.

Real Decreto de 4 de julio de 1.835 suprimiendo la Orden de la Compañía de Jesús.

Real Decreto de 25 de julio de 1.835 suprimiendo los monasterios y conventos que no tuvieran doce religiosos profesos.

Real Decreto de 18 de agosto de 1.835, por el que se disponía que los censores de periódicos en la Corte formaran una junta al efecto de examinar y censurar dichos papeles.

Real Decreto de 3 de septiembre de 1.835, por el que se restablecía en su fuerza y vigor las ventas de bienes que pertenecieron a varios conventos e institutos religiosos.

Real Decreto de 21 de septiembre de 1.835 que contenía la bula de S.S. concediendo a los Religiosos secularizados la facultad de obtener parroquias.

Real Decreto de 8 de octubre de 1.835, disponiendo que los Prelados eclesiásticos se abstuvieran de dar órdenes ni dimisorias, sino para los que ya se hallaban ordenados "in sacris", y a los que tuvieran tomada colación canónica, en los casos que se expresaban.

Real Orden de 12 de octubre de 1.835, señalando la carrera de estudios que habían de hacerse en los Seminarios conciliares, y demás que se expresaba.

Real Decreto de 12 de octubre 1.835 suprimiendo los monasterios de órdenes monacales y los demás de regulares en los casos y del modo que se expresaba.

Real Decreto de 17 de Octubre de 1.835, mandando que las justicias ordinarias conocieran, siendo de delitos atroces o graves en las causas de los eclesiásticos.

Real Orden Circular de 20 de noviembre de 1.835 sobre las pruebas de conducta política que habían de dar los eclesiásticos para ser propuestos y ascendidos en beneficios.

Real Orden de 4 de diciembre de 1.835, comunicada a los Gobernadores civiles sobre arreglo de la enseñanza primaria.

Año 1.836

Real Decreto de 25 de enero de 1.836 disponiendo lo que había de hacerse con los edificios que fueron monasterios y conventos.

Real Orden de 26 de enero de 1.836, sobre destino de los edificios que fueron monasterios y conventos.

Real Decreto de 15 de febrero de 1.836 creando una comisión en cada provincia para que tenga a su cuidado las fincas de la Nación destinadas a amortizar la deuda pública.

Real Decreto de 19 de febrero de 1.836 declarando en venta todos los bienes que habían pertenecido a las suprimidas corporaciones religiosas con la excepción que se decía.

Real Orden de 25 de febrero de 1.836 por la cual se determinaba que los párrocos incongruos optaran entre novenar o aceptar la congrua que señalaba la Real Hacienda.

Real Orden de 26 de febrero de 1.836, para que los Gobernadores civiles vigilaran el que no ejercieran el ministerio de la predicación y confesión los eclesiásticos que hubieran dado pruebas de infidelidad al Gobierno.

Real Orden de 26 de febrero de 1.836 prescribiendo la fórmula de juramento que habían de hacer los promovidos a cargos eclesiásticos, de justicia, Abogados, etc

...

Instrucción de 1 de marzo de 1.836 para llevar a efecto la enajenación decretada de bienes nacionales en el Real Decreto de fecha de 19 de febrero.

Real Decreto de 6 de marzo de 1.836, para que todos aquellos bienes eclesiásticos adquiridos con posterioridad al Concordato de 1.753 estuvieran sujetos al pago de frutos civiles.

Real Decreto de 8 de marzo de 1.836 suprimiendo los monasterios, conventos y demás congregaciones religiosas con las excepciones que se señalaban.

Real Orden de 18 de abril de 1.836, por la que se autorizaba a las Juntas diocesanas para que cuando ocurran circunstancias especiales propongan queden abiertos algunos conventos con menos de 20 religiosas.

Reales Órdenes de 8 y 9 de junio de 1.836 sobre preferencia en las subastas de bienes nacionales y señalando los peritos que han de concurrir a la tasación de fincas nacionales, respectivamente.

Real Orden de 15 de junio de 1.836, sobre el pago de gastos en la instalación de las Juntas diocesanas, y pago de pensión a los religiosos.

Real Decreto de 4 de agosto de 1.836, que incluía un plan general de instrucción pública.

Real Decreto de 13 de agosto de 1.836, mandando S.M. publicar la Constitución de 1.812.

Real Decreto de 21 de agosto de 1.836 de convocatoria a Cortes con arreglo a la Constitución.

Real Decreto de 2 de septiembre de 1.836, acordando su S.M. varias medidas para la más pronta enajenación de fincas nacionales, y para la rápida ejecución del Real Decreto de 19 de febrero de 1.836.

Real Orden de 4 de septiembre de 1.836 comunicada al Jefe político de Burgos, por el que se prevenía que se suspendiera la ejecución del nuevo plan de estudios.

Real Orden de 9 de septiembre de 1.836 mandando ocupar las temporalidades a los Prelados eclesiásticos separados de sus Iglesias.

Real Decreto de 13 de septiembre de 1.836 arreglando las Juntas que habían de entender en la enajenación de los edificios de los conventos y sus muebles y efectos.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1.836 conteniendo el arreglo de la Dirección de la Caja de Amortización.

Real Decreto de 24 de septiembre de 1.836 mandando ocupar las temporalidades de los eclesiásticos que sin licencia se hallaran en el extranjero.

Real Orden de 6 de octubre de 1.836, por la que resolvía S.M. que los prelados diocesanos propusieran con preferencia para curatos a los presbíteros secularizados, que tuvieran los requisitos debidos.

Real Decreto de 8 de octubre de 1.836, por el que se conminaba con las medidas que se señalaban a los Prelados Diocesanos que confirieran órdenes o para ello dieran dimisorias en contravención de lo mandado.

Real Decreto de 8 de octubre de 1.836, restableciendo interinamente la Dirección General de Estudios según la Constitución.

Real Orden de 13 de octubre de 1.836, por la que se determinaba que a los eclesiásticos que capitalizaron sus pensiones se les siguieran pagando éstas por ahora.

Real Orden de 15 de Octubre de 1.836 declarando libres del impuesto de Amortización a los bienes destinados a las escuelas.

Real Orden de 20 de octubre de 1.836 que declaraba que el subsidio que debía abonar el clero para el año era de 20 millones con la rebaja que se expresaba.

Real Orden de 29 de octubre de 1.836, aprobando el plan general de estudios que seguía a continuación.

Real Orden de 25 de noviembre de 1.836 comunicada a la Dirección General sobre el mejor modo de proceder a la tasación y venta de fincas nacionales.

Real Orden de 29 de noviembre de 1.836 para poner en seguridad los caudales y alhajas de las Iglesias.

Real Orden de 14 de diciembre de 1.836, para que a los cuadros de los conventos suprimidos se les diera un destino conveniente.

Año 1.837

Real Orden de 10 de enero de 1.837, por la que se mandaba suspender, por ahora, toda provisión de piezas eclesiásticas.

Real Decreto de 27 de enero de 1.837, mandando observar lo prevenido por las Cortes, y en el que se establecía que se demolieran todos los signos de vasallaje.

Real Decreto de 31 de enero de 1.837, con el que las Cortes restablecen el Decreto de 17 de agosto de 1.813, relativo a la prohibición de la corrección de azotes en las escuelas, colegios y demás establecimientos de educación.

Real Orden de 4 de febrero de 1.837, por la que se expresaba que no podían ordenarse in sacris los mozos sujetos al sorteo hasta la edad de 25 años.

Real Orden de 28 de febrero de 1.837, que prevenía que no se permitiera predicar ni confesar a los sacerdotes que no inspiraran confianza a las autoridades.

Real Decreto de 22 de Marzo de 1.837, que incluía la ley de las Cortes sobre las circunstancias que habían de proceder para la publicación de periódicos.

Real Orden de 27 de mayo de 1.837, comunicando el Reglamento que contenía la regulación de la escuela de instrucción primaria.

Real Orden de 27 de mayo de 1.837 sobre conservación y destino de objetos científicos y artísticos procedentes de los conventos suprimidos.

Real Decreto de 15 de junio de 1.837, previniendo la forma con que debe jurarse la nueva Constitución en los pueblos del reino.

Real Orden de 5 de julio de 1.837 para que ningún eclesiástico se alejara de su residencia habitual sin permiso de la autoridad pública.

Decreto de las Cortes de 16 de julio de 1.837 en el que se manda que se cobren en el presente año decimal todos los derechos que componían la contribución conocida hasta ahora con el nombre de diezmos y primicias.

Ley Electoral de 20 de julio de 1.837.

Decreto de las Cortes de 29 de julio de 1.837 extinguiendo en la Península, islas adyacentes, y posesiones de España en Africa, todos los monasterios, conventos, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos.

Real Decreto de las Cortes de 25 de agosto de 1.837, declarando que los salarios de los jueces y dependientes del foro, como asimismo las congruas de los curas párrocos, no pueden servir para ser inscritos en las listas electorales.

Real Decreto de 17 de octubre de 1.837 arreglando el uso de la libertad de imprenta.

Real Decreto de 16 de diciembre de 1.837 creando una junta encargada de presentar un proyecto de ley para el arreglo del culto y de sus ministros.

Año 1.838

Orden de 19 de abril de 1.838 por la que se declara que los productos de los bienes pertenecientes a memorias, obras pías, patronatos, etc ..., deben corresponder a las juntas diocesanas.

Real Orden de 17 de julio de 1.838 declarando que las juntas diocesanas deben presentar al tribunal mayor de cuentas las de los fondos que hayan integrado en su poder para satisfacer las pensiones señaladas a los secularizados, exclaustrados y conventos subsistentes de ambos sexos, y para atender a sus gastos interiores.

Ley de 21 de julio de 1.838 mandando llevar a efecto el proyecto de la ley provisional para la dotación del culto y clero.

Orden de 2 de agosto de 1.838 relativa a las traducciones de la Biblia hechas en vascuence y gitano o romaní.

Orden de 22 de septiembre de 1.838 mandando formar bibliotecas públicas en las capitales de provincia para utilizar las riquezas literarias que contenían los conventos suprimidos.

Real Orden de 2 de octubre de 1.838 aclaratoria de la Ley de 21 de julio del mismo año.

Año 1.839

Circular de 5 de Marzo de 1.839 de la Dirección General de Rentas y Arbitrios de amortización dirigida a activar la subasta de fincas nacionales.

Real Orden de 18 de abril de 1.839, comunicando el Reglamento que seguía de las comisiones de instrucción primaria.

Orden de 5 de junio de 1.839 por la cual se establecían las reglas para el uso de la libertad de imprenta.

Real Orden de 18 de septiembre de 1.839 mandando cantar un Te Deum en todas las Iglesias metropolitanas y Catedrales con motivo de los faustos sucesos ocurridos en las Provincias del Norte.

Real Orden de 18 de diciembre de 1.839, por la que se mandaba que quedara sin efecto la de 5 de agosto de 1.837 que trataba de los eclesiásticos que se alejaran de sus domicilios.

Año 1.840

Real Orden de 9 de enero de 1.840 encargando a los Ayuntamientos que procuraran para las operaciones electorales destinar edificios que no estuvieran consagrados al culto divino.

Real Orden y Circular de 2 de febrero de 1.840, de la Dirección General de Rentas y Arbitrios de Amortización, acerca del pago de las pensiones de las comunidades de religiosas.

Real Orden de 6 de febrero de 1.840, relativa a la cobranza del diezmo y exención declarada a favor de los bienes del clero secular y de las fábricas de las iglesias de los impuestos ordinarios y extraordinarios.

Ley de 16 de junio de 1.840 que declaraba fiesta nacional el aniversario del juramento y promulgación de la Constitución.

Ley de 16 de julio de 1.840 relativa a la dotación del culto y el clero Instrucción de 25 de julio de 1.840 para la observancia de la ley de 16 de Julio de 1.840, sobre dotación del culto, clero y establecimientos piadosos y de la beneficencia.

Orden de la Regencia de 14 de noviembre de 1.840 mandando arreglar la demarcación de las parroquias y juzgados de Madrid.

Real Orden de 10 de diciembre de 1.840 encargando el cumplimiento de lo mandado acerca de que los Arzobispos y Obispos no expidieran dimisorias ni conferieran órdenes mayores.

Año 1.841

Orden de la Regencia provisional de 1 de enero de 1.841 creando un Boletín oficial de instrucción pública.

Orden de la Regencia de 4 de enero de 1.841 acerca de la conducta que en las próximas elecciones deben observar las autoridades militares.

Circular de 2 de marzo de 1.841 a los diocesanos previniendo que se adopten medios para anticipar las cantidades necesarias para que se celebren las festividades de Semana Santa con el decoro y solemnidad acostumbrados.

Orden de la Regencia provisional de 26 de marzo de 1.841 mandando establecer en Sevilla un instituto de segunda enseñanza.

Circular de 9 de abril de 1.841 del Ministerio de Gracia y Justicia desaprobando la conducta del cabildo de la Santa Iglesia de Toledo.

Orden de la Regencia provisional de 10 de abril de 1.841 aprobando la creación del Instituto de segunda enseñanza de Burgos.

Real Decreto de 11 de abril de 1.841 relativo a los eclesiásticos ordenados de mayores con posterioridad al Real Decreto de 8 de Octubre de 1.835.

Orden de la Regencia provisional de 19 de abril de 1.841, sobre las bulas y rescriptos de Roma que no habían obtenido el pase del Gobierno.

Real Decreto de 24 de abril de 1.841 mandando fuera extrañado del Reino D. Severo Andriani, Obispo de Pamplona, y ocupadas sus temporalidades.

Orden del Regente del reino de 15 de mayo de 1.841 aprobando la creación de un instituto de segunda enseñanza en Albacete.

Orden del Regente del reino de 15 de mayo de 1.841 disponiendo que se conviertan en institutos de segunda enseñanza las universidades provisionales creadas por las juntas de Gobierno de las provincias de Murcia y Cáceres.

Orden del Regente del reino de 15 de mayo de 1.841 mandando que el colegio de la Asunción de Córdoba se convierta en instituto de segunda enseñanza.

Decreto de 28 de junio de 1.841 que mandaba publicar un manifiesto en que se expusieran los agravios que España y su Iglesia habían recibido de la corte Romana.

Ley de 31 de agosto de 1.841 relativa a la dotación del Culto y el Clero.

Ley de 2 de septiembre de 1.841 relativa a la venta de las fincas del clero secular.

Orden del Regente de 5 de septiembre de 1.841 sobre residencia de los eclesiásticos.

Orden del Regente del Reino de 29 de septiembre de 1.841 mandando formar nuevos aranceles de derechos de estola y pie de altar.

Orden del Regente del reino de 30 de septiembre de 1.841 relativa a las dotaciones del clero secular.

Orden del Regente del Reino de 3 de octubre de 1.841 sobre formación de presupuesto de gastos del culto.

Orden de la Regente del Reino de 19 de noviembre de 1.841 sobre formación de estados o inventarios de los bienes del clero secular, a fin de recabar toda la información posible acerca de los bienes correspondientes al clero secular.

Decreto del Regente del reino de 11 de diciembre de 1.841 sobre supresión y unión de parroquias.

Real Orden Circular de 14 de diciembre de 1.841 acerca de la provisión de beneficios, curatos, capellanías, etc ...

Año 1.842

Real Resolución de 20 de julio de 1.842 nombrando una comisión que propusiera las mejoras convenientes sobre subsistencia del clero y gastos del culto.

Decreto de 26 de julio de 1.842 sobre concesión de edificios de conventos suprimidos.

Resolución de 15 de septiembre de 1.842 mandando se excite el celo de los intendentes para que se active el cobro de la contribución de culto y clero.

Resolución de 22 de septiembre de 1.842, mandando que se efectúe el pago del segundo tercio para cubrir las atenciones del culto y del clero.

Resolución de 23 de septiembre de 1.842 mandando se atiendan con preferencia de los primeros fondos las obligaciones del culto divino.

Resolución de 1 de octubre de 1.842 dando una nueva organización a la carrera de estudios de jurisprudencia.

Real Orden de 7 de octubre de 1.842 dando Reglas para la pronta enajenación de los bienes nacionales.

Real Orden de 11 de octubre de 1.842 sobre el modo de exigirse a los empleados la contribución general del culto y el clero, que establece la Ley de 14 de agosto del año último.

Resolución de 14 de octubre de 1.842, dada para que a las consignaciones de culto y clero se les de la preferencia que les corresponda, y sean satisfechas con toda puntualidad.

Orden de 16 de noviembre de 1.842 para que no se permitiera el ejercicio de la potestad espiritual a los eclesiásticos que no tuvieran certificado de adhesión al Gobierno, y que se impidiese la circulación de un breve que prorrogaba las licencias de confesar y predicar.

Año 1.843

Orden de 9 de enero de 1.843 para que se activen sin descanso los expedientes de incorporación y venta de los bienes nacionales.

Resolución de 10 de enero de 1.843 para que se suspendiera la circulación de cualquier escrito que se considerara capaz de poner en peligro la tranquilidad pública, y que se recogiera y depositara como prevenía la Ley de imprenta.

Resolución de 1 de marzo de 1.843 sobre el modo de exigir a los empleados la contribución general del culto y del clero.

Orden de 22 de abril de 1.843 para que los empleados de la empresa del arriendo de la sal no paguen más contribución que la del culto y clero.

Resolución de 24 de mayo de 1.843 acerca de los abusos de la prensa.

Decretos de 22 y 23 de septiembre de 1.843 señalando las parroquias que se suprimen o se conservan en Toledo, Burgos, Canarias, Orense, Zamora y Zaragoza.

Resolución de 28 de septiembre de 1.843 mandando que los Diocesanos hicieran conocer al clero su obligación de respetar y acatar los principios y las reformas que la nación ha establecido.

Decretos de 16 de noviembre de 1.843 disponiendo se lleve a efecto la renovación de Ayuntamientos.

Decreto de 27 de noviembre de 1.843, suspendiendo la celebración de Juntas parroquiales para la elección de Ayuntamientos.

Real Orden de 27 de noviembre de 1.843 por la que se prevenía como se había de prestar el juramento de obediencia a la Reina.

Año 1.844

Orden de 20 de enero de 1.844 removiendo los obstáculos que han entorpecido la cobranza de la contribución del culto y el clero.

Real Orden de 28 de enero de 1.844, por la cual se derogaban las circulares que prevenían la necesidad de los atestados de conducta política expedidos por la autoridad civil para que la eclesiástica concediera a los eclesiásticos las componentes licencias para ejercer su ministerio.

Orden de 6 de febrero de 1.844 encargando a los diocesanos que observaran e hicieran observar al clero las obligaciones ordinarias y naturales que les imponía su Santo ministerio.

Orden de 24 de febrero de 1.844 sobre la instrucción que habían de tener para que recayese la Real aprobación los expedientes de suspensión, unión o erección de parroquias.

Orden de 5 de marzo de 1.844, mandando que se proceda sin levantar la mano al repartimiento y cobranza del cupo de la contribución general del culto y clero correspondiente al presente año.

Ley de 10 de abril de 1.844 reformando la legislación de imprenta.

Orden de 30 de mayo de 1.844 en la cual se requería a los promotores fiscales para que denunciaran los impresos y caricaturas contrarios a los dogmas de nuestra sagrada religión.

Real Orden de 12 de junio de 1.844, mandando que los M.RR. arzobispos y gobernadores eclesiásticos de las diócesis formen y remitan a la Junta superior de Dotación de culto y clero las relaciones de los haberes personales correspondientes a los individuos que componen el clero catedral, colegial, abacial y prioral de sus respectivas diócesis.

Resolución de 28 de junio de 1.844 renovando las medidas dirigidas a que los clérigos usaran de su correspondiente traje.

Orden de 25 de Julio de 1.844 reduciendo al número de treinta para cada sexo las escuelas públicas de instrucción primaria elemental de Madrid.

Decreto de 8 de agosto de 1.844 por el que se suspendió la venta de los bienes que faltaban por vender cuya titularidad correspondía al clero secular y a las comunidades de religiosas.

Orden de 23 de noviembre de 1.844 que dejaba sin efecto la Real Orden de 5 de agosto de 1.842, prohibiendo hasta nueva disposición dar curso a las preces dirigidas a Su Santidad.

Año 1.845

Orden de 17 de marzo de 1.845, mandando que las cesiones gratuitas de edificios-conventos hechas para objetos de utilidad pública sean y se entiendan temporales.

Orden de 3 de abril de 1.845 sancionando la Ley para que se devolvieran al clero secular los bienes no enajenados de su pertenencia.

Decreto de 11 de abril de 1.845 se suspende la venta de los edificios-conventos de las comunidades religiosas suprimidas.

Decreto de 13 de abril de 1.845 dictando disposiciones relativas al destino que se ha de dar a los edificios-conventos no enajenados.

Ley de 23 de mayo de 1.845 de dotación del culto y mantenimiento del clero.

Orden de 23 de mayo de 1.845 disponiendo la creación de una junta de cinco individuos para que entienda en todo lo relativo a la ejecución de la Ley de dotación del culto y el clero.

Orden de 23 de mayo de 1.845 por la que se señalan los miembros que habían de formar la junta de la ejecución de la Ley de dotación del culto y el clero, en la que señala a D. Antonio Posada Rubín de Celis, -arzobispo electo de Toledo-, como presidente, y como vocales a D. Luis López Ballesteros, -marqués de Miraflores-, D. José Alcántara Navarro, -comisario general de la Cruzada- y D. Joaquín de la Cortina, -Vicario eclesiástico de Madrid-.

Ley 23 de mayo de 1.845 sancionando la Ley del Presupuesto de los gastos y de los ingresos del Estado.

Orden de 26 de mayo de 1.845 acordando varias disposiciones relativas a la dotación del clero y clasificación de los destinos parroquiales.

Orden de 28 de mayo de 1.845 mandando que los M. RR. obispos, ocho días después de cada témpora, remitan al Ministerio de Gracia y Justicia relación de los sujetos que hubieren ordenado en ella, con expresión de sus circunstancias, título a que lo hubieran verificado y diócesis a que pertenecían.

Orden de 31 de mayo aprobando el convenio celebrado con el Banco de San Fernando para abrir un crédito de 100 millones con destino al culto y al clero.

Año 1.846

Real Orden de 28 de octubre de 1.846 estableciendo reglas para que no se imponga mayor cuota que la del diez por ciento anual del producto líquido de sus bienes a los hacendados forasteros y lo mismo a las fincas rústicas y urbanas de ambos cleros.

II. ÍNDICE ANALÍTICO

1. DESAMORTIZACIÓN

Año 1.808

Decreto de 4 de diciembre de 1.808. (Sobre desamortización)

Año 1.809

Decreto de 9 de junio de 1.809, sobre deuda pública.

Decreto de 20 de julio de 1.809. (Sobre desamortización)

Decreto de 18 de agosto de 1.809. (Sobre desamortización)

Decreto de 27 de septiembre de 1.809. (Sobre desamortización)

Exposición hecha a S.M. sobre la Deuda Pública de la nación, con los estados de ella, por su ministro de Hacienda, y leída en la primera sesión del Consejo de Estado, 2, 5, 6, 7 y 8 de octubre de 1.809.

En suplemento a la Gaceta de Madrid, se insertaban relaciones detalladas de los bienes desamortizados que se enajenaban donde se señalaba no sólo su situación sino también el producto que generaba al año y su valor de adquisición, entre otros, 23 de octubre de 1.809.

Año 1.813

Decreto de 18 de febrero de 1.813, determinando providencias interinas sobre el restablecimiento de algunas casas religiosas permitido por el Gobierno.

Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se procedía a la abolición de la Inquisición, y al establecimiento de los tribunales protectores de la fe.

Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se manda leer en las parroquias el Decreto anterior, y el manifiesto en que se exponen sus fundamentos y motivos.

Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se mandan quitar de los parajes públicos y destruir las pinturas e inscripciones de los castigos impuestos por la Inquisición.

Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se declaraban nacionales los bienes que fueron de la Inquisición, y se disponían varias medidas sobre su ocupación, y sobre el sueldo y destino de los individuos de dicho tribunal.

Decreto de 15 de agosto de 1.813, por el que se aprobaba el Reglamento para la liquidación de la deuda nacional.

Decreto de 26 de agosto de 1.813, sobre el restablecimiento de algunos conventos y dotación de sus individuos.

Orden de 26 de agosto de 1.813, por la que se exigía responsabilidad a los Intendentes que no cumpliesen lo mandado acerca de la entrega de conventos a los Prelados regulares.

Año 1.814

Real Orden de 20 de mayo de 1.814, relativa a que se hiciera entrega a los regulares de sus conventos y propiedades.

Real Orden de 23 de mayo de 1.814, relativa a la entrega a las religiosas de sus conventos y propiedades.

Real Orden de 24 de junio de 1.814, comunicada por el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia al Ministro de Hacienda, en la cual mandaba S.M. que los intendentes, comisionados del Crédito público, y demás empleados de la Real Hacienda, devolvieran y entregaran inmediatamente los conventos, bienes y rentas a los frailes y religiosas de las Órdenes militares, según se mandó en 20 de Mayo último.

Circular de 15 de agosto de 1.814, mandando a los Intendentes Directores del Crédito Público, o personas a quienes correspondía la recaudación de intereses reales, pusieran sin el menor obstáculo ni detención a disposición de los Tesoreros del Santo Oficio todas las fincas de cualesquiera clase que fueran pertenecientes al mismo Tribunal.

Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo, de 31 de agosto de 1.814, por la cual se servía aprobar el reglamento propuesto y formado para el reintegro de los bienes confiscados por el Gobierno intruso, con lo demás que se expresaba.

Año 1.820

Real Decreto de 28 de abril último para que se tenga efecto la separación de los palacios y sitios de recreo, que reserva S.M., de las demás fincas que ha tenido a bien ceder para el pago de la deuda pública.

Decreto de 30 de mayo de 1.820 que recogía las fincas y derechos conocidos con el nombre de Patrimonio Real, que resultaban de la lista impresa que se incluía.

Decreto de 9 de agosto de 1.820, se mandaba proceder a la venta de todos los bienes asignados al crédito público.

Orden de 9 de agosto de 1.820, por la que se ratificaba el desprendimiento hecho por S.M. de parte de las fincas que antes se conocían con el nombre de Patrimonio Real; previniendo que el Crédito público las incluya en la venta de bienes acordada, reservando o postergando el Lomo del Grullo en Sevilla.

Decreto de 17 de agosto de 1.820, que contenía la supresión de la Compañía de Jesús, y restitución al Cabildo de la iglesia de S. Isidro de esta Corte de los derechos y funciones que obtuvo al tiempo de su erección.

Orden de 1 de septiembre de 1.820 recordando que había sido publicada en las Cortes la ley de 17 de agosto último, sancionando por S.M. en 30 del mismo, sobre la supresión en toda la monarquía de la Compañía de Jesús.

Decreto de 3 de septiembre de 1.820, que contenía el Reglamento para la venta de fincas consignadas al crédito público.

Decreto de 1 de octubre de 1.820, por el que se acordaba la supresión de monacales y reforma de Regulares.

Orden de 26 de octubre de 1.820, previniendo que el Gobierno tomara las medidas convenientes para cortar el abuso que se había notado al venderse por parte de algunos monasterios sus efectos.

Decreto de 7 de noviembre de 1.820, sobre la venta de efectos de las casas de Regulares suprimidas.

Año 1.821

Orden de 19 de marzo de 1.821, por la que se determina que el Gobierno en la distribución y aplicación de alhajas para las casas monacales que hayan de subsistir observe las reglas prescritas respecto a las que pertenecían a conventos suprimidos.

Orden de 5 de mayo de 1.821, mandando que se publicara mensualmente una razón circunstanciada de las fincas que se vendían.

Orden de 21 de mayo de 1.821, autorizaban al Gobierno para que habilitase a las comunidades religiosas de ambos sexos en la venta de fincas para el pago de sus deudas.

Decreto de 24 de mayo de 1.821 se anulaban las ventas de todas clases de bienes pertenecientes al clero y fábrica de iglesias que no se hicieran por el Crédito Público.

Año 1.822

Orden de 15 de marzo de 1.822, para que a los religiosos que de dos conventos se reunieran en uno se les pagaría por el crédito público las pensiones como a los demás de su clase.

Decreto de 2 de abril de 1.822, por el que los Jefes Políticos de acuerdo con los diocesanos remitieran al Gobierno en Mayo de cada año, razón del estado de los conventos de sus distritos que se hallaran en el caso de ser suprimidos.

Orden de 20 de mayo de 1.822, para que a los religiosos que de dos conventos se reunieran en uno se les pagaría por el crédito público las pensiones como a los demás de su clase.

Orden de 22 de mayo de 1.822, para que a las monjas que se reúnan a otros conventos por haberse suprimido los suyos se les señalará igual pensión que a los religiosos en semejante caso.

Decreto de 8 de junio de 1.822, se promulgaba la Ley que aprobaba el Código Penal de 1.822.

Orden de 19 de junio de 1.822, por la que se suprimían los conventos de la orden de S. Francisco de Bermeo y el de Forrua, y se autoriza al Gobierno hasta la próxima legislatura para que tome igual medida con los demás conventos que se hallen en el mismo caso.

Decreto de 15 de noviembre de 1.822, por el que se contenía la ley por la que se suprimían todos los conventos y monasterios que estuvieran en despoblados y en pueblos que no pasaran de 450 vecinos, excepto el de San Lorenzo del Escorial.

Año 1.823

Orden de 11 de junio de 1.823, por la que se declaraban nulos todos los actos y decretos del Gobierno constitucional sobre Regulares, y se reducían al estado que tenían antes.

Orden Circular de 12 de agosto de 1.823, en la que se declaraba que en consecuencia de estar acordado el reintegro a los monasterios de sus bienes y rentas, pertenecían los frutos pendientes en las fincas enajenadas, según y en la forma que se expresaba, a los compradores o arrendatarios.

Orden de 2 de septiembre de 1.823, en la que se prevenía que quedaba sin efecto el Decreto de las llamadas Cortes de 9 de noviembre de 1.820, por el que se incorporó al Crédito público todos los bienes raíces, derechos y acciones de las capellanías vacantes, los de ermitas, santuarios, cofradías y otros.

Manifiesto de S.M. de 1 de octubre de 1.823 declarando haber carecido de entera libertad desde el día 7 de marzo de 1.820, hasta el 1º de octubre de 1.823, por lo que, eran nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional: y en cuanto a lo decretado y ordenado por la Junta provisional y la Regencia, áquella creada en Oyarzun, y ésta en Madrid, lo aprueba S.M., entendiéndose interinamente.

Año 1.824

Real Resolución de 13 de enero de 1.824, por la que se declaraban nulas las disposiciones testamentarias efectuadas por los monjes exclaustros en los tres años del gobierno revolucionario, y se mandaba devolver a los monasterios respectivos todo cuanto dejaron aquellos a su fallecimiento, deducidos los gastos ocasionados.

Año 1.834

Real Decreto de 15 de julio de 1.834, suprimiendo definitivamente el Tribunal de la Inquisición.

Real Orden de 24 de agosto de 1.834, sobre el modo el proceder por los Ayuntamientos a la subasta y enajenación de las fincas de Propios.

Año 1.835

Real Decreto de 9 de junio de 1.835, que contenía la ley determinando el modo de reintegrar a los compradores de bienes vinculados.

Real Decreto de 4 de julio de 1.835 suprimiendo la Orden de la Compañía de Jesús.

Real Decreto de 25 de julio de 1.835 suprimiendo los monasterios y conventos que no tuvieran doce religiosos profesos.

Real Decreto de 3 de septiembre de 1.835, por el que se restablecía en su fuerza y vigor las ventas de bienes que pertenecieron a varios conventos e institutos religiosos.

Real Decreto de 12 de octubre 1.835 suprimiendo los monasterios de órdenes monacales y los demás de regulares en los casos y del modo que se expresaba.

Año 1.836

Real Decreto de 25 de enero de 1.836 disponiendo lo que había de hacerse con los edificios que fueron monasterios y conventos.

Real Orden de 26 de enero de 1.836, sobre destino de los edificios que fueron monasterios y conventos.

Real Decreto de 15 de febrero de 1.836 creando una comisión en cada provincia para que tenga a su cuidado las fincas de la Nación destinadas a amortizar la deuda pública.

Real Decreto de 19 de febrero de 1.836 declarando en venta todos los bienes que habían pertenecido a las suprimidas corporaciones religiosas con la excepción que se decía.

Instrucción de 1 de marzo de 1.836 para llevar a efecto la enajenación decretada de bienes nacionales en el Real Decreto de fecha de 19 de febrero.

Real Decreto de 8 de marzo de 1.836 suprimiendo los monasterios, conventos y demás congregaciones religiosas con las excepciones que se señalaban.

Real Orden de 18 de abril de 1.836, por la que se autorizaba a las Juntas diocesanas para que cuando ocurran circunstancias especiales propongan queden abiertos algunos conventos con menos de 20 religiosas.

Reales Ordenes de 8 y 9 de junio de 1.836 sobre preferencia en las subastas de bienes nacionales y señalando los peritos que han de concurrir a la tasación de fincas nacionales, respectivamente.

Real Decreto de 2 de septiembre de 1.836, acordando su S.M. varias medidas para la más pronta enajenación de fincas nacionales, y para la rápida ejecución del Real Decreto de 19 de febrero de 1.836.

Real Decreto de 13 de septiembre de 1.836 arreglando las Juntas que habían de entender en la enajenación de los edificios de los conventos y sus muebles y efectos.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1.836 conteniendo el arreglo de la Dirección de la Caja de Amortización.

Real Decreto de 24 de septiembre de 1.836 mandando ocupar las temporalidades de los eclesiásticos que sin licencia se hallaran en el extranjero.

Real Orden de 25 de noviembre de 1.836 comunicada a la Dirección General sobre el mejor modo de proceder a la tasación y venta de fincas nacionales.

Real Orden de 29 de noviembre de 1.836 para poner en seguridad los caudales y alhajas de las Iglesias.

Año 1.837

Decreto de las Cortes de 29 de julio de 1.837 extinguiendo en la Península, islas adyacentes, y posesiones de España en Africa, todos los monasterios, conventos, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos.

Año 1.839

Circular de 5 de Marzo de 1.839 de la Dirección General de Rentas y Arbitrios de amortización dirigida a activar la subasta de fincas nacionales.

Año 1.841

Ley de 2 de septiembre de 1.841 relativa a la venta de las fincas del clero secular.

Año 1.842

Decreto de 26 de julio de 1.842 sobre concesión de edificios de conventos suprimidos.

Real Orden de 7 de octubre de 1.842 dando Reglas para la pronta enajenación de los bienes nacionales.

Año 1.843

Orden de 9 de enero de 1.843 para que se activen sin descanso los expedientes de incorporación y venta de los bienes nacionales.

Año 1.844

Decreto de 8 de agosto de 1.844 por el que se suspendió la venta de los bienes que faltaban por vender cuya titularidad correspondía al clero secular y a las comunidades de religiosas.

Año 1.845

Orden de 17 de marzo de 1.845, mandando que las cesiones gratuitas de edificios-conventos hechas para objetos de utilidad pública sean y se entiendan temporales.

Orden de 3 de abril de 1.845 sancionando la Ley para que se devolvieran al clero secular los bienes no enajenados de su pertenencia.

Decreto de 11 de Abril de 1.845 se suspende la venta de los edificios-conventos de las comunidades religiosas suprimidas.

Decreto de 13 de abril de 1.845 dictando disposiciones relativas al destino que se ha de dar a los edificios-conventos no enajenados.

2. FINANCIACIÓN

Año 1.809

Decreto de 20 de agosto de 1.809, determinando el sustento económico al clero.

Año 1.811

Decreto de 20 de abril de 1.811, sobre aplicar al erario los productos de los beneficios que estén en economato, los de espolios y vacantes y parte de las pensiones eclesiásticas.

Decreto de 3 de mayo de 1.811, que contenía el Reglamento sobre la imposición e inversión de una manda forzosa en los testamentos que se otorgaran en todos los dominios de la Monarquía durante la guerra y diez años después, destinada al socorro de nuestros prisioneros, sus familias, viudas, y otros.

Año 1.812

Decreto de 16 de junio de 1.812 donde se contienen las reglas para verificar la aplicación de parte de los diezmos a las urgencias del Estado.

Año 1.814

Real Orden de 24 de junio de 1.814, comunicada por el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia al Ministro de Hacienda, en la cual mandaba S.M. que los intendentes, comisionados del Crédito público, y demás empleados de la Real Hacienda, devolvieran y entregaran inmediatamente los conventos, bienes y rentas a los frailes y religiosas de las Órdenes militares, según se mandó en 20 de Mayo último.

Circular de 15 de agosto de 1.814, mandando a los Intendentes Directores del Crédito Público, o personas a quienes correspondía la recaudación de intereses reales, pusieran sin el menor obstáculo ni detención a disposición de los Tesoreros del Santo Oficio todas las fincas de cualesquiera clase que fueran pertenecientes al mismo Tribunal.

Año 1.817

Bula expedida por Su santidad en Roma el 15 de abril de 1.817, donde se concedía indulto al Rey nuestro señor Fernando VII para que válida, libre y lícitamente pudiese por el espacio de seis años exigir para el alivio de su Real Erario de todos y cada uno de los frutos del Clero, tanto secular como regular, el subsidio anual de 30 millones de reales.

Real Orden de 10 de octubre de 1.817 por la que se declaraban sujetas al pago del subsidio extraordinario de los treinta millones, y de la contribución general del reino según que fuere la naturaleza de los bienes, las anualidades de prebendas eclesiásticas destinadas para la extinción de la deuda del Estado.

Real Orden de 11 de octubre de 1.817, donde se reiteraba a todas las autoridades así civiles como militares la observancia de la Ley 11, Título XXVIII, del Libro I de la Novísima Recopilación, que mandaba que a ningún eclesiástico extranjero secular o regular se le autorizara por ningún pretexto entrar en estos reinos para cuestar o pedir limosna.

Año 1.818

Real Orden de 3 de enero de 1.818, por la que se declaraban exentos de la contribución general los derechos de estola o pie de altar como tales; pero no los bienes gravados con fundaciones piadosas.

Real Orden de 3 de enero de 1.818, por la que se declaraba el sentido que tenía y había de darse a la bula de Su Santidad de 15 de abril último sobre quienes de los perceptores de diezmos estaban sujetos al pago de la contribución general.

Real Orden de 16 de marzo de 1.818, por la que se reiteraba cuanto estaba prevenido para que sobre los diezmos poseídos por personas eclesiásticas no se exigiera contribución.

Circular de 28 de marzo de 1.818, por la que se expresaba que en la contribución general no debían disminuirse las fundaciones piadosas tanto como sea la parte de aquella repartida y satisfecha, pero sí los productos de los bienes ajenos a ellas.

Real Orden de 26 de abril de 1.818, por la que se mandaba a los curas párrocos respectivamente en sus pueblos y jurisdicciones fueran vocales de las juntas particulares de contribuciones y repartimiento, mientras el Diocesano no diputara eclesiástico de su satisfacción.

Real Orden de 5 de octubre de 1.818, comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Comisión Apostólica del subsidio extraordinario: acordaba S.M. que en el presente año se redujera a veinticinco millones el repartimiento del subsidio en lugar de los treinta a que estaban afectas satisfacer las rentas eclesiásticas.

Año 1.819

Real Orden de 28 de agosto de 1.819, por la que se determinaba que los eclesiásticos por lo honorífico, y como contribuyentes, podían ser nombrados por las Juntas locales como peritos repartidores de la contribución general; pero sin obligarlos a la aceptación si lo resistieran.

Año 1.820

Decreto de 24 de marzo de 1.820, se decretaba la unidad de recaudación y distribución de las rentas públicas.

Circular de 25 de marzo de 1.820, desarrollando el Decreto de 24 de marzo de 1.820.

Decreto de 3 de abril de 1.820, por el que se declaraban abolidos los privilegios del Real Patrimonio.

Decreto de 13 de abril de 1.820, por la que se incorporaban a la Nación los señoríos jurisdiccionales, y quedaban abolidos los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos.

Reglamento de 30 de mayo de 1.820 para la Dirección o Junta Gubernativa de la Hacienda pública.

Decreto de 29 de junio de 1.821, estableciendo el sistema administrativo de la Hacienda Pública.

Decreto de 8 de agosto de 1.820 sobre la dotación de la Real Casa.

Decreto de 13 de agosto de 1.820, mediante el cual se condonaba una parte de su contribución a los pueblos que satisficieran los dos tercios de ella en las épocas que se expresaban.

Decreto de 2 de septiembre de 1.820, acerca de los sueldos que habían de gozar los eclesiásticos que servían empleos civiles, y que no podían obtener más de un beneficio.

Decreto de 27 de septiembre de 1.820, que suprimía toda especie de vinculaciones.

Decreto 1 de octubre de 1.820, por el que se acordaba la supresión de monacales y reforma de Regulares.

Decreto de 2 de octubre de 1.820, asegurando el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria.

Orden de 24 de octubre de 1.820, previniendo a la Junta nacional de crédito público, para la próxima legislatura, presente al Congreso la tasación de todas las fincas que están a disposición de aquel establecimiento.

Decreto de 6 de noviembre de 1.820, sobre dotación de los Capellanes párrocos castrenses.

Decreto de 6 de noviembre de 1.820 que contenía el Plan de gastos y contribuciones para el año corriente desde 1 de julio hasta fin de junio próximo.

Decreto de 8 de noviembre de 1.820, que recogía las medidas sobre contribuciones del clero.

Año 1.821

Orden de 20 de marzo de 1.821, prescribiendo reglas acerca de repartimento de Bulas.

Decreto de 21 de marzo de 1.821, por el que se tasaba el precio de Bulas para el año de 1.822.

Orden de 2 de abril de 1.821, por la cual se establecía que sólo los legos profesos de los monasterios tenían derecho para obtener cuando se secularicen la asignación de 100 ducados.

Decreto de 17 de abril de 1.821, prohibiendo las prestaciones de dinero que se hacían a Roma, y asignando una cuota anual a Su Santidad.

Orden de 25 de abril de 1.821, por la que se declaraban libres de pago de la contribución directa las rentas que con título de primicias perciben los Cabildos eclesiásticos y Curas párrocos.

Decreto de 28 de mayo de 1.821, sobre que el pago del diezmo de dicho año se verifique con arreglo a la reducción de su mitad.

Decreto de 29 de junio de 1.821, estableciendo el Presupuesto General de Gastos para el presente año económico.

Decreto de 29 de junio de 1.821, sobre el repartimiento de 30 millones al clero por contribución.

Decreto de 29 de junio de 1.821, por el que se operaba la reducción del diezmo y primicias.

Decreto de 29 de junio de 1.821 por el que se aportaban las reglas para la formación de la Junta diocesana.

Año 1.822

Orden de 16 de abril de 1.822, por la que se prescribía que cesaran las asignaciones que cobraban del Erario público algunas comunidades de religiosas.

Decreto de 23 de abril de 1.822, por el que se señalaban las reglas que habían de ser observadas por las Juntas diocesanas en el reparto del medio diezmo del año anterior.

Orden de 6 de mayo de 1.822, por la que se prohibía que los Ayuntamientos, mayordomos y otras personas pagaran a costa de los fondos públicos refrescos y otros obsequios con motivo de fiestas eclesiásticas; así como también el hacer aquellos cuestaciones para gastos de iglesia.

Orden de 11 de mayo de 1.822, señalando que las asignaciones de los religiosos secularizados se pagaran con preferencia a otras atenciones menos urgentes.

Orden de 14 de mayo de 1.822, por la que se sancionaba que los pueblos de la Nación no pagarían de los fondos de propios y arbitrios más funciones de Iglesia que la del Corpus, la del aniversario de la Constitución y la de los patronos de cada pueblo.

Decreto de 15 de mayo de 1.822, sobre arancel de los derechos que se han de exigir por los Reales títulos, presentaciones eclesiásticas y otros despachos que se expidan por las secretarías del Consejo de Estado.

Decreto de 8 de junio de 1.822, se promulgaba la Ley que aprobaba el Código Penal de 1.822.

Decreto de 17 de junio de 1.822, por el que se señalaba que las Juntas diocesanas continuarán el presente año en la recaudación y distribución del medio diezmo en los términos que se expresa.

Orden de 24 de junio de 1.822, por la cual los curas párrocos después de recibir la congrua de 300 ducados tenían derecho como los demás partícipes del medio diezmo al acervo común sobrante en tanto y cuanto hayan percibido en el último quinquenio en proporción a los frutos repartibles.

Decreto de 25 de junio de 1.822, por el que se fijaba en 20 millones la cantidad con que deba contribuir el clero por vía de subsidio en el año económico que acaba en 30 de junio de 1.823.

Decreto de 29 de junio de 1.822, fijando el repartimiento de 20 millones de rs. sobre el clero.

Decreto de 29 de junio de 1.822, por el que se determinaba el modo de repartir el medio diezmo y la primicia.

Año 1.823

Orden Circular de 6 de junio de 1.823 se anulaba el Decreto de las Cortes de 29 de junio de 1.821 relativo a diezmos; y reducía el subsidio anual a diez millones.

Manifiesto de S.M. de 1 de octubre de 1.823 declarando haber carecido de entera libertad desde el día 7 de marzo de 1.820, hasta el 1º de octubre de 1.823, por lo que, eran nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional: y en cuanto a lo decretado y ordenado por la Junta provisional y la Regencia, áquella creada en Oyarzun, y ésta en Madrid, lo aprueba S.M., entendiéndose interinamente.

Año 1.825

Real Orden de 8 de agosto de 1.825 restableciendo y rectificando la Mandapía forzosa que debía hacerse en los testamentos que se otorgaran en todos los dominios de la monarquía del modo que se expresaba.

Año 1.826

Real Orden de 10 de junio de 1.826, que mandaba que las Órdenes Religiosas de Redención de cautivos volvieran al libre ejercicio de la colectación y administración de las limosnas y demás con que corrían antes del 6 de diciembre de 1.814.

Circular de 14 de diciembre de 1.826, que incluía la Real orden con las leyes que regían para el exacto pago de diezmos.

Año 1.828

Real Cédula de 31 de marzo de 1.828, por la que se mandaba cumplir el Breve de S.S. que en ella se insertaba, declarando exentos del subsidio del Clero los diezmos laicos de Cataluña, y las primicias que en Aragón administraban los Magistrados; y al mismo tiempo se prorrogaba por otros seis años la facultad de exigir el citado subsidio.

Año 1.831

Real Orden de 24 de noviembre de 1.831, mandando que no se carguen contribuciones civiles a los bienes que pagan subsidio del clero.

Año 1.832

Real Orden de 18 de diciembre de 1.832, declarando S.M. que están sujetas al pago del impuesto sobre herencias las mandas hechas a favor de los Santos lugares, exceptuando la manda llamada forzosa.

Año 1.834

Real Orden de 7 de febrero de 1.834, por la que se prevenía a los párrocos que debían evacuar los informes que les pidieran los Subdelegados de Rentas sobre la conducta de sus feligreses en delitos de contrabando, sin que necesiten la licencia de Vicarios y Provisores.

Real Decreto de 5 de julio de 1.834, sobre el exacto pago de diezmos y primicias.

Año 1.836

Real Orden de 25 de febrero de 1.836 por la cual se determinaba que los párrocos incongruos optaran entre novenar o aceptar la congrua que señalaba la Real Hacienda.

Real Decreto de 6 de marzo de 1.836, para que todos aquellos bienes eclesiásticos adquiridos con posterioridad al Concordato de 1.753 estuvieran sujetos al pago de frutos civiles.

Real Decreto de 8 de marzo de 1.836, suprimiendo los monasterios, conventos y demás congregaciones religiosas, con las excepciones que se señalaban.

Real Orden de 15 de junio de 1.836, sobre el pago de gastos en la instalación de las Juntas diocesanas, y pago de pensión a los religiosos.

Real Orden de 13 de octubre de 1.836, por la que se determinaba que a los eclesiásticos que capitalizaron sus pensiones se les siguieran pagando éstas por ahora.

Real Orden de 20 de octubre de 1.836 que declaraba que el subsidio que debía abonar el clero para el año era de 20 millones con la rebaja que se expresaba.

Año 1.837

Decreto de las Cortes de 16 de julio de 1.837 en el que se manda que se cobren en el presente año decimal todos los derechos que componían la contribución conocida hasta ahora con el nombre de diezmos y primicias.

Real Decreto de 16 de diciembre de 1.837 creando una junta encargada de presentar un proyecto de ley para el arreglo del culto y de sus ministros.

Año 1.838

Orden de 19 de abril de 1.838 por la que se declara que los productos de los bienes pertenecientes a memorias, obras pías, patronatos, etc ..., deben corresponder a las juntas diocesanas.

Real Orden de 17 de julio de 1.838 declarando que las juntas diocesanas deben presentar al tribunal mayor de cuentas las de los fondos que hayan integrado en su poder para satisfacer las pensiones señaladas a los secularizados, exclaustrados y conventos subsistentes de ambos sexos, y para atender a sus gastos interiores.

Ley de 21 de julio de 1.838 mandando llevar a efecto el proyecto de la ley provisional para la dotación del culto y clero.

Real Orden de 2 de octubre de 1.838 aclaratoria de la Ley de 21 de julio del mismo año.

Año 1.840

Real Orden de 6 de febrero de 1.840, relativa a la cobranza del diezmo y exención declarada a favor de los bienes del clero secular y de las fábricas de las iglesias de los impuestos ordinarios y extraordinarios.

Real Orden y Circular de 2 de febrero de 1.840, de la Dirección General de Rentas y Arbitrios de Amortización, acerca del pago de las pensiones de las comunidades de religiosas.

Ley de 16 de julio de 1.840 relativa a la dotación del culto y el clero Instrucción de 25 de julio de 1.840 para la observancia de la ley de 16 de Julio de 1.840, sobre dotación del culto, clero y establecimientos piadosos y de la beneficencia.

Año 1.841

Circular de 2 de marzo de 1.841 a los diocesanos previniendo que se adopten medios para anticipar las cantidades necesarias para que se celebren las festividades de Semana Santa con el decoro y solemnidad acostumbrados.

Ley de 31 de agosto de 1.841 relativa a la dotación del Culto y el Clero.

Orden del Regente del Reino de 29 de septiembre de 1.841 mandando formar nuevos aranceles de derechos de estola y pie de altar.

Orden del Regente del reino de 30 de septiembre de 1.841 relativa a las dotaciones del clero secular.

Orden del Regente del Reino de 3 de octubre de 1.841 sobre formación de presupuesto de gastos del culto.

Orden de la Regente del Reino de 19 de noviembre de 1.841 sobre formación de estados o inventarios de los bienes del clero secular, a fin de recabar toda la información posible acerca de los bienes correspondientes al clero secular.

Año 1.842

Real Resolución de 20 de julio de 1.842 nombrando una comisión que propusiera las mejoras convenientes sobre subsistencia del clero y gastos del culto.

Resolución de 15 de septiembre de 1.842 mandando se excite el celo de los intendentes para que se active el cobro de la contribución de culto y clero.

Resolución de 22 de septiembre de 1.842, mandando que se efectúe el pago del segundo tercio para cubrir las atenciones del culto y del clero.

Resolución de 23 de septiembre de 1.842 mandando se atiendan con preferencia de los primeros fondos las obligaciones del culto divino.

Real Orden de 11 de octubre de 1.842 sobre el modo de exigirse a los empleados la contribución general del culto y el clero, que establece la Ley de 14 de agosto del año último.

Resolución de 14 de octubre de 1.842, dada para que a las consignaciones de culto y clero se les de la preferencia que les corresponda, y sean satisfechas con toda puntualidad.

Año 1.843

Resolución de 1 de marzo de 1.843 sobre el modo de exigir a los empleados la contribución general del culto y del clero.

Orden de 22 de abril de 1.843 para que los empleados de la empresa del arriendo de la sal no paguen más contribución que la del culto y clero.

Año 1.844

Orden de 20 de enero de 1.844 removiendo los obstáculos que han entorpecido la cobranza de la contribución del culto y el clero.

Orden de 5 de marzo de 1.844, mandando que se proceda sin levantar la mano al repartimiento y cobranza del cupo de la contribución general del culto y clero correspondiente al presente año.

Real Orden de 12 de junio de 1.844, mandando que los M. RR. arzobispos y gobernadores eclesiásticos de las diócesis formen y remitan a la Junta superior de Dotación de culto y clero las relaciones de los haberes personales correspondientes a los individuos que componen el clero catedral, colegial, abacial y prioral de sus respectivas diócesis.

Año 1.845

Ley de 23 de mayo de 1.845 de dotación del culto y mantenimiento del clero.

Orden de 23 de mayo de 1.845 disponiendo la creación de una junta de cinco individuos para que entienda en todo lo relativo a la ejecución de la Ley de dotación del culto y el clero.

Orden de 23 de mayo de 1.845 por la que se señalan los miembros que habían de formar la junta de la ejecución de la Ley de dotación del culto y el clero, en la que señala a D. Antonio Posada Rubín de Celis, -arzobispo electo de Toledo-, como presidente, y como vocales a D. Luis López Ballesteros, -marqués de Miraflores-, D. José Alcántara Navarro, -comisario general de la Cruzada- y D. Joaquín de la Cortina, -Vicario eclesiástico de Madrid-.

Ley 23 de mayo de 1.845 sancionando la Ley del Presupuesto de los gastos y de los ingresos del Estado.

Orden de 26 de mayo de 1.845 acordando varias disposiciones relativas a la dotación del clero y clasificación de los destinos parroquiales.

Orden de 31 de mayo aprobando el convenio celebrado con el Banco de San Fernando para abrir un crédito de 100 millones con destino al culto y al clero.

Año 1.846

Real Orden de 28 de octubre de 1.846 estableciendo reglas para que no se imponga mayor cuota que la del diez por ciento anual del producto líquido de sus bienes a los hacendados forasteros y lo mismo a las fincas rústicas y urbanas de ambos cleros.

3. ENSEÑANZA

Año 1.809

Decretos de 17 de octubre de 1.809, aprobados para designar los nombres de los profesores.

Decreto de 30 de octubre de 1.809, determinando la creación de colegios denominados "*liceos*".

Año 1.811

Decreto de 1 de febrero de 1.811 para la creación de una Junta consultiva de instrucción pública.

Año 1.814

Proyecto de 7 de marzo de 1.814, conocido *informe Quintana*. (Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública).

Real Decreto de 9 de octubre de 1.814, mandando que se expedieran Circulares a los M.R.R. Arzobispos, R.R. Obispos y demás Prelados de España e Indias, con el objeto de que escribieran pastorales a sus respectivos diocesanos, a fin de corregir la corrupción casi general que había en las costumbres, previniendo a los párrocos para que persuadieran la obligación que tenían los padres de familia de enviar a sus hijos a la instrucción doctrinal.

Año 1.816

Real Decreto de 8 de julio de 1.816, sobre el establecimiento de escuelas de educación para niñas en los conventos de religiosas.

Año 1.820

Decreto de 6 de agosto de 1.820, restableciendo interinamente el plan de estudios publicado en Cédula de 12 de julio de 1.807.

Año 1.821

Orden de 29 de junio de 1.821, por la cual quedaba autorizado el Gobierno para aprobar los arbitrios que las Diputaciones provinciales le propusieran con el fin de dotar con ellos escuelas de primera enseñanza.

Decreto de 29 de junio de 1.821, por el que se contenía el Reglamento general para la instrucción pública.

Año 1.822

Orden de 6 de abril de 1.822, por la que se autorizaba al Gobierno para que aplicase conventos suprimidos, y algún jardín o huerto incorporados a ellos, a establecimientos de escuelas especiales u otro literario.

Año 1.823

Decreto de 24 de septiembre de 1.823, para que en toda las Universidades y Seminarios Conciliares del Reino se enseñara, por ahora, lo dispuesto en la Circular del Consejo real de 27 de octubre de 1.818.

Manifiesto de S.M. de 1 de octubre de 1.823 declarando haber carecido de entera libertad desde el día 7 de marzo de 1.820, hasta el 1º de octubre de 1.823, por lo que, eran nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional: y en cuanto a lo decretado y ordenado por la Junta provisional y la Regencia, áquella creada en Oyarzun, y ésta en Madrid, lo aprueba S.M., entendiéndose interinamente.

Año 1.824

Circular de 25 de marzo de 1.824, por la que se excitaba el celo de los Regulares, para que se dedicaran a la enseñanza de la juventud, conforme a la Real orden de 19 de noviembre de 1.815.

Real Cédula de 21 de julio de 1.824, por la que extendía a las distintas Universidades el sistema de purificaciones.

Real Decreto de 14 de octubre de 1.824, por el que se aprobaba el plan de estudios y arreglo general de las universidades españolas.

Año 1.825

Real Decreto de 16 de febrero de 1.825 por el que se aprobaba y mandaba poner en ejecución el plan adjunto y reglamento de Escuelas de primeras letras.

Circular de 26 de marzo de 1.825 por la que se incluía una Real Orden sobre las circunstancias que habían de concurrir para abrirse por particulares Colegios o Casas de pensión para la enseñanza de la juventud.

Año 1.826

Real Orden de 30 de abril de 1.826, para que no obstante el nuevo Reglamento de Escuelas de primeras letras se permita abrirlas a los maestros examinados, como lo han hecho hasta aquí.

Real Orden de 8 de junio de 1.826, para que a ninguno se le expida título de abogado que no haya cumplido 25 años.

Año 1.834

Real Orden de 25 de agosto de 1.834, prohibiendo el castigo de azotes en todos los Colegios y casas de educación.

Real Decreto de 31 de agosto de 1.834, mandando establecer una Comisión que se ocupara de formar un plan general de Instrucción primaria.

Real Decreto de 6 de septiembre de 1.834 nombrando una Comisión para la formación de un plan de Instrucción primaria.

Real Decreto de 25 de septiembre de 1.834 suprimiendo la Inspección general de Instrucción pública, y creando una Dirección de Estudios.

Real Orden de 21 de octubre de 1.834, que contenía la Instrucción de las Escuelas de primeras letras del Reino.

Real Orden de 12 de noviembre de 1.834, comunicada a la Dirección general de Estudios por la que se mandaba que se revalidasen los grados conferidos en estudios aprobados durante el período constitucional.

Año 1.835

Orden de 31 de enero de 1.835 quedaba abolida la llamada prueba de limpieza de sangre.

Real Orden de 4 de diciembre de 1.835, dirigida a los gobernadores civiles sobre el arreglo de la enseñanza primaria.

Año 1.836

Real Decreto de 4 de agosto de 1.836, que incluía un plan general de instrucción pública.

Real Orden de 4 de septiembre de 1.836 comunicada al Jefe político de Burgos, por el que se prevenía que se suspendiera la ejecución del nuevo plan de estudios.

Real Decreto de 8 de octubre de 1.836, restableciendo interinamente la Dirección general de Estudios según la Constitución.

Real Orden de 15 de Octubre de 1.836 declarando libres del impuesto de Amortización a los bienes destinados a las escuelas.

Real Orden de 29 de octubre de 1.836, aprobando el plan general de estudios que seguía a continuación.

Real Orden de 14 de diciembre de 1.836, para que a los cuadros de los conventos suprimidos se les diera un destino conveniente.

Año 1.837

Real Decreto de 31 de enero de 1.837, con el que las Cortes restablecen el Decreto de 17 de agosto de 1.813, relativo a la prohibición de la corrección de azotes en las escuelas, colegios y demás establecimientos de educación.

Real Orden de 27 de mayo de 1.837, comunicando el Reglamento que contenía la regulación de la escuela de instrucción primaria.

Real Orden de 27 de mayo de 1.837 sobre conservación y destino de objetos científicos y artísticos procedentes de los conventos suprimidos.

Año 1.838

Orden de 22 de septiembre de 1.838 mandando formar bibliotecas públicas en las capitales de provincia para utilizar las riquezas literarias que contenían los conventos suprimidos.

Año 1.839

Real Orden de 18 de abril de 1.839, comunicando el Reglamento que seguía de las comisiones de instrucción primaria.

Año 1.841

Orden de la Regencia provisional de 1 de enero de 1.841 creando un Boletín oficial de instrucción pública.

Orden de la Regencia provisional de 26 de marzo de 1.841 mandando establecer en Sevilla un instituto de segunda enseñanza.

Orden de la Regencia provisional de 10 de abril de 1.841 aprobando la creación del Instituto de segunda enseñanza de Burgos.

Orden del Regente del reino de 15 de mayo de 1.841 aprobando la creación de un instituto de segunda enseñanza en Albacete.

Orden del Regente del reino de 15 de mayo de 1.841 disponiendo que se conviertan en institutos de segunda enseñanza las universidades provisionales creadas por las juntas de Gobierno de las provincias de Murcia y Cáceres.

Orden del Regente del reino de 15 de mayo de 1.841 mandando que el colegio de la Asunción de Córdoba se convierta en instituto de segunda enseñanza.

Año 1.842

Resolución de 1 de octubre de 1.842 dando una nueva organización a la carrera de estudios de jurisprudencia.

Año 1.844

Orden de 25 de julio de 1.844 reduciendo al número de treinta para cada sexo las escuelas públicas de instrucción primaria elemental de Madrid.

4. LIBERTAD DE IMPRENTA

Año 1.810

Decreto de 10 de noviembre de 1.810, sobre Libertad política de imprenta.

Año 1.811

Decreto de 31 de diciembre de 1.811, donde se contenía la obligatoriedad de la censura previa mediante la creación de *"una comisión encargada de examinar las obras dramáticas originales o traducidas"*.

Año 1.813

Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se procedía a la abolición de la Inquisición, y al establecimiento de los tribunales protectores de la fe.

Decreto de 10 de junio de 1.813, conteniendo adicciones a la ley de libertad de imprenta.

Decreto de 10 de junio de 1.813, conteniendo el Reglamento de las Juntas de censura.

Año 1.814

Manifiesto del Rey de 4 de mayo de 1.814, declarando por nula y de ningún valor ni efecto la Constitución de las llamadas Cortes Generales y extraordinarias de la nación, disponiendo al mismo tiempo lo que ha de observarse, a fin de que no se interrumpa la administración de justicia, y el orden político y gubernativo de los pueblos.

Circular de 4 de mayo de 1.814, mandando observar lo que se prevenía sobre libertad de imprenta.

Año 1.815

Real Orden de 25 de abril de 1.815, por la que prohibía S.M. todos los periódicos que se publicaban dentro y fuera de la Corte, y mandaba que sólo se publicaran la Gaceta y el Diario de Madrid.

Edicto de la Suprema y general Inquisición de 22 de julio de 1.815, en el que se anotaban y señaladamente se condenaban como contrarios a la Religión y al Estado las obras o folletos que en estos últimos tiempos se habían impreso; cuya prohibición también era extensiva, y con acuerdo de S.M. se mandaba recoger hasta que fueran examinados y calificados los designados en lista adjunta, que con el nombre de periódicos habían circulado por toda la Nación.

Año 1.817

Circular emitida por el Consejo real de 30 de junio de 1.817, para que se renovasen para su cumplimiento las leyes y penas acordadas sobre los delitos de la prensa en cuanto a la propiedad de los autores acerca de sus obras.

Año 1.820

Orden de 10 de marzo de 1.820, por la cual se restablecían en nuestro Derecho las disposiciones promulgadas por las Cortes de Cádiz sobre libertad de imprenta.

Orden de 10 de marzo de 1.820, por la que se expresaba un aviso dirigido a evitar abusos de este derecho.

Orden de 21 de marzo de 1.820, para el restablecimiento de las Junta Suprema y Provinciales de Censura.

Decreto de 21 de octubre de 1.820, sobre las reuniones de individuos para discutir en público asuntos políticos.

Decreto de 22 de octubre de 1.820 que aprobaba el Reglamento acerca de la libertad de imprenta.

Año 1.821

Orden de 14 de abril de 1.821, por la cual se recomendaba que el Gobierno procediera en uso de sus facultades a la formación de la lista de libros que no debían correr, y que tomaran las medidas más enérgicas para que no circularan aquellos, ni los escritos ni estampas obscenas.

Orden de 9 de mayo de 1.821 que declaraba no hallarse comprendidas en el Art. 2 de la ley de libertad de imprenta las conclusiones que versan sobre la Sagrada Escritura. Pero, siempre y cuando se tratara de creaciones propias de las Universidades y hubieran sido censuradas previamente por los doctores designados por los Estatutos de dichas Universidades.

Orden de 13 de Mayo de 1.821, avisando el nombramiento de individuos para la Junta protectora de libertad de imprenta y juramentos de los mismos.

Decreto de 7 de junio de 1.821, donde se contenían las reglas para el procedimiento en los delitos de los Diputados por abuso de libertad de imprenta.

Decreto de 23 de junio de 1.821, era el que contenía el Reglamento para las Juntas Protectoras de Libertad de Imprenta.

Año 1.822

Decreto de 12 de febrero de 1.822, que contenía una Ley adicional a la de 22 de octubre de 1.820 sobre libertad de imprenta.

Decreto de 8 de junio de 1.822, se promulgaba la Ley que aprobaba el Código Penal de 1.822.

Año 1.823

Decreto de 14 de agosto de 1.823, por el que se efectuaban nuevas adiciones a la Ley de 22 de octubre de 1.820.

Manifiesto de S.M. de 1 de octubre de 1.823 declarando haber carecido de entera libertad desde el día 7 de marzo de 1.820, hasta el 1º de octubre de 1.823, por lo que, eran nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional: y en cuanto a lo decretado y ordenado por la Junta provisional y la Regencia, áquella creada en Oyarzun, y ésta en Madrid, lo aprueba S.M., entendiéndose interinamente.

Año 1.824

Real Cédula de 13 de enero de 1.824, por la que se mandaba guardar y cumplir el Real Decreto inserto que comprendía de las reglas que habían de observarse en el establecimiento de la Superintendencia general de la Policía del Reino, con lo demás que se expresaba.

Año 1.825

Real Orden de 26 de agosto de 1.825 comunicada al Consejo Real para que los Prelados diocesanos dirigieran a este Supremo Tribunal diez ejemplares de los edictos pastorales que publiquen o hayan publicado.

Año 1.826

Real Orden de 17 de marzo de 1.826, para que se lleven al debido efecto las Reales Cédulas y Circulares de 11 de abril, 22 de diciembre de 1.824, 17 de junio y 11 de agosto de 1.825 sobre la entrada y circulación de libros impíos, estampas y pinturas obscenas.

Real Orden de 21 de julio de 1.826 para que observándose lo que previenen las leyes no se dé curso a papeles anónimos o sin firma de persona conocida, y que se procure averiguar y castigar los autores y cómplices de tales papeles.

Año 1.829

Circular de 1 de julio de 1.829, que incluía una Real Orden para que se previniera a los Prelados eclesiásticos del Reino que no publicaran ningún edicto de la Sagrada Congregación del Índice, sin que se le hubiera dado el pase correspondiente por el Consejo.

Año 1.830

Real Orden de 27 de febrero de 1.830, prohibiendo la entrada en el Reino de las obras que trataran sobre materias de Religión.

Real Cédula de 12 de julio de 1.830 que contenía el Reglamento de imprentas.

Real Orden de 16 de julio de 1.830, disponiendo lo conveniente para que no se introduzcan ni circulen estampados de figuras obscenas en ninguna clase de géneros.

Año 1.834

Real Orden de 3 de enero de 1.834, para que no se admitiese ni se diera curso a bulas y rescriptos pontificios que no se presentaran por la Agencia General de Preces.

Real Decreto de fecha de 4 de Enero de 1.834, que contenía el Reglamento del derecho de imprenta.

Real Orden de 1 de junio de 1.834, en la que se contenía un reglamento relativo a la publicación de periódicos.

Año 1.835

Real Decreto de 18 de agosto de 1.835, por el que se disponía que los censores de periódicos en la Corte formaran una junta al efecto de examinar y censurar dichos papeles.

Año 1.837

Real Decreto de 22 de Marzo de 1.837, que incluía la ley de las Cortes sobre las circunstancias que habían de proceder para la publicación de periódicos.

Real Decreto de 17 de octubre de 1.837 arreglando el uso de la libertad de imprenta.

Año 1.838

Orden de 2 de agosto de 1.838 relativa a las traducciones de la Biblia hechas en vascuence y gitano o romaní.

Año 1.839

Orden de 5 de junio de 1.839 por la cual se establecían las reglas para el uso de la libertad de imprenta.

Año 1.841

Orden de la Regencia provisional de 19 de abril de 1.841, sobre las bulas y rescriptos de Roma que no habían obtenido el pase del Gobierno.

Año 1.843

Resolución de 10 de enero de 1.843 para que se suspendiera la circulación de cualquier escrito que se considerara capaz de poner en peligro la tranquilidad pública, y que se recogiera y depositara como prevenía la Ley de imprenta.

Resolución de 24 de mayo de 1.843 acerca de los abusos de la prensa.

Año 1.844

Ley de 10 de abril de 1.844 reformando la legislación de imprenta.

Orden de 30 de mayo de 1.844 en la cual se requería a los promotores fiscales para que denunciaran los impresos y caricaturas contrarios a los dogmas de nuestra sagrada religión.

5. ESTATUTO DEL CLERO

Año 1.809

Decreto de 18 de agosto de 1.809. (Ejem. Actividad Ministerio de Negocios Eclesiásticos).

Decreto de 21 de agosto de 1.809 prohibiendo la licencia de confesar y predicar.

Decreto de 19 de octubre de 1.809, conteniendo la abolición del derecho de asilo en las Iglesias.

Año 1.811

Decreto de 23 de enero de 1.811.

Año 1.814

Real Decreto de 24 de mayo de 1.814, mandando a los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos celasen en el cumplimiento de su alto ministerio, y que sus respectivos súbditos guardasen y observasen en sus acciones, opiniones y escritos la verdadera y sana doctrina, no permitiéndose se hicieran asociaciones y ligas en perjuicio de la tranquilidad pública.

Real Orden de 24 de mayo de 1.814, comunicada por el primer Secretario de Estado al Nuncio de S.S. para que vuelva a esta Corte a desempeñar su legacía.

Año 1.815

Real Orden de 12 de abril de 1.815, previniendo a los oradores que en los púlpitos no expusieran a los oyentes más que las doctrinas evangélicas, y cuanto sea conveniente a corregir los vicios, como por repetidas leyes y órdenes, y que a continuación se expresaban, esta mandado.

Año 1.816

Real Decreto de 26 de junio de 1.816, sobre la provisión de los empleos así civiles como eclesiásticos, mediante los que son correspondientes a la Cámara consultar; y atribuciones de las Secretarías del Despacho de Gracia y Justicia sobre negocios contenciosos.

Año 1.818

Circular del Consejo Real de 10 de marzo de 1.818, que reiteraba el puntual cumplimiento de lo prevenido en la Real Orden de 22 de febrero de 1.815, a efecto de que fueran castigados bajo la forma que se expresaba los escándalos y delitos públicos, como voluntarias separaciones de matrimonio, palabras obscenas, las irrelevancias a los templos y otros.

Real Decreto de 4 de julio de 1.818, por el que se S.M. se dignaba instituir nuevamente una Junta para que exclusivamente entendiera en el restablecimiento de los Jesuitas, acordado en 29 de mayo de 1.815 y 3 del mismo mes del año siguiente.

Real Orden de 24 de septiembre de 1.818, por la que se prevenía que los religiosos secularizados por Prelados diocesanos en tiempo de la ocupación francesa se trasladaran a sus respectivos conventos sin dilación alguna, saliendo también de la Corte para sus diócesis cuantos en ella se hallaran con bulas corrientes de secularización.

Año 1.819

Real Orden de 8 de abril de 1.819, por la que se encargaba a los Diocesanos y Prelados Regulares que hicieran que los religiosos secularizados y otros que presumían pasar por tales observaran, cuidadosamente y sin excusa, cuanto se prevenía y estaba acordado sobre la materia en repetidas Reales Órdenes.

Real Decreto de 13 de noviembre de 1.819, por el que S.M. determinaba que los M.RR. Arzobispos y RR. Obispos remitieran listas e informes de todos los eclesiásticos seculares y regulares de sus respectivas diócesis, que por sus virtudes y méritos debían ser colocados en las prebendas y dignidades eclesiásticas.

Año 1.820

Decreto de 21 de abril de 1.820, sobre las secularizaciones.

Decreto de 24 de abril de 1.820 mediante el cual se señalaba la enseñanza al pueblo de la Constitución, "por personas dignas en su respeto y consideración", para que conocieran sus derechos y obligaciones.

Decreto de 1 de octubre de 1.820, por el que se acordaba la supresión de monacales y reforma de Regulares.

Año 1.821

Orden de 31 de marzo de 1.821, mandando que se llevase a efecto el cumplimiento de la ley de 25 de octubre de 1.820 sobre secularización de regulares.

Orden de 8 de abril de 1.821, por la que se mandaba que se suspendiera la provisión de beneficios y capellanías que no tuvieran aneja cura de almas, interin se acordase lo conveniente sobre el plan general del clero.

Orden de 30 de abril de 1.821, por la que se adoptaban varias medidas para reprimir y castigar a los eclesiásticos que abusando de su sagrado ministerio intentaban sumir a la nación en una guerra civil.

Orden de 8 de junio de 1.821 para que el Gobierno pusiera todos los medios más eficaces a fin de conseguir que Su Santidad conceda las prórrogas de tiempo para las secularizaciones de los regulares.

Orden de 11 de junio de 1.821 para que la asignación hecha a cada monje sobre el crédito público se tuviera por congrua suficiente para su secularización.

Decreto de 29 de junio de 1.821 sobre reducción del diezmo y primicias.

Decreto de 29 de junio de 1.821 por el que se aportaban las reglas para la formación de la Junta diocesana.

Año 1.822

Decreto de 27 de enero de 1.822, por el que se procedía a una nueva división del territorio español.

Decreto de 26 de abril de 1.822, para que los M.RR. Arzobispos y RR. Obispos no expidieran dimisorias, ni confieran órdenes mayores hasta el arreglo del clero, sino a las personas que se expresan; y en la provisión y supresión de curatos se arreglen a lo que se les previene.

Orden de 6 de mayo de 1.822, por la que se autorizaba al Gobierno para extrañar del reino y ocupar las temporalidades de los RR. Obispos cuando éstos se desvíen de los deberes de su ministerio.

Decreto de 8 de junio de 1.822, se promulgaba la Ley que aprobaba el Código Penal de 1.822.

Decreto de 26 de junio de 1.822, por el que se aprobaba la Ley que habilitaba a todos los regulares secularizados de uno y otro sexo para adquirir bienes de cualquier clase.

Decreto de 28 de junio de 1.822, sobre la obligación de residir personalmente los beneficios eclesiásticos excepto en los casos que se expresa.

Decreto de 29 de junio de 1.822, de Medidas y facultades que se daban al Gobierno para mejorar el estado político de la Nación.

Decreto de 1 de noviembre de 1.822, por el que se facultaba al Gobierno para trasladar de un punto a otro, remover y separar a empleados eclesiásticos, civiles y militares y suspender a los individuos de los Ayuntamientos.

Decreto de 1 de noviembre de 1.822 por el que se dejaba a la prudencia del Gobierno el señalamiento de alimentos y pensiones a los Prelados y eclesiásticos separados de sus diócesis o del ejercicio de su ministerio: las sillas de los obispos extrañados del reino se declaran vacantes, y se toman otras medidas contra los facciosos y empleados que no contribuyan a su exterminio.

Año 1.823

Circular de 28 de abril de 1.823, por la que se mandaba a los Prelados que recogieran las licencias y títulos que se hubieran expedido a favor de los Regulares secularizados, quienes deberían restituirse a los pueblos de su naturaleza, con lo demás que se expresaba.

Orden Circular de 5 de junio de 1.823, expedida por el Ministro de Gracia y Justicia, en que manda que los eclesiásticos trasladados de una diócesis a otra en virtud del Decreto de Cortes de 1º de noviembre de 1.822, se restituyan a sus respectivas iglesias.

Orden Circular de 16 de junio de 1.823, en la que se prevenía a los Ordinarios que separasen a los eclesiásticos de las iglesias que se les hubieran encargado durante el pretendido régimen constitucional, y de aquellos cuyas cualidades canónicas no les constaran.

Orden Circular de 31 de junio de 1.823, para que se recogieran las licencias de confesar y predicar, expedidas en favor de los Regulares secularizados, como también los títulos de Curatos, de servidores, beneficios y Capellanías.

Circular de 22 de julio de 1.823, para que los Obispos y demás Prelados compelieran a los Clérigos que se hubiesen ausentado voluntariamente de sus iglesias a residir en ellas.

Manifiesto de S.M. de 1 de octubre de 1.823 declarando haber carecido de entera libertad desde el día 7 de marzo de 1.820, hasta el 1º de octubre de 1.823, por lo que, eran nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional: y en cuanto a lo decretado y ordenado por la Junta provisional y la Regencia, aquella creada en Oyarzun, y ésta en Madrid, lo aprueba S.M., entendiéndose interinamente.

Año 1.824

Real Orden de 8 de enero de 1.824, para que los prebendados y párrocos residieran en sus respectivas iglesias.

Real Cédula de 13 de enero de 1.824, por la que se mandaba guardar y cumplir el Real Decreto inserto que comprendía de las reglas que habían de observarse en el establecimiento de la Superintendencia general de la Policía del Reino, con lo demás que se expresaba.

Año 1.830

Decreto de 6 de febrero de 1.830, en virtud del cual se encauzaban hacia la Nunciatura las apelaciones a las causas de fe.

Año 1.832

Real Orden de 23 de octubre de 1.832, permitiendo a los eclesiásticos venir a Madrid y Sitios Reales, del modo que se expresa.

Año 1.834

Real Orden de 29 de enero de 1834 comunicada al Consejo, para que los Prelados del clero secular y regular celen el que sus individuos no extravíen la opinión de los fieles, ni se enerve la obediencia y sumisión del legítimo Gobierno de su majestad.

Real Decreto de 9 de marzo de 1.834, por el que se suspendían, por ahora, la provisión de prebendas eclesiásticas, con la excepción que se expresaba.

Real Decreto de 26 de marzo de 1.834, suprimiendo el monasterio o convento donde ocurriesen los casos que se citaban, con lo demás que se expresaba.

Real Decreto de 10 de abril de 1.834 sobre traslación de los religiosos de conventos suprimidos.

Real Decreto de 10 de abril de 1.834, sobre las recaudaciones en las provincias de las temporalidades ocupadas a los eclesiásticos infidentes.

Real Decreto de 22 de abril de 1.834, al que sigue una instrucción aprobada por su S.M. sobre la formación de una Junta Eclesiástica para el arreglo del clero secular y regular.

Real Orden de 17 de junio de 1.834, comunicada al Sr. Presidente del Consejo Real de España e Indias para que el Clero secular y regular pidan licencia a S.M. si han de enajenar alhajas y bienes propios de los establecimientos eclesiásticos.

Año 1.835

Real Orden de 1 de julio de 1.835, mandando que cesaran las juntas llamadas de fe, y que en el conocimiento de estas causas se arreglen los tribunales eclesiásticos a los Canones y ley de Partida que se citaba.

Real Decreto de 21 de septiembre de 1.835 que contenía la bula de S.S. concediendo a los Religiosos secularizados la facultad de obtener parroquias.

Real Decreto de 8 de octubre de 1.835, disponiendo que los Prelados eclesiásticos se abstuvieran de dar órdenes ni dimisorias, sino para los que ya se hallaban ordenados "in sacris", y a los que tuvieran tomada colación canónica, en los casos que se expresaban.

Real Orden de 12 de octubre de 1.835, señalando la carrera de estudios que habían de hacerse en los Seminarios conciliares, y demás que se expresaba.

Real Decreto de 17 de octubre de 1.835, mandando que las justicias ordinarias conocieran, siendo de delitos atroces o graves, en causas de los eclesiásticos.

Real Orden Circular de 20 de noviembre de 1.835 sobre las pruebas de conducta política que habían de dar los eclesiásticos para ser propuestos y ascendidos en beneficios.

Real Orden de 4 de diciembre de 1.835, comunicada a los gobernadores civiles sobre arreglo de la enseñanza primaria.

Año 1.836

Real Orden de 26 de febrero de 1.836, para que los Gobernadores civiles vigilaran el que no ejercieran el ministerio de la predicación y confesión los eclesiásticos que hubieran dado pruebas de infidelidad al Gobierno.

Real Decreto de 8 de marzo de 1.836, por el que se suprimían los monasterios, conventos y demás congregaciones religiosas, con las excepciones que se señalaban.

Real Orden de 9 de septiembre de 1.836 mandando ocupar las temporalidades a los Prelados eclesiásticos separados de sus Iglesias.

Real Decreto de 24 de septiembre de 1.836 mandando ocupar las temporalidades de los eclesiásticos que sin licencia se hallaran en el extranjero.

Real Orden de 6 de octubre de 1.836, por la que resolvía S.M. que los prelados diocesanos propusieran con preferencia para curatos a los presbíteros secularizados, que tuvieran los requisitos debidos.

Real Decreto de 8 de octubre de 1.836, por el que se conminaba con las medidas que se señalaban a los Prelados Diocesanos que confirieran órdenes o para ello dieran dimisorias en contravención de lo mandado.

Año 1.837

Real Orden de 10 de enero de 1.837, por la que se mandaba suspender, por ahora, toda provisión de piezas eclesiásticas.

Real Orden de 28 de febrero de 1.837, que prevenía que no se permitiera predicar ni confesar a los sacerdotes que no inspiraran confianza a las autoridades.

Real Orden de 5 de julio de 1.837 para que ningún eclesiástico se alejara de su residencia habitual sin permiso de la autoridad pública.

Real Decreto de 29 de julio de 1.837 extinguiendo en la Península, islas adyacentes, y posesiones de España en Africa, todos los monasterios, conventos, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos.

Real Decreto de 16 de diciembre de 1.837 se creaba una junta encargada de presentar un proyecto de ley para el arreglo del culto y de sus ministros.

Año 1.839

Real Orden de 18 de septiembre de 1.839 mandando cantar un Te Deum en todas las Iglesias metropolitanas y Catedrales con motivo de los faustos sucesos ocurridos en las Provincias del Norte.

Real Orden de 18 de diciembre de 1.839, por la que se mandaba que quedara sin efecto la de 5 de agosto de 1.837 que trataba de los eclesiásticos que se alejaran de sus domicilios.

Año 1.840

Orden de la Regencia de 14 de noviembre de 1.840 mandando arreglar la demarcación de las parroquias y juzgados de Madrid.

Real Orden de 10 de diciembre de 1.840 encargando el cumplimiento de lo mandado acerca de que los Arzobispos y Obispos no expidieran dimisorias ni conferieran órdenes mayores.

Año 1.841

Circular de 9 de abril de 1.841 del Ministerio de Gracia y Justicia desaprobando la conducta del cabildo de la Santa Iglesia de Toledo.

Real Decreto de 11 de abril de 1.841 relativo a los eclesiásticos ordenados de mayores con posterioridad al Real Decreto de 8 de Octubre de 1.835.

Real Decreto de 24 de abril de 1.841 mandando fuera extrañado del Reino D. Severo Andriani, Obispo de Pamplona, y ocupadas sus temporalidades.

Decreto de 28 de junio de 1.841 que mandaba publicar un manifiesto en que se expusieran los agravios que España y su Iglesia habían recibido de la corte Romana.

Orden del Regente de 5 de septiembre de 1.841 sobre residencia de los eclesiásticos.

Decreto del Regente de 11 de diciembre de 1.841 sobre supresión y unión de parroquias.

Real Orden Circular de 14 de diciembre de 1.841 acerca de la provisión de beneficios, curatos, capellanías, etc ...

Año 1.842

Orden de 16 de noviembre de 1.842 para que no se permitiera el ejercicio de la potestad espiritual a los eclesiásticos que no tuvieran certificado de adhesión al Gobierno, y que se impidiese la circulación de un breve que prorrogaba las licencias de confesar y predicar.

Año 1.843

Decretos de 22 y 23 de septiembre de 1.843 señalando las parroquias que se suprimen o se conservan en Toledo, Burgos, Canarias, Orense, Zamora y Zaragoza.

Año 1.844

Real Orden de 28 de enero de 1.844, por la cual se derogaban las circulares que prevenían la necesidad de los atestados de conducta política expedidos por la autoridad civil para que la eclesiástica concediera a los eclesiásticos las componentes licencias para ejercer su ministerio.

Orden de 6 de febrero de 1.844 encargando a los diocesanos que observaran e hicieran observar al clero las obligaciones ordinarias y naturales que les imponía su Santo ministerio.

Orden de 24 de febrero de 1.844 sobre la instrucción que habían de tener para que recayese la Real aprobación los expedientes de suspensión, unión o erección de parroquias.

Resolución de 28 de junio de 1.844 renovando las medidas dirigidas a que los clérigos usaran de su correspondiente traje.

Orden de 23 de noviembre de 1.844 que dejaba sin efecto la Real Orden de 5 de agosto de 1.842, prohibiendo hasta nueva disposición dar curso a las preces dirigidas a Su Santidad.

Año 1.845

Orden de 28 de mayo de 1.845 mandando que los M. RR. obispos, ocho días después de cada témpora, remitan al Ministerio de Gracia y Justicia relación de los sujetos que hubieren ordenado en ella, con expresión de sus circunstancias, título a que lo hubieran verificado y diócesis a que pertenecían.

6. MATERIA ELECTORAL

Año 1.812

Decreto de 21 de septiembre de 1.812, por el que se determinaba que los eclesiásticos regulares tenían voto en las elecciones de los Ayuntamientos; pero no podían obtener en ellos ningún oficio.

Año 1.813

Decreto de 14 de junio de 1.813, por el que se señalaba que podían ser Diputados de Cortes los Catedráticos y Regulares secularizados, pero no los profesos de las Ordenes Militares.

Orden de 7 de septiembre de 1.813, por la que se señalaba qué eclesiástico debía ejercer los actos señalados en el artículo 86 de la Constitución en defecto del R. Obispo.

Año 1.814

Real Orden de 25 de diciembre de 1.814, por la que se mandaba que las Juntas para preparar y hacer elecciones de Justicias celebradas en muchos pueblos en las Iglesias, se ejecutaran en lo sucesivo en las casas de Ayuntamiento donde se reunían para tratar los asuntos del Concejo.

Año 1.820

Orden de 21 de agosto de 1.820, por la cual se mandaba observar en todas sus partes el decreto de las Cortes extraordinarias de 14 de junio de 1.813, y se desestimaba la solicitud de D. Josef Fajardo y Vargas, pidiendo que los frailes clérigos podieran elegir y ser elegidos Diputados a Cortes.

Año 1.821

Orden de 6 de abril de 1.821, por la que se consideraba al Episcopado como un cargo público de nombramiento del Gobierno, y por lo mismo comprendido en el espíritu del Art. 97 de la Constitución.

Orden de 12 de junio de 1.821, por la que se declaraba que los párrocos que vivían fuera del recinto de sus parroquias no podían dar ni recibir votos en las Juntas electorales de las en que sean pastores.

Decreto de 26 de junio de 1.821, por el que se declaraba que no podían ser nombrados Diputados a Cortes los eclesiásticos que se expresaban.

Año 1.822

Decreto de 8 de junio de 1.822, se promulgaba la Ley que aprobaba el Código Penal de 1.822.

Año 1.823

Manifiesto de S.M. de 1 de octubre de 1.823 declarando haber carecido de entera libertad desde el día 7 de marzo de 1.820, hasta el 1º de octubre de 1.823, por lo que, eran nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional: y en cuanto a lo decretado y ordenado por la Junta provisional y la Regencia, aquella creada en Oyarzun, y ésta en Madrid, lo aprueba S.M., entendiéndose interinamente.

Año 1.837

Ley Electoral de 20 de julio de 1.837.

Real Decreto de las Cortes de 25 de agosto de 1.837, declarando que los salarios de los jueces y dependientes del foro, como asimismo las congruas de los curas párrocos, no pueden servir para ser inscritos en las listas electorales.

Año 1.840

Real Orden de 9 de enero de 1.840 encargando a los Ayuntamientos que procuraran para las operaciones electorales destinar edificios que no estuvieran consagrados al culto divino.

Año 1.841

Orden de la Regencia de 4 de enero de 1.841 acerca de la conducta que en las próximas elecciones deben observar las autoridades militares.

Año 1.843

Resolución de 28 de septiembre de 1.843 mandando que los Diocesanos hicieran conocer al clero su obligación de respetar y acatar los principios y las reformas que la nación ha establecido.

Decretos de 16 de noviembre de 1.843 disponiendo se lleve a efecto la renovación de Ayuntamientos.

Decreto de 27 de noviembre de 1.843, suspendiendo la celebración de Juntas parroquiales para la elección de Ayuntamientos.

7. JURAMENTOS

Año 1.808

La expresión del juramento formulado por José Bonaparte en conformidad con el Estatuto de Bayona, de 13 de julio de 1.808.

Año 1.812

Decreto de 14 de marzo de 1.812 determinando las Solemnidades con que se mandaba firmar, jurar y publicar en Cádiz la Constitución política de la monarquía española.

Orden de 14 de marzo de 1.812, sobre la presentación de la Constitución política de la Monarquía española a la Regencia del Reino.

Decreto de 18 de marzo de 1.812, determinando las Solemnidades con que debía publicarse y jurarse la Constitución política en todos los pueblos de la Monarquía, y en los ejércitos y armada, y también se mandaba hacer visita a las cárceles por este motivo.

Decreto de 18 de marzo de 1.812 por el que se mandaba imprimir y publicar la Constitución política de la Monarquía española: fórmula con que la Regencia debía verificarlo.

Decreto de 22 de mayo de 1.812, para que el clero y el pueblo prestaran el juramento a la Constitución a un mismo tiempo y sin preferencia.

Decreto de 8 de junio de 1.812, por el que se aprobaba el Reglamento del Consejo de Estado.

Año 1.814

Circular de 27 de junio de 1.814, mandando que los que no hubieran tomado posesión hasta ahora de los empleos conferidos por la Regencia, no tenían necesidad de jurar el guardar la Constitución, y que tampoco estaban en el caso de cumplir los que hubieran jurado.

Año 1.820

Real Decreto de 7 de marzo de 1.820, por el que Fernando VII expresaba su decisión de jurar la Constitución promulgada en Cádiz, lo que efectuó en el Salón de Embajadores del Palacio Real de Madrid el día 9 de marzo.

Decreto de 16 de marzo de 1.820, que prescribía que se procediera de nuevo al juramento de la Constitución de Cádiz en toda la nación.

Decreto de 26 de marzo de 1.820, por el cual se consideraba indigno de ser español a todo aquel que no jurara sin reservas la Constitución.

Orden de 9 de julio de 1.820, para que se anunciara a toda la Nación el solemne juramento prestado por el Rey ante las Cortes, prevenido por la Constitución política de la monarquía.

Decreto de 31 de agosto de 1.820 se aprobaba el Reglamento provisional para la milicia nacional local.

Orden de 8 de septiembre de 1.820, por la que se mandaba que en el dosel del trono del salón de Cortes y sobre la puerta principal de éste, se inscriban palabras que perpetúen la memoria del juramento del Rey.

Orden de 11 de septiembre de 1.820, para que la academia de S. Fernando publicara un programa, sobre cual ofreciera un premio al artista español que presentara el mejor pensamiento para perpetuar la memoria del juramento de S.M. en el seno del Congreso.

Año 1.821

Decreto de 29 de octubre de 1.821, que contenía la fórmula del juramento que había de prestarse por la tropa a las Banderas y Estandartes.

Año 1.822

Decreto de 8 de junio de 1.822, se promulgaba la Ley que aprobaba el Código Penal de 1.822.

Año 1.823

Manifiesto de S.M. de 1 de octubre de 1.823 declarando haber carecido de entera libertad desde el día 7 de marzo de 1.820, hasta el 1º de octubre de 1.823, por lo que, eran nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional: y en cuanto a lo decretado y ordenado por la Junta provisional y la Regencia, áquella creada en Oyarzun, y ésta en Madrid, lo aprueba S.M., entendiéndose interinamente.

Año 1.833

Real Decreto de 4 de abril de 1.833 mandando a los Reinos jurar como Princesa heredera del Trono a la Serma. Infanta Doña María Isabel Luisa.

Real Decreto de 10 de mayo de 1.833, concernientes al juramento de la Serma. Infanta Doña María Isabel Luisa

Circular de 22 de noviembre de 1.833 incluyendo una Real Resolución sobre el juramento que deben seguir haciendo los individuos que hayan de ejercer cargos públicos, como se expresa.

Año 1.834

Real Orden de 22 de diciembre de 1.834, que recogía el juramento para cargos públicos.

Año 1.836

Real Orden de 26 de febrero de 1.836 prescribiendo la fórmula de juramento que habían de hacer los promovidos a cargos eclesiásticos, de justicia, Abogados, etc ...

Año 1.837

Real Decreto de 15 de junio de 1.837, previniendo la forma con que debe jurarse la nueva Constitución en los pueblos del reino.

Año 1.840

Ley de 16 de junio de 1.840 que declaraba fiesta nacional el aniversario del juramento y promulgación de la Constitución.

Año 1.843

Real Orden de 27 de noviembre de 1.843 por la que se prevenía como se había de prestar el juramento de obediencia a la Reina.

8. OTRAS DISPOSICIONES

Año 1.808

Carta dirigida al pueblo de Madrid por el propio Napoleón, en la cual se contestaba a otra anterior firmada por el Ayuntamiento, el clero, nobleza y Diputación, de 16 de diciembre de 1.808.

Año 1.809

Informe sobre el estado del Reino de Nápoles donde se recogían las ideas liberales del gobierno invasor mediante la descripción de los logros realizados en Nápoles, de 20 de febrero de 1.809.

Año 1.810

Instrucción de fecha de 1 de enero de 1.810 por la que se dictaban los parámetros a observarse para la elección de los diputados a Cortes.

Decreto de 29 de enero de 1.810 sobre la celebración de Cortes.

Decreto de la Regencia de 18 de junio de 1.810 rectificando los términos de la Junta para la convocatoria de Cortes.

Decreto de 25 de septiembre de 1.810, por el que se mandaban publicar los Decretos anteriores, cantar el Te Deum, y hacer salvas y rogativas.

Decreto de 1 de diciembre de 1.810, por el que se encargaba al clero que impugnara las máximas con que el último tirano quería seducir a los incautos, y animara a los españoles a la defensa de la patria y de la santa religión: y se mandaba hacer rogativas, y cumplir las ordenanzas que prescribían los actos religiosos en los ejércitos.

Año 1.811

Decreto de 1 de enero de 1.811 negando validez a cualquier acto del monarca prisionero de Napoleón.

Decreto de 22 de mayo de 1.811, señalando la celebración de una función religiosa en el día de San Fernando en memoria del levantamiento de la Nación a favor del Rey Fernando VII, y aniversario en el día siguiente por los que habían perecido en esta guerra.

Año 1.812

Decreto de 17 de abril de 1.812, donde se determinaban las calidades que debían concurrir en los que habían de ser nombrados ministros del Supremo Tribunal de Justicia.

Decreto de 3 de junio de 1.812, sobre las calidades que deben tener los empleados en la judicatura.

Año 1.813

Decreto de 22 de febrero de 1.813, por el que se procedía a la abolición de la Inquisición, y al establecimiento de los tribunales protectores de la fe.

Decreto de 8 de marzo de 1.813, por el cual se ordenaba la creación de una Regencia provisional, compuesta de los tres Consejeros de Estado más antiguos.

Decreto de 8 de marzo de 1.813, por el cual se declara presidente de la misma Regencia al M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo.

Decreto de 9 de marzo de 1.813, por el que se ordenaba que para la admisión en colegios del ejército o de la armada no se admitieran informaciones de nobleza, ni hubiera distinciones perjudiciales entre sus individuos.

Decreto de 13 de abril de 1.813, sobre la concesión y fórmulas de las cartas de naturaleza y de ciudadano.

Decreto de 26 de mayo de 1.813, por el que se mandaban quitar todos los signos de vasallaje que hubiera en los pueblos.

Decreto de 1 de octubre de 1.813, por el que se mandaba cantar un Te deum por la instalación de las Cortes ordinarias, y que hubiera rogativas públicas por tres días, implorando el auxilio divino por el acierto del Congreso.

Año 1.814

Decreto de 2 de febrero de 1.814, por el que inhibían al Rey del ejercicio de sus facultades hasta que hubiera jurado la Constitución.

Orden de 2 de marzo de 1.814, previniendo se cantara un Te Deum, y hubiera tres días de rogativas públicas por la instalación de las Cortes en su segunda legislatura.

Manifiesto del Rey de 4 de mayo de 1.814, declarando por nula y de ningún valor ni efecto la Constitución de las llamadas Cortes Generales y extraordinarias de la nación, disponiendo al mismo tiempo lo que ha de observarse, a fin de que no se interrumpa la administración de justicia, y el orden político y gubernativo de los pueblos.

Circular de 15 de mayo de 1.814, mandando que se implorara por fervorosas rogativas a Dios el acierto que desea S.M. en el Gobierno de la Monarquía.

Real Decreto de 24 de mayo de 1.814 donde se mandaba a los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos que celaran en el cumplimiento de su alto ministerio, para que sus súbditos guardaran y observaran en sus acciones, opiniones y escritos la verdadera y sana doctrina, no permitiéndose que se hicieran asociaciones y ligas en perjuicio de la tranquilidad pública.

Real Decreto de 27 de mayo de 1.814 restableciendo el Consejo Real en el pie por ahora que estaba en el año 1.808, nombrando Presidente y Ministros que le han de componer.

Real Decreto de 3 de junio de 1.814, por el se declaraban nulas todas las plazas del Consejo de Estado y los honores que se hayan concedido por la Junta Central y demás gobiernos hasta la vuelta de Su Majestad.

Real Decreto de 5 de junio de 1.814, por el cual se restablece el Consejo de la Cámara bajo el pie que se encontraba en el año 1.808.

Real Decreto de 21 de julio de 1.814, por el cual se restablece el Consejo de Inquisición y los demás tribunales del Santo Oficio al ejercicio de su jurisdicción, guardando el uso y ordenanzas con que se gobernaban en el año de 1.808.

Año 1.815

Real Orden de 2 de marzo de 1.815, donde se mandaba cantar un solemne Te Deum en todas las iglesias de la Monarquía por el aniversario de la entrada de S.M. y A.A en el territorio español.

Real Orden de 1 de junio de 1.815, donde se mandaba cantar un solemne Te Deum en todas las iglesias de la Monarquía por la victoria que obtuvieron los ejércitos aliados sobre el enemigo común el 18 de junio.

Año 1.820

Real Decreto de 3 de marzo de 1.820, por el que se invitaba al Consejo de Estado, el Supremo de Castilla y a los demás de la Nación, a que consultaran a S.M. todo cuanto creyeran conveniente para el mejor orden de la Monarquía.

Real Decreto de 6 de marzo de 1.820, por el que S.M. ordenaba que el Consejo Supremo de Castilla dispusiera lo conveniente para la celebración de Cortes, por ser con arreglo a la observancia de las leyes fundamentales que S.M. tiene juradas.

Real Decreto de 7 de marzo de 1.820 Fernando VII expresaba su decisión de jurar la Constitución promulgada en Cádiz, lo que efectuó en el Salón de Embajadores del Palacio Real de Madrid el día 9 de marzo.

Decreto de 9 de marzo de 1.820, por el que se creaba dicha Junta Provisional hasta la convocatoria de Cortes.

Decreto de 9 de marzo de 1.820 para que se procediese en todos los pueblos de la monarquía a la celebración inmediata de elecciones de Alcaldes y Ayuntamientos constitucionales con arreglo a lo prevenido en la Constitución política sancionada en Cádiz.

Manifiesto de Fernando VII a la Nación de fecha de 10 de marzo de 1.820.

Orden de 10 de marzo de 1.820 se declaraba incompatible con la Constitución el Tribunal de la Inquisición, por lo que desde ese día se suprimía el referido Tribunal, junto con todos sus órganos dependientes.

Circular emitida por el obispo de Barcelona en fecha de 17 de abril de 1.820, -se trae a colación por su publicación en la Gaceta de Madrid.

Decreto de 24 de abril de 1.820 por el que se señalaba la enseñanza al pueblo de la Constitución, por personas dignas en su respeto y consideración, para que conocieran sus derechos y obligaciones.

El 18 de mayo de 1.820 aparecía en la Gaceta -por ello se trae a colación-, el envío de una carta, por parte del propio monarca, a Roma donde se exponía que el nuevo régimen respetaría la religión católica en España. A esa carta, le siguió una contestación por parte del Sumo Pontífice.

Orden de 16 de julio de 1.820, para que en todas las Iglesias de la monarquía se den gracias al Altísimo por la instalación y apertura de las Cortes, implorándose el divino auxilio para el acierto de sus resoluciones y las del Gobierno de S.M.

Orden de 17 de julio de 1.820, para que se diera toda la notoriedad posible al Decreto de 19 de abril de 1.814, por el que se declaraba que el tratamiento de Su Majestad correspondía solamente al Rey.

Decreto de 31 de agosto de 1.820 que aprobaba el Reglamento provisional para la milicia nacional local.

Decreto de 4 de septiembre de 1.820, por el que se contenía que en Madrid, una vez promulgada una disposición, el Jefe político, acompañado del Ayuntamiento, salía en público desde donde se juntaba ordinariamente el pleno, y pasando a la Panadería, sita en la plaza de la Constitución, promulgaba la ley desde el balcón principal de aquella, haciéndola leer por el Secretario del expresado Ayuntamiento.

Decreto de 26 de septiembre de 1.820, por el que se declaraban desaforados y sujetos a la jurisdicción ordinaria todos los Eclesiásticos seculares o regulares por el hecho mismo de cometer algún delito que merezca pena "corporis afflictiva".

Decreto de 26 de octubre de 1.820, relevando a los sesenta y nueve ex-Diputados que firmaron el manifiesto o representación al Rey en 12 de abril de 1.814 de la formación de causa, bajo las condiciones que se expresan.

Año 1.822

Decreto de 27 de enero de 1.822, por el que se procedía a una nueva división del territorio español.

Decreto de 11 de noviembre de 1.822, por el que se determinaba como se había de proceder con los facciosos aprehendidos y que se aprehendieran en lo sucesivo.

Año 1.823

Decreto de 18 de febrero de 1.823, por el que se recogía una amnistía a los facciosos, sus jefes o cabezas, que hallándose con las armas en la mano las depusieran y se presentaran a las autoridades antes de 1 de abril.

Acta de la instalación solemne y juramento de la Regencia del Reino de 26 de mayo de 1.823.

Orden de 26 de mayo de 1.823, por la que se señalaba el tratamiento de la Regencia y de sus individuos, y su aviso de su instalación a las Autoridades de Madrid a toda la Nación.

Orden de 30 de mayo de 1.823 expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia, en que se mandaba reunir el Supremo Tribunal de la Cámara para que continuara desempeñando las atribuciones de sus instituto.

Orden Circular de 30 de junio de 1.823, por la que se restablecía el modo de dirigir las preces a Roma, bajo el orden y método que se observaba antes del 7 de marzo de 1.820.

Orden de la Regencia de 22 de septiembre de 1.823, en la que se reitera la Real orden de 22 de febrero de 1.815, para que el Gobierno cuidara de que se castigaran los escándalos y delitos públicos, palabras obscenas y las irrelevancias en los templos.

Manifiesto de S.M. de 1 de octubre de 1.823 declarando haber carecido de entera libertad desde el día 7 de marzo de 1.820, hasta el 1º de octubre de 1.823, por lo que, eran nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional: y en cuanto a lo decretado y ordenado por la Junta provisional y la Regencia, áquella creada en Oyarzun, y ésta en Madrid, lo aprueba S.M., entendiéndose interinamente.

Real Orden de 4 de octubre de 1.823 que determinaba que quienes habían tenido algo que ver en el Régimen anterior no podían acercarse a menos de cinco leguas en contorno del viaje de S.M. a Madrid, ni tampoco podían entrar en la Capital ni en los Sitios reales, debiendo permanecer a un radio de quince leguas.

Real Decreto de su Majestad de 6 de octubre de 1.823, en que se mandaba en todos los pueblos de la Monarquía que se celebrase una solemne función de desagravio al Santísimo Sacramento: que se cuidara por las Autoridades eclesiásticas disponer misiones que impugnaran las doctrinas perniciosas y heréticas, y pusieran en reclusión a los eclesiásticos que habían sido agentes de la facción desorganizadora.

Real Decreto de 9 de octubre de 1.823 para que en todas las iglesias de la Monarquía se celebre un solemne funeral, en sufragio de las almas de los que desde el 7 de marzo de 1.820 han fallecido por sostener la causa de Dios y la de S.M.

Año 1.824

Real Cédula de 13 de enero de 1.824, por la que se mandaba guardar y cumplir el Real Decreto inserto que comprendía de las reglas que habían de observarse en el establecimiento de la Superintendencia general de la Policía del Reino, con lo demás que se expresaba.

Real Orden de 13 de marzo de 1.824 para que se pasaran a la Cámara todas las solicitudes y expedientes que existieran en esta secretaría de vacantes y piezas eclesiásticas.

Real Orden de 20 de abril de 1.824, por la que creaba S.M. una Junta para que entendiese de la mejora de los establecimientos piadosos.

Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo de 1 de mayo de 1.824, por la cual se concedía indulto y perdón general, con relevación de penas corporales o pecuniarias en que hubieran podido incurrir, a todas las personas que desde principios de 1.820 hasta el 1º de octubre de 1.823; hubieran tenido parte en los excesos y desórdenes ocurridos en estos Reinos con el objeto de sostener y conservar la pretendida constitución de la Monarquía, con tal de que no fueran de las que se mencionaban y exceptuaban en el Real Decreto inserto.

Año 1.825

Real Orden de 21 de agosto de 1.825, señalando el castigo que debían sufrir los Masones aprehendidos en una logia de Granada, y los que se aprehendieran en lo sucesivo.

Año 1.826

Real Orden de 3 de abril de 1.826, para que se encargara que, al dar los párrocos y escribanos las certificaciones de vida, procedieran con la mayor circunspección, por los fraudes que se solían cometer en el cobro de haberes.

Año 1.827

Real Cédula de 13 de febrero de 1.827, por la que se mandaba guardar y cumplir la Bula inserta de nuestro Santísimo Padre León XII, en que prohibía y condenaba, de nuevo, toda secta o sociedad clandestina, cualquiera que fuera su denominación.

Año 1.828

Real Orden de 6 de junio de 1.828, que mandaba que fueran admitidas con libertad de derechos las reliquias o cuerpos santos que vinieran de Roma.

Año 1.829

Convenio entre Sus Majestades Católicas y Cristianísima para arreglar el pago de la deuda, en virtud de los convenios de 1.824 citados en este, publicado el 20 de enero de 1.829. (España y Francia).

Circular de 7 de abril de 1.829, que incluía una Real Orden y bando por el que se señalaban las penas que se habían de aplicar a los que cometieran irrelevancias en los templos.

Real Orden de 16 de mayo de 1.829, sobre continuación y régimen de los presupuestos anuales.

Real Decreto de 31 de diciembre de 1.829, por el que era aprobando por S.M. el presupuesto general de gastos para la Monarquía para el año 1.830.

Año 1.832

Circular de 21 de febrero de 1.832, que contenía la resolución de S.M. para que todos los Tribunales cuando fuera necesaria la declaración de los eclesiásticos en causas criminales, se arreglaran a la Circular de 24 de junio de 1.796.

Año 1.833

Circular de 18 de abril de 1.833 incluyendo una Real Orden que prescribe el carácter que debe tener en las causas criminales contra eclesiásticos el acompañando del juez que entienda en ellas.

Pragmática-Sanción en fuerza de ley, de 30 de septiembre de 1.833, para que se guardaran y cumplieran las soberanas disposiciones y última voluntad del Sr, Rey D. Fernando VII, por las cuales se sirvió nombrar e instituir Regenta Gobernadora de toda la monarquía a su amada Esposa para que por sí sola, aunque consultando los negocios arduos con un Consejo de gobierno que designó, la rija durante la menor edad de su augusta Hija la Señora Doña Isabel II.

Real Provisión de 4 de octubre de 1.833, por la cual se daba noticia a las Justicias y demás personas de estos reinos del fallecimiento del Sr. Rey D. Fernando VII, y de la confirmación que hacía S.M. la Reina Gobernadora, en nombre y durante la menor edad de su augusta hija la Sra. Reina Doña Isabel II, de todas las autoridades establecidas, mandando continuaran en el ejercicio de sus funciones, con lo demás que se expresaba.

Pragmática sanción con fuerza de ley de 9 de octubre de 1.833, para que se guardaran y cumplieran las soberanas disposiciones y última voluntad del Sr. Rey D. Fernando VII.

Año 1.834

Real Decreto de 7 de febrero de 1.834, ampliando el de amnistía a todos los ex-Diputados a Cortes que estaban fuera del Reino.

Real Decreto de 26 de marzo de 1.834, que mandaba ocupar las temporalidades de los eclesiásticos que cometieran los delitos de que se hacía mención.

Real Decreto de 26 de Marzo de 1.834 suprimiendo el Monasterio o convento donde ocurrieran los casos que se citan, con lo demás que se expresa.

Real Decreto de 20 de abril de 1.834, que ampliaba la amnistía, y derogaba las excepciones que contenía.

Real Decreto de 22 de abril de 1.834, al que seguía una instrucción aprobada por su S.M. sobre la formación de una Junta Eclesiástica para el arreglo del clero secular y regular.

Real Decreto de 20 de mayo de 1.834, convocando y mandando reunir las Cortes generales del Reino.

Real Decreto de 20 de mayo de 1.834 para la elección de Procuradores a las Cortes generales del Reino.

Real Decreto de 24 de junio de 1.834, por el que se señalaba el tratamiento, fuero y uniforme de los Próceres del Reino.

Real Decreto de 15 de julio de 1.834 que contenía los Reglamentos para el régimen y gobierno de los Estamentos de Próceres y Procuradores del Reino.

Real Decreto de 30 de diciembre de 1.834 rehabilitando los empleos, honores y distinciones desde 7 de marzo de 1.820, hasta 30 de septiembre de 1.823.

Año 1.835

Real Orden de 17 de febrero de 1.835 revocando la Orden de 15 de abril de 1824, (que prescribía ceremonias religiosas en memoria de su libertad, y en desagravio de la impiedad, irreligión y desórdenes cometidos desde el año de 1.808) citada sobre celebración de una función religiosa cada año.

Real Decreto de 17 de Octubre de 1.835, mandando que las justicias ordinarias conocieran, siendo de delitos atroces o graves en las causas de los eclesiásticos.

Año 1.836

Real Decreto de 13 de agosto de 1.836, mandando S.M. publicar la Constitución de 1.812.

Real Decreto de 21 de agosto de 1.836 de convocatoria a Cortes con arreglo a la Constitución.

Año 1.837

Real Decreto de 27 de enero de 1.837, mandando observar lo prevenido por las Cortes, y en el que se establecía que se demolieran todos los signos de vasallaje.

Real Orden de 4 de febrero de 1.837, por la que se expresaba que no podían ordenarse in sacris los mozos sujetos al sorteo hasta la edad de 25 años.

Año 1.839

Real Orden de 18 de septiembre de 1.839 mandando cantar un Te Deum en todas las Iglesias metropolitanas y Catedrales con motivo de los faustos sucesos ocurridos en las Provincias del Norte.

Año 1.840

Ley de 16 de junio de 1.840 que declaraba fiesta nacional el aniversario del juramento y promulgación de la Constitución.

Año 1.841

Decreto de 28 de junio de 1.841 que mandaba publicar un manifiesto en que se expusieran los agravios que España y su Iglesia habían recibido de la corte Romana.

Año 1.844

Orden de 23 de noviembre de 1.844 que dejaba sin efecto la Real Orden de 5 de agosto de 1.842, prohibiendo hasta nueva disposición dar curso a las preces dirigidas a Su Santidad.

ANEXO II

ANEXO II

FUENTES

En la presente investigación, y teniendo en cuenta el período al que se refiere, hay que señalar que se han utilizado las siguientes fuentes:

La Novísima Recopilación de las Leyes de España, puesto que mediante sus doce libros se recogen, no sólo las disposiciones aprobadas a finales del Siglo XVIII -citadas en nuestro trabajo-, sino que encuentran también cabida las diferentes normas aprobadas en España antes de 1.567 -año en que se efectuó la Recopilación de las Leyes de España-, hasta el año 1.804, en que ordenó la formación de esta obra el Rey Carlos IV.

El Diario de Sesiones de las Cortes, toda vez que desde esta fuente se hace posible, no sólo verificar las diferentes manifestaciones de los miembros del constituyente sobre los artículos principales de los textos constitucionales, junto con las redacciones originarias de los proyectos que tuvo en cuenta el constituyente en sus sesiones, sino que, también resulta de capital importancia para el estudio de algunos proyectos legislativos, o el trabajo de algunas comisiones que no llegaron a convertirse en Derecho positivo.

La Gaceta de Madrid, al tratarse de la publicación que contiene las diferentes disposiciones aprobadas en cada período estudiado en esta investigación.

Las *Diferentes Colecciones Legislativas* que comprenden la práctica totalidad de los períodos de la presente investigación. Se trataba de una recopilación, que aunque con diferentes títulos en cada período, se efectuaba desde el Ministerio de Gracia y Justicia. En su confección participaban los diferentes ministerios, puesto que entregaban a una Sección específica del de Gracia y Justicia las disposiciones que aprobaban. En todo caso, estas colecciones han sido convenientemente auxiliadas con el contenido de la *Gaceta de Madrid* desde el año 1.080 al año 1.845.

Concretamente dichas recopilaciones que han sido manejadas en la presente investigación son:

Las Disposiciones aprobadas por las Cortes de Cádiz se han compilado mediante cinco tomos:

Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1.811, mandada publicar de orden de las mismas, Tomo I, Madrid en la imprenta nacional, año 1.813.

Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de septiembre de 1811 hasta 24 de septiembre de 1.812, mandada publicar por orden de las mismas, Tomo II, Madrid en la imprenta nacional, 1.813.

Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1.813, mandada publicar por orden de las mismas, Tomo III, Madrid en la imprenta nacional, 1.813.

Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de septiembre de 1.813, en que terminaron sus sesiones. Comprende además el decreto expedido por las Cortes extraordinarias en 20 de dicho mes, mandada publicar por orden de las mismas, Tomo IV, Madrid en la imprenta nacional, 1.814.

Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Ordinarias desde 25 de septiembre de 1.813, día de su instalación, hasta 11 de mayo de 1.814, en que fueron disueltas, mandada publicar de orden de las actuales, Tomo V, Madrid en la imprenta nacional, 1.820.

Las Disposiciones aprobadas durante la primera vuelta de Fernando VII (1.814-1.820), se han compilado mediante siete tomos:

Decretos del Rey Don Fernando VII, año segundo de su restitución al Trono de las Españas. Se refieren todas las reales resoluciones generales que se han expedido por los diferentes ministerios y consejos en todo el año 1.815. Tomo Segundo, Madrid, en la imprenta real, 1.819.

Decretos del Rey Don Fernando VII, año tercero de su restitución al Trono de las Españas. Se refieren todas las reales resoluciones generales que se han expedido por los diferentes ministerios y consejos en todo el año 1.816. Tomo Tercero, Madrid, en la imprenta real, 1.819.

Decretos del Rey Don Fernando VII, año cuarto de su restitución al Trono de las Españas. Se refieren todas las reales resoluciones generales que se han expedido por los diferentes ministerios y consejos en todo el año 1.817. Tomo Cuarto, Madrid, en la imprenta real, 1.818.

Decretos del Rey Don Fernando VII, año quinto de su restitución al Trono de las Españas. Se refieren todas las reales resoluciones generales que se han expedido por los diferentes ministerios y consejos en todo el año 1.818. Tomo Quinto, Madrid, en la imprenta real, 1.819..

Decretos del Rey Don Fernando VII, año sexto de su restitución al Trono de las Españas. Se refieren todas las reales resoluciones generales que se han expedido por los diferentes ministerios y consejos en todo el año 1.819. Tomo Sexto, Madrid, en la imprenta real, 1.820.

Decretos del Rey Don Fernando VII, o Colección de las Reales Resoluciones expedidas por los diferentes Ministerios y Consejos desde 1º de enero de 1.820 hasta el 7 de marzo inclusive del mismo año, día en que S.M., a impulso de una facción impía y escandalosa, fue privado de su preciosa libertad, Madrid, en la imprenta nacional, 1.829. (Se encuentra recogido dentro del mismo volumen relativo al año 1.823: Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, Regencia del Reino y los expedidos por Su Majestad desde que fue libre del tiránico poder revolucionario, comprensivo del año 1.823, Tomo Séptimo, Madrid en la imprenta real, 1.824).

Las Disposiciones aprobadas durante el Trienio Liberal (1.820-1.823), se han compilado mediante cinco tomos, que siguen la numeración acordada para con las Cortes de Cádiz, es decir, comienzan en el número VI:

Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, desde 6 de junio hasta 9 de noviembre de 1.820. Mandada publicar de orden de las mismas. Tomo VI, Madrid, en la imprenta nacional, 1.821.

Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1.820 y 1.821, en el segundo período de su diputación, que comprenden desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año. Impresa por orden de las mismas. Tomo Séptimo, Madrid, en la imprenta real, 1.822.

Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes extraordinarias, que comprende desde el 22 de septiembre de 1.821 hasta el 14 de febrero de 1.822. Impresa por orden de las mismas. Tomo VIII, Madrid, en la imprenta real, 1.822..

Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes, desde 1 de marzo hasta 30 de junio de 1.822. Impresa por orden de las mismas. Tomo IX, Madrid, en la imprenta real, 1.822..

Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes Extraordinarias, que comprende desde 3 de octubre de 1.822 hasta 19 de febrero de 1.823. Impresa por orden de las mismas. Tomo X, Madrid, en la imprenta real, 1.823.

Las Disposiciones aprobadas durante la segunda restauración de Fernando VII (1.823-1.833), se han compilado mediante seis tomos que siguen la numeración acordada para con la primera vuelta de Fernando VII, es decir, comienzan en el número VII:

Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, Regencia del Reino y los expedidos por Su Majestad desde que fue libre del tiránico poder revolucionario, comprensivo del año 1.823, Tomo Séptimo, Madrid en la imprenta real, 1.824.

Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. en los seis meses contados desde 1º de enero hasta fin de junio de 1.824, Tomo Octavo, Madrid en la imprenta real, 1.824.

Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.825, Tomo Décimo, Madrid en la imprenta real, 1.826.

Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.826, Tomo Undécimo, Madrid en la imprenta real, 1.827.

Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.827, Tomo Duodécimo, Madrid en la imprenta real, 1.828.

Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.828, Tomo Décimotercero, Madrid en la imprenta real, 1.829.

Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.829, Tomo Decimocuarto, Madrid en la imprenta real, 1.830.

Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.830, Tomo Decimoquinto, Madrid en la imprenta real, 1.831.

Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.831, Tomo Decimosexto, Madrid en la imprenta real, 1.832.

Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII. y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.832, Tomo Decimoséptimo, Madrid en la imprenta real, 1.833.

Decretos del Rey nuestro señor Don Fernando VII, y de la Reina Su augusta esposa: reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.833, Tomo Decimoctavo, Madrid en la imprenta real, 1.834.

Las Disposiciones aprobadas tras la muerte de Fernando VII durante la vigencia del Estatuto Real de 1.834, se han compilado mediante cuatro tomos que siguen la numeración acordada para con la segunda restauración de Fernando VII, es decir, comienzan en el número Decimonoveno:

Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su Real Nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora, y Reales órdenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.834, Tomo Decimonoveno, Madrid, en la imprenta real, 1.835

Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su Real Nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos generales expedidos por las Secretarías del Despacho universal desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.835. Tomo vigésimo. Madrid, en la imprenta Real, 1.836.

Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II, dados en su real nombre por su augusta madre La Reina Gobernadora, y Reales órdenes, Resoluciones y Reglamentos generales expedidos por las Secretarías del Despacho universal desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1.836, Tomo XXI, Madrid, en la imprenta nacional, 1.837.

Las Disposiciones aprobadas tras el final de la vigencia del Estatuto Real de 1.834, y la promulgación de la Constitución de 1.837, se han compilado mediante trece tomos que siguen la numeración acordada para con el fin ese período, es decir, comienzan en el número XXII:

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de enero hasta fin de junio de 1.837. Tomo XXII. Madrid, en la imprenta nacional, 1.837.

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de julio hasta fin de diciembre de 1.837. Tomo XXIII. Madrid, en la imprenta nacional, 1.838.

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de enero hasta fin de Diciembre de 1.838. Tomo XXIV, Madrid, en la imprenta nacional, 1.839.

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de enero hasta fin de Diciembre de 1.839. Tomo XXV, Madrid, en la imprenta nacional, 1.840.

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de enero hasta fin de Diciembre de 1.840. Tomo XXVI, Madrid, en la imprenta nacional, 1.841.

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de enero hasta fin de Diciembre de 1.841. Tomo XXVII, Madrid, en la imprenta nacional, 1.842.

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de enero hasta fin de junio de 1.842. Tomo XXVIII. Madrid, en la imprenta nacional, 1.842.

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por las Secretarías del Despacho, desde 1º de julio hasta fin de diciembre de 1.842. Tomo XXIX. Madrid, en la imprenta nacional, 1.843.

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por los respectivos Ministerios, desde 1º de enero hasta fin de junio de 1.843. Tomo XXX. Madrid, en la imprenta nacional, 1.843.

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por los respectivos Ministerios, desde 1º de julio hasta fin de diciembre de 1.843. Tomo XXXI. Madrid, en la imprenta nacional, 1.844.

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por los respectivos Ministerios, desde 1º de enero hasta fin de junio de 1.844. Tomo XXXII. Madrid, en la imprenta nacional, 1.844.

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por los respectivos Ministerios, desde 1º de julio hasta fin de diciembre de 1.844. Tomo XXXIII. Madrid, en la imprenta nacional, 1.845.

Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes, y de los Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por los respectivos Ministerios, desde 1º de enero hasta fin de junio de 1.845. Tomo XXXIV. Madrid, en la imprenta nacional, 1.845.

ANEXO III

ANEXO III

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. *Diccionario de Historia de España*, dirigido por Bleiberg G., Tomo 1, Barcelona, 1.986.

ALDEA VAQUERO, Q., Patronato Real de España, en *Diccionario de Historia eclesiástica de España*, dirigido por Aldea Vaquero, Q.; Martín Martínez, T.; Vives Gatell, J., Vol. III, Madrid, 1.973.

AMORÓS AZPILICUETA, J. J., *La libertad religiosa en la Constitución Española de 1.978*, Madrid, 1.984.

ANTÓN ONECA, J., Historia del Código Penal de 1.822, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, Madrid, 1.965.

ARGÜELLES, A. DE.,

Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales y Extraordinarios desde que se instalaron en la Isla de León el día 24 de septiembre de 1.810, hasta que cerraron en Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1.813, Tomo I, Madrid, 1.865.

Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes Generales y Extraordinarios desde que se instalaron en la Isla de León el día 24 de septiembre de 1.810, hasta que cerraron en Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1.813, Tomo II, Madrid, 1.865.

ARTOLA, M.,

Los afrancesados, Madrid, 1.976,

Partidos y programas políticos 1.808-1.936, Tomo I. Madrid, 1977.

La primera etapa absolutista (1.814-1.820), en *La Historia de España* dirigida por Menéndez Pidal, R., Tomo XXXII La España de Fernando VII, la guerra de la independencia y los orígenes del constitucionalismo. Madrid 1.983.

El Trienio liberal (1.820-1.823) en *La Historia de España* dirigida por Menéndez Pidal, R., Tomo XXXII La España de Fernando VII, la guerra de la independencia y los orígenes del constitucionalismo. Madrid, 1.983.

La Hacienda del Siglo XIX Progresistas y moderados, Madrid, 1.986.

La Burguesía revolucionaria (1.808-1.874), en *La Historia de España* dirigida por Miguel Artola, Madrid, 1.990.

ATTARD, E., *El Constitucionalismo Español, 1.808-1.978*, Valencia, 1.988.

BRAÑAS, A., *Curso de Hacienda Pública, -General y española-,* Santiago de Compostela, 1.896.

CANALES, E., *Decadencia y abolición de los diezmos en España.* Barcelona, 1.981.

CÁRCEL ORTÍ, V., El liberalismo en el poder 1833-68, en *La Historia de la Iglesia en España*, dirigida por García-Villoslada, R., Madrid, 1.979.

CARR, R., *España 1.808-1.939,* Barcelona, 1.970.

Catecismos Políticos Españoles arreglados a las Constituciones del S- XIX.
Editado por la Comunidad de Madrid, Conserjería de Cultura, Secretaría General Técnica, Madrid, 1.989.

CIERVA, R. DE LA., *Historia de la España actual (1.800-1.974),* Barcelona, 1.974

CLAVERO, B.,

Manual de historia constitucional de España, Madrid 1.984.

Evolución histórica del constitucionalismo español. Madrid 1.984.

Colección de Decretos y Ordenes de las Cortes de Cádiz, Editado por las Cortes Generales, con motivo del 175 aniversario de las Constitución de 1.812, Madrid, 1.987, Tomo I.

COLOMER VIADEL, A., *Los liberales y el origen de la Monarquía Parlamentaria en España*, Valencia, 1.993.

Concordato celebrado en el año de 1.753 entre las Cortes de Roma y Madrid. Constitución Apostólica, y Breve expedidos en su corroboración y declaración. Reimpreso por orden de S.M. conforme a sus originales. En Madrid, en la imprenta de Antonio Pérez de Soto, MDCCLXIII.

COMELLAS, J.L.,

Los primeros pronunciamientos en España, 1.814-1.820, Madrid 1.958.

Los Realistas en el Trienio Constitucional (1.820-1.823). Pamplona, 1.958,

El Trienio Constitucional, Madrid, 1.963.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1.812, *en la Revista de Estudios Políticos*, nº 126, Nov-Dic., año 1.962. Madrid. 1.963.

CORONAS GONZALEZ, S.M., Jovellanos, jurista ilustrado, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, Tomo LXVI (1.996), Madrid, 1.997.

CUENCA, J.M.,

Don Pedro de Inguanzo y Rivero (1.764-1.836), último primado del Antiguo Régimen, Pamplona, 1.965.

Iglesia y Estado. Siglos XVIII-XX, en *Diccionario de Historia eclesiástica de España*, dirigido por Aldea Vaquero, Q., ; Marín Martínez, T., ; Vives Gatell, J., V. II, Madrid, 1.972.

La Iglesia española ante la revolución liberal, Madrid 1.971,

DE CASTRO, C., *El Rey felón o los seis años inicuos*, Madrid, 1.929.

DE LA HERA, A.,

El regalismo borbónico en su proyección indiana, Madrid, 1.963.

Pluralismo y Libertad Religiosa, Sevilla, 1.971.

Regalismo, en *Diccionario de Historia eclesiástica de España*, dirigido por Aldea Vaquero, Q.; Martín Martínez, T.,; Vives Gatell, J., Vol. III, Madrid, 1.973.

DÍAZ-PLAJA, F., *Fernando VII. El más querido y el más odiado de los reyes españoles*, Barcelona, 1.991.

DIEM, W. M., Las Fuentes de la Constitución de Cádiz, en *Estudios sobre las Cortes de Cádiz*, Universidad de Navarra, 1.967.

DIZ-LOIS, M^a. C., *El Manifiesto de 1.814*, Pamplona, 1.967.

EGUIZABAL, J. E. DE., *Apuntes para una historia de la legislación española sobre imprenta desde el año 1.480 al presente.* Madrid, 1.979.

EL MARQUÉS DE VALDELOMAR., *Fernando VII y la masonería.* Madrid, 1.970.

FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., en *Los orígenes del régimen constitucional en España,* Barcelona, 1.976

FERNÁNDEZ ALVAREZ, M., *Jovellanos, un hombre de nuestro tiempo,* Madrid, 1.988.

FERNÁNDEZ DE PINEDO, E., *Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco, -1.100-1.850-,* Madrid, 1.974.

FERNÁNDEZ SEGADO, F., *Las Constituciones históricas españolas,* Madrid, 1.986

FERRER, M., TEJERA, D., Y ACEDO, J., en *Historia del Tradicionalismo español,* vol. I, Madrid, 1.943.

FERRER MUÑOZ, M., *La Constitución de Cádiz y su aplicación en la nueva España,* México, 1.993.

FIESTAS LOZA, A., La libertad de imprenta en las dos primeras etapas del liberalismo español, en *Anuario de Historia del Derecho Español,* Tomo LIX, (1.989), Madrid, 1.990.

FONTANA Y LÁZARO, J., *La revolución liberal* -Política y Hacienda Pública-, Madrid, 1.977.

GARCÍA GÁRATE, A.,

Del hierocratismo medieval al Liberalismo, Cuenca, 1985.

Desamortización y Concordato de 1.851 -en prensa, y que se dispone por gentileza de su autor-.

GARRIDO FALLA, F., con la colaboración de Gil Robles, J.M. y otros. *Leyes políticas de España*, Madrid, 1.969.

GACTO FERNÁNDEZ, E., Periodismo satírico e Inquisición en Cádiz: "La Abeja Española", en *Anuario de Historia del Derecho*, Tomo LXV, (1.994), Madrid, 1.995.

GIL NOVALES, A.,

Rafael de Riego. La Revolución de 1.820 día a día. Cartas, escritos y discursos. Madrid, 1.976.

Textos exaltados del Trienio Liberal, Madrid, 1.979.

El trienio liberal, Madrid, 1.980.

GONZÁLEZ ARMENDIA, J. R., *Sistemas históricos de dotación del Estado Español a la Iglesia Católica, -Siglos XIX-XX-*, Salamanca, 1.990.

GONZÁLEZ DEL VALLE, J. M^a., *Derecho Eclesiástico Español*, Oviedo, 1.995.

GONZÁLEZ DELEITO, N., en Aspectos procesales de la Constitución de Bayona, en *la Revista de Derecho Procesal Iberoamericano*, Nº 4, oct-dic. 1.976, pp. 871-879.

GOTI ORDEÑANA, J., *Sistema de Derecho Eclesiástico del Estado*, Zarautz, 1.994.

HERVADA, J., Y ZUMAQUERO, J.M., *Textos Constitucionales Españoles*, Pamplona, 1.980.

HERR, H., *España y la revolución del siglo XVIII*, Madrid, 1.971.

IBÁN, C.I., El Derecho Eclesiástico de la "Zona Nacional" durante la guerra civil (18-VII-1.936 a 1-IV-1.939), en *Anuario de Historia del Derecho Español*, Tomo LVII, Madrid, 1987.

IBÁN, C.I., PRIETO SANCHÍS, L., y MOTILLA DE LA CALLE, A., *Derecho Eclesiástico*, Madrid, 1.997.

JIMÉNEZ ASENSIO, R., *Apuntes para una historia del constitucionalismo español*, Zarautz 1.992.

LABOA, J.M.,

Iglesia y religión en las Constituciones Españolas, Madrid, 1.981.

La larga marcha de la Iglesia. (Momentos estelares de la Historia de la Iglesia), Madrid, 1.985.

LA PARRA LÓPEZ, E., *El primer liberalismo y la Iglesia*, Alicante 1.985.

LOMBARDÍA, P., La confesionalidad del Estado, hoy, en *Ius Canonicum*, año 1.961.

LOMBARDÍA, P., Y FORNÉS, J., *Derecho Eclesiástico del Estado Español*. Coordinado por Navarro Valls, R., Pamplona, 1.983,

LONGARES, J., Argüelles, A., *La reforma constitucional de Cádiz, estudio, notas y comentarios de texto* por Longares, J., Madrid, 1970.

LORENTE, M., El Juramento Constitucional, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, Madrid, 1.995. pp. 585-632.

LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *Derecho Eclesiástico del Estado Derecho de la libertad de conciencia*, Madrid. 1.991

MARTÍ GILABERT, F.,

Iglesia y Estado en el reinado de Fernando VII, Pamplona, 1.994.

Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, Pamplona, 1.996.

MARTÍN, T., *La desamortización, textos político-jurídicos*, Madrid, 1.973, pp. 19-43.

MARTÍN MARTÍNEZ, I., *Sobre la Iglesia y el Estado*, Madrid 1.989.

MARTÍN NIÑO, J., La abolición del Diezmo y el sistema tributario de 1.845, en *Estudios de Hacienda de Ensenada a Mon.* Madrid, 1.984.

MARTÍN SÁNCHEZ. I., *La libertad de enseñanza en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, en *ADEE*, II (1986).

MARTÍNEZ TORRÓN, D., *Manuel José Quintana y el espíritu de la España liberal*, Sevilla, 1.995.

MARTÍNEZ YANGÜES, F., *Antología de las Cortes de 1.821-1.823*, Madrid, 1.914.

MENÉNDEZ-PIDAL, G., *La España del Siglo XIX vista por sus contemporáneos*, Tomo I, Madrid, 1.988. pp. 416-417.

MONTESINOS SÁNCHEZ, N.,

La tutela penal de la Religión del Estado. Aproximación al estudio del vilipendio a la Religión, en *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, Vol. X (1.994), Madrid, 1.995.

La cuestión de la confesionalidad en la historia constitucional española.
Un análisis de legislación (1.808-1.931) en *Revista Española de Derecho
Canónico*, Núm. 136, Vol. 51 (1.994).

MORILLAS CUEVA, L., *Los delitos contra la libertad religiosa*, Granada,
1.977.

MORODO, R. Y DÍAZ, E., Tendencias y grupos políticos en las Cortes de
Cádiz y en las de 1.820 en *Cuadernos Hispanoamericanos* nº 201, Septiembre de
1.966.

MURO LÓPEZ SALGADO, M., *Decretos y órdenes de Cortes en las dos
épocas de 1.820 a 1.814, y 1.820 a 1.823*, Valladolid, 1.875.

OLAECHEA ALBISTUR, R.,

Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo XVIII,
Zaragoza, 1.965, 2 Vols.

Concordato de 1.737 en *Diccionario de Historia eclesiástica de España*,
dirigido por Aldea Vaquero, Q.,; Martín Martínez, T.,; Vives Gatell, J.,
Vol. I, Madrid, 1.972.

Concordato de 1.753 en *Diccionario de Historia eclesiástica de España*,
dirigido por Aldea Vaquero, Q.,; Martín Martínez, T.,; Vives Gatell, J.,
Vol. I, Madrid, 1.972.

Iglesia y Estado Siglo XVIII en *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, dirigido por Aldea Vaquero, Q.; Martín Martínez, T.; Vives Gatell, J., Vol. II, Madrid, 1.972.

PALACIO ATARD, V., *La España del Siglo XIX, 1.808-1.898*. Madrid, 1.981.

PÉREZ-MADRID, F., *La tutela penal del factor religioso en el Derecho español*, Pamplona, 1.995.

PÉREZ DE LA CANAL, A., Restablecimiento de la gobernación constitucional del interior del reino en 1.820, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, Tomo LX, Madrid 1.991.

PÉREZ LEDESMA, M., Las Cortes de Cádiz y la sociedad española *en las Cortes de Cádiz*, Madrid, 1.991.

PÉREZ MIER, L., *Iglesia y Estado nuevo, los Concordatos ante el moderno Derecho Público*. Madrid, 1.940.

PÉREZ SERRANO, N., *Tratado de derecho político*, Madrid, 1.976.

PESET REIG, M.,

La enseñanza del Derecho y la legislación sobre Universidades, durante el reinado de Fernando VII, en *Anuario de Historia del Derecho*, XXXVIII (1968), Madrid, 1.969.

La enseñanza del derecho y la legislación sobre universidades, durante el reinado de Fernando VII (1.808-1.833). Madrid, 1.968.

La enseñanza de la Constitución de 1.812 en *Estudios sobre la Constitución española de 1.978*, Valencia 1.980.

PESET REIG, M., y PESET J.L., *La universidad española (siglos XVIII-XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal.* Madrid 1.974

PESET, L.J., GARMA, S., y PÉREZ GARZÓN, J.S., *Ciencias y enseñanzas en la revolución burguesa,* Madrid, 1.978.

PINTOS VIEITES, M^a DEL C., *La política de Fernando VII entre 1.814 y 1.820,* Pamplona, 1.958.

PIRALA, A., *Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista,* Tomo 4, Madrid 1.984.

POSADA, A., *La nouvelle Constitution espagnole,* París, 1.953.

POSSE, J.A., *Memorias del cura liberal Don Juan Antonio Posse con su discurso sobre la Constitución de 1.812,* Edición a cargo de Herr, R. Madrid, 1.984.

PUELLES BENITEZ, M. DE., *Educación e ideología en la España contemporánea (1.767-1.975).* Barcelona 1.980.

QUERALT, M^a. P., *La vida y la época de Fernando VII.* Barcelona, 1.997.

QUINTANA, *Obras completas*, vol. XIX, Madrid, 1.861.

REVUELTA GONZALEZ, M.,

Política religiosa de los liberales en el Siglo XIX. (Trienio Constitucional), Madrid, 1.973.

La Iglesia española ante la crisis del antiguo régimen, (1.803 - 1.833), *en Historia de la Iglesia en España*, dirigida por Garcia-Villoslada, R., Madrid, 1.979.

RUEDA, G., *La desamortización de Mendizabal y Espartero en España*, Madrid, 1.986

RUIZ BERRIO, J., *Política escolar de España en el Siglo XIX (1.808-1.833)*, Madrid, 1.970.

SÁNCHEZ AGESTA, L.,

Historia del Constitucionalismo español, (1.808 - 1.936). Madrid, 1.974.

La revolución de las Instituciones, *en Historia General de España y América, Vol. XII.* Madrid, 1.981.

SÁNCHEZ DE LAMADRID, R.,

El Derecho Público de la Iglesia Católica, Granada, 1.951.

El Concordato de 1.753. Jerez de la Frontera, 1.937.

SÁNCHEZ MANTERO, R., *Fernando VII un reinado polémico*. Madrid, 1.996.

SANTILLÁN, R., *Memorias (1.815-1.856)*, Pamplona, 1.860. Vol. I.

SANZ CID, C., *Constitución de Bayona*. Madrid, 1.922.

SEVILLA DE ANDRÉS, D.,

La Constitución de 1.812, obra de transición, *en Revista de Estudios Políticos*, nº 126. Nov-Dic. año 1.962.

Constituciones y Otras leyes y Proyectos Políticos, Tomo I. Madrid, 1.969

Historia Política de España (1.800-1.967), Vol. I, Madrid 1.974.

SIMÓN SEGURA, F., *La Desamortización Española del Siglo XIX*, Madrid, 1.973.

SOLÉ TURA, J., y AJA, E., *Constituciones y periodos constituyentes en España, (1.808-1.936)*, Madrid, 1.980.

SOLÍS, R., *El Cádiz de las Cortes. La vida en la ciudad en los años 1.810 a 1.813*, Madrid, 1.978.

SÚAREZ, F.,

Sobre las raíces de las reformas de las Cortes de Cádiz, en *Revista de Estudios Políticos*, nº 126, Nov-Dic. Madrid, 1.962.

El proceso de convocatoria a Cortes, 1.808-1.810, Navarra, 1.982.

SÚAREZ PERTIERRA, G., *Libertad religiosa y confesionalidad en el ordenamiento jurídico español*, Vitoria, 1.978.

SUÁREZ VERDEGUER, F., *Los sucesos de la Granja*, Madrid, 1.953.

TELLO LÁZARO, J.A., en *Las Constituciones Progresistas*, en la *Revista Española de Estudios Políticos*, nº 37, ene-feb, 1.984, Madrid, 1.985.

TIERNO GALVÁN, E.,

Contribución de la Iglesia a los gastos de guerra. Inmunidad eclesiástica, en *Actas de las Cortes de Cádiz*, dirigido por Tierno Galván, E. I, Madrid, 1.964.

Leyes políticas españolas fundamentales, (1.808 - 1.936). Madrid, 1.984.

TOMÁS Y VALIENTE, F.,

Notas al libro de BECCARIA "De los delitos y las penas", Madrid, 1.969

Recientes investigaciones sobre la desamortización: intento de síntesis, en *Moneda y Crédito*, nº 131, 1974.

El marco político de la desamortización en España, Barcelona, 1.977.

Notas para una nueva historia del Constitucionalismo español, en revista de ciencias sociales *Sistema*, número 17-18, Abril, 1.977.

Manual de Historia del Derecho español, Madrid, 1.987.

Génesis de la Constitución de 1.812. I. De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución, en *Anuario de Historia del derecho Español*, Tomo LXV, Madrid, 1.995.

Constitución: Escritos de introducción histórica, Madrid, 1.996.

TORENO, CONDE DE., *Historia del levantamiento, guerra y revolución de España*, Tomo. III, Madrid, 1.835.

TORRES DEL MORAL, A., *Constitucionalismo Histórico Español*, Madrid, 1.986.

UBIETO, A. , REGLÁ, J., JOVER, J.M., SECO, C., *Introducción a la Historia de España*, Barcelona 1.970.

VÉLEZ, R. DE.,

Apología del altar y del trono, o historia de las reformas hechas en España en tiempos de las llamadas Cortes, e impugnación de algunas doctrinas publicadas en la Constitución, diarios y otros escritos contra la Religión y el Estado, Tomo I, Madrid, 1.818.

Apología del altar y del trono, o historia de las reformas hechas en España en tiempos de las llamadas Cortes, e impugnación de algunas doctrinas publicadas en la Constitución, diarios y otros escritos contra la Religión y el Estado, Tomo II, Madrid, 1.818.

Preservativo contra la irreligión o los planes de la filosofía contra la Religión y el Estado, realizados por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napoleón en la conquista de España, y dados a luz por algunos de nuestros sabios en perjuicio de nuestra patria, Madrid, 1.825.

VILLARROYA, J. T.,

El sistema político del Estatuto Real (1.834-1.836), Madrid, 1.968.

El Estatuto Real de 1.834 y la Constitución de 1.837, Madrid, 1.985.

Breve historia del Constitucionalismo español. Madrid, 1.988.

ANEXO IV

ANEXO IV

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	I-IV
---------------------------	-------------

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA IGLESIA ESPAÑOLA A FINALES DEL SIGLO XVIII	1-16
--	-------------

CAPÍTULO II

EL ESTATUTO DE BAYONA DE 1.808	17-51
---	--------------

I. EL ESTATUTO DE BAYONA	17
---------------------------------------	-----------

1. INTRODUCCIÓN	17
------------------------------	-----------

2. SIGNIFICADO Y CONTENIDO DEL ESTATUTO	21
--	-----------

3. NATURALEZA JURÍDICA	24
 II. LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN EL ESTATUTO	27
 1. INTRODUCCIÓN: VALORACIÓN DEL HECHO RELIGIOSO POR NAPOLEÓN	27
 2. LA CONFESIONALIDAD: EL ARTÍCULO I	29
 3. CONSECUENCIAS DE LA CONFESIONALIDAD	32
 A) SUCESIÓN DE LA CORONA	32
 B) EL JURAMENTO	33
 C) SERVICIOS DE LA CASA REAL	34
 D) EL MINISTERIO DE SERVICIOS ECLESIASTICOS	35
 E) COMPOSICIÓN DE LAS CORTES. EL ESTAMENTO DEL CLERO	37
 F) OTRAS REFERENCIAS DEL ESTATUTO AL CLERO	38
 III. DESARROLLO LEGISLATIVO DEL ESTATUTO	39

1. DESAMORTIZACIÓN	41
2. FINANCIACIÓN	45
3. ENSEÑANZA	46
4. LIBERTAD DE IMPRENTA	47
4.1 CONTROL DE OBRAS DE TEATRO	48
5. EL ESTATUTO DEL CLERO	49
5.1 ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE NEGOCIOS ECLESIASTICOS	49
5.2 EL ARREGLO DEL CLERO: SU SITUACIÓN	50

CAPÍTULO III

LA CONSTITUCIÓN DE 1.812	53-143
I. LA CONSTITUCIÓN DE 1.812	53
1. INTRODUCCIÓN	53
2. SIGNIFICADO Y CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN	63

II. LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN LA CONSTITUCIÓN 70

1. INTRODUCCIÓN: VALORACIÓN DEL HECHO RELIGIOSO 70

2. LA CONFESIONALIDAD: EL ART.12 76

3. CONSECUENCIAS DE LA CONFESIONALIDAD 88

A) LEGISLACIÓN ELECTORAL: LA PARROQUIA 88

B) CAPACIDAD ELECTORAL ACTIVA Y PASIVA DE LOS ECLESIASTICOS 91

C) PROMULGACIÓN DE LAS LEYES POR EL REY 93

D) PERSONALIDAD Y FUNCIONES DEL REY 94

E) DISTINTOS TIPOS DE JURAMENTOS 96

F) COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO 98

G) LA ENSEÑANZA 101

H) LA LIBERTAD DE IMPRENTA 103

III. DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA	
CONSTITUCIÓN	112
1. DESAMORTIZACIÓN	113
1.1 INTRODUCCIÓN	114
1.2 PRECEDENTES	116
A) DESDE LOS CONCILIOS DE TOLEDO	
HASTA LA NOVÍSIMA RECOMPILACIÓN	117
B) LA NOVÍSIMA RECOMPILACIÓN DE LAS	
LEYES DE ESPAÑA, (CARLOS IV), 1.798	118
C) ESTATUTO DE BAYONA, LOS	
DECRETOS DE CHAMARTÍN	119
1.3 LA OBRA DESAMORTIZADORA DE LAS	
CORTES DE CÁDIZ	120
2. FINANCIACIÓN	126
3. ENSEÑANZA	128
4. LIBERTAD DE IMPRENTA	131
5. EL ESTATUTO DEL CLERO	135

6. EL JURAMENTO	136
------------------------------	------------

CAPÍTULO IV

LA VUELTA DE FERNANDO VII, (1.814-1.820)	143-179
---	----------------

I. LA VUELTA DE FERNANDO VII, (1.814-1.820)	143
--	------------

1. INTRODUCCIÓN.	143
------------------------------	------------

2. EL MANIFIESTO DE FERNANDO VII	145
---	------------

3. EL RESTABLECIMIENTO DEL ANTIGUO RÉGIMEN	149
---	------------

II. APOYO DE LA IGLESIA AL ABSOLUTISMO	151
---	------------

III. DESARROLLO LEGISLATIVO EN ESTE PERÍODO	153
---	------------

1. DESAMORTIZACIÓN	155
---------------------------------	------------

2. FINANCIACIÓN	160
------------------------------	------------

3. ENSEÑANZA	164
---------------------------	------------

4. LIBERTAD DE IMPRENTA	166
--------------------------------------	------------

4.1 CONTROL DE LAS OBRAS DE TEATRO	170
5. EL ESTATUTO DEL CLERO	171
5.1 COMPORTAMIENTOS DEL CLERO	171
5.2 ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS AL CLERO	175
6. EL CONSEJO DE LA CÁMARA	177
7. LEGISLACIÓN ELECTORAL	178
8. JURAMENTO	179

CAPÍTULO V

EL TRIENIO LIBERAL: (1.820-1.823)	181-317
I. EL TRIENIO LIBERAL: (1.820-1.823)	181
1. INTRODUCCIÓN	181
2. LOS LEVANTAMIENTOS MILITARES: DE NUEVO LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ	182
3. LA JURA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL REY	187

II. LA IGLESIA FRENTE AL TRIENIO LIBERAL	193
 III. DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1.812 DURANTE ESTA ÉPOCA	 198
1. DESAMORTIZACIÓN	201
2. FINANCIACIÓN	214
2.1 CONTRIBUCIÓN DE LA IGLESIA AL ESTADO	218
2.2 REDUCCIÓN DE LOS PAGOS A ROMA	220
2.3 MEDIDAS RESTRICTIVAS CONTRA LA PROPIA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA	222
2.4 PENSIONES A EXCLAISTRADOS Y SECULARIZADOS	230
3. ENSEÑANZA	233
4. LIBERTAD DE IMPRENTA	239
5. EL ESTATUTO DEL CLERO	258

5.1 PROMOCIÓN DE LOS ECLESIAÍSTICOS MÁS CERCANOS AL RÉGIMEN	259
5.2 OBLIGACIONES POLÍTICAS DEL CLERO	260
5.3 ARREGLO DEL CLERO	267
5.4 RESIDENCIA DEL CLERO	273
6. LEGISLACIÓN ELECTORAL	275
7. JURAMENTO	278
8. EL CÓDIGO PENAL DE 1.822: LA PROTECCIÓN PENAL DE LA RELIGIÓN CATÓLICA, DE LA IGLESIA Y DE LOS ECLESIAÍSTICOS	283
8.1 NUEVA REGULACIÓN DEL FUERO ECLESIAÍSTICO	287
8.2 PROTECCIÓN PENAL DE LA RELIGIÓN CATÓLICA Y DE LOS ECLESIAÍSTICOS	289
8.3 TIPIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE ECLESIAÍSTICOS CONTRARIOS AL NUEVO RÉGIMEN	304
8.4 LA CONDICIÓN DE ECLESIAÍSTICO COMO AGRAVANTE	312

8.5 SOBRE EL MATRIMONIO	314
--------------------------------------	------------

* ANEXO I	315
------------------------	------------

* ANEXO II	316
-------------------------	------------

* ANEXO III	317
--------------------------	------------

CAPÍTULO VI

LA SEGUNDA RESTAURACIÓN DE FERNANDO VII, (1.823-1.833)	319-365
---	----------------

I. LA SEGUNDA RESTAURACIÓN DE FERNANDO VII: (1.823-1.833)	319
--	------------

1. INTRODUCCIÓN	319
------------------------------	------------

2. EL MANIFIESTO DE FERNANDO VII	323
---	------------

3. EL RESTABLECIMIENTO DEL ANTIGUO RÉGIMEN	325
---	------------

II. APOYO DEL ABSOLUTISMO A LA IGLESIA	328
---	------------

III. DESARROLLO LEGISLATIVO EN ESTE PERÍODO	334
---	------------

1. DESAMORTIZACIÓN	334
---------------------------------	------------

2. FINANCIACIÓN	336
3. ENSEÑANZA	341
4. LIBERTAD DE IMPRENTA	350
5. EL ESTATUTO DEL CLERO	356
5.1. COMPORTAMIENTOS DEL CLERO	356
5.2. ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS AL CLERO	359
6. EL CONSEJO DE LA CÁMARA	360
7. JURAMENTO	361
8. PROTECCIÓN PENAL DE LA RELIGIÓN CATÓLICA TRAS LA DEROGACIÓN DEL CÓDIGO PENAL.	362

CAPÍTULO VII

EL ESTATUTO REAL DE 1.834	367-435
I. EL ESTATUTO REAL DE 1.834	367
1. INTRODUCCIÓN	367

2. SIGNIFICADO Y CONTENIDO	370
3. NATURALEZA JURÍDICA	375
 II. LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN EL ESTATUTO	377
1. INTRODUCCIÓN: VALORACIÓN DEL HECHO RELIGIOSO, ANTES DE LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO.	377
A) EL TESTAMENTO DE FERNANDO VII	383
B) EL MANIFIESTO DE LA REGENTE	384
2. REFLEJOS DE LA CONFESIONALIDAD EN EL ESTATUTO	385
A) EL ESTAMENTO DE LOS PRÓCERES DEL REINO.	386
 III. DESARROLLO LEGISLATIVO DEL ESTATUTO REAL DE 1.834	388
1. DESAMORTIZACIÓN	389
2. FINANCIACIÓN	402

3. ENSEÑANZA	407
4. LIBERTAD DE IMPRENTA	418
5. EL ESTATUTO DEL CLERO	422
5.1 EL ARREGLO DEL CLERO	423
5.2 REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ECLESIAÍSTICOS	427
5.3 MEDIDAS TENDENTES A EVITAR LA COLABORACIÓN DEL CLERO CON EL CARLISMO	429
5.4 CONTROL DEL COMPORTAMIENTO DEL CLERO Y PROMOCIÓN DE LOS ECLESIAÍSTICOS CERCANOS AL RÉGIMEN	431
5.5 RESIDENCIA DE LOS ECLESIAÍSTICOS	433
5.6 LOS SECULARIZADOS	434
6. EL JURAMENTO	434

CAPÍTULO VIII

**LA CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA
DE 1.837 437-550**

**I. LA CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA
DE 1.837 437**

1. INTRODUCCIÓN 437

2. SIGNIFICADO Y CONTENIDO 441

II. LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN LA CONSTITUCIÓN ... 445

**1. INTRODUCCIÓN: VALORACIÓN DEL HECHO
RELIGIOSO 445**

2. LA CONFESIONALIDAD: EL ART. 11 451

3. CONSECUENCIAS DE LA CONFESIONALIDAD 463

A) FINANCIACIÓN 463

**B) COMPOSICIÓN DEL SENADO Y DEL
CONGRESO 467**

C) PERSONALIDAD Y FUNCIONES DEL REY 469

D) ENSEÑANZA 470

E) JURAMENTO DE LA CONSTITUCIÓN 472

F) LA LIBERTAD DE IMPRENTA 474

**III. DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA
CONSTITUCIÓN 477**

1. DESAMORTIZACIÓN 477

2. FINANCIACIÓN 485

**2.1 LA DESAPARICIÓN DEL ANTIGUO
SISTEMA DE FINANCIACIÓN. EL FIN DEL
DIEZMO 489**

**2.2 LEY DE 21 DE JULIO DE 1.838 MANDANDO
LLEVAR A EFECTO EL PROYECTO DE
LA LEY PROVISIONAL PARA LA
DOTACIÓN DEL CULTO Y CLERO 494**

**2.3. LEY RELATIVA A LA DOTACIÓN DEL
CULTO Y EL CLERO DE 16 DE JULIO DE 1.840 497**

**2.4 LEY DE 31 DE AGOSTO DE 1.841
RELATIVA A LA DOTACIÓN DEL CULTO
Y EL CLERO 500**

2.5 LEY DE 23 DE MAYO DE 1.845 DE DOTACIÓN DEL CULTO Y MANTENIMIENTO DEL CLERO	507
3. ENSEÑANZA	514
4. LA LIBERTAD DE IMPRENTA	519
5. EL ESTATUTO DEL CLERO	527
5.1 CREACIÓN DE JUNTAS PARA EL ARREGLO DEL CLERO	527
5.2 EL ELEVADO NUMERO DE ECLESIAÍSTICOS	534
5.3 RESIDENCIA DEL CLERO	537
5.4 PROMOCIÓN DE LOS ECLESIAÍSTICOS AFINES AL RÉGIMEN	538
5.5 EL VESTIDO DEL CLERO	540
6. EL JURAMENTO	541
7. LEGISLACIÓN ELECTORAL	543
8. TOLERANCIA RELIGIOSA	546

* ANEXO I	550
* ANEXO II	551

CONCLUSIONES	553-568
---------------------------	----------------

ANEXO I

ÍNDICES DE LA LEGISLACIÓN UTILIZADA	569-690
--	----------------

I. ÍNDICE CRONOLÓGICO	569-620
------------------------------------	----------------

II. ÍNDICE ANALÍTICO	621-690
-----------------------------------	----------------

1. DESAMORTIZACIÓN	621
---------------------------------	------------

2. FINANCIACIÓN	631
------------------------------	------------

3. ENSEÑANZA	645
---------------------------	------------

4. LIBERTAD DE IMPRENTA	652
--------------------------------------	------------

5. ESTATUTO DEL CLERO	659
------------------------------------	------------

6. MATERIA ELECTORAL	671
-----------------------------------	------------

7. JURAMENTOS	674
----------------------------	------------

8. OTRAS DISPOSICIONES 678

ANEXO II

FUENTES 691-701

ANEXO III


BIBLIOGRAFÍA 703-720

ANEXO IV

ÍNDICE GENERAL 721-738

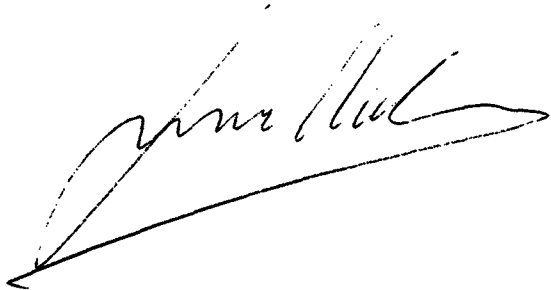
CALIFICACION:

COM LAUDE POR UNANIMIDAD. SOBRESALIENTE
14 de mayo de 1999.



Rafael Romero

Rec. 4. 1 = 1



José María Amador

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID



5405377144